

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Historia del Derecho



**LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA: EL TRIBUNAL
SUPREMO (1836 -1881)**

**MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE
DOCTOR POR**

Braulio Diaz Sampedro

Bajo la dirección del Doctor:

José Sánchez-Arcilla Bernal

Madrid, 2004

ISBN: 84-669-2484-1

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA: EL TRIBUNAL SUPREMO
(1836-1881)

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
BRAULIO DÍAZ SAMPEDRO

DIRIGIDA POR EL DR. JOSÉ SÁNCHEZ ARCILLA BERNAL
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 2004

ÍNDICE

TABLA DE ABREVIATURAS	5
I. INTRODUCCIÓN	
Preámbulo	6
1. Estado de la cuestión	10
2. Hipótesis de trabajo.....	11
3. Metodología y Fuentes.....	13
II. LA POLITIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO (1836-1881)	
Preámbulo	20
1. Restablecimiento del régimen constitucional: 1836-octubre 1840: los primeros intentos de profesionalización de los jueces	22
2. Proceso revolucionario: octubre 1840- diciembre 1843: la ideologización del sistema judicial	32
3. Etapa moderada: diciembre 1843- julio 1854: teorías y análisis de la administración de justicia	41
4. Bienio progresista: julio 1854- julio 1856: cambios y reformas	61
5. Moderantismo: julio 1856- septiembre 1868: arquitectura y desarrollo de las bases de autonomía jurídica	70
6. Sexenio revolucionario: septiembre 1868-1874: la consolidación del Poder Judicial	84
6.1. Ley orgánica del Poder Judicial	91
7. Restauración: 1875-1881: interpretaciones de la base jurídica existente ...	99
8. La jurisdicción contencioso-administrativa: un instrumento de permanente controversia	106
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO (1836-1881)	
1. Composición del Tribunal Supremo	114
1. a. el Presidente	114
1. a.a. etapa liberal y revolucionaria	114
1. a.b. etapa moderada	116
1. a.c. Bienio progresista	118
1. a.d. moderantismo y estabilidad	119
1. a.e. Sexenio revolucionario y sus consecuencias	120
1. b. atribuciones del Presidente	122
1. c. los presidentes de sala	124
1. c.a. etapa liberal y revolucionaria	124
1. c.b. etapa moderada	124
1. c.c. Sexenio Revolucionario	127
1. d. atribuciones de los presidentes de sala	127
1. e. los magistrados	129

1. e.a. promulgación constitucional y etapa revolucionaria	129
1. e.b. etapa moderada	131
1. e.c. Bienio progresista	132
1. e.d. Moderantismo	133
1. e.f. Sexenio Revolucionario	134
1. f. el fiscal	134
1. g. atribuciones del fiscal	138
1. h. el secretario	141
1. i. el personal subalterno	144
2. Estructura: las salas del Tribunal Supremo	147
2. a. origen y evolución	147
2. a.a. promulgación constitucional	147
2. a.b. etapa moderada	148
2. a.c. Bienio progresista	149
2. a.d. Moderantismo	150
2. a.e. Sexenio Revolucionario	155
2. b. el pleno del Tribunal Supremo	157
3. Las competencias del Tribunal Supremo	158
3. a. el recurso de nulidad	158
3. a.a. el recurso de nulidad en el fondo	167
3. a.b. el recurso de nulidad en la forma	169
3. a.c. el recurso de injusticia notoria en el fondo	170
3. a.d. el recurso de injusticia notoria en la forma	171
3. b. el recurso de casación	172
3. b.a. origen y desarrollo (1852-1860)	172
3. b.b. experiencias y doctrinas (1860-1863)	175
3. b.c. la consolidación del recurso (1863-1881)	187
3. c. el recurso de casación en materia civil	192
3. c.a. hasta el Bienio progresista	192
3. c.b. desde el Bienio a la Restauración	194
3. d. el recurso de casación en materia criminal	196
3. d.a. hasta el Bienio progresista	196
3. d.b. desde el Bienio a la Restauración	198
3. e. el recurso de casación en materia contencioso-administrativa	201
4. La actuación gubernativa del Tribunal Supremo	203
5. Estatuto jurídico de los magistrados	207
5. a. condiciones generales de acceso: criterios de capacidad, selección, promoción e incompatibilidades	207
5. a.a. hasta el Bienio progresista	207
5. a.b. del Bienio a la LOPJ	211
5. a.c. desde la LOPJ a la Restauración	214
5. b. los deberes de los magistrados: la motivación de las sentencias	218
5. b.a. la motivación de las sentencias civiles	219
5. b.b. la motivación de la sentencia civil y el recurso de casación	221
5. b.c. la motivación de las sentencias en materia penal	224
5. c. vacaciones, permisos y licencias	227

IV. ÍNDICE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO (1836-1881) Y SU ADSCRIPCIÓN POLÍTICA

1. Claves	229
2. Índice	230
3. Motivos de cese	236
3. a. ceses por motivación política	236
3. b. ceses por fallecimiento	238
3. c. ceses por jubilación a petición propia	240
3. d. ceses por renuncia voluntaria	241
3. e. ceses por ascenso	242
3. f. ceses por jubilación obligada	243

V. RESULTADOS

1. Impacto de cambios en el Tribunal Supremo (1836-1881)	244
2. Gráficos	246
2. a. comparativa de nombramientos y ceses	246
2. b. designaciones de magistrados	249
2. c. ceses de magistrados por	250
2. d. motivo de cambio de los magistrados	251
2. e. ceses por motivaciones políticas	252
2. f. condición política de los magistrados	253
2. g. adscripción ideológica de los magistrados	254
2. h. tendencias de politización de los magistrados	255
2. i. índices de politización de los magistrados	256
2. j. incidencias normativas referidas al Tribunal Supremo	257

VI. CONCLUSIONES

1. En orden a la politización de los magistrados	258
2. En el orden normativo	260

VII. RELACIÓN DE MAGISTRADOS Y SU CARRERA JUDICIAL

264

VIII. APÉNDICE DOCUMENTAL

464

IX. APÉNDICE LEGISLATIVO

515

X. RELACIÓN DE FUENTES CONSULTADAS

539

XI. BIBLIOGRAFÍA

543

TABLA DE ABREVIATURAS

ACD	Archivo del Congreso de los Diputados
ACGC	Archivo de la Comisión General de la Codificación
ADC	Anuario de Derecho Civil
ADP	Anuario de Derecho Penal
AHN	Archivo Histórico Nacional
AMJ	Archivo del Ministerio de Justicia
BCD	Biblioteca del Congreso de los Diputados
BICAM	Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
BJAE	Biblioteca Jurídica de Autores Españoles
BJL	Boletín de Jurisprudencia y Legislación
BS	Biblioteca del Senado
CEPC	Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
CC	Comisión de Codificación
CD	Colección de Decretos
CEHA	Colección de Estudios de Historia de la Administración
CL	Colección Legislativa
DAT	Discursos de Aperturas de Tribunales
DLJ	Diccionario de Legislación y Jurisprudencia
DSC	Diario de Sesiones del Congreso
DSS	Diario de Sesiones del Senado
EDP	Estudios de Derecho Procesal
ELJ	Estudios de Legislación y Jurisprudencia
EP	Expedientes personales
FN	Faro Nacional
HN	Hemeroteca Nacional
IEP	Instituto de Estudios Políticos
RDJ	Revista de Derecho Judicial
RDM	Revista de Derecho Moderno
RDP	Revista de Derecho Procesal
RDPI	Revista de Derecho Procesal Iberoamericano
RDS	Revista de Derecho y Sociología
REP	Revista de Estudios Políticos
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RJA	Revista de Jurisprudencia y Administración
RJAE	Revista Jurídica de Autores Españoles
RJC	Revista Jurídica de Cataluña
RPU	Revista Peninsular y Ultramarina

I. INTRODUCCIÓN

1. Preámbulo

Considero de interés hacer algunas aportaciones preliminares que sitúen la oportunidad misma de la Tesis y la orienten para un mejor esclarecimiento de las intenciones y objetivos que he sostenido a la hora de abordarla.

Resulta curioso, como ya mencioné en otro apartado, que sea prácticamente nulo el tratamiento de la administración judicial, como temática singular, en la historiografía clásica del siglo XIX. Más en concreto, la institución del Tribunal Supremo como órgano nuevo en su perfil y en su función tras los trabajos de Cádiz, apenas concitó tratamiento bibliográfico. Ningún tratadista, ni ninguna obra de conjunto y enciclopédica contemporánea le dedicó una especial atención, ni antes ni después como bien señala el profesor Moreno Pastor en su obra sobre Los orígenes del Tribunal Supremo¹

Precisamente tomo como punto de partida este trabajo, que aunque presenta objetivos bien distintos, secunda ciertos planteamientos que yo sostengo a lo largo de mi trabajo. Es cierto y está suficientemente contrastado que el espíritu de Cádiz pretendió canalizar las aspiraciones promovidas desde la revolución francesa, en cuanto a la división de poderes como verdadero cimiento del Estado Moderno. Fueron continuas y rotundas las alusiones de los concurrentes a la asamblea constituyente en este sentido, y mostraron una especial preocupación en la configuración de los nuevos poderes, así como a quien correspondía gestionarlos.

Los dictámenes preparatorios en el desarrollo constitucional, advirtieron en Cádiz la conveniencia y la necesidad de introducir cambios profundos en la administración de justicia, planteándose dos objetivos fundamentales: la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y el establecimiento “ex novo” de un tribunal, cuyo origen, significación y competencias, salvando numerosas diferencias conceptuales y de contenido, presentan rasgos, si no genéricos, sí al menos lo bastante aproximados como para apreciar una común preocupación.

¹ L. Moreno Pastor en *Los orígenes del Tribunal Supremo: 1812-1838*: “cabe destacar como honrosas excepciones a lo señalado: A. R. Dranguet “ Responsabilidad e independencia del poder judicial “ en *Justicia*, 1930, p. 228-232, V. Covián en un brevísimo artículo titulado “ El Tribunal Supremo según la Constitución de 1812 “ en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. LXXXXVIII, 1923, p. 2-18, sólo recoge el discurso pronunciado por D. Ramón Posada Soto y Rivero el 20 de junio de 1812 como Presidente el día que tomó posesión de su cargo; F. García Goyena en “ Tribunal Supremo de España, noticias sobre su organización y funcionamiento” publicado en Madrid, 1929. No existe en esta obra ningún interés del investigador en profundizar en algún aspecto político y se reduce a una exposición descriptiva de su funcionamiento; J. F. Lasso Gaité en RGLJ, t. LIX, 1969, trazó unas líneas básicas de la institución desde 1812 a 1868, aludiendo a la legislación que desarrolla el órgano”. Es interesante y útil el catálogo que hace de sus presidentes extraídos de los expedientes personales del Archivo del Ministerio de Justicia (hasta hace poco tiempo se podía encontrar a esta autor trabajando en las dependencias del propio Archivo pese a su avanzada edad).

Desde los primeros momentos en las discusiones parlamentarias de Cádiz y en los consiguientes debates se manifestó la práctica de un intervencionismo político en el ámbito judicial, como se desprendía del informe Ranz Romanillos cuando presentó unas cuestiones previas donde cuestionaba que el poder judicial en sus decisiones finales fuera independiente del ejecutivo. En este mismo sentido se pronunció Argüelles en sesión parlamentaria de 21 de diciembre de 1810² y algunos otros intervinientes. La consecuencia fue, como bien señaló Bartolomé Clavero, que la administración de justicia no se configuró en Cádiz como una mera función administrativa, sino como una auténtica potestad que residía en los tribunales³, se estaba definiendo según el espíritu de Montesquieu un verdadero poder⁴, pero bien es cierto que tardarían muchos años en hacerse realidad ese fundamento doctrinal.

La cuestión de la independencia judicial fue una constante durante más de medio siglo como así lo manifestaba Pedro Gómez de la Serna, en su cargo de Presidente del Tribunal Supremo, en el discurso de apertura de tribunales celebrada el 15 de septiembre de 1869, expresándose en idénticos términos que los diputados presentes en Cádiz, cuando se lamentaba que siguiera manteniéndose todavía que “el orden judicial es una desmembración del poder ejecutivo...”⁵.

En los debates constituyentes gaditanos quedó clara la necesidad imperiosa, desde todos los puntos de vista, de crear un Supremo Tribunal, cuyos miembros debieran ser elegidos por las Cortes -dependientes del poder legislativo-, y cuya misión sería la observancia de las leyes establecidas en las Cortes. La reubicación de las funciones de

² Diario de Sesiones (legislatura 1810-1813) t. I p. 213: “ si los ocupados en el ramo judicial dependen muy directamente del ejecutivo, esto será un mal ... ésta, pues, sería la época de poner límites entre uno y otro poder”

³ El art. 17 de la Constitución señalaba que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley, de modo que los tribunales eran los únicos órganos en los que residía de manera exclusiva y excluyente, la potestad judicial, la potestad de aplicar las leyes

⁴ En el discurso preliminar se expusieron las ideas y las fuentes en dos párrafos que habrían de alimentar la doctrina constitucional: “ para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni el rey ejercerlas bajo ningún pretexto, en algunas ocasiones podrá convenir en circunstancia de grande apuro reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva, pero en el momento en que ambas autoridades a algunas de ellas reasumiese la autoridad judicial, desaparecería para siempre no sólo la libertad política y civil sino hasta aquella sombra de seguridad personal que no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus estados” (...) “ Como la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ello esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación violenta. Y ni el desagrado del monarca, ni el resentimiento de un ministro, han de poder alterar en los más mínimo la inexorable rectitud del juez o magistrado. Para ello, nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la publicidad de un juicio. Mas la misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitución, exige que su responsabilidad sea efectiva”.

⁵ P. Gómez de la Serna “ Del poder judicial, de sus relaciones con los demás poderes, y de las condiciones y deberes de los que lo ejercen” *RGLJ*, t. 36, 1869, p. 149

los antiguos Consejos, que indistintamente actuaban gobernando y juzgando⁶, supuso inicialmente una desorientación como doctrina y como práctica que se manifestó en el día a día de la vida institucional⁷. No fue ciertamente fácil desmontar la estructura de poder del absolutismo monárquico propio del Antiguo Régimen.

La restauración del absolutismo entre 1814 y 1820 supuso la liquidación de las bases institucionales del régimen constitucional. El Decreto de 27 de mayo de 1814 restauró el Consejo Real, lo que significó que los negocios contenciosos que obraron en poder del Tribunal Supremo pasaron al Consejo Real llamado anteriormente Consejo de Castilla. Es significativo que en este período salvo en el Acta adicional y efímera de 1815 no se volvió a considerar la justicia como un verdadero poder lo que evidenciaba una regresión del modelo gaditano.

A la llegada del Trienio Liberal 1820-1823 y por acuerdo de la Junta provisional se promulgó el Decreto de 13 de mayo de 1820 que ordenaba la instalación del Tribunal Supremo “ en los mismos términos en que fue creado por las Cortes de 17 de abril de 1812 y ordenaba que se compusiera por ahora de los magistrados existentes en el día, de los nombrados a consulta del Consejo de Estado de 14 de mayo de 1812”⁸.

Se repusieron provisionalmente a los magistrados de 1812, mientras se verificaba el grado de afecto al régimen constitucional y su posicionamiento político durante el período absolutista, hasta otorgar los destinos en propiedad. El artículo 237 de la Constitución reservaba al rey el nombramiento de todas las plazas de la judicatura de entre las ternas que al efecto presentase el Consejo de Estado. Entre éstas plazas hubo que diferenciar entre las que se otorgaban en propiedad –los magistrados designados en el nuevo período liberal– y los que se otorgaban con carácter interino a aquellos magistrados que ya lo eran en 1814 y a los que había que examinar su conducta y comportamiento en la adhesión al nuevo momento político⁹.

Por todo ello se instó al gobierno a nombrar a los magistrados perseguidos por el régimen absolutista¹⁰.

El funcionamiento del alto tribunal discurrió en la zozobra de los escenarios políticos del momento, hasta que se emprendieron reformas cruciales en el período de María Cristina, y una de ellas era inevitablemente la de la justicia. Se consolidó la doctrina liberal y la forma de materializar sus objetivos: se suspendieron las funciones del

⁶ Las tesis mantenidas por Salustiano de Dios sobre las actuaciones de los Consejos sostiene que más que funciones diferentes, lo que se trata es de vías o procedimientos distintos. Los asuntos que entran en el Consejo pueden tramitarse por vía de expediente, por vía de justicia o por vía de gracia.

⁷ M. Artola en *Los orígenes de la España contemporánea*: “ la privación de las funciones gubernativas suponía para los Consejos un duro golpe. La traslación de su competencia jurídica a un Tribunal Supremo los anula por entero al no dejarles campo alguno de intervención. Despojados de sus atribuciones, lo único que podía hacerse era disolverlos”, Instituto de Estudios Políticos, t. I, 1959, p. 426-427

⁸ Archivo de las Cortes españolas, Reservados, Fernando VII, l. 366, e. 166

⁹ DS, t. III, 1820, p. 1846-1847, “ sucede en el Tribunal de Justicia, donde los nombramientos nuevamente a propuesta del Consejo de Estado tienen la calidad de propietarios y los que la tenían en el año 1814 eran interinos”

¹⁰ CD, t. 7, 1821, p. 111

Consejo de Estado y se devolvieron muchas de sus competencias al Tribunal Supremo tal y como se recogieron en el Real Decreto de 24 de marzo de 1834¹¹. De los seis promulgados en esta fecha interesa el II por el se creó el Tribunal Supremo de España e Indias, fundamental para consolidar un auténtico poder judicial¹².

Con este Decreto se extinguió definitivamente el Consejo de Castilla y de Indias y se le concedieron objetivas competencias al Tribunal Supremo de España e Indias fijándose su composición numérica. En el terreno doctrinal quiero señalar que después de veintidós años el concepto de éste órgano jurisdiccional coincidía plenamente con el espíritu de Cádiz, con su deseo y con su ubicación institucional dentro del texto constitucional¹³.

Destaco de igual modo, que el año 1838 marcó un punto de inflexión en las nuevas formas procesales que se introdujeron a través del Real Decreto de 4 de noviembre de 1838 que quedan analizados oportunamente en la tesis y que culminaron con la introducción de la casación, que hizo del Tribunal Supremo un órgano uniformador de la jurisprudencia existente.

Aunque mi trabajo comienza cronológicamente en 1836 las líneas fundamentales de intervencionismo ya se apuntaban en los años precedentes como bien señala el profesor Moreno Pastor en su trabajo, constatando indirectamente, pues no es el objeto de su análisis, elementos de politización que en esta tesis se abordan.

¹¹ CD, t. 19, 1834, p. 158-166. Sobre el alcance general de la reforma puede verse el interesante trabajo de I. Sánchez Bella, La reforma de la Administración Central en 1834, en Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, p. 655-688

¹² A. Gómez Becerra, *Memoria relativa a los principales actos del Excmo. Sr. D. Alvaro Gómez Becerra, como ministro de Gracia y Justicia en 1835 y 1836*, escrita por él mismo y encontrada después de su fallecimiento ocurrido en 1855. Fue publicada por A. G. Ocampo en *RGLJ*, t. XLVIII, 1876, p. 107-130 y 185-208

¹³ Este planteamiento coincide con lo expuesto por L. Moreno Pastor en *Los orígenes del Tribunal Supremo 1812-1838* “ el Tribunal creado en Cádiz merece destacarse por su cualificación política muy diferente en el conjunto de órganos existentes. El Tribunal Supremo gaditano parecía un órgano más autónomo del poder real, por cuanto que la potestad regia de nombramiento se encontraba limitada por la necesidad de escoger entre las ternas propuestas por el Consejo de Estado, el cual a su vez, era un órgano del poder ejecutivo. Por otra parte, de acuerdo con los postulados de la Constitución de Cádiz, se estableció un “ sistema de separación de poderes ejecutivo-judicial de corte judicialista conforme al modelo inglés, basado en la preponderancia absoluta del poder judicial y en su monopolio estricto de la función jurisdiccional”: separación que se advirtió tanto en el plano orgánico como en el funcional. Obviamente, en un sistema monárquico puro como el que subsistía, aún en marzo de 1834, tal separación no podía practicarse por cuanto en el mismo ejercicio del poder real, no era posible el reconocimiento de poderes autónomos y separados. Sin embargo, en los aspectos formales y externos, vemos que el decreto se inspiró muy claramente en el modelo gaditano singularmente en cuanto a la composición y a los recursos que específicamente le quedaban encomendados” p. 177-178.

1. Estado de la cuestión

Esta Tesis que aquí se presenta pretende analizar el grado de politización que existió en la administración de la justicia, y más concretamente en su instancia jurisdiccional más alta: el Tribunal Supremo entre 1836 y 1881. Entendiendo que el Tribunal Supremo era el verdadero espejo, como la más alta instancia jurisdiccional, donde se reflejaron con más evidencia los cambios y ritmos políticos que demostraron las permanentes interferencias del ejecutivo en el ámbito judicial.

El espacio cronológico objeto del estudio de esta Tesis, pretende recoger las consecuencias más inmediatas que se derivaron de los trabajos planteados en las Cortes de Cádiz, y que se hicieron realidad poco antes en la acción política previa a la promulgación de la Constitución de 1837, hasta la consolidación definitiva de la Restauración política en la sucesión al frente del gobierno de Cánovas a Sagasta.

El período de 1836-1881 no es en absoluto arbitrario, pues en él encontraremos las reminiscencias del absolutismo propio de la etapa más reaccionaria de Fernando VII (1823-1833), la Regencia de María Cristina en el intento de recoger la herencia del liberalismo doceañista, y posteriormente una evolución de éste, adaptado a las circunstancias políticas contextuales y a sus verdaderos protagonistas. Finaliza el trabajo en el año 1881, en el intento de analizar la inercia de los años posteriores a la Restauración en lo concerniente al impacto normativo y a las designaciones en el ámbito del Tribunal Supremo. No podemos olvidar que la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870 supuso un elemento de contrastada estabilidad en el escenario de la administración judicial de las futuras décadas.

En estos 46 años que comprende el ámbito temporal de estudio de la Tesis, se condensan hechos trascendentales para la definitiva configuración del Estado liberal y la evolución de todos los instrumentos legales utilizados, con mayor o menor fortuna, al servicio de éste.

Se suceden sistemas políticos tan diversos como: monarquía en su forma liberal y constitucional, regencias, co-regencias, república en su dimensión unitaria y federal, gobiernos revolucionarios, pronunciamientos militares, y todo ello con interesantes repercusiones en el orden judicial. Ha sido una constante, prácticamente hasta la promulgación de la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial (1870), el continuo y permanente intrusismo del ejecutivo en la administración de justicia a través de dos vías:

- interviniendo en la instrumentación legal y normativa
- decidiendo directamente en los nombramientos y ceses de los magistrados del alto Tribunal

Se formaron en estos 46 años, más de 66 gobiernos distintos, con una escasa tradición en la articulación de los partidos políticos y con un “fulanismo” que creó una doctrina de funcionamiento muy difícil para el estudio de ciertos personajes públicos,

que nunca se atuvieron a directrices objetivas en su comportamiento político (de ahí que algunos magistrados muestren variables de afinidad ideológica muy cambiantes).

2. Hipótesis de trabajo

El sistema liberal-constitucional proclamó la división de poderes. Esto supone en su proyección más pura la independencia de todos y cada uno de ellos. ¿se produjo esta independencia en España? ¿fue sólo relativa al ejecutivo y al legislativo?. De aquí parte la hipótesis principal de este trabajo: ¿fue independiente el poder judicial o estuvo mediatizado por el ejecutivo? Esta Tesis tiene por objeto contestar a estas preguntas, así como a otras de la siguiente naturaleza: ¿estuvo politizado el Tribunal Supremo como órgano máximo de la administración de justicia entre los años 1836-1881?, ¿qué orientación ideológica tuvieron sus magistrados?, ¿qué cambios normativos facilitaron la intromisión del ejecutivo en el orden judicial?, ¿cómo se produjeron los nombramientos y los ceses y quién los hizo en el seno del alto tribunal?, ¿hasta qué punto el Tribunal Supremo actuó mediatizado en sus competencias?, ¿fue la justicia un verdadero poder o una mera acción delegada?

El trabajo trata por tanto de responder a estas interrogantes desde la aproximación al estado de la cuestión recogido en la Bibliografía y los trabajos existentes que pueden ser considerados como fuentes de investigación.

En este sentido he de comentar que desde la historiografía contemporánea tradicional, la “administración de justicia” es una asignatura pendiente, pues el tratamiento que se ha dado a esta materia es prácticamente inexistente en todas la bibliografía clásica que analiza la Historia Contemporánea de España. La política, sociedad, economía, cultura y como mucho la administración, han sido los capítulos más referenciados. En este sentido, debemos mencionar que han sido los profesores de Historia del Derecho -y desde esta disciplina- quienes han analizado la cuestión de la organización judicial con más profundidad y singularidad. Desde el estudio de las instituciones políticas y administrativas en el s. XIX centrado en el final del Antiguo Régimen y en la época isabelina, han surgido en los últimos años monografías sobre la administración de justicia que quiero aquí destacar:

Obra clásica en este tipo de estudios y de referencia, es sin duda la de J. Francisco Lasso Gaité¹⁴, convertida en un verdadero itinerario histórico-legal para el estudio de la administración de justicia en su conjunto. Obra de extraordinario interés por todos los trabajos descritos desarrollados en comisión y que vieron la luz de la legalidad en algunos casos y en otros no (estos aportan gran interés para pulsar el estado de ánimo y las posturas de los ponentes desde las ideologías imperantes).

¹⁴ J. F. Lasso Gaité “Aportación a la Historia del Tribunal Supremo” en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1969, t. LIX, p. 23, y el v. I de la *Codificación Española*, Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, 1979, 2 v.

Así mismo, tenemos la obra del prof. L. Moreno Pastor¹⁵. Este trabajo de gran contenido científico, se introduce en importantes análisis de orden orgánico sobre el Tribunal Supremo, su materia competencial, y todo desde la base de un exhaustivo rigor en el análisis legislativo y sus secuencias históricas bien fundamentadas. Sin ser su objeto esencial de estudio, se pronuncia sobre determinados elementos esenciales de inamovilidad e independencia judicial en las que se apoya este trabajo, pues es su objetivo.

La obra del prof. J. Sainz Guerra¹⁶ presenta a mi entender importantes lagunas de fuentes normativas y archivísticas; no trata la jurisdicción contencioso-administrativa (esencial para conocer las relaciones siempre fluctuantes y tensas entre la administración gubernativa y el orden judicial) y aunque es una obra con grandes pretensiones, se reduce a un volumen descriptivo, con errores cronológicos y ausencias en materia legislativa que se traduce en un trabajo con luces y sombras en sus objetivos finales.

Destaco también la obra de J. Ramón Fernández Torres¹⁷, que nos presenta un trabajo bien argumentado desde la doctrina y desde la teoría política y jurídica. Esta jurisdicción, la contencioso-administrativa, ha merecido un singular tratamiento en la tesis pues, directa e indirectamente, ha supuesto una revisión en el plano tradicional de la división de poderes, desmontando algunos de los criterios que han presidido los estudios de esta materia.

De más reciente salida es el trabajo publicado por F. Martínez Pérez¹⁸, que recoge un buen estudio del período gaditano y sus consecuencias inmediatas, y que sirve como información preliminar al objeto de mi tesis.

No olvido, en absoluto, trabajos no monográficos sobre el tema, que se contienen en manuales u obras de carácter generalista de algunos profesores de la especialidad de Historia del derecho, contenidas en sus manuales y que sin pretender analizar minuciosamente el hecho institucional, sí alumbran claves a tener en cuenta para la ulterior investigación del contexto histórico-jurídico y de su esencia de funcionamiento¹⁹.

¹⁵ L. Moreno Pastor *Los orígenes del Tribunal Supremo (1808-1838)*, editada en Madrid, 1988 y publicada por el Consejo General del Poder Judicial, 371 p.

¹⁶ J. Sainz Guerra: *La Administración de Justicia en España (1810-1870)*, publicada en Madrid, Eudema, 1992, 415 p.

¹⁷ J. R. Fernández Torres, *La formación histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa*, Civitas, Madrid, 1998, 665 p.

¹⁸ F. Martínez Pérez¹⁸, *Entre confianza y responsabilidad., la justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.

¹⁹ Me refiero sustancialmente a las consideraciones que sobre el Tribunal Supremo han realizado los profesores Sánchez Arcilla, Tomás y valiente y Santos Corona, mencionados en la Bibliografía.

3. Metodología y Fuentes

La Tesis se articula metodológicamente de la siguiente manera:

- Introducción, como punto de partida, en la que se analiza el estado de la cuestión del que se parte, la hipótesis de trabajo con los interrogantes iniciales que se establecen con el grado de esclarecimiento que hasta el momento existe y la metodología y las fuentes, claves fundamentales para llegar a las conclusiones y que éstas obedezcan a resultados bien argumentados e inequívocos.
- la politización del Tribunal Supremo (1836-1881) que es la parte argumental de los objetivos planteados en la Tesis y donde trató de responder a los interrogantes definidos en la hipótesis de trabajo con datos concretos e información recogida en las fuentes de la investigación. Expongo un breve contexto histórico (no es el objetivo del trabajo la descripción de acontecimientos del período histórico) y resalto las decisiones que provocaron, a mi entender, las reiteradas interferencias del poder político en la administración de justicia en general y del Tribunal Supremo en particular. Estas interferencias se dieron a través de dos vías: decisiones directas sobre designaciones y ceses de magistrados en el alto Tribunal y acciones normativas en formas de leyes, ordenes y decretos que generan posteriores cambios en la estructura judicial. Divido este capítulo en períodos marcados por los cambios políticos y la incorporación de gobiernos de distinto signo que definieron cada etapa según la historiografía tradicional. Este capítulo que es la aportación sustancial de la Tesis recoge los instrumentos legales que directamente se tradujeron en cambios directos de magistrados como manifestación de la injerencia política. Los epígrafes se realizan en función del criterio cronológico de las etapas políticas que se suceden y con la salvedad de atender específicamente con otro epígrafe a la jurisdicción contencioso-administrativa por su importancia. Y se profundiza en el esclarecimiento legal de sus competencias en pro de la independencia de los actos judiciales fuera del control de las instancias del Estado. Admitir una jurisdicción retenida suponía admitir la doctrina de la administración de justicia como una delegación más de las funciones de la Administración. La tensión por el control efectivo de estas competencias supuso un camino largo y tortuoso, oscilando ellas entre el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado.
- la Estructura orgánica y el funcionamiento del Tribunal Supremo (1836-1881) constituye un capítulo de tratamiento esencial. En él se recoge un itinerario cronológico-histórico de toda la acción legislativa promulgada entre 1836 y 1881 sobre el Tribunal Supremo con el mismo tratamiento metodológico seguido anteriormente (períodos cronológicos de acceso de gobiernos con distinta orientación ideológica). También se aportan proyectos de ley, bases, debates y trabajos de la Comisión de Códigos y comisiones parlamentarias que aunque no se materializaron en ninguna ley, orden o decreto, sí nos ofrecen

planteamientos de interés y una proyección de los problemas judiciales en el horizonte del tiempo, aparte de interiorizar en los posicionamientos de sus protagonistas, así como en las cuestiones que fueron centrales en el devenir de los acontecimientos históricos.

Se analiza la composición del Tribunal Supremo a través de sus figuras unipersonales: presidentes, presidentes de sala, magistrados, fiscales, secretarios, escribanos, y demás personal subalterno, así como la estructura de funcionamiento del órgano en pleno o en salas. Posteriormente se abordan las competencias del Tribunal en temáticas importantes:

- el recurso de nulidad (concentró los antiguos recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación a través del Real Decreto de noviembre de 1838).
- el recurso de casación que otorgó al Tribunal Supremo la verdadera mayoría de edad en materia de única potestad jurisprudencial, convirtiéndolo en instancia de término y puesto en marcha completamente a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (auspiciado en algunos de sus términos el 20 de junio de 1852 en la rama del Derecho Mercantil). Desde el punto de vista político convirtió al alto Tribunal en claro objeto del deseo en cuanto éste poseía la capacidad de crear doctrina y por ello de vital importancia en el control de sus miembros. En esta parte observamos una definición cambiante del perfil del Tribunal Supremo en su organización interna y en sus cometidos. Quiero destacar que con la aparición del recurso de casación se transformó totalmente el Tribunal desde la trascendental misión de uniformar la jurisprudencia existente. Se describen los pasos que se dieron para poner en marcha el recurso de casación en materia civil, criminal, tanto en el fondo como en la forma.
- la jurisdicción contencioso-administrativa como mecanismo procesal incorporado al trabajo de la sala a partir de la LOPJ.
- el estatuto jurídico de los magistrados que incorpora las condiciones de acceso a la carrera judicial con las diversas vicisitudes legales que la contemplan. Importantes consideraciones sobre la fijeza y discrecionalidad de los requerimientos de incorporación a la misma. De igual modo se ofrecen datos y doctrinas sobre la fijeza y discrecionalidad de los requerimientos de incorporación a la función judicial. Los deberes de los magistrados entre los que destaco con independencia de los debidos a la carrera funcionarial, los de motivar las sentencias. La motivación de sentencias fue otro instrumento de carácter normativo, fundamental en el orden procesal, pero también en el político pues orientaba la actuación judicial en contra de la arbitrariedad manejada hasta el momento y exigía la cualificación de los magistrados en orden a su designación. Se evitaron de este modo las interferencias de agentes externos en la sustanciación de causas.

- el índice de magistrados (1836-1881), que es una elaboración propia procedente de fuentes distintas y dispersas. Doy unas claves en forma de iniciales que ayudan con un simple golpe de vista a situar a cada magistrado y procedo a cuantificar los motivos de cambio en función de su naturaleza.
- los resultados, vienen a presentar estadísticas y gráficos de las etapas históricas estudiadas sobre las que serán conclusiones finales. Presento la relación de los 186 magistrados y fiscales (1836-1881) del Tribunal Supremo, con las claves que los sitúan en su adscripción política. Seguidamente computo los motivos de cambio y el origen de los ceses de los magistrados y los expreso en tablas estadísticas y porcentuales. Este trabajo se ha extraído en la mayoría de las ocasiones de los expedientes personales de los magistrados. Los gráficos pretenden reflejar la realidad de politización según los siete períodos históricos analizados, espacios de intervención política en el Tribunal Supremo y tendencias de independencia en el tiempo objeto de tratamiento en esta Tesis.
- las conclusiones se orientan en dos vertientes en el orden de designaciones/ceses de magistrados con sus comentarios de politización y en el orden normativo. Pretendo completar lo que originariamente fue un punto de partida de la Tesis: la politización del Tribunal Supremo a lo largo de cuarenta y seis años, con distintos grados de intensidad reflejándose directamente en la separación de magistrados de sus destinos o nombramientos y tratando de desarrollar una actividad legislativa en consonancia y favorecedora de la acción política.
- la relación alfabética de los magistrados y fiscales estudiados y que componen el período de análisis. Se pretende completar con los datos más significativos que esclarezcan su labor en la carrera judicial y sobre todo en el Tribunal Supremo. Se inserta en él el período de permanencia en el alto tribunal, así como las valoraciones políticas que sobre el magistrado existen y las tareas legislativas de las que fue protagonista. Se incluyen los méritos de éstos que les otorgaron condecoraciones y distinciones, no exentas de intencionalidad política según la coyunturas.
- Apéndice Documental, compuesto de textos (cartas, instancias, circulares, memorias,...) sumamente interesantes sobre alguno de los magistrados, que fueron sus propios autores o que expresan indirectamente algunas circunstancias sobre ellos.
- el Apéndice Legislativo (1836-1881), compuesto de todo el material legal que se ha consultado para la elaboración de la Tesis, en orden cronológico por años.
- la Bibliografía como compendio de obras genéricas y específicas de índole histórico y jurídico que abordan la temática objeto de la Tesis.

La periodificación que desarrollo se ajusta a la tradicional en la historiografía contemporánea y que viene determinada por los cambios políticos que son los auténticos detonantes de los cambios normativos y de sus protagonistas:

- Restablecimiento del régimen constitucional: 1836 - octubre 1840
- Proceso revolucionario: octubre 1840 - diciembre 1843
- Etapa moderada: julio 1843 - julio 1854
- Bienio progresista: julio 1854 - julio 1856
- Moderantismo: julio 1856 – septiembre
- Sexenio Revolucionario: septiembre 1868 - 1874
- Restauración: 1875 - 1881

Las fuentes que he manejado en el aspecto legislativo se contienen en la Colección de Decretos, que a partir de 1846 se denominó Colección Legislativa en el período 1836-1881, la literatura jurídica contenida en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Faro Nacional desde el año 1851 al 1865 y que fue sustituida por la revista La Justicia cuyo período de vigencia fue corto; la Gaceta de Madrid por la que he completado datos cronológicos no encontrados en los expedientes personales; la Revista de Derecho Procesal; de igual modo he manejado la Revista de Derecho Moderno, la Revista Jurídica de Cataluña, la Revista de Derecho Judicial, la Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, la Revista de Derecho Privado, la Revista Jurídica de Autores Españoles y los Anuarios de Derecho Civil y Penal. Ha sido una de las fuentes más fundamentales la consulta de los trabajos de la Comisión General de Codificación durante estos años.

Se han consultado las Memorias de los Actos Solemnes de Apertura de Tribunales que me han proporcionado una información sumamente interesante para calibrar las coyunturas históricas en relación a los problemas que en esos momentos existían y que eran motivo de preocupación para el estamento judicial. Distintas intervenciones han marcado un punto de inflexión en el discurrir de la administración de justicia.

He descrito estos tránsitos y sus cambios sin profundizar en los mismos, pues esta tarea correspondería a los procesalistas y el objeto de esta Tesis, no hay que olvidarlo, es la institución jurídica del Tribunal Supremo y su evolución a lo largo de la historia. Existe en la Bibliografía un extenso apartado referido al recurso de casación.

El Índice de magistrados y sus respectivos expedientes personales han sido investigados en el Archivo Histórico Nacional (Sección de Fondos Contemporáneos-Magistrados y Jueces) y los que aún se encuentran en el Ministerio de Justicia, que en su momento no se trasladaron al AHN (se reubicaron estos expedientes en el año 1994 mediante el trabajo de acopio y ordenación que hicieron el grupo de apoyo del prof. Scholz), al seguirse el criterio de dejar en el ministerio los de aquellos magistrados que habían sido ministros de Gracia y Justicia y los que ostentaron la condición de presidentes del alto tribunal, y otros empleados de dicho ministerio. Quiero resaltar la dificultad que he tenido para encontrar algún expediente (en el fichero de “Desaparecidos” están catalogados algunos que materialmente ya no existen y otros,

que estando registrados están extraviados o no están sujetos al régimen de consulta por su mal estado de conservación).

El estudio minucioso de los Expedientes personales ha sido bastante laborioso, pues se encuentran muy desordenados internamente en el seguimiento de la información que cada uno contiene. Aunque exista teóricamente una sistemática organizativa de cada expediente, ésta, a menudo no se respeta. Cada expediente se compone de los siguientes apartados: destinos, relación de méritos, méritos y servicios, quejas e informes, extractos de secretaría, licencias y prórrogas e indiferente.

Los contenidos sustanciales para valorar aspectos de politización en la carrera judicial de los magistrados, los he extraído del epígrafe de “Destinos”, donde se detalla a veces con precisión y otras veces no- la trayectoria judicial de cada individuo. Es costumbre que ésta, se inicie desde los escalones más inferiores de la judicatura hasta llegar a la condición de magistrado de Audiencia territorial, para pasar seguidamente a la Audiencia de Madrid (será en la mayoría de las ocasiones destino final), para ser desde ahí propuesto a la condición de magistrado del Tribunal Supremo en condiciones de “normalidad técnica”: vacante, renuncia, ascenso, jubilación o fallecimiento, o en plazas de nueva creación (por ampliación de salas o división funcional de las ya existentes).

Es frecuente encontrar en la documentación aportada en los expedientes la “Hoja de Servicios” del funcionario, con referencias escuetas a fechas y nombramientos o ceses, y en la parte final con la denominación de “Observaciones” se reseñan distinciones, honores o méritos contraídos en su dilatada carrera.

En el subapartado “Extracto de Secretaría” encontramos toda la información necesaria para sacar las conclusiones de la Tesis, pues se aportan los informes que de carácter técnico o político, desarrollan distintas instancias (Junta para arreglos de tribunales del reino hasta 1837, ayuntamientos - con el grado de politización que tenían por entonces-, jefes políticos, diputaciones provinciales, Regentes de Audiencias, etc...). Es decisivo, que a la par de convulsiones políticas, aumente el grado de inspección y fiscalización de los magistrados según unos períodos u otros.

De este apartado he recogido, igualmente, el Apéndice Documental confeccionado por cartas, informes o dictámenes que revelan actuaciones intervencionistas del poder ejecutivo en la administración de la justicia, o reflexiones personales de los magistrados que reflejan un interesante estado de opinión por parte de éstos. Se convierten en fuentes directas donde extraer conclusiones apoyadas en testimonios de los propios protagonistas.

Con distintas expresiones, afirmaciones o matizaciones se ponen de manifiesto las quejas, ruegos o peticiones que los magistrados realizan a sus superiores orgánicos de la judicatura o del poder político, al haber sido apartados o separados de sus destinos en propiedad. En él se contienen posiciones directas de los afectados por arbitrariedades cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales por parte del poder político. Con

mayor o menor justificación existen ejemplos clamorosos de intervencionismo que pueden ser observados en el apartado de gráficos que complementa esta Tesis.

Algunas lagunas cronológicas las he completado desde la Guía de Forasteros en Madrid, posteriormente denominada Guía del Estado (donde se mencionan todos los cargos públicos de la nación). Es una fuente muy rigurosa aunque presenta las deficiencias que se derivan de no reseñar a aquellos magistrados que fueron nombrados y cesados en el transcurso del mismo año, dado que esta publicación se editaba con carácter anual y en ella se relacionaban los magistrados en activo a día uno de enero.

En el índice de magistrados reflejo a modo de ficha referida a cada uno de ellos: carrera judicial, tiempo de duración en el Tribunal Supremo, informes y valoraciones políticas, otros méritos, tarea legislativa (algunos tuvieron una incidencia muy especial en ella), hoja de servicios (en algunos casos existe) y observaciones.

Este índice sigue un orden alfabético -no cronológico- y viene precedido por una relación con las claves más significativas de su adscripción política, si es que la tuvieron, y que sitúa al lector muy detalladamente en cada caso para realizar una consulta rápida.

Este apartado lo he completado con distintas notas e informaciones exploradas en el Archivo del Congreso de los Diputados y en su Biblioteca, así como en el Archivo y Biblioteca del Senado; son notas de valoración y condición política, así como algunas destacadas intervenciones de algunos magistrados que desde su condición de Diputados y Senadores tuvieron en la vida parlamentaria -concretamente en temas de justicia- y que se reflejaron en los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado.

Al final de la Tesis concluyo con unos Cuadros gráficos que son los resultados que establezco basado en el estudio previo. En esos cuadros resalto temáticas de politización por períodos cronológicos según la metodología anteriormente detallada, para que el lector pueda realizar una observación comparativa y visualizada del espacio temporal comprendido entre 1836-1881. Señalo franjas de influencias moderadas y progresistas, así como los puntos de inflexión marcados por los independientes. Me parecen también muy interesantes los períodos de desarrollo normativo.

Desde los resultados obtenidos y plasmados en los gráficos paso a la parte final de Conclusiones que sistemáticamente argumentadas contestan a los interrogantes planteados en la Hipótesis de Trabajo (parte tercera de la Introducción). Las conclusiones las divido en dos subapartados: decisiones directas sobre nombramientos y ceses e indirectas con la instrumentalización legislativa que favoreció los cambios según las conveniencias políticas.

Se completa la Tesis con una Bibliografía general y específica, para que cualquier otro investigador pueda incidir en estos aspectos aquí tratados o desarrollar con más profundidad alguno de sus puntos.

También tengo que mencionar que algunos datos han sido cotejados en la Hemeroteca Nacional para pulsar los niveles de aceptación o rechazo social a alguna situación judicial que se derivaron de los acontecimientos políticos, así como calibrar la trascendencia de las medidas adoptadas en el ámbito judicial y social. Después de realizar diferentes incursiones en los diarios de la época, he de constatar la ausencia generalizada de noticias referidas a la administración de justicia y más en concreto al papel que jugó el Tribunal Supremo en esos años, tanto en su funcionamiento interno como en sus miembros y lo que me parece aún más importante, como institución garantista y moderadora en la vida constitucional del siglo XIX español. Esta ausencia de información explícita al respecto no deja de tener su notoriedad y valor argumental, en cuanto se desprende que no existe una sensibilización social en cuanto a la administración de justicia o que el poder político anula cualquier capacidad comunicativa a los medios y así evitar que se cree opinión pública en la sociedad sobre estos temas.

II. LA POLITIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO (1836-1881)

Preámbulo

Quiero en este capítulo desarrollar el itinerario legislativo -largo y tortuoso- que desde 1836 a 1881 se produjo en este ámbito, que puede considerarse como vital para desentrañar la politización de la administración de justicia en los diferentes períodos políticos. La politización directa o indirecta se ha reflejado normalmente en la capacidad de las autoridades gubernativas de mover a los jueces o magistrados por consideraciones no profesionales y sí ideológicas.

Para enfocar debidamente este capítulo hago la división de sub-períodos políticos, en función de los cambios protagonizados por las diferentes formaciones y partidos que representan ideologías diferenciadas dentro del liberalismo imperante. Trato de analizar los cambios normativos aprobados e incluso aquellos proyectos o borradores de trabajo, que aunque no tuvieron vigencia legislativa alumbraron, intenciones muy destacables desde el punto de vista del intrusismo político. Las injerencias fueron directas e indirectas a través de la utilización de la norma o bajo la forma de designaciones personales en tareas de responsabilidad en la administración judicial.

Es lógico por tanto verificar las conexiones que existieron entre norma y cambio, como causa-efecto y si estos binomios se han identificado en cada coyuntura política con intromisiones de carácter político que atentaron fehacientemente contra la independencia judicial.

He tomado como base de investigación la evolución normativa que afectó al Tribunal Supremo, así como a sus protagonistas: los políticos que legislaron y los magistrados del tribunal como sujetos activos o pasivos de los cambios emprendidos. Para ello esta tarea se ha apoyado en el estudio minucioso de los expedientes personales de cada uno de los 186 miembros (magistrados y fiscales) del Tribunal Supremo que formaron parte del mismo entre los años 1836 y 1881.

En la evolución normativa incluyo la legislación existente en temáticas sustanciales para deducir la politización del Tribunal Supremo como fueron las variaciones de la composición orgánica, la inamovilidad judicial, la responsabilidad judicial, el recurso de nulidad, el recurso de casación, la motivación de sentencias y la jurisdicción contencioso-administrativa.

De este análisis, como se verá, se desprende la investigación en siete períodos que, a mi entender, no sólo no son aleatorios sino que vienen a justificarse por tendencias de mayor o menor politización, sean del signo que sean, como ya abordaré en sus respectivos apartados.

De este modo profundizaremos en los siguientes períodos, tratados según la historiografía tradicional:

1. Restablecimiento del régimen constitucional: 1836-octubre 1840
2. Revolución liberal: octubre 1840-diciembre 1843
3. Etapa moderada: julio 1843-julio 1854
4. Bienio progresista: julio 1854-julio 1856
5. Moderantismo: julio 1856-septiembre 1868
6. Sexenio Revolucionario: septiembre 1868-1874²⁰
7. Restauración: 1875-1881

Debido a la importancia del tema, desarrollo al final un capítulo dedicado específicamente a la jurisdicción contencioso-administrativa pues desde sus orígenes hasta su definitiva plasmación práctica se mantiene un debate permanente por el control de esta franja jurisdiccional. El poder gubernativo se impone desde 1836 hasta 1870, casi de manera continuada, sobre el poder judicial y se convierte en jurisdicción retenida objeto del deseo pues en su ámbito se dilucidan temas trascendentales para imponer la hegemonía el gobierno de turno y no cabe hacer distinción alguna por ideologías.

Pudiera parecer a simple vista que los episodios políticos han sido la base crítica del enjuiciamiento que desarrollo, pero este criterio no se atiene totalmente a la realidad como más adelante podremos comprobar. He tratado sólo de medir el componente de interferencia del ejecutivo en el orden judicial y es verdad, que hasta 1868, ha existido una identificación plena y evidente de cambios de magistrados relacionados directamente con la hegemonía del bando político que en cada período ostentaba el poder.

Se acentúa más, si cabe, en los períodos revolucionarios del liberalismo extremo, donde los ritmos normativos y los ritmos de cambio han sido el rasgo dominante. Los períodos moderados han sido más cautelosos -con intervencionismo también- y el Sexenio Revolucionario, aunque pudiera ser contradictorio por definición, se caracterizó por un mayor respeto a la carrera judicial y a su independencia, siendo trastocado éste régimen en la Restauración donde se marca un nuevo punto de inflexión de marcada politización en alguno de los nombramientos que se produjeron.

Pregonada en todas las cartas constitucionales y desarrollada en los abundantes textos jurídicos (órdenes, decretos, proyectos, bases y leyes, ...), podemos deducir del escrupuloso análisis de los mismos, que la inamovilidad judicial como máxima garantía de la independencia, no fue más que un deseo ampliamente denostado fruto de un empalagoso lenguaje político. Salvo raras y personalísimas excepciones no existió voluntad política de resolverlo hasta prácticamente la determinación constitucional que se hizo en 1869, plasmada con rigor y garantías suficientes en el marco de la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial de 1870.

Trataremos seguidamente de adentrarnos en el desarrollo legal con interpretaciones políticas y jurídicas que desentrañen sus orígenes y resultados.

²⁰ Realizo un subapartado con criterio de contenido y no de cronología y que viene determinado por la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que marca un punto y aparte en la plasmación normativa de la existente administración de justicia.

1. Restablecimiento del régimen constitucional: 1836-octubre 1840: los primeros intentos de profesionalización de los jueces.

Como hechos previos quiero recabar que el 14 de agosto de 1836 se profundiza en el cambio político operado desde mayo, con el advenimiento de los progresistas al gobierno en la persona de Bardají que lo encabezó y que sustituyó a Calatrava en la presidencia del gobierno. Con independencia de la vigencia del reglamento de funcionamiento del alto tribunal de septiembre de 1835 depositario del de 1814- quiero destacar como asunto importante en el orden legislativo, la Real orden de 21 de septiembre de 1836²¹ por la que se formó una Junta de calificación de magistrados y jueces de todos los tribunales. Esta orden se enmarca en el deseo político de atemperar algunas conductas de destacados representantes de la administración judicial claramente contrapuestas al liberalismo y mantenedores del espíritu absolutista, incluso con pronunciamientos públicos.

En dicha orden se destacaba el que algunos magistrados se hubieran designado sin las debidas formalidades exigidas por la Constitución. En su artículo primero enuncia la composición de cinco miembros de reconocido “patriotismo”. La tarea de esta Junta fue revisar el estado de los tribunales y fue un claro ejemplo de intervencionismo pues los informantes de las diversas situaciones personales fueron: jefes políticos, diputaciones provinciales, ayuntamientos y “personas de confianza” (se entiende del régimen imperante).

Si además se une lo que dispone el art. 5º “sin perjuicio de lo que yo resuelva” (ministro de Gracia y Justicia), se deduce un ansia de remodelar el panorama existente en la línea del poder imperante.

Esta Real orden conllevó remociones, jubilaciones, traslaciones, nombramientos y promociones interinas justificadas por las necesidades perentorias del servicio. Fue rubricada por José Landero que en 1840 era magistrado del Tribunal Supremo y que tuvo una dilatada carrera política como diputado y como senador en el bando progresista dentro del liberalismo.

Consecuencias directas de esta Real orden fueron los ceses de Teotimo Escudero, adscrito políticamente al bando absolutista²² el 26 de enero de 1837: “La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino le cesa por haber actuado contra los diputados liberales en el período de gobierno absoluto (1822-1823)”. Y el cese de Diego Martín Villodres adscrito políticamente en el bando moderado²³. Ambos fueron repuestos posteriormente.

²¹ Colección de Decretos, T. XXI (1836) p 414.

²² Fue perseguido por el constitucionalismo de 1812 y en el Trienio liberal y posteriormente fue cesado en 1837. Un informe político de 24 de noviembre de 1824 dice de él: “ fue uno de los jueces de la causa de Grimarest y suspenso por los constitucionales. No consta su purificación” (Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, l. 4397, n. 2428, ver índice de magistrados y apéndice documental).

²³ Se le destituye como magistrado del Tribunal Supremo en 1837 y la Junta Provisional le declara cesante a comienzos del período revolucionario. Se le reconocieron sus derechos en la etapa moderada (AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4704, n. 6591, ver índice de magistrados).

La Real orden de 21 de diciembre de 1836 por la que se autorizaba a las Cortes al nombramiento en propiedad de los destinos de la judicatura, concedía al gobierno la facultad de nombrar en propiedad a los sujetos que destinaba a servir plazas en la judicatura mientras se organizaban otras instancias (Consejo de Estado) que disponían de esa potestad²⁴.

El 22 de marzo de 1837 se promulgó un Real decreto por el que se restablecía la Orden y decreto de 29 de junio de 1822 sobre formación de causa a los magistrados y diputados a Cortes; me interesa destacar de él dos aspectos que en épocas precedentes habían sido desvirtuados como eran el que sólo correspondía al Tribunal Supremo de Justicia proceder a la formación de causa contra los magistrados y jueces que apareciesen infractores de ley²⁵ y la posibilidad contemplada en el artículo 3º de dicho decreto por el que se daba la posibilidad al jefe político para instruir el sumario, procurando no alterar el artículo 253 de la Constitución²⁶. Es cierto que el jefe político se limitaba sólo a instruir la causa pero no a resolverla. Estas competencias ya se contemplaban desde Cádiz.

Promulgada definitivamente el 15 de junio la Constitución de 1837 se prevenía por Real orden de 18 de junio la forma en que habían de prestar juramento a la nueva Constitución los tribunales y juzgados (...) ²⁷ que en su artículo 3º decía:

“En el Supremo Tribunal de Justicia el presidente prestará el juramento en manos del decano, y éste y los demás ministros y fiscales, como también los subalternos y dependientes del tribunal, en manos del presidente (...)”.

De este modo se consagraba el principio de aceptación expresa de los postulados constitucionales de todos y cada uno de los estamentos de la Justicia.

El hecho mismo que el art. 64 de la Constitución determinara que habría de redactarse una ley completa de organización de tribunales y juzgados abría una esfera de discrecionalidad nada conveniente y aceptable en un contexto liberal de asunción de división de poderes²⁸

Quiero reseñar como precedente a este tema, que la tensión entre gobierno y Tribunal Supremo era manifiesta para evitar las arbitrariedades en las actuaciones del ejecutivo;

²⁴ CD. T. XXI (1836) p. 591.

²⁵ Es una objeción interesante para evitar intrusismos ajenos a la esfera judicial.

²⁶ El principio de independencia queda de este modo menoscabado al permitir que la autoridad política forme parte del proceso.

²⁷ CD. T. XXII (1837) p. 364.

²⁸ Así se expresó Gómez Becerra: “ se ha dicho, que no puede tener completa observancia el art. 66 de la Constitución, hasta que estén formadas las leyes que anuncia el art. 64. Esto puede ser cierto en alguna parte, no en el todo. Cualquiera que sea el número de Tribunales y Juzgados que ha de haber; cualesquiera que sean la organización, sus facultades y el modo de ejercerlas, siempre han de ser inamovibles los magistrados. Por lo mismo, lo que se pueda establecer con respecto a aquellos puntos, es accidental o indiferente para el de la inamovilidad, y la formación de las leyes que los arreglen no es un impedimento para que se observe el art. 66. Resta, pues, del 64 únicamente lo relativo a las calidades que han de tener los individuos de los Tribunales y Juzgados” *RGLJ* T. 46 (1875) pp. 242-243.

buena prueba de ello fue la exposición que con fecha 10 octubre de 1837 hizo el Tribunal Supremo defendiendo el principio de inamovilidad con ocasión del cese de Manuel Antonio Caballero, magistrado del Tribunal Supremo, y donde se hicieron interesantes consideraciones para fortalecer la administración de justicia y otorgar al alto tribunal la absoluta potestad en las designaciones y destituciones.

Este pronunciamiento no obtuvo unanimidad de todos los magistrados, pues Álvaro Gómez Becerra como se verá, hizo un voto particular de desacuerdo, defendiendo la potestad del gobierno en sus decisiones al no existir todavía una ley que diera contenido a los artículos 64 y 66 de la Constitución²⁹, contradiciendo lo que con anterioridad había defendido con pasión.

²⁹ Este documento íntegro puede ser consultado en el Apéndice Documental. Inicio y Preámbulo:

Exposición del Tribunal Supremo, de 10 de Octubre de 1837, defendiendo el principio de inamovilidad con ocasión del cese de un magistrado.

El problema es quién y cuando ha de determinar los asuntos referidos a ceses de magistrados.

Señora

El día 3 del corriente se ha hecho presente en el Supremo Tribunal de Justicia, para su conocimiento y efectos consiguientes, una Real Orden comunicada a su Presidente, con fecha 30 de Septiembre próximo pasado por el vuestro Secretario de Estado y del Despacho del ramo D. Ramón Salvato, comprensiva del Real Decreto del mismo día por el cual tuvo a bien V. M. declarar cesante a D. Manuel Antonio Caballero de la plaza de Magistrado que obtiene en este Supremo Tribunal.

Visto en él este Real Decreto con la Real Orden de su comunicación, y obedecido con el respecto que se merecen las resoluciones de V. M., entendió sin embargo que sería de su deber presentar algunas observaciones a V. M. sobre el asunto, y con éste objeto lo mandó pasar con urgencia a los Fiscales; y como en el siguiente día 4 se diese cuenta del otro Real Decreto de la propia fecha del 30, aunque comunicado con Real Orden de 1º del corriente, en que V. M. se ha servido nombrar a D. José Cecilio de la Rosa, Subsecretario del Despacho de Gracia y Justicia, para la plaza de Magistrado de este mismo Tribunal, vacante por cesación de D. Manuel Antonio Caballero, ha sido consiguiente que también se pasase a los Fiscales esta otra resolución de V. M. (...)

(...) Y por tanto, sin desconocer este Supremo Tribunal los buenos antecedentes y apreciables prendas de D. Cecilio de la Rosa, nombrado para suceder a Caballero, que sin duda le hacen digno de este puesto, no puede menos de proponer muy reverentemente a V. M. y de rogarle con encarecimiento, se digne mandar que quede sin efecto el Real Decreto de 30 de septiembre en que se declaró cesante a D. Manuel Antonio Caballero, y consiguientemente, por ahora, el de nombramiento de D. José Cecilio de la Rosa para ocupar la plaza de aquél, y en todo caso, si apareciese alguna causa o motivo para la destitución del 1º, se sirva asimismo mandar que se pasen al Tribunal Supremo todos los antecedentes para que proceda con arreglo a las leyes; y así está pronto a ejecutarlo como acostumbra en todos los negocios, administrando justicia sin distinción de personas.

(El Tribunal Supremo se hace fuerte para tener el las llaves de las decisiones futuras).

El Ministro D. Álvaro Gómez Becerra ha puesto voto separado y es el siguiente:

El Ministro D. Álvaro Gómez Becerra no ha podido uniformar su opinión con la del Tribunal atendiendo a varias resoluciones de V. M. y de las Cortes, según las cuales no se considera inamovibles a los Magistrados y Jueces que sirven en la actualidad, hasta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución, se establezca por una ley que el Gobierno de V. M. se ha apresurado ya a proponer. Es ciertamente necesaria, y necesaria con urgencia, la declaración de inamovilidad. Por ello es el voto y parecer de dicho Ministro que se eleve a V. M. la reverente exposición que expresan los Fiscales, pero que sin perjuicio de esto, se obedezca, guarde y cumpla lo mandado por V. M. en las dos Reales Órdenes.

La demora en la construcción de esa ley provocó el desarrollo de múltiples reglamentos, órdenes y decretos que trataban de llenar el vacío existente y deseado ciertamente por el poder político³⁰.

El 13 de diciembre de 1837, a través de un Real decreto³¹, se vio innecesaria la labor que venía desarrollando la Junta de calificación para preparar arreglos y que actuaba desde septiembre de 1836. Sus competencias pasaron a la junta de jefes del ministerio, quien se encargó de instruir los expedientes que estaban pendientes de resolución.

En razón del nuevo orden contemplado, en los decretos que desarrollaron la Constitución de 1837, se redactó una importante orden el 25 de diciembre de este mismo año por la que se nombraba una comisión para elaborar un proyecto de ley relativo a las circunstancias que debían “adornar” a los magistrados y jueces, y otro acerca de la responsabilidad judicial.³²

Por primera vez se dio un paso cualitativamente importante para enderezar la carrera judicial aportando doctrina y exigencias a los miembros más cualificados de la magistratura. Se trataba de dar justo contenido a los artículos 64 y 66 de la Constitución intentando consagrar el principio de la inamovilidad y su contrapunto, el de la responsabilidad.

En su artículo 2º, contemplaba la posibilidad de que el gobierno tenga una intervención imprescindible para “garantizar el orden público a través de los fiscales”. Dicha comisión la formaron: Claudio Antón de Luzuriaga, Juan Bravo Murillo, Joaquín Pacheco, Santos López Pelegrín y Domingo Moreno.

Esta comisión presentaba una razonable composición, pues primaron razones técnicas y no políticas para que se desarrollara un trabajo auténtico desde el punto de vista profesional. Tal es así que en mayo de 1838 presentaron un proyecto más ambicioso sobre organización de tribunales. Se presentó este trabajo como Proyecto de Ley del gobierno de 1 de junio de 1838 a las Cortes sobre cualidades, inamovilidad y responsabilidad de los magistrados y jueces

En orden a facilitar el cumplimiento del artículo 66 de la Constitución se presentó un texto que en su capítulo II: “de la calificación de los magistrados y jueces”, en su artículo 16 introducía una importante novedad:

V. M. en su alta sabiduría se servirá resolver como hallare más justo y conveniente. Madrid, 10 de octubre de 1837.

Ministerio de Justicia
Archivo de la Comisión General de Codificación

El Presidente, D. Ramón Giraldo, D. Teotimo Escudero, el Conde de Vallehermoso, D. Ramón Macía Lleopart, D. Juan Nepomuceno Hernández San Miguel, D. José María Manescau, D. Ángel Casimiro Gobantes, D. Diego Martín de Villodres, D. Francisco Vereá y Cornejo, D. Álvaro Gómez Becerra y D. Demetrio Ortiz.

³⁰ B. Clavero, *La gran innovación: Justicia de Estado y Derecho de Constitución*, en J.-M Scholz (ed), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea de España*, Frankfurt, p.180

³¹ CD. T. XXIII (1837) p. 402.

³² CD. T. XXIII (1837) p. 424.

“En el Tribunal Supremo y en cada una de las Audiencias habrá una Junta de calificación, compuesta del presidente del Tribunal y de los presidentes de sala o de otros dos ministros nombrados al efecto por el gobierno”.

Esta Junta de calificación tuvo por objeto valorar cuestiones referidas a los magistrados en orden a su capacitación profesional, pero se convirtió en una poderosa herramienta al servicio del gobierno en cuanto valoraba el grado de afecto o desafecto al régimen constitucional así como la actividad partidista de los magistrados y sus intervenciones públicas. Con este punto y con el que se formuló en el art. 2º y 3º de la parte segunda del capítulo de inamovilidad³³ se culminaba el retroceso que provocó la intervención directa del gobierno en esta materia.

Se redactó con claridad una introducción, decisiva para alterar el estado de las plantas judiciales y en el art. 17 se introdujo otro factor de riesgo “la calificación de los magistrados pertenece a la Junta del Tribunal Supremo”.

En el capítulo III: “de la confirmación de los magistrados y jueces que sirven actualmente en los tribunales y juzgados de la península e Indias adyacentes”, en su art. 20 se afirmó la voluntad intervencionista del ejecutivo:

“Dentro de seis meses, contados desde la publicación de esta ley, quedará hecha la confirmación o separación. Los magistrados o jueces que no hubiesen sido separados al cumplir este plazo, se consideran por el mismo hecho confirmados”.

En la parte segunda referida en capítulo único a la Inamovilidad se decía que lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución era sólo aplicable y se aplicaría invariablemente a los magistrados y jueces que fueran nombrados o confirmados con arreglo a esta ley. Los magistrados y jueces de que trata el artículo no podrían ser ascendidos contra su voluntad. No podrían tampoco ser trasladados sin su consentimiento.

En este mismo Proyecto se abordó el tema de la responsabilidad de los magistrados en su parte tercera y en ella se definió qué personas estaban sujetas a ella y los motivos, así como de las penas en que se incurrían. Destaco este apartado como instrumento de politización indirecto que se puso en marcha y que en este texto normativo declaraba que la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo estuviera examinada por los senadores -elegidos en su mayoría por el Rey pero en otro porcentaje por el gobierno-. El carácter político del órgano ocasionó espacios de intervencionismo en la administración judicial.

³³ art 2º: “ si el gobierno juzgase conveniente la traslación de un magistrado que le repugna, deberá oír a la Junta de calificación (controla ésta como hemos visto anteriormente con la designación directa de dos de sus miembros)”.

art 3º:”si el gobierno estimase que algún magistrado está impedido de ejercer bien su ministerio por razón de su edad o mal estado de salud o de sus facultades intelectuales, podrá declararle jubilado”.

Este Proyecto fue reelaborado por el ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola que nombrado el 9 de diciembre de 1838, lo desvió de su espíritu inicial y concitó por ello las más duras críticas de diversos sectores afectados. Este ministro hizo todo lo posible para desprestigiar a la comisión y de ese modo, el 5 de febrero de 1839, el propio Tribunal Supremo emitió un informe concluyendo con la inoportunidad y lo perjudicial del Proyecto, aduciendo incluso que en algunas materias era inconstitucional, sin duda informe emitido con la presión ejercida por el gabinete moderado en el poder.

Menciono posteriormente la Real orden de 20 de diciembre de 1838 haciendo ciertas previsiones relativas a la pronta administración de justicia³⁴ y en virtud de la cual y de modo genérico el ministro Arrazola instruyó a la esfera judicial de cómo se había de proceder en todas las instancias para actuar correctamente y arengaba para ello con la siguiente afirmación no exenta de valoración política:

“(..) en tales circunstancias la acción del gobierno siempre es débil si no va acompañada de aquella firmeza que debe ser inseparable de la justicia, y si no es secundada por el celo, actividad e inflexible perseverancia de las autoridades (...)”.

Acabando este mismo año se promulgó el Real decreto de 29 diciembre de 1838 precedido de la correspondiente exposición a S. M., estableciendo reglas para mejorar la condición de los magistrados y jueces³⁵. Es probablemente el de duración más larga referido al nombramiento de jueces, magistrados y promotores fiscales. Se creó definitivamente la carrera judicial y se sistematizaron los fundamentos y criterios para los ascensos de los que reunían las condiciones exigibles.

Con unas Cortes moderadas entre 1837 y 1838 el ministro Arrazola trató de salvar una situación de alteración, claramente caótica y trazó toda su labor en el loable objetivo de que se hiciera cumplir la ley, centrando sus preocupaciones en dos líneas de trabajo la primera era el retraso en la finalización de las causas y la segunda la escasa profesionalidad que repercutía en el procedimiento de los casos.

Para conseguir subsanar estas deficiencias se aprobó este Real Decreto para mejorar la condición de los jueces y darles el prestigio del que carecían; en realidad se trataba de aclarar una carrera judicial empañada en sus contenidos por las continuas alteraciones socio-políticas.

El capítulo IV: “del nombramiento del presidente y ministros del Supremo Tribunal y de regentes de las audiencias” se avanzó significativamente en dar los pasos necesarios en cuanto a la objetivación de requisitos para las designaciones de magistrados para el Tribunal Supremo, aunque siempre existió un resquicio de discrecionalidad en cuanto a la definitiva elección, pues era el ministro el que debía designar, de entre los propuestos que cumplieran las condiciones señaladas:

³⁴ CD. T. XXIV (1838) pp. 665 y ss.

³⁵ CD. T. XXIV (1838) pp. 687 y ss

“para el Tribunal Supremo de Justicia se me propondrá a los que, habiendo cumplido cuarenta años, llevaren cuatro por lo menos de jueces, o tres de fiscales de la audiencia de Madrid, u ocho de ministros, o seis de fiscales en los demás”.

Y seguidamente se reforzó el poder del ministro, afianzando una trayectoria claramente intervencionista en la máxima instancia jurisdiccional:

“las propuestas para regentes y para la presidencia del Tribunal Supremo se harán con la mayor analogía posible a lo dispuesto en este decreto, reservándome Yo el apreciar las razones de política, de justicia y de conveniencia en cada uno de los casos”

Las razones de política serían siempre discrecionales y subjetivas en la acción a desarrollar, aumentando la gravedad de lo enunciado anteriormente en el capítulo VI, titulado “de la suspensión y destitución de los jueces” que recogía en dos de sus puntos lo siguiente:

“(…) la destitución de un juez o magistrado y la suspensión, si hubiese de exceder del término indicado en el párrafo anterior, se tratará y decidirá en Consejo de Ministros. Para los efectos indicados en el artículo que precede y demás que haya lugar, se llevan a debido efecto y concluirá sin dilación el registro general, u hoja de los méritos, servicios y cualidades de los jueces y magistrados mandada formar en el ministerio de vuestro cargo”

No se desarrolló en este decreto el procedimiento que había de seguirse con más detalle para la suspensión efectiva de sus funciones en la figura del magistrado. Se observa del análisis de estos artículos, los mismos errores del pasado, atentando con los principios expuestos en el artículo 66 de la Constitución de 1837³⁶ y que son muy bien analizados por Gómez Becerra³⁷, que en esos momentos pertenecía al Tribunal Supremo. El ascenso, gracia o promoción quedaba, de nuevo, pendiente de la condición de “buena conducta moral y política del candidato acreditada en debida forma”.

Un año más tarde el propio Gómez Becerra, ya nombrado ministro de Gracia y Justicia el 3 de octubre de 1840, impugnó un Proyecto de Ley sobre organización de tribunales de 14 de marzo de 1839 donde se expresaba explícitamente la necesidad de proclamar la inamovilidad judicial.

Tras hacer una profunda crítica a los nombramientos que se habían realizado dentro de la carrera judicial y que venían a menoscabar las órdenes y decretos que en este sentido se habían promulgado durante su etapa de ministro de Gracia y Justicia (fue ministro del 28 de septiembre de 1835 al 18 de mayo de 1836) hizo una proclama de los

³⁶ En el artículo 66 de la Constitución de 1837 enunciaba rotundamente que “ningún magistrado o juez podrá ser depuesto de su destino, temporal o perpetuo, sino *por sentencia ejecutoriada*, ni suspendido sino por auto judicial o en virtud de orden del Rey, cuando éste, con motivos fundados, le mande juzgar por el tribunal competente”

³⁷ A. Gómez Becerra, *Observaciones sobre el poder judicial en España*, Madrid, 1839, p. 47.

valores y virtudes de las reformas emprendidas que no se habían de detener³⁸ y en este sentido dice:

“(…) atendamos a lo presente y a lo futuro. Ataque al progreso del mal: todavía se está a tiempo de detenerlo y de impedir que extienda y afirme sus raíces.

La Constitución de 1837 es la ley fundamental del Estado, ley a la que deben obediencia todos los españoles; ley que juran guardar todos los funcionarios públicos, y ley que también juran hacer guardar todos los que ejercen autoridad. Dios y V. M. mandan que estos juramentos sean cumplidos, y no pueden ser quebrantados sin incurrir en una nota poco honrosa y en penas graves en uno y otro fuero. ¿Cómo es entonces que no tiene efecto la inamovilidad de los magistrados y jueces, consignada expresamente en el artículo 66? ¿Quién ha concedido la facultad de destruir o de suspender la observancia de este artículo? ¿De qué sirve escrito en la ley, si no tiene ninguna aplicación en la práctica? ¿Por qué está sin observancia la Constitución en esta parte? ¿Por qué se retarda indefinidamente y al parecer por un plazo muy largo?”.

Pasa seguidamente a valorar algunas intenciones:

“Sin tocar a los ministros (crítica encubierta a Arrazola) de V. M. y menos a los que actualmente merecen la Real confianza, hay otras muchas personas que por sus manejos, por sus mismas particulares, tal vez por su empeño en desacreditar la justa causa de nuestra Reina y de nuestras instituciones, son interesadas en que continúe este estado lamentable de confusión, de desorden y de incertidumbre para que nada se afirme ni consolide. Razones especiales y artificios refinados les sirven para deslumbrar en éste como en otras cosas, y entre tanto trabajan sin cesar en sus planes de verdadera desorganización. A la mano poderosa de V. M. está reservada la completa destrucción de estos planes (...)

Nuestro cambio político se consumó y completó el memorable 18 de junio de 1837 y desde entonces va corrido más de año y medio. ¿Hasta cuando se ha de esperar? ¿Cuanto tiempo quiere tomarse el ministerio? ¿Por qué tanta tardanza cuando el gobierno ha usado con tanta libertad y plenitud de la facultad de ordenar esta situación?”

En este sentido crítico, este mismo autor redactó un folleto sobre “inamovilidad judicial” publicado el 2 de mayo de 1839. Este posicionamiento es interesante pues el autor de este artículo, Álvaro Gómez Becerra, en esos momentos era magistrado del Tribunal Supremo y en otros intervalos de tiempo fue ministro de Gracia y Justicia. En él se hicieron valoraciones que considero de gran interés, introduciéndonos en un capítulo esencial y fundamental para entender la politización del orden judicial en los primeros años de nuestro estudio.

³⁸ Estas declaraciones las hace Gómez Becerra en la época en que era ministro de Gracia y Justicia D. Lorenzo Arrazola, cuyas ideas políticas eran opuestas.

Empezó su trabajo objetando “que en los últimos reinados hubiera casos de separación sin formación de causa, sin sentencia ejecutoriada y por la sola autoridad del gobierno”³⁹. Reconoció, sin embargo, que el poder judicial no era independiente y que con mucha asiduidad se vulneró la Constitución de 1837 haciendo deplorable la condición de magistrado.

Como buen liberal admitió la necesidad que en los cambios políticos se observaran las conductas de todos aquellos funcionarios que infundieran recelos probables de hostilidad o desafección, incluso los empleados en la carrera judicial. Esta labor la vino haciendo desde 1836 y 1837 la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino. Esto no debía parecer extraño porque se había hecho en todos los tiempos y en todos los lugares⁴⁰. La Constitución promulgada el 18 de junio de 1837 puso fin a un estado transitorio y de provisionalidad solamente cuestionado por el Real decreto promulgado el 29 de diciembre de 1838 que daba potestad al gobierno, nuevamente, de utilizar mecanismos de control en la judicatura nada deseables.

El autor justificó la creación, por decreto de 22 de septiembre de 1836, de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino para poder hacer efectivo realmente el artículo 66 de la Constitución de 1837, reconociendo implícitamente que serían, según el artículo 2, de dicho decreto los jefes políticos, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y otras personas de la “mayor confianza” (para el gobierno) los que emitirían los informes preceptivos para la continuidad o separación de los funcionarios.

El tema había cobrado tanta trascendencia que, el 23 de agosto de 1839, se redactó un Proyecto de Ley de inamovilidad y responsabilidad de jueces y magistrados elaborado por una comisión compuesta por José Landero, José Pérez Rivas, Pedro Pidal, Saturnino Calderón Collantes, José Mariano Olañeta y J. María Monreal y a la luz de un informe previo presentado por el Tribunal Supremo, inició su texto con una prolongada exposición que en su punto tercero hablaba sobre inamovilidad.

Decía en primer lugar, que ésta no era necesaria extenderla a todos los miembros de la administración judicial pero sí se hacía exigencia el estudiar el actual escalafón, aunque ello pudiera producir lesiones contra particulares, naturalmente no deseadas. En este sentido se justificaron unos procesos de cambio que la comisión argumentó así:

“Perpetuar la actual magistratura y judicatura; no dejar sino la estrecha y única salida de causa legalmente sustanciada y ejecutoriada a tantos individuos, que cuando fueron nombrados no eran responsables ni pensaban ser inamovibles; para cuyo nombramiento ninguna precaución se tomó, ninguna consulta precedió, le ha parecido a la Comisión que era causar gravísimo perjuicio a la nación, a los ciudadanos cuya suerte está en manos de Jueces así nombrados. Y entre causar

³⁹ Sostiene el autor que fueron pocos los casos y se produjeron por causa justa y justificada; que jamás se mandó una separación sin que se apoyase en un motivo grave, instruyéndose un expediente en que se hacía constar, casi siempre con mucha madurez .

⁴⁰ Ni en el caso francés ni en España tras la promulgación de la Constitución de Cádiz se puede observar un claro ultraje a la condición de independencia de los magistrados.

una incertidumbre momentánea a muchas familias, o causar un daño probable y perpetuo a la sociedad entera, para cuyo bien y no para el de los empleados son los empleos, ha preferido escoger el primero de los males”.

En el título II de este Proyecto se trató la inamovilidad que se declaraba respecto de los jueces y magistrados nombrados o confirmados con arreglo a esta Ley, que no podrían ser separados de sus destinos sino por sentencia ejecutoriada, ni ascendidos ni trasladados, ni jubilados contra su voluntad, salvo “cuando el criterio público o la conveniencia de algún tribunal exigiera la traslación de algún juez o magistrado y éste lo resistiera, o para decidir la jubilación por impedimento físico o intelectual, en que podrá acordarlo el ministro, previo informe de la Junta de calificación”.

Es curioso observar que seguía existiendo una amplia discrecionalidad por parte de la autoridad gubernativa, cuando nadie entendía bien cuál era el criterio público y en razón de qué contenidos se ejercía. Aunque el origen de los cambios estaba en los tribunales, éstos siguieron formándose por personas elegidas por el ministro o gobierno de turno.

En el título III se recogió que la responsabilidad sería evaluada por un tribunal especial de senadores, ya fuera de modo personal o colectivo. Se insistió en la línea ya iniciada anteriormente donde los senadores eran nombrados por el rey, a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombraban los diputados a Cortes⁴¹.

En el título V se contenían una serie de disposiciones transitorias encaminadas a garantizar la inamovilidad de los jueces y magistrados y nombrados, mediante su confirmación por el Rey, salvo que estuvieren sirviendo en las mismas plazas para las que hubieren sido nombrados a propuesta del Consejo de Estado⁴².

Muchos son los acontecimientos que se produjeron en los primeros meses de 1840 de carácter político: convocatoria electoral que se tradujo en una mayoría progresista frente al gobierno, primera guerra carlista, culminada el 6 de julio, cuando Cabrera, derrotado por Espartero, cruzaba la frontera y se refugiaba en Francia. Se produjo la salida de la reina-gobernadora María Cristina a Marsella y la exigencia de un co-regente desde la posición mayoritaria que recayó precisamente en la persona de Espartero.

Aparentemente pacificada la situación política, se entraba en el panorama más delicado, como bien señaló Tomás Villarroya⁴³: “Si María Cristina había sido, de algún modo, regente de los moderados, Espartero, por razón de los acontecimientos, había de ser regente de los progresistas”. Esto significaba que el nuevo escenario político hacía sumamente difícil la continuidad de los empleados públicos y por ello afectaba directamente a la inamovilidad judicial, pues se pretendía entrar en una nueva etapa rompiendo con los hábitos y, lo que es peor, con las personas del pasado. Gómez Becerra sustituyó a Arrazola en Gracia y Justicia y desarrolló una acción política tendente a que se cumplieran los principios constitucionales de 1837 que en la teoría

⁴¹ Según se recoge en el art. 15 del título III referido al Senado de la Constitución de 1837

⁴² Archivo de la Comisión General de Codificación. (1839) I. 0 de organización de tribunales, c. 16.

⁴³ T. Villarroya: *La era isabelina*, p. 58.

coincidían plenamente con los nuevos gobernantes pero que habían sido mal gestionados o administrados.

Previo a este contexto se emitió la Real orden de 11 de enero de 1840 dirigida a los magistrados a fin de que la administración de justicia procediera en su labor con actividad y energía. Fue promovida por Arrazola para que se reforzara la actuación de la justicia y la autoridad gubernativa permitiera el ejercicio de sus funciones⁴⁴.

Cabe señalar que en el Proyecto de 15 de enero de 1840 sobre nueva planta de tribunales elaborado por García Gallardo con carácter provisional, arbitraba que, el establecimiento de un Consejo Central de Estado y Gobernación, que dispuso que la comunicación entre el gobierno y el Tribunal Supremo se llevaría a cabo a través del ministerio fiscal, excepto en los casos en que se solicitaran informes o se aludiera a asuntos que interesaran a las personas que lo desempeñen, en que la comunicación se realizaría de modo directo a través del Presidente del Tribunal Supremo⁴⁵.

En este Proyecto se avanzó en la independencia judicial, cuando se recogió la propuesta de Manuel García Gallardo de conceder al propio Tribunal Supremo, la competencia de conocer las causas de responsabilidad de sus propios magistrados y evitando así cualquier instancia externa en dicha valoración⁴⁶.

2. Proceso revolucionario: octubre 1840 - diciembre 1843: la ideologización del sistema judicial.

Llegado el nuevo gobierno al poder, Gómez Becerra de clara ideología progresista⁴⁷ y adalid de la inamovilidad procedió, como nuevo ministro de Gracia y Justicia, en septiembre de 1840 a remover la estructura judicial; en palabras de G. Goyena⁴⁸:

“casi la mitad de los magistrados y mucha más de la mitad de los jueces fueron lanzados de sus plazas a título de suspensión, que se convirtió en cesantía, como la de tantos otros empleados que se hallaron en el mismo caso, por la Orden de la Regencia de 16 de noviembre”⁴⁹.

En septiembre de 1840 hubo un pronunciamiento político que llevó a Espartero al gobierno y a la regencia, marcando un punto de inflexión con la etapa anterior de la

⁴⁴ CD. T. XXVI (1840) pp. 35-37.

⁴⁵ Este proyecto no tuvo vigencia y quedó en la aislada tarea jurídica como tantos otros que nos sirven para medir el estado de opinión y la conciliación de las diferentes sensibilidades políticas.

⁴⁶ ACGC. (1840) l. 0 de enjuiciamiento criminal, c. 1, d. I

⁴⁷ En 1820 fue nombrado jefe político de Badajoz y en 1821 de Toledo avalando el sistema liberal frente al absolutismo de la etapa anterior, presidió el Consejo de Ministros en el Trienio revolucionario en 1843 (Archivo del Ministerio de Justicia, Magistrados y jueces, l. 583, n. 789, ver índice de magistrados).

⁴⁸ F. García Goyena: “Inamovilidad judicial” en *Administración de Justicia*, t. V, 1842, Madrid, pp. 201 y 202.

⁴⁹ Obsérvese en los gráficos la comparativa de nombramientos y ceses en el Tribunal Supremo de 1840, gráfico 1 en el capítulo de Resultados).

regencia de María Cristina (aunque en ella se dieron también gobiernos de carácter progresista en sus últimos momentos). Se quiso cambiar el estado de las cosas y visualizar una ruptura institucional por la vía de los hechos sin que para ello fuera necesario modificar la constitución de 1837 sino simplemente cumplirla.

Desde el punto de vista judicial, la mitad de los magistrados y jueces fueron separados de sus destinos con la denominación de suspensión, que se convirtió en cesantía y que concluyó con el decreto de 16 de octubre de 1840⁵⁰ de la Regencia declarando la inamovilidad de los magistrados y jueces.

Este decreto tuvo dos fases: revisar el estado previo de los magistrados separados de sus destinos y contemplar el cuadro real de la magistratura y las nuevas designaciones que tuvieron una clara connotación política, y cuyo preámbulo decía:

“Para evitar las dudas a que pudiera dar lugar la clasificación de los empleados separados o suspensos por las juntas desde primero de septiembre de este año hasta que quedaron reducidas a auxiliares del Gobierno, la Regencia provisional del Reino, en nombre de S. M. doña Isabel II, se ha servido fijar las reglas siguientes que los empleados separados por las Juntas y que tienen derecho a cesantía se declaran tales cesantes desde el día en que hayan dejado de desempeñar las funciones propias de sus destinos. Además que los empleados suspensos por las Juntas con el mismo derecho se considerarán también cesantes desde el día en que dejaron de servir sus destinos, si no fueren repuestos en ellos; si lo son, no producirá efectos ninguno la suspensión y por último que estas disposiciones se comunicarán a todos los ministerios, para que tengan aplicación en todos los casos que ocurran”.

De todos los magistrados suspensos o separados (diez) no sabemos que hubieran sido repuestos más que dos. Esa limpieza se hizo efectiva posteriormente cuando se promulgó este decreto para consolidar una línea política que hiciera imposible volver atrás la situación que se planteaba, y donde el ministro Gómez Becerra tomó partido en esos cambios. Tras justificar el principio programático y constitucional de la inamovilidad decretó:

“los magistrados y jueces con nombramiento Real en propiedad que se hallaban en actual y efectivo ejercicio de sus respectivos empleos el día 12 del presente mes (octubre) y los que sean nombrados en lo sucesivo con las mismas calidades, no serán depuestos de sus destinos temporales o perpetuos sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendidos sino por auto judicial, o en virtud de Orden del Rey, cuando este con motivos fundados los mande juzgar por el tribunal competente, conforme al artículo 66 de la Constitución. Así lo tendréis entendido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento”⁵¹.

⁵⁰ CD. T. XXVI (1840) p. 318

⁵¹ CD. T. XXVI (1840) pp. 318-319.

En virtud de los pasos que se estaban dando, el día 31 de octubre, se promulgó el decreto de la Regencia⁵² nombrando magistrados del Tribunal Supremo a los individuos que se expresan y con plazas en propiedad⁵³: Ramón Giraldo, progresista⁵⁴, Miguel Antonio de Zumalacárregui, progresista⁵⁵, Ramón Macía Lleopart, progresista⁵⁶, Francisco Vereá y Cornejo, progresista⁵⁷, Antonio González Rivadeneira, sin adscripción⁵⁸ y Demetrio Ortiz, progresista⁵⁹.

José Alonso Ruiz era magistrado y fiscal del Tribunal Supremo. Presidió el Tribunal Supremo desde el 2 de septiembre de 1840 José María Calatrava, liberal destacado⁶⁰ y diputado en su momento por Cáceres y Cádiz y anteriormente ministro de Gracia y Justicia en 1823 y presidente de las Cortes en 1839 y del Consejo de Ministros al terminar la regencia provisional. Su mandato al frente del Tribunal Supremo se prolongó hasta el 15 de diciembre de 1843.

Este decreto venía previamente justificado en el propio documento y al tener en “consideración” que la mayor parte de los magistrados y jueces con nombramiento real que se hallaban en actual y efectivo ejercicio el 12 de dicho mes, tenían el concepto de interinos por lo dispuesto en el Real decreto de 22 de septiembre de 1836 (...).

Debía cesar este estado transitorio que colocaba a los individuos en una posición eventual e incierta, por lo cual era necesario declarar la propiedad de sus destinos a todos los que se hallaban en aptitud de continuar sus servicios con utilidad pública. Así se conseguiría la aplicación práctica del citado decreto de 16 de octubre y sería efectiva y también positiva la independencia del poder judicial”. Bajo la expresión de utilidad pública se escondía la identificación a la nueva situación política y a sus gobernantes.

⁵² CD. T. XXVI (1840) pp. 321-322.

⁵³ Parecen dos decretos contradictorios en tanta proximidad de tiempo al entender de García Goyena y de Joaquín Aguirre expresado así en 1842.

⁵⁴ Fue designado magistrado del Tribunal Supremo en 1820 y en 1823 se retira, fue desterrado en la década ominosa, en 1836 la Junta para preparar arreglos de tribunales emite un informe favorable para seguir (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4454, n. 3155, ver índice de magistrados).

⁵⁵ Se le declara constitucionalista de pro, designado magistrado del Tribunal Supremo en 1820 por su adhesión al sistema y cesado en 1823 por su liberalismo declarado, fue ministro de Gracia y Justicia en el trienio revolucionario (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 607, n. 2024, ver índice de magistrados).

⁵⁶ Solicita la jubilación voluntaria sin motivo aparente cuando comienza el período moderado y solicitó su reingreso en 1851, lo que me hace pensar en alguna connotación de índole política desafecta al sistema imperante en los años en que solicitó su jubilación (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4576, n. 4938, ver índice de magistrados).

⁵⁷ Deduzco su condición política por el informe de la Junta de arreglos que le declaró apto en 1836, fue separado el 29 de julio de 1843 por el gobierno provisional según él “ simplemente y sin consideración alguna”, seis meses más tarde solicitó su jubilación (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4716, n. 6721, ver índice de magistrados).

⁵⁸ No se deduce nada de los pocos datos conseguidos por referencias indirectas (no se encuentra el expediente personal ni en el AHN ni en el AMJ, ver el índice de magistrados)

⁵⁹ En 1824 el Consejo Real le declara impurificado por colaboracionista con el gobierno revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4668, n. 5843, ver índice de magistrados)

⁶⁰ Fue designado magistrado del Tribunal en 1820 y cesó en 1823 cuando finalizó el trienio liberal, nombrado presidente del Tribunal en el período revolucionario de 1840 en adelante y cuando finalizó en 1843 fue separado de su destino, diputado en el bando liberal en diferentes legislaturas, desterrado de 1814 a 1820 y perseguido por el sistema así como de 1823 a 1833 (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 573, n. 320, ver índice de magistrados).

El decreto sirvió para que el nuevo gobierno desde el ministerio de Gracia y Justicia (al frente estaba Álvaro Gómez Becerra) tuviera la posibilidad de hacer nuevos nombramientos, en el corto espacio de dos meses; estos son los casos de: José María Calatrava (que realmente fue repuesto), progresista el 31 de octubre, Joaquín María López como fiscal, progresista⁶¹ el 4 de noviembre, Diego González Alonso, progresista⁶² el 4 de noviembre, José Landero Corchado, progresista⁶³ el 8 de noviembre, Pío Laborda y Galindo, progresista⁶⁴ el 16 de noviembre como fiscal, Juan Argüelles Valdés, progresista⁶⁵ el 28 de noviembre, Gregorio Barraicoa Campos, progresista⁶⁶ el 20 de diciembre y José Alonso Ruiz, progresista⁶⁷ el 28 de diciembre.

La designación de Joaquín María López como Fiscal del Tribunal Supremo fue a instancias del ministro Becerra. Sin duda fue éste un nombramiento como bien dice Amparo Sevilla⁶⁸ “para ayudar a una situación en que predominaban sus ideas políticas”. Este declinó aceptar, pues su doble condición de diputado y fiscal, aun no representando motivo alguno de incompatibilidad para el gobierno, si le puso en una situación difícil y de permanente crítica a la acción política de los gobiernos de Espartero.

De esta nueva formación se constató de forma clara la tendencia progresista que se produjo (en cinco casos) frente a dos casos con perfiles independientes. Si nos detenemos en los ceses de servicio que se produjeron ese año tenemos: el dos de

⁶¹ Designado Fiscal del Tribunal Supremo en 1840 y cesó en 1843 cuando acabó el régimen liberal y fue jefe del partido radical y ejerció como presidente del gobierno del 9 de mayo al 17 de 1843 y del 23 de julio al 20 de noviembre de 1843 (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 588, n. 1067, ver índice de magistrados).

⁶² Fue designado magistrado del Tribunal el 4 de noviembre de 1840 en el inicio del período revolucionario y siendo diputado tuvo que emigrar cuando se anuló la Constitución (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4451, n. 3139, ver índice de magistrados).

⁶³ Fue designado magistrado del Tribunal en noviembre de 1840 y declarado cesante en 1843, fue jefe político de Cáceres en 1822 y un informe remitido por el ayuntamiento de Talavera de la Reina en 1834 dice de él: observó un comportamiento, irreprochable habiéndose hecho acreedor por su opinión liberal (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 5872, n. 1012, ver índice de magistrados).

⁶⁴ Fue designado Fiscal del Tribunal Supremo en 1840 y declarado cesante en 1843. Volvió al alto Tribunal como magistrado el 9 de septiembre de 1854, durante el Bienio progresista y se jubiló siendo presidente de sala el 6 de marzo de 1857. Tuvo la condición de diputado desde 1834 a 1846 ininterrumpidamente y comprometido con la causa progresista (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4532, n. 4365 ver índice de magistrados).

⁶⁵ Le adscribo a las filas progresistas, pues aunque no existen informes políticos fue nombrado magistrado del alto tribunal al comienzo de la etapa revolucionaria de 1840 y cuando llega la etapa moderada, concretamente el 14 de junio de 1844 se jubiló a petición propia aduciendo edad avanzada y motivos de salud (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4246, n. 88, ver índice de magistrados).

⁶⁶ El informe de 6 de junio de 1837 de la Junta para arreglos de tribunales y juzgados le hace merecedor de continuar en su destino, era liberal y decidido ciegamente por el trono constitucional, fue nombrado magistrado del alto tribunal al comienzo del período revolucionario, el 20 de diciembre de 1840 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4290, n. 992, ver índice de magistrados).

⁶⁷ Ministro de Gracia y Justicia el 21 de mayo de 1841, presidente del Tribunal Supremo en el Bienio progresista, participó en las acciones de los liberales exaltados en el período del trienio constitucional. Se le abrió un expediente de justificación (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 567 n. 47, ver índice de magistrados).

⁶⁸ A. Sevilla Moreno, *Joaquín María López*, 1959, Alicante, p. 55.

septiembre de este año cesó Francisco Fernández del Pino⁶⁹, moderado, en el mismo mes de septiembre fue suspendido por la Junta Provisional Manuel Antonio Caballero de condición moderada⁷⁰ y que ya había sido separado previamente en 1837, el 19 de septiembre y de igual modo fue suspendido por la Junta Provisional, José Mier y Salcedo de adscripción moderada⁷¹, el 3 de octubre cesó Álvaro Gómez Becerra para ser nombrado ministro de Gracia y Justicia, el 4 de noviembre solicitó la jubilación voluntaria, Ángel Casimiro Govantes⁷² de adscripción moderada⁷³.

La orden de 28 de enero de 1841 de la Regencia Provisional relativa a los documentos con que debían ser acompañadas las solicitudes de los que pretendían ser colocados o ascendidos en la carrera judicial⁷⁴, relataba entre los requisitos exigidos y demás formalidades en su punto 2º: “deben tener atestados fidedignos de buena conducta moral y política”. Es innecesario comentar este aspecto sumamente ambiguo, sujeto a discrecionalidad y confuso, aunque fácil de deducir en consonancia con los principios que alentaron el nuevo momento político tras el pronunciamiento.

El año 1841 acabó, en el orden normativo, con disposiciones menos relevantes tendentes al cumplimiento de las formalidades exigibles en el desarrollo de la carrera judicial. En el orden de designaciones⁷⁵ y ceses⁷⁶ fue un año de absoluta tranquilidad.

El Proyecto sobre inamovilidad y responsabilidad, del ministro Sr. Alonso fue presentado a las Cortes en sesión del 14 de marzo de 1842. Era un proyecto⁷⁷ en el que se trató de tipificar los rasgos, cualidades y requisitos de todos los funcionarios del poder judicial, tratando de dar eficacia a los artículos 66 y 67 de la Constitución y se

⁶⁹ No existen razones documentadas sobre ello, de su expediente se deduce una filiación política cercana al antiguo sistema dado que el 29 de noviembre fue nombrado ministro de Gracia y Justicia además de ser honrado con otros honores en esa época (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 578, n. 597, ver índice de magistrados).

⁷⁰ En informe de 25 de noviembre de 1824 se dice que fue uno de los que escaparon a la persecución de los revolucionarios, y no resulta haberse purificado, en 1826 redactó un extenso documento de fidelidad al rey y rechazo al sistema revolucionario y liberal de 1820-1823, leer el apéndice documental (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4292, n. 1021, ver índice de magistrados y apéndice documental).

⁷¹ En un informe reservado se le tacha de realista y fue delatado por los constitucionalistas de dudoso y no mereció la purificación de la Junta de arreglos de juzgados y tribunales, en 1837 otro informe dice de él que no goza de buen concepto público por sus opiniones políticas y de no haber dado muestras positivas de adhesión a las instituciones vigentes pese a todo el 19 de noviembre la Junta lo consideró acreedor a continuar sus servicios en el destino que desempeñaba, estuvo suspendido como magistrado del Tribunal Supremo en el período revolucionario de 1840-1843 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4579, n. 4972 ver índice de magistrados y apéndice documental):

⁷² Sin duda existen en esta jubilación poderosas razones de índole política.

⁷³ El 24 de noviembre de 1840 solicitó la jubilación voluntaria por desafecto al nuevo sistema, la Junta de calificación le suspendió y le declaró cesante por los sucesos de septiembre de 1840 y curiosamente se le repuso en su plaza cuando el advenimiento del sistema moderado en diciembre de 1843 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4457, n. 3191 ver índice de magistrados).

⁷⁴ CD. T. XXVII (1841) pp. 86 y ss.

⁷⁵ El 21 de mayo se reincorporó al Tribunal Supremo Álvaro Gómez Becerra

⁷⁶ El 11 de mayo se produjo el fallecimiento de Diego González Alonso. El 21 de mayo, José Alonso Ruiz alcanzó el cargo de Ministro de Gracia y Justicia, y en ese mismo año dejó el Tribunal Supremo el magistrado Pablo Santa Fe

⁷⁷ Este Proyecto fue leído y el Sr. Presidente anunció que se imprimiría y pasaría a la Comisión Permanente para que diera su dictamen sobre este Proyecto de Ley.

propuso la forma y manera que la inamovilidad fuera un elemento exigible y real. El Proyecto se dividió en tres capítulos.

El primero estaba dedicado a la inamovilidad⁷⁸:

“se declaran inamovibles todos los magistrados y jueces que se nombren después de publicada la Ley Orgánica de los Tribunales y Juzgados, y con arreglo a sus disposiciones, garantía que no excluye la posibilidad de que sean ascendidos o trasladados -aun cuando no les acomode-, por necesidades del servicio, previa consulta del Tribunal Supremo, por iguales razones y con el mismo informe, podrán ser jubilados por imposibilidad física o moral”.

En cuanto a los magistrados y jueces nombrados con anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica “dispone que serán declarados inamovibles, después de examinar y comprobado que reúnen las cualidades y requisitos que para el nombramiento se determinan en la misma Ley Orgánica”. Y en el capítulo III declaraba inamovibles en la misma forma que los magistrados y jueces, a los fiscales del Tribunal Supremo de Justicia y de los superiores de distrito, aunque se permite al gobierno que pueda trasladarlos libremente de un Tribunal superior a otro de la misma clase.

A resultas de lo manifestado quedaba claro que existía la voluntad del gobierno de aprobar un Proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales y Juzgados. Por primera vez se le daba al Tribunal Supremo la capacidad de emitir un juicio al respecto de ciertos movimientos de magistrados en sus destinos.

En su segundo párrafo se dejaba una puerta abierta para hacer una segunda depuración, tras la realizada por Gómez Becerra en septiembre de 1840, pues no se daba por hecho que los magistrados anteriores a la aprobación de la Ley Orgánica siguieran en sus puestos, pues éstos debían reunir los requisitos que marcaba la nueva ley.

Este capítulo venía a consagrar el intervencionismo del gobierno sobre la administración de Justicia pues tenía la potestad de remover a los fiscales del Tribunal Supremo y cambiarlos de destino sin decir en razón de qué, ni tipificar los motivos que podían existir para su separación.

El proyecto estuvo precedido por la orden del 23 de octubre de 1841⁷⁹ que dio el impulsivo ministro José Alonso a los regentes de las Audiencias y que declaraba que los empleados en el orden judicial que no se hallaren expresamente exentos, debían inscribirse en las filas de la milicia nacional. Y se definía ésta “como baluarte inexpugnable de las instituciones liberales y garantía indestructible del orden público” (...)

“movido de estas razones S. A. el regente del reino, se ha servido mandar que sea una de las cualidades que deben adornar a todo empleado del poder judicial (...) y que entre los documentos con que haya de acreditarse la aptitud para

⁷⁸ ACGC. (1842) I. I de organización de tribunales, c. 6 bis.

⁷⁹ CD. T. XXVII (1841) pp. 732-733.

obtener cualquier destino aquella clase sea indispensable una certificación dada por el capitán de la compañía y visada por el comandante del batallón a que pertenezca el que aspire a ser colocado en cualquier destino, no sólo en la magistratura, judicatura o ministerio fiscal (...)

Se desprende de esta actuación una gravísima injerencia del poder ejecutivo en el judicial porque de ese modo el partido progresista iba a disponer de toda la información sobre la conducta política de los hombres que impartían justicia en España. Estos debían obedecer a sus superiores, que no eran otros que las autoridades gubernativas progresistas de las ciudades, donde ejercían sus funciones los jueces y magistrados.

Conviene citar el Proyecto de inamovilidad del ministro Alonso del 14 de marzo de 1842⁸⁰. Destaco la capacidad del gobierno en declarar inamovibles a ciertos miembros y a otros no en función de cuando hubieren sido nombrados⁸¹ (antes o después de la aprobación del texto como Ley) y destacar también que el gobierno se erigía en única instancia para trasladar libremente a los fiscales del Tribunal Supremo a otros destinos⁸².

Espartero hizo una crisis ministerial y designó a Zumalacárregui como nuevo responsable de la cartera de Gracia y Justicia. Sin la vehemencia de su antecesor tomó posesión el 17 de junio de 1842, siendo desde el año 1834 magistrado del Tribunal Supremo de España e Indias (por lo tanto con la dilatada experiencia de años pre y postconstitucionales).

Estos cambios en el gobierno son argumentados por Comellas⁸³ en el sentido que Espartero “quiso desempeñar la dirección del poder ejecutivo, que en su régimen constitucional corresponde al primer ministro. Como no podía ser jefe de estado y jefe del gobierno a un tiempo, procuró nombrar primeros ministros a hombres de segunda o tercera fila, incapaces de hacerle sombra, y poder así gobernar a través de ellos”.

El 20 de noviembre accedió Joaquín María López al ministerio y en el orden judicial se produjeron normas que reflejaron un estado de conflictividad y de alteración; en ese sentido hemos de entender las resoluciones de 4 de junio y de 26 de junio incitando en ambas a que los tribunales y los jueces se esmeraran en el cumplimiento de sus obligaciones e incluso dando concretas directrices para sostener la contestación -desde la legalidad vigente- al aparato institucional.

El año 1842 se resume en el capítulo de nombramientos en el Tribunal Supremo del siguiente modo: el 12 de julio se nombró a José Rodríguez Busto de adscripción política

⁸⁰ En la exposición del Proyecto se justifica el mismo por la imperiosa necesidad de desarrollar lo dispuesto en el art. 64 de la Constitución y cuya obligación la tiene el gobierno en materia de justicia, y del mismo se daba cumplimiento a los arts. 66 y 67 del texto fundamental. El gobierno del mismo modo a través de este proyecto definió la responsabilidad de los magistrados.

⁸¹ ACGC. (1842) l. 3 de organización de tribunales, c. 6 bis.

⁸² Se recoge en el capítulo 3º de modo análogo al de magistrados y jueces.

⁸³ J. L. Comellas, *Historia General de España y América* ..., p. 507.

progresista⁸⁴, en la misma fecha se nombró a Eugenio Manuel Cuervo, liberal constitucionalista⁸⁵, Fiscal del Tribunal Supremo que un año más tarde fue elegido senador electo por Lugo, se nombró también a Ángel Fernández de los Ríos, de condición política progresista⁸⁶.

Y de igual modo cesaron en sus funciones: el 2 de octubre de 1842 solicitó su jubilación José María Manescau aunque los motivos fueron claramente políticos⁸⁷, estaba adscrito al bando moderado⁸⁸, y el comentado ascenso de Zumalacárregui al ministerio el 17 de junio de ese año.

La división del partido progresista, la insurrección industrial catalana, y otros acontecimientos colaterales evidenciaron la impotencia política de Espartero y su declive en el proceso revolucionario, culminado por su sustitución al frente del ejecutivo de Joaquín María López el 9 de mayo de 1843 a la par que el exilio de Duque de la Victoria.

Hasta el 20 de noviembre de 1843 presidió el gobierno provisional Joaquín María López, además de desempeñar la cartera de Gracia y Justicia. Su actuación se centró en contrarrestar unas circunstancias no elegidas y “sortear difíciles trances con la mayor habilidad posible”⁸⁹. Siendo un progresista significado, dirigió sus tareas de gabinete hacia una orientación cada vez mas moderada fruto de las circunstancias políticas.

En este período la milicia nacional fue disuelta, e incluso el gobierno renunciando a algunos principios programáticos del liberalismo, condenó las bases de representación y por encima de las discrepancias partidistas, pretendió que la acción del gobierno fuera una causa nacional. La división de poderes era una pura quimera y, en virtud de ello, varios magistrados del Tribunal Supremo, que se negaron a ratificar dicha situación, fueron separados de sus responsabilidades (fueron seis de los quince cambios de ese año, ver gráfico 2.a. comparativa de nombramientos y ceses en 1843 del Tribunal Supremo).

⁸⁴ El 13 de febrero de 1844 un informe señala tras haber sido separado en julio de 1843 que por haber manifestado que no reconocía como legítimo el gobierno provisional creado por el alzamiento nacional fue separado de la plaza de magistrado del Tribunal Supremo y el 19 de septiembre de 1854 en el comienzo del bienio progresista se le repuso en su destino como reparación (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4987, n. 11835, ver índice de magistrados y apéndice documental).

⁸⁵ Fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo el 12 de julio de 1842 y separado de su destino con el advenimiento del sistema moderado. No teniendo informes claros sobre su trayectoria política podemos situarle en la órbita progresista pues todos los nombramientos que obtuvo fueron en esa época (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4995, n. 11924, ver índice de magistrados y apéndice documental).

⁸⁶ Liberal de profundas convicciones, organizó el partido progresista, sus ideas le atrajeron las iras y persecuciones de los gobiernos moderados, tomó parte muy activa en la Revolución de septiembre de 1868 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4417, n. 2751, ver índice de magistrados).

⁸⁷ Ver apéndice documental correspondiente al magistrado José María Manescau y Saborío.

⁸⁸ La Junta provisional le suspendió de sus servicios el 2 de octubre de 1842 y se le restituyó a la llegada de la etapa moderada el 16 de diciembre de 1843 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4575, n. 4926, ver índice de magistrados).

⁸⁹ J.L. Comellas, *Los moderados en el poder*, Madrid, 1970, p. 23.

La situación de los jueces fue difícil ya que en situaciones caóticas, teóricamente hablando y adversas políticamente, tuvieron que desarrollar una delicada actividad en equilibrios muy insostenibles desde la independencia⁹⁰.

En esta situación de alteración política se desencadenaron multitud de cambios a todos los niveles institucionales y, por supuesto, en el seno de la administración judicial y, sobre todo, en el Tribunal Supremo. Estos cambios se operaron sin alterar para nada el orden normativo existente, y por ello deben considerarse como intervención directa del ejecutivo.

Los cambios provocados fueron: el 23 de julio cesó Álvaro Gómez Becerra como magistrado, destacado representante del progresismo revolucionario, el 29 de julio fueron separados: José María Doménech, Francisco Vereá y Cornejo, José M^a. Calatrava, José Rodríguez Busto, Eugenio Manuel Cuervo, Ángel Fernández de los Ríos, el 9 de agosto: Felipe Gómez Acebo renunció por motivos personales, el 21 de agosto: Pascual Madoz cesó. Tuvo un paso absolutamente fugaz en el Tribunal Supremo, el 18 de noviembre José Pérez de Rozas se jubiló por motivos de salud, también cesó José Landero Corchado este mismo año⁹¹ y en diciembre se jubiló Ramón Macía Lleopart.

En el capítulo de nombramientos en estos mismos momentos y provocados por los mismos acontecimientos se produjeron los siguientes: Francisco Olabarrieta y Urquijo (23 de julio), Ramón M. Fonseca Freyre (29 de julio), José María Tejada (29 de julio), Juan Antonio Castejón Gálvez (29 de julio), Felipe Gómez Acebo (31 de julio) –nueve días más tarde renunció-. Francisco Agustín Silvela (30 de julio) y Joaquín Francisco Pacheco (30 de julio). Claudio A. de Luzuriaga (5 de agosto, en ese mismo año cesó), José Pérez de Rozas (21 de agosto, tres meses más tarde solicitó su jubilación como ya comentamos anteriormente), Nicolás M^a Garellly fue nombrado directamente Presidente del Tribunal Supremo (15 de diciembre), se repuso a José Mier y Salcedo (16 de diciembre), se repuso a José Manescau (16 de diciembre), se repuso a Ángel Casimiro Govantes en ese mismo mes de diciembre. Florencio García Goyena (29 de diciembre), Francisco Entrambasaguas (30 de diciembre).

Todos los cambios operados en el sentido de la separación obedecieron claramente a razones de índole política en favor de lograr una mayoría moderada al frente del Tribunal Supremo (órgano máximo y vertebrador de la jurisprudencia). De hecho de los nombramientos enunciados siete se adscriben al sector liberal moderado, tres al progresista y cinco a los de sin adscripción.

El 19 de agosto de 1843 y a instancias del gobierno aun presidido por Joaquín María López, se formó la Comisión de Codificación por destacados hombres del Derecho y con la presencia de otros personajes con más significación política. La creación de la Comisión General de Codificación en agosto de 1843, resultó ser otro buen instrumento

⁹⁰ M. Ortiz de Zúñiga., *Tratado original y memoria de los Juzgados de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia*, Biblioteca judicial, 3 v., Madrid, 1840, 1841.

⁹¹ No está documentado en su expediente personal.

para ejecutar las políticas en materia judicial de los gobernantes fueran del signo político que fueran y del período histórico que se tratara. Es verdad que los trabajos que desarrolló alcanzaron importancia y notoriedad en el campo de la doctrina y la jurisprudencia en momentos delicados de controversias y lagunas legales. No es menos cierto que la composición de la misma traslucía, en un porcentaje alto, la presencia de juristas incontestables y de reconocido prestigio, pero es también absolutamente riguroso que de los trabajos encomendados a dicha comisión algunos obtuvieron luz verde en su aplicabilidad y vigencia y otros fueron desterrados al cajón de la literatura jurídica y por tanto del olvido.

Su composición evidenció un equilibrio político entre progresistas puros, moderados ortodoxos e independientes. Sus miembros fueron: como presidente Manuel Cortina y como vocales: Juan Bravo Murillo, Pascual Madoz, Manuel Pérez Hernández, Luis González Bravo, Francisco de Paula Castro y Orozco, José María Tejada, Manuel de Seijas Lozano, Domingo Vila, Manuel García Gallardo, Claudio Antón de Luzuruiaga, Manuel Urbina Daoíz, Javier de Quinto, Florencio García Goyena, Cirilo Álvarez, Domingo Ruiz de la Vega, Manuel Ortiz de Zúñiga y Joaquín Escrich.

Las tareas de esta comisión dignificaron el estamento judicial porque los criterios manejados eran sustancialmente profesionales. Uno de los primeros trabajos que acometió esta Comisión fue el de redactar un Proyecto de Organización de Tribunales. Así el primer principio que acordaron el 21 de septiembre de 1843 fue “el objeto político de la codificación debe ser, realizar y desenvolver los principios constitucionales”⁹².

Esta comisión, tras la caída del gobierno progresista trabajó en pos de clarificar el organigrama de las instancias judiciales y en el reforzamiento del papel del poder judicial en referencia a los otros dos poderes.

El 20 de noviembre de 1843 tuvo lugar la última reunión del Consejo de Ministros donde se producía la renuncia de Joaquín María López en favor de Salustiano Olózaga. Aunque aparentemente supuso un triunfo progresista, este cambio evidenció las contradicciones y tensiones internas del partido sobre cuál debía ser la estrategia a adoptar en breve plazo.

3. Etapa moderada: diciembre 1843 - julio 1854: teorías y análisis de la Administración de justicia.

Se inició tras el final de la época de las regencias, el período más homogéneo y extenso, si cabe, de todo el siglo XIX. Sus características básicas fueron el ascenso de Isabel II a la jefatura del Estado y la presencia continuada del partido moderado en el poder. Este segundo aspecto no estuvo exento, pese a todo, de ambigüedad y de indeterminación política dentro del gran paraguas que fue el doctrinarismo liberal. El

⁹² ACGC. (1843) l. 1 de organización de la comisión, c. 3, d. 20 folios 18 y 55.

concepto moderado era pues una amalgama de afinidades personales, sociales y económicas, en torno al triunfo de 1843 que buscaba el orden ante la zozobra, la unidad frente a la disgregación, la confesionalidad frente a los heterodoxos y la tradición frente a la novedad incierta.

Aunque he confirmado este período como el más sólido de la década, no en vano, hay que decir que se sucedieron trece gobiernos distintos, pero también es cierto que esa inestabilidad gubernamental no provocó alteraciones o sobresaltos en la dinámica institucional. González Bravo pasó a presidir el Consejo de Ministros dando un cambio en la orientación estratégica en favor de acuerdos con el partido moderado. Situó a Luis Mayáns al frente de la cartera de Gracia y Justicia.

En el orden legislativo quiero señalar algunas cuestiones mencionables que darán una clara idea del intervencionismo existente en él. Entre sus primeras medidas se encontraba el Decreto de 9 de diciembre de 1843 sobre designaciones para presidencia de sala del Tribunal Supremo y de las audiencias del reino. El contenido de este Decreto fue un claro ejemplo, de nuevo, de la intromisión del ejecutivo en la carrera judicial. En la exposición de motivos el ministro Mayáns insinuó que el cargo de presidente de sala del Tribunal Supremo no debía recaer inevitablemente según práctica recogida, en el magistrado más antiguo sino en la persona que fuera más válida para el ejercicio de tan difícil responsabilidad⁹³. Por ello se decretó que los presidentes de sala del tribunal supremo de justicia (...) serían nombrados por el ministro; el cargo de presidente de sala se consideraría de ascenso; pero sin hacerse novedad por ahora en los sueldos señalados en la ley de presupuestos y en los casos de vacante de la presidencia del Tribunal Supremo o de regencia, y en el de enfermedad o ausencia del presidente o regente, ejercería este cargo respectivamente el presidente de sala por orden de su numeración si el ministro no dispusiese otra cosa.

Este decreto vino a argumentarse en virtud de la necesidad y sin que supusiera una merma en la capacidad de desarrollo que tenía encomendada la Comisión General de Codificación. El propio ministro Mayáns así lo hizo saber, pero no cabe duda que políticamente supuso un serio revés a las lúcidas y transparentes intervenciones con que se planteó la formación de dicha Comisión. Legalmente no existía laguna alguna para que se desarrollaran los reglamentos referidos a la administración de justicia y creo que objetivamente este decreto desde el punto de vista técnico era claramente innecesario.

Estas órdenes, muy habituales en la década moderada, se fundamentaban sobre esquemas centralizadores, lo cual no deja de ser una intervención política. Si ello se aplica en organismos netamente administrativos se puede razonar su eficacia, pero si esos mismos criterios se trasladan al ámbito judicial se hace de estos unos empleados públicos más con obediencia al gobierno y desvirtuando el tercer poder.

No es justificación, por tanto, la intervención en la justicia en aras de la eficacia sin esconder las consabidas connotaciones políticas. En este afán intervencionista hemos

⁹³ CD. T. XXXI (1843) pp. 379-381.

de encuadrar el Real decreto de 5 de enero de 1844 adicional al Reglamento del Tribunal Supremo de justicia y a las ordenanzas de la audiencia.

Esta actuación reforzó la idea del intervencionismo moderado y el menosprecio a las actuaciones de la Comisión de Códigos pues en la exposición de motivos el ministro Mayáns decía⁹⁴:

“en esta obra se ocupa con inteligencia y actividad la comisión de Códigos; y de esperar es, que responda a la confianza que V. M. le dispensa, aunque la extensión de sus trabajos no permite esperar que su terminación sea tan pronta cual debe serlo el remedio. Apremiando espero la posibilidad de allanar alguno de los obstáculos que entorpecen la pronta administración de justicia, y siendo urgente organizar y dictaminar las atribuciones y deberes (...) y facilitar al gobierno los medios de llevar la obligación que les impone el artículo 47 de la Constitución”.

En su artículo 1º, se creaban las Juntas Gubernativas de los Tribunales formadas por el Presidente del Tribunal Supremo (que era el ministro de Gracia y Justicia tal como se dispondría dos meses después), los presidentes de sala (elegidos directamente por el ministro tal como se contemplaba en el decreto de 9 de diciembre del 43) y los fiscales.

Se produjo el control político absoluto de este nuevo órgano que tendría entre sus facultades y competencias: en primer lugar algunas atribuciones de las audiencias son resueltas por la junta según se recogía en su artículo 2º; en segundo lugar, la separación de subalternos previo informe de la junta; suspensión de los mismos y nombramientos; provisión de interinidades; conocimiento de causas y pleitos pendientes; la imposición de faltas y castigos, vigilancia de conductas; en tercer lugar los presidentes del Tribunal Supremo según se recogía en su artículo 3º ejercerían sobre los magistrados del respectivo tribunal una inspección inmediata y en cuarto lugar en su artículo 11 se derogaban los artículos del reglamento antiguo del Tribunal Supremo de 1835 y cuantas ordenanzas y disposiciones fueran contrarias al presente decreto.

No cabe duda que los criterios que iluminaron a Mayáns fueron los de racionalización e incluso podemos decir que la acumulación de causas se vio aliviada por la expeditiva actuación de este tipo de órganos creados al efecto⁹⁵.

En este mismo sentido cabe mencionar la Real orden de 5 de enero de 1844 que aportaba aclaraciones sobre lo legislado en el decreto de 9 de noviembre de 1843, relativo a la antigüedad de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo. En razón de su contenido se restauraron a los magistrados que fueron separados en la etapa anterior y aseguró que los fiscales del Tribunal gozarían de la antigüedad de sus primeros

⁹⁴ CD. T. XXXII (1844) pp. 17-19.

⁹⁵ J. M. Trillo, *Oración inaugural que en la solemne apertura de la Audiencia Territorial de Zaragoza, verificada en el 2 de enero de 1845*, Imprenta Nacional, 1845, Zaragoza, pp. 14-15.

nombramientos. Fueron nombrados como fiscales Joaquín Francisco Pacheco⁹⁶ y Pedro Jiménez Navarro⁹⁷, los dos moderados.

Siguiendo en una órbita de tutela de la justicia, el 7 de marzo de 1844 estudiaba la comisión unas Bases generales que posteriormente analizaba el gobierno⁹⁸. Algunos principios proclamados en sus apartados fueron en primer lugar la atribución de la Presidencia del Tribunal Supremo al ministerio de Gracia y Justicia y que perduró hasta el 22 de diciembre de 1850 en que se eligió a José María Manescau y en segundo lugar, en su aspecto orgánico: el Tribunal Supremo estaría dividido en dos secciones, denominadas de casación y de justicia. La primera conocería de los recursos de casación y de las cuestiones de competencia entre Tribunales que no tuvieran otro superior común; a la segunda compete: en materia criminal, las causas contra altos cargos, y en el orden civil, el pronunciamiento de la sentencia definitiva en los pleitos en que se haya dejado sin efecto la anterior, por contraria a derecho.

En este mismo período, y con el precedente del decreto adicional al reglamento, motivado todo ello, sin duda por el inicio de un nuevo período político provocado por Narváez, tras la insurrección militar que desbancó a Espartero, se preparó el Proyecto de Ley orgánica de los tribunales 15 de abril de 1844.

Dicho Proyecto se redactó desde el espíritu de las bases generales comentadas con anterioridad y con el deseo de alterar algunos puntos derivados de la Constitución de 1837. Tuvo como gran artífice del texto a José de la Peña Aguayo, que, en su opinión, no procedía someterlo a la consideración y discusión de las Cortes porque “peligraba la unidad de pensamiento, de redacción y de orden que reunía este trabajo en relación a otros”, y lo elevó directamente al gobierno el 15 de abril de 1844 para su información.

En el título I que se ocupaba de la planta de los tribunales⁹⁹ decía en su punto primero que es presidente nato de las dos secciones del Tribunal Supremo, el ministro de Gracia y Justicia.

Con ello se deducía nuevamente el control político que se ejercía sobre el alto tribunal. En el capítulo VIII, que trataba “del nombramiento, dotación, jubilación, sustitución, traslación de los magistrados y jueces” se determinaron las condiciones para nombrar en referencia al tiempo que se exigía para asumir los cargos judiciales (...). Se

⁹⁶ Fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo el 30 de julio de 1843, dimitió a petición propia en 1846 y se le volvió a nombrar Fiscal del alto Tribunal el 5 de febrero de 1847 para un año más tarde cesar. Participó activamente en política desde su condición de diputado en bastantes legislaturas adscribiéndose políticamente al sector más puritano del partido moderado, luego se integró en la Unión Liberal (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4830, n. 9600, ver índice de magistrados)

⁹⁷ Fue nombrado Fiscal del Tribunal el 9 de diciembre de 1843 en virtud del Real Decreto de esa misma fecha, y desde el 11 de septiembre de 1844 se convirtió en fiscal único. El 5 de diciembre de 1836 se emitió un informe por parte de la Junta para preparar arreglos de tribunales que decía “merece continuar sirviendo la plaza en el Supremo Tribunal de Justicia, cuando haya promoción y el gobierno lo tenga a bien”, fue diputado en una legislatura y senador vitalicio (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4503, n. 3964 ver índice de magistrados).

⁹⁸ ACGC. (1844) l. 3 de enjuiciamiento criminal, c. 3.

⁹⁹ ACGC. (1844) l. 3 de enjuiciamiento criminal, c. 9, d. 1.

le otorgaba al Tribunal Supremo la facultad de presentar un informe previo al traslado de cualquier funcionario judicial.

Es curioso observar en el contenido extenso de este Proyecto que ningún capítulo, de los dieciséis que existían, se refería a la “inamovilidad” como tal y sí al funcionamiento interno, con lo que cabría deducir que esta materia se daba como entendida como principio constitucional o también cabía el análisis, que por omisión se quisiera hacer uso y abuso de esta discrecionalidad por parte de los gobernantes políticos. Nos quedamos con la primera hipótesis pues en el haber de Mayáns estuvo la reposición de los “cesantes” en sus antiguos destinos después del fervor progresista y la restitución en la carrera profesional desde el desempeño de sus puestos en la estructura judicial.

En su capítulo catorce, referido a la responsabilidad judicial dijo “la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo en materia penal que conlleve separación del destino lo valoraría y sugeriría el Senado”. Con ello se volvía a dar un paso atrás en relación a la independencia judicial.

Este mismo año debemos señalar la Real orden de 27 de abril de 1844 que dictaba reglas sobre entrega de jurisdicción en cuanto se produjeran situaciones de trasladados y ascendidos¹⁰⁰ y que ponía de manifiesto, que desde 1839 siguieron ocupando plaza “ilegalmente” algunos magistrados, que ya en su momento fueron relevados y que por el contexto de revolución política posterior no quisieron entregar su jurisdicción de manera efectiva no suscribiendo por escrito su renuncia en los términos en que se les exigía.

El 6 de junio de 1844 por Real decreto¹⁰¹, se creó un alto cuerpo consultivo, a quien competía entender en los asuntos de contienda de jurisdicción y de atribuciones (se esbozó un escenario inicial en la jurisdicción contenciosos-administrativa) donde existiría un equilibrio entre los departamentos de Gracia y Justicia y de Gobernación para tratar de razonar y definir ambos campos de actuación. Se continuó esta disposición con otra el 4 de junio de 1847¹⁰² en este mismo sentido y que evidenciaba que la independencia judicial estaba cuestionada.

Es preciso analizar que finalizando el año 1844¹⁰³, se formó una comisión parlamentaria para redactar una reforma constitucional. En cuanto a las competencias del Senado, suscitó no poca polémica, la que hacía referencia al juicio de los ministros en cuanto fuesen acusados por el Congreso de los Diputados, tal y como se contempló en la Constitución de 1837. En cuanto a otras competencias judiciales del Senado, el senador Seijas Lozano participó en la discusión manifestando la necesidad de clarificar

¹⁰⁰ CD.T. XXXII (1844) pp. 639-640

¹⁰¹ CD.T. XXXII (1844) pp. 742

¹⁰² CL. T. XLI (1847) pp. 92-96

¹⁰³ DSC. (1844-1845) pp. 285-292. En A. Sevilla *Constituciones*, I pp. 359-370, el dictamen de la comisión.

la jurisdicción en aras a la independencia judicial¹⁰⁴, y separándose de experiencias sobre modelos que confunden más que ayudan.

En el capítulo de nombramientos y ceses, sólo observo un caso de politización como fue la solicitud de jubilación a petición propia que hizo Ramón Macía Lleopart y que seguro tuvo que ver con razones de una nueva etapa política¹⁰⁵. Fueron nombrados Andrés Crespo Cantolla (5 de enero), Francisco Entrambasaguas (12 de enero) Manuel Barrio Ayuso (9 de febrero).

Y cesaron en sus destinos: Andrés Crespo Cantolla: renunció por motivos de salud el 26 de enero aunque su adscripción política pudiera dar que pensar por su condición liberal-constitucionalista¹⁰⁶, José María Tejada renunció el 6 de enero, Antonio Fernández del Castillo renunció el 10 de febrero y Juan Argüelles se jubiló a petición propia el 14 de junio.

El año 1845 comenzó con la ley de 8 de enero, como consecuencia de las políticas moderadas, que reorganizó los ayuntamientos y diputaciones bajo la dirección inmediata de personas nombradas por el gobierno. Los alcaldes eran designados por el rey y en abril se crearon los consejos provinciales (órgano consultivo y tribunal contencioso-administrativo). De paso se otorgaron a los jefes políticos toda clase de competencias.

En este clima se promulgó la Constitución de 23 de mayo de 1845, concediendo amplios poderes a la Corona y manteniendo casi en su integridad el deseo de controlar el sistema¹⁰⁷ llegando en ocasiones a la acción represora en algunas materias. Recogía los arts. 64 y 66 de manera idéntica a la Constitución de 1837 en materia de independencia e inamovilidad y postergaba a una futura ley de organización de tribunales la solución de los problemas en este sentido.

En el orden normativo, hubo una ausencia general de tarea en relación a la organización judicial, más en concreto, no existió ninguna disposición referida al Tribunal Supremo muy sustancial. Destaco la Real orden de 12 de julio de 1845¹⁰⁸ mandando que el presidente del Tribunal Supremo dispusiera la distribución entre los magistrados del mismo para su examen, las causas que hubieren remitido las audiencias de la península, correspondientes al semestre vencido en fin de junio próximo pasado. El objeto era conocer la celeridad de los procedimientos y la eficacia judicial.

¹⁰⁴ DSC. (1844-1845) p. 589: “¿ por qué establecer esa institución que es exótica entre nosotros y que sería mal mirada porque no tiene el asentimiento de la Nación, que no es necesaria, ni está aconsejada por la reflexión, ni reclamada por las circunstancias?”. Existieron otras posiciones que reconvenían en no interferir la tarea del Tribunal Supremo y no enajenarla esa función (en ese sentido se pronunció el diputado Perpiñá).

¹⁰⁵ Así lo deduzco del análisis de su trayectoria judicial en su expediente personal (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4576, n. 4938, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹⁰⁶ Durante el Trienio liberal 1820-1823 fue jefe político de León (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4328, n. 1546, ver índice de magistrados).

¹⁰⁷ M Artola, *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, Alianza Editorial, Madrid, 1973 pp. 212 y ss.

¹⁰⁸ CD. T. 33 (1845) p.47

En el capítulo de nombramientos anotamos el de Pedro Jiménez Navarro el 14 de enero y los ceses de Demetrio Ortiz que falleció el 12 de enero y el de Ángel Casimiro Govantes el 15 de agosto al ser nombrado senador.

La constatación del avance acometido por el ministerio hasta el año 1846 viene avalado por el Presidente del Tribunal Supremo Nicolás M. Garellly que en su informe de apertura de tribunales el día 2 de enero sobre el año 1845 dijo que no se produjo ninguna reclamación de cohecho ni prevaricación contra juez o magistrado alguno¹⁰⁹ y que la intachable actitud de los jueces era un claro ejemplo para los demás estamentos del Estado.

Finalizó un mandato -el de Mayáns- en el que algunos autores significaron el deseo de éste en el cumplimiento de los principios programáticos declarados constitucionalmente e incumplidos con asiduidad¹¹⁰. Con independencia de las formas utilizadas zanjaba el período con un balance positivo en la eficacia judicial, pero a mi entender con serias reservas y temores a la independencia judicial y a la división de poderes efectiva.

El final del período político encarnado por González Bravo fue un cúmulo de conflictos e insurrecciones políticas cuya mención más significativa en nuestro trabajo fue la detención de Manuel Cortina y Pascual Madoz -líder de la oposición- y fundamentales miembros que desestimaron su participación en la original Comisión de Codificación.

Con la presidencia del gobierno del general Narváez se atisbaba una mejora de la situación; en este sentido se expresaba Lorenzo Arrazola,¹¹¹ ministro cesante en 1838 de Gracia y Justicia y Garellly, Presidente del Tribunal Supremo. La Constitución de 1845 supuso un reconocimiento de la de 1837, con algunas modificaciones y el asentimiento total del liberalismo, aunque como bien señaló algún autor¹¹²:

“la carta del 45 pudo vivir mientras Narváez mantuvo en sus manos el control absoluto del partido moderado. Cuando el duque de Valencia fue eliminado, su ley fundamental se convirtió en verdugo de la institución que debía defender”

De la misma idea era Donoso Cortés, que el 17 de septiembre de 1849 escribía “Narváez es la columna que sostiene el edificio, el día que la columna caiga, el edificio entero se desplomará”

¹⁰⁹ N. María Garellly. *Discurso pronunciado el 2 de enero de 1846 en la apertura del Supremo Tribunal de Justicia*, Imprenta Nacional, Madrid, p. 5: “ En lo más recio de la borrasca tuvo presente la magistratura que su ministerio no está como otras ramas de la administración, sujeto al empuje de las oleadas que arrastran en pos de sí, las oscilaciones políticas (...) y firme en estos principios, preservase en la totalidad del contagio general (...)”.

¹¹⁰ J.L. Comellas, *Los moderados en el poder* p. 190

¹¹¹ L. Arrazola *Discurso inaugural pronunciado en la solemne apertura de la Universidad Literaria de Madrid el 1 de noviembre de 1845*, Madrid, 1845 pp. 8-9.

¹¹² D. Sevilla, *Historia política de España (1800-1973)* Editora Nacional, Madrid, 2ª ed., 1974, v. I.

El Proyecto de Ley de 12 de junio¹¹³ de 1846, que fue solo un proyecto, daba la potestad al Presidente del Tribunal Supremo (recordemos que era el ministro de Gracia y Justicia) de iniciar un procedimiento de traslado de cualquier magistrado del Tribunal Supremo¹¹⁴.

Muy esclarecedor me parece el Real decreto de 31 de julio de 1846¹¹⁵ suprimiendo la Comisión de Códigos creada por decreto del gobierno provisional de 1843. El objetivo era: acabar con un grupo de trabajo con relevantes miembros de ideología progresista y de otro lado deja manos libres al gobierno para actuar con discrecionalidad en este terreno. Los argumentos que se esgrimieron fueron una cortina de humo:

“cuando en cerca de tres años no ha podido aun presentar al Gobierno mas que una parte de los proyectos que se la confiaron (...) Indagando las causas que hayan influido en esta lentitud, de presumir es no sea otra que el número excesivo de sus vocales (...)”.

Curiosamente no había transcurrido ni mes y medio y el mismo ministro: Joaquín Díaz Caneja creó una nueva Comisión de Codificación. Lo que antes era innecesario ahora era útil, y la maniobra sólo escondía la intención de formar una Comisión más manejable en número y en ideología, así se confirmó con la presencia de destacados moderados en su composición: Florencio García Goyena¹¹⁶, Pedro Jiménez Navarro¹¹⁷, Manuel Seijas Lozano¹¹⁸ y un progresista como Claudio A. de Luzuriaga¹¹⁹. La actividad de esta comisión tuvo una duración aproximada de siete años, tiempo verdaderamente largo y lleno de estabilidad para cumplir con importantes cometidos.

La vida política de esos momentos era de transición y acercamiento a los progresistas en la medida que éstos aceptaran la reformulación de principios efectuada en 1845 y se hizo a través de los puritanos, a caballo entre 1846 y 1847. Las elecciones del 46, ofrecieron a los progresistas una oportunidad de participación efectiva en el gobierno.

¹¹³ Analizado en el capítulo: Estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Supremo.

¹¹⁴ Necesitaba de un previo informe en la Junta de Gobierno de la sala de justicia del Tribunal Supremo.

¹¹⁵ Colección Legislativa. T. XXXVIII (1846) pp. 130-131.

¹¹⁶ Fue liberal pero evolucionó a posiciones moderadas a la muerte de Fernando VII; abandonó el 7 de septiembre de 1840 el Tribunal Supremo por el rumbo que tomaron los acontecimientos del momento, se negó a reconocer al gobierno del momento y a reconocer ciertas facultades del poder ejecutivo; presidió el breve gobierno moderado (22 días) formado en septiembre de 1847 en el que además desempeñó la cartera de Gracia y Justicia (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 581, n. 70, ver índice de magistrados).

¹¹⁷ Fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo a la llegada de la década moderada y posteriormente designado magistrado del mismo tribunal (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4503, n. 3964, ver índice de magistrados).

¹¹⁸ Fue ministro de distintos gobiernos moderados, presidente del Congreso, del Senado y del Consejo Real, fue procurador en Cortes cuando el levantamiento de las Juntas revolucionarias que culminaron en el Motín de la Granja, fue declarado cesante por su ideología conservadora, (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 606, n. 1961, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹¹⁹ Formó parte de la Unión Liberal, estaba considerado del ala derecha del progresismo, siendo diputado por Logroño en las Cortes constituyentes tuvo que pedir autorización a las Cortes en 1855 para aceptar el cargo de Presidente del Tribunal Supremo (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 568, n. 107 ver índice de magistrados y apéndice documental).

Los del exilio activaron sus fuerzas y facilitaron en el seno de los progresistas una nueva facción: los demócratas.

El 4 de junio de 1847, y a través de un Real decreto,¹²⁰ volvieron a ponerse de manifiesto cuestiones competenciales de jurisdicción y la novedad radicó en su artículo 1º, cuando se le facultaba al Rey para dirimir esas competencias que se produjeran entre las autoridades administrativas y los tribunales ordinarios y especiales.

El Real decreto de 8 de octubre de 1847 mandando por el ministro de Gracia y Justicia que sometiera a la Real aprobación y presentara a las Cortes un proyecto de ley sobre el nombramiento, responsabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados fue muy esclarecedor para situar el estado de interés sobre este tema. El Presidente del Tribunal Supremo, Nicolás Mª Garelly, en su intervención de apertura del Tribunales en 1847, ya advirtió un precario funcionamiento de la estructura judicial¹²¹:

“la magistratura española sigue llenando sus deberes en la administración de justicia; venciendo las dificultades que produce la complicación de nuestras leyes vigentes; ejerciendo en la parte criminal un peligrosísimo arbitrio, pero que la situación ha hecho necesario dando curso al increíble cúmulo de procesos que han aglomerado las circunstancias extraordinarias de estos tiempos, sin que en el catálogo interminable de su estadística se advierta morosidad digna de censura”

Y a la vez puso de manifiesto el marasmo existente de jurisdicciones especiales a la vez que una flagrante introducción de la esfera gubernativa en la judicial y así decía:

“son raros los casos en que el Tribunal y su sala de gobierno, al reconocer la estadística de causas que han sometido a su examen todas las Audiencias, hayan encontrado retrasos en su actuación. Porque el dimanante de competencias reconoce su origen en la multitud de disposiciones encontradas acerca de fueros privilegiados; disposiciones que reclaman una medida fundamental que haga el conveniente descuido, reduciendo aquellos a lo que diga relación con las obligaciones inherentes al instituto de los que hayan de gozarle, sin espíritu de rivalidad y de una mal entendida prerrogativa”¹²²

Con la vuelta de Narváez a la presidencia del gobierno y Arrazola al ministerio de Gracia y Justicia por tercera vez, sólo cuatro días después firmaba un Real decreto¹²³ con una extensa exposición donde tras hacer un canto a la justicia como un sagrado encargo que no debía perjudicar a los individuos por dejadez o ignorancia o por no aplicar rectamente los principios justos, realizaba una crítica al período anterior:

¹²⁰ Cl. T. 41 (1847) pp. 92 y 93.

¹²¹ N. M. Garelly, *Discurso pronunciado el 2 de enero de 1847 en la apertura del Supremo Tribunal de Justicia por su presidente...* Madrid. Imprenta Nacional p. 17.

¹²² *Ibidem*, pp. ss.

¹²³ CL.T. XLII (1847) pp. 224-227.

“en las nuevas reformas las circunstancias no han permitido todavía bajar la mano a cubrir cumplidamente este grande y trascendental vacío, lo cual, en concepto del ministro que suscribe, no admite dilación”

Seguidamente se amparó en el cumplimiento constitucional para proteger a la magistratura y decía:

“el ministro que suscribe está convencido hasta por propia experiencia de que sólo por una ley podrá darse estabilidad definitiva a la magistratura (reconocimiento expreso de que no ha existido), garantizar a la sociedad contra los posibles abusos de este alto encargo, y asegurar el acierto de la elección de jueces y magistrados por la determinación y examen de las circunstancias de todo punto indispensable, y que hayan de concurrir siempre en los nombrados”

Se remitía a su etapa de ministro y declaraba válido el decreto de 29 de diciembre de 1838 donde se valoraba fundamentalmente la antigüedad y la irrefutable trayectoria profesional del magistrado. Con un fuerte anhelo intervencionista decretó en su artículo 1º:

“un ministro de Gracia y Justicia someterá a una aprobación, y presentará a la de las Cortes en las primeras sesiones de la próxima legislatura un proyecto de ley que fije definitivamente las circunstancias y requisitos necesarios para ser nombrado juez o magistrado, los casos de responsabilidad de estos y su inamovilidad, conforme a los citados artículos constitucionales”

Y reiteraba la vigencia del decreto de 1838 en todo lo demás.

El Proyecto de Ley de organización, competencia y facultades de los tribunales del Fuero General de 21 diciembre de 1847 fue aprobado por la Comisión¹²⁴ y decía en su título II relativo al régimen interior de los tribunales y en capítulo V referido a la inamovilidad judicial:

“ningún magistrado podrá ser depuesto de su destino sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino en virtud de corrección disciplinar, por auto judicial en proceso criminal pendiente, o de orden del rey, cuando este lo mande juzgar por el Tribunal competente”.

Se introducía una importante aportación en defensa de la independencia judicial a instancias de Domingo María Vila.

El año de 1847 se cerró en el capítulo de nombramientos del Tribunal Supremo, con el de Lorenzo Arrazola el 17 de abril, y el 17 de septiembre cesó en su actividad al ser nombrado ministro de Gracia y Justicia. En el terreno de las reposiciones, tenemos la de Florencio García Goyena el 4 de octubre y la de Joaquín Francisco Pacheco¹²⁵ como

¹²⁴ ACGC. (1847) l. 12.

¹²⁵ Fue del sector puritano del partido moderado, luego se integró en la Unión Liberal, diputado en diferentes legislaturas (AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4830, n. 9600, ver índice de magistrados).

fiscal el 5 de febrero, los dos moderados. No se observa ninguna alteración más en el alto tribunal como derivación de intervención directa del poder político.

Un cierto auge en el sector progresista que obedecía a una reorganización interna, se produjo en 1848. Algunas concesiones del gobierno, sin provocar modificaciones en el tema constitucional ayudaron a avanzar en determinadas direcciones: modificación de las leyes de ayuntamientos y diputaciones, revisión del censo electoral y disolución de las Cortes.

Pero un sector del progresismo se desmarcó de este espíritu de conciliación que intentó el consenso en temas de estado, conscientes de su importancia los partidos políticos. Los demócratas encarnaron esa facción extrema y redactaron un programa cuyos puntos esenciales fueron la libertad de conciencia, la soberanía nacional, el sufragio universal, el sistema electoral y la democratización de algunos ámbitos de la justicia e introducción de los jurados.

Con el deseo de restaurar a los funcionarios judiciales separados de sus puestos desde 1820, el ministro Arrazola desarrolló la Real orden de 16 de enero de 1848¹²⁶ que dictaba disposiciones para que todo funcionario del orden judicial, suspenso o separado de su destino por motivos políticos obtuviera la reparación debida en los términos que se prevenían en tal norma. Esta puso de manifiesto que la politización afectó a todos los estamentos de la administración judicial, incluyendo a los estrictamente funcionarios. Esta orden se completó con el Proyecto de Ley sobre nombramiento, responsabilidad y jubilación de jueces y magistrados que se presentó a las Cortes el 9 de marzo de 1848¹²⁷.

Se siguió insistiendo en estos temas trascendentales a través de este Proyecto de Ley¹²⁸ que contenía siete títulos y cuyos objetivos básicos eran la fijación de los requisitos para el nombramiento y ascensos de los magistrados y jueces, la inamovilidad de jueces y magistrados que no podrían ser depuestos sino por sentencia ejecutoriada ni suspendidos, sino en virtud de corrección disciplinar por auto judicial en causa pendiente, o de orden del Rey cuando este lo mandare juzgar por el Tribunal competente y las traslaciones sólo se admitían por propia voluntad del funcionario.

Con independencia de las pretendidas intenciones descritas en los textos legales, 1848 fue un año de confusión orgánica del ejecutivo. Técnicamente hubo importantes logros y desarrollos pero en el terreno práctico Arrazola se benefició de una oleada de fervor popular en pos del orden público aún a costa de menoscabar preceptos y principios contemplados en la Constitución.

Consideraba el autor que sólo a través de una ley podría darse estabilidad a la magistratura, garantía a la sociedad contra los posibles abusos de este alto encargo.

¹²⁶ CL. T. XLIII (1848) p. 120

¹²⁷ Este proyecto no se tradujo en la promulgación de la ley.

¹²⁸ Fue redactado por los señores: Roncali (secretario), Hurtado, Herrera, González Romero (Presidente), Vahey, Tames y Moreno. ACD (1848) serie general, l. 72, n. 49

Reconoció que después de once años las circunstancias no habían permitido hacerlo y daba por hecho que había que poner un remedio inmediato.

El título II del Proyecto de ley de 9 de marzo de 1848 llevaba por enunciado: “de la inamovilidad de jueces y magistrados” y decía que las plazas de magistrados y jueces se proveerían en propiedad por el ministerio de Gracia y Justicia a los tres meses, cuando más, de haber ocurrido la vacante. Los nombramientos se publicarían en la Gaceta del gobierno a los 30 días, cuando más, de haberse verificado, con un extracto suscrito, pero exacto y circunstanciado, de la carrera y méritos de los nombrados.

Y más adelante se declaraba que ningún juez ni magistrado podría ser depuesto de su cargo sino por sentencia ejecutoriada. Tampoco podría ser suspendido sino en virtud de corrección disciplinaria por auto judicial en causa pendiente, o de orden del rey cuando éste lo mandara juzgar por el tribunal competente.¹²⁹

En la disposición transitoria, en su artículo 35 se decía que “desde la promulgación de esta ley se reconocían nombrados en propiedad, y por lo tanto inamovibles, al tenor de lo dispuesto en el título 2º, los jueces y magistrados en actual servicio que reunieran los requisitos y circunstancias designadas por la misma, o los que se requerían por las disposiciones vigentes al tiempo de su nombramiento (...).

Sobre los expedientes que ofrecieran dudas, se oiría a la sección de Gracia y Justicia del Consejo Real y en último término, sobre todo, si hubiere reclamación de parte se someterían a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, el cual motivaría su dictamen”. Se trasladaba una pugna competencial entre el Consejo Real y el Tribunal Supremo sobre quién tenía la última decisión¹³⁰.

Se promulgó con fecha 19 de marzo de 1848 el Código Penal justo una semana antes de la revolución que se estaba gestando y que fracasó¹³¹ ante la hegemónica figura de Narváez.

En plena efervescencia revolucionaria Lorenzo Arrazola promulgó una Real orden (26 de abril) en la que se disponía que los jefes políticos en primera instancia y el gobierno en ulteriores recursos entendieran en los pleitos donde se inhibían los tribunales ordinarios¹³². La razón que se daba para ello, era que “habiéndose suscitado algunas dudas acerca del curso que debían dar los tribunales ordinarios a los pleitos, de cuyo conocimiento se hubieran inhibido al declarar que correspondía a la Administración y según informaba el Consejo Real en ese sentido”.

¹²⁹ El art. 28 trata de evitar las jubilaciones voluntarias –prácticas muy utilizadas- si no se han cumplido 60 años y se está en buenas condiciones físicas.

¹³⁰ El art. 39 establece que es el gobierno el que queda autorizado para resolver cuantas dudas y dificultades ocurran en la ejecución de esta ley, bajo el punto de vista de reparar agravios, y de conciliar con lo determinado por la misma el principio de respetar, hasta donde ella lo permita, los derechos adquiridos.

¹³¹ Algunos achacaron este fracaso al escaso respaldo de algunos miembros progresistas y a la mala organización que conllevó una escasa movilización popular.

¹³² CL. T. XLIII (1848) p. 496.

Un exponente del estado de la administración judicial se verificó con la Real orden de 4 de julio de 1848, dictando medidas para la rápida sustanciación de las causas civiles y criminales y para todo lo concerniente a la pronta administración de justicia¹³³ y donde el ministro Arrazola espoleó al estamento judicial a una celosa y diligente práctica de sus obligaciones.

El 28 de septiembre de 1848 -en un afán claro de control- se promulgó el Real decreto, creando una Junta suprema en Madrid para el arreglo de Tribunales y se les señaló sus atribuciones. El gobierno pretendía uniformar la jurisprudencia y salvar las permanentes disfuncionalidades entre las instituciones políticas y las judiciales, pero subyacía un temor al desencuentro entre los principios políticos que imperaban y las decisiones de los jueces y magistrados, en ese sentido decía el ministro Arrazola:

“hay siempre una cuestión, Señora, en que nunca sobran las precauciones de acierto y de justicia, y es la calificación de personas, sobre todo cuando las oscilaciones políticas ponen a cada paso en cuestión la reputación y aptitud de los que sirven al Estado, y cuando al cabo ha de llegar un momento en que sea una verdad aplicada la inamovilidad judicial y la reparación de perjuicios personales en los que por culpa de los acontecimientos y no suya, se hallan alejados del servicio público”

Existía, por tanto, un deseo de involucrarse en la acción judicial a través de las personas que protagonizaban dicha misión. Pese a que 1848 fue un año de importantes novedades normativas, ello no afectó de manera directa a los cambios de magistrados en el alto tribunal, produciéndose sólo el cese de Joaquín Francisco Pacheco.

El temor entre los sectores moderados y la división política entre ellos fue centrar el debate de 1850 acerca de los llamados “fulanismos”, y afrontar los problemas serios del país: recuperación económica, agilidad administrativa, corrupción oficial,... En el terreno legal referido a la justicia, nos encontramos en este año como destacable el decreto de 4 de marzo con la incorporación de nombramientos genéricos sin asignación de sala específica¹³⁴ y la orden de 5 de septiembre que intentó que el Tribunal Supremo velara por el cumplimiento de las formalidades y los procedimientos civiles y criminales¹³⁵.

El 23 de noviembre de 1850 el ministro Arrazola, en un gobierno ultramoderado liderado por Bravo Murillo, leyó un Proyecto de Ley constitutiva de los tribunales del Fuero Común a las Cortes, y que fue retirado el 22 de enero de 1851, pero que por su interés merece algún comentario. Fue un Proyecto presentado al Senado y que no obtuvo el respaldo necesario, y que resumió dos ponencias elaboradas por el Sr. García Gallardo y Ortiz de Zúñiga.

¹³³ CL. T. XLVII (1849), pp. 346 y ss.

¹³⁴ Lo interpreto en clave política para abundar en la discrecionalidad de los cargos y destinos.

¹³⁵ Más analizado en el capítulo: Estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Supremo.

Este era un proyecto con grandes novedades y con profundo desarrollo en el apartado que aquí nos ocupa¹³⁶. Fue objeto de aportaciones del ministro y por eso fue considerado como un proyecto de gobierno que constaba de once títulos y otro adicional¹³⁷.

En el capítulo XVI se abordó la materia de la responsabilidad en las líneas ya trazadas el 9 de marzo de 1848. El Tribunal Supremo se erigió en máximo órgano jurisdiccional en la determinación de responsabilidades y en lo referente a sus magistrados, sería el gobierno el que las determinara, con la merma de independencia ya observada en otras etapas políticas.

Y un capítulo después se abordó la inamovilidad judicial y decía:

“ningún magistrado ni juez podrá ser depuesto de su destino sino por sentencia ejecutoriada penal o correccional; ni suspendido sino en virtud de corrección disciplinar, por auto judicial en proceso pendiente criminal o correccional, o de orden del Rey; cuando éste lo mande juzgar por el Tribunal competente”

Se determinaron los supuestos en que había lugar a la formación de proceso penal o correccional y las penas que podían imponerse en este último. Se aclaraba que no se oponía a la inamovilidad judicial la traslación a solicitud de parte ni la que se verificara con acuerdo del Consejo de Ministros, por motivos de mejor servicio público, en la misma categoría. Como se aprecia no existen aportaciones sustanciales con respecto a documentos anteriores. Y la parte que seguidamente desarrollaba es la que más nos interesa:

“los magistrados del Tribunal Supremo pueden ser separados a propuesta del gobierno y con aprobación del cuerpo colegislador a que pertenecieren, si fueren senadores o diputados, en otro caso, con aprobación del cuerpo colegislador al que pertenecieren (Senado o Congreso) y si no tuvieran condición política alguna, sería el Senado el que lo determinaría”

Finalmente, se disponía que el juez o magistrado sometido a juicio percibiría durante él, la tercera parte de la asignación del cargo, conservando la acción a la totalidad si resultare absuelto libremente y con declaración honrosa.

Hay un singular avance en esta disposición que no dejaba sólo en manos del ejecutivo la discrecionalidad de separar, sino que necesitaba de la ratificación de las Cortes según el origen del miembro perteneciente al alto tribunal, para dar contenido a tal atribución.

El título X se refería al ministerio fiscal, del que decía:

“constituye una magistratura especial, con organización propia e independiente, aunque agregada a los Tribunales, como parte integrante de ellos,

¹³⁶ ACGC. (1850) l. 4 y 5 de organización de tribunales.

¹³⁷ Diario de Sesiones del Senado, de 6 de marzo de 1865.

para mejor promover la administración de justicia y sujeta por lo tanto a la disciplina general de los mismos”

Sus miembros serían de libre nombramiento por parte de la Corona, amovibles y responsables tal como se desprendía del texto.

Este proyecto no prosperó quizás por su ambicioso planteamiento y por lo costoso de ponerlo en marcha¹³⁸, pero supuso un enfoque nuevo e interesante para reflexiones futuras.

El panorama judicial mostró que en el orden de designaciones y nombramientos el año 1850, no fue un año de alteraciones sustanciales en el alto tribunal: los cuatro ceses que se produjeron fueron por fallecimiento y a ello obedecieron por tanto los nombramientos correspondientes.

En el escenario político, el año 1851 se inició con la llegada de Juan Bravo Murillo a la presidencia del Consejo de Ministros, rodeado de una cierta popularidad. Formuló un programa orientado a conseguir la paz interior de la nación, la autoridad ejercida dentro de la ley, la consecución de la moralidad pública y la adaptación del aparato administrativo a los nuevos tiempos.

Quiero detenerme especialmente en uno de los objetivos fundamentales por las repercusiones en el orden judicial que tuvo: la reforma administrativa. Se pretendió con ella acabar con un mal endémico: la politización de la administración pública. Enfrentarse a este reto suponía, que las proclividades políticas no debían contar entre las virtudes exigibles a los administradores, si se quería evitar el ritmo creciente de empleados públicos cesantes.

Bravo Murillo trató de imponer un criterio apolítico en la provisión de puestos de la administración, siempre desde criterios profesionales (los ascensos se determinarían por riguroso orden de antigüedad o por los servicios extraordinarios previamente reglamentados y los ceses solo tendrían lugar por jubilación o por manifiesto incumplimiento del deber).

Sustituido Arrazola el 14 de enero de 1851 por Ventura González Romero a instancias de Bravo Murillo, y en aras a la consecución de la profesionalidad anteriormente mencionada en la carrera judicial se promulgó el Real Decreto de 7 de marzo de 1851 dictando reglas para la provisión de las plazas de la magistratura, judicatura y ministerio fiscal del fuero común, y sobre suspensión, traslación y jubilación de los funcionarios de dichas clases. Aunque algunas disposiciones remarcaban una acentuada despolitización en cuanto se repusieron funcionarios separados o suspensos en épocas anteriores, se dejaron portillos abiertos a continuar fiscalizando conductas políticas y trayectorias ideológicas¹³⁹.

¹³⁸ F. de Cárdenas “ El Derecho moderno”, *Revista de Jurisprudencia y Administración*, t. IX, 1850 pp. 226 y ss.

¹³⁹ Así se desprende de la afirmación “ exigencia de aptitud, integridad y buena conducta posterior” que permitía seleccionar con criterios políticos.

En su artículo 13 señalaba¹⁴⁰:

“se formarán y publicarán también en la Gaceta escalafones generales y especiales por categorías de los magistrados, jueces e individuos del ministerio fiscal bajo el doble concepto de la antigüedad por la fecha de los respectivos nombramientos, y de los años de servicio de cada interesado”

Y en los aspectos referidos a la movilidad se señalaba en el artículo 15:

“el ministerio de Gracia y Justicia, para proponer la cesación de magistrados y jueces hasta tanto que se publique la ley orgánica del orden judicial y tenga cumplida ejecución el artículo 69 de la Constitución del Estado, harán instruir expediente gubernativo, oyendo al jefe de quién dependa el interesado y a la sala de gobierno del Supremo de Justicia, la cual podrá oír a su vez instructivamente de viva voz o por escrito si lo estima oportuno, al mismo interesado. Mandando instruir este expediente, podrá ser suspenso por Real Orden el individuo sobre quien recaiga dicha providencia, si así lo exigiere la gravedad e importancia del caso. Si dentro de tres meses, contados desde la fecha de la Real Orden de suspensión, no se resolviese el expediente gubernativo, se entenderá alzada aquella, y volverá el interesado a ejercer sus funciones sin necesidad de orden especial al intento”

De este modo la sala de gobierno del Supremo de Justicia se erigía en árbitro para ceses y jubilaciones, y así quedaba ratificado en su artículo 17 que sería el ministerio de Gracia y Justicia -a instancias de la sala- el que actuaría en consecuencia. En el artículo 20 también se contemplaba respecto a la cesación, jubilación o traslación de los individuos del ministerio fiscal, que se oiría previamente al fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.

Por primera vez se observaba un claro intento de desvincular lo político de lo judicial cuando en el artículo 21 se delimitaba que la actuación de los jueces debía abstenerse de intervenir e influir en las elecciones de candidatos políticos con la pena si existe incumplimiento de lo aquí dispuesto de separar a dicho juez de sus funciones.

Es conveniente aquí apuntar, que desde 1850 la figura del Presidente del Tribunal Supremo no estaba vinculada directamente al ministro de Gracia y Justicia y así tenemos que el 22 de febrero de ese mismo año se eligió a José María Manescau -miembro de la Comisión de Codificación- para ocupar la más alta dignidad del alto tribunal. En este año los cambios que se produjeron en el Tribunal Supremo se correspondieron con situaciones de “normalidad funcional” ya que el 25 de febrero se jubiló José María Tejada. Se designó el 25 de abril a Juan Antonio Barona magistrado del Tribunal Supremo por fallecimiento de Gregorio Barraicoa, y se nombró el 9 de mayo a José de Mier Salcedo, presidente de sala, en sustitución de Juan Antonio Castejón que también se jubiló. Se incorporó el 9 de mayo para ocupar el lugar de Tejada, Miguel Vigíl de Quiñones como miembro del Tribunal Supremo. Componían

¹⁴⁰ CL. T. LII (1851) pp. 327-333.

también el tribunal: Pablo Govantes, M. Antonio Caballero, J. Fco. Morejón y Florencio G. Goyena.

El golpe de estado que en diciembre de 1851 llevó a cabo Luis Napoleón en Francia, repercutió en España donde Bravo Murillo suspendió las Cortes. A partir de ese momento se sucedieron acontecimientos dirigidos a consolidar un nuevo sistema político que reforzara los poderes de la Corona. En esta situación de inestabilidad comenzaba el año 1852, con el firme deseo de volver a las normas constitucionales puestas en entredicho. El estado de la administración de la justicia continuaba en precario¹⁴¹.

La Real orden de 7 de mayo de 1852 hizo extensiva a los magistrados que dejaron de servir sus destinos por consecuencia de los acontecimientos políticos de 1843, la Real orden de 10 de marzo de 1847 que dispuso se considerasen cesantes, desde que por el gobierno se produjeron sus plazas, a los que fueron separados o suspensos por las Juntas del pronunciamiento de 1840.

A través de esta Real orden se confeccionó por primera vez un escalafón del Tribunal Supremo¹⁴² con la siguiente composición inicial:

- Lorenzo Arrazola: Presidente del Tribunal Supremo nombrado el 16 de abril de 1847 y nuevamente el 14 de enero de 1851 hasta el 9 de abril de 1853. En 1847 desde el 16 de abril también compatibilizó el cargo de fiscal del Tribunal Supremo (diputado a Cortes en varias legislaturas y ministro de Gracia y Justicia desde: diciembre de 1838 a julio de 1840, 13 febrero de 1846 a 16 de marzo de 1846 y octubre de 1847 a 14 de enero de 1851¹⁴³).
- Francisco Olavarrieta: magistrado del Tribunal Supremo nombrado el 23 de julio de 1843 y Presidente de sala nombrado el 1 de mayo de 1850 (senador del Reino).
- José Mier Salcedo: magistrado del Tribunal Supremo el 23 de febrero de 1833 y presidente de sala el 9 de mayo de 1851.
- Manuel Antonio Caballero: magistrado del Tribunal Supremo nombrado el 13 de septiembre de 1845 (senador del Reino).
- Ángel Casimiro Govantes: magistrado del Tribunal Supremo nombrado el 13 de septiembre de 1835.(diputado a Cortes y senador del Reino).

¹⁴¹ Así se desprende del Real decreto de 30 de enero de 1852, solicitando rapidez y eficacia ante los numerosos recursos presentados y en el Real decreto de 24 de febrero de ese mismo año sobre el régimen de incompatibilidades

¹⁴² Publicado en Faro Nacional (1852) p. 453

¹⁴³ Hasta el momento de la Real orden pues luego volvió a ser ministro: de 16 de septiembre de 1864 a 17 de enero de 1865, otro periodo corto de 1865 (marzo, abril, mayo hasta 21 de junio) y de 10 de julio de 1866 al 4 de abril de 1867

- Florencio García Goyena: magistrado del Tribunal Supremo nombrado el 29 de diciembre de 1843 (ministro de Gracia y Justicia y presidente del Consejo de Ministros del 3 de septiembre al 3 de octubre de 1847 y senador del Reino).
- Pedro Jiménez Navarro: magistrado del Tribunal Supremo nombrado el 9 de diciembre de 1843 y fiscal del Tribunal Supremo desde diciembre de 1848 (senador del Reino).
- Francisco Agustín Silvela: magistrado del Tribunal Supremo desde el 30 de julio de 1843 (senador del Reino).
- Joaquín José Casaus: magistrado del Tribunal Supremo desde el 1 de marzo de 1850.
- Juan Antonio Almagro: magistrado del Tribunal Supremo desde el 19 de agosto de 1850 (senador del Reino).
- Pablo Govantes: magistrado del Tribunal Supremo desde el 7 de marzo de 1851 (diputado a Cortes).
- Juan Antonio Barona: magistrado del Tribunal Supremo desde el 12 de abril de 1851 (senador del Reino).
- Manuel Vigil de Quiñones: magistrado del Tribunal Supremo desde el 9 de mayo de 1851.
- Ramón López Vázquez: magistrado del Tribunal Supremo desde el 7 de enero de 1852 (diputado a Cortes).
- Juan Martín Carramolino: magistrado del Tribunal Supremo desde el 9 de enero de 1852.
- José María Huet y de Allier: fiscal del Tribunal Supremo desde 1843 a 1851. (diputado a Cortes y senador del Reino).

Con esta medida se otorgó la posibilidad de volver a sus plazas a los magistrados que fueron separados o suspensos con los acontecimientos acaecidos en 1840¹⁴⁴. Es evidente un deseo de reparación que en lo que se refiere al Tribunal Supremo no supuso ninguna incorporación por tal motivo.

El 13 de diciembre de 1852, Isabel II retiraba su confianza a Bravo Murillo con la lógica dimisión de éste de forma inmediata. Con Roncali al frente del Consejo de Ministros, se produjo la concentración de las distintas facciones del moderantismo y una cierta alianza con alguno de los sectores del progresismo. Las Cortes se reunieron el uno de marzo y finalizaron el cuatro de abril.

¹⁴⁴ CL. T. LVI (1854) p. 22.

Desde el punto de vista de la organización judicial destaco la sustitución al frente del Tribunal Supremo, de Lorenzo Arrazola por Francisco Olabarrieta con la condición de cesante del primero y que derivó en la petición, por parte de aquél, de un dictamen donde se analizara si la separación de Arrazola estaba sujeta a derecho¹⁴⁵.

En el último gobierno de este período, presidido por Sartorius, llegó al Ministerio de Gracia y Justicia, el 19 de septiembre de 1853, José de Castro y Orozco, que había formado parte de la Comisión de Codificación como vocal. Una de sus primeras medidas fue plasmada en la Real orden de 29 de diciembre de 1853, por la que se encargaba al Tribunal Supremo que aclarara los límites y extensión de la autoridad judicial. Esta norma no se entendía muy bien a la luz de lo que se expresaba literalmente en ella y donde parecía que la acomodación a los postulados políticos debía ser la máxima, cuestionándose, en cierto modo la acción jurisdiccional de la autoridad competente judicial. Decía textualmente:

“manifestando razonadamente cuál sea la jurisprudencia más aceptable por estar en mejor armonía con los principios políticos y disposiciones legales vigentes y proponiendo para los casos que considere de alta conveniencia o de inexcusable necesidad, las medidas legislativas que entienda ser indispensables en conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 5 de enero de 1844¹⁴⁶”.

Presentó José de Castro y Orozco, así mismo, un Proyecto¹⁴⁷ el 9 de septiembre de 1853, sobre organización de tribunales y le dedicó a la responsabilidad un apartado en que los magistrados del Tribunal podían ser separados de su empleo, sin formación de causa no sentenciada a propuesta del gobierno y con aprobación de las Cortes¹⁴⁸.

En el orden de designaciones y ceses no encontramos materia relevante que incida en el aspecto de intervención y politización del Tribunal Supremo. El 16 de enero se produjo la sustitución de José de Castro y Orozco por Jacinto Félix Doménech en el ministerio de Gracia y Justicia. El 17 de enero se suprimió la Sala de Indias del Tribunal Supremo¹⁴⁹. Sus magistrados en esos momentos, cuatro vocales y un presidente son declarados cesantes, y solamente se recuperó a Juan Martín Carramolino que siguió desempeñando sus funciones como magistrado del Tribunal Supremo en la sala primera. No se aumentó el número de magistrados en las dos salas restantes, a pesar de suprimir la sala de Indias.

Como consecuencia de esta medida y a instancias del ministro de Gracia y Justicia Sr. Jacinto Félix Doménech continuaron en sus puestos los siguientes magistrados del Tribunal Supremo : Manuel Antonio Caballero, José Francisco Morejón, Juan Antonio

¹⁴⁵ Ver apéndice documental correspondiente a Lorenzo Arrazola

¹⁴⁶ En dicho Real Decreto se relataban las funciones y creación de la Junta Gubernativa del Tribunal Supremo.

¹⁴⁷ P. Calvo Carmina “La instancia única en lo civil y la organización de tribunales”, *RGLJ* T. 84 (1853) p. 302, citado este Proyecto presentado por el marqués de Gerona.

¹⁴⁸ Este texto está más analizado en el capítulo sobre la Estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Supremo.

¹⁴⁹ Se aduce la necesidad de uniformar la jurisprudencia y que descanse la actividad sobre las dos salas existentes.

Barona, Miguel Vigil de Quiñones, Juan Martín Carramolino (todos ellos nombrados el 9 de enero de 1852) además de Ramón López Vázquez, José Gamarra y Cambronero, Manuel García de la Cotería - sustituyó a Silvela que fue nombrado presidente de sala- y Ramón María de Arriola y Esquivel.

El 19 de mayo de 1854 se presentó un Proyecto de Ley constitutiva de Tribunales del Fuero Común. Las discusiones de este Proyecto duraron más de cinco meses¹⁵⁰ y se tomó como base el trabajo anterior que desarrolló el ministro Arrazola en 1850 y muy similar al de 21 de diciembre de 1847.

En el capítulo VIII se hablaba de inamovilidad, que se proclamaba en términos absolutos, con la sola excepción de los alcaldes y sus tenientes, que:

“podrán ser suspensos y separados por el Gobierno de su oficio judicial, previo expediente instructivo, en el que serán oídos los interesados y la sala de gobierno de la Real Audiencia del territorio”

En la justificación de esta modificación se contiene la exposición de un profundo alegato sobre la necesidad de la inamovilidad, largo tiempo proclamada por la Constitución e inexistente hasta aquel momento para los magistrados del Tribunal Supremo.

Los capítulos XI y XII, relativos a la traslación y a la jubilación, son complemento de la inamovilidad y dotación y decía:

“en vano sería haber sujetado a ellas el arbitrio del Gobierno, si éste pudiera eludirlas y comprometer la independencia judicial con traslaciones y jubilaciones infundadas y caprichosas, como ha sucedido hasta el presente. Por eso se dispone que no se decretará ninguna traslación contra la voluntad de los interesados, fuera de los casos de excepción, sino a petición del Tribunal Supremo en sección de justicia; ni tampoco se jubilará a ningún juez ni magistrado sin oír primero a dicho Tribunal en Sección de Casación. La Sección ha añadido en su Proyecto la disposición que permite la traslación de jueces de partido cuando hayan cumplido un sexenio”

Y es muy interesante incidir en el capítulo XV sobre los nombramientos de jueces y magistrados estableciendo los requisitos y condiciones y obligando al gobierno a oír previamente el dictamen y previa calificación de la sala de gobierno de la sección de casación del Tribunal Supremo acerca de la capacidad y los méritos del agraciado. Existió un avance evidente en que el alto tribunal interviniera evitando la libre discrecionalidad del gobierno en favor de sus partidarios.

¹⁵⁰ ACGC. (1854) l. 6 de organización de tribunales, c. 3, d. 1.

Este Proyecto sugirió numerosos comentarios y reflexiones entre ellos los de Miguel y Rupert denunciando la lentitud en la toma de decisiones, la inevitable demanda de independencia judicial y el exigible binomio magistratura-inamovilidad¹⁵¹.

Quiero mencionar de algún modo el Real decreto de 30 de mayo de 1854 sobre sustituciones de magistrados que dejaba en manos del gobierno la relación de magistrados a sustituir una vez que las salas de gobierno del Tribunal Supremo hubieran remitido a éste el estado de la cuestión.

4. Bienio progresista: julio 1854 - julio 1856: cambios y reformas.

La revolución del verano de 1854 tuvo causas muy dispares: el descontento social, la desubicación en el escenario de los partidos políticos y la rebelión militar; todo ello condujo a una coalición progresista entre Espartero y O'Donnell que inició el denominado Bienio Progresista, con un brevísimo preámbulo del Duque de Rivas al frente de la transición.

Tras la actuación de José Alonso en el ministerio de Gracia y Justicia, se quebró la armonía en el desarrollo legislativo. Su visceralidad en algunos temas provocó pavor en el normal avance de los temas de fondo de la administración de justicia.

Por Real decreto de 18 de agosto de 1854 se disolvió la Comisión de Codificación con una clara intencionalidad política de remover a sus miembros, aunque se alegaron razones de “estado” concluidos sus trabajos más inmediatos y por estar encomendados otros a una Comisión especial. Ese mismo Decreto creaba y le daba a dicha comisión el encargo de redactar las leyes de Enjuiciamiento civil y de organización de tribunales¹⁵². A estos trabajos se incorporaron en diferentes momentos: Pedro Gómez de la Serna, Luis Rodríguez Camaleño, Juan Manuel González Acevedo, Manuel Seijas Lozano, José de Gálvez Cañero, Ruperto Navarro, Nicolás M^a Rivero, Pedro Sabáu, Francisco Núñez Arenas.

Se dieron pasos decisivos, a través del Real decreto de 9 de septiembre de 1854, impulsado por José Alonso, para neutralizar algunas medidas tomadas en el período moderado, como fue la supresión de las Juntas de gobierno establecidas en el Tribunal Supremo. De este modo se pretendió evitar el control sobre los magistrados mediante estructuras paralelas de intervención jurisdiccional. De igual manera se anularon algunos empleos judiciales y se provocó la disparidad de doctrinas legales.

Por lo que respecta al Tribunal Supremo se produjo una total convulsión en su seno, con 17 nombramientos, de los que sólo tres se produjeron con anterioridad al período

¹⁵¹ RGLJ. T. 2 (1854) p. 458 y ss. *RGLJ* “De la Magistratura y del Ministerio Fiscal” T. 3 (1854) pp. 306-317.

¹⁵² ACGC.(1855) l. 1 de organización de la comisión c. 11.

revolucionario: Sebastián González Nandín (18 de enero), independiente¹⁵³, José de Castro y Orozco (21 de abril): directamente pasó a presidir una sala, moderado¹⁵⁴ y Joaquín Roncali (21 de abril), moderado¹⁵⁵

Y los otros 14 tuvieron todos sin duda, connotaciones políticas: Joaquín José Casaus (repuesto), moderado¹⁵⁶, Pedro Gómez de la Serna (fiscal), progresista¹⁵⁷, Francisco Agustín Silvela (repuesto), progresista¹⁵⁸, José María Domenech, progresista¹⁵⁹, Pío Laborda, progresista¹⁶⁰, Luis Rodríguez Calameño, progresista¹⁶¹, Claudio Antón de Luzuriaga, progresista, José Rodríguez Busto, progresista, Félix Herrera de la Riva, progresista¹⁶², Miguel de Nájera Mencos, independiente¹⁶³, Jorge Gisbert, progresista¹⁶⁴,

¹⁵³ En las observaciones de su Hoja de servicios se destaca que las cuatro cesantías que aparecen en ella a lo largo de su carrera judicial y que paralizaron por más de diez años ésta, fueron por motivos políticos, motivándolas sus opiniones y votaciones independientes, ya como magistrado, ya como senador (AHN, Fondos contemporáneos, l. 5004, n. 11990 ver índice de magistrados).

¹⁵⁴ Fue nombrado ministro de Gracia y Justicia el 29 de septiembre de 1853 en un gobierno moderado, consejero de Estado, (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 575, n. 32408, ver índice de magistrados).

¹⁵⁵ Fue ministro de Gracia y Justicia en la etapa moderada e interino de Estado al comienzo de 1868, (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 600, n. 1658, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹⁵⁶ Nombrado el 25 de octubre de 1857 ministro de Gracia y Justicia, (AMJ, Magistrados y Jueces, ver índice de magistrados).

¹⁵⁷ Ministro de Gracia y Justicia en el bienio progresista y presidente del Tribunal Supremo en el Sexenio revolucionario, militó en el progresismo y estuvo exiliado con Espartero en Londres, diputado en varias legislaturas, (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 583, n. 814, ver índice de magistrados).

¹⁵⁸ Fue propuesto para ministro de la Gobernación el 6 de diciembre de 1838 y no aceptó y jefe político en épocas del liberalismo progresista y designado magistrado del Tribunal Supremo en el período revolucionario, diputado en dos legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4859, n. 10259, ver índice de magistrados).

¹⁵⁹ En un informe que emite la Diputación provincial de Sevilla el 23 de septiembre de 1837 dice de él que fue afecto a la reina y a las libertades patrias, habiendo sufrido en la década del despotismo prisiones y otros padecimientos que le hacen digno en su puesto (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4390, n. 2282, ver índice de magistrados).

¹⁶⁰ Fue designado magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista habiendo sido fiscal en el período revolucionario de 1840, diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4532, n. 4365, ver índice de magistrados).

¹⁶¹ Fue jefe político de Lugo, el 22 de noviembre de 1840 solicitó la dimisión como magistrado en la Audiencia de La Coruña textualmente “por haberme comprometido al servicio de la causa nacional desde el momento en que se anunciaron los primeros síntomas de guerra civil, no me permite aceptar tan honroso cargo” nombrado magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista, diputado y senador en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4619, n. 5437, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹⁶² En 1842 renunció a la Regencia de la Audiencia de Sevilla para formar parte de la Junta provisional de gobierno (órgano político) y fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4499, n. 3928, ver índice de magistrados).

¹⁶³ Hay informes favorables de su conducta en la etapa moderada y a la vez se le nombró magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4593, n. 5167, ver índice de magistrados).

¹⁶⁴ Fue alcalde constitucional en los primeros meses de 1823, fue separado de su destino y en 1841 repuesto nuevamente, un informe del gobernador político de Albacete de ese mismo año dice de él que era amante de las instituciones liberales y perseguido en la época del despotismo, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4451, n. 3135, ver índice de magistrados y apéndice documental).

José María Olañeta, progresista¹⁶⁵, Miguel Osca y Guerau de Arellano progresista¹⁶⁶ y Vicente Valor, progresista¹⁶⁷.

De estos nombramientos doce magistrados estuvieron adscritos al progresismo político, frente a un moderado y un independiente.

Y cesaron en este período revolucionario: José de Castro y Orozco (25 de agosto, se le declara cesante), moderado, José María Huet y Allier (25 de agosto, se le declara cesante), moderado¹⁶⁸, José Francisco Morejón de León (9 de septiembre, se le declara cesante), moderado¹⁶⁹, Ramón López Vázquez (9 de septiembre, se le declara cesante), moderado¹⁷⁰, Joaquín Roncali (9 de septiembre, se le declara cesante), moderado, Juan Martín Carramolino (9 de septiembre, se le declara cesante), moderado¹⁷¹, Francisco Olabarrieta (13 de septiembre, solicita su jubilación), moderado¹⁷², y Claudio Antón de Luzuriaga (29 de septiembre, renunció voluntariamente), progresista.

A excepción de este último caso, todos los magistrados estuvieron adscritos al sector político moderado. Joaquín Romaguera se jubiló el 15 de septiembre, independiente¹⁷³ y Juan Antonio Barona falleció ese mismo día, independiente¹⁷⁴.

¹⁶⁵ Fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo al comienzo del bienio progresista y cesa cuando finaliza ese período político, en un informe político de 1837 se encarga al Regente observe su conducta política por la sospecha que causa su versatilidad y otras noticias que tiene la Junta, no siendo a propósito para la Audiencia de Madrid, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4982, n. 11787, ver índice de magistrados).

¹⁶⁶ Consolidó su puesto por informe favorable de la Junta de arreglos de tribunales en 1837 por ser afecto al sistema liberal y designado como magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4715, n. 6700, ver índice de magistrados).

¹⁶⁷ Existen informes políticos favorables en 1821, 1837 y 1841, períodos todos ellos progresistas, (AHN, Fondos contemporáneos, le. 4714, n. 6690, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹⁶⁸ Desecha su condición de fiscal poco antes del período revolucionario de 1840 y desechó estar al lado de los sublevados en 1840 fue diputado y senador en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4500, n. 3939, ver índice de magistrados).

¹⁶⁹ La Junta auxiliar de Sevilla el 13 de noviembre de 1840 dice que fue separado por su opinión contraria al pronunciamiento de primero de septiembre de 1840, el jefe político dice en 1841 que fue acérrimo defensor del partido vencido, la Diputación provincial en informe de 27 de febrero de 1841 elogió su conducta y comportamiento y dice que siempre fue liberal, fue perseguido políticamente en el período 1823-1833, como se ve existen opiniones contrarias sobre su filiación política pero podemos afirmar que empezó militando en el liberalismo para pasar a posiciones moderadas a partir de 1843, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4576, n. 4937, ver índice de magistrados).

¹⁷⁰ Se le declaró cesante como magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista y se le repuso al final de esta etapa política, fue diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 752, n. 12011, ver índice de magistrados).

¹⁷¹ Fue ministro de la Gobernación en 1839, fue declarado cesante como magistrado del Tribunal Supremo durante el bienio progresista y se le repuso al final del mismo, diputado en varias legislaturas, (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4994, n. 11915, ver índice de magistrados).

¹⁷² Un informe de 24 de noviembre de 1824 dice de él: “es de talento, integridad y merece la mejor opinión, pero unos le tienen por liberal y otros dudan de su afecto a V. M., otro asegura que es un excelente realista y buen magistrado, habiendo sido acusado de servil en el periódico revolucionario el Mensajero (...). Quedó suspenso por los constitucionalistas y no consiguió la purificación de la Junta de arreglos de tribunales”. (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4702, n. 6563, ver índice de magistrados).

¹⁷³ No existen datos sobre su afiliación política, si es que la tuvo, en su expediente (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4619, n. 5431, ver índice de magistrados).

Con la llegada de Joaquín Aguirre se intentó corregir la trayectoria y a ello se correspondió el Real decreto de 5 de enero de 1855 declarando cesantes a los magistrados y jueces que carecieran de los requisitos que se expresaban y disponiendo que de cada cuatro vacantes se proveyeran tres en cesantes y una al ascenso.

Este decreto que tras ensalzar la inamovilidad como libertad de los ciudadanos y seguridad para los que son sujetos de la acción de la justicia, hacía una extensa exposición de la necesidad de que la inamovilidad fuera una realidad y que para ello el gobierno debía adoptar algunas medidas justas y conciliadoras que facilitaran en el futuro la adopción de reglas permanentes e inalterables acerca de un asunto de tanta importancia y trascendencia¹⁷⁵.

Pasa seguidamente este preámbulo a describir la situación de muchos magistrados que seguían cesantes y que esperaban ser repuestos en sus destinos¹⁷⁶, a la vez que en su diagnóstico reconocía que bastantes puestos se encuentran ocupados por personas que no reunían las condiciones legales o que estaban ahí por favores políticos.

Este decreto se redactó precisamente para reponer a los cesantes y reforzaba la idea de sostener el derecho que tenían a ser expuestos los magistrados injustamente separados. Así en su artículo 2º decía:

“se declaran cesantes todos los que después de publicada la Constitución de 1845, hubiesen ingresado en cualquier escalón judicial en contravención de las disposiciones vigentes al tiempo de sus respectivos nombramientos”.

Se declaraban también cesantes según el artículo 3º: los que por su comportamiento en el ejercicio de sus cargos hubieren dado a conocer que carecen de la aptitud, circunspección y prudencias necesarias para el desempeño de tan elevada misión.

Se podría deducir este artículo como una herramienta de separación de algunos magistrados afectos al sistema moderado a modo de purga por vía legal. La provisión de plazas acumuladas introdujo nuevamente el factor de discrecionalidad e intervención del gobierno en esos puestos pues tal como se decía en su artículo 4º:

“de cada cuatro vacantes que resultaren a consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores, así como de los demás que ocurran, se proveerán tres en cesantes (...) y la cuarta se destinará a las personas que por su postergación en la carrera o por sus méritos y servicios especiales sean acreedores a la preferente consideración del gobierno”

¹⁷⁴ No tengo datos para analizar su adscripción política (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4859, n. 10274, expediente desaparecido, ver índice de magistrados).

¹⁷⁵ Se decía “ conviene a la sociedad entera que los encargados de resolver sobre sus más caros intereses (...) estén al abrigo de las exigencias del poder y de su influencia política (...). Pero la inamovilidad elevada a teoría no ha podido realizarse en la práctica a consecuencia de las vicisitudes políticas”

¹⁷⁶ CL. T. LXIV(1855) p. 12-15.

Se quería evitar un mal, pero indirectamente se añadían otros nuevos. No observamos incidencias concretas ese año en la composición del Tribunal Supremo y sí justamente el año anterior, con lo que deducimos que estas medidas se tomaron a otros niveles de la magistratura -aunque era lógico analizar el contenido de este decreto pues hipotéticamente y dado que no se precisa podía afectar al Tribunal Supremo-.

La Real orden de 10 de febrero de 1855 trató de corregir la situación de muchos funcionarios de la administración judicial separados de sus destinos por las juntas de gobierno en julio de 1854. Medidas éstas que como se reflejaron el 1 de agosto de 1854 en una orden debían ser provisionales hasta el establecimiento de un gobierno definitivo que encabezó Espartero.

El 5 de junio de 1855 y tras una nueva crisis ministerial accedió a la cartera de Gracia y Justicia Manuel Fuente Andrés con el firme propósito de clarificar la carrera judicial. El 30 de septiembre de 1855, tuvo lugar la reapertura de las Cortes con el intento de alianza entre los progresistas y los demócratas con el fin de adelantar la salida del gobierno de O'Donnell. Ello provocó, inevitablemente, la concentración de las fuerzas moderadas y un fortalecimiento de la Unión Liberal en torno a sus planteamientos. En este ambiente se creó una comisión que presentó un Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados el 22 de octubre de 1855¹⁷⁷ que supuso un notable avance con anteriores textos, pero que se quedó solo en puras intenciones y no se plasmó en ninguna ley. Presentó dos aspectos de interés: la causa probatoria en las separaciones y como avanzará más adelante, el régimen de incompatibilidades en la función judicial.. En su capítulo VI se hizo una clara referencia a la inamovilidad:

“no sólo se entenderá del destino, sino también del partido o Audiencia para que se obtuviere el nombramiento, a menos que se pruebe causa suficiente para la traslación o separación en expediente gubernativo”

Este capítulo se instruyó y decidió con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 7 marzo de 1852. En este contexto debo señalar que existieron muchas vicisitudes que acompañaron el desarrollo normativo, como fue la sustitución de Pedro Gómez de la Serna como presidente de la comisión redactora de estos textos, a favor del perfil más liberal de Manuel Cortina, nombrado en sustitución del anterior.

Se siguieron cometiendo irregularidades en terreno de la separación de funciones: el nombramiento de un político como José Gómez Sillero -diputado a Cortes y gobernador civil de Granada- como magistrado de Audiencia y que provocó importantes críticas en las Cortes. Su condición liberal fue manifiesta y el ministro Fuente Andrés argumentó tal designación por su magnífica trayectoria en defensa de los principios liberales que deberían oxigenar la administración de la justicia.

¹⁷⁷ F. Muñoz: “ Observaciones a las bases presentadas el 22 de octubre de 1855” *Colección de Impresos de las Cortes Constituyentes de 1854* T. 21 signatura n. 4610 del Catálogo de las Cortes españolas, 1889, aparece un Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados, compuesto de 213 artículos y cuatro disposiciones transitorias que se cita en la *Guía Bibliográfica del s. XIX*.

En el Proyecto de Bases que se redactó cuatro meses después, se sentó el principio de absoluta incompatibilidad de las funciones judiciales con las administrativas - procurando la independencia del poder judicial- y señalaba que el Tribunal Supremo era único sea cualquiera la índole y extensión de estas jurisdicciones, el título de supremo sólo podía aplicarse al Tribunal que velaba por la integridad e independencia de todas las jurisdicciones, al que las circunscribe a sus justos límites, al que cesa y anula la sentencia, al que forma la jurisprudencia, al que juzga a los altos funcionarios del estado. Este proyecto aunque fue aprobado por las Cortes, no llegó a recibir el refrendo real, ni fue objeto de un texto articulado.

La Ley de 14 de noviembre de 1855, autorizó al ministro de Gracia y Justicia para nombrar a D. Claudio Antón de Luzuriaga, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La novedad que presentó este nombramiento de un presidente del alto tribunal, radicó en una ley firmada por la reina a propuesta del ministro y que vino a sustituir a José Alonso Ruiz-Conejares que falleció el 13 de abril de ese mismo año.

Durante siete meses se actuó con interinidad hasta elegir a este vocal de la Comisión de Codificación que compatibilizaba en ese momento su condición de diputado por la provincia de Logroño con la de magistrado jubilado. La larga experiencia de este hombre, en la necesidad de orientar el nuevo horizonte, contribuyó de manera importante a esclarecer el panorama en los trabajos preparatorios de la Constitución de 1856¹⁷⁸.

Un avance interesante fue la disposición que se dio el 18 de noviembre de ese mismo año, por el que se dieron absolutas competencias al Tribunal Supremo para hacer guardar la ley “cualquiera que fuera el infractor, y la clase, corporación o comunión política a la que perteneciere el infractor”.

El ministro instó a que se ofrecieran ideas y sugerencias para asegurar la estabilidad del orden judicial, así como clarificar la carrera y la promoción de sus funcionarios¹⁷⁹. En este sentido se promulgó la Real orden de 4 de febrero de 1856, mandando que el Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión de Códigos, las Audiencias y Juntas de los Colegios de Abogados propusieran a la mayor brevedad cuanto se les ofreciera y pareciera respecto a la inamovilidad y responsabilidad judicial; a fin de que se tuviera presente en la discusión de la Ley Orgánica de Tribunales.

No poseemos casi ninguna información o al menos desconocemos, dónde se puede encontrar. Al respecto sí podemos ofrecer el testimonio del Colegio de Abogados de La Coruña¹⁸⁰. En su tercer punto referido a la inamovilidad se denunció la grave situación de la administración de justicia, se invocó la división de poderes, principio conculcado sistemáticamente por los distintos gobiernos, y decía seguidamente:

¹⁷⁸ CL.T. LXVI (1856) pp. 321-322.

¹⁷⁹ CL.T. LXIV (1855) pp. 184-186.

¹⁸⁰ Informe sobre la circular del Ministerio de Gracia y Justicia con fecha 4 de febrero de 1856, *La Justicia. Revista semanal de jurisprudencia, Administración, Casos Prácticos, Tribunales y Bibliografía*, Madrid, 1856, Imprenta y Estereotipia de la Asociación, 32 p.

“que nunca sea libre el gobierno de mejorar la posición de un magistrado, ni esté en su mano empeorarla; que ascienda con arreglo a una acertada ley de escalafón, y cuando le toque su vez no haya más que decirle: subid al puesto que os corresponde”

Estas indicaciones cayeron en el vacío y entre disputas de los progresistas se volvieron a alejar las fundadas esperanzas de un nuevo rumbo en importantes asignaturas pendientes. La Real orden de 4 de febrero de 1856 tenía un precedente parlamentario en el debate y discusiones que meses antes se habían producido en las Cortes.

Dentro del propio partido progresista se alzaron voces críticas contra la actuación de su compañero y titular de Gracia y Justicia Fuente Andrés. En este sentido el diputado Güell y Renté reprochó al gobierno no tomar decididas medidas de corte progresista, entre ellos la reposición de los cesantes de 1843¹⁸¹ y realizó una crítica para que el partido progresista fuera más moral y diera un auténtico ejemplo de prudencia y de práctica de la justicia. Este diputado acusó de los movimientos que estaban existiendo entre los regentes. El ministro respondió a estas alegaciones que nunca habían existido menos cambios que en su época.

Buena prueba de las tensiones y divisiones internas dentro de la coalición progresista fue el deseo de buena parte de sus diputados, que no se procediera a ningún nombramiento de un nuevo magistrado hasta que no se repusieran en su honor y en sus destinos los que fueron cesados en 1843. En este sentido se expresaron algunos representantes políticos ante el titular de Gracia y Justicia¹⁸². El ministro en contestación al diputado Sr. Zorrilla reconoció:

“la inamovilidad judicial está consignada en la Constitución; pero ese principio no se ha llevado hasta ahora a efecto porque las circunstancias lo han hecho imposible. Cercano está el día en que se consigne y vote ese mismo principio de inamovilidad en un artículo de la nueva Constitución (...).

La inamovilidad no puede ser ejecutoria hasta que se dé la ley orgánica de tribunales y con arreglo a ella se nombren los jueces y magistrados (la creación de un cuerpo de jueces que no se produce hasta 1870 provoca un problema permanente por las injerencias del ejecutivo ante la falta de jueces profesionales y así sin solución de continuidad pues el gobierno daba por buena esta situación pues le permitía el control de la actividad judicial); hasta entonces es imposible hacer ejecutoria la inamovilidad de la magistratura, y el gobierno, tiene que caminar sin brújula ni más conciencia que el cumplimiento de su deber”

Esta afirmación puso de manifiesto la total discrecionalidad con la que se seguía funcionando; en un contexto de desorden público y caos en el horizonte ideológico y político. Bien es cierto que las remociones y traslados a los que se refería el debate que

¹⁸¹ DSC. T. 10 (1855) de 24 de noviembre p. 8490.

¹⁸² DSC. T. 10 (1855) de 24 de noviembre p. 8493.

son fundamentales, sobre todo en las Audiencias y juzgados inferiores, aunque la amenaza del sistema afectaba a todos los niveles de la administración de justicia¹⁸³.

Aunque la Constitución de 1856 no tuvo vigencia, sí se tomaron en consideración algunos proyectos y leyes, entre ellos el Proyecto de Bases de 14 febrero de 1856 de Ley Orgánica de Tribunales, inspiradas en el título X de aquel texto que reproducía casi las mismas disposiciones en lo relativo a la justicia que señalaba la Constitución de 1837 y 1845 salvo en lo que se refería a la inamovilidad que se formulaba en el artículo 70.

En el mismo sentido que las constituciones anteriores se aseguraba que ningún magistrado o juez podría ser depuesto de su destino sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido, sino por auto judicial, o en virtud de orden del rey cuando éste, con motivos fundados, le mandare juzgar por el tribunal competente. Las bases de la Ley Orgánica de Tribunales determinarían los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrán los magistrados y jueces ser trasladados, jubilados y declarados cesantes”.

Para desarrollar el texto del proyecto constitucional y elaborar la Ley orgánica, se formó la comisión parlamentaria para redactar el Proyecto de bases integrada por: Claudio Antón de Luzuriaga, Pedro Gómez de la Serna, Cirilo Álvarez, Antero de Echarri, Joaquín Aguirre, Nicolás María Rivero.

Estos presentaron su proyecto¹⁸⁴ en el ámbito de las Cortes y que contempló el traslado de los magistrados a otro destino siempre que lo aconsejara la buena administración de justicia y oyendo el parecer del Tribunal Supremo y se le otorgaron como atribuciones, entre otras: el mantenimiento de la integridad y la independencia de todas las jurisdicciones, decretar la cesación de cualquier funcionario del orden judicial cuando rehusaren prestar sus servicios contemplados en las leyes y consultar al gobierno sobre las traslaciones de los funcionarios del orden judicial.

El proyecto fue objeto de acalorados debates¹⁸⁵ y sufrió algunas pequeñas modificaciones. Pudo ser considerado como un precedente de la LOPJ, aprobado en Cortes pero sin el refrendo real por cuestiones de coyuntura política y por ende carente de aplicación.

Existió un gran debate parlamentario, de igual modo, previo a la redacción final del artículo 69 de la Constitución. Al inicio, el artículo advertía que ningún magistrado o juez podrá ser depuesto o separado de su destino temporal o perpetuo, sino por

¹⁸³ El Sr. Zorrilla expresaba sus dudas “ mi deseo es que el Sr. Ministro nos informe qué sistema sigue en la provisión de los destinos de la magistratura, porque aquí se dirigen interpelaciones mil veces sobre los destinos que se dan en la gobernación del Estado, en guerra en donde la acción del Gobierno es más libre, y es muy extraño que se hagan pocas o ninguna respecto a los empleados de la magistratura, sin embargo sin que presenciemos remociones, traslaciones, nuevos nombramientos”.

¹⁸⁴ DSCC. (1856) a. 3º al n. 313.

¹⁸⁵ DSCC. (1856) n. 341,342,358,362,364 y 365

sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino por auto judicial o en virtud de orden del Rey, cuando éste con motivos fundados lo mande juzgar por el tribunal competente.

El diputado Cirilo Álvarez creyó que a este artículo había que darle una cierta flexibilidad para que la inamovilidad fuera una realidad factible pues de lo contrario, podían existir conflictos entre la magistratura y el gobierno. Al entender de este político, podían existir otras causas para suspender a un magistrado que eran de diversa índole y que contravendría esa disposición con la que el gobierno carecería de recursos para iniciar alguna actuación.

Creía que la comisión consagraba el principio de inamovilidad de manera irrefutable al contemplar el que un magistrado fuera suspendido o separado por su conducta desmerecedora de su condición y así lo declarara el Tribunal Supremo, teniendo por consiguiente la magistratura esa garantía como es la que daba el alto tribunal a quien necesariamente el gobierno tendría la obligación de oír¹⁸⁶.

La sala de gobierno diría en qué circunstancias se separaría a un magistrado. Se veía oportuno también suprimir “temporal o perpetuo” pues el destino de cada magistrado tenía una duración fijada y no cabía la posibilidad de comisiones especiales y temporales. Se garantizaba que la facultad de la disciplina correspondía al Tribunal Supremo y así se recogía a instancias de Cirilo Álvarez en nombre de la comisión.

Posteriormente continuaron los debates donde Gómez de la Serna puso en duda que el artículo dejara un resquicio abierto a que el ejecutivo interviniera en algún tipo de actuación, y en ese sentido aportaba una clara solución: para conseguir esta independencia del poder judicial se declararía, por medio de una ley que sólo podían ser removidos por el Tribunal Superior, y los magistrados de las Audiencias por los ministros del Tribunal Supremo de Justicia, exigiéndose, para evitar abusos en estas resoluciones, la concurrencia de cierto número de votos, no de una mayoría insignificante, sino de las dos terceras partes de sus individuos, o las cuatro quintas. Así es como debería obrarse respecto de algunas personas que no prestigiaban bastante la magistratura¹⁸⁷.

El diputado Sr. Ríos Rosas continuó la polémica para asegurar con mayores garantías el dispositivo legal de la inamovilidad y así se planteaba que era necesario, primero, huir de poner en manos del gobierno la suerte de los jueces; segundo, huir de poner en manos del Supremo Tribunal de Justicia, que por alta institución que fuera, no dejaba de ser una institución inferior al gobierno, la suerte de los jueces. Era menester combinar las cosas de una manera que se evitara el que en autoridad disciplinaria, el Tribunal Supremo de Justicia, no se apoderara de la facultad de amover a su antojo los jueces; que fuera un poder del estado que desorganizara el estado.

La comisión constitucional tuvo a bien volver a recoger el sentido aquí expuesto en favor de delimitar más dicho artículo para sintonizar con las inquietudes que se ponían de manifiesto por parte de algunos diputados. Finalmente y sin debate en la sesión de 30

¹⁸⁶ DSC.(1855) T. 10 de 27 de noviembre p. 8586.

¹⁸⁷ DSC.(1855) T. 10 de 27 de noviembre p. 8587.

de noviembre de ese mismo año se aprobó el artículo 69 de la Constitución con la siguiente redacción:

“ningún magistrado o juez podrá ser depuesto de su destino sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino por auto judicial, o en virtud de orden del Rey, cuando éste, con motivos fundados, le mande juzgar por el tribunal competente.

Las bases de la Ley Orgánica de Tribunales determinarán los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrán los magistrados y jueces ser trasladados, jubilados y declarados cesantes”

Suscrito por los siguientes: Vicente Sancho, Antonio de los Ríos y Rosas, Modesto Lafuente, Manuel Lasala, Cristóbal Valera, Martín de los Heros y Salustiano de Olózaga¹⁸⁸.

Hay que destacar que en la base 17 se recogió que “los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo que delincan en el ejercicio de sus cargos, serán juzgados por el Senado, constituido al efecto en Tribunal de Justicia”. Se produjo una nueva intromisión de un órgano político en la delimitación de responsabilidades por parte de los magistrados¹⁸⁹.

A la Constitución de 1856 se la agregó un Acta Adicional, cuyo artículo 12 anunciaba que se establecería una ley de organización de tribunales que determinará los casos en que podrá el Rey trasladar, jubilar o declarar cesantes a los magistrados y jueces; la vigencia del Acta Adicional apenas llegó a un mes, y quedó en suspenso el 14 de octubre de 1856.

Hasta ese momento el Tribunal Supremo había seguido cumpliendo sus funciones en un ámbito de inestabilidad permanente con las fluctuaciones ya reflejadas entre principios y realidad en lo referente a la independencia judicial.

5. Moderantismo: julio 1856 - septiembre 1868: arquitectura y desarrollo de las bases de autonomía jurídica

Después del cambio a una nueva situación política, hubo novedades en el Consejo de Ministros, al frente del cual se situó O'Donnell y en el Ministerio de Gracia y Justicia -ahora ocupado por el nombrado Manuel de Seijas Lozano- se arbitraron numerosas medidas legales (es curioso observar que con esta misma fecha, 28 de noviembre, se dictaron tres reales decretos de una extraordinaria trascendencia) contraviniendo disposiciones del bienio progresista y acudiendo a etapas de moderación en el liberalismo gobernante.

¹⁸⁸ DSCC (1855) 29 de noviembre, a. quinto al n. 255.

¹⁸⁹ La Constitución de 1856 contemplaba una apertura en la elección de senadores, pero es cierto que pese a esa pluralidad teórica se empañó la doctrina tradicional de la división de poderes.

O'Donnell se encargó de restaurar el orden precisamente aniquilando el sistema que él mismo propició dos años antes. El estado de las cosas cambió y en el seno del Tribunal Supremo se sufrieron las consecuencias. La reorientación del programa y sus protagonistas provocaron numerosos cambios en la cúpula judicial, acorde con las intenciones de la clase gobernante de continuar fielmente con lo proclamado en la Constitución de 1845 y los principios que la alumbraron. La zozobra y la inestabilidad política llenaron de tensiones personales e institucionales a la esfera judicial y ello desembocó en la ineficacia administrativa y procesal, y en algunas ocasiones en falta de criterios competenciales y en alguna que otra crisis de instituciones existentes.

En lo que se refiere a la composición del Tribunal Supremo, el año de 1856 supuso numerosas alteraciones y cambios por motivaciones de índole bien diversa:

- por Real decreto de 19 de septiembre se cesó a Joaquín Gómez de la Cortina como ministro del Tribunal Supremo por su mal estado de salud (no existe ninguna valoración política al respecto en su expediente personal que nos haga sospechar alguna otra razón a la aludida).
- por Real decreto de 24 de septiembre se nombró a Luis Mayáns¹⁹⁰ que cesó a los catorce días por motivos de salud y que había sido ministro del Tribunal de Guerra y Marina, habiendo anteriormente ocupado la cartera de Gracia y Justicia.
- por Real decreto de 24 de septiembre se nombró a José Portilla ministro del Tribunal Supremo en sustitución de José Rodríguez Busto que se jubiló.
- por Real decreto de 17 de octubre se admitió la renuncia de Claudio Antón de Luzuriaga como Presidente del Tribunal Supremo por razones de salud y que llevaba ejerciendo el cargo desde el dos de enero de 1856. Estuvo como Presidente del Tribunal Supremo en otro intervalo provisional desde el 14 de noviembre de 1855 al 17 de octubre de 1856.
- por Real decreto de 17 de octubre se nombró a Lorenzo Arrazola¹⁹¹, Presidente del Tribunal Supremo, permaneciendo en el cargo hasta el 1 de octubre de 1864 y que ya lo había ejercido desde el 13 de febrero de 1846 hasta el 16 de marzo de ese mismo año y también desde octubre de 1847 a 1850. Quizás el hombre con mayor experiencia en ese puesto.
- se admitió en esta misma fecha la renuncia de Pedro Gómez de la Serna como fiscal del Tribunal Supremo, por su mal estado de salud y que curiosamente fue designado al comienzo del bienio progresista (1854).

¹⁹⁰ De tendencia moderada, fue ministro de Gracia y Justicia en etapas moderadas, dilatada participación como diputado en varias legislaturas, presidente del Congreso de 1848 a 1851 (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 591 n. 1195 ver índice de magistrados).

¹⁹¹ Perteneció a gobiernos moderados y conservadores como ministro de Gracia y Justicia, fue perseguido por la revolución de 1840, participó en política como diputado en varias legislaturas (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 569 n. 161 ver índice de magistrados y apéndice documental).

- se admitió la renuncia de José Portilla, como magistrado del Tribunal Supremo, el 24 de octubre por su mal estado de salud. Duró en el cargo un mes exacto. Más tarde, en el año 1858 volvió a ser designado.
- por Real decreto de 24 de octubre se nombró como fiscal del Tribunal Supremo por vacante de Pedro Gómez de la Serna a Joaquín José Casaus, con categoría de presidente de sala del mismo. Era ministro del Tribunal Supremo desde el 19 de diciembre de 1848.
- por Real decreto de 31 de octubre se nombró presidente de sala a José de Castro y Orozco, que ya era ministro del mismo en sustitución de Luis Mayáns que había sido ministro del Tribunal Supremo hasta el 8 de ese mismo mes .
- por Real decreto de 31 de octubre se nombró a Ramón López Vázquez ministro del Tribunal Supremo por José Portillo y que ya lo fue en 1853 y en 1854.
- por Real decreto de 31 de octubre se nombró a Juan Martín Carramolino como ministro del Tribunal en sustitución de Joaquín José Casaus. Lo fue en 1854 pero cesó en el cargo en 1855.
- por Real decreto de 31 de octubre se aceptó la petición de jubilación de José Mariano de Olañeta como ministro del Tribunal Supremo y se le agradecieron los servicios prestados.
- por este mismo decreto se nombró a Manuel García de la Coterá¹⁹² en sustitución del anterior, como ministro del Tribunal Supremo. Ya fue nombrado el 10 de junio de 1853, sustituyendo a Francisco Agustín Silvela que en la misma fecha fue nombrado presidente de sala. También cesó en 1865.
- por Real decreto de 14 de noviembre se jubiló a Luis Rodríguez Calameño¹⁹³ como ministro del Tribunal Supremo, con honores de presidente de sala y se nombró a Sebastián González Nandín¹⁹⁴ en su sustitución. Este ya fue ministro del Tribunal nombrado el 14 de enero de 1853 y dimitió de su cargo en 1855.

¹⁹² De perfil moderado siendo magistrado del Tribunal Supremo fue declarado cesante en el bienio progresista y repuesto tras finalizar este período político (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4450, n. 3129 ver índice de magistrados).

¹⁹³ Fue jefe político de Lugo, de corte progresista, el 22 de noviembre de 1840 solicitó la dimisión por comprometerse en la causa nacional desde el momento en que se anunciaron los primeros síntomas de guerra civil y que no le permiten aceptar tan honroso cargo, participó en política como diputado y senador en varias legislaturas y designado magistrado del Tribunal Supremo en el bienio progresista (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4619, n. 5437, ver índice de magistrados y apéndice documental).

¹⁹⁴ De corte independiente colaboró en distintas etapas políticas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 5004, n. 11990 ver índice de magistrados).

- por Real decreto de 14 de noviembre se declaró cesante a Félix Herrera de la Riva, ministro del alto Tribunal y sustituido por Joaquín Roncali.
- por Real decreto de 21 de noviembre se nombró en la plaza de fiscal, hasta ese momento vacante, a Antonio Corzo¹⁹⁵ y a este le sustituyó Antonio M. Asensio Bonell¹⁹⁶ que era magistrado de la Audiencia de Zaragoza.

Estos nombramientos en su totalidad, mostraron una tendencia ideológica de corte moderado.

Los tiempos habían cambiado y el Real decreto de 28 de noviembre de 1856 reactualizó el del 5 de enero de 1844, con Seijas Lozano al frente del Ministerio, por el que se restablecieron las Juntas de Gobierno en el Tribunal Supremo de Justicia y se restablecieron las salas de gobierno en los Tribunales suprimidas en 1854¹⁹⁷.

Este cuadro quedó finalmente completado con el incremento ese mismo año de cuatro nuevas plazas en el tribunal, según se recogió en el Real decreto de 12 de diciembre de 1856 y que recayeron en Manuel Ortíz de Zúñiga que hasta ese momento prestaba sus funciones como fiscal del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, Juan Biec que era magistrado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, Eduardo Elío y Jiménez Navarro, regente de la Audiencia de Zaragoza y Felipe Urbina y Daoiz, regente de la Audiencia de Valladolid. Estas designaciones obedecieron a razones de agilidad procesal y se correspondieron con dos moderados y dos independientes, personajes cómodos para el nuevo rumbo político.

Otra de las consecuencias del cambio operado, fue el Real decreto de 28 de noviembre de 1856, por el que se estipulaba el modo de rellenar vacantes en el Tribunal Supremo. En su preámbulo se argumentó que la revolución de 1854 perturbó toda la administración del estado (...) y lanzó casi en masa a los magistrados y jueces de los puestos que ocupaban, para sustituirlos con otros en quienes se creyó que podía la situación creada encontrar adhesión y apoyo (...). Estamos ante un reconocimiento explícito de la politización de la administración de justicia.

El ministro que suscribió tal medida no podía, no debía resistirla, y aconsejó a V.M. la reparación debida a los magistrados depuestos de sus plazas desde aquella fecha por consideraciones puramente políticas y sin consultar sus cualidades.

En la complicada situación política que se vivió en el otoño de 1857 y que provocó la dimisión de Narváez y de todo el Consejo de Ministros, se nombró un nuevo gabinete presidido por Francisco Armero y Peñaranda -que fue ministro de Guerra- y donde

¹⁹⁵ Fue fiscal del Tribunal Supremo en etapa moderada y en 1850 renunció por incompatibilidad con su condición política como diputado (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4333, n. 1620 ver índice de magistrados).

¹⁹⁶ De condición independiente (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4253, n. 197 ver índice de magistrados).

¹⁹⁷ CL. T. LXX (1856) pp. 294 y ss, analizado en el capítulo: Estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Supremo.

Joaquín José Casaus ocupó la cartera de Gracia y Justicia, siendo hasta esos momentos fiscal del Tribunal Supremo, a la vez que el saliente ministro Seijas Lozano pasaba a la fiscalía del Tribunal Supremo con fecha de 30 de octubre. Se nombró, de igual modo, a Ramón López Vázquez, presidente de sala por fallecimiento de Francisco Agustín Silvela al ser el magistrado más antiguo del alto Tribunal.

Con fecha 13 de noviembre se promulgó un Real decreto por el que se nombraba a Ramón Gil Osorio como magistrado del Tribunal Supremo, en sustitución de Fernando Álvarez que anteriormente había sido subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. De igual modo por Real decreto de 21 de noviembre se nombraba a Juan Martín Carramolino al ser el magistrado más antiguo como presidente de sala del Tribunal.

Poco después y por Real decreto de 19 de abril se designó a Buenaventura Alvarado teniente fiscal en el Tribunal Supremo. El 16 de Julio se efectuaron nuevos cambios: José Portilla, ministro cesante del Tribunal Supremo ocupó la plaza de Joaquín José Casaus que había sido nombrado consejero de Estado, Juan Martín Carramolino ocupa una presidencia de sala en sustitución de José de Castro y Orozco que también pasó a ser consejero de Estado y José María Trillo fue designado ministro del Tribunal Supremo en la vacante que dejó Juan Martín Carramolino.

El 23 de agosto se admitieron las dimisiones de destacados miembros de la Comisión de Códigos: Manuel Cortina, Pedro Gómez de la Serna, Pascual Bayarri, Juan Manuel González Acevedo, José Ibarra, Manuel García Gallardo y Francisco de Cárdenas. En el ambiente flotaba la ineficacia de sus trabajos y las permanentes injerencias políticas. Algunos de ellos representaban el sector progresista y desactivar la Comisión entrañaba evitar su capacidad de influencia y mantener una cierta apariencia de pluralismo por parte de un organismo dependiente del ministerio de Gracia y Justicia. Entre tanto se encomendó a ésta comisión especial urgencia en la redacción de una ley orgánica de tribunales, así como las reformas imperiosas y urgentes que demandaba la administración de justicia¹⁹⁸.

Por Real decreto de 4 de marzo de 1859 se nombraba a Félix Herrera de la Riva magistrado del Tribunal Supremo por fallecimiento de José María Trillo. El 16 de julio se produjeron los ceses de Juan Martín Carramolino y de Joaquín Roncali¹⁹⁹ sin que pudiera darse una explicación fundada sobre los mismos, pues no existía información al respecto en sus expedientes personales que nos proporcionaran luces al respecto. En sus ceses se recogió la fórmula tan manida de “sin perjuicio de utilizar oportunamente sus servicios”.

La Proposición de Ley de 19 de mayo de 1860 sobre organización, competencia, gobierno y disciplina de los juzgados y tribunales del fuero común fue el resultado de los trabajos de la nueva Comisión de Codificación del 1 de octubre de 1856 compuesta

¹⁹⁸ CL. T. LXXVII (1858) pp. 147-148.

¹⁹⁹ Siendo magistrado del Tribunal Supremo fue declarado cesante en el bienio progresista y designado ministro de Gracia y Justicia en gobierno moderado, participó en política como diputado en varias legislaturas (AHN, Magistrados y Jueces, l. 600, n. 1658 ver índice de magistrados y apéndice documental).

por: Manuel Cortina, Pedro Gómez de la Serna, J. Manuel González Acevedo, José de Ibarra, Manuel Seijas Lozano, Pascual Bayarri, Pedro José Pidal, y posteriormente se incorporaron: Manuel García Gallardo por renuncia del Sr. Pidal, Francisco Cárdenas por el Sr. Seijas Lozano y Cirilo Álvarez por el Sr. Ibarra. Este texto lo presentó el diputado Ramón Ortiz de Zárate, en un momento en que controlaban la situación política los moderados y en su preámbulo aludía a los seis proyectos que fueron redactados anteriormente por la Comisión²⁰⁰.

En su título V trataba de la traslación, inamovilidad y responsabilidad. Se disponía que no podían realizarse traslaciones no voluntarias en el orden judicial, a no ser previa formación de expediente, salvo cuando el funcionario permaneciera seis años continuos en un juzgado o tribunal. Los funcionarios que formaban el ministerio fiscal “serían trasladados libremente y sin formación de expediente (...)”.

Se disponía, de igual modo, que ningún funcionario del orden judicial podría ser suspendido “sino por auto judicial o en virtud de orden del Rey, cuando éste, con motivos fundados, le mande juzgar por el tribunal competente” y que no podrían ser depuestos sino por sentencia ejecutoriada. Constató que se evita hablar de “poder” en materia judicial, para consolidar la idea que sus integrantes son funcionarios dependientes de la administración:

“siempre que un funcionario del orden judicial cese en su cargo por traslación, ascenso u otra causa, será residenciado por el superior inmediato al cargo que deja, a fin de que se le exija la responsabilidad civil o criminal a que hubiese lugar que también podrá reclamarse sin esperar al juicio de residencia general, siempre que se solicite por la parte agraviada o por el ministerio fiscal, o se decrete de oficio”

Fue éste un período de gran estabilidad en el Ministerio de Gracia y Justicia, pues su titular Santiago Fernández Negrete formó parte del gobierno de la Unión Liberal presidido por O'Donnell durante cuatro años y medio. Entre sus acciones más destacadas se encontraba el Real decreto de 7 de julio de 1860 dictando algunas medidas para la colocación de los magistrados cesantes, con la nueva denominación de supernumerarios, con iguales funciones que los que tenían plaza en propiedad, quedando a disposición del ministro los ritmos y las formas en que esta norma se debía llevar a cabo. Se reproducen las injerencias con nuevas denominaciones no exentas de intencionalidad política, aunque estas nuevas figuras se dieron con mayor frecuencia en las Audiencias.

Se denunciaba en su preámbulo la politización de la justicia y que los magistrados estaban distraídos en movimientos políticos y en discordias que habían ocasionado la existencia de la figura del cesante²⁰¹. Decía el decreto “las innovaciones judiciales que han tenido lugar desde que V. M. ocupa el trono; las luchas de los partidos y alguna vez también la dignidad personal ofendida por injustas preferencias, lanzaron de los

²⁰⁰ Proyectos: 7 enero de 1842; 12 junio de 1846; 21 diciembre de 1847; 23 noviembre de 1850; 6 diciembre de 1853; 19 mayo de 1854 y el de las Cortes Constituyentes de 15 febrero de 1856.

²⁰¹ CL. T. LXXXIV (1860) pp. 36-39

tribunales a un número considerable de dignos magistrados que hoy son un embarazo gravísimo para el gobierno; y una censura severa de la conducta que viene observándose con una institución que debía hallarse fuera del tiro político”.

Estos fueron repuestos en sus destinos, se evitaron agravios, se solucionaron problemas y se moderó el presupuesto, cuestión ésta nada baladí.

En razón a esta nueva política se produjeron nuevas reubicaciones en los destinos del Tribunal Supremo: Laureano Rojo de Norzagaray ocupó, como magistrado supernumerario, la vacante ocasionada por Fernando Calderón Collantes, liberal²⁰², Pedro Pablo Gómez, regente de la Audiencia de La Coruña, recibió la consideración y honores de magistrado del Tribunal Supremo, aunque no ocupó plaza como tal y Juan Martín Carramolino, presidente de sala cesante del tribunal, fue designado magistrado supernumerario del Tribunal Supremo. Un mes más tarde fue nombrado presidente de sala del Tribunal Supremo por fallecimiento de Ramón María Fonseca.

Se señalaba también y, derivada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los suplentes que debía tener el alto tribunal, y que los supernumerarios debían ejercer sus funciones con carácter permanente y su actividad directa en todas sus competencias. Para después aclarar las medidas adoptadas:

“la circunstancia de ser el número de cesantes igual, con corta diferencia, al de magistrados supernumerarios favorece la ejecución del poder que se ha propuesto el gobierno de darles colocación en estas plazas”

Y por ello se decretó en el artículo 1º que habría en el Tribunal Supremo de Justicia y en cada una de las Audiencias del reino, en el lugar de los suplentes actuales, un número de magistrados supernumerarios igual a la tercera parte de los que componen la planta fija, mientras existieran cesantes y no se organizaran definitivamente los tribunales.

Se definieron las capacidades de nombramiento de los magistrados supernumerarios, que recayeron en la persona del ministro y en favor de los cesantes, siempre en consideración de las necesidades de eficacia y buena administración de la justicia (quedó regulado en el artículo 2º).

Los siguientes artículos constataron una intromisión del ejecutivo en este tipo de designaciones: “para las plazas de ministros supernumerarios del Tribunal Supremo de Justicia, se me propondrán cesantes del propio tribunal (...). Los magistrados supernumerarios desempeñarán las mismas funciones que los de número, y tendrán asignación en una de las salas” y “de cada tres plazas que resulten vacantes en el Tribunal Supremo (...), una se dará precisamente a los ministros y magistrados supernumerarios, otra al ascenso, y la tercera a la libre elección”

²⁰² Perteneció al partido doceañista, identificado con las ideas liberales y con el paso del tiempo no existen valoraciones políticas que le encuadren en la facción liberal de la Unión Liberal, participando en un gobierno de O'Donnell como ministro de Gracia y Justicia, participó como diputado en varias legislaturas (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 573, n. 321 ver índice de magistrados y apéndice documental).

Con este decreto se anulaba la figura del suplente y de alguna manera se seguía perpetuando la libre discrecionalidad del ministro a la hora de designar el 33% del cupo que existía. Este porcentaje podía elevarse a las 2/3 partes si tenemos en cuenta que en ningún sitio se articulaba la prioridad en la elección del cesante; es decir si había una vacante ¿en favor de quién se otorgaba esa plaza si eran varios los cesantes en esa instancia jurisdiccional? La potestad era del ministro siempre. Se pretendía por tanto restituir el daño causado por motivaciones políticas pero ocasionando nuevos males que derivaron en otros desajustes aunque el fundamento original fuera razonable.

Tenemos que decir seguidamente, que este proceso fue habitual en las Audiencias donde existían estimaciones de hasta 79 magistrados cesantes de un total de 170 plazas²⁰³ y fue inusual en el Tribunal Supremo donde ese mismo año, 1860, salvo el caso de Juan Martín Carramolino no se produjeron más designaciones de esta naturaleza. Excepto esta situación, las demás vacantes que se fueron produciendo se hicieron por designación del ministro y con magistrados nuevos que accedieron a partir de una jubilación o de un fallecimiento. Este decreto se completó con una orden de 20 de diciembre, en la que se determinó la antigüedad y puesto que debieron ocupar los magistrados supernumerarios²⁰⁴.

El nombramiento de 19 de mayo de 1861, de Ventura de Colsa y Pando por jubilación de Miguel Osca y Guerau de Arellano, supuso un nuevo atentado a la independencia judicial, según quedó reflejado en el trabajo de Pareja Alarcón²⁰⁵, pues no se siguieron los pasos reflejados en los decretos promulgados de ubicación de los antiguos cesantes. Así lo manifestaba: “declárese un decreto para que en adelante no haya nombramiento ni separación de la carrera judicial sin previa audiencia del Tribunal respectivo y del Consejo de Estado...”

La legislatura 1861-1862 comenzó con una participación de la minoría progresista en la acción gubernamental por concesión de los moderados. El 21 de marzo de 1862 se designó a Antonio Corzo y Granado, fiscal del Tribunal Supremo. Y el 4 de abril de 1862 a Anselmo Urra y Cereceda magistrado del Tribunal Supremo por jubilación de Vicente Valor según los criterios establecidos.

La sustitución de Pedro Nolasco Auriolos por Rafael Monares y Cebrián, representante de los moderados unionistas, al frente del ministerio de Gracia y Justicia el 3 de marzo de 1863, tuvo un gran impacto en el orden legislativo: dos decretos, ocho órdenes y cinco proyectos sobre organización de Tribunales, ley de Enjuiciamiento criminal, reorganización del Tribunal Supremo, reforma de la casación en lo criminal y Ley Orgánica de Tribunales de Comercio.

La comisión encargada de redactar las bases de la nueva organización de tribunales, hizo saber la imposibilidad de acometer tan arduos trabajos en materia de organización de tribunales y de procedimiento de enjuiciamiento criminal y por ello planteó la opción

²⁰³ J. Paredes, *La organización de la justicia en la España liberal: los orígenes de la carrera judicial (1834-1870)*. Civitas, Madrid, 1990 p. 169

²⁰⁴ CL. T. LXXXIV (1860) pp. 513-514

²⁰⁵ FN. (1861) parte doctrinal, p. 265, volviendo a hacer referencia en la p. 768.

de redactar unas bases previas que posteriormente permitieran al gobierno la finalización definitiva de los textos.

Estas bases se presentaron el 26 de abril de 1863 a través de un Real decreto. Según reconoció su ponente el Sr. Gómez de la Serna, estas bases dieron una nueva orientación a la legislación existente y, en algunos casos, sus conceptos y fundamentos se apartaron con notoriedad de las leyes vigentes. Redactaron 36 bases en las que se consagró el principio de inamovilidad (base 19) y el régimen efectivo de incompatibilidades (base 2).

El trabajo desarrollado sobre incompatibilidades contemplaba, el que sólo los senadores podrían desempeñar la condición de magistrados del Tribunal Supremo. Si tenemos en cuenta que todavía un gran número de éstos eran designados por la corona y otros eran electos, pudiéramos convenir en una cierta politización del órgano, o al menos la posibilidad de que ello se pudiera producir²⁰⁶. Posteriormente una orden promulgada el 8 de septiembre de 1863 prohibió explícitamente a los jueces participar en política²⁰⁷.

Con independencia del interés que ofreció la incompatibilidad del ejercicio de las funciones judiciales con todo cargo político o administrativo se proclamó²⁰⁸ que para hacer efectiva la inamovilidad proclamada en la Constitución, se determinarían los casos en que era procedente la destitución de los jueces y magistrados, reducidos a los tres siguientes: condena a pena aflictiva o correccional, corrección disciplinaria por hechos graves, que sin constituir delito comprometan la dignidad del ministerio o hagan desmerecer en el concepto público al funcionario y la declaración de responsabilidad civil o criminal, dos ó más veces. En los dos últimos casos, la destitución competía al Tribunal Supremo, oyendo al fiscal y al interesado.

Se añadió una cláusula posteriormente que prohibió el traslado sin la conformidad del funcionario por diversas causas, entre ellas la disidencia grave con los demás magistrados que componían el tribunal. Se entiende como una garantía procesal a favor del juez cuestionado evitando cuestiones personales entre los magistrados.

En la base 2ª donde se enunciaba la incompatibilidad de los cargos judiciales con los políticos se argumentó el hecho que hubo épocas en que la agitación de los partidos políticos había interferido en la administración de justicia y por ello se vio oportuno declarar la incompatibilidad exceptuando a los magistrados del Tribunal Supremo para dar armonía a la Constitución y por conveniencia pública, se llamaba a la magistratura como cuerpo colegislador (en el Senado).

La base 17 contempló que sólo el Tribunal Supremo podía destituir a un magistrado, siempre oyendo al fiscal y al interesado en los siguientes supuestos: por corrección disciplinaria en hechos graves que sin constituir delito comprometan la dignidad del

²⁰⁶ Estudio de las Bases en el capítulo de Estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Supremo.

²⁰⁷ Venía a reforzar un Decreto de 19 de agosto de ese año sobre incompatibilidades de los funcionarios del orden judicial.

²⁰⁸ ACGC.(1863) l. 7 de organización de tribunales, c. 4.

ministerio o hagan desmerecer en el concepto público del funcionario y por declaración de responsabilidad civil o criminal, dos o más veces.

En la base 19 quedaba fuera de toda discusión la inamovilidad de jueces y magistrados y el Tribunal Supremo se convertía en árbitro ante cualquier acto sometible a destitución.

Había un indudable avance en este sentido que no se materializó en el alto tribunal, pues siguió siendo centro de interés y de disputas de los partidos políticos, pues en ese ámbito judicial era donde se dirimían los más altos anhelos y ambiciones de control del estado.

Las Bases fueron analizadas en el Senado sin importantes alteraciones e incluso Ortiz de Zúñiga, magistrado después del Tribunal Supremo, aceptó muy favorablemente este proyecto de bases que avanzaba de igual modo en el terreno siempre difícil de la modificación de fueros.

El 6 de noviembre de 1863 el gobierno, tras la aprobación de la comisión de las bases trabajadas, presentó algún proyecto nuevo²⁰⁹ donde se destacó claramente que el Tribunal Supremo en pleno conocería y resolvería de las causas contra su presidente, los presidentes de sala y el fiscal. Se reorganizaron las salas del Tribunal Supremo en función de lo que contemplaba la base 34 y se aumentó el número de magistrados.

La configuración del Tribunal estuvo sometida a la voluntad del gobierno, pues técnicamente existieron otras propuestas más ajustadas a la realidad y volumen de trabajo ordinario con el que se encontraba la magistratura, sin que se tuvieran que introducir planteamientos ajenos a los propios criterios de los técnicos²¹⁰.

El 30 de septiembre de 1864 fue designado el moderado Ramón López Vázquez, Presidente del Tribunal Supremo, al ser el presidente de sala más antiguo en sustitución de Lorenzo Arrazola que fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia, y su mandato duró hasta el 15 de octubre de 1868. Ese hueco fue cubierto por Joaquín Roncali que volvía de ese modo al Tribunal Supremo.

Posteriormente decretos designaron a Buenaventura Alvarado, independiente²¹¹, magistrado del Tribunal Supremo al ser designado Manuel García de la Cotera presidente de sala y a Manuel José de Posadillo y Bonelli, moderado²¹², magistrado del Tribunal Supremo en sustitución de Domingo Moreno que fue nombrado consejero de

²⁰⁹ DSC (1863) a. 3

²¹⁰ Según se desprende de la lectura del Proyecto de ley provisional de 27 de mayo sobre organización y atribuciones del Tribunal Supremo.

²¹¹ Existen informes favorables en 1840 y 1841 sobre el desempeño de sus funciones aunque fue separado por la Junta de la provincia, desarrolló su actividad en distintas etapas y fue diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4250, n. 169 ver índice de magistrados).

²¹² Siendo magistrado del Tribunal Supremo el 27 de octubre fue declarado cesante según él: “sin causa a mi juicio, que le hubiese hecho desmerecer en el concepto público por el gobierno provisional salido de la revolución”, estuvo separado de su destino hasta que finalizó el Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4665, n. 5797 ver índice de magistrados).

Estado. Culminó el año, en el terreno de las designaciones con el nombramiento de Sebastián González Nandín como presidente de la sala de Indias por jubilación de José Gamarra y Cambroner²¹³.

Este año de 1864 finalizó desde el punto de vista político con una separación del progresismo de los compromisos alcanzados con los moderados y un posicionamiento de futuro estrictamente anti-isabelino. Se produjo en septiembre una crisis de gobierno y el acceso de Narváez a las riendas del poder, con un compromiso hacia el pasado que cumplió: tolerancia y capacidad de llegar a acuerdos para que la situación en España se calmara desde todos los ámbitos.

En este mismo año se analizaron los proyectos en marcha en el orden judicial y no cabe resaltar ninguna novedad relevante, sino las reformas parciales de las Bases de 1863, no referidas sustancialmente al funcionamiento del Tribunal Supremo. Quiero resaltar, que todavía por entonces una norma advertía de los riesgos que atravesaba la independencia judicial afirmando que “uno de los males que más tendría que lamentar un país sería el de una justicia política”²¹⁴.

El 20 de marzo de 1865 se produjo una fuerte discusión parlamentaria entre Calderón Collantes y el ministro Arrazola sobre la posibilidad de inconstitucionalidad que presentaban algunos de los contenidos aprobados²¹⁵ y que fueron fruto de las reformas planteadas en la comisión. Esta discusión fue consecuencia directa de las reformas propiciadas sobre los contenidos de las Bases y que supusieron un intervencionismo político que desnaturalizaba el espíritu originario que mantuvo la comisión en su fase de redacción. En concreto se modificaron las Bases 33, 34 y 35 que enunciaron, en síntesis que “el gobierno tendrá atribuciones para mover al Fiscal del tribunal Supremo o a cualquier funcionario de la fiscalía de éste por cuestiones de confianza”.

²¹³ FN (1863)

²¹⁴ Se actualizó la petición de inamovilidad realizada por Gómez de la Serna cuando dijo en 1861 “proclamemos con resolución y firmeza que queremos una magistratura que no sea ni absolutista, ni conservadora, ni progresista, ni democrática, sino ajena a todos los colores políticos, igual para todos los hombres, sean cualesquiera sus opiniones, independiente de las elecciones y caídas de Ministerios, imparcial por su misma constitución, compuesta no de los más adictos a las ideas o a las personas de los que dirigen el estado, sino de los más dignos por su saber, por sus hábitos de estudio y por sus virtudes y de los más inaccesibles a los halagos de la ambición, o las influencias del poder, y a los compromisos que bajo mil formas los litigantes y los acusados suscitan con el propósito dañado de separarlos del camino de la justicia”. Y formulaba las condiciones objetivas de separación de las funciones judiciales: “no es (...) ventajoso que aparezcan sentados administrando justicia los que ya han perdido su antigua aptitud, y los que faltando a lo que se deben a sí mismos y a la clase a que pertenecen, se manchan con vicios intolerables en los que por su profesión y funciones son llamados a ser ejemplos de moralidad, de severidad y de compostura. Es por otra parte esta facultad favorable a los jueces probos, entendidos y libres de semejantes vicios, porque esa omisión en la ley fundamental ha sido el pretexto mas especioso que han tenido los Ministros para quebrantarla: en la necesidad en que se veían en algún caso de separar a un magistrado o a un juez por causas sobradamente justificadas han encontrado el medio de destituir caprichosamente a cuantos les ha convenido, y a veces para hacerlo poco menos que en masa”.

²¹⁵ Así se refleja en DSC. (1865) de 20 de marzo y en FN (1865)

Esta cuestión la subrayo, por el cariz que tomaron poco después los acontecimientos ya que el 21 de junio de 1865 se produjo la dimisión de Ramón M. Narváez como Presidente del Consejo de Ministros y la sucesión en favor de O'Donnell y en ese cambio de gabinete, la cartera de Gracia y Justicia la ocupó Fernando Calderón Collantes en sustitución precisamente de Lorenzo Arrazola, enfrentados los dos en numerosas ocasiones sobre aspectos de desarrollo y contenido de la legislación judicial y por las posiciones más progresistas del primero continuamente reflejadas en debates parlamentarios frente al moderantismo de Arrazola.

El señor Collantes, parlamentario, ya había expresado su temor en el Senado²¹⁶ y su discrepancia en torno a la centralización de atribuciones en torno al Tribunal Supremo y cómo se debía organizar el ministerio fiscal.

La inestabilidad política traducida en inseguridad institucional, llevó a personas como José María Manresa y Navarro (1865), moderado²¹⁷ y Joaquín Roncali (1866) a salir del Tribunal Supremo por apuestas políticas opuestas a las que se mantuvieron oficialmente²¹⁸. Los cambios operados en 1866 (hasta seis) se produjeron por jubilación o fallecimientos y Rafael Limiciana y Brignoles fue nombrado consejero de Estado y cesó en el Tribunal, siendo sustituido por el independiente Hilario Ygón de Royst.

Con la presencia de Lorenzo Arrazola en el Ministerio de Gracia y Justicia en sustitución de Calderón Collantes el 10 de julio de 1866, volvió a recrudecerse el intervencionismo en la esfera judicial. En este sentido, cabe entender el Proyecto de Ley de 4 de abril de 1867 sobre la reforma de la casación en el Tribunal Supremo.

Fue ésta, una ocasión para menoscabar a la Comisión de Códigos que ya venía trabajando en este sentido, aduciendo: “razones de urgencia, peculiaridades de la legislatura y conveniencia de dicha reforma” se introdujo este texto, que como novedad más sustantiva presentó definitivamente la sala de admisión o de previo examen y que en uno de sus artículos autorizaba al gobierno para ejecutar este proyecto y así proceder a la reforma del Tribunal Supremo en consonancia con lo dispuesto en aquel.

De este modo Arrazola convulsionó el respeto que se vino manteniendo hasta la fecha en el alto tribunal y ello provocó de inmediato la salida del mismo de personalidades de tanta relevancia como Eusebio Morales Puigdevau, independiente²¹⁹, (cesante el 10 de abril), José Portilla y Guitiérrez, independiente, (cesante el 10 de abril), Sebastián González Nandín, independiente, (cesante el 10 de abril), Manuel Ortiz de Zúñiga, moderado²²⁰, (cesante el 10 de abril) y Juan Martín Carramolino, moderado,

²¹⁶ “Discusión en el Senado en marzo de 1865” *RGLJ*, sesiones 20, 21, 22, 23 marzo, p. 388.

²¹⁷ Fue subsecretario de Gracia y Justicia así como secretario de gobierno del Tribunal Supremo durante mandatos moderados (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4569, n. 4886 ver índice de magistrados).

²¹⁸ Ver apéndice documental.

²¹⁹ No existen informes políticos quizás por su condición de militar, fue diputado en una legislatura (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4572 n. 4907 ver índice de magistrados).

²²⁰ En informe de la Diputación provincial de Granada el 12 de enero de 1841 se decía que desde que llegó a Granada observó la más criminal conducta política ya que se puso a la cabeza del partido

(cesante el 10 de abril). Tres de ellos eran presidentes de sala, con la trascendencia que ello conllevaba.

Y se incorporaron: Buenaventura Alvarado independiente, que era teniente fiscal en la plaza de Eusebio Morales, Pascual Bayarri, moderado²²¹, a la plaza de Felipe Urbina y Daoiz, Calixto Montalvo y Collantes, moderado²²², a la plaza de Gabriel Ceruelo, Francisco de Paula Salas, independiente²²³, a la plaza de Eduardo Elío Jiménez Navarro, Felipe de Urbina y Daoiz, moderado²²⁴, fue nombrado presidente de la Sala de Indias, Eduardo Elío y Jiménez, moderado²²⁵, fue nombrado presidente de la sala 1ª, sección 2ª y Gabriel Ceruelo de Velasco, independiente²²⁶, fue nombrado presidente de la sala 1ª, sección 2ª. Todos estos cambios fueron inmediatos por la situación acaecida. El 7 de agosto se nombró a Joaquín Jaumar de la Carrera, progresista²²⁷, ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de José María Pardo Montenegro.

Durante estos años hasta 1868 los trabajos legislativos se centraron en temas tan vitales como: la composición orgánica del Tribunal Supremo, en las reformas del enjuiciamiento criminal y en la casación. Consecuencia directa de ese anhelo fueron las Bases de Organización de tribunales de 1868. A nivel de decretos interesa mucho resaltar, por lo que tuvo de base orientativa, el de 13 de diciembre de 1867²²⁸ que fijaba los grados de la magistratura y del ministerio fiscal, formando escalas generales y determinando las condiciones de ingreso y ascenso en las carreras, así como el lugar que habían de ocupar los funcionarios. Con este texto se salvaguardaban los incumplimientos y arbitrariedades tan utilizadas en la consolidación de los puestos de

moderado influyendo en las elecciones de un modo violento y de acuerdo con el general Palarca tiranizó a los liberales progresistas en unión también del jefe político Cambroneró cuyos antecedentes fueron la justísima causa de su separación, se le cesó como Regente de la Audiencia de Granada en el período revolucionario siendo repuesto después (AHN, Fondos contemporáneos, l. 595 n. 1399 ver índice de magistrados y apéndice documental).

²²¹ No existe el expediente personal de este magistrado encontrando estos datos en la certificación que hizo D. Francisco Segura y Atienza, secretario del Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia, en relación con los servicios prestados en su empleo. Sus nombramientos se corresponden con etapas moderadas tanto en la vertiente judicial como política: subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia, fue diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4243 n. 34 bis ver índice de magistrados).

²²² El 22 de mayo de 1846 el jefe político de La Coruña dice de él “ es uno de los funcionarios que más se ha esmerado en combatir por su parte la rebelión (...) y por ello merece ser ascendido (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4574, n. 4924 ver índice de magistrados).

²²³ Informe favorable de la Junta de arreglos en 1823 , fue diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4747, n. 7255 ver índice de magistrados).

²²⁴ Fue separado el 30 de septiembre de 1840 por la Junta de arreglos de tribunales por creerle en ideas no conformes con el pronunciamiento, y los diputados de Valencia en 1855 dicen de él que es de ideas moderadas e incluso antes de 1823 absolutista (AHN, Fondos contemporáneos, l. 3713, n. 6674 ver índice de magistrados).

²²⁵ De los pocos datos de los que disponemos debo decir que fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en la etapa moderada inmediatamente después del bienio progresista y curiosamente deja su puesto cuando llega el Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4859, n. 10274 ver índice de magistrados).

²²⁶ No tenemos informes políticos sobre él (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4328, n. 1553 ver índice de magistrados).

²²⁷ Fue diputado por el partido progresista en el período 1837-1840 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4496, n. 3913 ver índice de magistrados).

²²⁸ CL. T. XCVIII (1867) pp. 854-861

trabajo de los magistrados con independencia de cuando hubieran sido designados y del período político del nombramiento.

Los proyectos que estaban en marcha desde hacía más de tres años fueron revitalizados en un contexto previo al conflicto político y así bajo el mandato del ministro Joaquín Roncali se presentó al Senado el proyecto de ley orgánica de tribunales y de procedimientos en materia criminal²²⁹.

La comisión del Senado encargada de informar del proyecto emitió su dictamen²³⁰ aceptándolo y añadiendo algunas bases nuevas que tenían por objeto garantizar la inamovilidad de los funcionarios judiciales y con este fin se erigieron como bases de la nueva ley orgánica.

Sus contenidos básicos desarrollaron: el señalamiento de requisitos y condiciones para el ingreso y ascenso en la carrera judicial y fiscal; la inamovilidad de los jueces y las limitaciones necesarias de esta cualidad; la amovilidad de los funcionarios del ministerio fiscal, previo expediente gubernativo; la responsabilidad de los jueces y de los funcionarios del ministerio fiscal; el establecimiento de la planta de tribunales del fuero común por jueces, tribunales de primera instancia en lo civil y a la vez de única instancia en lo correccional, las Reales Audiencias y el Tribunal Supremo.

Este proyecto fue descartado por el ministro de manera singular²³¹ y con una clara intencionalidad: “este proyecto de ley no pertenece a la política, no es nada político,...”. Este posicionamiento tan expreso y rotundo no dejó, sin embargo, de sufrir críticas durante las largas y extensas sesiones parlamentarias y así destacó la que hizo el Sr. Dauvila²³²:

“los ministros Monares y Arrazola presentaron 36 bases ¿han sido inútiles o ineficaces, o el Sr. Ministro actual no presenta todas las que se necesitan para formar ley orgánica y de competencia de los Tribunales españoles?”

Y el diputado Sr. Paz destacó en ese mismo debate sobre la inamovilidad judicial:

“una sincera lamentación (...) o mejor las miserias de nuestra patria, hayan alejado del Tribunal Supremo eminentes y distinguidos magistrados, que eran y son ornamento de la toga española y de cuyos insignes servicios está privada aquella alta institución”

Volvíamos a la pugna entre los más destacados liberales progresistas y los partidarios de reformas moderadas pero sólidas. El ministro Roncali en este sentido dijo²³³:

²²⁹ RGLJ. T. 32 (1868) p. 44.

²³⁰ RGLJ. T. 32 (1868) p. 108.

²³¹ RGLJ. T. 32 (1868) p. 441.

²³² DSC. (1868) de 18 de marzo pp. 184-240

²³³ RGLJ. T. 33 (1868) pp. 235-240.

“han existido proyectos constitutivos de tribunales en 1842, 1846, 1847, 1848, 1853 y 1854 que son sólo bases y no hay un sólo proyecto que contenga toda la ley (...).

Este gobierno ha presentado aquí esta ley, la más progresista y la más liberal, en el verdadero sentido de la palabra que ha venido a las Cortes españolas,...”

Este proyecto se sancionó definitivamente en la ley de 11 de abril de 1868²³⁴ con los añadidos formulados en la Comisión del Senado, dejando en manos del gobierno la posibilidad de arbitrar actuaciones urgentes por vacío legal hasta su definitiva redacción.

El último Real decreto que se promulgó en este período fue el de 8 de agosto de 1868, por el que se incorporaron nuevos miembros a la Comisión de Codificación. Se aumentó el número de siete a once miembros con el objeto de aliviar y disminuir el trabajo que tenían por delante.

Los nuevos integrantes estaban fuera de toda sospecha, pues eran profundos conocedores de la ciencia jurídica y su trayectoria así lo avalaba. Estos eran: Laureano de Arrieta, independiente, José María Herreros de Tejada, independiente²³⁵, Luciano de la Bastida, independiente²³⁶, y José de Entrala y Perales, independiente²³⁷. Todos ellos miembros del Tribunal Supremo²³⁸, que compatibilizaron su condición con la responsabilidad en la redacción de los trabajos técnicos desde la comisión. Los demás miembros que la integraron fueron: Manuel Cortina, como presidente, Pedro Gómez de la Serna, Juan Manuel González Acevedo, Pascual Bayarri, Manuel García Gallardo, Francisco Cárdenas y Cirilo Álvarez.

6. Sexenio Revolucionario: septiembre 1868 – 1874: la consolidación del Poder Judicial

La inestabilidad de los gobiernos previos creó una situación propicia para la unión sellada en el exilio de los disidentes progresistas con los demócratas y republicanos, desembocando en la revolución de septiembre de 1868 encabezada por los generales Prim y Serrano y con la expatriación de Isabel II en Biarritz. Se unieron los unionistas, progresistas y demócratas y constituyeron el primer gobierno revolucionario al frente del cual se halló Francisco Serrano.

²³⁴ RGLJ. T. 28 (1868) p. 449.

informe²³⁵ No existen s políticos (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4492, n. 3884 ver índice de magistrados y apéndice documental).

²³⁶ No existen informaciones políticas que le adscriban a algún sector (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4297, n. 1069 ver índice de magistrados).

²³⁷ No existen informaciones políticas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4385, n. 2231 ver índice de magistrados).

²³⁸ ACGC. (1868) l. 1 de organización de la comisión, c. 20, d. 88

Los objetivos fundamentales del gobierno revolucionario en el ámbito judicial fueron: el establecimiento del juicio por jurados en lo criminal, la declaración de la unidad de fueros en la Administración de justicia única y la inamovilidad judicial.

Recién llegados los nuevos dirigentes políticos, y con fecha de nueve de diciembre de 1868, la Comisión de Codificación dirigió un escrito al ministro, Antonio Romero Ortiz, en el que le remitía un proyecto de organización de Tribunales, texto que estaba en fase muy avanzada, al igual que el proyecto de enjuiciamiento criminal.

En este documento la comisión hizo observar el desagrado que habían producido los últimos nombramientos de vocales (referido a los recién nombrados con la premura del inminente cambio político) por entender que ello suponía la censura a los trabajos y representantes que desde 1856 vinieron desarrollando sus tareas de una manera digna y ejemplar e incluso sin recibir el más mínimo apoyo del gobierno en cada momento²³⁹.

El 25 de diciembre de 1868 y a través de un decreto se reorganizó la Comisión de Codificación, tras un análisis detenido del ministro, encomendando a los nuevos miembros que acometieran las reformas emprendidas según se recogía en el propio decreto²⁴⁰.

Una de las primeras actuaciones del gobierno revolucionario fue la promulgación del decreto de 12 de octubre de 1868 por el que se nombraba a Joaquín Aguirre de la Peña, progresista²⁴¹, Presidente del Tribunal Supremo, en sustitución de Ramón López Vázquez, moderado y cuyo mandato se extendió hasta el 19 de julio de 1869. Se nombraba un significado progresista en consonancia con la nueva dinámica política.

Una auténtica revolución se produjo en el Tribunal Supremo con el advenimiento de este proceso revolucionario que llevó a la alta magistratura a nuevos miembros: José Portilla y Gutiérrez (es repuesto un año después de que Arrazola le declarara cesante), independiente, Sebastián González Nandín (repuesto por los mismos motivos que el anterior), independiente, Manuel Ortiz de Zúñiga (repuesto en las mismas condiciones que los anteriores), moderado, José Fermín Muro y Gómez (en nueva plaza), progresista²⁴², Manuel María Basualdo, progresista²⁴³, Juan Manuel González Acevedo,

²³⁹ ACGC. (1868) l. 1 de organización de la comisión, c. 20, d. 92 bis y 93

²⁴⁰ “para que estos (los nuevos) que aún no ha empezado a desempeñar sus cargos, tomen parte en los trabajos de la Comisión, sería necesario, o que aceptasen las bases enunciadas, con las que tal vez no estarán conformes, y se representaría así entonces esos trabajos de la indispensable homogeneidad, o que se procediese de nuevo a la dimisión y aprobación de esas mismas bases; y de ello resultaría un inconveniente en el primer caso, y una dilación en el segundo, para la perfección y terminación de los Códigos aún no concluidos, de los ya acabados que hay que armonizar con los principios antes citados y de los promulgados y vigentes que es oportuno modificar”.

²⁴¹ Identificado con el ideario progresista, el 7 de diciembre de 1843 dijo “ que en el día podría suceder que mis convicciones como diputado estén en oposición con las del gobierno”, fue ministro de Gracia y Justicia en el bienio progresista y presidente del Tribunal Supremo al comienzo del Sexenio revolucionario, en 1865 ocupó una de las cuatro vicepresidencias del partido progresista y presidió la Junta revolucionaria en septiembre de 1868, figuró en las filas progresistas desde 1837, participó como diputado en varias legislaturas (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 556, n. 12 ver índice de magistrados).

²⁴² Designado a dedo magistrado de la Audiencia de la Coruña en 1840 tras la revolución progresista dada la falta de éstos que pasaron a ser diputados. Participó en los acontecimientos revolucionarios de 1843 en

progresista, Antonio Gutiérrez de los Ríos progresista²⁴⁴ y Julián de Santisteban, independiente²⁴⁵.

En esta nueva configuración -desde el análisis político- destaco la presencia de un colectivo complejo y plural: algunos significados progresistas, de moderados enfrentados a la etapa de Arrazola y de algunos independientes.

Y entre los ceses se dieron los de: Ramón López Vázquez (se jubila a petición propia el 13 de octubre -no exenta de motivación política-), moderado, Manuel José Posadillo y Bonelli (cesante el 27 de octubre por el gobierno provisional), moderado, Hilario de Ygon (se le jubila el 10 de noviembre por acontecimientos políticos), conservador²⁴⁶, Vicente Ferrer y Minguet (cesante el 12 de noviembre), moderado²⁴⁷, Leandro López Montenegro (cesante el 14 de noviembre), conservador²⁴⁸, José Muñiz y Alaix (cesante el 14 de noviembre), independiente²⁴⁹, Antonio M^a Prida y Sánchez (cesante el 14 de noviembre), moderado²⁵⁰, Joaquín de Palma y Vinuesa (se jubila el 16 de noviembre por orden del gobierno provisional), progresista²⁵¹ y Miguel Bataller (se jubiló el 24 de octubre), moderado²⁵². La mayoría de estos magistrados se situaban en la esfera política moderada y conservadora.

La Coruña y nombrado magistrado del Tribunal Supremo al comienzo del Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4559, n. 4882 ver índice de magistrados).

²⁴³ El 8 de junio de 1837 la Junta para preparar arreglos de tribunales lo considera acreedor a continuar sus servicios y nombrado magistrado del Tribunal Supremo en el comienzo del Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4296, n. 1060 ver índice de magistrados):

²⁴⁴ Dilatada trayectoria política como diputado en varias legislaturas y designado magistrado del Tribunal Supremo al comienzo del Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4435, n. 2989 ver índice de magistrados).

²⁴⁵ Participó en la administración de justicia en periodos políticos diversos (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4617, n. 5409 ver índice de magistrados).

²⁴⁶ Llevando dos años como magistrado del Tribunal Supremo se le jubiló el 10 de noviembre de 1868 por los acontecimientos políticos acaecidos y se le repuso en 1875 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4494, n. 3901 ver índice de magistrados).

²⁴⁷ No existen datos en su expediente, pero es de reseñar que sus separaciones de destino se produzcan en los tres momentos de hegemonía progresista: 1848, 1854 y 1868 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4411, n. 2692 ver índice de magistrados).

²⁴⁸ Informe en 1844 que dice de él: se le nombró teniendo en consideración su probidad, conocimientos y adhesión al gobierno de V. M.”, fue declarado cesante en la Audiencia de Barcelona al comienzo del Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 751, n. 12004 ver índice de magistrados).

²⁴⁹ No existen informaciones políticas que le adscriban a alguna opción (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4571, n. 4899 ver índice de magistrados).

²⁵⁰ Fue declarado cesante en los periodos progresistas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4660, n. 5743 ver índice de magistrados).

²⁵¹ Fue separado por el pronunciamiento de 1840, pero el 13 de noviembre de ese año se informó bien de él: “progresista a cuyo partido votó en las elecciones”, el 9 de febrero de 1855 se emiten informes favorables y el 16 de julio sobre su conducta política, los diputados de Sevilla dicen de él: “de buena opinión como liberal y magistrado” (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4734, n. 7079 ver índice de magistrados).

²⁵² Solicita la jubilación en etapas liberales, y al no tenerla se le declara cesante, en 1866 se le nombra magistrado del Tribunal Supremo y se jubila justo cuando comienza el Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4292, n. 1017 ver índice de magistrados).

Tarea prioritaria de este primer gobierno fue presentar a las Cortes, de mayoría progresista, una Constitución que fue promulgada el 6 de junio de 1869. Esta Constitución como comenta el prof. Álvarez Cora²⁵³ asumía un criterio de primacía legislativa en el entendimiento y aplicación de la tradicional doctrina de la división de poderes, un análisis también compartido por el prof. Clavero²⁵⁴ en afirmación directa que nunca se definió un verdadero poder judicial y sí una función delegada.

Consecuencia directa de ésta, fue la redacción de la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial. Durante muchas décadas, la falta precisamente de una ley orgánica, había sido el argumento constante para justificar la dependencia del poder judicial al sistema político articulado a través de los partidos políticos. Anteriormente, Ruiz Zorrilla al frente del ministerio, había abierto el camino para arbitrar un cambio radical en el ámbito judicial y se pronunció en los siguientes términos:

“(…) me propuse en Gracia y Justicia, como en Fomento, reformar toda la legislación, que era un arma de combate para la hueste reaccionaria, o estaba en contradicción, con los adelantos de la ciencia política, o no se acomodaba a los principios consignados en el gran Código de 1869”²⁵⁵.

En su título VII, artículo 95 referido a la inamovilidad se insistía en los mismos términos que textos constitucionales anteriores:

“los magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por sentencia ejecutoria o por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, y a tenor de lo que se disponga en la mencionada ley orgánica. Tampoco podían ser trasladados sino por Real Decreto expedido con los mismos trámites; pero podrán ser suspendidos por auto de Tribunal competente”.

En los artículos 96 y 97 se dispuso que los tribunales, bajo su responsabilidad, no darían posesión a los magistrados o jueces que no hubieran sido nombrados con arreglo a la Constitución y a las leyes. Más adelante se recalcó “los ascensos en la carrera judicial se harán a consulta del Consejo de Estado”.

Estos artículos fueron más desarrollados en el decreto de 3 de julio de 1869, dictándose varias disposiciones para que fuera una realidad definitiva la inamovilidad como principio de independencia judicial. Se definió la carrera judicial, las propuestas de candidatos a plazas y destinos y las instancias de supervisión donde el Consejo de Estado jugó un papel de árbitro.

²⁵³ E. Álvarez Cora, *La arquitectura de la justicia burguesa, una introducción al enjuiciamiento civil en el s. XIX*, Centro de Estudios Políticos e Institucionales, Madrid, 2002 pp. 71-72.

²⁵⁴ B. Clavero, *Manual de historia constitucional de España*, Madrid, 1990, pp. 108 y 114 : “ no se dibuja un poder judicial en rigor: los derechos no son declarados de suerte que prevalezcan sobre la ley, antes bien ésta siempre predomina; la justicia se manifiesta como una función independiente, pero no como un poder, dada su sumisión a la ley, dada la inexistencia de un control de inconstitucionalidad: poderes al fin sólo son el legislativo y el ejecutivo”

²⁵⁵ J. M. Martínez Val, *Montero Ríos y su tiempo*, Madrid, 1980, p. 65

En el art. 98 de la Constitución de 1869, se estableció en cuanto a la responsabilidad: “cuando dichos abusos constituyan delito y se cometan por los jueces en el ejercicio de sus funciones (...), y el gobierno penetrado del mismo espíritu, señala en el proyecto las personas que deben promover de oficio la acusación criminal y las que tienen el deber de suministrar datos al efecto, los tribunales que habrán de conocer de las causas o acciones civiles, la forma de entablar y cuando conduzca a que la responsabilidad se haga efectiva, cuidando al propio tiempo de que no sean perseguidos indebidamente los jueces honrados y probar a quienes tal vez la perversidad de un litigante temerario o de un criminal vengativo quiera envolver en una causa injusta o con una demanda improcedente”.

La potestad que tuvo anteriormente el Rey de nombrar libremente una cuarta parte de los magistrados fue suplida ahora por los propios Tribunales. El tema del autogobierno de los tribunales no se permitió y se concedió al Consejo de Estado la posibilidad legal de intervenir dirigiendo pleitos que afectaban a los magistrados, lo que suponía seguir interviniendo de otra manera en tan complejo problema.

Había transcurrido un mes escaso cuando se publicó el decreto de 3 de julio dictando varias disposiciones para la aplicación, en la parte que sea posible, de los artículos 94, 95²⁵⁶, 96 y 97 de la ley fundamental del Estado, relativos a la entrada, ascenso e inamovilidad en la carrera judicial, que amparándose en las disposiciones transitorias de la Constitución otorgaba al ejecutivo la capacidad de subsanar vacíos y deficiencias legales hasta la definitiva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido se promulgó el 4 de julio este decreto.

Seguidamente se señalaron, tras un preámbulo justificativo²⁵⁷, las garantías que el gobierno arbitró para la estabilidad e independencia de la magistratura: en primer lugar el sistema de oposiciones para el ingreso inicial en la carrera judicial, en segundo lugar la intervención necesaria del Consejo de Estado en el nombramiento, ascenso, traslación y destitución de magistrados y jueces, salvo naturalmente, con respecto a la destitución, el caso de condena por sentencia ejecutoria del tribunal competente. De esta manera se erige “el Consejo de Estado en órgano soberano y árbitro de situaciones y decisiones que en la historia precedente no había tenido”. Es la mayor novedad de este período y en tercer lugar, la determinación precisa por la Ley Orgánica de tribunales de las reglas fijas y condiciones limitativas obligatorias para el gobierno en los mismos nombramientos, ascensos, traslaciones y destitución de magistrados y jueces.

El ministro reconoció la primera garantía de imposible cumplimiento por el momento; la segunda posible y la tercera evidente. Así en su artículo 1º se consagró que el nombramiento del Presidente, presidentes de sala y ministros del Tribunal Supremo se haría por el ministerio de Gracia y Justicia, a propuesta en terna del Consejo de

²⁵⁶ Art. 95: los magistrados no podrán ser depuestos sino por sentencia ejecutoria o por Real decreto acordado en el Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, y a tenor de lo que se disponga en la mencionada ley orgánica. Tampoco podrán ser trasladados sino por Real decreto expedido con los mismos trámites; pero podrán ser suspendidos por auto del tribunal competente.

²⁵⁷ CL.T. CII, (1869) pp. 43-53.

Estado en pleno, y con sujeción a las reglas especiales de este decreto²⁵⁸. Las propuestas se harían en vista de los méritos que se observaran en los expedientes justificativos de la aptitud y servicios de los en ellas comprendidos.

En su artículo 3º, y para evidenciar el que no existía arbitrariedad en la designación, se dispuso que con todo decreto u orden de nombramiento de magistrados y jueces se publicaría en la Gaceta una sucinta indicación de los títulos de aptitud y de los servicios del nombrado con arreglo a su respectivo expediente.

Y en el artículo 4º se definió la condición que habían de tener los magistrados: para la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia sólo podrían ser propuestos ex-ministros de la Corona que hubieran desempeñado plaza de magistrado o fiscal, de Consejo de Estado o de catedrático de Derecho durante cuatro años, y los que hubieran ocupado, durante dos, presidencias de sala en el mismo tribunal.

Para la presidencia de sala del Tribunal Supremo sólo podrían ser propuestos los que hubieran sido ministros del mismo durante dos años, o regentes de la Audiencia de Madrid, o decanos del Tribunal de las Órdenes, o presidentes de sala de justicia del suprimido de Guerra y Marina durante tres años.

Para plaza de ministro del Tribunal Supremo sólo podrían ser propuestos los que lo hubieran sido togados del suprimido de Guerra y Marina, o del de las Órdenes, presidentes de sala de la Audiencia de Madrid o regentes de las demás por dos años, o abogados que hubieran ejercido la profesión en tribunales superiores por más de veinte, con reputación nacional, habiendo pagado durante cinco la primera cuota del subsidio.

Se abrió la posibilidad en el artículo 7º y en el reconocimiento de las luchas partidistas y políticas, que los cesantes de otras épocas podrían ser repuestos en su antigua condición siempre que lo solicitaren. En el artículo 9º se aseguraba, desde la inamovilidad, que los magistrados y jueces de cualquier grado no podrían ser depuestos sino por sentencia ejecutoria o por decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, en virtud de causa justificada lo que constituía una novedad sobre sus funciones anteriores. Toda pena aflictiva o correccional, impuesta por ejecutoria, llevaría consigo la destitución.

Se insistió en el artículo 11º, que los magistrados no podrían ser trasladados contra su voluntad sino por motivos de buen servicio en la recta administración de justicia y por decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del estado. Y en su artículo 14º contempló el modo operativo de hacer efectiva la toma de posesión:

“los tribunales, bajo su responsabilidad, suspenderán el dar posesión a los magistrados o jueces cuando vieren que no fueron nombrados con arreglo a este decreto, dando inmediatamente cuenta al gobierno. Este, en Consejo de Ministros, decidirá lo que proceda; y su decisión será entonces cumplida”

²⁵⁸ Seguía la intromisión del ejecutivo, aunque atenuada, pues el procedimiento en la designación de los miembros del Consejo de Estado estaba de igual modo intervenido por la autoridad política tal y como se desprende del decreto de 7 de enero de es mismo año.

Este decreto originó todo tipo de críticas en el cuerpo político y en la ciudadanía en general. Si bien en el fondo y contenidos se estaba de acuerdo, no en la forma en que se había desarrollado su legalidad. Por unos fue tachado de inconstitucional pues se quería mediante decreto hacer una realidad que sólo se habría de corresponder con una Ley Orgánica que era el verdadero objetivo del estamento judicial. La intromisión del ejecutivo no podía desnaturalizar una función propia de las Cortes Constituyentes. Unos señalando el escrupuloso papel de la división de poderes y otros amparándose precisamente en las disposiciones transitorias del texto constitucional²⁵⁹ mantenían sus posiciones.

Entre el decreto firmado por Cristóbal Martín de Herrera y el del siguiente ministro Manuel Ruiz Zorrilla no firmado el 15 de julio, apenas habían transcurrido 12 días y podían observarse los principios liberales, a través de la justificación del decreto en defensa de la independencia judicial²⁶⁰. Hubo voluntad de arreglar el problema pero no se consiguió.

No superaron ni uno ni otro la preceptiva aprobación de las Cortes que cuestionó la legitimidad constitucional de ambos textos. Por todo ello quedaba una situación de provisionalidad hasta que el gobierno redactara el proyecto orgánico definitivo que solventara estos problemas suscitados²⁶¹.

El 20 de julio de 1869 se designó a Pedro Gómez de la Serna como Presidente del Tribunal Supremo. Quiero destacar, como en su calidad de presidente del alto tribunal, le tocó pronunciar el discurso de apertura de los tribunales de ese año con el título “del Poder judicial: sus relaciones con los demás poderes y de las condiciones y deberes de los que lo ejercen”²⁶².

Este pronunciamiento expresó una vez más el deseo de que la independencia del poder judicial se impusiera tras la publicación de la nueva Constitución que esclareció las bases sobre las que se habían de apoyar los distintos poderes del estado. Abogó por la escrupulosa delimitación de las atribuciones administrativas y judiciales, puso especial énfasis en que los cambios políticos no debían mermar la vida de la magistratura, ni quebrar la fijeza de las leyes, ni la libertad de los jueces garantizando su independencia y su inamovilidad.

En el transcurso de su digresión atacó a los que pensaban que el orden judicial era una desmembración del poder ejecutivo para auxiliar casos determinados y en ese sentido se pervertía como verdadero poder quedando sin acción propia y sin credibilidad ante los ciudadanos para llevar a buen puerto lo juzgado.

²⁵⁹ CL. T. CII (1869) p. 142 “ es incuestionable la legitimidad constitucional del decreto, que no ha sido otra cosa más que el resultado del uso de la autorización”.

²⁶⁰ CL. T. CII (1869) pp. 140-144.

²⁶¹ Conjuntamente en temas de inamovilidad, separación y traslación de magistrados quedaron vigentes los decretos de 29 de diciembre de 1838 y el de 7 de marzo de 1851.

²⁶² RGLJ. T. 35 (1869) pp. 145-162

Este discurso ponía de manifiesto un diagnóstico preocupante por quién lo decía y por lo que se decía²⁶³. Proclamaba que el orden judicial debía ser un verdadero poder y así se planteó en 1812, 1837, 1855 y 1869, pero admitiendo la solidez de los principios el autor se preguntaba: “¿la institución judicial tal como está definida en la Constitución, es un verdadero poder?”. De esta pregunta se desprendía que las interferencias del ejecutivo, hasta la fecha en que se pronunciaba el discurso, seguían siendo una constante y perniciosa práctica²⁶⁴ aunque su visión de futuro irradiaba esperanza.

Los ceses acaecidos este año, como consecuencia de la nueva situación planteada, ofrecieron algunas valoraciones políticas subyacentes con independencia de las formalidades utilizadas: Teodoro Moreno dimitió el 13 de mayo por razones no suficientemente aclaradas en su condición de magistrado del Tribunal Supremo²⁶⁵, moderado²⁶⁶, Pedro Gómez de la Hermosa se jubiló a petición propia el 31 de mayo, independiente²⁶⁷ y Antonio Corzo se jubiló a petición propia el 23 de julio, independiente.

6.1. Ley Orgánica del Poder Judicial

Había quedado pendiente desde la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1869 la elaboración de una ley global sobre administración de justicia, para ello se apeló al cambio político verificado en septiembre de 1868 en consonancia con las reivindicaciones de la ciudadanía.

Durante muchas décadas la falta precisamente de una ley orgánica había sido el argumento constante para justificar la dependencia del poder judicial del sistema político articulado por los partidos. No existió voluntad política de hacer una ley que permitiera, con claridad, hacer efectiva la independencia judicial²⁶⁸.

²⁶³ Imploró el Presidente del Tribunal Supremo el respeto a la acción de los jueces y magistrados desde tres ámbitos: el legislativo, estableciendo leyes orgánicas, la manera y forma de la elección y las condiciones de los que hubieran de desempeñar cargos judiciales; el ejecutivo, dictando disposiciones para el cumplimiento de estas leyes y haciendo los nombramientos; y el judicial, examinando la capacidad legal de los elegidos, y no dando posesión a los que carecieran de ella, veto que ya se encargó que la Constitución estableciera para cerrar la puerta a los abusos que desgraciadamente se experimentaron en el pasado.

²⁶⁴ Concluyó diciendo “ Sí señores, el poder judicial será inamovible de hecho como lo es el derecho; ya ha sonado la hora en que sea (...) ¿ no habéis visto la lucha durante medio siglo entre el fuero común y los fueros especiales, verdadero anacronismo de nuestra época (...) Lo que ha sucedido con los fueros, no lo dudéis, sucederá con la amovilidad judicial”

²⁶⁵ Ver apéndice documental referido a Teodoro Moreno.

²⁶⁶ El 12 de junio de 1869 escribió en su condición de magistrado del Tribunal Supremo al ministro de Gracia y Justicia “ que mi conciencia no me permite prestar juramento referido a la Constitución política, y como esta formalidad sea indispensable para el ejercicio del cargo de magistrado que desempeño, ruego a V. E. se sirva admitirme la dimisión del mismo y declararme cesante con los derechos que en tal concepto me correspondan” (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4571, n. 4897 ver índice de magistrados).

²⁶⁷ No tenemos informaciones que le adscriban a ningún sector político (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4457, n. 3182 ver índice de magistrados).

²⁶⁸ Decía la LOPJ: “si se quiere que la institución judicial sea en nuestra Patria, un verdadero poder y no un peligro, si los individuos que representan ese mismo poder han de gozar de la inamovilidad práctica,

En el discurso de apertura de tribunales de este mismo año, el ministro Montero Ríos disertó sobre “Breves indicaciones sobre las nuevas leyes relativas al Derecho penal y organización judicial. Idea sobre la alta misión del magistrado”²⁶⁹. En su parte primera hizo un alegato contundente a favor de la independencia judicial, suscribiendo parte del discurso de Gómez de la Serna del año anterior.

“la institución que tiene existencia propia, que ejerce funciones propias que ningún otro poder puede usurpar, que concentra en sí misma todo lo necesario para el cumplimiento de su misión profundamente social, que no tiene en el poder ejecutivo superior jerárquico alguno; que por el contrario es superior a él en cuanto a los juicios se refiere, que no responde de sus actos ante la administración, que decide soberanamente las cuestiones que entre el Estado y los particulares se suscitan, que pronuncia las ejecutorias en las causas criminales, ejecutorias inalterables y que juzga en ocasiones dadas de los actos de política cuando se trata de su aplicación en un juicio, es un poder independiente de los otros poderes”

Ratificó la solidez de la Constitución proclamada y la urgente necesidad de reformar el Código penal, pues las circunstancias temporales e históricas cambian ritmos muy acelerados y las instituciones políticas tienen diversas concepciones en su tratamiento legal. Era necesario a la luz de la Constitución de 1868, reformar el Código de 1850, en defensa de preservar las libertades fundamentales de la persona. Sobre la reforma emprendida dijo que si no era la más perfecta que la inteligencia puede concebir, era la menos defectuosa, dados el actual estado y recursos del país²⁷⁰.

Las Cortes admitieron que el gobierno de manera provisional planteara grandes cambios y a veces trascendentales. Así se entendía la oportunidad de ciertas leyes especiales que facilitarían el cumplimiento de la inamovilidad y la responsabilidad y en este sentido decía “la inamovilidad sin la responsabilidad, es la tiranía del poder judicial. La responsabilidad sin la inamovilidad es la arbitrariedad del poder ejecutivo”.

Finalizó su discurso haciendo un elogioso comentario sobre el estado de la situación que produjo la revolución política y que otorgó al poder judicial un espacio -desconocido hasta el momento- de libertad en sus atribuciones y de celoso arbitrio de los demás poderes. Ya anteriormente su antecesor en el ministerio, Ruiz Zorrilla, desde su exilio de Ginebra había abierto el camino para articular un cambio radical en el ámbito judicial y en estos términos se pronunció:

“me propuse en Gracia y Justicia como en Fomento, reformar toda la legislación, que era un arma de combate para la hueste reaccionaria, o estaba en

contrapesada oportunamente con una responsabilidad civil y criminal verdadera, el legislador no puede menos de establecer las disposiciones conducentes para que ese poder, contenido en sus justos límites, no usurpe las atribuciones de otros y pueda al mismo tiempo defenderse si se siente estorbado en el libre ejercicio de su augusto ministerio, si se atenta de cualquier modo a su independencia, cualidad la más preciosa y esencial de la magistratura, sin la cual ésta deja de constituir un poder para transformarse en una rueda inerte de la Administración Política, ya que no en un terrible instrumento de pasiones bastardas y mezquinas”

²⁶⁹ RGLJ. T. 37 (1870) p. 241-250

²⁷⁰ RGLJ. T. 37 (1870) pp. 246 y ss.

contradicción con los adelantos de la ciencia política, o no se acomodaba a los principios consignados en el gran Código de 1869”²⁷¹.

El trámite parlamentario que se siguió venía recogido en el artículo 52 de la Constitución y contemplaba que el gobierno elevara a las Cortes el proyecto, nombrando éstas de entre sus miembros una comisión encargada para elaborar un dictamen. Las Comisiones de Codificación previas ya habían trabajado el tema y coincidió con el nombramiento de Manuel Ruiz Zorrilla en sustitución de Cortina como nuevo presidente de la comisión legislativa²⁷² y recayendo sobre éste la responsabilidad de lograr que toda la legislación estuviera penetrada por el espíritu constitucional.

En la sesión de las Cortes Constituyentes de 17 de diciembre de 1869²⁷³, Ruiz Zorrilla mencionó los distintos proyectos que estaban en marcha entre los que se incluía el jurado. Y nuevamente quedaba de manifiesto, a través de las discusiones parlamentarias, la necesidad y urgencia de elaborar una ley completa. En este sentido se manifestó el ministro Montero Ríos²⁷⁴.

Desde el punto de vista de la ciencia jurídica se hacía indispensable una reforma que evitara las dudas, contradicciones y antagonismos según la materia legislativa que se escogiera. El intento de conseguirlo había sido continuo pero sus objetivos lamentablemente nunca se alcanzaron.

Si se exponía en la Constitución de 1837 el principio de inamovilidad judicial ¿cómo es que 33 años después este logro no se hubiera conseguido? La ausencia de una ley marco definitoria de la legalidad y de sus procedimientos podría explicar que dicho principio fuera más un deseo que una realidad, pues tal vez no interesaba al poder político.

Esta ley servía para corregir esas desafortunadas experiencias y de una vez por todas se fortalecería la independencia de los jueces en un sistema riguroso y claro de dicho estamento. Se reforzaron aspectos tales, como la seguridad jurídica con elementos de control sobre la administración de justicia y la jurisdicción disciplinaria que consolidaron la independencia de los funcionarios en un marco de hacer realidad la separación de poderes.

En lo que se refiere al Tribunal Supremo el ingreso y la regularización de la carrera judicial, se contemplaba que se había de entrar mediante la oportuna oposición, y de cuya regla solamente se exceptuaba el nombramiento de la cuarta parte de los magistrados de dicho tribunal, que podrán ser elegidos dentro de las categorías que la Ley Orgánica de Tribunales estableciera al efecto. Se definían las oposiciones, como

²⁷¹ J.M. Martínez Val, *Montero Ríos y su tiempo*. Madrid, 1980, p. 65.

²⁷² La Comisión legislativa dividida en dos secciones se componía de: Nicolás María Rivero, Pedro Gómez de la Serna, Laureano Figuerola, José Fernández de la Hoz, Cristóbal Martín de Herrera, Cristino Martos, Santiago Diego Madrazo, Juan Manuel Montalbán, Alejandro Groizard, Tomás María Mosquera, Segismundo Moret, Francisco Pisapajares, Pedro González Gutierrez, Julián Pastor y Alvira, Antonio López Botas, Joaquín García Briz, Pedro López Sánchez y Santos Isasa.

²⁷³ DSCC. (1869) n. 185 p. 4782.

²⁷⁴ DSCC. (1869) n. 292 p. 8396.

habían de hacerse, con qué premisas y con la periodicidad establecida. La doble combinación de la antigüedad y del mérito dominaba en toda la carrera judicial. De este modo el Tribunal Supremo se convertía en el estadio último de acceso de los jueces.

La inamovilidad judicial se convertía en una verdadera práctica, porque además del precepto constitucional por el que sólo podrían ser destituidos los magistrados y jueces en virtud de una ejecutoria o por un decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, a partir de ahora debía también contemplar el artículo 223 establecido en la Ley Orgánica de Tribunales donde se determinan los casos en que la destitución procede.

La inamovilidad no sólo se viola por cese, sino también por traslación arbitraria o jubilación extemporánea, circunstancias que decidieron al gobierno a determinar con precisión y claridad las causas que procedían en las diligencias formadas al efecto, las garantías que se concedieron a los que eran objeto de semejante procedimiento y los casos en que los agraviados podían entablar el recurso contencioso contra la administración por quebrantar la ley o las formas establecidas a tal propósito.

El título IV de la ley se ocupó de la inamovilidad judicial y en él se contenían seis capítulos que eran los más completos que nunca se habían legislado en la referida materia. En el capítulo I se estableció que los magistrados y jueces gozarían de la inamovilidad dentro de sus funciones permanentes sin limitación de tiempo y los jueces que ejercieran funciones con limitación de tiempo señalado en la ley o en su nombramiento, sólo por el tiempo en que deban desempeñarlas. Consiste la inamovilidad judicial “en el derecho que tienen los jueces y magistrados a no ser destituidos, suspendidos o trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas en que este título se expresan”.

No tenemos certeza del cumplimiento y de las garantías de viabilidad de este precepto como señaló J. M. Manresa²⁷⁵ porque a su entender las reglas que se habían dictado sobre este particular no estaban muy perfeccionadas y había una experiencia previa en la práctica de este artículo. La misma disposición tercera revelaba una premisa como era que “los jueces y magistrados que se nombraren hasta la ley, no gozarán de inamovilidad mientras no sean examinados sus respectivos expedientes, y en su virtud sean especial y nominalmente declarados inamovibles”.

De este modo se hizo efectivo el principio reconocido por Pedro Gómez de la Serna. Presidente del Tribunal Supremo en 1871²⁷⁶. La destitución de los jueces y magistrados

²⁷⁵ J. M. Manresa, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada conforme a las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881, con los formularios correspondientes a todos los juicios*, Madrid, 1881-1895, II, p. 223. Se decía: “no se concibe ni puede establecer la inamovilidad judicial, tan necesaria para la independencia de los tribunales, sin que vaya acompañada de la responsabilidad. La una y la otra se han consignado en principio en todas nuestras Constituciones políticas; mas, por falta de reglas eficaces para exigir la responsabilidad, se consideró inaplicable el principio de la inamovilidad, hasta que en la ley orgánica del poder judicial de 1870 se dictaron esas reglas. Sin embargo, por ser deficientes y por otras causas, todavía no ha llegado a lo que debiera ser la inamovilidad judicial”.

²⁷⁶ RGLJ. T. 39 (1871) pp. 284 y ss.

distinguía la destitución de derecho y la que podía tener lugar por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado. Procede la primera por sentencia firme en que se declare o se imponga a un juez o magistrado pena correccional o aflictiva. Tenía lugar la segunda cuando el funcionario incurriese en causa de incapacidad o incompatibilidad; hubieren sido corregidos por hechos graves, que sin constituir delito, comprometan la dignidad de su ministerio, o les hagan desmerecer en el concepto público; si les absolviera de la instancia en cualquier clase de procesos; hubiesen sido una o más veces declarados responsables civilmente; o cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento poco honroso o por su habitual negligencia no sean dignos de continuar ejerciendo sus funciones judiciales. En todos estos casos era preciso expediente, con audiencia del interesado y del fiscal²⁷⁷.

Se reguló la suspensión de los jueces y magistrados, que sólo era posible por resolución fundada, cuando hubiere lugar a proceder criminalmente contra ellos, por delito cometido en el ejercicio del cargo; cuando, por cualquier otro delito, se hubiere dictado contra ellos auto de prisión o fianza equivalente, o se les pidiera pena correccional o aflictiva; cuando procediere su destitución, por correcciones anteriores; o cuando se decretase disciplinariamente. Se determinarían las personas u órganos que pudieran decretarla en cada caso y su duración. La suspensión disciplinaria procedía cuando el juez o magistrado incurriese en causa de incompatibilidad.

En cuanto a la traslación de los jueces y magistrados esta ley contemplaba que sólo procedía cuando se llevaran ocho años de residencia en la misma población o se incurriera en causa de incompatibilidad, y también por razones de buen gobierno del tribunal o por consideraciones de orden público. La traslación requería siempre, previa consulta al Consejo de Estado, según decreto acordado en Consejo de Ministros. De igual modo se regulaba otra materia sustancial como era la jubilación, y para ello se disponían dos criterios: uno en razón de edad simplemente y otro en razón de condición física y mental.

La reglamentación de la inamovilidad judicial a través de 23 artículos²⁷⁸ con sus correspondientes subapartados era la más completa que se había redactado nunca en el terreno teórico y tuvo que ser precisada por una Orden de 30 de septiembre de 1870 que decía que se cumpliera “aquello cuya observancia sea posible”; esto evidenciaba las lógicas dificultades que la puesta en práctica de dicha ley llevó consigo.

Otro gran logro de la Ley de 1870 fue consagrar la obligación de motivar las sentencias. La comisión ya advirtió su desencanto por trabajos que eran provisionales y perezcosos impulsados por urgencias políticas y cambios circunstanciales²⁷⁹.

No cabe duda que el siglo XIX supuso la formación de una conciencia colectiva para mejorar la ciencia jurídica. Con sus avances, cautelas y retrocesos, el nuevo período

²⁷⁷ DSC. (1869) de 24 de mayo p. 2281; existió una gran discusión parlamentaria sobre los supuestos de destitución entre los partidarios de sólo sentencias judiciales y los que observaban otro tipo de aptitudes a valorar; prevaleció esta última postura.

²⁷⁸ CL.T. CIV (1870) pp. 1005-1010.

²⁷⁹ ACGC. (1870) l. 7 de organización de tribunales, c. 6

confirmó el deber de motivar. Poderosas razones de naturaleza política influyeron en su tardanza, pero no es menos cierto que también existieron razones de índole técnico-procesal²⁸⁰.

Sostengo que cada vez se hacía más evidente la necesidad de motivar, como garantía procesal reduciendo el margen de maniobra de cualquier gobierno para nombrar discrecionalmente a magistrados que no estuvieran en condiciones de poder fundamentar, por falta de formación, sus decisiones en consonancia con la jurisprudencia existente. Se reforzó con ello la profesionalidad de la magistratura en su órgano básico y vital como era el Tribunal Supremo.

La LOPJ supuso estabilidad y objetividad. Los años siguientes transcurrieron desde la paz política e institucional que se manifestó en el poder judicial que ya tenía los mecanismos reales y efectivos para desarrollar su tarea en un estado de derecho que vislumbraba u horizonte esperanzador tras décadas de zozobra y disputas de todo orden.

Se produjeron en el Tribunal Supremo en el período 1871-1872 quince nuevos nombramientos y trece ceses de funciones, pero en todos los casos ateniéndose a lo expuesto en la LOPJ²⁸¹. Algunos nombramientos fueron directa consecuencia del Real decreto de 11 de marzo de 1872, que contempló la necesidad de dotar al Tribunal Supremo con más magistrados pues sus competencias se habían ampliado.

Algunas deficiencias debieron observarse del cumplimiento de la Ley Orgánica cuando el 8 de mayo de 1873 se promulgó un decreto en el que se dictaron algunas reglas para la provisión de plazas de magistrados. La breve gestión en la cartera de Gracia y Justicia de Nicolás Salmerón motivó algunas de las consideraciones que se hicieron en este documento normativo²⁸² y que expusieron la rotunda necesidad de emancipar el poder judicial del poder ejecutivo y de ese modo se dijo textualmente:

“con la falta de congruencia entre las prescripciones de la ley provisional vigente y la organización antigua de los tribunales en su mayor parte subsistente todavía (...) y este decreto se hace para que la ley se cumpla en lo relativo al nombramiento, ascenso, traslación y separación de los funcionarios del poder judicial, sin el dañoso arbitrio del Ministerio y deshacer las ilegalidades que en este punto hayan podido cometer las administraciones anteriores”

Fue muy importante el cambio de orientación que este decreto pretendió dar a favor del Tribunal Supremo y en detrimento del Consejo de Estado y del gobierno²⁸³ acerca de las propuestas de nombramientos, traslaciones y separaciones²⁸⁴ que se reflejaron en

²⁸⁰ M. Ortells Ramos, “ Origen histórico del deber de motivar las sentencias” *Revista de Derecho Procesal Iberoamericano* (1977) n. 4 p. 931-932.

²⁸¹ Solamente observamos una causa de cese: la de Calixto Montalvo y Collantes en el que él aduce razones extrañas que provocaron su jubilación y que se desprenden de su Hoja de servicios del correspondiente expediente personal.

²⁸² Publicado en la Gaceta de Madrid, de 9 de mayo de 1873

²⁸³ CL. T. CX 81873) pp. 946-955

²⁸⁴ CL. T. CX-2 (1873) p. 948: “ la necesidad de evitar este mismo daño en los nombramientos correspondientes a las categorías superiores al par que la imposibilidad, no existiendo aún escalafones, de

la ley provisional, aunque se hicieron algunos retoques estos fueron hechos rápidos y con imperfecciones²⁸⁵.

En este sentido se decretó que para el cumplimiento del artículo anterior se observarían las siguientes reglas: la primera: que el funcionario indebidamente separado volvería a su puesto, y se le computaría el tiempo de cesantía para todos los efectos legales, excepto el abono de haberes; la segunda si ocupara la plaza objeto de la reposición el mismo, que ingresando con esta ocasión en la carrera, hubiera sustituido al indebidamente separado, sería destituido sin el derecho que a los cesantes reconoce la disposición octava, de las transitorias de la ley: pero se le computará el tiempo que haya desempeñado el cargo, si legalmente ingresare después en la carrera; la tercera: se anularían todos los ascensos y nombramientos de ingreso verificados, con ocasión de una separación ilegal, pero se mantendrían todas las traslaciones menos aquellas que la reposición del indebidamente separado y la anulación de los ascensos exijan y la cuarta: la cesantía a que la reposición obligare recaería necesariamente en el nombrado por impreso, el mal quedará en la situación que determina la regla 2ª, y los ascendidos a consecuencia de la separación indebida, descenderían al mismo puesto que antes sirvieran, o a otro de igual categoría, sin que les dé derecho alguno para ulteriores ascensos el que por virtud o con ocasión de aquel acto ilegal hubiesen obtenido.

Esta regla se aplicaría cualquiera que fuera el número de ascensos que se hubieran concedido a un funcionario, y cualesquiera que en consecuencia fueran los grados que deba descender de la categoría que indebidamente ocupe.

También se contempló que todo funcionario del poder judicial o del ministerio fiscal, cualquiera que fuera su categoría, que hubiese ingresado o ascendido sin las condiciones legales vigentes a la sazón, quedaría cesante, previa consulta del Tribunal Supremo, aunque estuviera declarado inamovible, a menos que hubiera servido en el puesto respectivo doble tiempo del necesario para ingresar o ascender: que reuniera todos los demás requisitos exigidos en cada caso, y que en su expediente no resultaran notas desfavorables que le hicieran desmerecer.

El advenimiento de la República no pudo profundizar en una real y efectiva separación de poderes pues no existió solidez política y los permanentes equilibrios en el poder se agravaron por el movimiento cantonista y por el reforzamiento de una conciencia colectiva que anheló volver al orden y a la paz pública.

Atrás quedó el proyecto constitucional de 1873 de carácter federalista y con él un nuevo mapa de reubicación institucional, que repercutió en la composición del Tribunal Supremo: la declaración sobre la constitucionalidad de las leyes además de sus

someter en cada ocasión la respectiva propuesta al Consejo de Estado, privando así de los mismos antecedentes que pudieran ilustrar y motivar sus juicios, exigen también sustituir la audiencia de este cuerpo con la del Supremo Tribunal, cuyas funciones le hacen más apto para comparar méritos y antecedentes propios de su competencia, y de muy delicada apreciación, y cuyo imparcial carácter, elevado sobre las discordancias y las vicisitudes políticas sancionará sus resoluciones con el prestigio necesario a robustecer la autoridad y hasta la dignidad personal de sus subordinados”

²⁸⁵ CL. T. CXI (1873) pp. 532-533

ordinarias competencias jurisdiccionales²⁸⁶. La crisis política del sistema republicano acudió, de manera continuada, a preconizar el cumplimiento de lo promulgado en la Constitución de 1869²⁸⁷, pero ante su anunciado ocaso aprovechó el cambio de rumbo para restituir los contenidos esenciales de la LOPJ, y concediendo con ello la recuperación de atribuciones a favor del gobierno en lo que se refería al régimen de los funcionarios judiciales²⁸⁸.

La LOPJ se desarrolló con tranquilidad y con el respeto de todos y en 1873, con la República como sistema de organización del estado se constató su eficacia²⁸⁹ y así se expresó en la circular de 13 de septiembre de ese año que decía “la República es el verdadero garante del logro material de esos postulados que hasta ese momento sólo quedaban reflejados en el papel”, y se insta a los presidentes del Tribunal Supremo al más noble empeño en el logro de los objetivos plasmados en el nuevo sistema político en lo que se refería al contexto judicial y concluía “sólo de esta manera, aunados los esfuerzos de la Asamblea Constituyente con los del poder judicial, de éste con los demás poderes de la República, alcanzará feliz término la comenzada obra de nuestra regeneración social, y con ellas las reformas judiciales por tanto tiempo deseadas”.

El año de 1873, concluyó con dos designaciones y siete ceses de funciones de los que cabe advertir tres dentro de la anormalidad normativa²⁹⁰, un número inapreciable si no fuera porque se producía en tan corto espacio de tiempo en relación a la LOPJ.

Ese mismo año se volvió a retroceder en la autonomía que tuvo el alto tribunal en cuanto a la designación de los miembros de su cuerpo, cuando por decreto de 8 de mayo de 1873²⁹¹ se promulgó que el Tribunal Supremo presentaría una propuesta unipersonal y razonada para la provisión de cada vacante, en su seno, al Ministerio de Gracia y Justicia y al ministro, en estos momentos Nicolás Salmerón, sólo le correspondería la expedición del nombramiento en virtud de los méritos reconocidos.

También por decreto y en etapa republicana, el 3 de octubre²⁹² de ese mismo año y con la firma de Luis del Río Ramos, como ministro de Gracia y Justicia, se reformó el art. 25 y 26 del de mayo, ampliando la propuesta razonada a una terna y no a una sola persona como antes. Con ello se ampliaba el margen de posibilidades de elección a favor del ministro y por tanto del poder político. Tanto un decreto como el otro supusieron una intromisión en la independencia judicial y una apuesta clara contra los

²⁸⁶ A este objetivo atendió el Proyecto de organización de tribunales de septiembre del ministro Alonso Colmenares y que no llegó a su destino por la precipitación de los acontecimientos políticos.

²⁸⁷ Así se expresa en la Circular de 13 de septiembre de 1873 recogida en CL. T. CXI (1873) pp. 361-364.

²⁸⁸ CL. T. CXII (1874) pp. 58-61.

²⁸⁹ CL. T. CXI (1873) p. 362 “en el seno de la República (...) lo que tan sólo ella puede conceder, autonomía en su elevado ministerio, libertad de acción en el ejercicio de sus funciones, garantías de estabilidad e independencia de sus Ministros (...)”

²⁹⁰ Los magistrados Francisco Vera, Juan Cano Manuel renuncian voluntariamente y Francisco Armesto solicitó la jubilación a petición propia, ver gráfico de comparativa de nombramientos y ceses correspondiente al año 1873. Interesante el caso de Sebastián de la Fuente Alcázar que requirió un dictamen del propio Tribunal Supremo para conocer su pertenencia al mismo.

²⁹¹ CL. T. CX-2 (1873) pp. 946-955.

²⁹² CL. T. CXI, (1873) pp. 532-533.

principios que alumbraron la Constitución de 1869 y que en materia de administración judicial plasmó perfectamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El 14 de enero de 1874, estando al frente del ministerio Cristino Martos, en un ejecutivo republicano, se recondujo a través de un decreto²⁹³ la situación en aras al respeto escrupuloso de la Ley Orgánica, y por ello a preservar en su integridad los arts. 138, 139, 140, 141, 142, 144 y 145 en el modo de ingresar, trasladar y ascender los miembros del poder judicial. Se respetó la independencia judicial, puesta en grave riesgo con las medidas anteriores²⁹⁴. Por ello se derogaron los decretos de mayo y de octubre anteriores.

Las continuas intentonas de alterar o reinterpretar los contenidos de la Ley orgánica fueron una constante en el deseo de algunos políticos, como es el caso de Alonso Colmenares como ministro de Gracia y Justicia, en septiembre de 1874 elaboró un proyecto de organización de tribunales²⁹⁵ con el visto bueno del Consejo de Estado que emitió un dictamen favorable al verificar que muchos puntos descritos en la ley orgánica eran inaplicables en muchos de sus artículos: la interinidad de la propia ley, la inaplicación de muchos de sus artículos hasta la fecha y la necesidad de revisar la división territorial y jurisdiccional de los órganos de justicia.

7. Restauración: 1875 – 1881: interpretaciones de la base jurídica existente.

Tuvieron que transcurrir más de cinco años, en la etapa de la Restauración, para acometer nuevos elementos que clarificaran más, si cabe lo ya legislado y en este sentido se promulgó el decreto de 23 de enero de 1875 estableciendo nuevas bases para las declaraciones de inamovilidad de los magistrados y jueces y otras reglas modificativas en esta materia contempladas en la LOPJ. El marco general venía definido de modo claro:

“(…) conviene, pues, poner en armonía con el nuevo orden de cosas todas las instituciones cuyo conjunto forma el gobierno del estado; y aunque las judiciales no deben estar sujetas a las frecuentes oscilaciones de la política, no cabe poner en duda que han de estar subordinadas a lo que en ella es fundamental y permanente, a saber: la Monarquía constitucional de V. M.”

Se reforzó la tesis de reubicar a los cesantes y separados injustificadamente en el orden judicial y en el ministerio fiscal. Se dieron pasos que aparentemente obedecían al respeto del orden constitucional pero que escondían un anhelo de politizar algunas esferas de la composición judicial.

²⁹³ CL. T. CXII (1874) pp. 58-61.

²⁹⁴ El ministro de Gracia y Justicia reclamaría del Tribunal Supremo los expedientes que pendieren de su propuesta, para resolverlos con sujeción a las prescripciones de la ley sobre la organización del poder judicial.

²⁹⁵ ACGC. (1874) l. 9 de organización de tribunales, c. 1, d. 2

En su artículo 10, derogó la disposición transitoria VI de la LOPJ y señaló los requisitos para la declaración de inamovilidad según los distintos cargos judiciales²⁹⁶. Trataba esta medida de reincorporar a los antiguos cesantes según el escalafón judicial y sin contravenir en lo sustancial lo que disponía la ley provisional.

Así en su artículo 2º, punto 5º, se decía que las vacantes de magistrado del Tribunal Supremo se proveerían en cesantes²⁹⁷ del mismo tribunal que reunieran las condiciones que exigía el decreto de esta fecha para ser declarado inamovible en la misma categoría, en las comprendidas en el artículo 144²⁹⁸ de la ley orgánica, siempre que concurrieran en ellos las circunstancias necesarias para ser declarados inamovibles, conforme al expresado decreto y que coinciden con las expresadas en la LOPJ.

Se produjo en primer lugar una intervención sobre la ley de 1870 anulando y modificando alguno de sus preceptos a la vez que se consolidaba una regularización de la carrera judicial en todas sus instancias y se ampliaba la discrecionalidad del ejecutivo en la separación de importantes cargos del Tribunal Supremo.

Este decreto concluyó “los que no utilizaren estas plazas se entenderá que renuncian a volver a la carrera” y así perder la posibilidad de reincorporarse en condiciones aceptables.

El 27 de enero de 1875 se promulgó un nuevo decreto cuyo objeto fue la reorientación del trabajo de las salas por cuestiones financieras pero que sirvió para introducir en su art. 4º una nueva cuña de injerencia del ejecutivo al contemplar que era el ministro de Gracia y Justicia el que designaba la sala de gobierno del Tribunal Supremo.

Estos dos decretos tuvieron como consecuencia inmediata la salida del Tribunal Supremo de Fernando Pérez de Rozas, progresista²⁹⁹, y Alvaro Gil Sanz, progresista-

²⁹⁶ CL. T. CXIV (1875) pp. 99-104.

²⁹⁷ Estos cesantes proceden de agraviados en tiempos republicanos y los que fueron jubilados sin causa justificada.

²⁹⁸ artículo 144: “ De cada cuatro vacantes que ocurran en las plazas de Magistrados del Tribunal Supremo, se proveerán:

Tres en Presidentes de Audiencia de Madrid, o en quien hubiese sido tres años Presidente de Audiencia de fuera de Madrid o Presidente de Sala o Fiscal de la de Madrid, o Teniente fiscal único del Tribunal Supremo, o en el Magistrado más antiguo de la de Madrid.

La cuarta vacante podrá proveerse en abogados que hayan ejercido veinte años en capital de Audiencia o quince en Madrid, pagando a lo menos en los ocho últimos la primera cuota del subsidio industrial.

No recayendo la elección en ninguno de esta clase, se nombrará quien reúna las condiciones expresadas en el párrafo primero de este artículo”.

²⁹⁹ El 21 de julio de 1838 la Junta de arreglos de tribunales le consideró apto para continuar en su puesto y se le nombra magistrado en comisión del Tribunal Supremo el 17 de septiembre de 1869, Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4983, n. 11795 ver índice de magistrados)

demócrata³⁰⁰, los dos fueron declarados cesantes y Pascual Bayarri García, moderado y que fue nombrado al día siguiente miembro del Consejo Real.

La vuelta a las tres salas por exigencias de adaptación económica se saldó en este año con la amortización de tres plazas que no volvieron a ser ocupadas tras el fallecimiento de Gregorio Juez, independiente³⁰¹, Crispulo García Gómez de la Serna, independiente³⁰² y Lorenzo Cobo de la Torre, moderado³⁰³.

La Constitución de junio de 1876 recuperó el doctrinarismo más puro, y mantuvo el principio de la independencia y de la inamovilidad³⁰⁴ desde los presupuestos más coincidentes con los trabajos de la ley orgánica. Los cambios del sistema republicano fueron seriamente criticados por el nuevo régimen político que buscando la sintonía con el documento de la ley orgánica, el 13 de noviembre de 1876, por Real decreto³⁰⁵ autorizó al ministro de Gracia a presentar un proyecto de ley organizando las carreras judicial y fiscal, aclaratorio a las Cortes, y que amparándose en razones estrictamente presupuestarias³⁰⁶ decía en su preámbulo:

“por no haberse tenido tan presente como conviniera (...) las condiciones necesarias para que puedan no existir con el buen gobierno del Estado funcionarios inamovibles, no adquirieron sus preceptos bastante consistencia para sobrevivir a las mudanzas del régimen político. Proveer arbitrariamente los cargos judiciales y declarar luego inamovibles a los favorecidos, sin consentir que se examinasen sus servicios y merecimientos, y dejando poco menos que sin esperanza de recobrar sus puestos a los que habían sido desposeídos a consecuencia del sacudimiento revolucionario, no era obrar con imparcialidad, y sobreponiéndose a las pasiones del momento, sino legislar en provecho de un

³⁰⁰ Participó activamente en política como diputado en varias legislaturas, progresista primero, demócrata después y luego perteneció a la minoría republicana (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4451, n. 3134 ver índice de magistrados).

³⁰¹ Sus ideas políticas fueron en algunas ocasiones, 1820-1823 y 1855 liberales-progresistas pero en otros momentos se alineó con las posiciones de los moderados (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4503, n. 3963 ver índice de magistrados)

³⁰² No existen informaciones políticas sobre su adscripción política (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4438, n. 3012 ver índice de magistrados).

³⁰³ En 1840 fue apartado por su conducta en los movimientos políticos y el 13 de febrero de 1841 la Diputación de Burgos le censuró de moderado, el 6 de enero de 1855 fue declarado cesante en la Audiencia de Zaragoza durante el bienio progresista (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4333, n. 2188 ver índice de magistrados).

³⁰⁴ En su art. 76 decía: “a los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado” y en el art. 80: “los magistrados y jueces serán inamovibles y no podrán ser depuestos, suspendidos ni trasladados, sino en los casos y en la forma que prescriba la ley orgánica de tribunales”.

³⁰⁵ CL. T. CXVII (1876) pp.672-689.

³⁰⁶ Decía: “Convencido de que la situación de Tesoro es hoy, y ha de ser por algún tiempo, insuperable obstáculo para plantear la reforma que la opinión demanda en la constitución de los tribunales, limitase a lo único inmediatamente practicable: a establecer la inamovilidad judicial preceptuada en la Ley fundamental del estado, en términos que garanticen su subsistencia, esto es, de manera que no lleguen a alcanzarla funcionarios que no hayan acreditado merecerla, ni sea tan absoluta que degenere en irresponsabilidad y en impunidad” en CL. T. CXVII (1876) pp. 672-689.

partido; y no establecer un sistema de correcciones disciplinarias tan expedito y eficaz como el que de antiguo rige en otras carreras para reprimir los abusos de los funcionarios que no pueden ser libremente separados, era dar ocasión a conflictos entre el texto de la ley y las verdaderas necesidades del gobierno, conflictos cuya resolución, así lo enseña la experiencia, es siempre poco favorable a la observancia del precepto legal(...).

Así fue que a la restauración de la monarquía legítima hubo que derogar las declaraciones de inamovilidad hechas de plano a favor de muchos magistrados y jueces (...)"

Se trataba de realizar ajustes sobre la LOPJ, la cual no se cuestionaba para nada y pretendiendo asegurar la inamovilidad judicial en términos que garanticen su subsistencia (acreditando los funcionarios los méritos necesarios para ser impunes a arbitrios) y porque no se habían tenido en cuenta en la ley de 1870, las condiciones necesarias para que pudieran coexistir con el buen gobierno del Estado, funcionarios inamovibles, sobreviviendo a los cambios políticos. La verdad es que este decreto no se tradujo en cambios en el seno del alto tribunal por motivos diferentes a los considerados como normales (ver gráfico de comparativa de nombramientos y ceses de 1876 así como la relación de ceses por motivaciones).

En 1876 se produjeron tres nombramientos en el Tribunal Supremo: Casimiro Huerta y Murillo, moderado³⁰⁷, Felipe Viñas Vitoria, canovista³⁰⁸ y Alejandro Benito Avila, moderado³⁰⁹. Y se produjeron tres ceses. Juan Cano Manuel, Victoriano Careaga y Alberto Santías Fortacín (dos por jubilación y otro por fallecimiento).

Me interesa destacar la salida voluntaria en condiciones de cesante, el 11 de julio de 1877, del magistrado Saturnino Alvarez Bugallal, liberal-conservador³¹⁰ por considerar incompatible su condición de diputado con el correcto y objetivo cumplimiento como magistrado del Tribunal Supremo³¹¹.

En 1878 hubo cambios en el tribunal, con los nombramientos de: Pedro Borrajo de la Bandera, conservador³¹², Vicente Ferrer Minguet, independiente, Juan Fernández

³⁰⁷ Fue gobernador civil e Badajoz y Toledo en 1858 y 1859 durante gobiernos moderados (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4493, n. 3894 ver índice de magistrados).

³⁰⁸ Participó activamente en política como senador durante la Restauración en las filas canovistas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4599, n. 5208 ver índice de magistrados).

³⁰⁹ Podemos encuadrarle en las filas moderadas aunque no participó activamente en política, el 2 de diciembre de 1847 el jefe político de Zamora dijo de él que aunque pocas veces se le oyó hablar de política siempre fue en sentido favorable al orden y a las instituciones vigentes (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4301, n. 1093 ver índice de magistrados).

³¹⁰ Participó activamente en política como diputado y senador e hizo campaña de oposición al gabinete Narváez bajo el criterio y en nombre del partido liberal-conservador (AMJ, Magistrados y Jueces, l. 5681, n. 84 ver índice de magistrados).

³¹¹ Ver apéndice documental correspondiente a Saturnino Álvarez Bugallal.

³¹² Participó activamente en política en las filas del partido conservador (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4302, n. 1095 ver índice de magistrados).

Palma, independiente³¹³, Juan Francisco Bustamante Martínez, moderado³¹⁴, Salvador Albacete Albert, canovista³¹⁵ y Pedro Sánchez Mora, independiente³¹⁶. Y los ceses por razones naturales (fallecimiento o jubilación) de: José María Cáceres, progresista³¹⁷, José Fermín Muro, moderado, José Manuel Almonacid, independiente³¹⁸, Ricardo Alzugaray Yanguas, independiente³¹⁹ y Miguel Ruiz Zorrilla, independiente³²⁰.

Se recuperaron para el alto tribunal a otros tres destacados magistrados que al igual que en su momento Vicente Ferrer, fueron declarados cesantes en 1868: José Muñiz Alaix independiente, Antonio María Prida Sánchez, independiente y Leandro López Montenegro, conservador.

Esto supuso un compromiso desde la independencia, con el nuevo sistema político trazado por Cánovas en la Restauración. Este mismo año se produjo la sustitución de Sebastián González Nandín como Presidente interino que era del Tribunal Supremo por Fernández Calderón Collantes -que había sido ministro de Gracia y Justicia- para entrar en el gobierno de Saturnino Álvarez Bugallal (enero de 1879), lo que provocó una fuerte polémica por parte de la oposición canovista que veía en este trueque de ministros y presidentes del Tribunal Supremo una maniobra para reconducir el desgaste público que venía sufriendo Calderón Collantes al frente del ministerio³²¹.

El año de 1880 se resolvió con dos decretos (2 de febrero y 17 de abril) por los que se autorizaba al ministro de Gracia y Justicia para desarrollar una Ley de organización de tribunales³²². Se expusieron las condiciones de ingreso en cada estamento que presentaba la novedad de acreditación y formación de listas de candidatos para

³¹³ No hay informaciones políticas sobre él (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4414, n. 2723 ver índice de magistrados).

³¹⁴ Fue cesante todo el Sexenio revolucionario hasta la llegada de la Restauración (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4298, n. 1072 ver índice de magistrados).

³¹⁵ Participó activamente en política en las filas canovistas como diputado y el 19 de marzo de 1879 fue nombrado ministro de Ultramar en el gobierno (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4261, n. 255 ver índice de magistrados).

³¹⁶ No hay informaciones políticas sobre su afiliación ideológica (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4596, n. 5192 ver índice de magistrados).

³¹⁷ Informes favorables a su conducta política en 1836, 1840 y 1854 (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4335, n. 1640 ver índice de magistrados).

³¹⁸ Controvertidos análisis sobre sus posiciones políticas que me hacen pensar que mantuvo una equidistancia según los momentos (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4249, n. 157 ver índice de magistrados).

³¹⁹ Participó activamente en política como diputado en varias legislaturas pero sin adscripción partidista (ACD, Guía de Forasteros en Madrid (1878), expediente desaparecido, ver índice de magistrados).

³²⁰ No existen informaciones políticas en su expediente, participó en política como diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4701, n. 6559 ver índice de magistrados).

³²¹ M. Morayta. *Historia de España*. T. IX, l. LIX, c. IV pp. 1008 y ss.

³²² En su preámbulo se justificaba su promulgación: “La Ley provisional sobre organización del poder judicial, promulgada en 15 de septiembre de 1870, expresión de la necesidad universalmente sentida de reorganizar los tribunales, ordenados en nuestra patria sobre principios incompatibles con la aspiración a nuevos procedimientos, fue sin embargo de imposible aplicación, porque conteniendo una organización, siquiera fuese adecuada a las exigencias científicas, sumamente costosa, dada la situación del tesoro público, esto por sí solo bastó para que forzosamente y desde luego se vieran inobservadas muchas de sus disposiciones”.

consensuar los nombramientos por parte del gobierno y con propuesta previa del propio Tribunal Supremo.

El decreto de 2 de febrero³²³ introdujo el juicio oral y público y la instancia única en los juicios criminales lo que provocó una redistribución de tareas internas en el Tribunal Supremo y modificando algunos preceptos de la ley de 1870.

En el terreno político, asentado ya el sistema de bipartidismo entre conservadores y liberales (Cánovas y Sagasta), España se encaminó teóricamente hacia la estabilidad institucional pero siguieron los sobresaltos y las crisis. La Corona se erigió en moderador y los partidos encontraron en la alternancia un modelo de salubridad pública. La cohesión y la unidad de los políticos fue determinante para no romper esa dinámica que históricamente se había continuado desde la caída del Antiguo Régimen.

Uno de los últimos trabajos normativos que se presentó fue el Real Decreto de 17 de abril de 1880 autorizando al ministro de Gracia y Justicia, para que presentara a las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de tribunales.

Argumentaba que el principio de inamovilidad contemplado en el artículo 80 no se había organizado de manera que respondiera sin peligros a su elevado espíritu, y asegurara como resultado la independencia de la magistratura (...).

Introdujo en el preámbulo un factor de riesgo y discrecionalidad cuando decía:

“prometiéndose conciliar el derecho que el magistrado y el juez dignos tienen a ser siempre respetados en su puesto, con el deber que a todo Gobierno incumbe, en bien de la administración de justicia, de permitir que la inamovilidad se convierta en escudo de malos funcionarios”

En todos los epígrafes se mostró un exquisito respeto en no interferir en las reglas y procesos que se auto-otorgaba la administración judicial y así consagrar el principio de independencia. Sólo destaco que en la base octava se le confirió una prerrogativa al ejecutivo, entendible a todas luces, en el sentido de organizar con las debidas garantías la inspección constante de un servicio judicial, aunque hubiera sido preferible que dicho servicio emanara del propio orden judicial para no inducir de nuevo a posibles suspicacias.

Esta evolución aquí desarrollada puso una vez más de manifiesto, los serios obstáculos que se sucedieron para llevar a la práctica un principio esencial de la independencia judicial como fue el de la inamovilidad, verdadero eje de un correcto funcionamiento de la magistratura.

Aun siendo la LOPJ un punto de inflexión, existieron posteriores correcciones en la literalidad e interpretación del articulado correspondiente a este punto, que levantaron

³²³ CL. T. CXXIV (1880) pp. 162-168

sospechas fundadas para afirmar que era un tema ya totalmente dilucidado en el período aquí investigado.

En 1881 se promulgó un Real decreto que aprobaba el reglamento de los aspirantes al ministerio fiscal³²⁴. Este año presentó algunos avances en materia de enjuiciamiento civil y el 21 de octubre se autorizó por decreto al ministro de Gracia y Justicia a revisar las bases de organización de tribunales, sobre el trabajo realizado en 1880.

En el capítulo de nombramientos, en 1881 no se produjo ninguno y ceses fueron siete: Pío de la Sota, moderado³²⁵, Pedro Sánchez Mora, independiente, Antonio de Mena y Zorrilla, Unión-liberal³²⁶, Luis Vázquez Mondragón, independiente³²⁷, Joaquín Ruiz Cañabate, independiente³²⁸, Julián Gómez Inganzo, conservador³²⁹ y Diego Fernández Cano, progresista³³⁰.

Tres casos fueron jubilaciones a petición propia. Una jubilación fue automática según se contemplaba en la normativa vigente, otra por ascenso y un sólo caso, Ruiz-Zorrilla, fue declarado cesante.

Aún ya no siendo objeto específico de nuestro estudio por el espacio cronológico en el que nos adentramos debemos mencionar la Ley Adicional a la orgánica del Poder judicial de 14 de octubre de 1882 y que habilitó al gobierno, de forma clara, a los efectos de proveer las vacantes de los juzgados, magistraturas y fiscalía³³¹.

Una Comisión General de Codificación obtuvo el encargo de refundir y armonizar las leyes de 15 de septiembre de 1870 y la de 14 de octubre de 1882 en torno precisamente a la redacción de unas bases.

En su base tercera se perfilaba la carrera judicial y diciendo: podrán ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes o fiscales y presidentes de sala de Audiencia General, y los magistrados de la de Madrid que reúnan las condiciones que respectivamente señalen la ley.

³²⁴ CL. T. CXXVI (1881) pp. 131-143

³²⁵ Separado de su destino por la Junta de gobierno del período revolucionario y presentó la dimisión de su cargo en el ministerio cuando comenzó el Sexenio revolucionario (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4598, n. 5206 ver índice de magistrados).

³²⁶ Participó activamente en política como diputado y como senador en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4567, n. 4872 ver índice de magistrados y apéndice documental).

³²⁷ No existen valoraciones políticas para encuadrarle en ningún bando (AHN, Fondos contemporáneos, l. 754, n. 12026 ver índice de magistrados).

³²⁸ No existen valoraciones políticas para adscribirle a ningún bando (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4605, n. 5260 ver índice de magistrados).

³²⁹ Participó activamente en política como diputado y como senador en varias legislaturas y fue elegido magistrado del Tribunal Supremo a la llegada de la Restauración (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4438, n. 3007 ver índice de magistrados).

³³⁰ El 4 de agosto de 1843, se le confirmó como jefe político de Badajoz, lo que le identifica en el bando progresista, pero renunció poco después al ser designado magistrado de la Audiencia de Granada, fue diputado en varias legislaturas (AHN, Fondos contemporáneos, l. 4413, n. 2709 ver índice de magistrados).

³³¹ CL. T. CXXIX (1882) pp. 1157-1190

Los cargos de presidente de sala del Tribunal Supremo, se proveerían en quienes pertenecieran, con algún tiempo de servicio, a la categoría inmediatamente inferior a dichos cargos. De cada cuatro vacantes de magistrado de Tribunal Supremo podría proveerse una de entre catedráticos numerarios de Derecho o en abogados distinguidos en quienes concurrieran especiales condiciones de mérito, semejantes a las exigidas por la legislación actual. Se declaró de igual modo el principio de oposición como único medio de ingreso en la carrera.

He destacado este tema pues como bien señaló el trabajo de Sánchez Ocaña³³² fue verdaderamente inexplicable el silencio de las bases respecto a la inamovilidad, y mucho más todavía, si se tiene en cuenta que siendo el principal objetivo del proyecto armonizar las leyes de 1870 y 1882, nos encontramos al examinarlas con que la primera la excluye de un modo terminante, en tanto que la segunda no se ocupa ni dispone nada valorativo a este principio de organización judicial.

Sigue diciendo que según la ley orgánica solo se concedía el beneficio de la inamovilidad a los que ingresaron en la carrera judicial por oposición. Se da de esta manera una distinción entre funcionarios, ya que unos, sin duda, gozan de inamovilidad (los del Tribunal Supremo se incluyen aquí) y otros estaban a merced del arbitrio ministerial (ministerio fiscal).

8. La jurisdicción contencioso-administrativa: un instrumento de permanente controversia

Es preciso dedicar un apartado singular al lugar que ocupó la materia contencioso-administrativa entre las atribuciones del Tribunal Supremo en éste período (1836-1881) pues fue, sin duda, un elemento de politización permanente y constante. Me interesa abordarlo en dos vertientes: el problema político suscitado para implantar una jurisdicción propia y el problema técnico que se deriva de su aplicación (esta segunda vertiente la analizo en el capítulo correspondiente a la Estructura y funcionamiento del Tribunal Supremo pues aporta elementos técnicos de engranaje en el dispositivo de trabajo de las salas competentes).

Es cierto que son dos problemáticas de naturaleza diversa pero con un mismo denominador común: la desarticulación orgánica que sufría la administración de justicia en instancias y competencias hasta la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

La existencia de jurisdicciones especiales erradicada a través del decreto de Unificación de Fueros de 6 de diciembre de 1868 y la indefinición del Tribunal Supremo en su composición y facultades desde las Cortes de Cádiz, profundizaron en un problema que se arrastró durante casi 60 años.

³³² R. Sánchez Ocaña “ El Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales” *RGLJ*, T.72 (1888) p. 411.

El Real decreto de 24 de marzo de 1834, suprimiendo el Consejo de Estado, los antiguos Consejos de Castilla y de Indias y la creación del Tribunal Supremo de España e Indias, iba a suponer el primer deseo político de concentrar en éste órgano una materia importante y delicada. Este decreto surgió en un momento de aparición de una nueva estructura administrativa - prioridad del gobierno- y que derivó en una preocupación de éste por las interferencias de los tribunales ordinarios que podían causar serias repercusiones en las reformas emprendidas³³³.

El sistema judicialista emprendido en Cádiz (sólo los tribunales ordinarios entienden de pleitos y recursos en todos los ámbitos) se veía por tanto obstaculizado desde el primer momento por las reminiscencias jurisdiccionales del Antiguo Régimen y por el afán del poder político directo o indirecto de imponer su esquema funcional.

El art. 278 de las Cortes de Cádiz abrió el portillo para el cuestionamiento del sistema judicialista que en artículos anteriores había preconizado, cuando establecía dos principios incuestionables: la pervivencia de diversas jurisdicciones -en el espíritu sólo eran Hacienda y Guerra- y que el alcalde gozaba de competencias gubernativas y contenciosas.

Cuando existían lagunas se aplicaron los arts. 242 y 245, por los que correspondió a los tribunales juzgar todos los litigios. Fue aquí donde se produjo el debate que describo como problema político: ¿dónde se ubicó en realidad la materia contencioso-administrativa?, ¿en qué ámbito jurisdiccional?, ¿a quién competía resolver esos pleitos en que la administración era parte interesada? Es ésta materia objeto claro de politización de la justicia en el Tribunal Supremo por ser éste quien debía en su origen facultativo entender en dichas causas.

La división de poderes quedaba una vez más en entredicho, curiosamente en unos momentos de vuelta al doceañismo (1836-1839), donde precisamente se preconizaba ésta doctrina de manera radical (ese fue el deseo que inspiró la anulación de los antiguos Consejos) y buena prueba de lo que digo fue la Real orden de 12 de mayo de 1836 que en su preámbulo decía textualmente “dejen a la administración toda la libertad de acción que ha menester para cumplir debidamente con los objetos de su acción”.

Esta doctrina se apoyaba en que en todos los procedimientos donde la administración fuera parte, sólo la propia administración estaba facultada para su resolución atendiendo a que estén referidos especialmente sobre el servicio público³³⁴.

Con anterioridad debemos mencionar que el Reglamento de la administración de justicia de 1835 contempló negocios contenciosos referidos al Real Patronato de España e Indias y de los referidos en apelación de los negocios contenciosos de la Real Caja de Amortización entre las atribuciones conferidas al Tribunal Supremo.

³³³ J.R. Fernández Torres, *La formación histórica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (1845-1868)*, Madrid, Civitas, 1998 pp. 103 y ss

³³⁴ B. Posada Herrera *Lecciones de Administración*, p. 714

La Constitución de 1837 no avanzó en el esclarecimiento del problema, pues no trastocó para nada el tradicional reparto de poderes entre la administración y el poder judicial dispuesto en 1812. En la evolución cronológica del desarrollo constitucional del 37 nos encontramos la Real orden de 8 de mayo de 1839 firmada por Arrazola, en un contexto político bien distinto de encauzar la situación a terrenos de concentración del poder y alejado de ilusas pretensiones libertarias.

Es esta orden la que nos ofrece parámetros para valorar y medir el intervencionismo del ejecutivo en este campo jurisdiccional cuando dice:

“se declara que las disposiciones y providencias que dicten los ayuntamientos, y en su caso las diputaciones provinciales, en los negocios que pertenezcan a sus atribuciones según las leyes, formen estado y se lleven a efecto, sin que los tribunales admitan contra ellos los interdictos (...)”

Esta Real orden, al entender de Ortiz de Zúñiga, lejos de evitar esos males, los ha aumentado, ha ocasionado conflictos y ha debilitado la acción de los tribunales de justicia, ensanchando el poder desmedido de las corporaciones locales y las diputaciones de provincia.

Y a través de otra Real orden de 25 de noviembre de ese mismo año, se consagraba la intervención del estado en los pleitos de rentas y arbitrios de amortización en temas recaudatorios de la Hacienda pública, alejando el entendimiento de los tribunales ordinarios en estos asuntos. Hay una tendencia generalizada en estos años de hegemonía moderada, de argumentar y dar doctrina en favor de la injerencia política³³⁵ como privilegio de la administración.

En 1840 se promulgó un proyecto de ley que intentaba organizar un tribunal específico en esta materia pero, fue un deseo no plasmado en la realidad por los acontecimientos revolucionarios que se produjeron. Con carácter provisional se arbitró el establecimiento de un Consejo Central de estado y gobernación donde se enunciaron una serie de atribuciones de orden administrativo y político. Distintas doctrinas enfrentadas se expusieron en ese momento al respecto, no exentas de fundamentaciones jurídicas y políticas³³⁶.

³³⁵ F. A. Silvela: “conseguiríase, en efecto, decidiéndose las contiendas administrativas por los tribunales de justicia, la ventaja de dar suficientes garantías al interés individual, pero sería a costa de haber quitado sus fueros al interés general, a costa de haber ahogado la administración entre interminables dilaciones, cuando su carácter peculiar es la rapidez y simultaneidad (...) todo en pro del orden social”. *Imprenta Nacional*, Madrid (1839) p. 188

³³⁶ En este sentido menciono dos posicionamientos contrapuestos: el de Bordiú: “si la Administración es responsable último, debe tener libertad para actuar” y el de Ortiz de Zúñiga de gran calado por su completa tarea legislativa y por haber pertenecido en su momento al Tribunal Supremo “es un axioma de jurisprudencia que los asuntos contenciosos corresponden exclusivamente al poder judicial” y desarrolla un itinerario histórico afirmando que este asunto “ha sido objeto de muy opuestas opiniones de disputas y conflictos entre los ministros de justicia y las autoridades municipales y administrativas (...) en el límite de hasta donde alcanzan las atribuciones de éstas, y desde donde compete al poder judicial ejercer su jurisdicción. La imperfecta legislación que nos rige en ambas materias y la confusión que inevitablemente han introducido las reformas, que sin un plan general y metódico se han hecho en todos los ramos de la Administración pública, apenas permite trazar con claridad una línea divisoria que designe a cada

Quedaba claro que la jurisdicción contencioso-administrativa era una buena herramienta de instrumentación política, pero no es menos cierto, que su correcta ubicación en el terreno de la jurisdicción ordinaria planteó problemas de carácter técnico en un panorama de construcción generalizada del orden judicial.

El Real decreto de 24 de octubre de 1842 - época de hegemonía progresista- se reiteró en la doctrina intervencionista³³⁷, demostrando que el interés por el control jurisdiccional fue una constante de todos los signos políticos que se repitió años más tarde³³⁸.

El 27 de diciembre de 1844 se depositó la jurisdicción contenciosa- administrativa en manos de los consejos provinciales. Esta disposición se completó por la Ley de Organización y Atribuciones de los Consejos Provinciales de 2 de abril de 1845 dada por el ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal³³⁹, y posteriormente por la Ley de 6 de julio de 1845 de Organización y Atribuciones del Consejo Real compuesto por treinta consejeros ordinarios nombrados por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros (lo integraban también el presidente del Consejo de Ministros y los ministros secretarios de estado y del despacho, además del ministro de más edad). Este órgano, por tanto, con una elección muy directa del gobierno, decidiría en los asuntos contencioso-administrativos³⁴⁰.

El 30 de diciembre de 1846 se promulgó un real decreto aprobando interinamente el reglamento sobre el modelo de proceder en los negocios contenciosos de la administración que se estudiaban en el Consejo Real compuesto de 282 artículos y que representaba un avance desde el punto de vista de objetivar los pleitos y ulteriores recursos frente a las sentencias dictadas por este órgano, pero siempre desde la independencia hacia la jurisdicción ordinaria.

El 4 de junio de ese mismo año se estableció por una orden que correspondía al Rey, por prerrogativas constitucionales, dirimir las competencias de jurisdicción y

autoridad la demarcación de sus facultades. A ello se añade la carencia de un tribunal contencioso administrativo destinado a decidir, entre otras cuestiones, las de estas clases de competencias (...) o haber de recurrir al Gobierno para la decisión de cualquier controversia de esa naturaleza y mezclarse el poder ejecutivo en resoluciones jurídico-administrativas impropias de su conocimiento y de sus atribuciones constitucionales”

³³⁷ Dice el decreto de 24 de octubre de 1842: “los negocios meramente gubernativos de la Administración no son susceptibles de ser ventilados por los Tribunales. Sólo la propia Administración está facultada para su resolución atendiendo a que versen especialmente sobre el servicio público”.

³³⁸ Reales ordenes de 28 de febrero de 1844; 21 de enero de 1845 y 14 de junio de 1845. Todas ellas son claros ejemplos de prohibición de interponer interdictos contra las providencias gubernativas de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, y por tanto de acudir a la jurisdicción ordinaria.

³³⁹ Así se dispuso en su t. II a. 8 “Los Consejos provinciales actuarán además como tribunales en los asuntos administrativos, y bajo tal concepto oírán y fallarán, cuando pasen a ser contenciosas en : bienes y aprovechamientos comunales, repartimientos de cargas municipales, contratos con la administración civil, daños y perjuicios de obras públicas, insalubridad de establecimientos públicos, límites territoriales municipales, propiedad de bienes públicos, obras de ríos y canales en cauces y márgenes.

³⁴⁰ Tal y como se recoge en el punto 5º del a. 11, dentro del t. II de la Ley de 6 de julio de 1845 de organización y atribuciones del Consejo Real: “De las atribuciones del Consejo” y del modo de ejercerlas recogido en el t. IV: “Del modo de proceder en lo contencioso”.

atribuciones que ocurrieran entre las autoridades administrativas y los tribunales ordinarios y especiales, y se concedía a través del art. 2º la potestad en favor de los jefes políticos para entender en materia de competencia, siguiendo la doctrina establecida en la Ley de 2 de abril de 1845.

Se describieron las cuestiones y materias a tener en cuenta, las atribuciones del Consejo Real, del Ministerio de la Gobernación y de la sección de Gracia y Justicia. Es de destacar que la orden por la que se prevenía todo esto, venía dada desde el ministerio de Gracia y Justicia, con una claudicación llamativa en orden a orientar en favor de sus atribuciones toda la materia objeto de debate y de disputa.

La Real orden de 9 de junio de 1847 disponía que no se admitiera por ningún tribunal demandas judiciales contra el Estado que se opusieran a sus intereses, sin que previamente se hiciera constar que se había obtenido resolución en el asunto por la vía gubernativa. Se consagraba la doctrina de resolución de conflictos “ad hoc” contraviniendo nuevamente la capacidad existente de reunir a la jurisdicción ordinaria.

Es necesario indicar que toda esta legislación completaba perniciosamente una laguna de discusión permanente: ¿qué temas eran objeto de la jurisdicción contenciosa? esta pregunta no estaba clara en un principio y así lo manifestó Ortiz de Zúñiga³⁴¹ hasta que definitivamente se clarificó el marco competencial y temático en el Consejo Real, sobre lo contencioso-gubernativo.

Otros autores de relieve como García Goyena y Joaquín Aguirre trataron de defender la actuación del ejecutivo sin menoscabo del poder judicial. No observaron hostilidad sino complementariedad de funciones que mejoraban la decisión final³⁴².

En 1848, con Lorenzo Arrazola al frente del ministerio de Gracia y Justicia se promulgó una real orden en el mes de abril, que volvía a decantar en favor de la administración los pleitos donde la justicia ordinaria se inhibía³⁴³. El ministro reforzaba el intervencionismo del ejecutivo en los asuntos contencioso-administrativos.

Posteriormente se creó una Dirección General de lo Contencioso que tuvo conocimiento de todos los negocios referidos a la Hacienda pública y que en definitiva

³⁴¹“son contenciosas aquellas controversias en que mediando derechos de los particulares (bien de naturaleza privada, derechos civiles, como la propiedad o la posesión, bien pública) o de las Corporaciones locales (o de cualesquiera otras públicas y privadas), han de ser resueltas por trámites judiciales ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.

³⁴²“Las atribuciones del poder ejecutivo, que ejerce el gobierno, se dirigen tan sólo a la administración de los intereses comunes y a la vigilancia por el cumplimiento de las leyes, pero no a la aplicación de las mismas cuando se necesita una declaración de los derechos de un tercero que exige conocimiento de causa. Pertenecen por lo mismo al poder judicial, porque su misión está cabalmente reducida a declarar, con audiencia de las partes, los derechos que a las mismas corresponden cuando solicitan su auxilio, usando de las acciones que han adquirido por los títulos y modos que las leyes tienen establecidos“, *“inamovilidad judicial” Administración de Justicia, t. V pp. 194-203.*

³⁴³ En favor de los jefes políticos en las respectivas provincias los pleitos que se hallasen en primera instancia, y al gobierno directamente por conducto del Ministerio de la Gobernación cuando pendiesen en segunda o ulteriores instancias.

fue una instancia al servicio del gobierno para que éste no se viera perjudicado por los intereses de otras instancias.

A través del Real decreto de 30 de enero de 1852, en tiempos del ministro González Romero, se hizo efectivo el principio por el cual el Tribunal Supremo se erigía en máxima instancia jurisdiccional³⁴⁴ en materia contencioso-administrativo. Con ello se pretendió organizar las causas estancadas y así evitar arbitrariedades de los juzgados menores en causas político-administrativas, a favor en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, de los intereses de la administración en situaciones de conflicto.

El Proyecto de Ley provisional de organización y atribuciones del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1864, con un gran perfil técnico presentó una elocuente ausencia: la jurisdicción contencioso-administrativa, en un contexto de presencia política en instancias jurisdiccionales.

Tuvieron que transcurrir cuatro años para encontrar una nueva disposición elevada a rango de decreto 13 de octubre de 1868, dado por Práxedes Mateo Sagasta al frente del ministerio de la Gobernación, por el que se suprimía la jurisdicción contencioso-administrativa que venían ejerciendo el Consejo de Estado y los Consejos provinciales desde 1845. Todos los contenidos referidos a esta materia, pendientes en el Consejo de Estado, pasaban directamente al Tribunal Supremo con la creación de una sala específica para estos negocios. Este órgano entendía de los recursos de alzada y nulidad que se incoasen y de las demandas que según la legislación que hasta ese momento debían entablarse ante el Consejo de Estado.

Se marcaba, de este modo, un rotundo cambio de doctrina, olvidando la tradicional jurisdicción retenida e incorporando a la jurisdicción ordinaria una materia reiterativa en el campo de la usurpación en favor del poder ejecutivo. La revolución progresista fue el detonante en el marco general de la separación de poderes, para acabar definitivamente con la discrecionalidad interesada de la administración.

La Revolución de 1868 profundizó en la conciencia de que el sistema político-social del Antiguo Régimen seguía presente y operante en el siglo XIX. Había que romper ese esquema, a través de la elaboración de un nuevo texto constitucional y la construcción de un sistema jurídico que garantizara las funciones de la monarquía como forma de gobierno y la división política y administrativa del territorio nacional.

Fue 1868, el año que marcó un cambio rotundo en la concepción del poder, asentado en el decreto de 6 de diciembre de Unidad de Fueros y posteriormente en los principios constitucionales de 1869, ratificados en lo que se refiere a organización judicial a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Previamente se promulgó el decreto de 16 de octubre de 1868, creando en el Tribunal Supremo de Justicia una sala específica para resolver cuestiones contencioso-administrativas. Siendo ministro Antonio Romero Ortiz y amparándose en los arts. 5º y

³⁴⁴ CL. T. LV (1852) pp. 111-112

6º del decreto de 13 de octubre³⁴⁵, emitido por el ministerio de Gobernación, este decreto contempló que dicha sala estaría compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y por los dos de sala más antiguos³⁴⁶. Los acuerdos deberían adoptarse por mayoría absoluta de votos (en este caso por unanimidad).

El 26 de noviembre de este año se reformó la organización del Tribunal Supremo. En él se recogió que la jurisdicción contencioso-administrativa no sería una jurisdicción especial, sino un recurso, que dentro de la justicia ordinaria debiera resolver el Tribunal Supremo y se aportaron razones de peso: desconfianza de los litigantes, tardanza en los procesos y movilidad excesiva en cargos decisorios que cuestionaron la independencia en asuntos de interés como eran éstos.

Este cambio no debió ser mal interpretado, sino que contribuyó a la agilidad, rigor y uniformidad que se buscaba tras el cambio político surgido con la revolución de septiembre de 1868³⁴⁷.

De este modo se resolvió por el momento la competencia contencioso-administrativa a favor de la jurisdicción del Tribunal Supremo y en detrimento del Consejo de Estado.

El ministro Cristino Martos, promulgó un decreto en 1874 derogando los de 8 de mayo y 3 de octubre de 1873, resaltando la vigencia y validez de la LOPJ con respeto a la Constitución de 1869. Quedó claro el papel del ejecutivo en relación con el judicial y se tuvo la firme intención de que no se involucraran las funciones jurisdiccionales con los actos administrativos.

La novedad planteada en el período político de la República, dio paso dos años más tarde en un contexto bien distinto, como era la restauración al decreto, firmado por el ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas, bajo la presidencia de Cánovas del Castillo, que con fecha de 27 de enero de 1875 reorganizaba la planta del Tribunal Supremo, en función de lo promulgado por Presidencia de Gobierno, el 20 de enero de ese mismo año. Este decreto devolvía al Consejo de Estado las atribuciones en los asuntos contencioso-administrativos.

Se resucitaron las comisiones provinciales, como antes de 1868, y se pasó a un nuevo escenario que volvía a comprometer la independencia judicial en una materia tan

³⁴⁵ Art.5º Las demandas que según la legislación hasta ahora vigente debían entablarse en primera y única instancia ante el Consejo de Estado, lo serán en lo sucesivo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 6º La tramitación de los asuntos contencioso-administrativos se verificará con arreglo a lo dispuesto en las leyes y reglamentos del Consejo de Estado y de los provinciales hasta que otra cosa se disponga por las leyes, exceptuándose la parte referente a proposición y realización de prueba por los litigantes, que se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

³⁴⁶ En las Audiencias se siguió el mismo modelo, conformando la sala, el Regente y los dos presidentes de sala más antiguos.

³⁴⁷ La jurisdicción del Tribunal Supremo es siempre propia, directa; entre ella y los litigantes no debe haber intermediario alguno, menos puede serlo la Administración a la cual, por alta importancia que tenga en su respectiva esfera, en el orden del juicio sólo le corresponde el carácter de litigante. Separarse de esto equivaldría al restablecimiento de la jurisdicción retenida, traspasando la preparación de las admisiones de demandas y de los fallos de una a otra Corporación, y encomendándola a la que más abstraída debe estar de todo a lo que la Administración se refiere.

sustancial como ésta. Se puso de manifiesto, una vez más, el interés por controlar la jurisdicción retenida y nuevamente en el alero se encontraba la división de poderes³⁴⁸ con doctrinas y fundamentos de conveniencia política. Para ello, dicho decreto dispuso lo necesario para resucitar los antiguos consejos e incorporar a estas personas de afinidad ideológica.

En su art 7º, se dispuso que el ministerio de Gracia y Justicia procediera a reformar la organización del Tribunal Supremo. La consecuencia inmediata fue la promulgación, una semana después, de un nuevo decreto que suprimía la sala tercera por carecer ya de sentido competencial y distribuir a los magistrados entre las restantes. A pesar de todo se suprimieron cuatro plazas de magistrado³⁴⁹.

El Tribunal Supremo quedaba de este modo configurado con tres salas: la primera analizaba los recursos de casación por infracción de ley o de doctrina legal en materia civil, la segunda analizaba los recursos de casación por infracción de ley o de doctrina legal en materia criminal y la tercera analizaba los recursos de casación por quebrantamiento de forma en materia civil y criminal.

El Real decreto de 17 de mayo de 1880 que autorizaba al ministro de Gracia y Justicia a presentar a las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de Tribunales, no introdujo ninguna novedad en lo que respecta a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se orientó fundamentalmente a describir con mayor precisión la carrera judicial y a magnificar los preceptos constitucionales de inamovilidad e independencia.

³⁴⁸“(…) Se ha creído en el caso de encarecer la necesidad de que se le encomiende de nuevo el conocimiento de estos asuntos para que cese un estado de cosa en que los Ministros reciben la censura, no de los cuerpos colegisladores, únicos que en buena doctrina constitucional pueden sindicarlos, desaprobando sus actos y exigirles la responsabilidad en que por ellos incurran, sino de un Tribunal que, por muy elevado que sea, nunca tendrá derecho a ocupar un puesto más alto que el Gobierno Supremo”.

³⁴⁹ Esta supresión, sólo afectó a Álvaro Gil Sanz de tendencia política progresista al ser declarado cesante; el resto de plazas se amortizaron por los fallecimientos de Fernando Pérez Rozas y Crispulo García de la Serna, y los nombramientos a su vez de Juan Jiménez Cuenca y Pascual Bayarri García, como nuevos consejeros de Estado (el primero Senador electo y el segundo Diputado moderado. Los dos dejaron su condición de magistrados del Tribunal Supremo).

III. ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

1. Composición del Tribunal Supremo

1.a. el Presidente

1.a.a. etapa liberal y revolucionaria

Como información previa al período de estudio de la tesis (1836-1881) he de mencionar que la figura del presidente quedó contemplada inicialmente en el Reglamento de 13 de marzo de 1814 que desarrolló los principios establecidos en Cádiz, en cuanto a que su nombramiento correspondía al rey o a la regencia, según las ternas que le presentaba el órgano consultivo correspondiente distinto en cada período histórico y la duración en el cargo era ilimitada, ya que en su nombramiento no se hacía mención alguna al respecto. Sus funciones fueron: reunir las salas, vigilar internamente el funcionamiento de cada uno de los miembros del Tribunal, recibir las quejas de los litigantes, ser el interlocutor con el gobierno de turno y ejercer la suprema inspección a través de la firma de los despachos y provisiones expedidos por el tribunal en cualquiera de sus salas.

Estas funciones fueron incorporadas en su totalidad al Real decreto que contempló el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias de 17 de octubre de 1835. Fue ésta una de las principales reformas de la justicia emprendida por el ministro Gómez Becerra³⁵⁰, y en el que se vino a dar continuidad a la que ya se contemplaba en el Real decreto de 24 de marzo de 1834 y que definió la anulación del Consejo Real de Castilla e Indias en favor de la creación del Tribunal Supremo de España e Indias, que heredó sus antiguas funciones³⁵¹.

En dicho decreto se observaba la composición del alto Tribunal y la figura del Presidente que era elegido por el Consejo de Ministros, habitualmente a propuesta del ministro de Gracia y Justicia, y que tenía la potestad de repartir el trabajo a las salas, o incluso, de crear algún otro órgano de apoyo en caso de necesidad y siempre en función de agilizar las causas pendientes. Este órgano no quedaba bien delimitado ni en sus miembros ni en su forma de composición y funcionamiento, con lo que podemos

³⁵⁰ CD. T. XX (1835) pp. 465-485

³⁵¹ La primera constatación del Tribunal Supremo de España e Indias se produce en 1809 con la disolución del Consejo de Castilla por la invasión francesa y en el que se reunieron todas las funciones de los Consejos suprimidos con anterioridad (Castilla, Indias, hacienda y Ordenes). Como bien señala el profesor J. Sánchez Arcilla en su libro *Historia de las Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975)* el Consejo quedó estructurado en tres salas, dos de gobierno y una de justicia conformadas por magistrados afectos al sistema. El 16 de septiembre de 1810 el Consejo de la regencia puso fin a esa extraña y confusa situación y restableció los antiguos Consejos aunque se echaba en falta la existencia de un tribunal superior que conociese de los asuntos de mayor calificación.

deducir que venía a ser un ámbito de discrecionalidad del Presidente, en consonancia con el que lo elegía, es decir con el ejecutivo.

En el artículo 3º también se disponía, que el Presidente podía asistir a la sala que mejor considerase, fuera ordinaria o auxiliar; y aquella a la que él no asistiera, presidiría el ministro más antiguo con la misma potestad y representatividad que el propio Presidente en delegación de funciones (guarda el orden del día, así como las deliberaciones y es la figura a la que corresponde tener la última palabra).

El Supremo Tribunal de España e Indias contemplaba la existencia de tres salas, dos para asuntos de la Península y otra para los de ultramar, y en las tres ejercía el Presidente como presidente de sala de dicho tribunal que actuaba indistintamente en pleno o en salas.

La Constitución de 1837, no alteró en absoluto el Reglamento de 17 de octubre de 1835. No se expresó ninguna novedad sobre esta institución y siempre se obró en consonancia con lo dispuesto en el año 1834.

En mayo de 1838 se redactó un Proyecto, fruto del trabajo que emprendió una comisión compuesta por José Alonso, Claudio Antón de Luzuriaga, Joaquín Francisco Pacheco, Santos Pelegrín y Juan Bravo Murillo, y cuyo objetivo inicial fue seguir planteando soluciones de profesionalidad y eficacia en el normal funcionamiento del Tribunal con respecto al documento de 1835³⁵². Esta saludable idea, materializada en el proyecto comentado, fue reconducida por el ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola que procedió a una redacción más ajustada a intereses políticos conniventes con la hegemonía imperante. Buena prueba de ello, fue el pronunciamiento de un miembro de la comisión, José Alonso, que veía frustrados los legítimos anhelos que vislumbró ese grupo de trabajo al inicio de sus tareas y que más adelante detallaré en algunas de sus reacciones.

El contexto social y político, a finales de 1838, favoreció la reflexión y el debate por el mejoramiento de la acción judicial, aun con el lógico temor de la disfuncionalidad y el solapamiento entre el poder ejecutivo y el judicial, en momentos de cambio y construcción de una administración que debiera ser ajena a los deseos de tutela en el cumplimiento de sus legítimos fines. Consecuencia directa de esta situación fue el alumbramiento del Real decreto de 29 de diciembre de 1838, en cuyo preámbulo se insistió, en la necesidad de incorporar nuevas reglas para mejorar la condición de los magistrados y jueces a todos los niveles. Este texto valoró muy positivamente los logros de 1835, pero abundaba en algunas carencias observadas en el transcurso de esos tres años.

Si las intenciones, en principio, eran saludables, alcanzamos a comprobar que siguieron presentes algunas de las asignaturas pendientes del pasado, como fue, el principio de la independencia, que referida a la elección y designación del Presidente del Tribunal Supremo, contemplaba en el capítulo IV, artículo 12, que las propuestas se

³⁵² No disponemos de este texto y su conocimiento es por vía indirecta por la alusión que realiza el senador Calderón Collantes en la sesión de 6 de marzo de 1865 y que se recoge en el DSS. (1865) p. 348

harían en función de los años de antigüedad como jueces, magistrados y en su caso de fiscales, para a continuación afirmar categóricamente “reservándome yo (el Ministro) el apreciar las razones de política, de justicia y de conveniencia en cada uno de los casos”.

Como novedad con respecto a la legislación existente en 1834 y 1835, habría que decir que nunca se había abordado tan directamente el sistema de elección del Presidente del alto Tribunal, siendo notorio y evidente el intervencionismo del ministro de Gracia y Justicia, encarnado en la persona de Arrazola, en el control de la máxima instancia jurisdiccional, afianzando con ello el panorama competencial de los futuros años. Se menoscabó el papel de los órganos consultivos precedentes, en cuanto a la presentación de propuestas en forma de ternas, para que finalmente el rey designara al Presidente, según la práctica que se venía siguiendo desde la experiencia gaditana³⁵³.

Finalizado el período 1840-1843, y con la llegada de nuevo de los moderados, correspondió a González Bravo formar un gobierno de transición en el mes de diciembre de 1843 y que llevó a Luis Mayáns al ministerio de Gracia y Justicia.

1.a.b. etapa moderada

Los primeros trabajos de la Comisión de Codificación en 1843, desarrollaron unas Bases generales de los Códigos Civil, Penal y de los procedimientos civiles y criminales a solicitud del propio ministerio³⁵⁴. El 7 de marzo de 1844, se presentaron algunos borradores en los que se abordaba la organización de tribunales, entre cuyos contenidos esenciales, destacó el punto que atribuía la Presidencia del Tribunal Supremo a favor de la persona del ministro de Gracia y Justicia, medida ésta que fue tomada en consideración desde esa fecha hasta el 22 de diciembre de 1850. Fue éste un claro y manifiesto signo de intromisión política en los órganos jurisdiccionales, suponiendo un notable revés a la doctrina de la división de poderes plasmada en las redacciones constitucionales y que nuevamente quedaba vulnerada.

El 15 de abril de 1844, el vocal de la Comisión de Codificación José de la Peña Aguayo, presentó un Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales, que en su título I recogía el hecho que el Presidente del Tribunal Supremo, es decir el ministro de Gracia y Justicia, fuera presidente nato de las dos secciones en que se organizaba el Tribunal (casación y justicia), y justificaba tal medida, en una pretendida y nada fundamentada unidad de pensamiento, de redacción y de orden que ofrecía este trabajo jurídico, aspecto éste discutible en su base si añadimos que su deseo –el del autor– era que no se sometiera a la consideración y discusión de las Cortes.

Estas tesis no concitaron la unanimidad en el seno de la propia comisión, si nos atenemos al trabajo que otro vocal, Manuel García Gallardo, presentó en esas mismas fechas y donde se recogía la experiencia anterior en la que cada presidente de sala dirigiera cada una de las dos secciones, quedando el Presidente del Tribunal Supremo para la presidencia en pleno del órgano.

³⁵³ L. Moreno Pastor, *Los orígenes del Tribunal Supremo (18012-1838)* p. 272

³⁵⁴ ACGC. (1843) l. 3 de enjuiciamiento criminal, c. 3

En 1845, y a la luz de la Real orden de 12 de julio, se consumó lo que parecía inevitable en borradores y trabajos preparatorios anteriores y en la línea intervencionista que se mantuvo con el gobierno de Narváez, como fue el convertir al Tribunal Supremo en el órgano fiscalizador de los trabajos de las Audiencias por distintos caminos: mandando que el Presidente del Supremo dispusiera que se distribuyeran entre los magistrados del mismo, para su examen, las causas que hubieren remitido las Audiencias de la Península y no hubieran sido sustanciadas en el plazo de seis meses (causas criminales) y emitiendo un informe-resumen del funcionamiento de cada Audiencia³⁵⁵.

Las novedades en relación a la figura del Presidente del Tribunal, se continuaron en el Proyecto de Ley de 12 de junio de 1846 constitutivo de tribunales, redactado por la Comisión de Codificación y que venía a perfeccionar los precedentes en un ámbito de discusiones entre sus miembros³⁵⁶.

En su título II sobre régimen interior de los Tribunales, se determinaron las facultades de gobierno interior que correspondían al Presidente y que iban en la línea de lo ya trabajado por Peña Aguayo, presentando la novedad en la creación de la figura de los vicepresidentes del Tribunal Supremo (consignados en su capítulo 1º). Esta figura de hecho no existió, se quedó sólo en propuesta y en la práctica ejerció esa función, en ausencia o enfermedad del Presidente del Tribunal Supremo, el presidente de sala más antiguo, que solía coincidir con el de la sala primera.

Meses más tarde, se dictaron las reglas para la provisión de plazas de la magistratura, judicatura y ministerio fiscal del fuero común, y sobre suspensión, traslación y jubilación de los funcionarios de dichas clases³⁵⁷.

En el Proyecto de Ley constitutiva de los tribunales del fuero común de 23 de noviembre de 1851, se recogieron los requisitos que debería tener la figura del Presidente del Tribunal Supremo que se propusiera al ministro de Gracia y Justicia y que consistían en: “haber sido ministro de la Corona, haber desempeñado la plaza de magistrado del propio Tribunal por espacio de tres años, y los sujetos de elevada categoría, que habiendo servido por más de diez años en la magistratura, estuvieran adornados de las prendas y cualidades que exigiera tan elevado rango”.

Durante los tres años del gobierno de Bravo Murillo lo que, sin duda, significaba un cierto período de estabilidad en el maltrecho ecuador del siglo, y teniendo a González Romero como ministro de Gracia y Justicia, se pretendió concentrar en la figura del Presidente del Tribunal Supremo las causas y pleitos fenecidos en las Audiencias. Se concedió al alto tribunal la categoría de tercera instancia porque interesaba políticamente y en contra de la doctrina tradicional de la jurisprudencia existente hasta ese momento. Se justificó tal medida por la agilización de causas pendientes y evitar arbitrariedades de los juzgados menores en cuestiones político-administrativas, a favor

³⁵⁵ CD. T. XXXV (1845) pp. 47-48

³⁵⁶ CD. T. XXXV (1845) pp.56-57

³⁵⁷ Real Decreto de 7 de marzo (1851) T. LII pp. 522-524

siempre de los intereses de la administración en situaciones de conflicto. No cabe duda que la creación de la tercera instancia, como escenario procesal a favor del Tribunal Supremo, fue un mecanismo de control sobre el poder judicial puesto que existía una acción directa sobre la designación de sus magistrados, y así evitar las excesivas liberalidades de las Audiencias como máxima instancia jurisdiccional.

1.a.c. Bienio Progresista

Con la llegada del Bienio progresista y estando al frente del gobierno Espartero, se delegó en el ministro José Alonso, la reorganización de la administración de justicia en aquellos aspectos que pudieran ser considerados como contrarios a la línea liberal que planteaban los nuevos tiempos.

En ese sentido se procedió a suprimir las antiguas juntas de gobierno que se establecieron en el Tribunal Supremo y que estaban formadas por el Presidente del Tribunal Supremo y por los presidentes de sala, aduciendo varios motivos: abusos en la vigilancia de los jueces, se ofendía la independencia judicial, se anulaba la figura del relator, se fijaban arbitrariedades en las retribuciones de algunos magistrados y se favorecía la disparidad de doctrinas legales.

Estas instancias intermedias que se crearon en su momento, distaban de los deseos de hacer más transparentes los usos y maneras del poder judicial con que llegaban los nuevos gobernantes. Se restituyó la anterior distribución competencial a favor de las Audiencias y se anularon otro tipo de problemas colaterales³⁵⁸.

Pero la gran realización en materia de reordenación administrativa judicial de este período, fue sin duda el Proyecto de Ley orgánica de tribunales y juzgados de 22 de octubre de 1855 elaborado por una comisión formada por: Pedro Gómez de la Serna, Luis Rodríguez Calameño, Juan Manuel González Acevedo, Manuel Seijas Lozano, José Gálvez Cañero, Ruperto Navarro, Nicolás María Rivero, Pedro Sabau y Francisco Núñez Arenas.

Esta comisión recibió el encargo de proceder a las reformas necesarias sobre anteriores proyectos y presentar el fruto de sus trabajos a las Cortes³⁵⁹, introduciendo una mayor amplitud y riqueza en sus contenidos. En el capítulo IV, se contempló la existencia en el Tribunal Supremo de un Presidente y se reiteró la figura de cuatro vicepresidentes (uno por sala). Las líneas maestras de ese proyecto estaban asentadas sobre principios progresistas encarnados en la mayoría de los miembros que componían esa comisión, a excepción de Manuel Seijas.

³⁵⁸ CL. T. LXIII (1855) pp. 52-54

³⁵⁹ F. Muñoz “ Observaciones a las bases presentadas el 22 de octubre de 1855” en la *Guía Bibliográfica del siglo XIX*, en la Colección de Impresos de las Cortes Constituyentes, de 1854 a 1856, signatura 4610 del Catálogo de las Cortes Españolas, 1889. Este Proyecto se componía de 213 artículos y cuatro disposiciones transitorias.

Si bien los principios proclamados en el Bienio parecieran asentar la independencia en el estamento judicial y así se explicita en sus documentos, se produjeron irregularidades que contravenían lo establecido legalmente. En ese sentido señalo la sustitución injustificada de Pedro Gómez de la Serna como presidente de la comisión³⁶⁰ a favor de Manuel Cortina de talante más progresista y decidido, y el acceso a la magistratura de personas ajenas a la carrera judicial, contraviniendo algunas leyes promulgadas a favor de la autonomía judicial.

1.a.d. moderantismo y estabilidad

Con el regreso de los moderados al poder, en la persona de Narváez, se intentó reconducir la situación alterada por los gobiernos progresistas y de ese modo se planteó por Real decreto³⁶¹ que el cargo de Presidente del Tribunal Supremo lo nombrara el Presidente del ejecutivo a propuesta del ministro de Gracia y Justicia, de entre los que cumplieran los requisitos necesarios y se juzgase más oportuno y conveniente, con lo que se abría una nueva vía de discrecionalidad, no abandonada nunca en la realidad por los gobiernos fueran del signo que fueran.

Los argumentos que se esgrimieron para ello, invocaban la perturbación que la revolución de 1854 ocasionó en toda la administración del estado y que lanzó casi en masa a los magistrados y jueces de los puestos que ocupaban, para sustituirlos con otros en quienes se creyó que podía la situación creada encontrar adhesión y apoyo³⁶². De este modo el ministro aconsejaba la reparación de todos los depuestos de sus plazas en aquellas fechas por consideraciones puramente políticas y sin ponderar cualidades y aptitudes³⁶³.

Se mantuvo esta legislación hasta los debates surgidos por el Proyecto de Arreglo de Tribunales de García Gallardo en 1862. Este fue el resultado motivado por la escasa agilidad judicial y el estancamiento de las causas lo que originó que el gobierno mandase a la comisión de códigos hacer un diagnóstico de la situación a través de la lectura de los datos en los juzgados y en el Tribunal Supremo y a la luz de ellos redactar un proyecto.

El tema central se orientó en la reforma de la casación y sus procedimientos. Se arbitraron distintas vías de trabajo, contenidos de las salas, así como la creación de alguna nueva y se sugería, tras un interminable debate de doctrinas, en uno de sus apartados que el Presidente del Tribunal Supremo asistiera a la sala que considerara más

³⁶⁰ ACGC. (1855) l. 1 de organización de la comisión, c. 12, d. 51

³⁶¹ Real decreto de 28 de noviembre de 1856 estableciendo varias reglas para cubrir las vacantes que se produjeran en las plazas de la judicatura.

³⁶² CL. T. LXX (1856) pp. 297-300

³⁶³ se dice “además de estar de acuerdo con la justicia, facilitando al gobierno los medios de dotar a los Tribunales y Juzgados de un personal escogido, porque verificada la reparación instantánea podía entrarse desde luego en un buen sendero para la elección de lo mejor entre lo bueno, alejando la política de allí donde sólo debe rendirse culto a la justicia. Un solo escollo podía presentar este sistema, el de que a la sombra de la reparación judicial tuviesen cabida las afecciones o el favoritismo, pero el Ministro estaba seguro de sí propio, y más que de sí propio, de la justicia de V. M. Y de su constante anhelo de hacer el bien, proponiendo a este principio hasta sus más decididos y naturales deseos”.

conveniente dando mayor agilidad y flexibilidad al funcionamiento ordinario de este órgano.

Se reorganizó el Tribunal Supremo a la luz de las Bases consensuadas en 1863 y se formaron cinco salas. El Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de salas y el fiscal formarían la sala de gobierno que dirigiría el reparto de trabajo y tomaría las decisiones que considerara oportunas. Excepcionalmente se contemplaba otra sala especial formada por el Presidente del Tribunal Supremo y los presidentes de salas para resolver asuntos contra ministros, cardenales, obispos, ministros de la Rota, magistrados del Tribunal Supremo, del de Ordenes y fiscal de éste y presidente del Congreso. A la vez el Tribunal en pleno conocería las causas contra el presidente del alto Tribunal y los presidentes de salas y el fiscal.

La Ley de 30 de abril de 1864, con Luis Mayáns en el ministerio, contemplaba una nueva organización de tribunales en aras a conseguir la unidad jurisdiccional. En lo que se refería al Presidente del Tribunal Supremo se le otorgaba la facultad de asistir cuando creyera conveniente a cualquier sección o sala.

Un mes más tarde una comisión técnica presentó un texto sustancialmente distinto al Senado poniendo de manifiesto las cambiantes ideas del gobierno en asentar un único proyecto. En su artículo 1º, se estableció la existencia de un Presidente y cinco presidentes de sala, para disponer seguidamente en su artículo 17, las atribuciones que ambos tendrían en instancia única de las causas por toda clase de delitos contra: los arzobispos, obispos y ministros de la Rota, cuando debían ser juzgados por los tribunales ordinarios, los consejeros de Estado, los magistrados del mismo Tribunal Supremo, los de Cuenta y de las Ordenes y los fiscales de estos dos últimos y conocería de las súplicas que se interpusieran y procedieran de las sentencias de la sala segunda en los negocios de los que conocían los suprimidos Consejos.

Con Narváez en la presidencia del gobierno de la nación, se presentó al Senado un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales al comienzo del año 1868. Este llevaba la firma del ministro de Gracia y Justicia, Joaquín de Roncali, y decididamente emprendió un camino ambicioso en el campo de las reformas judiciales con una orientación bien distinta a proyectos anteriores y a los derroteros que emprendió su antecesor Arrazola..

1.a.e. Sexenio Revolucionario y sus consecuencias

Con la llegada del Sexenio Revolucionario, Serrano formó un gobierno que algunos han denominado de conciliación liberal y que llevó a Mateo Sagasta al Ministerio de Gracia y Justicia que sólo una semana después de acceder al poder desarrolló un decreto por el que se creaba en el Tribunal Supremo una sala específica que decidiría sobre cuestiones contencioso-administrativas, formada por el Presidente del Tribunal Supremo y los dos presidentes de sala más antiguos. Los acuerdos, sentencias y demás resoluciones que dictara la sala se tomarían por mayoría de votos.

El 26 de noviembre, de ese mismo año, se decretaba una nueva reorganización del Tribunal Supremo en consonancia con el nuevo momento político y donde se suprimían jurisdicciones especiales, entre ellas las competencias del Tribunal especial de las Ordenes Militares que pasaban al ámbito de algunos magistrados designados por el Presidente del Tribunal Supremo y que formaban parte del alto Tribunal tomando en consideración la aptitud legal que éstos tuvieran para ejercer la expresada jurisdicción o la hubieren ejercido anteriormente. En su art. 16 figuraba la atribución de organización interna que correspondía al Presidente del Tribunal Supremo de distribuir al personal subalterno entre las salas.

En este período también fue importante la redacción añadida que se dio en orden a la entrada de magistrados en el Tribunal Supremo³⁶⁴. En ella se contemplaba que el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y presidentes de sala lo haría el ministro de Gracia y Justicia, a propuesta en terna –aquí radica la novedad– del Consejo de Estado en pleno y con sujeción a las reglas especiales de este decreto. Las propuestas se harían en vista de los méritos que resultaren en los expedientes justificativos de la aptitud y servicios de los en ellas comprendidos.

En el art. 4º se recogía quienes podían ser designados como Presidentes del Tribunal Supremo: los que hubieran sido ex-ministros de la Corona que hubiesen sido magistrados o fiscales del propio tribunal, los consejeros de estado o catedráticos de Derecho durante cuatro años, y los que habiendo sido durante dos años presidentes de sala del mismo tribunal.

La redacción de la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial como consecuencia directa de la Constitución de 1869, procedió a una nueva reestructuración del alto Tribunal señalada en su art. 60. En el art. 145 se dispuso que las condiciones para ser Presidente del Tribunal Supremo eran: en primer lugar haber sido Presidente del Consejo de Ministros o Ministro de Justicia, si fueren o hubiesen sido magistrados o fiscales de Audiencia o ejercido la abogacía diez años por lo menos, en segundo lugar, haber sido Presidente del Senado o del Congreso de los Diputados, con alguna de las circunstancias expresadas en el apartado 1º y finalmente haber sido presidente de sala o fiscal del Tribunal Supremo un año por lo menos.

Se contemplaba que ocuparía la Presidencia del Tribunal Supremo de manera accidental el de mayor antigüedad de los presidentes de sala y, de manera análoga, ocuparía la presidencia de sala de modo accidental el magistrado de mayor antigüedad. Se recogía la posibilidad de que el Presidente del Tribunal Supremo fuera recusado, o un presidente de sala, y en esta caso lo sustanciaría el presidente de sala más antiguo.

En los posteriores períodos políticos no existieron modificaciones sustanciales en las funciones y competencias del Presidente del Tribunal Supremo así como a quien correspondía su designación.

³⁶⁴ Decreto de 3 de julio de 1869 dictando varias disposiciones para la aplicación en la parte que sea posible de los artículos 94,95,96 y 97 de la Ley fundamental del Estado, relativos a la entrada, ascenso e inamovilidad en la carrera judicial.

1.b. atribuciones del Presidente del Tribunal Supremo

El texto que puede servir de punto de partida es el Reglamento de 17 de octubre de 1835, que en su capítulo II,³⁶⁵ las define: reunir a las salas cuando fuere necesario y velar por el cumplimiento de las obligaciones de todos los miembros del Tribunal, dar cuenta al gobierno de la actividad judicial que se desarrolla y tiene facultades para conceder permisos, licencias así como oír las quejas de los litigantes por retrasos en los procesos y presidirá las reuniones en pleno para el tratamiento de asuntos especiales.

El Proyecto de 1840 de García Gallardo no aportó ninguna novedad en relación a las atribuciones del Presidente del Tribunal Supremo en su texto concerniente a la nueva planta de tribunales. Este mismo autor planteó una ponencia sobre organización de tribunales en 1844 que confería al Presidente las tareas propias de disciplina interna y orden en el funcionamiento del alto Tribunal, que más tarde serían recogidas de manera parcial en otros textos legales.

Pese a los intensos trabajos recogidos en los Proyectos de Bases de 1863 y que fueron la culminación de proyectos previos desde 1860, no existieron novedades con respecto a las atribuciones del Presidente del Tribunal Supremo hasta la llegada de la LOPJ de 1870 que en su art. 584 señalaba; cumplir y hacer cumplir esta ley, y todas las demás que se refieran respectivamente a los cargos que desempeñen, hacer guardar el orden debido en los tribunales a los magistrados, auxiliares y subalternos, exponer al gobierno lo que estimen necesario o conveniente para la más cumplida administración de justicia, recibir y despachar la correspondencia oficial, dar curso con su informe a las solicitudes, quejas y consultas que el tribunal pleno, las salas y los magistrados del tribunal, sus auxiliares y subalternos, en conformidad a lo que previene esta ley, eleven al ministerio de Gracia y Justicia, reunir y presidir el tribunal en pleno y la sala de gobierno, recibir las excusas de asistencia de los magistrados, de los auxiliares y subalternos, y ponerlas en conocimiento del presidente de la sala a quien corresponda.

De igual modo le correspondía: nombrar a los magistrados que hubieran de completar el número de los que fueran necesarios para algún negocio cuando no bastaren los de la dotación de la sala con los de otra sala, procurando la mayor igualdad en este servicio, ordenar en todos los días útiles, a la hora establecida para celebrar audiencia, que se distribuya el tribunal en salas de justicia, presidir cuando le parezca cualquier sala de justicia, sin perjuicio de hacerlo en los casos en que expresamente la ley lo ordene.

También se les otorgó la facultad de llevar en los estrados, cuando presidan, la palabra, sin que ningún otro pueda usarla sin su permiso, cuidar que todos los magistrados, auxiliares y subalternos lleven cumplidamente sus deberes, comunicarles las órdenes que estimen convenientes, relativas al ejercicio de sus funciones.

En el orden disciplinario y de buen orden en el cumplimiento de las funciones: amonestar privadamente a los que se muestren poco diligentes en el cumplimiento de

³⁶⁵ CD. T. XX (1835) pp. 470-471

sus cargos, llamar al fiscal para hacerle las indicaciones que consideren oportunas para la mejor administración de justicia, relativas a él y a sus subordinados, sin que se entiendan directamente con éstos, ni coarten la libertad de acción que corresponde al ministerio fiscal, poner en conocimiento de quien corresponda las faltas de los magistrados que den lugar a correcciones disciplinarias, y del tribunal competente los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

En relación a las situaciones referidas a la carrera y escalafón: dar cuenta al gobierno de las vacantes que ocurran, de la entrada y salida de los magistrados, jueces y auxiliares del territorio del tribunal, cuando sean nombrados, ascendidos, trasladados, jubilados o destituidos, o usen de licencia, nombrar, además de los subalternos cuya elección les corresponde con arreglo a esta ley, los dependientes de la secretaría que se satisfagan del material, darles licencia para ausentarse y separarlos libremente.

Al presidente también correspondía: oír las quejas, referentes a la administración de justicia, que les hagan los interesados en causas o pleitos por el retraso de los negocios, adoptar las providencias que estén dentro de sus facultades y ponerlo en conocimiento de la sala respectiva cuando la gravedad del asunto lo requiera, dictar las medidas que sean necesarias o convenientes para el buen orden y conservación de los archivos y bibliotecas de los tribunales y avisar, cuando no pudieren salir, a los que deban hacer sus veces.

Además se contemplaron otras facultades: la de pedir por sí directamente a los presidentes de las Audiencias, de los tribunales de partido y a los juzgados municipales los pleitos, causas o expedientes que estuvieran terminados o llevados completamente a ejecución, cuando interesaran a la administración de justicia o al estado, devolviéndolas al tribunal o juzgado de que procediera, tan pronto como esté hecho el examen que hubiere motivado su reclamación y la facultad de disponer visitas de inspección para examinar el estado de la administración de justicia en determinada Audiencia, tribunal de partido o juzgado municipal, cuando haya motivos fundados para hacerlo, después de oír a la Junta de gobierno del Tribunal Supremo.

Después que los presidentes, en conformidad a lo dispuesto en el apartado 9º del art. 584 de esta ley, hubieran ordenado la distribución de los tribunales en salas de justicia, despacharían la correspondencia y los demás asuntos de sus atribuciones, autorizando con su firma las comunicaciones que no debían ser dirigidas sólo con la firma del secretario. Concluido el despacho a que se refiere el artículo anterior, daría el presidente de audiencia a los interesados que tuvieran que manifestar alguna queja, procediendo a lo que conviniera con arreglo al apartado 15 del art. 584.

Podemos decir que las atribuciones del Presidente del Tribunal Supremo no supusieron, en general, un mecanismo de intervención, pues se hacía innecesario definir actuaciones cuando el cargo sí era consecuencia directa de la voluntad de la clase gobernante del momento.

1.c. los presidentes de sala

1.c.a. etapa liberal y revolucionaria

El Reglamento de 17 de octubre de 1835 contempló la existencia de tres salas con cinco magistrados cada una pero no se contemplaba la figura del presidente de sala como tal, haciendo de presidente de todas las salas la persona del Presidente del Tribunal Supremo.

El 15 de enero de 1840, se presentó un Proyecto de nueva planta de Tribunales y arreglo del ramo de administración de justicia en España, en el que se incluyó la Instrucción Provisional del Enjuiciamiento que elaboró Manuel García Gallardo.

En dicho Proyecto³⁶⁶ se contempló la novedad de la figura del presidente de sala, en concreto tres, uno para cada una de las salas existentes debido al volumen de trabajo y a la especialización que se pretendía para resolver con más eficacia los asuntos.

Este Proyecto al igual que el de Lucas Pardo³⁶⁷, el Proyecto de Reglamento de la administración de justicia de 7 de abril de 1841³⁶⁸ y otro de 7 de enero de 1842³⁶⁹, que en su título I se ocupaba de realizar un diseño de organización judicial, leído al Senado por el secretario del Despacho de Gracia y Justicia, José Alonso, no llegaron a tener vigencia, pero pusieron de manifiesto, el alto grado de inquietud existente en el seno de la magistratura y en el ámbito político por controlar su esfera jurisdiccional, a la vez que como tarea jurídica, desveló una tensión permanente por ir precisando las intenciones de cada uno.

Es realmente cierto, que estos proyectos se correspondieron con una etapa que políticamente representaba el ideario liberal progresista y que en lo que respecta a sustanciales modificaciones orgánicas no supuso novedad alguna.

1.c.b. etapa moderada

La llegada de los moderados al gobierno llevó a Luis Mayáns al Ministerio de Gracia y Justicia bajo la presidencia de González Bravo. Su primera intervención en el nuevo gabinete consistió en exponer la conveniencia de proceder a nuevas reformas que, a su entender, serían ventajosas para la administración de justicia y en esa línea se promulgó el decreto de 9 de diciembre de 1843 sobre la presidencias de sala del Tribunal Supremo de Justicia,. Argumentó para ello que a ese puesto habían ido llegando los magistrados más antiguos “aunque tal vez no reunieran aquellas difíciles cualidades, tan necesarias para la presidencia, cuando eran evidentes los beneficios que se seguirían si la Corona eligiese el ministro que en cada una de las salas debiera presidir”.

³⁶⁶ ACGC (1840) l. 2 de enjuiciamiento criminal, c. 1, d. 1

³⁶⁷ ACGC. (1841) l. 3 de organización de tribunales, c. 4

³⁶⁸ ACGC. (1841) Inventario de libros y papeles, sección de procedimientos, l. 1 de organización de tribunales, c. 27, hojas 12 y 18. Sabemos de su existencia pero el texto no se conserva en la actualidad.

³⁶⁹ DSC. (1842) a. 1º al n. 4 y ACGC (1842) l. 3 de organización de tribunales, c. 6.

El decreto contemplaba que el cargo de presidente de sala se consideraría a partir de ese momento como de ascenso y serían designados por el ministro directamente, incluso en los casos de vacante en la presidencia del Tribunal Supremo, o enfermedad o ausencia, ejercería dicha representación el presidente de sala con más años en su puesto. De este modo se provocó una intromisión del ejecutivo, pues era el propio ministro el que designaba al presidente por vía directa e indirecta.

Esta cuestión merece en principio la extrañeza del lector, pues no parecía lógico que la primera medida legal concerniente a la administración judicial de un nuevo gobierno que pregonaba grandes cambios estructurales, se centrara en una cuestión que no parecía sustancial; sin embargo en esta medida se escondían soterradas motivaciones políticas de urgente corrección para Mayáns, si tenemos en cuenta que en esos momentos eran presidentes de sala: Alvaro Gómez Becerra, Ramón Macía Lleopart y Ramón Giraldo de Arquellada, curiosamente los tres en la adscripción política progresista y significados diputados de esa corriente ideológica.

Los nuevos nombramientos que realizó el gabinete a propuesta de Mayáns fueron los de José María Manescau en la sala primera y Francisco Olabarrieta en la sala segunda, procedentes del sector moderado, llevando los asuntos más importantes y significativos, y en la Sala de Indias, desactivada políticamente, se mantuvo a un progresista como Juan Antonio Castejón para manifestar una cierta apariencia de pluralismo, aun con el convencimiento de que esta sala operaba sobre asuntos menores de Estado.

Atrás quedaba un período donde existió un alto grado de intervencionismo en la elección de los magistrados por vía legislativa en materia de inamovilidad e independencia.

En el afán de seguir proyectando nuevas reformas, Mayáns, un mes más tarde, invocando la necesidad urgente de ordenar y determinar las atribuciones y deberes de los nuevos presidentes, elegidos el 9 de diciembre, promulgó otro Real decreto con fecha 5 de enero de 1844 adicional al Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, y con ello, según se hizo constar en el preámbulo del mismo, facilitando al gobierno los medios para llenar los vacíos que existían y cuya prerrogativa le otorgaba el art. 47, párrafo 2º de la Constitución³⁷⁰. En este sentido se dispuso la creación de una Junta Gubernativa de los Tribunales compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y de los respectivos presidentes de sala, además de los fiscales.

Este órgano de nueva creación puso de manifiesto, una vez más, un firme propósito de utilización del espacio jurisdiccional a favor de los deseos del poder ejecutivo, pues el control sobre él era claro, atribuyéndole la importante tarea de resolver todos los negocios, que hasta ese momento, eran de exclusiva competencia de la Audiencia en pleno.

Esta irrupción entraba dentro de la lógica de atender asuntos importantes que quedaban en una instancia jurisdiccional fuera de control (las audiencias seguían

³⁷⁰ CD.T. XXXII (1844) pp. 19-23

reguladas por el art. 16 del capítulo 3º de las Ordenanzas de las Audiencias y cuyos miembros eran más neutrales pues procedían de una escala profesional con excepción de su Presidente-Regente).

Se recogían hasta trece atribuciones a favor de la Junta Gubernativa, que recogieron la suspensión, interinidades, vigilancia de conductas, designación de cesantes, repartos de trabajo por salas, etc... lo que la convertía en un comisariado decisivo para la reorganización judicial.

El art. 11 del citado decreto de 1844, estableció expresamente la derogación de todos los artículos del Reglamento del Tribunal Supremo de 1835, así como las Ordenanzas de las Audiencias, o cualquier otra disposición contraria al citado decreto. El Proyecto de 12 de junio de 1846³⁷¹ asimiló como vicepresidentes a los presidentes de sala ordinarios.

Tras cuatro años prácticamente sin novedades sustanciales en la configuración del Tribunal Supremo³⁷², fue en el Real decreto de 4 de marzo de 1850, cuando se legisló que los presidentes de sala ejercieran indistintamente las funciones de su cargo en la sala donde lo reclamare el mejor servicio, y por lo tanto los nombramientos de presidentes se hicieran en términos absolutos sin designación específica. El gobierno acometió esta iniciativa por dos motivos, el primero: resolvía una necesidad que tenía planteada en aras de agilizar ciertas cuestiones procesales que tenía planteados y el segundo podía dirigir asuntos a salas, en función de las circunstancias y de las personas, no teniendo para ello ninguna objeción legal. Este hecho constituyó el más grave motivo de politización.

Esta actuación fue sancionada por el ministro Arrazola que la impulsó y la alentó³⁷³ a la luz de la argumentación preliminar. El 23 de noviembre de 1850, él mismo presentó ante el Senado un Proyecto de Ley constitutiva de los Tribunales del Fuero Común, tomando como base trabajos existentes de García Gallardo y Ortiz de Zúñiga. No obtuvo el respaldo necesario en la cámara, pero me interesa destacar en el territorio de las intenciones del ministro que, el título IV vuelve a insistir en la figura de los vicepresidentes y presidentes de sala del Tribunal Supremo, abundando en los precedentes trabajos de algún miembro de la Comisión de Codificación.

La siguiente novedad la encontramos en el Real decreto de 7 de marzo de 1851 donde se contemplaba para la elección de presidentes de sala y que decía: “haber sido ministros de la Corona y haber desempeñado la plaza de magistrado por espacio de dos años como magistrados efectivos –es decir con destino– o en cesantes de igual categoría”.

³⁷¹ ACGC (1846) l. 1 de organización de tribunales, c. 2 bis, proyecto n. 15

³⁷² Solo destaca el Proyecto de Ley de organización, competencia y facultades de los Tribunales del Fuero General de 21 de diciembre de 1847, según consta en el ACGC, l. 12 de actas y en la Gaceta del 7 al 15 de marzo de 1848, que conserva la sistemática reflejada en 1846, reproduciendo casi literalmente su contenido, aun cuando introduce algunas variaciones, pero ninguna referida al Tribunal Supremo.

³⁷³ CD. T. XLVIII (1850) pp. 472-473

Con fecha 6 de noviembre de 1863, el gobierno presentó a las Cortes los proyectos preparados por la Comisión³⁷⁴, que leídos en el Senado fueron aprobados por una comisión dictaminatoria. Estos trabajos se englobaron en un Proyecto relativo a las bases para la organización de tribunales, organización y atribuciones del Tribunal Supremo que contemplaba cinco presidentes de sala.

1.c.c. Sexenio Revolucionario

Se volvió a reestructurar la composición del Tribunal contemplando la figura del presidente y de cuatro presidentes de sala³⁷⁵ y en su presentación se decía “(...) han existido proyectos en 1842, 1846, 1847 y 1853-1854, pero se han quedado sólo en bases y no hay nada que contenga toda la ley (...), este gobierno ha presentado aquí esta ley, la más progresiva y la más liberal, en el verdadero sentido de la palabra que ha venido a las Cortes españolas (...), ha logrado la unificación de fueros”. La oposición expresó su malestar por considerarlo incompleto, insuficiente y carente de soluciones a los verdaderos problemas de la administración de justicia.

Para presidentes de sala podían ser propuestos los que hubieran sido ministros del Tribunal durante dos años, o regentes de Audiencia de Madrid, o decanos del Tribunal de las Ordenes, o presidentes de sala de justicia del suprimido de Guerra y Marina durante tres años.

La LOPJ de 1870 exigió para ser presidente de sala: haber sido ministro de Gracia y Justicia, fiscal del Tribunal Supremo o magistrado del Tribunal Supremo tres años por lo menos y haber sido ministro de la Corona y ejercido los cargos de magistrado, el de fiscal de Audiencia, o la abogacía en Madrid durante quince años, pagando en los cinco últimos años por lo menos la primera cuota del subsidio industrial.

1.d. atribuciones de los presidentes de sala

El Reglamento de 17 de octubre de 1835 no contemplaba específicamente estas funciones, tanto en cuanto las trasladaba en genérico a las atribuciones de las salas correspondientes que estaban definidas en tres.³⁷⁶

La Comisión encargada trabajó en el año 1844 para elaborar un Proyecto y que recibió una ponencia de García Gallardo relativa al enjuiciamiento criminal, cuyo libro I se refiere a la organización de tribunales³⁷⁷. En ella se incluyó en su título II las tareas que directamente dependían de los presidentes de salas.

³⁷⁴ DSC. (1863) a. al n. 3, correspondiente al 6 de noviembre.

³⁷⁵ RGLJ. T. 33 (1868) pp. 239-240, este Proyecto está recogido en la discusión en el Congreso de los Diputados de 18 de marzo de 1868,

³⁷⁶ CD. T. XX (1835) pp.465 y ss

³⁷⁷ ACGC. (1844) l. 3 de organización de tribunales, c. 10

El Proyecto de ley constitutiva de los tribunales del fuero común de 1850 recogió en su título IV, casi en su literalidad, lo contemplado en el Proyecto de 1848 en lo que se refería a las atribuciones de los presidentes de sala.. En los proyectos redactados en 1863 se consignaban nuevas salas y competencias, correspondiendo a su presidente la buena realización de sus funciones así como las reglas de trabajo interno de los magistrados que componían dicha sala.

En la LOPJ de 1870 se marcaba un punto de inflexión en lo relativo a la personalización de atribuciones de esta figura. En lo concerniente a los presidentes de sala en el Tribunal Supremo, se disponía que correspondería a éstos cumplir y hacer cumplir las leyes que se refirieran al cargo que desempeñaran; presidir las salas a que correspondan; llevar en ellas la palabra, sin que ningún otro sin su permiso pueda usarla; hacer que en las mismas se guarde el orden debido, y poner en conocimiento del presidente todo lo que estimara oportuno para la mejor administración de justicia, y las faltas de los magistrados cuando considere que necesitan algún correctivo que no quepa dentro del límite de sus atribuciones. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o algún otro impedimento legítimo del presidente de sala, haría sus veces el magistrado más antiguo de la misma.

Los Presidentes del Tribunal Supremo también podían nombrar a los auxiliares y subalternos que debieran asistir a los tribunales en pleno constituidos en salas de justicia. Se les concedía la facultad de ordenar visitas de inspección: por orden del gobierno, de oficio, en virtud de excitación del ministerio fiscal, de las salas de gobierno y de las salas de justicia.

Cuando fuera el Presidente del Tribunal Supremo éste debía expresar los argumentos y el tipo de inspección que debía realizarse. De igual manera correspondía al presidente, informar al ministro de Gracia y Justicia de todas las licencias que se hubieran concedido dentro, de los ocho días siguientes al de su otorgamiento, con un breve extracto del expediente. Si la licencia la concedía a un magistrado del Tribunal Supremo, ésta nunca podía exceder de quince días de modo ordinario y necesitaba del visto bueno de la sala de gobierno para incrementar los días otorgados. El Presidente necesitaba para ello una Real licencia.

La ley como bien puede observarse era muy completa, llenaba de contenido todas las materias, ajustaba al máximo todos los posibles vacíos legales y asentaba los principios de la división de poderes a la vez que consolidaba la profesionalización y el prestigio de la administración de justicia. Se logró presentarla a la aprobación del Congreso para la siguiente legislatura y aunque algunos contenidos de su articulado provocaron serias dificultades para cumplirse, llegaron a resolverse con la práctica y experiencia anterior a la promulgación de este texto.

Después se registraron algunos intentos planteados en documentos para alterar alguna materia recogida en la LOPJ.

Con la llegada de la Restauración se matizaron algunas disposiciones de la Ley Orgánica, pero nada en lo que se refería al Presidente del Tribunal y presidentes de sala,

hasta el Real decreto de 13 de noviembre de 1876. Este autorizaba al ministro de Gracia y Justicia para que presentara a las Cortes el adjunto proyecto de ley, organizando la carrera judicial, y que se justificaba por la imperiosa necesidad de acomodar ciertas disposiciones a las circunstancias del momento³⁷⁸, evitando así ciertos abusos que se estaban cometiendo.

En su art. 12º se revisaba el apartado de en qué persona debía recaer la designación de Presidente del Tribunal Supremo cuyos requisitos eran: haber sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Gracia y Justicia, presidente del Senado, del Congreso de los Diputados o del Consejo de Estado, haber sido por dos años presidente del Tribunal de Cuentas o de la Sección de lo Contencioso, o de la de Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

Nuevas cualidades adornaron a los presidentes de sala, según se disponía en los arts. 13 y 14 del citado Real decreto, en orden a nuevas funciones y a consideración honorífica.

Distintos proyectos se sucedieron hasta llegar hasta el año 1881, pero algunos de ellos no tuvieron consistencia y otros enriquecieron formas procesales sobre lo ya dispuesto en la Ley de 1870. Todos los gobiernos intentaron completar, a veces por necesidad y otras por interés, los contenidos legales existentes, pero quedaba constatado que la LOPJ, alcanzó una mayoría de edad incontestable, difícilmente revisable en las coyunturales situaciones políticas que se produjeran.

1.e. los magistrados

Como antecedentes históricos debemos reseñar lo dispuesto en el art. 251 de la Constitución de Cádiz, en relación a las condiciones genéricas para acceder a la magistratura que se completaron con el decreto de 17 de abril de 1812³⁷⁹ en cuanto al desarrollo del precepto constitucional y que definía los méritos y condiciones que habían de concurrir en quienes fueran nombrados ministros del Tribunal Supremo³⁸⁰.

1.e.a. promulgación constitucional y etapa revolucionaria.

El Real decreto de 17 de octubre de 1835 que contenía el Reglamento del Supremo Tribunal de España e Indias, contemplaba la existencia de 15 magistrados en el Tribunal.

³⁷⁸ Se aducían veladas críticas a la LOPJ en cuanto que algunos de sus preceptos no tuvieron consistencia para sobrevivir a las mudanzas del régimen político. El principio de la inamovilidad evidenció arbitrariedades significativas en algunas designaciones.

³⁷⁹ CD. T. II (1812) pp. 192-193

³⁸⁰ Ibídem: “que las personas que hayan de ser en adelante promovidas a plazas del Supremo Tribunal de Justicia, además de tener los requisitos que exige el art. 251 de la Constitución, deberán ser letrados, gozar de buen concepto en el público, haberse acreditado por su ciencia, desinterés y moralidad, ser adictos a la Constitución de la Monarquía, y haber dado pruebas en las circunstancias actuales de estar por la independencia y libertad de la Nación”

Se observaba el paso de una sala a otra después de un año en el destino de cualquier magistrado, asegurando que existiera siempre un número suficiente para el fallo de las causas, empezando por los más modernos en el orden de reemplazamiento. Al magistrado más antiguo correspondía presidir la sala y a su vez instruir el sumario de la causa, según se disponía en el art. 90 del citado Decreto³⁸¹.

Existió una continuidad en los planteamientos sustanciales reflejados en el texto constitucional de 1837. De este modo cabe mencionar el Proyecto del ministro del gobierno Ramón Salvato de 25 de septiembre de 1837, que en su título I expuso las cualidades que debían reunir los que fueran a ser nombrados magistrados del alto Tribunal y cuya designación correspondería al gobierno a propuesta de los tribunales³⁸².

En este mismo título I se confirmaron a los magistrados existentes atendiendo más que a la competencia funcional, a su afección a los principios constitucionales, inducida por las fechas de nombramiento.

Es de suponer que los aires que corrían de liberalismo progresista proclamado en la Constitución eran gestionados por moderados - con el gobierno proclamado el 16 de diciembre de 1837 al frente del cual estuvo el Conde de Ofalia - que no tenían otro remedio que respetar las tendencias que presidían la vida política en ese momento. Desde ese punto de vista puede entenderse que un ministro de Gracia y Justicia, de corte moderado como Arrazola, mantuviera a un progresista como Fernández del Pino al frente del Tribunal, pese al decreto promulgado.

El 23 de agosto de 1839 una comisión³⁸³ elevó un Proyecto de ley sobre inamovilidad y responsabilidad de los magistrados recogido en cinco capítulos, y que contemplaba que una Junta de calificación compuesta por notables magistrados de los tribunales de la Corte filtraría a los posibles candidatos a ingresar en al alto Tribunal. No vio la luz este Proyecto.

El Proyecto de nueva planta de tribunales, presentado el 15 de enero de 1840 por Lorenzo Arrazola y que no se materializó, recompuso la formación del alto Tribunal, dotándole de 12 magistrados repartidos en tres salas. No supuso ninguna novedad, en esta materia con respecto a lo legislado. Se sucedieron nuevos planteamientos plasmados en el proyecto de Reglamento de administración de justicia de 7 de abril de 1841³⁸⁴ y de 7 de enero de 1842³⁸⁵.

³⁸¹ No podían verse y determinarse en revista con menos de siete magistrados las causas referidas a las causas criminales observadas en los arts. 93 y 94, o referidas a la residencia de virrey, capitán general o gobernador de ultramar; excepto si procediere en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, o contra alguna Audiencia o contra alguna sala de los tribunales.

³⁸² Este Proyecto no tuvo plasmación en un texto legal aprobado.

³⁸³ Nombrada dicha Comisión por Real Orden de 14 de marzo de 1839 y compuesta por José Pérez Rivas, Pedro Pidal, saturnino Calderón Collantes, José Mariano Olañeta y José María Monreal.

³⁸⁴ ACGC. Inventario de libros y papeles, sección de procedimientos, l. 1 de organización de tribunales, c. 27, hojas 12 y 18.

³⁸⁵ DSC. (1842) a. 1º al n. 4. ACGC. l. 3 de organización de tribunales, n. 16

1.e.b. etapa moderada

Recuperado el poder por los moderados, una de las primeras medidas adoptadas por parte de González Bravo en el ministerio, fue la Real orden de 5 de enero de 1844, que aclaraba el Real decreto de 9 de noviembre de 1843, relativo a la antigüedad de los magistrados del Tribunal Supremo. Ello se produjo por la confusión manifestada por los magistrados (sobre todo los repuestos), que habían sido separados en el período revolucionario, en función del reconocimiento de antigüedad y sin que por ello, se contraviniera lo dispuesto en la Real Orden de 1 de abril de 1834 (regulación provisional del Tribunal Supremo).

En su art. 2º se recogía que los magistrados del alto Tribunal ocuparían el lugar que les correspondía, después de los presidentes de sala, con arreglo a su primitivo título de magistrado togado. Se trataba de restituir derechos conculcados por motivaciones políticas y no profesionales. Se les respetó la antigüedad como si hubieran estado en sus destinos³⁸⁶.

El Proyecto de Ley orgánica de tribunales de 15 de abril de 1844 recogió en su título I el número de funcionarios componentes de cada una de las dos secciones del Tribunal Supremo³⁸⁷ así como el del resto de los tribunales pero no se llevó a la práctica.

Se fue asentando el principio intervencionista con leves matices y con un riguroso afán de aparente respeto a lo fijado legislativamente. Fueron tiempos de restitución de cesantes y no siempre con facilidad de ubicación. Nuevos proyectos se sumaron en el camino como fue el caso del Proyecto de Ley de Organización, competencia y facultades de los Tribunales del Fuero General de 21 de diciembre de 1847³⁸⁸ y que conservó la sistemática del realizado en 1846 y que facultaba la flexibilidad en la ubicación de magistrados por salas.

Otro interesante trabajo se presentó en forma de Proyecto de ley sobre nombramiento (...) de magistrados que se presentó a las Cortes el 9 de marzo de 1848 que se componía de siete títulos, siendo el primero el que se refería a los requisitos que determinarían la condición de magistrado. Este borrador fue completado por el mismo ministro que lo promovió, Arrazola que presentó el 23 de noviembre de 1850 un Proyecto de Ley Constitutiva de los Tribunales del Fuero Común, que una vez leído en el Senado, no obtuvo el respaldo necesario³⁸⁹.

El título XI recogía una novedad interesante, como era, la ubicación de destino de un magistrado que podía ejercer su función judicial en su lugar de nacimiento, cuestión ésta incompatible para otros cargos jurisdiccionales. Este proyecto sirvió para dar una

³⁸⁶ Este fue el caso de: José María Manescáu, Francisco Olavarrieta, José Mier y Salcedo, Angel Casimiro Govantes, Juan Nepomuceno Fernández San Miguel, Francisco Entrambasaguas y Andrés Crespo Cantolla.

³⁸⁷ ACGC. (1844) l. 3 de enjuiciamiento criminal c. 9 d. 1

³⁸⁸ ACGC. (1848) l. 12 de actas y publicado en la Gaceta entre los días 7 al 15 de marzo de 1848.

³⁸⁹ ACGC. (1850) l. 4 y 5 de organización de tribunales.

dimensión cualitativa a la carrera profesional, con criterios de rigor, transparencia y fijeza que fueran bien percibidos por el conjunto de la sociedad civil.

El texto fue enriquecido desde estas bases por un Real decreto posterior de 7 de marzo de 1851 pese a que convertía la sección de Gracia y Justicia del Consejo Real en instancia decisiva en la valoración de cualidades y aptitudes de los futuros candidatos a magistrados del Tribunal Supremo. Este texto suponía, como se desprendía de su art. 24, una verdadera revolución intrínseca de lo legislado hasta ese momento con la creación de nuevas figuras, así como de desarrollo de la propia carrera judicial. Fue una fórmula mixta entre los deseos de profesionalización y algunos atisbos nostálgicos de control del poder político en las franjas de discrecionalidad que el texto permitía.

El art. 24 contemplaba que el ministro de Gracia y Justicia, tuviera la potestad de dar instrucciones precisas para que este amplio decreto pudiera llevarse a la práctica con garantías³⁹⁰. Esta iniciativa fue impulsada siendo Ministro Ventura González Romero, en el gobierno ultramoderado de Bravo Murillo.

En los avances técnico-procesales que se fueron dando, debemos mencionar la Real orden de 20 de julio de 1852, en la que se especificaba que todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, debían expresar el nombre del magistrado-ponente³⁹¹. Con ello entró en vigor una práctica muy importante en la mejora de los pronunciamientos judiciales, en su fondo y en su forma, provocando así que la fundamentación fuera el sistema de los magistrados en la sustanciación de los pleitos.

El cambio político que supuso el inicio del Bienio progresista, llevó a José Alonso al gabinete de Espartero, y sobre el recayó el inicio de reformas en materia de administración de justicia.

El 19 de mayo de 1854 se redactó un Proyecto³⁹² que recogió en su capítulo VII el número de magistrados por sala y el funcionamiento de éstos en las mismas. El capítulo XV contempla la figura de los magistrados y la condición de pertenencia en el alto Tribunal. Este texto no se promulgó pero sí sirvió de base para la elaboración de nuevos trabajos posteriores.

1.e.c. Bienio Progresista

Ese mismo año se promulgó el Real decreto de 9 de septiembre de 1854 que suprimió las Juntas de gobierno, creadas en 1847 por los moderados. Se reorganizaron competencias y se pretendió salvaguardar a los jueces de su independencia. Se constató en el preámbulo de este texto, el control al que estaban sometidos los magistrados y se ordenó funcionar como antes de la disposición mencionada de 1847. En el art. 4º se

³⁹⁰ CL. T. LII (1851) pp. 327-333

³⁹¹ CL. T. LVI (1852) p. 359

³⁹² ACGC (1854) l. 6 de organización de tribunales, c. 3, d. 2 reproducido en la RGLJ. T. 4 (1854), p.161.

otorgaba a los magistrados las atribuciones que tenían los secretarios de las Juntas de gobierno.

En este mismo período y estando al frente del ministerio Manuel Fuente Andrés se elaboró el Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados, concretamente el 22 de octubre de 1855³⁹³ en cuyo capítulo IV se disponía que los magistrados del Tribunal Supremo trabajarían en secciones independientes subdivididas en salas.

La toma de posiciones y el difícil contexto político, auguraban un complicado escenario para los trabajos que emprendió las Cortes Constituyentes en la redacción de la Constitución de 1856 como culminación de la etapa progresista al frente de los gobiernos de Espartero.

De los trabajos constitucionales, destaco el Proyecto de Bases fechado el 14 de febrero de 1856³⁹⁴ con importantes decisiones en materia de trabajo de los magistrados. Pese a la reivindicación de independencia, enunciada en el texto, se sometió la responsabilidad de los magistrados al Senado que estaba constituido como Tribunal de justicia y con ello un órgano político dictaminaba en materia judicial. Este proyecto puede ser considerado como precedente a la Ley Orgánica de 1870 por su rigor técnico, y obtuvo la aprobación de las Cortes pero no consiguió superar los avatares contextuales de cambio, no obteniendo el refrendo real y por lo tanto fue imposible su aplicación.

1.e.d. moderantismo

El 20 de marzo de 1865 el parlamentario Calderón Collantes, presentó algunos de los contenidos aprobados como inconstitucionales, pero tal cuestión no se abordó más pues el día 21 de junio de 1865 se produjo un cambio de gobierno a favor de O'Donnell, y precisamente el perfil más liberal del nuevo gabinete llevó a Fernando Calderón Collantes al frente del Ministerio de Gracia y Justicia, principal detractor de las medidas de Arrazola.

El 10 de julio de 1866 se retomó la orientación moderada del nuevo gobierno de Narváez y la vuelta de Arrazola al ministerio de Gracia y Justicia. Se presentó un Proyecto de ley el 4 de abril de 1867 sobre casación, que supuso una reorganización completa de la planta del Tribunal y contemplaba la existencia de 28 magistrados. Las razones de la reforma eran presumiblemente técnicas y de operatividad. Se observaron tendencias distintas aun en el mismo sector político, pues pocos meses después otro ministro, Juan de Roncali, emprendió nuevas reformas de naturaleza bien distinta a los proyectos anteriormente presentados. Planteó una nueva planta de Tribunales con la presencia de 26 magistrados en su composición. Esta iniciativa planteó serias críticas no

³⁹³ *Guía bibliográfica del siglo XIX*, cita el libro de F. Muñoz *Observaciones a las bases presentadas el 22 de octubre de 1855*, compuesto de 213 artículos y cuatro disposiciones transitorias.

³⁹⁴ DSCC (1856), a. 3º al n. 313.

sólo de la oposición política sino entre las filas moderadas que sustentaban el gabinete³⁹⁵.

1.e.f. Sexenio Revolucionario

En pleno Sexenio Revolucionario, se promulgó el decreto de 3 de julio de 1869, dictando varias disposiciones para la aplicación en la parte que sea posible de los arts. 94, 95, 96 y 97 de la ley fundamental del Estado, relativos a la entrada, ascenso e inamovilidad en la carrera judicial. Se trató de dar justo cumplimiento a lo proclamado en la Constitución de 1869.

La Ley provisional de 1870 en lo relativo a la planta del alto Tribunal señaló la existencia de tres salas con 33 magistrados para las mismas³⁹⁶.

No se produjo ninguna circunstancia digna de mención en las etapas de Cristino Martos al frente del Ministerio de Gracia y Justicia, y tras el proyecto de Alonso Colmenares mencionar solamente el Real decreto de 23 de octubre de 1877³⁹⁷ reduciendo el número de magistrados en el Tribunal Supremo. En su art. 1º se recogió que se retrotrayera la situación a lo que existía antes de la promulgación de la Ley de 1870. Para ello se argumentó que las causas contencioso-administrativas pasaron al Consejo de Estado. De este modo le quedaba al Tribunal Supremo la tercera competencia dispuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial: los recursos de casación en los juicios criminales.

1.f. el fiscal

La institución del fiscal tuvo un tratamiento similar al de los magistrados como bien puede deducirse de la normativa existente desde 1812³⁹⁸. Según se recoge en el art. VI

³⁹⁵ RGLJ. T. 33 (1868) pp. 225 y ss: intervención del diputado Dávila: “los Ministros Monares y Arrazola presentaron 36 bases ¿ han sido inútiles e ineficaces, o el Ministro actual no presenta todas las que necesitan para formar ley orgánica y de competencia de los Tribunales españoles

³⁹⁶ decía el texto: “ posible es que la experiencia demuestre la necesidad de aumentar el número de magistrados, porque tal vez no baste uno solo más de los absolutamente necesarios para constituir cada sala; acaso se pongan de manifiesto los perjuicios que pueda sufrir la unidad de jurisprudencia, pasando un magistrado de una sala a otra cuando la competencia de todas ellas es diversa, pero el gobierno confía en el celo y patriotismo de los funcionarios que componen aquel alto cuerpo, y antes de acudir a las Cortes pidiendo una autorización para aumentar el número de individuos que le han de componer, espera a que los resultados de la reforma puedan ser cumplidamente apreciados”

³⁹⁷ CL. T. CXIX (1877) pp. 839-841

³⁹⁸ Así se desprende del estudio del prof. L. Moreno Pastor en *Los orígenes del Tribunal Supremo 1812-1838*, p. 297 y ss. En la afirmación de que esta figura no ha tenido el tratamiento debido, conviene señalar trabajos de interés como “ La Justicia de la Corte den Castilla durante los siglos XIII al XV” de M. Pérez de la Canal en *Historia, Instituciones, Documentos* (1975) n. 2 pp. 383-481; en *Los recursos contra los actos de Gobierno en la Baja Edad Media* de G. Villapalos Salas, Madrid, 1976, pp. 238-242 y “ Procurador fiscal y promotor de la Justicia” de J. Sánchez Arcilla Bernal en *RDPI*. (1982) n. 4 pp. 675-702.

del decreto de 17 de abril de 1812³⁹⁹ se asignaban dos fiscales al Tribunal, el Reglamento de 1814 en su capítulo IV mantuvo esta cifra. En 1820 se revisó su nombramiento por el nuevo período político y fue en 1834 cuando se suprimió el Consejo de Castilla y con la instauración del Tribunal Supremo de España e Indias se aumentó en uno más el número de fiscales en consonancia con la existencia de tres salas.

El Reglamento de 26 de septiembre de 1835 recogía la existencia de tres fiscales en el Supremo Tribunal de España e Indias, uno por sala. A estos se les encomendaba auxiliar indistintamente para el mejor despacho de los negocios y podían suplirse según las necesidades existentes. También y según lo que establecía el art. 59 de dicho Reglamento, atenderían las quejas sobre retrasos o abusos de las Audiencias sobre las que se informaría y actuaría con las providencias oportunas para remediar dichos retrasos.

Velaban de igual modo, que se les remitieran puntualmente en tiempo, las listas que prescribían el art. 85, y las examinarían con la mayor atención para repartirlas entre los magistrados de las tres salas. Después deberían dar cuenta al gobierno con un resumen de su trabajo y cuantas observaciones estimaran convenientes. Darían detallada respuesta de cómo solucionar, a su entender, los problemas que se producían.

El Proyecto de mayo de 1838 sobre organización de tribunales, al que se hace referencia en el Diario de Sesiones del Senado y que no se conserva en el Archivo de la Comisión General de Codificación, impulsado por Arrazola y elaborado por una comisión⁴⁰⁰, obtuvo una amplia contestación por parte de los fiscales del Tribunal Supremo⁴⁰¹ de ese momento, entre los que se encontraba José Alonso, al caso presidente de la comisión nombrada a tal efecto. Estos señalaban lo inoportuno del texto que merecía ser retirado porque algunos de sus puntos podían ser declarados inconstitucionales en lo que se refería a la inamovilidad judicial, concretamente la parte quinta que provocó el voto particular de José Alonso en clara discrepancia con el sentir unánime del resto de la comisión que consideraban la figura del fiscal como delegado del gobierno para el ejercicio de la policía judicial y de otras funciones inseparables del poder, que además tenían a su cargo la seguridad pública. El Proyecto fue retirado por “inoportuno y perjudicial”.

En el contexto de gobiernos moderados, se presentó un Proyecto de nueva planta de Tribunales en 1840, estando al frente del ministerio Arrazola. Suponía un control más claro sobre las actuaciones judiciales y donde se disponía que la comunicación del gobierno con el Tribunal Supremo se llevaría a cabo a través del ministerio fiscal, excepto en los casos en que se pidieran informes o aludieran asuntos que interesaran a las personas que lo desempeñaran, y en que la comunicación debía ser directa utilizando al Presidente del Tribunal Supremo.

³⁹⁹ CD. (1812) T. II p. 194.

⁴⁰⁰ Compuesta por José Alonso, Claudio Antón de Luzuriaga, Joaquín Francisco Pacheco, Santos Pelegrín y Juan Bravo Murillo.

⁴⁰¹ ACGC (1838) l. 0 de organización de tribunales, c. 12.

La Instrucción de García Gallardo de 15 de enero de 1840, en su primera parte que trataba de la organización de los tribunales, introdujo en el título I una nueva organización en planta del Ministerio fiscal que en lo referente al alto Tribunal se componía del Fiscal del Tribunal Supremo que se denominaría Fiscal general del Reino y los abogados fiscales del Tribunal. Se les siguió considerando jefes de la policía judicial.

La Real orden de 5 de enero de 1844 restauró a los magistrados que fueron separados en la etapa anterior y aseguró que los fiscales del Tribunal gozarían de la antigüedad de sus primeros títulos.

El Proyecto de ley Orgánica de los tribunales de 15 de abril de 1844⁴⁰² en su capítulo 8º y en la línea del período anterior revolucionario, mantenía la libertad en el nombramiento de los fiscales así como su destitución, al igual que los abogados fiscales.

Hasta el 20 de noviembre de 1850 no se intentó alterar la regulación de los fiscales dentro del alto Tribunal, y fue a través del Proyecto de Ley constitutiva de los tribunales del Fuero común, obra ésta presentada por el gobierno del que era ministro de Gracia y Justicia Lorenzo Arrazola. El 22 de enero de 1851 por Real decreto fue retirado el Proyecto, pero me interesa destacar de la lectura del título X la absoluta equiparación del fiscal con los magistrados en funciones y responsabilidades y serían nombrados libremente por la Corona, se entiende a propuesta del gobierno de turno. En lo referente a las atribuciones y deberes de éstos se atiene a lo contemplado en 1848 y que quedó en mero Proyecto.

El Proyecto de 14 de febrero de 1856 declaró que era el Tribunal Supremo el que autorizaba el traslado de los fiscales a otro destino de igual categoría “siempre que lo aconseje la buena administración de justicia”. También contemplaba que la responsabilidad de los fiscales era juzgada por el Senado constituido en tribunal de justicia. Este apartado introdujo cierta confusión ante los principios de división de poderes al facultar al ámbito político en responsabilidades judiciales⁴⁰³.

Pasado el Bienio progresista y concretamente en enero de 1857, por primera vez, se regula mediante un reglamento específico la organización del ministerio fiscal. Se redactó un Proyecto⁴⁰⁴ donde se determinaban las condiciones para el nombramiento del fiscal y que era análoga a la de los magistrados del propio tribunal.

Interesante fue la proposición de ley presentada el 19 de mayo de 1860 por Ortiz de Zárate sobre organización de tribunales, en cuyo título II se indicaba el modo de nombrar al fiscal y que venía precedido del análisis de la Junta calificadora del

⁴⁰² ACGC (1844) l. 3 de enjuiciamiento criminal c. 3

⁴⁰³ Fue una constante que en los períodos moderados se le concediera al Senado una competencia judicial hacia los altos cargos del Estado y que en los períodos progresistas se limitaran esas funciones a delimitar la responsabilidad de los altos cargos en el ejercicio de sus obligaciones.

⁴⁰⁴ Pretendió ser un reglamento provisional sin afectar a cuestiones de organización y procedimiento que habrían de resolverse en futuras leyes que estaban pendientes y según consta en ACGC, l. 7 de organización de tribunales, c. 2. Existieron observaciones de Benito Posada Herrera el 6 de junio de 1859 dignas de ser tenidas en cuenta.

Ministerio de Gracia y Justicia. Una propuesta que debía tenerse en cuenta bajo pena de nulidad.

Las Bases de 1863⁴⁰⁵ incorporaron como novedoso el régimen de incompatibilidades que afectaba al fiscal del Tribunal Supremo y que se centraban en “el desempeño de cargo político y administrativo, de empleo o cargo privado que constituyeran a quienes lo ejerzan en dependencia de alguna corporación o persona particular, de comercio, industria o granjería en el territorio de su jurisdicción y con el ejercicio de la abogacía”.

La base 34 definió que el Fiscal del Tribunal Supremo debía ser de total confianza del gobierno. La Fiscalía tenía potestad de organizar su departamento con libertad y en función de las necesidades existentes en cada momento, siempre que lo comunicara al gobierno y este le diera su placet.

El 21 de octubre de 1864, mediante Real decreto se dispuso que el teniente fiscal del Tribunal Supremo tuviera la categoría de magistrado del propio tribunal siempre que llevara cuatro años en el desempeño de su cargo. De este modo se reforzaba el papel del ministerio fiscal en el funcionamiento ordinario de esta instancia jurisdiccional..

El cambio de gobierno que se produjo poco después, llevó a la tendencia más liberal de la Unión Liberal y con ello a Calderón Collantes, enemigo declarado de Arrazola, al ministerio de Gracia y Justicia. Collantes expresó su temor al Senado⁴⁰⁶ sobre las reformas emprendidas por su antecesor y hacía serias objeciones sobre el modo de organizar el ministerio fiscal, pero las vicisitudes políticas hicieron imposible materializar algunas de las ideas y de los proyectos de este ministro.

La evolución de los acontecimientos favoreció la vuelta de los moderados y la tendencia, una vez más, de revisar lo ya experimentado. La consecuencia de lo que digo se tradujo en el Proyecto de ley de 4 de abril de 1867 sobre casación auspiciado por Arrazola y que adujo razones de urgencia, peculiaridades de la legislatura en que nos encontramos y la conveniencia de dicha reforma”. En su art. 6º se contempló que el gobierno podría aumentar el número de los abogados fiscales del Tribunal Supremo, según lo requirieran las necesidades de servicio. La composición preveía un fiscal y un teniente fiscal.

Tras cinco años de trabajos en diversas comisiones que escondían la intencionalidad política de Arrazola retrasando cambios estructurales de la administración judicial, llegó al ministerio Juan Roncali que, el 13 de enero de 1868, presentó una Ley Orgánica de Tribunales y de procedimientos que reformaron los existentes⁴⁰⁷ y en donde se señalaban las condiciones y requisitos para acceder a la carrera fiscal. Existió un solo fiscal en el alto Tribunal que formaba parte de la sala de gobierno como venía sucediendo desde la década anterior.

⁴⁰⁵ Las bases 30, 31, 32 y 33 recogieron las funciones del Ministerio fiscal y el régimen de incompatibilidades

⁴⁰⁶ RGLJ. (1865) discusiones en el Senado de marzo de 1865, sesiones 20, 21, 22 y 23 de marzo, p. 388

⁴⁰⁷ RGLJ. T. 35 (1868) p. 44.

La gran tarea que se trazó en el período progresista radical, fue la redacción de una ley completa y duradera que asumiera los principales logros de las leyes y proyectos anteriores. Ruiz Zorrilla desde el gobierno acometió este objetivo que se materializó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870.

El gran logro de esta Ley fue de clarificación en el apartado de la independencia judicial. Se dispuso el título XX que organizaba el Ministerio fiscal, señalando en los capítulos II y III las condiciones exigibles a los aspirantes a fiscal que coincidían con las del resto de la judicatura, estableciéndose que la Fiscalía del Tribunal Supremo sería de libre designación del gobierno pero siempre que cumpliera los requisitos de mérito y antigüedad dispuestos para el resto de altos funcionarios judiciales.. El capítulo VII trataba sobre el nombramiento de éstos.

Destaco la figura del fiscal en la sala de gobierno, la condición de fiscal del Tribunal para ser nombrado presidente de sala y para ser presidente del Tribunal Supremo con una antigüedad de al menos un año. La sala tercera conocería de los delitos de los fiscales.

La Ley de 1870 derivó en la estabilidad necesaria en la carrera judicial para buscar el perfeccionamiento en otros puntos procesales y solo fue matizada en las Bases de organización de tribunales de 1880, proyecto muy personal del Ministro Álvarez Bugallal y que motivaba su aportación en aras a la eficacia⁴⁰⁸ y que razonaba la existencia de un turno especial de ingreso en el Ministerio fiscal y, en concreto, para el Tribunal Supremo se exigían méritos especiales. Se expusieron las condiciones de ingreso en cada estamento que presentó la novedad de acreditación y formación de listas de candidatos para consensuar los nombramientos por parte del gobierno y con propuesta previa del propio Tribunal Supremo.

1.g. atribuciones del fiscal

El Reglamento de 26 de septiembre de 1835 para la administración de la justicia ordinaria recogía en su art. 100 que los fiscales despacharían indistintamente los asuntos civiles y criminales en sus respectivas salas, supliéndose y auxiliándose unos a otros como disponía el art. 91⁴⁰⁹. Recordemos que en esos momentos en el Tribunal existen hasta tres fiscales (dos para los asuntos peninsulares y uno para los asuntos de Indias).

Posteriormente en el Reglamento de 17 de octubre de ese mismo año del Tribunal Supremo se dedicaron hasta once artículos a las tareas y condición de los fiscales. Entre

⁴⁰⁸ DSC, Congreso de los Diputados (1880) A. 2º al n. 168 de 17 de mayo de 1880. En la exposición de motivos se decía que “ ante la confusión que originó la Ley Orgánica de Tribunales por falta de sentido práctico reconocido en el Real Decreto de 30 de septiembre de 1870, que redujo su eficacia a lo que fuera posible; y ante el nuevo recorte que sufrió dicha Ley el 23 de enero de 1875 en cuanto al nombramiento, ascensos e inamovilidad, es imprescindible llevar a cabo una reordenación de la Justicia, aunque no se disponga de una división territorial conveniente. Pretende, dice que sea, desde luego, práctica y posible”.

⁴⁰⁹ La división del alto Tribunal en tres salas, dos para la Península y otra para Indias establecía que los magistrados trabajaran en cualquiera de ellas en función de las necesidades de trabajo y la urgencia en el despacho de los asuntos.

sus atribuciones se destacaban: el despacho de los asuntos que les traslade el Tribunal en pleno, ser parte en toda causa criminal sobre delito público o sobre responsabilidad oficial y en las civiles relativas a delitos privados, cuando interesen a la causa pública, a la defensa de la Real jurisdicción ordinaria, o a las regalías de la Corona.

Fue en la Instrucción provisional de García Gallardo de 1840 cuando se apuntaron algunas novedades enumeradas en su título XII y que perfeccionaban las tareas de los fiscales: intervenir en los procesos civiles que interesen al Estado, al público, a los Consejos y establecimientos de instrucción o beneficencia, a la condición política y civil de las personas, a los ausentes e impedidos de poder comparecer por sí en juicio en razón a su edad, interdicción o cualquier otro motivo legal, y en las competencias y declinatorias de fuero; velar por la observancia de las leyes y de los reglamentos y ordenanzas respectivos a la administración de justicia; inquirir y denunciar los delitos cometidos y acusar a sus autores, cómplices y receptadores con celo o imparcialidad; averiguar con particular solicitud las detenciones arbitrarias que se cometan y promover su castigo y reparación; ejercer las más activa vigilancia sobre la conducta pública de los magistrados y dependientes del orden judicial. Y era el Fiscal del Tribunal Supremo el garante de esas funciones genéricas de todo el ministerio público. Le correspondían específicamente dar traslado al gobierno de toda la información precisa sobre el funcionamiento de la administración de la justicia y de la conducta de los magistrados del alto Tribunal. Estos contenidos no se plasmaron en una normativa efectiva.

El Proyecto de Peña Aguayo de 15 de abril de 1844 establecía en su capítulo 15, como novedad, que los fiscales del alto Tribunal podían entablar recursos de casación en el interés de la ley en todos aquellos casos en que, siendo procedente el recurso, no lo han entablado las partes interesadas. Este Proyecto no se presentó a las discusión de las Cortes para no plantear desajustes con la pretendida unidad de pensamiento en lo jurídico.

De la secuencia de los hechos observamos que por esos años el trabajo del ministerio fiscal, cuyo máximo responsable era el Fiscal del Tribunal Supremo, dejaba mucho que desear, quizás por sobrecarga de sus funciones o por desidia y mereció la reprobación de su responsable último⁴¹⁰.

Un nuevo proyecto se presentó en 1850 que se refería a la organización de los tribunales del fuero común que entendía el ministerio fiscal como una organización propia e independiente cuyos miembros tendrían el control directo del gobierno (hay que recordar que nos estamos refiriendo a un texto avalado por Arrazola) e incorporaba la novedad de la separación del Fiscal General del Reino aprobada por el Consejo de Ministros.

⁴¹⁰ El 11 de octubre de 1845, el fiscal del tribunal, Pedro Jiménez Navarro, cursó una circular a los fiscales de S.M., en todas las Audiencias, acompañando la del ministro de Gracia y Justicia sobre la necesaria asistencia de los fiscales a las vistas de causas, y que vino a ser la continuación de la Real orden de 7 de octubre dada por el ministro Mayáns y que obligaba al presidente del Tribunal a dar las instrucciones precisas a los representantes del ministerio fiscal para que asistieran personalmente a defender los intereses en las causas.

El Real decreto de 7 de marzo de 1851 dictó reglas para la provisión de plazas del ministerio fiscal del fuero común. En su art. 10º se incorporaba al fiscal del Supremo a la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real para calificar la aptitud, los méritos y las circunstancias de los Regentes y magistrados de las Audiencias territoriales (...). Se le otorgaba al fiscal del Supremo la competencia para calificar y clasificar los méritos y aptitudes de los candidatos al ministerio fiscal. El abogado fiscal primero del Tribunal Supremo alcanzaba la categoría de fiscal de Audiencia de fuera de Madrid⁴¹¹.

El gobierno de Narváez decretó que fuera el fiscal del Tribunal Supremo el que pidiera a los fiscales de las Audiencias las causas fenecidas, y hacer esta petición de las salas de justicia. Esta acción fue criticada porque se veía al gobierno en un afán de acoso a los fiscales, a los que utilizaba como verdaderos delegados del poder político en el conocimiento de los asuntos y en la evaluación del estado de las causas y pleitos fenecidos. Estos informes se utilizaron con frecuencia para separar algún magistrado o fiscal en consonancia con las afinidades políticas.

Unos meses antes de la llegada del Bienio progresista se promulgó la Real orden de 14 de enero de 1854 que nombraba una comisión de unificación de los trabajos previos sobre administración judicial y ésta redactó un Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales⁴¹² y que representaba un notable avance con relación a los anteriores. El título IV trataba de las atribuciones del ministerio público en materia civil y penal como garante en la instrucción y en el proceso de las causas.

El Bienio no representó novedad alguna llegando a 1857 cuando por primera vez se encargó redactar un Reglamento del Ministerio fiscal que se dividía en dos capítulos: el primero sobre la organización del Ministerio fiscal y el segundo sobre sus competencias, destacando que los fiscales eran funcionarios dependientes del ejecutivo.

Con la creación de una sala de admisión en el Tribunal en 1862 se determinaba que el Ministerio fiscal cuando lo aconsejara la importancia o dificultad del asunto o “cuando estimare haber motivos de casación que no hubieren propuesto los recurrentes” debiera ser oído.

El Proyecto de Bases⁴¹³ del que fue ponente Pedro Gómez de la Serna en 1863 (había sido fiscal del Tribunal Supremo), se justificó por el desuso de las leyes anteriores con la consiguiente necesidad de actualizar alguno de sus puntos⁴¹⁴. Se mantuvo la doctrina de funcionamiento de los fiscales y contempló que entre las atribuciones del Tribunal Supremo estaría la instrucción y fallo de las causas contra los fiscales y los tenientes. Se declaraba incompatible el ejercicio del ministerio fiscal con todo cargo público y administrativo; con empleos o cargos privados que representaran dependencia de

⁴¹¹ CL. T. LIII (1851) p. 391.

⁴¹² Colección de Impresos de las Cortes Constituyentes de 1854 a 1856, s. 4610 del Catálogo de las Cortes Españolas en 1889.

⁴¹³ En octubre de 1862 se informó al Ministro de Gracia y Justicia, Fernández Negrete que era imposible finalizar la legislatura acometiendo todas las cuestiones pendientes de reforma judicial. Se vio por ello necesario la redacción de unas Bases que sirvieran con urgencia a las necesidades planteadas y con el compromiso de promulgar en un futuro cercano una Ley Orgánica de Tribunales.

⁴¹⁴ ACGC. (1863), l. 7 de organización de tribunales, c. 4.

institución pública o persona privada, ... y la separación de los fiscales a otras escalas debería contar con la audiencia previa del fiscal del Tribunal Supremo⁴¹⁵.

Con la llegada del Sexenio Revolucionario, se promulgó el decreto de 26 de noviembre de 1868 reformando la organización del Tribunal Supremo, que criticó la ley de 1864 como caduca al no ser capaz de agilizar los pleitos manteniendo los problemas estructurales de la administración de la justicia. Presentó este texto la novedad de asumir la jurisdicción contencioso-administrativa la sala tercera, pero era requisito inexcusable que el ministerio fiscal se pronunciase previamente si era procedente su consideración.

Se introdujo procesalmente este trámite, que antes estaba en el ámbito del Consejo de Estado sobre admisión de demandas y la resolución del gobierno sobre su procedencia. Se nombraron dos abogados según se dispuso en su art. 12, que exclusivamente se ocuparon de este tipo de negocios en la sala tercera con objeto de auxiliar al ministerio fiscal. La administración estuvo representada por el ministerio fiscal en los negocios contencioso-administrativos en las Audiencias.

La verdadera configuración de las funciones del Fiscal del Tribunal Supremo se recogieron en la Ley Orgánica del alto Tribunal de 1870. En el título XX se disponía que el Ministerio fiscal tenía la representación del gobierno en sus relaciones con el poder judicial. Y que el Fiscal del Tribunal Supremo dependía directamente del ministro de Gracia y Justicia de tal modo que el gobierno designaba libremente al fiscal. Se detallaron en el art. 765 otras atribuciones para aprobar el aumento o disminución de abogados fiscales en las Audiencias y proponer los cambios y ascensos de sus colegas en las distintas instancias jurisdiccionales aunque el art. 795 abría la posibilidad de que el gobierno interviniera en algún nombramiento, con lo que la autonomía de éstos sufrió algún revés. Todas las funciones del ministerio fiscal se recogieron en seis capítulos de la ley con lo que se desprendía la importancia de los temas afectantes a estos niveles.

El Proyecto de Alonso Colmenares de 1874, amplió la esfera de actuación del Fiscal cuando un asunto incumbiera a la representación del interés social en los juicios civiles y criminales, y las Bases de organización de tribunales de 1880 otorgaba funciones que debían competir al Ministerio fiscal y a su máximo responsable como representante del poder público y como defensor de la Ley, cuya intervención extendía a los recursos de casación civil, además de la inspección de tribunales.

1. h. el secretario

Fue con la promulgación del Reglamento de 17 de octubre de 1835 cuando se reguló con mayor perfección esta figura dentro del alto Tribunal. Su nombramiento correspondía a los magistrados del Tribunal que lo elegían por mayoría absoluta de votos de entre los escribanos de Cámara⁴¹⁶.

⁴¹⁵ Memoria cit. p. 342

⁴¹⁶ En algunas ocasiones el secretario del Tribunal se denominó también escribano secretario, puesto que procedía del seno de ese cuerpo.

Sus funciones fueron: recibir y dirigir la correspondencia del tribunal con todas las autoridades y corporaciones del reino; publicar en Tribunal en pleno los decretos y Reales órdenes que se le comuniquen, pasándolos a la respectiva escribanía a que toquen, después de registrados en un libro que llevará al efecto.; tendrá a su cargo la recepción de juramentos de los magistrados y dependientes del tribunal, y demás que se verifiquen en el mismo, así como aquellos negocios generales en que sea preciso que el Tribunal pleno consulte al rey, llevar un libro donde registre las consultas, copiando en él las que le entreguen sus subalternos; trasladar las Reales resoluciones del alto Tribunal a las Audiencias y demás autoridades de la península e islas adyacentes; llevar el orden de los libros para visitas, guardar los expedientes de todo el personal subalterno y proceder a la cobranza de tasas para la tesorería.

Por el Real decreto de 1 de mayo de 1844 y con ocasión de la aprobación del reglamento de los juzgados de primera instancia se promulgaron numerosas disposiciones relacionadas con la figura del secretario.

En 1846 se presentó el Proyecto de Ley constitutiva de los tribunales⁴¹⁷, que fue objeto de discusiones por parte de la comisión y que tomaron como referencia los trabajos previos de Peña Aguayo y García Gallardo. El capítulo 14 se ocupó de los secretarios, a quienes atribuía las siguientes funciones: encargados de dar cuentas; de la autorización de los despachos y sentencias y de la custodia de los procesos; se dividen en secretarios principales y auxiliares, siendo éstos amovibles e inamovibles los principales, que nombrados mediante concurso, previa presentación de una fianza, no podrán ser separados sino en virtud de expediente.

En 1850 y con la presentación de un nuevo Proyecto de organización de tribunales del fuero común se anuló la figura del secretario del alto Tribunal y se volvió a la figura del escribano judicial. No se llevó a la práctica. Tres años más tarde se configuró todo un organigrama en torno a la figura del secretario pues eran muchas sus facultades y jerárquicamente ordenadas en función de si se trataban de juzgados de una sola persona o tribunales colegiados. Se creó la figura del secretario general en el vértice organizativo que repartía funciones entre los demás y que fue confirmado en otro texto de 1854⁴¹⁸.

El Real decreto el 26 de marzo de 1858 creó la titulación de secretario de gobierno y tuvo la condición de letrado y se creó, quizás, por analogía con los secretarios de Audiencias del Reino que se crearon el 28 de octubre de 1854.

En el intento de seguir el camino de incorporar a técnicos al alto tribunal, se desarrolló esta medida que le confirió al secretario la competencia de que todos los asuntos pasaran por sus manos con el fin de imprimir un orden y uniformidad a la resolución de los negocios⁴¹⁹. Era lógico que éste entendiera en la instrucción de los

⁴¹⁷ ACGC. (1846) l. 4 de organización de tribunales, c. 1ª.

⁴¹⁸ Proyecto de Ley constitutiva de Tribunales del fuero común en ACGC. (1854), l. 6 de organización de tribunales, c. 3, d. 2 y en RGLJ. T. 4 (1854) p. 161.

⁴¹⁹ CL. T. LXXV (1858) pp. 401-403

expedientes, que directa o indirectamente afectaran puntos o asuntos de derecho, fuese letrado y obtuviese una categoría proporcionada a las funciones que iba a desempeñar.

Las tareas que se le encomendaron venían siendo realizadas por los escribanos de cámara. Sus cualidades pasaban por ser de reconocido crédito en el estamento de letrados y asumir en su persona años de experiencia, dándosele el rango de teniente fiscal del propio tribunal y su provisión de plaza se haría de entre los cesantes de los mismos cargos. Posteriormente y por decreto de 20 de junio del mismo año se le concedió la condición de magistrado de Audiencia de fuera de Madrid.

En el Proyecto de Ley de 1862, y debido al cúmulo de causas estancadas y pendientes, se configuró un borrador que perpetuaba, con independencia de la creación de la nueva sala de admisión, la figura del secretario que desempeñaría las funciones confiadas a los relatores y a los escribanos de cámara.

Este proyecto de Ley fue remitido por el ministro Rafael Monares a las Cortes, dejando al gobierno y a la propia comisión redactora, la responsabilidad de redactar unas bases conforme a los textos que se expresaban en dicho proyecto y que en sus bases recogían la creación de secretarías de sala en las personas de los antiguos relatores y escribanos. Este Proyecto no se promulgó pero sirvió a la futura Ley de 1864.

Estando Luis Mayáns en el Ministerio de Gracia, se presentó el 27 de mayo de 1864 un Proyecto de Ley provisional de organización y atribuciones del Tribunal Supremo, redactado por una comisión no política y sí técnica, que tras la aprobación de la Ley de 30 de abril, presentó un texto sustancialmente distinto al senado del que el gobierno días antes había hecho suyo. En el se contemplaba que las salas primera y segunda se nombraría un secretario y un vicesecretario letrados con las mismas funciones que de modo general venían desarrollando en la sala de gobierno.

Los nombramientos que se hicieron procedían del personal subalterno y se hicieron de modo interino hasta la definitiva organización de los tribunales. Se contemplaron sus sueldos de 30000 reales anuales. De igual manera se conservaron los vicesecretarios de las salas. El secretario actuó en el pleno del Tribunal Supremo según se dispuso en el art. 18 del proyecto en ese tipo de causas y delitos.

El Proyecto de Ley de 4 de abril de 1867 sobre casación recogió la existencia de un secretario y un vicesecretario en cada una de las salas de justicia. Su nombramiento se hizo por oposición y su dedicación se complementó entre el tribunal en pleno y su sala de gobierno. Se dictó el sistema de promoción interna de vicesecretarios a secretarios.

A la llegada del Sexenio Revolucionario, se promulgó el decreto de 26 de noviembre de 1868 reformando la organización del Tribunal Supremo, al ser considerada la Ley de 1864 caduca y obsoleta y no haber solventado los graves problemas de la administración de justicia. Se contempló la figura del secretario- relator (tres en la sala tercera) que dieron cuenta de los negocios y asistieron a las vistas. Estos dieron fe pública en todo lo referido al ejercicio de sus funciones. Seguían perteneciendo al

cuerpo de letrados y desempeñaron sus trabajos en la sala primera. Se rescataron las figuras del escribano y relator y se les dotó de funciones en las salas (sala segunda).

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870 se contempló que los secretarios del Tribunal Supremo podían serlo de gobierno o de sala, y se les confirió competencias más detalladas: auxiliar a los magistrados en lo que se refería al ejercicio de la jurisdicción voluntaria o contenciosa, anotar los autos en día y hora cuando se presenten los escritos, anotación sobre devolución de autos, dar cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en los negocios que actúen, siendo responsables de los retrasos inmotivados en que incurran, autorizar con su firma las actuaciones, providencias, autos y sentencias que se les presenten, custodiar y conservar asiduamente los procesos y los documentos a su cargo, llevar al corriente los libros que prevengan leyes y disposiciones reglamentarias y cumplir con su obligación de guardar secreto en cuantas deliberaciones estén presentes.

Se le confirió al secretario la dirección de la Colección Legislativa en lo concerniente a la resolución de las competencias decididas por el mismo tribunal. También se aludió en la ley a la existencia de un vicesecretario de gobierno que reemplazaba a los secretarios con motivo de ausencia de estos.

Para ser nombrado secretario se exigió ser abogado y haber sido propuesto por la junta de gobierno del Tribunal Supremo.

Hasta el año 1872 no se alteró la composición del personal auxiliar de las salas de justicia del Tribunal Supremo. En ese sentido se contempló la figura del secretario en las salas segunda y tercera y dos en la sala cuarta pero con funciones menos importantes que en la época moderada.

Del análisis de la figura del secretario del Tribunal Supremo en este período de tiempo, se desprende que siempre tuvo un perfil profesional y técnico para el buen funcionamiento de las sesiones o del pleno o de las salas. Existieron cambios en cuanto a singularizar sus funciones y rescatar competencias que estuvieron realizando otros miembros del personal subalterno pero sin rango de letrados, condición ésta inexcusable para el entendimiento de los pleitos que allí concurrían.

1. i. el personal subalterno

Fue el Reglamento de 17 de octubre de 1835 el que desarrolló la composición extracción y funciones del personal subalterno del Tribunal Supremo. En el se contempló la existencia de seis relatores que habían de ser letrados de probidad y a su vez se apuntó de confianza para el poder existente. Los proponía el propio tribunal, por aquel entonces los magistrados eran designados por el ministro de Gracia y justicia, con lo que era una fórmula indirecta de control⁴²⁰.

⁴²⁰ Posteriormente se dio la posibilidad de acceso por oposición.

Su trabajo venía dado por el reparto que la sala en pleno del tribunal hacía para cada uno de los relatores. Recibían los procesos que se les encomendaban. Después de recepcionar los negocios instruían al tribunal verbalmente, cuidaban de la rigurosidad de las providencias y facilitaban los apuntamientos a los procuradores y letrados de las partes que lo hubieren solicitado. Estaban obligados a entregar mensualmente las listas de los pleitos y causas que estuvieran pendientes al presidente de la sala a la que estuvieran adscritos, señalando con precisión las fechas de entrada de los mismos. Estuvieron sujetos a un régimen de incompatibilidades mientras ejercían su destino en el alto tribunal, en cuanto al libre ejercicio profesional de su carrera.

De igual modo, se contempló la existencia de los escribanos, en número de seis en el Tribunal Supremo. Se señalaron las mismas condiciones que los relatores para su elección: de probado prestigio, habilidad y lealtad en el cumplimiento de sus funciones. Los propuso el tribunal y presentaban a éste las listas de negocios pendientes que había en las escribanías, con expresión del momento procesal en que se hallaban y pasaban a los fiscales el estado de la cuestión sobre esas causas. Refrendaron las Reales provisiones, despachos o cartas que autorizaba el tribunal con la firma del presidente y los ministros.

También remitieron a los procuradores y a los jueces las provisiones que fueran de oficio. Sobre ellos recaía, de igual modo, las cobranzas de los aranceles y tasas procesales, y custodiaron los libros con las firmas de los procuradores a modo de acuse de recibo. Llevaron los libros debidamente ordenados, clasificados y redactaron sus respectivos índices.

El Proyecto de ley de 4 de abril de 1867 concentró a los relatores y escribanos en las salas primera y segunda, y se dispuso que en adelante estas plazas fueran sustituidas por los secretarios y vicesecretarios de salas. A partir de este momento observamos la denominación de relator-secretario indistintamente.

También se incluyeron como personal subalterno y heredada la figura de antiguas instituciones, el canciller y registrador que ejercieron sus funciones dentro del Tribunal Supremo. Este registraba y sellaba las provisiones y las cartas que llegaban, habiendo transcrito copia literal de buena letra en el registro, firmándolas posteriormente. El paso previo lo daba el escribano autorizando la entrada de dicho documento. El traslado de dichos expedientes se hacía con la autorización del Tribunal. Las deficiencias o incorrecciones que advirtiera debía notificarlas al órgano superior. En 1873 por un decreto se revertió el cargo histórico de canciller a título honorífico y se suprimió el cargo de registrador del Tribunal Supremo, cuyas funciones desempeñó a partir de ese momento el secretario de gobierno, adaptándose para ello el artículo 515 de la LOPJ.

El repartidor de negocios y tasador de pleitos trabajó coordinadamente con los relatores y escribanos de cámara para pasar a las salas los asuntos correspondientes. Su tarea era por tanto distribuir de manera justa el trabajo. Estableció los turnos y llevaba cuenta de los negocios resueltos por cada sala. Realizaba tasación de los pleitos y se encargó de la cobranza de costas en pleitos resueltos.

La figura de los porteros quedó, de igual manera, regulada en 1835 en número de nueve de los que uno era titulado como “portero mayor o de estrados”. Sus cometidos se centraron en: hacer los apremios a los procuradores para la devolución de autos, hacer las citas que se produjeran, llamar al despacho, publicar la hora y ejecutar aquello que oficialmente le mandara el tribunal⁴²¹.

Los antiguos alguaciles que habían venido funcionando desde 1814, desaparecieron del Tribunal Supremo y se recogió, que cuando hicieran falta se recabarían de la Audiencia de Madrid. El mozo de estrado fue un empleado al servicio del portero mayor y su cometido fue el de realizar la compra y distribución de los utensilios necesarios para el tribunal y las escribanías, así como de la limpieza de todas las dependencias judiciales.

Los procuradores recibirían las notificaciones, formarían las peticiones de los términos y señalamientos y completarían los tres libros de formalidades sellados debidamente por el magistrado más moderno del tribunal. En julio de 1852 se promulgó una Real orden resolviendo que en Madrid fuera el Presidente del Tribunal Supremo quien concediera las licencias a los procuradores privando al Regente de la Audiencia de Madrid de dicha competencia.

También habría que hablar de los agentes de negocios que no tenían intervención legal en los asuntos de atribución del Tribunal y que se ocuparon de promover y activar las solicitudes o negocios que provenían de las escribanías del Tribunal por orden de los interesados. El reglamento de 1835 que fue punto de partida contempló la responsabilidad de todos los subalternos dependientes del Tribunal Supremo. En los trabajos preparatorios de reforma del alto tribunal en 1863, se dispuso que fuera la sala tercera la que conociera en única instancia contra el personal subalterno del mismo.

Sin importantes cambios en el esquema de funcionamiento del personal subalterno se llegó a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 que en su capítulo III desarrolló los llamados oficios de sala y por tanto dotó de competencias a los oficiales de sala, entre ellas: hacer los emplazamientos, citaciones y notificaciones, embargos, recogidas de autos y demás diligencias que se practicaran fuera de la presencia judicial, por orden de los juzgados y tribunales de los que dependían. Asistieron a los órganos jurisdiccionales competentes en los procedimientos reglamentarios, hicieron efectivas las resoluciones y velaron por el orden y buen desarrollo de las vistas.

⁴²¹ Reglamento del Tribunal Supremo (1835) c. VI, a. 93 a 95

2. Estructura: las salas del Tribunal Supremo

2. a. origen y evolución

Como ya hemos señalado en capítulos anteriores el primer Reglamento del Tribunal Supremo data del 13 de marzo de 1814 y en el se fijaron la existencia de tres salas de cinco magistrados dos de ellas y seis la tercera⁴²². La división en salas obedecía a la mayor eficacia en el trabajo, aunque se recogía literalmente que las salas estaban diferenciadas aunque no especializadas, de tal modo que había la exigencia que todos los magistrados rotarían en su pertenencia a las tres.

Tras seis años de interrupción de dicha instancia el alto Tribunal se repuso en 1820 recogiendo la misma planta que se articuló en 1814⁴²³ y cumpliendo sus mismas funciones, aunque la polémica llegó en quienes debían ser los magistrados elegidos⁴²⁴.

2.a.a. promulgación constitucional

El Reglamento de 17 de octubre de 1835 dispuso que la organización del trabajo del Tribunal Supremo se dividiera en tres salas con cinco ministros cada una. Dos salas trataron los negocios de España y la otra los negocios de las provincias de ultramar, la cual quedó habilitada para reforzar a las otras dos si fuera necesario. Los ministros que compusieron la Sala de Indias fueron nombrados en su totalidad por S. Majestad y los otros diez por orden de antigüedad dentro del escalafón.

En su artículo 4º, dicho Reglamento, dispuso que en las dos salas de España, los ministros que en un año hubieran compuesto la una pasarán a la otra en el siguiente, pero ni en ellas ni en la de Indias podrían fallar nunca en revista los que lo hubiesen hecho en vista, siempre que para determinar la súplica hubiera en el Tribunal suficiente número de otros jueces, incluso el presidente, y los fiscales que no tuvieran impedimento, para lo cual los ministros de cada una de las salas de España, serían reemplazados por los de las otras, empezando los más modernos; y si no bastaren lo serán por los de las otras dos, también los más modernos en ambas.

La inspección superior del Tribunal dispuso que cuando hubiera retraso en las Audiencias serían los magistrados de cualquiera de las salas del alto Tribunal quien entendiera de esas causas.

El Proyecto de 15 de enero de 1840, que no se llegó a aprobar, pretendió resolver la planta de los tribunales, y tal misión se le encargó a Manuel García Gallardo. Se

⁴²² En consonancia con la propuesta que hizo el Consejo de Estado y en cumplimiento del Decreto de 17 de abril de 1812, como bien ha señalado el prof. L. Moreno en su trabajo *Los orígenes del Tribunal Supremo 1812-1838*, publicado por el Ministerio de Justicia en Madrid, 1989, p. 370.

⁴²³ CD. T. V (1814) p. 116

⁴²⁴ L. Moreno, op. cit. 105-119.

mantuvieron las tres salas con cinco miembros cada una, incluyendo al presidente de la misma. Como novedad se recogió la designación en cada sala, por elecciones de sus componentes, de un Juez ponente, que ejercería su función durante seis meses y cuyas funciones fueron: ver los negocios vistos y pronunciarse al respecto, hacer resumen oral, revisar los procedimientos y redactar las sentencias.

2.a.b. etapa moderada

El período 1840-1843 no trastocó la configuración orgánica del tribunal. Fue la Comisión de Codificación en sus trabajos de 7 de marzo de 1844, la que sugirió alguna modificación en este sentido con la creación de dos secciones, denominadas de casación y de justicia, en el Tribunal Supremo y con ello se suprimían la organización a través de salas⁴²⁵. Estas novedades se formularon, en razón a criterios de agilidad y eficacia. Ello conllevó consiguientemente la reordenación de funciones y competencias que hasta ese momento se habían operado. Poco después el Proyecto de Ley Orgánica de 15 de abril de 1844, auspiciado por José de la Peña y que tampoco llegó a aprobarse, contemplaba que el Presidente del Tribunal fuera presidente nato de las dos secciones. Se sustituyeron, como se observa, las salas por las secciones de casación y justicia (recogidas en el Título I de dicho Proyecto).

Siguieron las discusiones en el seno de la comisión, y fruto de las deliberaciones se completó otro trabajo el 12 de junio de 1846 y que fue el Proyecto de Organización de Tribunales de García Gallardo, que en su título I contemplaba que el Tribunal estaría compuesto por dos secciones independientes, denominadas de casación y de justicia⁴²⁶, como en el de José de la Peña, y que a su vez se subdividirían en salas ordinarias, estableciéndose junto a ellas una llamada de gobierno, compuesta de dos vicepresidentes (los presidentes de salas ordinarias) y el fiscal del rey, que trataría los asuntos de mayor trascendencia llegados al alto Tribunal.

El Proyecto de 9 de septiembre de 1853 del marqués de Gerona, intentó presentar a las Cortes la necesidad de adecuar los tribunales a las reformas emprendidas por otros países europeos⁴²⁷. Este proyecto resultó de interés como precedente a un modelo similar orgánico que se plasmó en la Ley de 30 de abril de 1863, es decir diez años después.

Este Proyecto contempló la existencia de dos secciones, tal como se venía funcionando y los magistrados distribuidos en salas, y en cada una de esta habría un juez ponente, al que correspondía redactar las sentencias motivadas y propuso a las salas la deliberación de los puntos de hecho y de derecho sobre los que debía recaer el fallo.

⁴²⁵ Las competencias de las dos secciones estaban contempladas en el capítulo 13 de dicho Proyecto.

⁴²⁶ Sólo se reúnen para rendir homenaje de respeto al Monarca el día primero del año, en cuyo acto solemne “llevará la palabra en nombre del Tribunal, con el carácter de su Presidente, el Ministro de Gracia y Justicia”.

⁴²⁷ P. Calvo Carmina, o.c. *RGLJ*. T. 84 (1853) p. 302

El 17 de enero de 1854 por Real decreto se suprimió la Sala de Indias. La finalidad que se esgrimió para tal medida fue unificar la doctrina y criterios sobre las causas de ultramar, aduciendo para ello la total preparación de los magistrados. No se vio la necesidad de reproducir un esquema judicial que pudiera conllevar notables perjuicios para la claridad de la doctrina legal a través, precisamente de una sala especial⁴²⁸. Esta supresión obedeció estrictamente a razones técnicas de funcionamiento y no supuso, en ningún caso alteraciones políticas de primer orden, sino un reajuste de magistrados y un indudable reforzamiento de las otras salas para alivio en lo posible de su carga de trabajo.

El Tribunal Supremo se organizó definitivamente en dos salas por este Real decreto de 1854. Las tareas de trabajo decisorio se repartieron entre las dos salas y las tareas consultivas por el Tribunal Supremo en pleno.

Correspondió, poco después, a un grupo de trabajo, constituido a instancias del Marqués de Gerona y encabezado por Manuel García Gallardo y formado por Francisco de Cárdenas, Manuel Ortíz de Zúñiga, Felipe Rull y Andrés Sarmiento, revisar la organización judicial y elaborar, en consecuencia un Proyecto de Ley Constitutivo del fuero común que vio la luz el 19 de mayo de 1854⁴²⁹ y que no fue tramitado.

Contempló este proyecto dos secciones de casación⁴³⁰, con sus respectivas salas, justificándolo con una extensa exposición de consideraciones, fundamentos políticos y jurídicos y su mecánica, como medio de mantener la unidad, la uniformidad en la interpretación de la ley y la independencia.

2.a.c. Bienio progresista

El 25 de agosto de 1854 se restableció la Sala de Indias en el Tribunal Supremo. Los cambios que se estaban produciendo con motivo del inicio de la revolución, llevó al ministro Alonso a destruir gran parte de la labor legislativa desarrollada poco antes por sus antecesores. El decreto por el que se formuló esta incorporación, argumentó la urgente necesidad de volver al esquema anterior por ver infundada la anulación de una sala de indudable valor y producto de la época en que se acometió. Los motivos que se adujeron fueron: el aumento de la legislación específica de ultramar y los conocimientos

⁴²⁸ CL. T. LXI (1854) “ p. 65 y ss (...) no ha dudado el Consejo de Ministros en proponer la suspensión a V. M. En la confianza de que las dos Salas que quedan serán bastantes por ahora, y mientras el recurso de nulidad no tenga en la ley y en la práctica la latitud (concreción) conveniente para el despacho de todos los asuntos no muy numerosos por cierto, que penden de su fallo. Esta reforma, por lo tanto, deberá considerarse como interina mientras se concluye y lleva a efecto la Ley Orgánica de Tribunales, en cuya redacción se ocupa asiduamente la Comisión de Códigos. El aumento de negocios que habrá necesariamente en el Tribunal Supremo, a consecuencia de las últimas novedades introducidas en el procedimiento civil, y las que se adopten en lo sucesivo, se tendrán en cuenta cuando se fije definitivamente la organización y número de los magistrados de dicho Tribunal”

⁴²⁹ ACGC (1854) l. 6 de organización de tribunales, c.3, d. 1

⁴³⁰ La sección era la unidad de división inicial del Tribunal que daba la posibilidad de subdivisiones a través de las salas y cuyo fundamento radicaba en ajustar la proporción de trabajo con equivalencias y en aras a la eficacia.

especiales de esa legislación para decidir bien en los negocios. Se restableció, por tanto, la sala con la misma organización que tuvo antes. Fue preciso hacer un reajuste de magistrados entre las salas existentes, aunque ello no produjo, en principio, la creación de nuevas plazas⁴³¹. En 1855 se perfilaron singularmente las competencias y funciones de la Sala de Indias, que venía trabajando simétricamente con respecto a las otras dos salas, según se recogió en el reglamento de 1835.

El trabajo que emprendió una comisión especial de codificación⁴³², a tal efecto el 22 de octubre de 1855, culminó con el Proyecto de Ley Orgánica y Juzgados que contempló dos secciones independientes, denominadas de justicia y de casación, divididas cada una en dos salas.

Finalizada la etapa del Bienio progresista, y con la llegada de Manuel Seijas Lozano al ministerio de Gracia y Justicia se arbitraron importantes medidas legales frontalmente opuestas a las que se habían planteado en la etapa progresista. Una de las medidas que se pusieron en marcha fue la encaminada a corregir el Real decreto de 9 de septiembre de 1854 que había suprimido las salas de gobierno de los tribunales, con la contradicción de mantener a los presidentes de sala. Se incrementaron las plazas de magistrados por sala para agilizar los procedimientos ante la acumulación de pleitos y temas presentados.

2.a.d. moderantismo

El 13 de noviembre de 1857 se incorporó la sala cuarta de lo correccional, anteriormente en la Audiencia con el fundamento de unificar jurisprudencia. Se crearon dos nuevas plazas de magistrados en la Sala de Indias, el 26 de marzo de 1858.

El Real decreto de 31 de mayo de 1860 creó dos plazas de magistrados para la sala primera después de analizar las poderosas razones de necesidad:

“(…) la sala primera, es la más recargada de trabajo (relativa a la casación); pues entrando cada año un número de recursos mayor del que puede despachar, se va acumulando un remanente que impide el curso regular de la administración de justicia, y causa irreparables perjuicios a los particulares que esperan con impaciencia el último fallo, término cierto de sus afanes (…)”⁴³³

⁴³¹ En virtud de este replanteamiento, fueron repuestos Ramón María Fonseca como presidente de sala y Joaquín José Casaus como magistrado

⁴³² Hay que recordar que por Real decreto de 18 de agosto de 1854, se disolvió la Comisión de Codificación con la justificación de tener concluidos los principales trabajos y estar encomendados los demás a una comisión especial.

⁴³³ La continua renovación de los magistrados que han de fallar cada uno de los recursos, tan común en la organización actual de las salas, ataca el principio de unidad en la jurisprudencia, que es la base sobre la que descansa la teoría de la institución. De esta afirmación tenemos constancia y noticia, pues el trasiego de designaciones y destinos aún constante y el principio de inamovilidad y de independencia judicial sigue en quiebra.

La solicitud de incrementar el número de magistrados fue iniciativa del propio tribunal y obedecía a razones técnicas y de necesidad, no vislumbrándose en principio impulsos de control político. La sala primera, a partir de ese momento, estuvo compuesta por nueve magistrados que debían entender del fondo de los asuntos, y con ello hacer una sala independiente de las otras, dándole facilidad para continuar por sí el despacho sin los entorpecimientos, dilaciones e inconvenientes de buscar fuera de su seno el auxilio y los medios necesarios.

Los recursos de casación ofrecieron un nuevo escenario cuantitativo y cualitativo en el funcionamiento del Tribunal Supremo tras diez años de experiencia acumulada. La planta del alto Tribunal fue revisada siempre en función de los recursos de casación y fruto de ello fue la redacción del Proyecto de Ley de 4 de enero de 1863, por el que se creó una sala de admisión y que tardó algún tiempo en materializarse a través de la Ley de 1864. A ésta se le concedió la atribución de examinar los recursos de casación “interpuestos y admitidos en negocios civiles contra ejecutorias dictadas por los tribunales, cualquiera que fuera su fuero y jurisdicción, y de los cuales corresponde conocer exclusivamente al Tribunal Supremo”, conocer de las apelaciones por denegación del recurso de casación, de las cuestiones sobre la inadmisión de los recursos y de los recursos de queja por denegación de apelaciones. Interesantes controversias y posicionamientos sobre la creación de esta sala se produjeron y que expondré en la materia competencial de la misma⁴³⁴.

Las tablas estadísticas demuestran en el período 1856-1862 el incremento progresivo que derivó en una clara desproporción entre la sala primera y la segunda y como medidas destinadas a solucionar el problema se ofrecieron tres: dificultar la interposición del recurso de casación, dividir entre dos salas y por materias el despacho de los recursos en el fondo y establecer la sala de calificación.

En este sentido trabajó el gobierno a través de la Comisión de Códigos y así llevar esas propuestas al ámbito parlamentario. Se decidió organizar una sala de calificación⁴³⁵ en la estructura del Tribunal, que preveía la composición de un presidente y ocho

⁴³⁴ Desde el decreto de 4 de noviembre de 1838, en que se estableció por primera vez, el recurso de nulidad a manera de casación hasta 1862 aproximadamente, que se eximió a la sala primera de su conocimiento, han estado indistintamente en su fallo lo mismo la sala primera que la segunda, mezclándose sus magistrados para completar el número que la ley exigía. Algunos autores concluyeron que se debían distribuir los recursos de casación en el fondo entre la misma sala primera y la de Indias, holgada en sus tareas, para admitir con gran ventaja del servicio de la justicia estas nuevas atribuciones.

⁴³⁵ Una de las cuestiones más dificultosa para la Comisión fue la reorganización del Tribunal Supremo y el recurso de casación, siendo el primer trabajo dedicado a la materia un informe presentado al gobierno, el dos de marzo de 1862, el cual fue objeto de reparos por parte de la sala de gobierno y del fiscal del Tribunal, que proponían como remedio a la acumulación de asuntos la creación de dos salas de casación civil, con reparto entre sí o con división por la materia sobre la que versara el recurso, o limitar de algún modo las decisiones recurribles. Ninguna de esas soluciones fue compartida por la Comisión, que propuso, en cambio, el aumento del número de magistrados y la creación de una Sala de admisión o de previo examen. Aunque la solución fue aceptada, los criterios se diversificaban, pues mientras la sala de gobierno sostenía que debían señalarse criterios para este previo examen, el fiscal del Tribunal era partidario del libre examen por la sala de admisión. El gobierno aprobó el proyecto de la Comisión, presentado a las Cortes el 4 de enero de 1863, si bien la crisis política y la disolución de la Cámara, acordada poco después, impidió su aprobación hasta la legislatura siguiente.

magistrados. Esta sala examinaría los recursos de casación interpuestos y admitidos en negocios civiles contra ejecutorias dictadas por los tribunales, cualquiera que fueran su fuero y jurisdicción, y de los cuales corresponde conocer exclusivamente al Tribunal Supremo; conocer de las apelaciones por denegación del recurso de casación, de las cuestiones previas sobre la inadmisión de los recursos de queja por denegación de apelaciones⁴³⁶. Esta medida concitó algunas propuestas contrarias que veía la duplicación de funciones con respecto a la sala receptora de los recursos para su sustanciación.

Las bases que concitaron el consenso para caminar en la organización futura de los tribunales contemplaron el funcionamiento en cuatro salas: sala primera: fondo civil, sala segunda: forma civil y criminal, sala tercera: fondo criminal y sala cuarta de admisión en lo civil y criminal⁴³⁷.

En este sentido se presentaron tres proyectos en los meses de marzo, abril y mayo de 1863, a la par que las Bases previas elaboradas en tiempos precedentes. Se concretaron estos planes en el Proyecto de 6 de noviembre de 1863 que se presentó a las Cortes y que leído en el Senado fue aprobado por una comisión discriminatoria⁴³⁸. El Proyecto que recogió 36 Bases fue el contenido esencial de la Ley de 1864. De este modo el Tribunal Supremo se compuso de cinco salas, dos de admisión (civil y criminal) y tres más sin atribuciones específicas.

En cuanto a las atribuciones a las salas de admisión les competía: decidir sobre la de los recursos de casación y conocer de la queja contra las providencias denegatorias de testimonio para introducirlos.

También se contemplaba una sala de gobierno compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala para resolver asuntos contra ministros, cardenales, obispos, ministros de la Rota, magistrados del Tribunal Supremo, del de Órdenes y fiscal de éste y presidente del Congreso.

A la llegada de Luis Mayáns al Ministerio de Gracia, se produjo una nueva reorganización del Tribunal Supremo plasmada en la Ley de 30 de abril de 1864⁴³⁹, adecuándose a una realidad más eficaz y más rigurosa desde el punto de vista jurisdiccional (buscar la uniformidad y evitar la disparidad tendente con el trabajo que venían desarrollando las cinco salas)

Esta reforma estuvo motivada –como se recoge en el dictamen de la Comisión del Senado– y en perfecta sintonía con el gobierno, por la acumulación de causas que habían llegado a la sala primera, relativas a recursos de casación en el fondo. El ritmo

⁴³⁶ Se determina la forma de constituirse y actuar la sala para el examen de admisión, entre las cuales está la facultad de oír al ministerio fiscal cuando lo aconseje la importancia o dificultad del asunto o cuando estimare haber motivos de casación que no hubieren propuesto los recurrentes. Asimismo, se concretan los efectos de su resolución y los casos en que procede adoptar cada una de las decisiones posibles, y las normas generales de tramitación de los diversos tipos de cuestiones que se atribuyen.

⁴³⁷ Así se contempló en la base 34 del Proyecto de 1862

⁴³⁸ DSS. (1863) a. al n. 3 que corresponde al 6 de noviembre de 1863

⁴³⁹ CL. T. XCI (1864) p. 576

de trabajo de esta sala hacía suponer un previsible colapso en resolver los asuntos⁴⁴⁰. Y por tal motivo se reorganizó de modo provisional la funcionalidad de las salas con la siguiente configuración:

- sala primera compuesta de dos secciones, que se denominaron primera y segunda. Cada una tuvo un presidente y ocho ministros, tomando este número de los que formaban dicha sala y de los demás del tribunal y se crearon dos plazas más para completar su dotación. Las atribuciones de las dos secciones concedieron por repartimiento de los recursos de casación en el fondo y de los que hasta ese momento tenían como competencia en materia de comercio, hacienda pública y de imprenta. El Presidente del Tribunal podría asistir cuando lo creyera conveniente a cualquiera sección o sala.

- sala segunda y de Indias formaron una sala, que se denominó segunda y de Indias, compuesta de un presidente y seis ministros, y conoció de los asuntos que en ese momento correspondían a las dos y de los demás que no se contenían entre las atribuciones de la sala primera; admitiendo las súplicas que procedieran con arreglo a las leyes vigentes para ante la sala primera, por riguroso turno entre sus dos secciones.

Se produjo una reducción real de dos salas, y se seguía de este modo un esquema tradicional y continuista con respecto a la composición del alto tribunal con anterioridad a 1863. Existió en la Ley, un mandato expreso que confería al ministro la potestad de redactar una reglamentación expresa que diera contenido a la misma⁴⁴¹.

Se encargó, con posterioridad a una comisión técnica y no política⁴⁴², que apenas un mes después de aprobada la Ley de 30 de abril, el 27 de mayo de 1864, presentó un texto en forma de proyecto sustancialmente distinto al Senado, del que el gobierno días antes había tomado como suyo. Este nuevo texto recogía la existencia de cinco salas: sala primera: admisión de lo civil, sala segunda: admisión de lo criminal, sala tercera: casación de lo civil, sala cuarta casación de lo criminal y sala quinta: casación en la forma.

Las dos salas de admisión se compusieron de un presidente y seis magistrados y las otras salas de un presidente y ocho magistrados cada una. También existió la sala de gobierno formada por el presidente del tribunal, los presidentes de sala y el fiscal, ejerciendo ésta todas las atribuciones gubernativas que correspondían al tribunal, a excepción de las que con arreglo a esta ley correspondían al tribunal en pleno. Quedó suprimida la antigua Sala de Indias y los negocios civiles y criminales que atendía se repartieron entre las demás del tribunal, con sujeción a las reglas establecidas en la ley para las demás de la península e islas adyacentes, tanto respecto a la competencia como a su sustanciación.

⁴⁴⁰ Así se recogió en el preámbulo del ACD. (1864) serie general I. 118 n. 3

⁴⁴¹ CL. T.XCI-2 (1864) Así se recoge el mandato en la advertencia del T. 2 de sentencias del Tribunal Supremo.

⁴⁴² Comisión formada por Juan Martín Carramolino, José María Huet, Manuel García Gallardo, Vicente Vázquez Queipo, Bernardo de la Torre Rojas, Joaquín de Palma y Vinuesa y Pedro Gómez de la Serna.

El art. 20 de este proyecto obligaba para la formación de sala de admisión la existencia de cinco magistrados, en la sala tercera, cuarta y quinta de siete magistrados. En la disposición transitoria quedó regulado que la sala segunda y cuarta no se crearían hasta que hubiera sido sancionada la ley en que se estableciera el recurso de casación en lo criminal.

Este texto no llegó a tener vigencia, pero es demostrativo del deseo plasmado desde el rigor y la profesionalidad frente a las realidades diarias de obstruccionismo y oposición que se presentaron desde las instancias políticas, observándose a la vez, una laguna importante, como era la ausencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El 4 de abril de 1865 se redactó un Proyecto a instancias de Lorenzo Arrazola sobre casación que vulneró la independencia de la Comisión de Códigos y puenteó de manera flagrante sus legítimas obligaciones en el desarrollo de sus trabajos. El ministro Arrazola adujo razones de urgencia, peculiaridades de la legislatura y conveniencia de dicha reforma⁴⁴³. Se organizaba el tribunal en cuatro salas, con un presidente y siete magistrados,. Se ubicaron las atribuciones de cada una de ellas y su constitución exigía al menos cinco magistrados y siete para los fallos definitivos. En su art. 12 se autorizó al gobierno para realizar las modificaciones que estimara oportunas respecto a la división de atribuciones de las salas, después de oído en pleno el Tribunal Supremo.

Este proyecto tuvo, en 1868, contestación en el que presentó el ministro Joaquín de Roncali, que decididamente emprendió un camino ambicioso en el campo de las reformas judiciales con una orientación muy distinta a la que emprendió Arrazola.

Las principales diferencias radicaron, en lo que se refiere a las salas, en el número de sus componentes y en el ajuste de competencias. La oposición parlamentaria rechazó estos cambios y argumentó el tortuoso camino de los trabajos en sala que iban contra el principio de agilidad que se había impuesto como norma en la administración de justicia⁴⁴⁴. Tras un intenso y acalorado debate el ministro aceptó la propuesta de supresión de la Sala de Indias y del Tribunal en pleno. Se abrió, de igual modo, un debate sobre el número mínimo de magistrados para emitir fallos en el fondo de los pleitos y cual debía ser la mayoría cualificada.

⁴⁴³ Lasso Gaité, J. F. “Aportación a la historia del Tribunal Supremo en España” *RGLJ*. T. 59 (1969) Se decía: “ (...) algún gravamen económico ocasionará el proyecto, una vez aprobado, por la reorganización y aumento de magistrados del Tribunal Supremo, pero se compensará con ventajas con la supresión de algunas salas en las Audiencias, consecuencia necesaria de la supresión así mismo de la tercera instancia de lo criminal”.

⁴⁴⁴ La existencia de la Sala de Indias y los trabajos del tribunal en pleno concitaron las principales diferencias de la oposición al entender estos que la labor previa de las salas de Audiencia era mejor alternativa para descargar de trabajo a salas colapsadas.

2.a.e. Sexenio Revolucionario

Con la llegada del período revolucionario del Sexenio, hay que destacar uno de los primeros decretos adoptados en este nuevo período político como fue en el decreto de 26 de noviembre de 1868 y en el que se cuestionaron aspectos relacionados con la Ley de 11 de abril de 1868. Se determinó la existencia de tres salas. Cada sala contó con un presidente y ocho magistrados, añadiendo a la sala segunda dos magistrados más procedentes del antiguo Tribunal de Ordenes Militares, en las mismas condiciones que el resto de los magistrados, y sin perjuicio de la atención preferente que deban dar a los negocios de su especial competencia. Se contempló una sala exclusiva para los asuntos contencioso-administrativos, sala tercera, formada inicialmente por el Presidente del Tribunal y los presidentes de sala más antiguos. Los acuerdos tomados deberían contar con mayoría absoluta de votos.

En este período se conformó una comisión legislativa⁴⁴⁵ encargada de presentar un borrador de reforma judicial que lograra que toda la legislación estuviera impregnada por el espíritu constitucional⁴⁴⁶. Al frente de la misma se colocó a Manuel Ruiz Zorrilla en sustitución de Cortina⁴⁴⁷. El gobierno presentó en junio de ese mismo año la Ley Orgánica Provisional informada por la comisión delegada y en la exposición de motivos larga y extensa⁴⁴⁸ se urgía la adecuación de las instituciones al nuevo sistema político.

En dicho texto se contempló la existencia de tres salas a diferencia de las que funcionaron desde 1863 con cinco salas. Había 33 magistrados (ocho de los cuales estarían exclusivamente destinados a la sala de recursos contra la administración, en la que vino a refundirse la antigua jurisdicción contencioso-administrativa, haciendo así el gobierno menos gravosas al erario público, las grandes reformas que se introdujeron en la organización de este tribunal. Existió por lo tanto una novedad: la disminución orgánica de salas y cuantitativa de sus magistrados.

A través del decreto de 16 de octubre de 1868 pasó la jurisdicción contencioso-administrativa del Consejo de Estado –donde se encontraba a la luz de este proyecto– y por tanto se sumó una Sala más al texto original quedando la estructura del Tribunal Supremo del siguiente modo: sala de lo civil, sala de admisión en lo criminal, sala de casación en lo criminal y sala de recursos contra la administración. La composición numérica constó de un presidente, cuatro presidentes de sala y 28 magistrados.

⁴⁴⁵ La comisión se compuso por: Nicolás María Rivero, Pedro Gómez de la Serna, Laureano Figuerola, José Fernández de la Hoz, Cristóbal Martín de Herrera, Cristino Martos, Santiago Diego Madrazo, Juan Manuel Montalbán, Alejandro Groizard, Tomás María de Mosquera, Segismundo Moret, Francisco Pisapajares, Pedro González Gutiérrez, Julián Pastor y Alvira, Antonio López Botas, Joaquín García Briz, Pedro López Sánchez y Santos Isasa.

⁴⁴⁶ Por Real decreto de 18 de diciembre de 1868 cesaron las actividades que venía desarrollando la Comisión de Codificación.

⁴⁴⁷ ACGC (1869) l. 1 de organización de la comisión, c. 24, d. 102

⁴⁴⁸ ACGC (1868) l. 7 de organización de tribunales, c. 7, d. 1

La Ley de 18 de junio de 1870 –precedente en esta materia a las futuras reformulaciones legislativas– contempló, en armonía con la distribución de funciones que se quiso hacer, y recogido en el art. 63 de la ley publicada el 15 de septiembre de 1870, la existencia de dos salas de lo criminal, una denominada de admisión (sala segunda) y otra de casación criminal (sala tercera).

Posteriormente la ley de Enjuiciamiento Criminal introdujo una profunda modificación al unificar en una sola Sala, el conocimiento íntegro de los recursos de casación en los juicios criminales desde el acto de su interposición hasta su resolución en el fondo y de una manera definitiva. Por ello se promulgó el decreto de 16 de septiembre de 1873, reduciendo a tres las cuatro salas de justicia de que se componía el alto tribunal.

Parecía evidente, la supresión de la sala segunda de admisión, sin contravenir lo dispuesto en lo que se refería a la sustanciación de los procesos antiguos en primera y segunda instancia⁴⁴⁹ y así se disponía que las salas de justicia se distribuyeran: sala primera de lo civil, sala segunda de lo criminal y sala tercera de los recursos contra la administración.

Con la aplicación del decreto, no se cesó a ningún magistrado, sino que las salas existentes incrementaron sus recursos humanos⁴⁵⁰.

En septiembre de 1874, el ministro Alonso Colmenares propuso un Proyecto de organización de tribunales que no prosperó por las circunstancias políticas, pero que era interesante por separarse de la Ley Orgánica. El Consejo de Estado emitió un informe positivo al proyecto⁴⁵¹. En él se valoró favorablemente que el Tribunal Supremo se organizara en dos salas que a su vez se subdividían en secciones “para el más pronto despacho de los negocios”. Las secciones serían de admisión.

En plena época de la Restauración se dictó el decreto de 27 de enero de 1875, reorganizando la planta del Tribunal Supremo, con el argumento de lograr una disminución de los gastos públicos y por la falta de necesidad en las competencias que venía teniendo la sala tercera. De ese modo el Tribunal Supremo constó de tres salas, cada una de las cuales con un presidente y ocho magistrados. Se equilibraron las funciones de las tres salas en cuanto a sus cargas de trabajo y la sala tercera se ocupó de los recursos contra la administración. En 1877 se redistribuyeron las tareas y competencias de las salas por el volumen de trabajo que se alcanzó.

⁴⁴⁹ La refundición de las funciones referidas a la casación criminal no puede constituir ningún perjuicio para el interés legítimo de cualquier particular.

⁴⁵⁰ Las salas primera y segunda, se compusieron de un presidente de sala y de nueve magistrados y la sala tercera de un presidente de sala y diez magistrados. Los auxiliares de la antigua sala segunda quedarían al servicio de lo criminal con el mismo carácter y desempeñando las funciones propias de su cargo.

⁴⁵¹ En cuanto a la interinidad de la Ley Orgánica, la inaplicación de muchos de sus artículos y la necesidad de revisar la división territorial y jurisdiccional de los órganos de justicia.

2. b. el pleno del Tribunal Supremo

Los precedentes de la constitución y el funcionamiento del Tribunal en pleno lo situaríamos en el Reglamento de 13 de marzo de 1814, que contemplaba que su reunión tendría lugar: cuando el presidente lo considerase necesario⁴⁵², para oír las órdenes que el gobierno tuviera a bien comunicar al Tribunal y para despachar los expedientes sobre dudas planteadas por las Audiencias, en inteligencia de alguna ley⁴⁵³. Una vez concluidos los despachos que requirieran la reunión del Tribunal en pleno, se separaban las salas.

Posteriormente por el Reglamento de 1835 se constituiría en pleno para recibir las excusas de asistencia de los ministros y subalternos, teniendo la facultad de concederles licencia para ausentarse “mediando justa y bastante causa para ello; a los primeros hasta un mes, y a los segundos hasta dos, poniéndolo en noticia del gobierno cuando la licencia pasare de ocho días”⁴⁵⁴.

El Reglamento de 1835 dispuso que el Tribunal en pleno debía contemplar lo dispuesto en el punto 2 del art. 90, referido a la formación de causa criminal por delito común de alguna alta instancia gubernativa (Consejo de Ordenes o contra alguna sala)⁴⁵⁵. Una vez instruido el sumario, pasaría a la respectiva sala del tribunal, pudiendo el plenario realizar todas las actuaciones que considerare oportunas. El art. 74 recogió también que el plenario podía ver y fallar demandas sobre nuevos diezmos.

El decreto de 5 de enero de 1844 creó la Junta Gubernativa como órgano que reunía al presidente del Tribunal, presidentes de sala y los fiscales. Sustituyó al pleno del Tribunal y se le facultaron todas las atribuciones que antes tenía. Se respetó el art. 48 del reglamento de 1835 y se las dotó de numerosas atribuciones⁴⁵⁶ en el desempeño de sus funciones.

El 17 de enero de 1854, con motivo de la supresión de la Sala de Indias, se determinó que las tareas de trabajo decisorio se repartieran entre las dos salas y las tareas consultivas por el Tribunal Supremo en pleno. Supuso un reajuste de magistrados sin connotaciones de índole político.

Durante el Bienio progresista, se promulgó un Real decreto, por el que se suprimieron las antiguas Juntas gubernativas de la época moderada y que habían concentrado funciones que ahora pasarían al tribunal en pleno. En su art. 2º, se declaró que los negocios que estaban arbitrando se devolvieran al tribunal competente que los resolverían en pleno, con arreglo a lo que estaba previsto antes del establecimiento de esos órganos intermedios y politizados.

⁴⁵² Reglamento de 1814, c. II, art. 3.

⁴⁵³ Ibidem, c. I, art. 25

⁴⁵⁴ Ibidem, c. II, art. 29

⁴⁵⁵ Se dispuso que en estos casos se constituiría el pleno del Tribunal con al menos once magistrados.

⁴⁵⁶ CD. T. XXXII (1844) pp.19-23

Con la restauración del moderantismo se promulgó el Real decreto de 26 de noviembre de 1856, restableciendo el de 5 de enero de 1844, adicional del Tribunal Supremo. El cambio político se tradujo en numerosas medidas legales que contravinieron disposiciones del Bienio progresista. A partir de este momento se unificó en el Tribunal en pleno toda la responsabilidad decisoria, generando con ello un retraso, cuando no colapso, de funcionamiento.

Tomando como origen las bases elaboradas en 1863, se presentaron tres proyectos que se refundieron en uno que se presentó el 6 de noviembre y que el gobierno llevó a las Cortes y que fue aprobado en el Senado. En este texto se contempló que el tribunal funcionaría en pleno para emitir informes, dar las posesiones y conocer de las causas que determinara la ley. El tribunal en pleno conocería de las causas contra su presidente, los presidentes de sala y el fiscal. Para la formación válida del tribunal en pleno se exigían dos terceras partes de los magistrados de que se componga.

El Proyecto de ley de 4 de abril de 1867, recogió en su sección primera sobre organización de tribunales, en su art. 2º, que el Tribunal en pleno continuaba constituido como antes. Existieron fuertes rechazos de la oposición política que tacharon de ineficaz las funciones que se le dieron al tribunal en pleno, pues eran una pérdida de tiempo injustificada e incluso a veces creaba disfuncionalidad. Al final las presiones lograron su objetivo y el propio ministro suprimió el tribunal en pleno⁴⁵⁷.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 atribuyó, según su art. 284, al tribunal en pleno, constituido en sala de Justicia y en única instancia, en juicio oral y público de las causas contra los príncipes de la familia real, contra los ministros de la Corona por los delitos comunes cometidos en servicio activo, cuando no deban ser juzgados por el Senado y contra los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.

Con estas matizaciones no sustanciales en los cometidos del Tribunal en pleno se trabajó hasta la Restauración, en una instancia que en este período de tiempo tuvo similares competencias y cuyo hecho más destacable radica en su oportunidad o no desde el punto de vista orgánico sin que se ocasionaran colisiones funcionales.

3. Las competencias del Tribunal Supremo

3. a. el recurso de nulidad

Merece la pena detenerse previamente en los antecedentes históricos del recurso de nulidad como fueron los recursos de segunda suplicación e injusticia notoria previstos en la Constitución de 1812. De este modo se comprenderá mejor su naturaleza jurídica y su evolución en tan importante elemento procesal.

El recurso de segunda suplicación llamado también de Mil y Quinientas tuvo su origen en la ley de Segovia de 1390, dictada por Juan I. Se interponía en Chancillerías o

⁴⁵⁷ RGLJ. T. 33 (1868) p. 258

Audiencias y suponía interponer este recurso, reabrir el juicio de nuevo por disconformidad en el fallo proveniente de las instancias de hecho y de derecho, y decidía sobre el derecho de las partes como una tercera instancia, aparte de que no expresaba el fundamento de las sentencias.

El recurso de injusticia notoria estaba regulado, con bastante imprecisión en el título 23 del libro XI de la Novísima Recopilación y se confunde con el de nulidad manifiesta, vicios de la sentencia recurrida, que debería plantearse ante el mismo juez que la estableció, si no se entabló apelación contra ella o ante el juez que conozca de la misma. Se consideraba injusto cualquier causa que alteraba el correcto procedimiento de un pleito⁴⁵⁸. Este recurso, aunque muy elaborado técnicamente primaba exclusivamente en el interés privado (pues el fallo que lo terminaba reparaba un agravio).

Estos recursos se reducían en la práctica a verdaderas apelaciones al Consejo que los resolvía en tercera instancia, pero con la circunstancia importante que no fundaba sus fallos y de ese modo nunca se resolvía el problema de conocer el verdadero y genuino sentido de las leyes. Hay que apreciar claramente la diferencia respecto a la posterior casación en el hecho de sólo mirar el interés particular y no la legalidad del fallo, que es el origen y fundamento del recurso de casación.

Haciendo un breve repaso histórico en el tema que aquí nos obliga, debemos hablar de este recurso que fue sin duda el antecedente más sobresaliente de lo que fue el recurso de casación y que centró gran parte de la actividad del Tribunal Supremo a lo largo de este período aquí estudiado. A menudo representó un instrumento de utilización que otorgaba al Tribunal Supremo mayor poder y capacidad en la determinación de la jurisprudencia.

El artículo 261 de la Constitución de Cádiz, en su punto noveno, lo contempló como una de las atribuciones específicas del Tribunal Supremo, contra las sentencias dadas en última instancia, al efecto sólo de reponer el proceso, reponiéndolo y haciendo efectiva la responsabilidad de los magistrados que hubieren infringido las leyes del procedimiento; novedad ésta importante, puesto que de esta manera el Tribunal Supremo tuvo sobre la administración de justicia un control e inspección notable y la alta responsabilidad, a su vez, de evitar las infracciones de ley, a fijar el sentido de éstas por medio de reponer los procedimientos no mezclándose por ello en las cuestiones de hecho ni en la apreciación de pruebas; pero sin facultades para dar en el fondo el fallo que considerara más ajustado a derecho, diferencia esencial de este recurso respecto al de casación.

Este recurso presentó avances significativos: se fijaron leyes a través de los fallos recurridos, se establecieron las formas en que habían de ejercitarse las acciones, el objeto del recurso debía ser de interés general y la decisión de los recursos estaba en manos de un solo órgano de decisión.

⁴⁵⁸ Nunca los jurisconsultos se pusieron de acuerdo para convenir lo que debiera entenderse por injusticia notoria.

Pese al evidente progreso surgido en Cádiz, este recurso adoleció de aclaración sobre el modo de transmitirse los autos en el Tribunal Supremo, y no se establecía en principio ninguna diferencia entre los negocios civiles y las causas criminales.

El decreto de las Cortes de 23 de enero de 1813 atribuyó al Tribunal Supremo “el conocimiento de los recursos de nulidad que se interpusieran de las sentencias dadas en la última instancia por los tribunales especiales⁴⁵⁹, arreglándose a lo dispuesto en el de 9 de octubre anterior”. La finalidad que se dio a este recurso a través del decreto anteriormente mencionado y del de 13 de marzo de 1814, buscaba simplemente la exacción de responsabilidad de los jueces y en principio no tuvo un perfil que le permitiera identificarse con el posterior y aludido recurso de casación ya que no se le imponía al Tribunal Supremo la necesidad de motivar el fallo. De ello se deducía que ningún tribunal inferior se vinculaba en posteriores resoluciones. Sí contemplaba la Constitución de Cádiz al respecto que el Tribunal Supremo debía resolver sobre el recurso y en caso afirmativo volverían los autos al tribunal “a quo” para que se pronunciara una nueva sentencia.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 1835 con la redacción del Reglamento Provisional de la Administración de Justicia en su artículo 90, capítulo V, se concretó que el Tribunal Supremo conocería de los recursos de nulidad que establecieran las leyes contra las ejecutorias dadas por la administración y, como hasta ese momento se venía haciendo, hasta que otra cosa se determinara por la ley, de los recursos de injusticia notoria y de las segundas suplicaciones sin que esta disposición ni el nuevo reglamento del Tribunal Supremo de ese mismo año aportaran nuevos elementos de aclaración.

Contempló este artículo que el alto tribunal conocería las sentencias falladas por las Audiencias “según lo que establecían las leyes”, causaren ejecutoria, disposición que se limitó a consignar un principio que no llegó a tener desenvolvimiento por causa de las circunstancias políticas que sobrevinieron poco después, hasta que el cambio político de 1836 restableció el 13 de agosto la Constitución de 1812 y devolvió al recurso de nulidad su vigencia en el campo civil.

Conforme a lo dispuesto serían necesarios nueve magistrados al menos, para ver y determinar el grado de segunda suplicación, recurso de injusticia notoria, o alguno de los de fuerza comprendidos en la facultad octava del art. 90, o algún juicio de reversión o de incorporación a la Corona, o de tanteo de jurisdicción o señorío.

El 13 de agosto de 1836, quedaron suprimidos los recursos de segunda suplicación y de injusticia notoria y dos años debieron transcurrir para que se promulgara el decreto de 4 de noviembre de 1838, donde definitivamente y específicamente por vía de derecho quedaron suprimidos los anteriores recursos.

⁴⁵⁹ Se reconoció un solo fuero para los negocios comunes, civiles y criminales para toda clase de personas (art. 248) y existieron tribunales especiales en el fuero eclesiástico y en el fuero militar en los términos previstos en las leyes, según se dispuso en los arts. 249 y 250 de la Constitución.

Se reguló ya el denominado recurso de nulidad distinto al de 1812, recogido constitucionalmente en el título V, distinto de igual modo al del reglamento provisional y ya en sintonía con el espíritu de crear una nueva institución que fue la casación dimanada - aunque este tema fue debatido ampliamente- de la doctrina francesa fruto del proceso revolucionario.

Este proceso que dio comienzo con el propio decreto tuvo una fase transitoria - así se recogió en su artículo 1º- para poder decidir los recursos antiguos ya mencionados pero siempre y cuando estuvieran presentados antes de 1836, siguiéndose el proceso formal-administrativo que recogieron las leyes de la época. Procedía este recurso de nulidad contra las sentencias de revista de las Audiencias y Tribunal especial de Guerra y Marina, cuando fueran contrarias a la ley clara y terminantemente (error in iudicando) según su artículo 3º.

También se podía interponer este recurso cuando se hubieran menoscabado los trámites procesados (error in procedendo) en los casos siguientes que su enumeran en su art.4º: defecto de emplazamiento, falta de personación o poder, denegación de recibimiento a prueba o de la admisible, en notificación de la sentencia, denegación de súplica procedente y incompetencia de jurisdicción. Este decreto sí exceptúa en su contenido las causas criminales, los juicios posesorios y los ejecutivos (artículo 6º)⁴⁶⁰.

Se observará de la lectura de estos requisitos una cuasi-exactitud del futuro recurso de casación que también se interpuso ante el Tribunal Supremo por las mismas motivaciones, por ello es veraz la afirmación de que este decreto fue el precedente de la regulación de la casación en España.

La finalidad del recurso de nulidad de la Constitución del 12, en su artículo 261.9, dentro de las competencias que se le atribuían al Tribunal Supremo- era reponer el proceso, devolviéndolo y haciendo efectiva la responsabilidad de los jueces por la inobservancia de las leyes que arreglaban el proceso en lo civil y en lo criminal.

Fue 1838 un año que marcó un punto culminante en el desarrollo y estructura de la administración de justicia pues se le concedió por primera vez al Tribunal Supremo a través de este decreto una competencia - delicada desde el poder político y en la consolidación de la auténtica división de poderes- como fue defender la ley, crearla, interpretarla y de ese modo el Tribunal Supremo se convertía en la cúspide jurisdiccional - en detrimento al menos sobre el papel del Consejo de Estado- y se hacía garante de uniformar la doctrina de los tribunales.

En los artículos 5, 7 y 8 del decreto se avanzó la formalidad en la interposición del recurso: éste debe hacerse por escrito citando la ley infringida, con la fianza depositada, ante el tribunal que ha sido origen de la sentencia recurrida y éste emplazará a las partes y librára el memorial o apuntamiento. Caso de desestimación por el tribunal sentenciador, cabía la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo.

⁴⁶⁰ Según Lasso Gaité también pudieron considerarse precedentes remotos del recurso de casación en España, las fazañas dadas “ex quo et bono” por los tribunales de Castilla, Aragón y Navarra según sus fueros, que constituyeron una verdadera legislación judicial.

La resolución del recurso correspondía a dicho tribunal. Existieron dos opciones para interponer el recurso si era de vicio “in iudicando”, caso de ser admitido, volvían los autos al tribunal a quo para sentencia definitiva a cargo de siete ministros que no hubieran intervenido en los fallos anteriores (artículo 18) y si era de vicios “in procedendo”, denunciados oportunamente, la resolución favorable implicaba la reposición de los autos al momento de la infracción y contra el fallo del tribunal a quo, dictado por otros tantos ministros, no cabía recurso, salvo el de responsabilidad (artículos 19 y 21). Caso de desestimación del recurso, se impondrían las costas al apelante con pérdida del depósito⁴⁶¹.

A partir de este momento las consideraciones que tomaron fuerza caminaban en la dirección de ¿cual iba a ser realmente el papel del Tribunal Supremo? y al entender de muchos, el evidente temor de que el Tribunal Supremo tuviera un gran poder que exigía unas limitaciones para que no se excediese en sus facultades y abusase en relación con otros tribunales. Argumento político éste, que podía ser contrarrestado por el ejecutivo por dos vías: la legislativa (a través de reformas) y la judicial (con el nombramiento de altos magistrados desde la imposición o creando las coberturas legales para tener la suficiente discrecionalidad en este ámbito).

Este decreto presentaba evidentes fallos como eran que podía suceder que el tribunal a quien se devolvían los autos desatendiera lo acordado por el Tribunal Supremo, quedando este desairado y la administración de justicia en entredicho por la presencia de dos sentencias contradictorias o discordes. También podrían publicarse en la Gaceta una doble y contradictoria jurisprudencia. Se iba contra la práctica tradicional española que se seguía en los tribunales, ya que tanto en los recursos de “segunda suplicación” o en el de las “mil y quinientas” o en los de injusticia notoria, el Tribunal Supremo como antes el Consejo de Castilla fallaba sobre el fondo directamente, si estimaba el recurso, sin devolver para este efectos los autos al tribunal inferior.

El decreto de 4 de noviembre de 1838 tuvo vigencia hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y por los fines que se enuncian en él (defensa de la legalidad de los fallos, más que el interés de las partes), podemos afirmar que se introducía totalmente el recurso de casación en nuestro derecho. La determinación de la jurisprudencia es el fin último de la casación y eso se preestablece en 1838, aunque alcanzaba su plenitud en 1855 con una definición mucho más precisa y aclaratoria. Se mantuvo el nombre de recurso de nulidad en el decreto por respeto al título V de la Constitución, al reglamento provisional y a las ordenanzas de las Audiencias que estaban en ese momento.

Es necesario también destacar que el espaldarazo definitivo de este decreto y su promulgación se hizo estando de ministro de Gracia y Justicia, Domingo Ruiz de la Vega (del 6 de septiembre al 12 de diciembre de 1838), quién formó parte a su vez de la Comisión de Códigos de 1843 y luego de la de 1846, destacando su labor para buscar

⁴⁶¹ Por igual número de magistrados que en el anterior caso pero distintos. Se pretendió magnificar el valor que se quiso conceder a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el carácter de medio unificador de la de todos los tribunales. En el artículo 23 se ordenaba la publicación en la Gaceta del Gobierno tanto los fallos de anulación del Tribunal Supremo como de los tribunales de instancia.

las concordancias necesarias del recurso de nulidad en todos los nuevos proyectos de organización del Tribunal Supremo dentro de sus nuevas competencias y atribuciones.

El Proyecto de nueva planta de tribunales y arreglo del ramo de administración de justicia en España, presentado el 15 de enero de 1840, en su primera parte, de las tres que constaba,⁴⁶² y en el título II enumeró las atribuciones y competencias del alto tribunal y en ese sentido dispuso conocer de los recursos de nulidad y de las ejecutorias de las Reales Audiencias y otros tribunales superiores.

Resulta interesante señalar que este Proyecto, a mi entender, supuso un serio avance de la que posteriormente sería la Ley de Enjuiciamiento Civil, a través precisamente, de la creación del recurso de casación como consecuencia del marasmo legislativo que no clarificaba aspectos competenciales e incluso jurisdiccionales de las anteriores leyes y sobre todo en la tarea de los jueces.

El período revolucionario (1840-1843) no aportó ninguna novedad al respecto, llegando de este modo a los trabajos de la Comisión de Codificación de 7 de marzo de 1844, donde la recién creada sección de casación conocería de tales recursos contra las sentencias de todos los tribunales ordinarios y excepcionales. Observamos una cierta articulación y avance pues, con la novedad del recurso de casación, en los propósitos que se pretendieron del alto Tribunal. La casación como novedad procesal, planteaba nuevos retos a la administración de justicia y por ello el Tribunal Supremo se organizó orgánica y competencialmente para no crear una tercera instancia, uniformando la jurisprudencia existente o creándola de nuevo cuño.

La Real orden de 12 de julio de 1845, distribuyó las causas entre los magistrados del Tribunal Supremo por el colapso judicial en las Audiencias. El hecho de que en ese momento el recurso de casación no estuviera maduro, como mecanismo procesal, provocó que el alto Tribunal viera antiguas funciones de segundas suplicaciones, nulidades, dirimiendo entre instancias jurisdiccionales y observando la responsabilidad de las altas dignidades del estado. En poco tiempo las circunstancias cambiaron y el colapso de causas inacabadas se orientó hasta el Tribunal Supremo.

El Real decreto de 20 de junio de 1852⁴⁶³ sobre procedimiento en la jurisdicción de Hacienda, supuso un punto de inflexión en cuanto confirió al Tribunal Supremo, en su capítulo IV, la capacidad de resolver en el fondo cualquier vicio de una sentencia emitida por las Audiencias.

Desde el art. 96 al 113 se legisló sobre “los recursos de casación” y se arbitraron procedimientos y mecanismos necesarios para interponerlos. Habría lugar a dicho recurso ante el Tribunal Supremo cuando el fallo definitivo dictado en apelación fuera contrario a la ley, y cuando se quebrantaran las reglas de enjuiciamiento en primera o segunda instancia (tales como defecto de emplazamiento en tiempo y forma, ausencia de partes en el juicio, defecto de citación, por no haberse recibido la

⁴⁶² ACGC (1840) l. 2 de enjuiciamiento criminal, c. 1, d. 1

⁴⁶³ CD. T. LVI (1852) pp. 211-213

causa a prueba, por no haberse notificado el auto de prueba, por haberse dictado la sentencia por un número de jueces distinto al que señala la ley). Se estipulaba el plazo de diez días siguientes a la notificación del fallo. Se fijó una fianza al interponer el recurso. La interposición del recurso de casación no suspendió la ejecución de la sentencia. El recurso lo veía la sala primera en número de siete jueces y la sentencia se pronunciaría en el plazo de quince días. Si había lugar a recurso pasaba a la sala segunda y el fallo de ésta, motivado, causaba ejecutoria. Se disponían costas si no había lugar al trámite del recurso y los fallos se publicarían en la Gaceta del gobierno.

En el Real decreto de 3 de septiembre de 1853 aprobando la Instrucción para arreglar el procedimiento en los negocios civiles con respecto a la Real Jurisdicción ordinaria, se modificaron algunos artículos del Real decreto de 1838.

Estas novedades⁴⁶⁴ se planteaban en el sentido de perfeccionar y facilitar la propuesta del recurso y fueron sobre el recurso de nulidad. En este sentido cabe mencionar: de las sentencias definitivas de cualquier clase que dictasen las Audiencias en negocios civiles no habrá lugar a súplica (art.69), habrá lugar al recurso de cualquier nulidad contra las ejecutorias de las Audiencias por infracción de las leyes del enjuiciamiento en los casos y en la forma prevista por el Real decreto de 4 de noviembre de 1838, excepto el de denegación de súplica. Procederá además al recurso por infracción de las leyes del enjuiciamiento cuando la sentencia hubiese sido dada por un número de magistrados inferior al requerido para dictarla (art.70).

Destacar también como novedades que habría lugar asimismo al recurso de nulidad por violación de ley clara y terminante contra los fallos definitivos de las Audiencias en asuntos no posesorios, interlocutorios ni ejecutivos, cuya cuantía excediera de mil duros en la península e islas adyacentes: cuando hubiese mediado discordia para dictar sentencia en la instancia de apelación y cuando la sentencia fuere revocatoria en todo o en parte de la del inferior, y no hubiese sido dictada por unanimidad (art. 71), se reducía a cien duros el depósito previo exigido por el art. 8º del Real decreto de 4 de noviembre de 1838 (art.72), el Tribunal Supremo observaría, en la parte de tramitación que no estuviera arreglada expresamente por dicho Real decreto, cuando quedara prevenido en la presente Instrucción, y fuera de común aplicación en todo el curso de los juicios (art.73).

En el caso de declararse haber lugar al recurso por ser el fallo contrario a ley expresa y terminante, pasará el negocio a otra sala del Tribunal Supremo, compuesta de nueve ministros distintos de los que hubiesen votado la nulidad (art.74).

Sobre el recurso de responsabilidad cabe mencionar que de los fallos de las salas en que no quepa el remedio de nulidad, habrá lugar, no obstante, a la reclamación de responsabilidad de los magistrados, en los términos prevenidos por la Constitución y las leyes (art. 75) y no se exigirán derechos en el Tribunal Supremo por ninguna

⁴⁶⁴ CD. T. LX (1853) pp. 181-200.

reclamación de responsabilidad ínterin aquel no declare que debe abonarlo el que produjo la queja por haber procedido con notoria temeridad, o recarga por otro concepto condenación expresa de costas (art.76).

Se reseñaron como disposiciones transitorias el que la presente Instrucción se observaría en todas sus partes, en cuantos negocios se principien después de su publicación: en los pendientes se aplicaría solamente a la segunda instancia y recursos posteriores en todos aquellos pleitos en que aun no hubiese recaído sentencia definitiva del juez de primera instancia, y que los Regentes emitirían en el estado del presente año la especificación del número de causas legales y no legales que hubieran entorpecido la sustanciación de los pleitos fallados durante el mismo, y se arreglarían en lo demás a los datos que fuera posible recoger.

La Instrucción completó algunas lagunas del decreto de 1838 en temas eminentemente procesales y de tramitación, amplió algunos supuestos, garantizó la revisión de la sentencia en su art. 73 con el análisis de nuevos magistrados, abarató los costes de interposición de 10.000 reales a 100 duros en su art. 72, y se precisaron los plazos. La apelación al Tribunal Supremo se recogió casi idénticamente (con la lógica variación del transcurso de quince años, en los que el alto tribunal había creado más salas y, por tanto, más magistrados podían cumplir las responsabilidades de apelación según el art. 74 motivando el fallo) y esta sería ejecutoria y no habiendo lugar a otro ulterior recurso; solamente quedaba solicitar el llamado recurso de responsabilidad sobre los magistrados en la forma que se recogía en los art. 75 y 76.

Se avanzó más el 30 de septiembre de 1853 que por Real decreto, se aprobó la Instrucción para arreglar el procedimiento en los negocios civiles con respecto a la real jurisdicción ordinaria. Preservó lo contemplado el 4 de noviembre de 1838 sobre recursos de nulidad, que siguió intacto en sus partes más relevantes, y sólo hubo alteraciones en algunas de sus disposiciones secundarias (afectantes al funcionamiento interno del propio tribunal).

Con ello se pretendió perfeccionar las actuaciones de los magistrados y poner un filtro al aluvión de recursos que ya por ese año se estaban registrando. Se perfeccionó el funcionamiento de la sala que había de pronunciarse sobre el recurso de casación por dos vías, la primera aumentando el número de magistrados que lo analizan (si el recurso se presenta por fallo contrario a la ley expresa y terminante, art. 74) y la segunda motivando las sentencias y publicando los fallos en la Gaceta, para así ir creando doctrina.

Hubo otra fase incoada por el Real decreto de 18 de agosto de 1854 en la que se suspendía el seguimiento de la Instrucción. Como señaló Ortiz de Zúñiga,⁴⁶⁵ se diferenciaron tres momentos en la fase preliminar del recurso de casación y dentro de una interpretativa evolución y desarrollo del recurso de nulidad: desde el cuatro de noviembre de 1838 al cuatro de octubre de 1853, desde el cuatro de octubre 1853 al dieciocho de agosto de 1854 y desde el dieciocho de agosto de 1854 al treinta y uno de

⁴⁶⁵ M. Ortiz de Zúñiga, op. cit p. 537

diciembre de 1855. En la fase 1ª y 3ª se siguió el original recurso de nulidad de 1838 y en la 2ª, la Instrucción de 1853.

Según el procedimiento, el recurso en sus consideraciones generales, se debía presentar a la sala de la Audiencia que dictó la ejecutoria, dentro del plazo establecido, con firma de abogado y de manera escrita. Debía exponerse con claridad que era un recurso de nulidad de fondo o de forma o de las dos cosas al mismo tiempo y se proponía su consideración al Tribunal Supremo. Previo pago de la fianza (con las excepciones previstas) si era un particular, porque si el derecho lo ejercía el ministerio fiscal estaba exento de dicho pago. Todos los requisitos se habían de cumplir, pues si no se hacía de este modo, el alto tribunal no lo tomaría en consideración. Existió abundante documentación en el sentido de celoso seguimiento de los elementos procesales por parte del Tribunal Supremo⁴⁶⁶.

Con Joaquín Aguirre, como ministro de Gracia y Justicia, se promulgó la Real Cédula de 30 de enero de 1855. En ella se instaba a la administración de justicia en las provincias de Ultramar que informaran a sus órganos superiores.

En su art. 88 y referido a las atribuciones de la Sala de Indias se le encomendó a ésta: conocer en segunda y última instancia de las causas formadas y de los recursos de responsabilidad entablados contra los jueces inferiores de Ultramar que las Audiencias le remitan en apelación; resolver los recursos de queja que por no haberles otorgado la alzada establecen los referidos jueces inferiores: conocer en primera instancia, con súplica en sus casos para ante distinta sala del mismo Tribunal, de las causas que se forman a los Regentes, ministros o fiscales de las Audiencias de Ultramar por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones judiciales; conocer por los mismos trámites de los recursos de responsabilidad que entablaren contra los funcionarios expresados en el párrafo anterior por infracción terminante de las leyes en la administración de justicia y conocer de los recursos de casación que en negocios civiles se establecen contra sentencias ejecutorias de las Audiencias con arreglo a las leyes, fallando sin ulterior recurso en los mismos, cuando encontrare haber lugar a la casación. En otro orden de cosas, en la misma real cédula, en su cap. XI se abordaban los recursos de nulidad o casación⁴⁶⁷.

Con la Ley de Enjuiciamiento Civil quedó suprimido el recurso de nulidad en su antigua acepción, aunque existieron intentos de reactualizarlo por parte de algún particular que invocando las Partidas quería acogerse a ese procedimiento.

El Tribunal Supremo por sentencia de 22 de marzo de 1866 estableció que contra las sentencias definitivas de las audiencias no se contemplaba por parte de la administración judicial otra vía que la del recurso de casación⁴⁶⁸. Es curioso observar

⁴⁶⁶ CL. T. LXI (1854) pp.676-678, sentencia del Tribunal Supremo de 24 enero. CL. T. LIII (1851) pp. 90-92, sentencia del Tribunal Supremo de 5 julio. CL. T. LXXIX (1859) sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero.

⁴⁶⁷ CL. T. LXIV (1855) pp. 138-143

⁴⁶⁸ M. Ortiz de Zúñiga, *Jurisprudencia Civil de España conforme a la doctrina consignada en los fallos del Tribunal Supremo*. t. I, Madrid, 1869.

que la vigencia del decreto del 38 mantuvo 17 años su acción de derecho, pero muchos más en la conciencia, no sólo de los ejercitadores de la ley, sino también de los sometidos a ella.

Existió la posibilidad de entablar pleitos de nulidad hasta el 31 de diciembre de 1855, pero en todo este tiempo sufrió modificaciones, cuando menos interpretaciones en su sentido más profundo.

3. a.a. el recurso de nulidad en el fondo

Teniendo como base que el recurso de nulidad era un recurso extraordinario, constituyó una permanente preocupación del estamento judicial la reparación del daño de las sentencias formuladas sin un seguimiento correcto y literal de la ley; ésta debiera presuponer su claridad y rotundidad en su definición y en sus contenidos.

Manteniendo el esquema que se trazó en 1838, se redactó el Proyecto de Enjuiciamiento Civil de García Gallardo en 1840, que establecía que el propio Tribunal Supremo fallara sobre el fondo en materia de los recursos de nulidad. Un año más tarde el ministro Gómez Becerra instó a los magistrados del Tribunal Supremo a que elaboraran otro proyecto que insistió en este mismo sentido de que el alto tribunal fallara sobre el fondo ya que así –decía textualmente– “no se dan molestias ni gastos a los litigantes ni se precisa aumentar la dotación de las Audiencias”

La Instrucción de 1853, a través de su art. 71, decía que habría lugar al recurso en caso de violación de ley clara y terminante contra los fallos definitivos en asuntos no posesorios, interlocutorios ni ejecutivos (...), cuando hubiese mediado discordia para dictar sentencia en la instancia de apelación y cuando la sentencia no se dictase por unanimidad.

Estas fueron las innovaciones con respecto al Real decreto de 1838. La Real Cédula de 31 de enero de 1855 introdujo un concepto nuevo que fue el de doctrina legal que venía a sustituir el de infracción o violación de ley que hasta ese momento se expresaba. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempló en su art. 7, la necesidad de puntualizar por parte del recurrente los contenidos a su entender menoscabados o desvirtuados para que se definiera nulidad.

Como en la mayoría de las ocasiones estas novedades se van perfilando a través de pronunciamientos del Tribunal Supremo: no cabe recurso contra sentencias de vista dictadas por unanimidad⁴⁶⁹; no ha lugar al recurso en pleitos que no versen sobre propiedad⁴⁷⁰; el recurso de nulidad en asuntos testamentarios entiende la voluntad del testador como ley clara y terminante; en la medida que no se cumpla su voluntad se infringe la ley y puede recurrirse⁴⁷¹; se entiende que un error material de la sentencia no

⁴⁶⁹ CL. T. LXVI (1855) pp. 621-624 sentencia del Tribunal Supremo de 27 septiembre.

⁴⁷⁰ CL. T. XLVIII (1850) pp. 96-97 sentencia del Tribunal Supremo de 29 febrero.

⁴⁷¹ CL. T. LXIII (1854) pp. 476-479 sentencia del Tribunal Supremo de 11 octubre.

supone infracción positiva y verdadera⁴⁷² y el recurso de nulidad según el real decreto de 1838 contra la sentencia de revista debe producirse cuando no exista concordancia con el fallo de revista⁴⁷³.

Si la disconformidad entre la sentencia de vista y de revista existía, procedía en general el recurso de nulidad, la disconformidad podía ser total o parcial; en el primer caso el recurso se interponía contra la totalidad de la sentencia y si era parcial contra la parte de la sentencia disconforme⁴⁷⁴.

Al interponer este recurso, se debía citar la ley o doctrina legal infringida de modo expreso para la apreciación del Tribunal Supremo⁴⁷⁵. Admitido a trámite en la audiencia, correspondía al alto tribunal declarar la nulidad y formular la nueva sentencia en cuestiones exclusivamente de derecho y no se detenía en alegaciones que sobre pruebas se hubieran buscado al recurso (esta diferencia es clara con respecto al recurso de casación que sí analiza cuestiones de hecho y de derecho). Así se recogió en una amplia tradición de sentencias del Tribunal Supremo desde el año 1846 a 1861.

Es cierto que esa limitación comentada en la apreciación de la ley a cuestiones de derecho va en razón de aplicar los hechos en un mismo sentido. Con la Instrucción de 30 septiembre de 1853 que complementaba al decreto de 1838, y durante casi dos años por cumplimiento del artículo 74 de la misma, el pleito nunca volvía a la audiencia sino que pasaba a otra sala del Tribunal Supremo.

Sólo con lo anteriormente expuesto, se abría una salvedad de que el alto tribunal verificara las pruebas, cuando en la apreciación misma; que compete exclusivamente a la sala sentenciadora, se comete alguna infracción de ley o de doctrina, o se falta a las reglas de la crítica racional y del buen sentido⁴⁷⁶.

Para concluir con este apartado, conviene decir que las jurisdicciones especiales seguían su propio desarrollo legislativo y por ello anulaba la posibilidad de acogerse al recurso de nulidad tratado en el fuero común en alguna de sus posibilidades.

La estadística consignada en la interposición de este recurso fue escasa y en la mayoría de las ocasiones estos no prosperaron. La ignorancia jurídica de los ciudadanos y el deseo de los tribunales en asentar sus principios jurisprudenciales pudieran ser dos buenas razones que expliquen las afirmaciones que sostengo.

⁴⁷² CL. T. LXI (1854) pp. 673-676 sentencia del Tribunal Supremo de 13 enero.

⁴⁷³ CL. T. XLII (1847) pp. 54-55 sentencia del Tribunal Supremo de 14 septiembre; CL. T. LX (1853) p. 118-120 sentencia del Tribunal Supremo de 23 diciembre; CL. T. LXXVIII (1858) pp. 53-56 sentencia del Tribunal Supremo de 10 octubre; CL. T. LXXVIII (1858) pp. 91-94 sentencia del Tribunal Supremo de 9 noviembre; CL. T. LXXVIII (1858) pp. 124-128 sentencia del Tribunal Supremo de 14 diciembre.

⁴⁷⁴ CL. T. LX (1853) p. 111-113 sentencia del Tribunal Supremo de 17 octubre; CL. T. LXXIV (1857) pp. 36-40 sentencia del Tribunal Supremo de 10 octubre; CL. T. LXV (1855) pp. 931-933 sentencia del Tribunal Supremo de 11 mayo.

⁴⁷⁵ CL. T. XLVIII (1849) pp. 77-78 sentencia del Tribunal Supremo de 10 septiembre; CL. T. LX (1853) pp. 111-113 sentencia de 17 octubre.

⁴⁷⁶ CL. T. LXXV (1858) pp. 78-84 sentencia del Tribunal Supremo 26 marzo; CL. T. LXXX (1859) pp. 205-208 sentencia de 30 junio.

3. a.b. el recurso de nulidad en la forma

El Real decreto de 4 de noviembre de 1838 decía en su art. 4º, que había lugar el recurso contra las ejecutorias, cuando en las instancias de vista o de revista se infringieran las leyes del enjuiciamiento en los casos que expresaba: por defecto del emplazamiento en tiempo y forma de los que deban ser citados a juicio; por falta de personalidad o poder suficiente de los litigantes para comparecer en juicio, por defecto de citación para prueba o definitiva, y para toda diligencia probatoria; por no haberse recibido el pleito a prueba, debiéndose recibir, o no haberse permitido a las partes hacer la prueba que les convenía, siendo conducente y admisible; por no haberse notificado el auto de prueba o la sentencia definitiva en tiempo y forma, cuando se denegare la súplica sin embargo de ser conforme a derecho y por incompetencia de jurisdicción.

Posteriormente en la Instrucción del procedimiento civil de 30 de septiembre de 1853, se anunciaron nuevas reformas en este tema, suprimiendo en el art. 69 la súplica que antes se admitía contra la sentencia de vista, y además a través del art. 70, se admitió el recurso contra las ejecutorias de las audiencias, por infracción de las leyes del enjuiciamiento, en los casos y en forma prevista por el decreto de 1838, citados anteriormente, excepto el de denegación de súplica. También cabía el recurso por infracción de las leyes del enjuiciamiento, cuando la sentencia hubiese sido dada por un número de magistrados inferior al que estaba previsto para dictarla.

No había lugar al recurso en los casos que se refirieran a asuntos contenciosos de Hacienda⁴⁷⁷, cuando se fundara en la falta de una notificación, cuando hubiera falta de notificación en la sentencia, y no procedía en las infracciones de enjuiciamiento en la primera instancia⁴⁷⁸.

Para interponer el recurso debía expresarse la causa en que se fundaba ante la audiencia y en el plazo de diez días, además de los demás requisitos comprendidos en las disposiciones legales. Presentado el recurso al tribunal a quo, éste debía admitir el recurso, sin que le fuera lícito entrar en la apreciación de la causa alegada, pues era de exclusiva competencia del Tribunal Supremo.

Dicho recurso se concedía por denegación de súplica; pero también podía tener lugar por admisión de aquella cuando fuera improcedente e inadmisibile. Si de ese modo la súplica no procedía con arreglo a las leyes, y se admitía, sin embargo, se entraba indebidamente en la tercera instancia, quebrantando una ejecutiva solemne, como lo era en tal caso la sentencia de vista, y se cometía por tanto infracción de la ley que denegaba la súplica; siendo nula por consiguiente la sentencia de revista⁴⁷⁹.

Desde la redacción del decreto de 4 de noviembre de 1838, podemos asegurar que el Tribunal Supremo desarrolló dos tareas realmente importantes: la primera perfeccionar la tarea legislativa a través de la unificación de criterios en la interpretación de las

⁴⁷⁷ CL. T. LVII (1852) pp. 75-76 sentencia del Tribunal Supremo de 24 noviembre.

⁴⁷⁸ CL. T. LVII (1852) pp. 86-87 sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre.

⁴⁷⁹ CL. T. LXXIV (1857) pp. 82-85 sentencia del Tribunal Supremo de 14 diciembre.

normas y la segunda el enriquecimiento de la ciencia del derecho creando nuevos elementos de fundamento y de proceso.

La fijación de doctrinas jurídicas en Derecho Civil, sobre todo, fue otro logro que a través del alto Tribunal se impuso sobre prácticas antiguas procedentes de la Novísima Recopilación, y sobre las peculiaridades de las foralidades aún vigentes en territorios españoles fue una realidad de creación y de progreso del derecho en su conjunto.

El recurso de nulidad fue por tanto, la vía de entrada de la casación en España. Con una experiencia más corta que en otros países, se logró fijar la inteligencia y uniformar la doctrina, sobre un contexto prolijo en leyes e interpretaciones que provocaron confusión en la praxis judicial y resultados funestos en la realidad cotidiana. Esta situación de novedad y a la vez de ignorancia provocó la interposición de abundantes recursos, hasta que el Tribunal Supremo clarificó, en su ejercicio, las numerosas dudas existentes.

3.a.c. el recurso de injusticia notoria en el fondo

La condición exigible para que se diera es que la sentencia contra la cual se interpusiera, se hubiera dictado en la última instancia, que fuera ejecutoria; y además se infringiera ley expresa (ley clara y terminante). Si así no fuere el Tribunal Supremo rechazará el recurso. No tiene cabida, al principio, la infracción de doctrinas o principios. Cuando fuera necesaria la interpretación racional correspondería al alto Tribunal esa misión de aplicar las disposiciones legales a los casos concretos y circunstancias determinadas.

El recurso debía expresar la infracción que se suponía para ser apreciada por el Tribunal Supremo, y si cumplía las debidas formalidades debía ser admitido por la audiencia. Este requisito evitaba la facilidad de la que algunos hacían uso para interponer este tipo de recursos y el colapso que en los tribunales se producía. Debía exponerse la ley que había sido aplicada y dañada, sin objeto quedaban otras leyes aludidas y colaterales que no habían sido el fundamento de la sentencia. Aún suponiendo que se mencionara la ley quebrada, podía ser en algún punto que no hubiera sido -en concreto- la referencia final del fallo y por tanto el recurso tampoco era aceptado. Tampoco eran, objeto del recurso los hechos y cuestiones en que estaban conformes las partes.

En algunas ocasiones en la propia redacción del fallo, se producían equivocaciones: (inexactitud en la relación de los hechos del pleito, apreciaciones incorrectas, o se citaban leyes no ajustadas al caso) pero la resolución era justa: entonces no había lugar al recurso porque no existía propiamente infracción donde apoyarlo.

En tres sentencias de 1863, 1866 y 1867 se consideró la doctrina que contra los fundamentos de las sentencias, esto es, contra los resultandos y considerandos, que constituyeran la parte expositiva, no procedía el recurso, sino solamente contra la parte

dispositiva, que era el verdadera fallo. Si cabía el recurso, si había discordancias en la parte expositiva de dos sentencias, según se estimó el 22 de junio de 1867.

En asuntos mercantiles fue frecuente el uso y abuso de este recurso alegando que la infracción radicaba en una incorrecta apreciación de las pruebas (ya analizamos este aspecto referido al recurso de casación); pero la praxis general fue que el Tribunal Supremo no revisaba este tipo de materia. Hay autores⁴⁸⁰ que sostienen que se ha abusado de este fenómeno aunque no dejan de reconocer “que es necesario demostrar en estos casos, que la apreciación de la prueba ha sido incorrecta y ha dañado directamente la ley o la doctrina de ley”.

3. a.d. el recurso de injusticia notoria en la forma

En todos los litigios era obligado cumplir las formalidades que conllevaba el proceso, por los litigantes y por la propia causa y el buen orden de la administración judicial. La peculiaridad referida a este tipo de recursos radicaba solamente en la violación de las formas que se consideraban más esenciales en todo juicio y así se había pronunciado reiteradamente el orden judicial creando al respecto jurisprudencia tal y como se contempló en la sentencias de 10 de marzo de 1865 y de 22 de noviembre y 12 de diciembre de 1866.

En el escrito había que expresar las faltas en que se hubiese incurrido, para que el Tribunal Supremo pudiera apreciar si habían existido, y si eran o no sustanciales como exigía la ley. Era relativo el concepto de sustancial que aclaró el propio tribunal, a través de la sentencia de 12 abril de 1864, sobre la procedencia o improcedencia de la tercera instancia.

Existieron doctrinas contrapuestas a tenor de que se consideraba como sustancial, en un sentido restringido y en otro amplio, pero en general se podían considerar como los auténticos motivos para sostener el recurso los que se expresaron al igual que la casación en la forma y que venían expresados en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento Civil -con independencia de derechos específicos, como era el de comercio que fue demandado con asiduidad -.

Para evitar duplicidades interesadas o mal entendidas con la preeminencia del citado art. 1013 por el que se equipararon el recurso de injusticia notoria con el de casación, se unificó y se dio igual aplicación a través de dicha ley general.

⁴⁸⁰ M. Ortíz de Zúñiga “ Jurisprudencia civil de España conforme a la doctrina consignada en los fallos del Tribunal Supremo “, *RGLJ* (1869) T. I pp. 568-569.

3. b. el recurso de casación

Quiero en primer lugar aclarar que he dividido este epígrafe en tres subapartados en razón a criterios estrictamente de funcionamiento de dicho recurso y como ello derivó en la organización cambiante de la estructura orgánica del alto Tribunal.

3.b.a. origen y desarrollo (1852-1860)

Trataremos en este apartado de recoger los fenómenos jurídicos ligados a la casación más inmediatos y que pueden ser considerados como sus precursores para la definitiva práctica de este recurso que contribuyó decisivamente a definir las funciones del Tribunal Supremo de manera inicial a partir de 1852 y de forma radical a partir de 1855. El detenido estudio de este instrumento es clave para entender el perfeccionamiento procesal desde el punto de vista de técnica jurídica, pero en lo que a esta tesis se refiere, su alcance es mayor pues existieron importantes intereses de control sobre los magistrados designados, pues su trabajo se traducía en la creación de jurisprudencia, elemento éste trascendental para el cumplimiento de los objetivos políticos del gobierno.

Como precedente histórico hay que destacar el Real decreto de 20 de junio de 1852 sobre delitos de defraudación en el contrabando. Dicho decreto establecía el recurso extraordinario contra las ejecutorias en estos temas. Se empleó por primera vez la palabra casación para designarlo. Este decreto advirtió el grave defecto de no resolver, si la interposición del recurso debía suspender la ejecución de la sentencia, exceptuando el caso en que las penas impuestas en la ejecutoria fueran las de muerte, argolla, degradación o alguna corporal que hubiere de cumplirse fuera de la península; a la vez que, cuando la sala primera del Tribunal Supremo declarara haber lugar al recurso, la sala segunda fallare en última instancia sobre la violación de la ley.

Quiero resaltar que este Real decreto confirió al Tribunal Supremo, en su capítulo IV, la capacidad de resolver en el fondo cualquier vicio de una sentencia emitida por las Audiencias. Desde el art. 96 al 113, ya analizados con anterioridad, se legisló sobre recursos de casación y se arbitraron los procedimientos y mecanismos necesarios para interponerlos.

Nos encontramos ante un avance con respecto al Real decreto de 1838 pero persiste el inconveniente de la independencia de las salas y de lograr definitivamente lo que se quería evitar: la dualidad jurisprudencial, en relación a qué sala la admite a trámite y qué sala emite la sentencia definitiva.

El atasco de casos en los juzgados alcanzaba tal magnitud, que urgía abreviar los procedimientos y, sobre todo, aclarar el panorama de los recursos derivados del Real decreto aprobado ese año. Además ante la urgente necesidad de una ley orgánica de tribunales y de un código completo de procedimientos, había que arbitrar medidas para tranquilizar y pacificar la convulsa situación de los juzgados. El decreto de 1852 introdujo trascendentales reformas en el procedimiento que ocasionaron extensas y

difíciles polémicas. El resultado de esta urgente necesidad fue la redacción de la Instrucción del procedimiento civil del Marqués de Gerona.

En el art. 71 de la Instrucción apareció el principio verdaderamente esencial: que se admitiera el recurso de nulidad contra todos los fallos que violara la ley de manera clara y terminante en dos supuestos: cuando hubiese mediado discordia para dictar sentencia en la instancia de apelación y segundo cuando la sentencia fuera revocatoria en todo ó en parte de la del inferior, y no hubiese sido dictada por unanimidad⁴⁸¹. Con ello puede decirse que desaparecieron todas las ventajas, todos los resultados saludables de la Instrucción. Si las Audiencias por el sólo hecho de confirmar el fallo del inferior o revocarlo por unanimidad, podían cerrar la puerta al recurso, el Tribunal Supremo deja de ser depositario de la interpretación jurídica; cesa por completo de ejercer su acción y a la uniformidad se sustituye el desorden y la confusión.

Otro aspecto importante de la Instrucción fue la de ordenar que se motivaran y publicaran en la Gaceta todos los fallos que el Tribunal Supremo diera en las competencias que decidiese; disposición ésta, de gran utilidad y la más importante sin duda para la fijación de la jurisprudencia y unificación del derecho, y para evitar el gran número de cuestiones que se promovían sobre jurisdicción.

La vida de la Instrucción fue corta, pues el 18 de agosto, con José Alonso como ministro de Justicia, se suspendió la observancia de la Real Instrucción sobre el procedimiento civil. El argumento se basó en las críticas que los juristas realizaron a dicha norma, declarando como muy perjudiciales las innovaciones acometidas e incluso algunas de ellas irrealizables. En aras a conseguir de nuevo la consonancia entre funciones y composición de los tribunales dispuso el art 2º de este nuevo decreto para que estos obren teniendo como doctrina las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha Instrucción.

La Real Cédula de 30 de enero de 1855 recogió el impulso oficial para la casación o recurso en interés de la ley en los negocios civiles e introduciendo el principio hoy admitido de que no sólo la ley sino también la doctrina puede dar lugar a la casación. También establecía que el ministerio fiscal pudiera entablar el recurso de casación en beneficio o interés exclusivo de la ley para fijar bien la jurisprudencia, quedando para las partes firme la sentencia recurrida.

Esta norma aceptó el principio de que el recurso era procedente cuando el fallo fuera contra ley o doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales, y estableció que la misma sala que declarara haber lugar al recurso fallara sobre el fondo mismo del negocio, sin que precediese nueva vista, fijando la competencia de cada una de las salas del Tribunal Supremo, atribuyendo los de infracción de ley a la sala primera y los de quebrantamiento de forma a la segunda.

⁴⁸¹ En el decreto de 1852 se había establecido previamente la limitación de que no se admitiesen recursos de los fallos de revista conformes con los de vista. Por esa nueva situación, cuyos efectos se hicieron notorios, el Tribunal Supremo tuvo que abstenerse de hacer una importante declaración de errores de derecho por aparecer cometidos en un fallo de revista conforme con el de la vista.

A poco de su vigencia la acumulación de recursos en la sala primera, hasta el punto de que por entonces se publicaron estadísticas abrumadoras, con el fin de evitar el retraso cada vez mayor de los negocios y el perjuicio consiguiente a los litigantes. Más tarde con la ley de 30 de abril de 1864, el Tribunal Supremo se dividió en su sala primera en dos secciones, que por repartimiento entendían ambas de los recursos por infracción, reforma que no tenía más explicación que las circunstancias del momento, pues como institución de carácter permanente fue un retroceso, porque volvía a introducir la dualidad en la jurisprudencia.

La Ley de Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855 fue el precedente más inmediato de la casación y los motivos que la fundamentaron se resumieron en uno: evitar el error de juicio. En este sentido, esta ley contempló en su art. 1012 la oportunidad del recurso si la sentencia era contra ley o contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales, y otro por error procesal, que podía fundarse en alguna de las nueve causas que se decidían en el art. 1013.

El procedimiento era igual para ambos tipos de recursos, pero se encargaba el conocimiento de los mismos a dos salas distintas del Tribunal Supremo (art. 1012) al cual se reservaba jurisdicción simplemente casatoria en los recursos por error procesal y decisoria también en los debidos a error de juicio.

En ambas formas de recurso se examinaba previamente su admisibilidad, sin audiencia de las partes (arts. 1025 y 1026), aunque el recurrido podrá “promover cuestión previa” sobre ella hasta el momento de pasar los autos al relator. Se admitió también el recurso de interés de la ley interpuesto por el ministerio fiscal.

Las novedades que introdujo la ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la casación fueron⁴⁸²: la unidad de jurisprudencia en favor del Tribunal Supremo, la casación era distinta a la nulidad, no se examinan pruebas, porque no es tercera instancia, la supresión de la palabra “clara y terminante” para la ley infringida, a la que asimiló la infracción de doctrina, se incluye como error “in procedendo” el dictar sentencia dos o más magistrados cuya recusación haya sido pedida en forma, o que hayan concurrido a dictar sentencia menos jueces de los exigidos por la ley, respecto al trámite de admisión, reservó el legislador del 55 al tribunal “a quo” el examen de los requisitos externos y a la sala respectiva del Tribunal Supremo los demás, la fianza sólo de conformidad con las dos sentencias⁴⁸³ y la dualidad entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Guerra y Marina⁴⁸⁴.

Las Cortes Constituyentes convocadas en agosto de 1854 como sabemos votaron una Constitución que no llegó a tener vigencia. Fue éste, un texto de importante reflexión y

⁴⁸² V. Fairén-Guillén “Comunicación sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855” *Actas* p. 439.

⁴⁸³ P. Gómez de la Serna *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*, Madrid, 1857 p. 186. Prieto Castro “Deberes ineludibles e inaplazables” *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1969, I p. 9.

⁴⁸⁴ DSC. (1855) de 10 y 11 de mayo en las intervenciones de Gómez de la Serna y Cirilo Álvarez, sobre historia y caracteres del recurso de casación en las discusiones sobre las Bases de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

que sirvió de base para la redacción de futuros proyectos y leyes, entre ellos uno de Bases para la ley orgánica de los Tribunales y que se inspiraron en el título X muy similar al de 1845 (curiosamente coincidencias fundamentales en momentos políticos muy distintos).

En este contexto se nombró una comisión no técnica y sí parlamentaria para la redacción del Proyecto de Bases compuesta por: Claudio Antón de Luzuriaga, Pedro Gómez de la Serna, Cirilo Alvarez, Antero de Echarri, Joaquín Aguirre y Nicolás María Rivero y que presentaron un proyecto⁴⁸⁵ fechado el 14 de febrero de 1856.

En su preámbulo se declaraba al Tribunal Supremo como única autoridad para declarar la casación, previa instrucción de expediente y concediendo audiencia a los interesados. Entendió la comisión que era preferible el criterio de flexibilidad adoptado por la declaración institucional rígida que no fue respetado en la práctica por ningún gobierno.

Recogió también la reducción a dos instancias procedentes en los negocios civiles, y a una en las causas por delitos a la que la ley señala penas correccionales, y estableciendo la casación en unas y otras, sin más excepciones que las que establecían las leyes. Entre las competencias señaladas en el texto⁴⁸⁶ se le otorgó al Tribunal Supremo el conocimiento en los casos que establecieran las leyes de los recursos de casación contra los fallos dictados por todos los tribunales.

El proyecto lo considero, desde el rigor técnico con que fue concebido, un claro precedente de la Ley orgánica de 1870, y obtuvo la aprobación de las Cortes pero no el refrendo real por cuestiones de coyuntura política y por ello no tuvo aplicación ni vigencia.

3.b.b. 1860 a 1863: experiencias y doctrinas

A partir del año 1860, y con la experiencia acumulada de cinco años desde su puesta en marcha, se empezó a observar la acumulación de recursos en materia de casación, lo que obligó a promulgar el Real decreto de 31 de mayo de 1860 ampliando en dos plazas de magistrados la composición de la sala primera del alto tribunal:

“la sala primera, es la más recargada de trabajo (la que entiende de la casación); pues entrando cada año un número de recursos mayor del que puede despachar, se va acumulando un remanente que impide el curso regular de la administración de justicia, y causa irreparables perjuicios a los particulares que esperan con impaciencia el último fallo, término cierto de sus afanes (...)”.

A este hecho hubo de añadir otro argumento no menos importante como fue la continua renovación de los magistrados que habían de fallar cada uno de esos

⁴⁸⁵ DSCC. (1856) a. 3º al n. 313.

⁴⁸⁶ “Dictamen de la comisión sobre las bases de la Ley Orgánica de Tribunales” *RGLJ*. T.8 (1856) pp. 76-85.

recursos, tan común en la organización de las salas y que atacaba el principio de unidad en la jurisprudencia, que era la base sobre la que descansaba la teoría de la institución”.

Estas afirmaciones las tenemos contrastadas y debidamente documentadas, pues el trasiego de designaciones y cambios de destino era constante, vulnerando el principio de inamovilidad y quebrando con ello la independencia judicial que seguía en quiebra.

La nueva experiencia reportó a la sala la cifra de nueve magistrados y que debían entender del fondo de los asuntos como se venía haciendo en otros países europeos y en razón de lograr la uniformidad de doctrina⁴⁸⁷, poniéndose de ejemplo el caso francés.

Las circunstancias planteadas en 1860 derivaron tres años más tarde en la creación de la sala de admisión para tratar de combatir el uso pernicioso que se venía produciendo de abusar en la presentación de los recursos de casación, y ello se puso de manifiesto en el Proyecto de ley de 4 de enero de 1863 que así lo contempló emprendiendo para ello una reforma orgánica en el seno del Tribunal Supremo.

Un borrador de trabajo planteó la limitación de decisiones recurribles, pero con la creación de la nuevas sala de admisión o “de previo examen” se creyó, al entender de la comisión redactora que se solucionaría el problema⁴⁸⁸. Esta sala conocería de las apelaciones por denegación del recurso de casación, de las cuestiones previas sobre la inadmisión de los recursos y de los recursos de queja por denegación de apelaciones.

Se planteó un escenario absolutamente insólito y novedoso hasta ese momento en el proceder ordinario del Tribunal Supremo, y que ocasionó interminables debates, comentarios y observaciones⁴⁸⁹ por parte de los sectores afectados: estamento judicial y poder político, materializados en cientos de artículos y ensayos que engordaron la ya copiosa literatura jurídica existente, de algunos de ellos trataré más adelante. Además la percepción de los particulares fue negativa al hallarse inmersos en recursos interminables y costosos, que quebraron el principio de eficacia y agilidad que debía presidir el funcionamiento de la administración de la justicia.

El recurso de casación -auténtico protagonista de la reforma orgánica del Tribunal Supremo- planteó numerosos puntos de vista conceptuales y de apreciación. En un momento decisivo, para evitar la paralización y casi la denegación de justicia, distintos observadores y eminentes juristas ofrecieron sus análisis que por ser muy interesantes quiero aquí recoger: Ortiz de Zúñiga ofrece interesantes aportaciones⁴⁹⁰ desde el año 1861 en el que el número de recursos de casación y los de apelación aumentaron en 99 en comparación con los que ingresaron el año anterior. En 1860 habían quedado

⁴⁸⁷ CL. T. LXXXIII (1860) pp. 509-511

⁴⁸⁸ Se cita el modelo francés “chambre des requêtes” a modo de sala de admisión. “Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación” *RGLJ*. T. 38 (1871) p. 76.

⁴⁸⁹ Analizados en la obra de Ortiz de Zúñiga, *RGLJ* T. 20 (1862)

⁴⁹⁰ M. Ortiz de Zúñiga “Reforma urgente sobre los Recursos de Casación” *RGLJ* T. 20 (1862) p. 166 y ss y *RGLJ*. T. 18 (1860) p. 646, del mismo autor. M. Ortiz de Zúñiga “Contestación al artículo de Cirilo Álvarez sobre la reforma urgente del Recurso de Casación” *RGLJ*. T. 20 (1862) pp. 428-429.

pendientes en la sala primera 287 recursos y 12 apelaciones, que junto a los 313 de aquellos y 33 de éstos que ingresaron en 1861, formaron un total de 645. La sala en un esfuerzo digno de todo elogio sentenció 453 recursos y 18 apelaciones, quedando por resolver 380 recursos y 20 apelaciones (según el ritmo de trabajo materia para tres años más de trabajo).

Según Ortiz de Zúñiga, algunos quieren comparar la sala primera con el Tribunal de Casación en Francia, pero por su objeto, composición y naturaleza no es el caso⁴⁹¹. El Tribunal Supremo para solventar causas importantes además tiene que reunirse en pleno de todas las salas tres o cuatro veces a la semana.

La pregunta que se derivó de ello fue ¿sería conveniente establecer en el Tribunal Supremo, a imitación del caso francés, una sala de previo examen que, sin audiencia de las partes, y sin un determinado conocimiento del fondo del asunto, resolviera brevemente los recursos que debieran desecharse y sometiendo a la vista de la sala de casación únicamente aquellas causas en que hubiere grave motivo para oír el designio de la jurisprudencia?

A esta sustancial y difícil cuestión había que añadir la complejidad de nuestro derecho civil y la multiplicidad de jurisdicciones y sistemas especiales existentes en este momento. Otro grave asunto que se plantearía si se admitiera la sala de previo examen era la retroactividad de esta medida. Se aplicaría ese estudio a los 400 recursos que estaban pendientes siguiendo la sustanciación que la ley había establecido, o conclusos para la vista y fallo.

Existía otro notable peligro también señalado por el autor de estas observaciones⁴⁹² en virtud de que no se rompiera la unidad de jurisprudencia: adoptar el sistema de dos salas era arriesgado y sumamente complicado. Que dos salas entendieran a la vez en los recursos de casación en el fondo (aún en el supuesto de designar más ministros a tal efecto) era poner un alto precio al mal que se trataba precisamente de evitar.

La creación de la sala de admisión sería un riesgo evidente, aún asegurando que en Francia con más de 60 años de tradición y experiencia con una sola sala tampoco se había conseguido la tan anhelada unidad de jurisprudencia.

En España desde el decreto de 4 de noviembre de 1838, en que se estableció por primera vez el recurso de nulidad a manera de casación hasta 1862 aproximadamente, que se eximió a la sala primera de su conocimiento, han estado entendiendo indistintamente en su fallo lo mismo la sala primera que la segunda, mezclándose sus magistrados para completar el número que la ley exigía.

⁴⁹¹ La sala civil del Tribunal de Casación en Francia publica ordinariamente de 150 a 160 sentencias cada año; aquí en España, la sala primera del Tribunal Supremo ha resuelto en 1860: 126 recursos de casación y 31 en apelaciones, sin contar las segundas sentencias en el fondo cuando tiene lugar el recurso. El Tribunal de Casación francés se compone de 16 magistrados y la sala primera del Tribunal Supremo español de 9, de los cuales 8 alternan en el cargo de ponentes. Por ello corresponde a cada ministro francés 9 ó 10 ponencias, y 18 ó 19 a cada una de la sala primera de España. En Francia sólo se conoce del recurso de casación concreto y preciso, en España de él y de todo el pleito.

⁴⁹² op. cit. p. 173.

La conclusión del autor (Ortíz de Zúñiga) sería el distribuir todos los recursos de casación en el fondo entre la misma sala primera y la de Indias, holgada en sus trabajos, para admitir con gran ventaja del servicio de la justicia estas nuevas atribuciones⁴⁹³.

Opinión diferente era la que propugnaba Cirilo Álvarez en contestación a Ortiz de Zúñiga acerca del mismo asunto. El ilustre jurisconsulto Álvarez expuso su tesis⁴⁹⁴ sobre el punto de partida de que el gobierno debiera solicitar a las Cortes y no al ministro de Gracia y Justicia de turno⁴⁹⁵ una autorización para hacer estar reformas en el seno de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Sobre esto Álvarez decía que había sido justo el Tribunal Supremo, el que hubiera solicitado al gobierno una urgente reforma (con lo que no cabe, en esta ocasión, atribuir politización e injerencia del ejecutivo al respecto de este asunto). Este tribunal fue consciente desde 1859, de la gravedad de la situación y encareció algún remedio de donde pudiera venir. Coincidencia con la Comisión de Códigos que creyó conveniente proponer una medida legislativa para salir del atolladero.

El debate era cual vía se escogía si modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil o crear una ley específica y urgente. Acudir al primer sistema suponía alterar las bases esenciales de lo procedimental y de sus manantiales decisorios (grave medida) y optar para la segunda vía suponía caer en la tentación de multiplicar el compendio legislativo que alteraba la realidad cotidiana y la perturbaba cuando no la confundía.

Cirilo Álvarez criticó el artículo de Zúñiga, pues éste postulaba la autorización al gobierno para hacer las reformas y alteraciones que desde 1855 considerara convenientes. Éste (Zúñiga) se defendió diciendo que estando abiertas las Cortes era buen momento para que el ejecutivo expusiera sus verdaderas intenciones. La polémica prosiguió en dos vertientes concernientes a la creación de una nueva sala y a la reorganización en sus funciones de la sala primera con respecto a las otras salas existentes. De esta segunda vía se mostró partidario como ya señalaba anteriormente para no radicalizar las reformas Zúñiga.

Se justificó la división de dos salas sin que se perturbara la unidad de jurisprudencia, pues de hecho se estaba actuando ya con la organización existente de esta manera⁴⁹⁶. Álvarez no era partidario de aumentar una sala y en pos de la intocable unidad de jurisprudencia señalaba como remedios:

⁴⁹³ Este posicionamiento se justificaba en aras a no tocar la actual organización del Tribunal Supremo, mientras otras reformas más radicales no lo exigieran, sin aumentar el número de ministros que hoy lo componen, y sin más variación que la de que uno de los nueve que formaban la sala primera pasase a completar los ocho que debiera haber en la de Indias, para que siempre quedase uno como excedente en cada una de ellas, del mismo modo que se estableció al crearse dos ministros más en la primera para no necesitar auxilio de las otras, y hacer más llevadero el incremento de trabajo.

⁴⁹⁴ C. Álvarez “Sobre la reforma del recurso de casación” *RGLJ*. T. 20 (1862) pp. 288 y ss.

⁴⁹⁵ “esta autorización general, indeterminada, sin límites, concedida al actual ministro de Gracia y Justicia y a los que le sucedieran, en asunto tan grave y trascendente, si para algo podría servir, sería para llevar a nuestro método de enjuiciamiento la perturbación y la incoherencia”

⁴⁹⁶ Desde el decreto de 4 de noviembre de 1838 han estado dos salas indistintamente conociendo de los recursos de nulidad que por cierto eran análogos a los de casación.

“si para ello es menester que se limiten las vacaciones del Tribunal Supremo, si es menester que se deroguen esas prácticas abusivas y ridículas que aumentan sin necesidad y sin motivos los días feriados de nuestros tribunales; si se necesita, que se aumenten las horas destinadas a las vistas de los pleitos, y que las reuniones del Tribunal pleno se celebren en horas diferentes...”⁴⁹⁷

Todas estas medidas no fueron tomadas en serio, pues carecían de verdadero rigor y eran impropias de un ilustre jurista como Cirilo Álvarez que conocía como discurría la administración de la justicia en sus dificultades burocráticas y de método.

El Proyecto de arreglo de tribunales según García Gallardo surgió en este contexto. Sobre el trabajo que venía realizando la Comisión de Códigos se detuvo este autor⁴⁹⁸ en la incorporación de la sección de casación en el Tribunal Supremo como un hecho positivo y satisfactorio pues a su entender convenía que hubiera un poder que fijara la inteligencia de las disposiciones de sentido dudoso, y por consiguiente de difícil y exacta aplicación, pues esta labor no podía ser atendida ni desarrollada por ningún juez en su gestión cotidiana. En el deber de crear jurisprudencia se hacía necesaria la creación de esa sección y evitar así la proliferación de decisiones a veces ciertamente contradictorias.

La creación de los jueces ponentes electivos era un avance para mejorar el sistema y el método, pero era a la vez -según el autor- un mal para el mérito, si es por éste por el que había de recaer la elección. La tarea de este juez ponente sería imposible de llevar a la práctica, mientras no se arbitraran medidas auxiliares para retribuir ese trabajo convenientemente.

García Gallardo más adelante, esgrimió poderosas razones que le impedían aceptar dos instancias para el análisis y decisión en un mismo asunto. Y en este sentido puso en evidencia las curiosas paradojas que se podían producir como era que la sección de casación podía invalidar una ejecutoria de un tribunal competente, y en este caso, ¿esta ejecutoria quedaría subsistente en cuanto a los intereses que defiende o los derechos que declara? Contestaba que no, porque sería erigir un altar a la injusticia.

Y seguía planteando más adelante que ¿por qué se llama ejecutoria a una sentencia que en realidad de verdad no lo es, puesto que sobre ella se admite recurso, y recurso que puede revocarla? Y de que estas sentencias no son verdaderas ejecutorias en la aceptación absoluta de la palabra, puesto que según nuestro parecer, lo revocable, lo que no es siempre y por siempre subsistente, no es ejecutorio, tenemos un prueba completísima en el artículo 316 que dispone que la sección de justicia conocerá en última instancia de los pleitos y causas en que hubiese recaído la declaración de casación por quebrantamiento de las leyes en la decisión principal del negocio, en cuyo

⁴⁹⁷ A modo de ejemplo: en Francia por decreto de 17 de septiembre de 1791 se conceden dos meses de vacaciones al Tribunal de Casación. Por decreto de 24 de agosto de 1815 se consolidó el período vacacional de dos meses para los magistrados de casación.

⁴⁹⁸ M. García Gallardo “ Observaciones sobre el Proyecto de Arreglo de Tribunales” *RGLJ*. T. 20 (1862) pp. 7-33

caso se encuentran las impropiaamente llamadas, según nuestro parecer, ejecutorias de los tribunales de distrito y reales audiencias.

Fueron también muy interesantes las consideraciones que sobre la reforma de la casación realizó José María Manresa y Navarro. A las ya encendidas opiniones vertidas al respecto (unas más incisivas en los contenidos y otras más detallistas en las formalidades) por importantes juristas se añadían las de Manresa que en su condición de secretario de gobierno del Tribunal Supremo, podía manifestar poderosas razones técnicas y de conocimiento directo sobre un tema realmente vital para la configuración orgánica del alto tribunal de un lado, y por la constante preocupación por resolver la transparencia, solidez y claridad de los postulados del derecho a través de su uso y práctica cotidiana.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1 enero 1856) hasta 1860 se evidenció un crecimiento desmesurado en el uso del recurso de casación que provocó que el 13 de abril de ese año el Presidente del Tribunal Supremo solicitara del gobierno una urgente reforma.

El 31 de mayo de 1860 el ministro del ramo formuló algunas propuestas para paliar el problema: el aumento de dos plazas de magistrado a la sala primera, para que las ponencias fuesen menos frecuentes y relevar a esta sala primera de los negocios que no le estuviesen asignados por ley y distribuir esos negocios entre las demás salas.

No suficientes con estas medidas, el Tribunal apeló el 15 de enero de 1862 ante el gobierno para poner otros urgentes remedios a la situación planteada; para ello se expusieron los datos de los últimos años judiciales como punto de partida y diagnóstico de la situación:

SALA 1ª
CASACIÓN EN EL FONDO

		TERMINADOS			PENDIENTES	EN FIN DE	AÑO
		Ingresados cada año	Por sentencia	Por deserción, separación o abandono	Conclusos para vista	De sustanciación	Total pendientes
Recursos	Año de 1856	5	3	“	“	2	2
	Año de 1857	67	16	“	8	45	53
	Año de 1858	131	47	11	28	98	120
	Año de 1859	214	81	27	62	170	238
	Año de 1860	223	115	53	140	147	287
	Año de 1861	313	153	67	173	207	380
	Año de 1862	322	167	67	257	211	438
Apelaciones	Año de 1856	1	“	“	“	1	1
	Año de 1857	9	4	1	“	5	5
	Año de 1858	11	5	“	1	10	11
	Año de 1859	18	15	1	3	10	13
	Año de 1860	24	20	5	“	12	12
	Año de 1861	33	18	7	5	15	20
	Año de 1862	28	21	10	3	14	17

SALA 2ª CASACIÓN EN LA FORMA

		TERMINADOS			PENDIENTES	EN FIN DE	AÑO
		Ingresados cada año	Por sentencia	Por deserción, separación o abandono	Conclusos para vista	De sustanciación	Total pendientes
Recursos	Año de 1856	1	1	“	“	“	2
	Año de 1857	6	3	“	“	3	53
	Año de 1858	16	9	“	“	10	120
	Año de 1859	22	18	3	“	11	238
	Año de 1860	29	18	7	“	15	287
	Año de 1861	31	16	10	“	20	380
	Año de 1862	18	20	6	“	12	438

Estos datos reflejaron el incremento progresivo que se estaba produciendo y la desproporción entre la sala primera y la segunda. Se llegó al convencimiento por parte del gobierno, del Tribunal Supremo y de la Comisión de Códigos de reformar la casación y llevar esta propuesta a las Cortes y de paso reformar los antiguos recursos de nulidad, los de injusticia notoria y los asuntos referidos a ultramar. Si a esto añadimos que con la publicación de la ley de Enjuiciamiento Civil no se contemplaba el efecto retroactivo, los antiguos recursos se seguían sustanciando mediante el procedimiento antiguo. La casación pasó a englobar posteriormente esos recursos de nulidad, los de injusticia notoria de mayor cuantía y los de segunda suplicación⁴⁹⁹.

Como medidas para solventar el problema se ofrecieron tres: dificultar la interposición del recurso, dividir entre dos salas y por materias el despacho de los recursos en el fondo y establecer la sala de calificación.

En la primera fórmula se podrían arbitrar el aumento de la cantidad del depósito o impedir el recurso en pleitos de menor cuantía. En la segunda fórmula, el autor (Manresa) sostenía que por más de veinte años las salas primera y segunda del Tribunal Supremo habían conocido de los recursos de nulidad en el fondo indistintamente. El ejemplo francés demostró la validez de las dos salas como un sistema de división correcto; el autor de todos modos no se entusiasmó con la idea y concluyó que la existencia de dos salas supremas con las mismas atribuciones “eran notoriamente incompatibles”. El tercer sistema era, sin duda alguna, el más conveniente y aceptable de los tres que estamos analizando. La Comisión de Codificación y la sala de gobierno del Tribunal Supremo estaban de común acuerdo para su puesta en marcha.

Quedaba demostrado, por la realidad de los hechos, que la sala primera del Tribunal Supremo, en un gran esfuerzo, apenas pudo despachar la mitad de los recursos que cada año se interponían, y que por lo tanto era preciso adoptar un medio expeditivo. La creación de una nueva sala de previo examen, no sólo era conforme a la índole y naturaleza de los recursos de casación sino que tenía también, a su favor la experiencia de tantos años en Francia. Parecía lógico hacer el ensayo en España.

Algunos pensaban que este procedimiento no daría resultado pues no se desecharían tantos recursos como eran necesarios para aliviar el trabajo a la sala primera. En 1862 esta sala había fallado 164 recursos sobre el fondo, en 24 de ellos había dado lugar a la casación con lo que representaba un 15%.

J. M Manresa prejuzgaba ante esta situación que no sería aventurado calcular que la sala de previo examen hubiera desechado dos terceras partes de los recursos desestimados por la de casación, o fuera algo más de la mitad de todos los que se interpusieran; y en el supuesto que ingresaran cada año 389 recursos y apelaciones como en el año último, pasarían a la sala de casación unos 185 recursos, número muy inferior al total de negocios que había fallado la sala primera, en el año pasado. Quedaba pues demostrado que la sala de casación podría despachar cómodamente y sin el menor retraso todos los recursos a que daría el pase la de previo examen.

⁴⁹⁹ Sólo un recurso de esta clase se interpuso entre los años 1860, 1861, 1862.

Debemos añadir también que las Audiencias fueron perfeccionando sus sentencias, con lo que se cerraba una vía de fácil acceso que incrementaba el trabajo habitual y ordinario del Tribunal Supremo.

En el artículo 1º del Proyecto de Ley, presentado por el gobierno a las Cortes se decía que habría en el Tribunal Supremo de Justicia una sala que se llamaría de previo examen (...). Hasta ese momento, y hasta la organización definitiva de los tribunales, se compondría de un presidente, ocho magistrados, iguales en dotación y categoría a los de su clase en el mismo Tribunal (...) y habría también un secretario, que desempeñaría las funciones confiadas en ese momento a los relatores y escribanos de cámara.

No sólo se produce una innovación de miembros sino también de tareas. El autor a partir de ahí demuestra su superflua necesidad si se reorganizan bien las salas existentes con un desarrollo de trabajo proporcional⁵⁰⁰.

La organización de la sala de calificación según el artículo 1º del proyecto de ley, preveía que hasta la organización definitiva de los tribunales, esta sala se compondría de un presidente y ocho magistrados, iguales en dotación y categoría a los de su clase en el mismo tribunal. José María Manresa opinó de la innecesaria reforma y lo argumentó aportando datos.

En todo el año 1862 entraron en la sala segunda los negocios siguientes: dieciocho recursos de casación, veintiuna apelaciones sobre ellos, cinco recursos de nulidad, cinco apelaciones sobre ellos, dos recursos de casación en causas de Hacienda, ochenta competencias, una causa criminal, tres recursos de fuerza, tres expedientes para el cumplimiento de sentencias extranjeras, diez incidentes y recursos de queja. En total 148 negocios judiciales. De ellos, y de los pendientes del año anterior se habían terminado ciento veinte por sentencia; diecisiete por deserción o desestimiento y veintiuno por auto interlocutorio.

⁵⁰⁰ En el año 1862 han ingresado en la sala segunda los negocios siguientes: 18 recursos de casación, y 21 apelaciones; 5 recursos de nulidad, y 5 apelaciones; 2 recursos de casación en causas de Hacienda; 80 competencias; 1 causa criminal; 3 recursos de fuerza; 3 expedientes para el cumplimiento de sentencias extranjeras; y 10 incidentes y recursos de queja; *total 148 negocios*. De ellos, y de los pendientes del año anterior se han terminado 120 por sentencia, 17 por deserción o desistimiento, y 21 por auto interlocutorio.

En el mismo período han ingresado en Sala de Indias, 10 recursos de casación, y 6 apelaciones: 1 de injusticia notoria en comercio; 3 competencias; 4 causas y residencias; y 1 recurso de queja; *total 25 negocios judiciales*; y además 64 expedientes consultivos y gubernativos, y 9 de correcciones disciplinarias. Ha dictado 9 sentencias en todo el año, y 10 autos resolutorios, y despachado además 65 expedientes de los de gobierno.

Reduciendo a una suma los negocios de ambas salas resulta que han tenido de ingreso en el año último, 173 contenciosos, la mayor parte competencias y recursos de poca importancia; y han terminado 129 por sentencia, y 48 por deserción o desestimiento y por autos interlocutorios; y además los 65 expedientes consultivos y de gobierno despachados por la Sala de Indias. Es de advertir que en fin de año no quedó negocio alguno concluso para la vista en ninguna de dichas dos salas, de suerte que si no han despachado más, es porque no ha habido más asuntos que despachar. En Sala segunda quedaron pendientes 53 y en la de Indias 46, y además 74 expedientes consultivos o de Gobierno; pero todos en sustanciación, y algunos también sin curso por no haberse presentado o no activarlas las partes. La estadística de los años anteriores viene a dar idéntico resultado. *RGLJ*. T. 20 (1862) pp. 7-33 y 288 y ss

En la Sala de Indias: diez recursos de casación, seis apelaciones sobre éstos, un recurso de injusticia notoria en comercio, tres competencias, cuatro causas y residencias y un recurso de queja. En total 25 negocios judiciales, y además: sesenta y cuatro expedientes consultivos y gubernativos y nueve de correcciones disciplinarias. Ha dictado nueve sentencias en todo el año, y diez autos resolutorios, y despachados además sesenta y cinco expedientes de gobierno.

Tomando en consideración estos datos que se aportan sobre los negocios de ambas salas, resultaba que ingresaron en el último año, 173 asuntos contenciosos, la mayor parte competencias y recursos de poca importancia; y terminaron 129 por sentencia, y 48 por deserción o desistimiento y por autos interlocutorios; y además los 65 expedientes consultivos y de gobierno despachados por la Sala de Indias. No quedó negocio alguno concluso para la vista en ninguna de dichas salas.

En la sala segunda quedaron pendientes 53, y en la de Indias 46, y además 74 expedientes consultivos o de gobierno, pero todos en sustanciación, y algunos también sin curso, por no haberse presentado o no agitarlos las partes⁵⁰¹. Los datos determinaron un trabajo equilibrado y sin demasiados retrasos en dos salas del Tribunal Supremo.

Manresa sostuvo que aunque todos los negocios que entraran en la sala fueran de la naturaleza de los recursos de casación podrían ser atendidos perfectamente. Y si este argumento por sí solo no fuera suficiente, resultará que cuando se forme esta sala de previo examen habrá menos casos que pasen el filtro de pasar a la sala primera y parece evidente y razonable que una sola sala compuesta por siete magistrados puede despachar, sin retraso en el servicio, todo lo que hoy es de la competencia de las salas segunda y de Indias.

Todo radica en la reorganización del trabajo de las salas ya existentes; queda demostrado que es innecesario una nueva sala y por lo tanto desde su condición de secretario de gobierno del alto tribunal se atreve a hacer una propuesta.

El Tribunal Supremo debe organizarse en tres salas: sala primera o de calificación, compuesta de un presidente y ocho magistrados, con las atribuciones que se determinen en la misma ley sobre la reforma; sala segunda o de casación civil, compuesta de un presidente y ocho magistrados, la cual conocerá de todos los recursos de casación admitidos por la de calificación, y de las súplicas contra los fallos que dicte la tercera en primera instancia y sala tercera y de Indias, compuesta de un presidente y seis magistrados, la cual conocerá de todos los demás asuntos de España y de Ultramar.

En el proyecto de ley presentado por el gobierno a las Cortes, en los artículos 2 y 4, se expusieron las competencias de esta sala de calificación e introdujeron una novedad importantísima como era que el Tribunal Supremo conociera de los recursos de casación que se interpusieran en los negocios civiles contra las ejecutorias dictadas por todos los

⁵⁰¹ En 1862 existían sin curso, por no haberse personado las partes, en sala segunda, 5 recursos de casación, 6 apelaciones sobre ellos, y 7 recursos de nulidad, que suman 18 negocios; y en la sala de Indias, 3 recursos de casación, 14 apelaciones sobre ellos, y 6 recursos de queja e incidentes; total 23. En la sala primera había en igual caso 25 recursos de casación y 3 apelaciones.

tribunales, siendo ya un primer intento de conseguir la unidad de fueros (referidas a las jurisdicciones militar, eclesiástica y alguna más).

Manresa se adentró en consideraciones jurídicas y técnicas sobre competencias de la nueva sala; de las atribuciones de la sala civil de casación; del efecto retroactivo de la ley (cuestión ésta de enorme trascendencia que se debía determinar); de la intervención del ministerio fiscal; de la interposición del recurso; del procedimiento en la sala de calificación; de cómo se fallaba; del sistema de suplencias; del efecto de los fallos de la sala de previo examen⁵⁰².

A modo de conclusión, Manresa decía que cualquier reforma de la administración de justicia que se hiciera habría de tener las siguientes bases: unificación de los recursos en un sólo tribunal, competencia única y exclusiva del Tribunal Supremo para conocer de los recursos de casación, la razón que fundamenta la existencia de la sala de calificación es la capacidad de ésta para desechar los recursos que carezcan de causa legal para su admisión.

Sostuvo que la nueva organización del Tribunal Supremo con tres salas y subalternos, que en esos momentos tenía, era suficiente para los asuntos que eran de su competencia, sin otro aumento que el de dos ministros del modo que ya anteriormente se indicó. Por si fuera cuestionable, el presidente del Tribunal Supremo podría asistir a la sala que entendiera como más conveniente. Se acompañarían estas medidas con el efecto retroactivo de la ley, solo en cuanto a los recursos pendientes de sustanciación, los cuales se pasarían a la sala de calificación para que dictara en ellos su fallo.

En este contexto considero de sumo interés reflexionar sobre el resumen de la actividad judicial desarrollada por el ministro Calderón Collantes en los años 1861-1862⁵⁰³, puesto que sitúa la problemática y su desarrollo dentro de los avances que desde el recurso de casación se dio a la administración de justicia. El ministro intentó ofrecer una investigación judicial sobre la base de los datos, para tratar de analizar las evoluciones de las causas presentadas y las sentencias emitidas en relación al Tribunal Supremo.

En el marasmo de Proyectos de Bases para la organización de tribunales y de la reforma de la casación civil, se desprendía que se habían arbitrado soluciones acordes a veces y otras no con el estado real de prontitud y eficacia con que la administración de justicia debía cumplir sus principios constitucionales. En este sentido se acudió al estado de la administración judicial ofrecido al comienzo del año judicial, referidos al año 1861-1862.

Así tenemos que en 1862: ingresaron en el Tribunal Supremo durante el año 389 recursos de casación (los recursos de esta naturaleza existentes del año 1861 eran 427) y el tribunal despachó en 1862, 282 recursos, de los que se dictaron 36 decisiones en apelación sobre admisión de recursos, de los que cinco fueron favorables y treinta y

⁵⁰² Todo ello queda expuesto con profundidad en el artículo citado pp. 326-353.

⁵⁰³ F. Calderón Collantes “ Estadística de la administración de justicia criminal por los tribunales ordinarios durante el año 1861” *RGLJ*. T. 28 (1866) pp. 225 y ss.

uno fueron denegados procedentes de las Audiencias; se declararon desiertos 61 y terminaron con sentencia 185: por infracción de ley: 164 y por infracción de forma: 21.

Ya se puede con estos primeros datos hacer una valoración, en cuanto a que primero no se despachaban más que un 35% de asuntos entre los de ese año y los acumulados del ejercicio anterior y segundo que la mayoría de los recursos de casación que se presentaban eran en relación al fondo y no a la forma o procedimiento. De los relativos al fondo de la ley se declaró haber lugar al recurso en 24 casos (4 conforme con la 1ª instancia y 20 distinta de 1ª y 2ª) y no haber lugar en 140.

Los recursos relativos al fondo que se promovieron: en juicio civil ordinario: 139, en testamentaria: 1, en concurso de acreedores: dos, en retracto: 1, en deshaucio: 3 y en tercerías: 8. En total: 164. Los recursos relativos a la forma que se promovieron: en juicio civil ordinario: 11, en deshaucio: 1, en interdicto: 3, en juicio ejecutivo: 5, en justificación de pobreza: 1. En total 21. Del total que terminaron con sentencia, se declaró haber lugar al recurso de casación en 27 causas y no haber lugar en 158.

El grado de eficacia en la resolución de causas del año 1861 fue del 14'59% (se ralentizó el volumen de trabajo si tenemos en cuenta que en el año 1861 fue un año de eficacia del 22'7%⁵⁰⁴). Si este aumento en el retraso de resolución era un hecho negativo había que señalar a la vez el interesante esfuerzo con que se fue fijando “la recta inteligencia de las leyes y uniformando la jurisprudencia” en las decisiones solemnes del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo además decidió 4 recursos de la Habana, 2 de Manila y 1 de Puerto Rico.

En 85 recursos (74 de fondo y 11 de forma) fueron conformes en todas sus partes las sentencias de primera y segunda instancia contra las cuales se interpusieron, y no conformes en 99 (98 en el fondo y 1 en la forma) declarándose en uno de éstos (Audiencia de Barcelona) no haber lugar a él por no haberse utilizado previamente el ordinario de súplica. El intervalo de tiempo en que unos recursos y otros llevaba era muy diverso:

Recursos de casación	Menos de 6 meses	De 6 meses a 1 año	De 1 año a 18 meses	De 18 meses a 2 años	De 2 a 3 años	De 3 a 5 años
Relativo al fondo de la ley	—	2	25	109	25	3
Relativo a la forma	2	17	2	—	—	—

⁵⁰⁴ El grado de eficacia en número de causas finalizadas por cada 100 casos presentados: se evalúa en porcentaje.

Los recursos despachados en 1862 se aproximan al 35'42%, o sea un poco más de la tercera parte del total de ingresados en el año y pendientes del anterior. Estos datos le sirven al ministro Calderón Collantes para analizar con esta secuencia, si se podrán llevar a cabo el despacho de todos los asuntos. Las Audiencias cuyos fallos dieron lugar a mayor número de casaciones fueron Madrid con 6 y Barcelona con 5.

De los datos que se desprenden, el ministro Collantes concluyó:

“el descenso antes notado y cuyo valor encarece esta misma consideración, del número de casaciones dictadas por el Tribunal Supremo, en relación con la suma de los recursos decididos”

En relación con esta contabilidad judicial, y con una perspectiva más amplia damos cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo en el período 1856 - 1866⁵⁰⁵.

3.b.c. 1863 a 1881: la consolidación del recurso

Con la redacción del Proyecto de Bases de 1863, y que tuvo como precedente la Real orden de 6 de noviembre de 1862, se concedió a la comisión y después al gobierno la responsabilidad de redactar conforme a esas bases previas, los textos correspondientes. En lo que se refirió a la casación, destaco la introducción de ésta en las causas criminales y llenar de ese modo un vacío que se observaba en el funcionamiento del Tribunal Supremo. A éste correspondió conocer de los recursos de casación contra las sentencias ejecutorias en pleitos y causas de todos los tribunales del fuero común. La base 27 recogió que el recurso de casación no prosperaría en aquellas sentencias en las que se impusiera la pena capital.

En virtud a las anotaciones derivadas de los trabajos preparatorios contenidos en las bases se presentaron hasta tres proyectos en 1863 (marzo, abril y mayo) que afectaron directamente a la casación en sus reformas de los recursos civiles y criminales y que se tradujo en una reorganización interna y orgánica del Tribunal Supremo.

De este modo quedaron las competencias: a las salas de admisión les competía: decidir sobre la de los recursos de casación, y conocer de la queja contra las providencias denegatorias de testimonio para introducirlos; la sala primera se ocuparía de los recursos de casación en materia civil, por infracción de ley, de los recursos de injusticia notoria en materia mercantil y de los recursos de nulidad en causas por delitos de imprenta; la sala segunda se ocuparía de los recursos fundados por quebrantamiento de forma en los órdenes civil y penal, de la decisión de competencias, recursos de fuerza, del cumplimiento de sentencias extranjeras, del conocimiento de los pleitos pendientes al suprimirse los antiguos Consejos, de los recursos de injusticia notoria por quebrantamiento de forma en pleitos mercantiles, de la decisión sobre el fondo en las causas por delitos de imprenta cuyas sentencias hubiera anulado la sala primera; la sala tercera se ocuparía de conocer en única instancia de las causas contra

⁵⁰⁵ Datos obtenidos de “ Sentencias del Tribunal Supremo” en *La Justicia, Revista Peninsular y Ultramarina*. T. 1 (1866) p. 574

regentes, presidentes de sala, magistrados y fiscales de las Audiencias, subsecretarios, directores generales y gobernadores, conocer en única instancia contra los subalternos del Tribunal y del desarrollo de los juicios de residencia; también se contemplaba una sala compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala para resolver asuntos contra ministros, cardenales, obispos, ministros de la Rota, magistrados del Tribunal Supremo, del de Órdenes y fiscal de éste y Presidente del Congreso.

La reforma contemplada en la Ley de 30 de abril de 1864, inspirada en el Proyecto del año anterior, pretendió dar mayor eficacia a las bases redactadas –como se recogió en el dictamen de la comisión del Senado⁵⁰⁶ y en perfecta sintonía con el gobierno presidido por Mayáns, estuvo motivada por la acumulación de causas que se produjo en la sala primera concernientes al recurso de casación en el fondo. Así se recogió que, en el año anterior, el tribunal dejó pendientes 285 negocios para vista y fallo, 248 en tramitación y 27 apelaciones por haberse denegado la admisión del recurso. En total 560 asuntos pendientes. En ese mismo año la sala primera falló 179 recursos, cuando ingresaron en la misma 333 recursos (lo que supuso que 154 no fueron examinados y con la preocupación de un ritmo que hacía previsible un colapso en tiempo breve)⁵⁰⁷.

Se aplicó una reforma que aun no remediando la situación trató de paliarla y en ese sentido las dos secciones de la sala primera conocieron de los recursos de casación en el fondo y de los que hasta ese momento tenían competencia en materia de comercio, hacienda pública y de imprenta y estuvo compuesta por el presidente y ocho magistrados. Se agilizó el trámite y fallo de los recursos.

Apenas transcurrió un mes de la aprobación de la ley, cuando se elaboró un proyecto por una comisión técnica⁵⁰⁸ que modificaba algunos contenidos de la ley, pues la aquella entendió, que en aras a la agilización de los trámites, se vulneraran principios de objetividad y de responsabilidad en los trabajos de las salas.

Se reubicaron algunas competencias en materia de casación: en su sala tercera, tendría las atribuciones siguientes: conocer de los recursos de casación que le pase la sala primera, cuando su objeto sea anular las sentencias por ser contrarias a la ley o doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales, conocer de los recursos de injusticia notoria en los pleitos mercantiles por ser el fallo contra la ley y conocer de los recursos de nulidad que con arreglo a la ley se interpongan contra las sentencias que se dicten en causas por delitos especiales de imprenta; en su sala cuarta, tendría las atribuciones siguientes: conocer de los recursos de casación que le pase la sala segunda, cuando su objeto sea anular la sentencia por infracción de ley, conocer en instancia única de las causas por cualquiera clase de delitos: contra regentes, presidentes de sala, magistrados y fiscales de las Audiencias, contra los subsecretarios de los ministerios, los directores generales de cualquier ramo de la administración pública, y los gobernadores de las provincias por cualesquiera delitos que cometan o hubieran cometido durante el

⁵⁰⁶ Comisión formada por Lorenzo Arrazola, José Portilla, José de Gálvez Cañero, Juan de Sevilla, José María Velluti y Manuel Ortíz de Zúñiga como secretario.

⁵⁰⁷ ACD (1864) serie general, preámbulo, l. 118, n. 3

⁵⁰⁸ Comisión compuesta por Juan Martín Carramolino, José María Huet, Manuel García Gallardo, Vicente Vázquez Queipo, Bernardo de la Torre Rojas, Joaquín de Palma y Vinuesa y Pedro Gómez de la Serna.

desempeño de sus cargos respectivos y conocer en instancia única de las causas contra los subalternos del tribunal por delitos cometidos en el desempeño de sus cargos; y en su sala quinta, tendría las atribuciones siguientes: conocer de los recursos de casación que se interpongan en pleitos y causas, cuando su objeto sea anular las sentencias por falta en las formas, decidir las competencias cuya resolución corresponde al Tribunal Supremo con arreglo a la ley, conocer de los recursos de fuerza de la competencia del Tribunal, declarar si debe darse, o no, cumplimiento a las ejecutorias dictadas por tribunales extranjeros, conocer de los pleitos que quedaron pendientes al suprimirse los antiguos consejos, conocer de los recursos de injusticia notoria en pleitos mercantiles por violación manifiesta en el proceso de las formas sustanciales del juicio en la última instancia, sentenciar en el fondo las causas por delitos especiales de imprenta, cuando se haya declarado la nulidad de las sentencias dictadas en ellas y les sean remitidas por la Sala primera del Tribunal y conocer de los juicios de residencia.

Para formar sala en el Tribunal Supremo en las dos salas de admisión eran necesarios cinco magistrados y en la tercera siete magistrados. El planteamiento de este proyecto intentaba corregir aspectos de la ley de abril favorables a los postulados del gobierno en cuanto a la uniformidad jurisdiccional y de este modo introducir garantías procedimentales a través de una mejor distribución de competencias en las salas existentes así como de sus componentes.

El 20 de marzo de 1865, se produjo una fuerte discusión parlamentaria entre Calderón Collantes y el ministro Arrazola sobre la posibilidad de inconstitucionalidad que presentaban algunos de los contenidos aprobados⁵⁰⁹. Esta cuestión la subrayo por el cariz que tomaron poco después los acontecimientos ya que el 21 de junio de 1865 se produjo la dimisión de Ramón M. Narváez como presidente del Consejo de Ministros y la sucesión en favor de O'Donnell y en ese cambio de gabinete, la cartera de Gracia y Justicia la ocupó Fernando Calderón Collantes en sustitución precisamente de Lorenzo Arrazola, enfrentados los dos en numerosas ocasiones sobre aspectos de desarrollo y contenido de la legislación judicial y por las posiciones más progresistas del primero continuamente reflejadas en debates parlamentarios frente al moderantismo de Arrazola.

El señor Collantes, en su condición de parlamentario, ya había expresado su temor en el Senado⁵¹⁰ y su discrepancia en torno a la centralización de atribuciones en torno al Tribunal Supremo y cómo se debía organizar el ministerio fiscal.

Sobre el modo de organizar el Tribunal Supremo, en relación al recurso de casación opinaba que sobre los tres modelos posibles; el primero: el Tribunal lo devuelve a otro “a quo” tras anular la sentencia, el segundo: el Tribunal Supremo tiene dos salas: una anula y otra emite la sentencia y el tercero: la sala del Tribunal Supremo que anula dicta la nueva sentencia, era este último el más razonable porque conseguía la unidad de jurisprudencia de la instancia jurisdiccional que la debe lograr y que es el Tribunal Supremo.

⁵⁰⁹ DSC (1865) de 20 de marzo de 1865 y en FN (1865)

⁵¹⁰ “Discusión en el Senado en marzo de 1865” *RGLJ*. T. 32 (1865) sesiones 20, 21, 22, 23 marzo, p. 388

En sesiones celebradas el 31 de marzo, 8 y 10 de abril de 1865, Calderón Collantes abogó con vehemencia por tribunales colegiados de abajo arriba pero entendía que existía un problema mayúsculo: el presupuestario.

Dos años más tarde se presentó el Proyecto de ley de 4 de abril de 1867 sobre casación. Describo aquí este proyecto porque supuso una nueva reforma de la planta del Tribunal Supremo, en cuanto al tratamiento nuevo que se daba a la casación y que incorporaba novedades. En España tal como se detallaba en el extenso preámbulo, “se ensaya por primera vez”⁵¹¹ y con una notoria innovación con respecto a otros países: la sala de admisión o de previo examen. Se quería acabar con la práctica de las tres instancias (haciendo ver como uno más el recurso de casación) y así ocasionando el inevitable retraso que ello ocasiona.

Este Proyecto una vez más vulneraba la independencia de la Comisión de Códigos, y puenteaba de manera flagrante sus legítimas obligaciones y trabajos. El ministro Arrazola adujo “razones de urgencia, peculiaridades de la legislatura en que nos encontramos y la conveniencia de dicha reforma (...)”. Y seguía diciendo:

“algún gravamen económico ocasionará el proyecto, una vez aprobado, por la reorganización y aumento de ministros del Tribunal Supremo de Justicia, pero que se compensará con ventajas con la supresión de algunas Salas en las Audiencias, consecuencia necesaria de la supresión asimismo de la tercera instancia en lo criminal”

Entre las atribuciones que se contemplaron en su sala segunda y que presentaron alguna novedad estuvieron: conocer de los recursos de casación que admita la sala primera, conocer los recursos de injusticia notoria en los pleitos mercantiles, bien sea por violación manifiesta de las formas sustanciales del juicio en la última instancia, o por ser el fallo dado en esta compra la ley expresa, declarar si debe o no darse cumplimiento a las ejecutorias dictadas por tribunales extranjeros y conocer de los pleitos que quedaron pendientes al extinguirse los antiguos consejos. Y en la sala cuarta, donde también se incorporaron novedades: conocer de los recursos de casación que admita la sala tercera, conocer en instancia única de las causas por cualquiera clase de delitos que sean de la competencia del Tribunal Supremo y de los juicios de residencia de los funcionarios de Ultramar, que sean de la competencia del mismo tribunal con arreglo a las leyes.

Para que se considere constituida cada una de las salas del Tribunal Supremo serán necesarios cinco magistrados y siete para todos los fallos definitivos, incluso el presidente o el que haga sus veces. Quedó el gobierno autorizado para hacer las modificaciones que la experiencia aconsejara respecto a la división de atribuciones de las salas de justicia, después de oír en pleno al Tribunal Supremo.

En el período del Sexenio Revolucionario, y según se dispuso en el decreto de 26 de noviembre de 1868, se volvieron a refundir las competencias de las dos secciones en

⁵¹¹ *La Justicia, RPU*. T. 1 (1867) “De legislación, jurisprudencia, y Administración pública” pp. 442-444.

una sala que retomó su denominación primitiva de sala primera que a partir de ese momento atendió los recursos de casación en el fondo de las provincias ultramarinas, y los de nulidad que estuvieran pendientes desde noviembre de 1838, además de los que ya originariamente venía despachando. En el art. 6º del citado decreto también se especificaron las atribuciones de las dos salas.

A la sala primera, el conocimiento de los recursos de casación en el fondo, que se interpusieran en virtud de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Cédula de 30 de enero de 1855, de los de hacienda pública, de los de injusticia notoria en los negocios de comercio, de los de nulidad que estuvieran sin resolver o pudieran aun interponerse, con arreglo al decreto de 4 de noviembre de 1838 y de los de súplica que procedieran con arreglo a las leyes vigentes contra providencias de la sala segunda.

A la sala segunda, el conocimiento de todos los demás asuntos que, a excepción de los señalados en el artículo anterior, que en ese momento eran de la competencia y atribuciones del Tribunal Supremo, y de los recursos de fuerza que con arreglo al decreto de este mes se interpusieran en los negocios de que conocieran los ministros que ejercieran la jurisdicción eclesiástica de las Órdenes militares.

Sobre los recursos de nulidad y de apelación, cuando su admisión procediera, se interpondrían en la sala tercera del Tribunal Supremo. También se contempló que cuando se denegare la admisión, se daría vía libre al que se considerare agraviado a solicitar el recurso de apelación ante la sala tercera, siendo el fallo de la sala, admitiendo o rechazando la demanda, ejecutorio.

Este decreto fue un verdadero punto de inflexión en la concepción de un nuevo funcionamiento del alto tribunal, dejando atrás perniciosas actuaciones y definiendo un escenario de clarificación legal exigible en el campo judicial.

La Ley Orgánica de 1870, en su afán de corregir antiguas deficiencias, rescató la sala de admisión para evitar el retraso de numerosas causas estancadas en las instancias jurisdiccionales, quedando el esquema en cuatro salas (las tres primeras referidas a la casación). En su apartado referido a las atribuciones del Tribunal Supremo se volvió a completar las tareas de las salas:

La sala primera entendió sobre: competencias suscitadas entre los jueces y tribunales que no tengan superior común, los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura, admisión de los recursos de casación, recursos de queja contra los autos de Audiencia en que se denieguen los recursos de casación por quebrantamiento de forma o el testimonio de la sentencia en los interpuestos por violación de ley o de doctrina legal, recursos de casación por quebrantamiento de forma que hubiesen sido admitidos por la Audiencia competente, los recursos de casación por quebrantamiento de ley o de doctrina legal, las cuestiones de fondo, cuando se hubiese declarado haber lugar al recurso de casación y del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros con arreglo a los traslados y a las leyes vigentes, a excepción de los que hubieran de conocer otros tribunales.

La sala segunda y tercera entendieron sobre negocios criminales (lo estudiaremos en su apartado), aparte llevó otros asuntos referidos a causas y delitos de altos dignatarios de la administración del estado.

Hasta el año 1881 se completaron algunas medidas⁵¹² que afectaron al recurso de casación en materia civil y criminal pero asumiendo el fondo de lo legislado en la Ley Orgánica de 1870 y que matizaron algunas disposiciones en aras a una mayor eficacia y razonabilidad en las funciones competenciales de las diferentes salas del Tribunal.

3. c. el recurso de casación en materia civil

3.c.a. hasta el Bienio progresista

El Proyecto de nueva planta de tribunales y arreglo del ramo de la administración de justicia en España de 15 de enero de 1840 fue incluido como texto la Instrucción Provisional de Enjuiciamiento elaborado por Manuel García Gallardo. Esta iniciativa, a mi juicio, supuso un avance que posteriormente se vería culminado por la Ley de Enjuiciamiento Civil que introdujo el recurso de casación, clarificando con ello la jurisdicción existente en materia civil.

El Ministerio encargó⁵¹³ a la Comisión de Codificación de 1844 unos trabajos en orden a definir unas Bases generales del Código Civil en lo que se refería fundamentalmente a los procedimientos civiles. En ellos se definió el pronunciamiento de la sentencia definitiva en los pleitos en que se hubiera dejado sin efecto la anterior, por ser contraria a derecho.

En la sección de justicia del Tribunal Supremo se conocieron todos los fallos en el fondo de todos los pleitos civiles que la sección de casación hubiera anulado en sentencia definitiva, con lo que se articuló un procedimiento hasta ese momento novedoso.

La Real orden de 5 de septiembre de 1850 completó el reglamento provisional dictando disposiciones sobre procedimientos civiles. Esta orden puso en evidencia el desconocimiento de los jueces a la hora de sentenciar algunos pleitos⁵¹⁴.

⁵¹² Ley de 22 de diciembre de Enjuiciamiento Criminal de 1872, decreto de 16 de septiembre de 1873, reduciendo a tres, las cuatro salas de justicia de que se componía el Tribunal Supremo, decreto de 27 de enero de 1875, reorganizando la planta del Tribunal Supremo, Ley de 22 de abril de 1878 de casación civil, Real decreto de 17 de abril de 1880, autorizando al ministro de Gracia y Justicia para que presentara a las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de tribunales., Ley de 3 de febrero de Enjuiciamiento Civil y Real decreto de 21 de octubre de 1881, autorizando al ministro de Gracia y Justicia para presentar a las Cortes, el proyecto de ley reformando el art. 2º de la de 17 de abril de 1880, referente a las bases para la publicación de las leyes de enjuiciamiento criminal y organización de tribunales.

⁵¹³ ACGC.(1844) l. 3 de enjuiciamiento, c. 3

⁵¹⁴ CL. T. L (1850) pp. 31-34

El atasco de casos en los juzgados era lo normal y alcanzó tal magnitud, que se hizo necesario abreviar los procedimientos aclarando la naturaleza de los recursos presentados. Por ello se promulgó el Real decreto de 30 de septiembre de 1853, aprobando la Instrucción para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto a la Real jurisdicción ordinaria. En previsión de una Ley orgánica de Tribunales se paliaron en alguna medida las convulsiones de los juzgados. En aras a la consecución de lograr la consonancia entre funciones y composición de los tribunales dispuso el art. 2º de este nuevo decreto “que éstos obren teniendo como doctrina las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha Instrucción”

La vida de la Instrucción fue corta, pues el 18 de agosto de 1854, con José Alonso como ministro de Gracia y Justicia, se suspendió la observancia de esta Real Instrucción sobre el procedimiento civil. El argumento se basó en las críticas que los jurisconsultos realizaron a este decreto, declarando como muy perjudiciales las innovaciones acometidas e incluso algunas de ellas irrealizables.

La Real Cédula de 30 de enero de 1855 reflejó la inadecuación de la estructura judicial en el trabajo concerniente a las salas y en ese sentido en la de Indias en su art. 88 se contempló en su punto 5º, el conocimiento de los recursos de casación que en los negocios civiles se establecían contra sentencias ejecutorias de las Audiencias con arreglo a las leyes, fallando sin ulterior recurso en los mismos, cuando encontrare haber lugar a la casación.

En pleno Bienio progresista se presentó el Proyecto de 14 de febrero de 1856,⁵¹⁵ en el que se reconoció al tribunal como única potestad para declarar la casación. Redujo a dos las instancias procedentes de los negocios civiles, y una en las causas por delitos a la que la ley señala penas correccionales, estableciendo la casación en unas y otras, sin más excepciones que las que establecieron las leyes.

Cuando se entendió la conveniencia de crear una sala de admisión en el tribunal, según el Proyecto de ley de 4 de enero de 1863, se le atribuyó a ésta, el examen de los recursos de casación interpuestos y admitidos en negocios civiles contra las ejecutorias dictadas por lo tribunales, cualquiera que resultara el fuero y jurisdicción, y de los cuales correspondió conocer a partir de ese momento al Tribunal Supremo.

Tal como ya quedó comentado anteriormente, la complejidad derivada de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la multiplicidad de las jurisdicciones existentes en ese momento conllevó un debate en cuanto a la estructura orgánica y competencial del alto tribunal. En ese sentido la Comisión de Códigos propuso dos acciones de carácter inmediato: modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y crear una ley específica y urgente.

Estas dos actuaciones entrañaron problemas complejos como fueron: la alteración de las bases de lo procedimental y de sus fuentes decisorias (medida grave) si se seguía el primer camino planteado y caer en la tentación de multiplicar el compendio legislativo

⁵¹⁵ Elaborado por una comisión formada por: Claudio Antón de Luzuriaga, Pedro Gómez de la Serna, Cirilo Álvarez, Antero de Echarrí, Joaquín Aguirre y Nicolás María Rivero

que supondría alterar la realidad cotidiana y la perturbación, a corto plazo, que ello conllevaría.

Desde que se puso en marcha la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 1 de enero de 1856, se evidenció un crecimiento desmesurado en el uso del recurso de casación, hasta tal punto, que cuatro años después se sugirieron algunas medidas: la primera aumentar el número de magistrados de la sala primera para agilizar las causas pendientes y la segunda reservar solo a la sala primera este tipo de negocios pasando sus otras atribuciones al resto de las salas.

3.c.b. desde el Bienio a la Restauración

Desde 1856 al año 1862, se computaron 438 causas pendientes en el fondo y en la forma. Conviene decir que tal atasco también fue motivado porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no contempló el carácter retroactivo de la misma, con lo que los antiguos recursos se siguieron sustanciando mediante el procedimiento antiguo y ocasionando una acumulación de origen ya nefasta para el correcto funcionamiento de ésta instancia judicial.

Para asumir este flanco vulnerable de la administración judicial, se propuso que fuera la sala segunda, la que tratara los negocios civiles y que conociera de todos los recursos de casación admitidos por la sala de calificación, y de las súplicas contra los fallos que dictara la sala tercera en primera instancia. Como novedad importante se dispuso que el Tribunal Supremo recogiera los asuntos civiles de las ejecutorias dictadas por los demás tribunales con lo que se daba un paso esencial para la consecución definitiva de la unidad de fueros.

El Proyecto de Bases de abril de 1863 contempló desde la nueva reorganización del tribunal que la sala primera conociera de los asuntos civiles en el fondo y la sala segunda de los asuntos civiles en la forma. Poco después y tomando como origen estas Bases, el gobierno emprendió una reforma de la casación civil pues entendió que se estaba aplicando deficientemente y ello se tradujo en el Proyecto de 6 de noviembre de 1863, que formuló la existencia de cinco salas de las que una sería de admisión en lo civil. La sala primera entendió de los recursos en materia civil, por infracción de ley y la sala segunda de los recursos fundados por quebrantamiento de forma en el orden civil.

La Ley de 30 de abril de 1864 pretendió ir más allá de los planteamientos previos de la casación civil al entender que la situación requería una urgente solución y que los debates parlamentarios de un proyecto extenso retrasaría aún más, la puesta en marcha de los remedios necesarios. Se vulneró el art. 1041 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con los contenidos expuestos en la Ley⁵¹⁶.

⁵¹⁶ Sobre el borrador hay que aludir- aunque no quedó reflejado en la Ley – que existía un artículo por el que transcurridos tres meses el Tribunal Supremo, estimando abiertos los recursos para cuya continuación no se hubiesen personado los recurrentes, mandase devolver los autos al tribunal del que procediera. Se atacó con esta medida los derechos adquiridos por los recurrentes y se le anuló al Ministro de Gracia y Justicia la facultad de interpretar asuntos en el envío a la sala que no le correspondía atender.

A finales de mayo de ese año, y pasado no más de un mes, se presentó un proyecto⁵¹⁷ en el que se contempló que la sala primera entendiera de la admisión en lo civil y la sala tercera de la casación en lo civil. La sala primera decidió sobre la admisión de los recursos, que con arreglo a las leyes se interpusieron en negocios civiles contra las sentencias dictadas por cualesquiera tribunales que aplicaron las leyes comunes al reino y el conocimiento de los recursos de queja contra las providencias denegatorias de testimonios para introducir los recursos de casación.

El 4 de abril de 1867, se reformó la planta del tribunal en la que se constató la eficacia de las medidas emprendidas en lo referente a la casación civil, no así en materia criminal. Pero en uno de sus artículos se introdujo una cláusula con una clara intencionalidad, por la que se autorizó al gobierno a acometer algunas reformas en lo civil dando cuenta a las Cortes de las mismas en las legislaturas siguientes. Las antiguas competencias de negocios civiles de la Sala de Indias se repartieron entre las otras del tribunal con sujeción a las reglas establecidas en la ley, tanto en lo referido a las competencias como a la sustanciación de las causas.

El art. 7º del proyecto presentado se identificó, en lo que a sus atribuciones se refiere, con lo contemplado anteriormente y se añadió el conocimiento en materia civil de los recursos de queja contra las providencias denegatorias de los de casación o de testimonio para interponerlos (sala primera). Y en la sala segunda se conocieron: los recursos de casación que admita la sala primera, los recursos de casación que se interpongan en materia civil cuando su objeto sea anular las sentencias por defecto en las formas, los recursos de injusticia notoria en los pleitos mercantiles, bien sea por violación manifiesta de las formas sustanciales del juicio en la última instancia, o por ser el fallo dado en esta compra la ley expresa, decidir las competencias en materia civil cuando su resolución corresponda al Tribunal Supremo con arreglo a las leyes, conocer de los recursos de fuerza cuando sean de la competencia del mismo Tribunal y versen sobre materia civil, declarar si debe o no darse cumplimiento a las ejecutorias dictadas por tribunales extranjeros, conocer de los pleitos que quedaron pendientes al extinguirse los antiguos consejos.

Se cuestionó el procedimiento de actuación, que hasta ese momento se venía desarrollando, en los contenidos del decreto de 26 de noviembre de 1868 en el período revolucionario, y por ello se reconoció que la sala primera tendría el conocimiento de los recursos de casación en el fondo, que se interpusieran en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Cédula de 30 de enero de 1855.

Este decreto volvió a simplificar la estructura orgánica del Tribunal Supremo con la composición de tres salas, con lo que negocios de anteriores salas que desaparecieron se concentrarían en las tres existentes. Se invocó la consecución urgente de la unidad jurisdiccional.

⁵¹⁷ Proyecto ya comentado en el epígrafe del recurso de casación elaborado por una comisión técnica que pretendió salvaguardar la objetivación y distinción entre la sala que entendía de los recursos en cuanto a su toma en consideración y la sala que fallara sobre la misma.

La Disposición transitoria segunda de la Constitución de 1869, dispuso que hasta que existiera una Ley Orgánica de Tribunales, el gobierno tendría la potestad de promulgar disposiciones. Esta se puso en marcha el 15 de septiembre de 1870, cerrando con ello la franja de discrecionalidad con la que se vino actuando en razón de esa disposición.

La Ley de 30 de enero confirió a la sala primera los negocios civiles, expresados en el art. 278 y que fueron: las competencias suscitadas entre los jueces y tribunales que no tuvieran ningún superior común, los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura, la admisión de los recursos de casación, los recursos de queja contra los autos de las Audiencias en que se denegara la admisión del recurso de casación por quebrantamiento de forma o el testimonio de la sentencia en los interpuestos por violación de ley o de doctrina legal, los recursos de casación por quebrantamiento de forma que hubiesen sido admitidos por la Audiencia competente, los recursos de casación por quebrantamiento de ley o de doctrina legal, de las cuestiones de fondo, cuando se hubiese sido declarado haber lugar al recurso de casación y del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros con arreglo a los traslados y a las leyes vigentes. Se exceptuó el caso en que, según los traslados, hubiere de corresponder su conocimiento a otros tribunales.

La admisión y la casación en lo civil se concentraron en la misma sala, con un presidente y siete magistrados. En la Disposición transitoria, se recogió para la sala primera los asuntos pendientes al Real decreto de 4 de noviembre de 1838 y los antiguos recursos de injusticia notoria anteriores al decreto de 6 de diciembre de 1868.

Así se funcionó hasta 1874, momento que aprovechó el ministro Alonso Colmenares presentó un Proyecto de Organización de Tribunales que no se promulgó y que contempló la composición del Tribunal Supremo en dos salas, y estas a su vez, se subdividieron en dos secciones “para el más pronto despacho de los negocios”. Las secciones serían para la admisión de lo civil y criminal y las salas propiamente para el fondo y la forma de los recursos⁵¹⁸. Es evidente que esta fórmula no alivió el curso de los procedimientos pues en abril de 1877 se redistribuyeron las tareas y competencias de las salas por el alto volumen de causas en materia de casación civil.

La Ley de 3 de febrero de 1881 de Enjuiciamiento Civil no entró a valorar cuestiones de fondo competenciales y sí causas y procedimientos que se ocasionaron por el aumento de trabajo, para ello solicitó que se dotara de una plaza más de abogado fiscal en el Tribunal Supremo.

3. d. el recurso de casación en materia criminal

3.d.a. hasta el Bienio progresista

En el art. 90, del capítulo V del Reglamento de 1835, se contemplaron las siguientes atribuciones del Tribunal Supremo referida a esta materia: conocer en primera y

⁵¹⁸ ACGC. (1874) l. 9 sobre organización de tribunales, c. 1, d. 2

segunda instancia de las causas criminales que por delitos comunes ocurrieren contra vocales del Consejo de Gobierno, secretarios y subsecretarios de Estado y del Despacho, consejeros de estado, ministros del Consejo Real de España e Indias, embajadores y ministros plenipotenciarios de S. M. y magistrados del mismo Tribunal Supremo, del Real Consejo de Órdenes y de las Audiencias; salvo siempre el exclusivo conocimiento de las Cortes respecto a los casos de responsabilidad que les están reservados.

En segundo lugar conocería este Supremo Tribunal de las causas que por tales delitos comunes sea menester formar contra alguno de los M. RR. Arzobispos o RR. Obispos, o de los que en la corte ejerzan autoridad ó dignidad eclesiástica suprema o superior, cuando el caso deba ser juzgado por la jurisdicción Real. Y por último, le correspondió conocer en primera y segunda instancia da las causas criminales que por culpas o delitos cometidos en el ejercicio del respectivo cargo público hubiera que formar contra ministros del Consejo Real de España é Indias, subsecretarios de Estado y del Despacho, consejeros de Ordenes, funcionarios superiores de la corte que no dependieran sino del gobierno inmediatamente, y que no pertenecieran como tales a jurisdicción especial, magistrados de las Audiencias del Reino, intendentes y gobernadores civiles de las provincias: y asimismo contra prelados o autoridades eclesiásticas de las que expresa el párrafo precedente, por aquellos delitos oficiales de que deba conocer la jurisdicción Real.

Cuando hubiere que formar causa criminal por delito común a alguna de las personas comprendidas en la facultad 2ª del art. 90, debería instruirse el sumario por el ministro más antiguo de la respectiva sala después del que presida, si el tratado como reo se hallare en la corte; y si se hallare fuera, por el regente de la Audiencia, o por el gobernador civil de la provincia, según el que primero prevenga el conocimiento: todo sin perjuicio de que si el delito fuere de pena corporal, y no se hallare a mano ninguna de las autoridades sobredichas, pueda y deba el juez ordinario del pueblo, en cuanto lo requiera la urgencia, ejecutar lo que se prescribe en el art. 33.

Fue extensivo para el Tribunal Supremo lo que se suscribía en el art. 74 del mismo reglamento, con la presencia de al menos cinco magistrados, y que se refiere sobre ver y fallar en primera instancia alguna de las causas criminales tratadas en los artículos 93 y 94, o alguna residencia de virrey, capitán general o gobernador de Ultramar; excepto si se procediere en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, o contra alguna Audiencia o contra alguna sala de estos tribunales(para estas causas fueron necesarios nueve magistrados al menos). Era necesario para ver y fallar en revista las causas criminales en que se proceda en cuerpo contra el Consejo de Ordenes, o contra alguna Audiencia, o contra alguna sala de uno u otra, el Tribunal Supremo en pleno con la presencia de once magistrados.

En el año 1844, se ampliaron algunos contenidos del reglamento que supuso la división en dos secciones al tribunal, de la que la segunda era competente en materia criminal. Convertido el alto tribunal en órgano que controlaba las causas pendientes de las Audiencias, estudió cada informe-resumen sobre la duración de los procedimientos,

y el número de causas criminales por territorios en plazos de seis meses y un año de duración⁵¹⁹.

Se verificó un gran retraso hacia 1850, y por ello se dispusieron algunos elementos nuevos para la agilización de las causas criminales, confiriendo al Tribunal Supremo algunas facultades excepcionales o extraordinarias. En 1851, con la formación de la sala extraordinaria del tribunal se despacharon las causas criminales en que hubiere presos y todo lo relativo a la sustanciación de los negocios criminales pendientes. En mayo de 1854, se introdujeron ligeras variaciones relativas al régimen interior de los tribunales, a la competencia y facultades de los jueces y en ese sentido destaco que se reformó la competencia del alto tribunal para entender de las causas criminales contra altos funcionarios que se venían llevando en la Audiencia de Madrid.

La sala de Indias fue restaurada en agosto de 1854 y ello fue el origen de reubicar materias de trabajo en el seno de dicho tribunal. La Real Cédula de 30 de enero de 1855, en su art. 89, conoció en la sustanciación de las apelaciones que los fiscales o jueces inferiores entablaran de los fallos dictados en primera instancia por las Audiencias de Ultramar y de ese modo procedió el Supremo Tribunal como antes las Audiencias en las causas criminales que fallaran en segunda instancia.

3.d.b. desde el Bienio a la Restauración

Los tiempos políticos cambiaron y fue preciso clarificar el escenario jurisdiccional tras la incorporación del Senado como tribunal de justicia en asuntos referidos a la responsabilidad de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo.

En la enumeración de atribuciones del Tribunal Supremo se respetó el conocimiento de las causas criminales de los funcionarios públicos según determinaba la ley, pero se excluyó la responsabilidad criminal de los altos mandatarios del estado como competencia que se trasladó al Senado con la connotación evidente de politización de la acción jurisdiccional.

En los debates suscitados en 1862, con ocasión de la reforma de la casación, y los distintos puntos de vista expresados, conviene citar el posicionamiento de Manresa ante dichos cambios que afectarían a la casación criminal y donde él entendió que era necesaria una sola sala, a diferencia de la casación civil, para evitar el riesgo de un diferente tratamiento de estos recursos. Se hacía necesario por ello dotar a esa única sala del personal necesario para facilitar su despacho, componiéndose de doce a dieciséis magistrados que garantizaran su eficacia y funcionalidad.

A la luz de los datos obtenidos en 1862 sobre el retraso de las causas, el ministro Rafael Monares envió un Proyecto de Bases sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que tuvo la discrecionalidad de conferir al gobierno, libertad de acción en este tema con la debida beneplácito de la comisión.

⁵¹⁹ CD. T. XLV (1845) pp.47-48

Se entró en la reforma de la organización judicial para que pudieran establecerse en los procedimientos criminales el juicio oral y público y la única instancia⁵²⁰. Los motivos esgrimidos iban en la dirección de introducir la casación en temas criminales y de ese modo llenar un vacío en el Tribunal Supremo como era crear jurisprudencia en lo criminal y en los recursos referidos a esta materia. El gobierno abordó la elaboración de una ley provisional para el establecimiento de la casación en lo criminal y para ello tomó como base los trabajos previos de 1862.

El Proyecto de mayo de 1864, siguió respetando a la sala segunda las causas criminales, dentro de la ampliación que se hizo a cinco salas. La sala de gobierno entendió sobre delitos de altas dignidades del estado y se dejaba la puerta abierta en lo que se refería a los recursos de casación en materia criminal, a la creación de la sala segunda y cuarta pendientes de la aprobación de una definitiva ley en esta materia.

El acceso de Arrazola al Ministerio el 16 de septiembre de 1864, de nuevo, provocó la presentación de un nuevo Proyecto de organización de tribunales que suscitó un amplio debate en la comisión del Senado⁵²¹ y que no pudo concluir sus tareas por diversas causas, dejando muy avanzado el proyecto y acomodándolo a las bases existentes⁵²². Existieron algunas modificaciones⁵²³ que no alteraron la estructura orgánica. La comisión del senado emitió un dictamen el 6 de marzo de 1865 en el que incluyó como disposición transitoria el que no se crearan salas de admisión y de casación en lo criminal hasta que no estuviera sancionada la ley que había de establecer estos recursos.

Realizado un informe resumen de la actividad desarrollada en dos años, se puso de manifiesto que la casación en lo criminal no estaba funcionando bien y de ahí la redacción del Proyecto de ley de 4 de abril de 1867, en cuyo preámbulo se confirmaba que en España se ensayó por primera vez ésta experiencia⁵²⁴. Se quiso acabar con la práctica de las tres instancias (considerando estos temas como un recurso de casación más) y así agilizar el cúmulo de causas pendientes.

Se vulneró la independencia cuando el ministro Arrazola adujo “razones de urgencia, peculiaridades de la legislatura en que nos encontramos y la conveniencia de dicha reforma (...)” y en artículo único se manifestó en este sentido:

“se autoriza al gobierno para poner en ejecución el adjunto proyecto sobre casación criminal y reorganizar el Tribunal Supremo, con obligación de dar cuenta de sus resultados a las Cortes en las dos primeras legislaturas”

⁵²⁰ Memoria del proyecto (1862) p. 297

⁵²¹ Comisión integrada por: Juan Martín Carramolino como presidente y vocales: Cirilo Alvarez, Sebastián González Nandín, Eusebio Morales, Ventura González Romero, Manuel Ortiz de Zúñiga, Pedro Gómez de la Serna y como secretario, José María Huet

⁵²² Ponentes destacados de la ley fueron Cortina y Cárdenas. Memoria de los trabajos en las pp. 348 y ss.

⁵²³ DSS. (1865) a. n° 5

⁵²⁴ “De legislación, jurisprudencia y administración pública” *La Justicia, Revista Peninsular y Ultramarina*. T. 1 (1867) pp. 442-444.

De ese modo se contempló que los negocios criminales de la antigua Sala de Indias, se repartirían entre las otras salas existentes según las reglas establecidas y asumiendo cada una las competencias marcadas.

Y la sala tercera quedaba también encargada de: decidir sobre la admisión de los recursos de casación que por ser los fallos contra la ley, se interpongan con arreglo a las leyes contra las sentencias dictadas en causas criminales por los tribunales de la jurisdicción ordinaria o cualesquiera otros que apliquen las leyes comunes y conocer en materia criminal de los recursos de queja contra las providencias denegatorias de los de casación o de testimonios para interponerlos.

El Tribunal Supremo en su sala cuarta ejerció las atribuciones siguientes: conocer de los recursos de casación que admita la sala tercera, de los recursos de casación que se interpongan en materia criminal cuando su objeto sea anular las sentencias por defecto en la forma, conocer en instancia única de las causas por cualquiera clase de delitos que sean de la competencia del Tribunal Supremo, de los juicios de residencia de los funcionarios de Ultramar, que sean de la competencia del mismo tribunal con arreglo a las leyes, decidir las competencias en materia criminal cuando su resolución corresponda en igual forma al Tribunal Supremo, así como, conocer de los recursos de fuerza, cuando sean de la competencia del mismo tribunal y versen sobre materia criminal.

El Proyecto que se presentó el 13 de enero de 1868 por el ministro Joaquín de Roncali abrió un campo de reformas ambicioso en una línea bien distinta a la de su antecesor Arrazola. Como nota importante, indicar que se introdujo en este texto el procedimiento criminal⁵²⁵.

La casación criminal (verdadero eje de la reforma emprendida por este proyecto) planteaba también disparidad de criterios, en cuanto se pensaba por parte de la oposición que los juicios criminales por delitos los debían conocer todos los tribunales comunes, y sólo por delitos de muerte y de cadena perpetua que por su escaso número⁵²⁶ parecía innecesario crear una sala específica en el Tribunal Supremo para estos temas.

Fue en el período revolucionario cuando con la ley provisional que presentó el gobierno en junio de 1870, informada por la comisión delegada y con una exposición de motivos larga y extensa⁵²⁷ se adujo la urgente adecuación de las instituciones al nuevo sistema político, la necesidad de que la Ley Orgánica de Tribunales sirviera de base a las leyes de enjuiciamiento criminal. Se anuló la organización del Tribunal Supremo que estaba vigente con cinco salas y se pasó inicialmente a tres y después a cuatro (contencioso-administrativa) aboliendo las dos salas que conocían los recursos en los asuntos criminales por una ley previa de Cortes. De la misma manera se estableció el recurso de casación en materia criminal y la necesidad que hubo de que una sala de admisión conociera los recursos de esta naturaleza para que no hubiere retrasos perjudiciales en la administración de justicia.

⁵²⁵ RGLJ. T. 32 (1868) p. 44

⁵²⁶ En 1862 se sentenciaron 31 penas de muerte y 104 de cadena perpetua, con un total de 135 causas

⁵²⁷ ACGC. (1870) l. 7 de organización de tribunales, c. 7, d. 1

De este modo se fijó que la sala segunda conociera de las competencias suscitadas entre jueces y magistrados que no tuvieran un superior común, de los recursos de queja contra los autos que dictaran los tribunales, denegando la admisión del recurso de casación por quebrantamiento de forma, o el testimonio de la sentencia en los intentados por violación de ley y de la admisión del recurso de casación por quebrantamiento de ley. Y la sala tercera de los recursos de casación fundados en violación de ley o de doctrina legal admitidos por la sala segunda, de los mismos recursos por quebrantamiento de forma admitidos por las Audiencias, de los juicios de residencia de los funcionarios de Ultramar que fueran de la competencia del tribunal con arreglo a las leyes, de las apelaciones de las causas contra los alcaldes mayores de las provincias ultramarinas por los delitos que cometieren durante el ejercicio de sus funciones, de los recursos de fuerza contra el tribunal de Rota de la Nunciatura y de los recursos de revisión.

Por último, en la sala tercera, en juicio oral y público y única instancia, contra las altas autoridades del estado y de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los auxiliares del Tribunal Supremo.

Posteriormente la Ley de Enjuiciamiento Criminal introdujo una profunda modificación al unificar en una sola sala, el conocimiento íntegro de los recursos de casación en los juicios criminales desde el acto de su interposición hasta su resolución en el fondo y de una manera definitiva.

En plena Restauración política se autorizó al ministro de Gracia y Justicia, por Real Decreto de 2 de febrero de 1880, para que presentara a las Cortes un proyecto de ley de bases para la redacción y publicación de las leyes de enjuiciamiento criminal, a fin de establecer el juicio oral y público, y la instancia única en los juicios criminales. Ello conllevó una nueva reorganización de tribunales. Esta medida quedó completada el 21 de octubre de 1881, con la reforma del art. 2º de del decreto de 17 de abril de 1880 que iba en ese mismo sentido.

3. e. en materia contencioso-administrativa

Por primera vez fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 la que contemplaba la existencia de cuatro salas (frente a las cinco de la Ley de 1863), y de 33 magistrados, consideró oportuna la existencia de la llamada sala de recursos contra la administración, en la que vino a refundirse la antigua jurisdicción contencioso-administrativa, y permitiendo, con ello, subsanar uno de los grandes y graves problemas del gobierno, como era aliviar económicamente los gastos que se generaban con el funcionamiento ordinario del estamento judicial. Menos salas y menos magistrados para una pretendida política de austeridad a todos los niveles de la administración.

La sala de recursos contra la administración se componía de un presidente de sala y de siete magistrados; se denominaba cuarta sala y según recogía el art. 282 de dicha ley:

“conocerá en única instancia y en revisión de todos los recursos que con arreglo a la ley, entablen contenciosamente los que se sintieren agraviados en sus derechos por resoluciones de la administración general del estado que causen estado”

En el capítulo VIII de dicha ley, se advertía de la posibilidad que tenían las autoridades judiciales para interponer recursos de queja contra las autoridades administrativas por exceso de atribuciones⁵²⁸.

En su sala tercera se recogieron como atribuciones: el conocimiento de los negocios contenciosos de la administración procedentes de la Península, islas adyacentes y provincias ultramarinas, ya sea en instancia única, ya en apelación o en recurso de nulidad; los negocios de que conozca en instancia única, y en los recursos de apelación y nulidad, a las disposiciones por que se regía el Consejo de Estado para la sustanciaciones y decisión de lo contencioso-administrativo, inclusa la práctica de las diligencias que para el esclarecimiento de los hechos sean necesarias, y por lo tanto a la ley orgánica del mismo Cuerpo dada en 17 de enero de 1860, al reglamento sobre el modo de proceder el Consejo Real en los negocios contenciosos de la Administración, de 30 de diciembre de 1846, al Real decreto de 19 de octubre de 1860, y a las demás leyes y disposiciones que han venido rigiendo hasta aquí en los negocios contencioso-administrativos, con las modificaciones que quedan ya establecidas, y las que establecen los artículos siguientes; presentada en la sala tercera una demanda contencioso-administrativa, se oirá por vía de instrucción, sobre su procedencia al ministro fiscal, aunque no deba ser parte en el pleito. Si esto no se opusiere, declarada la sala su admisión cuando la considere procedente.

No obstante lo dispuesto, el gobierno quedó capacitado para resolver sobre la procedencia de la vía contenciosa en los casos en que el Consejo de Estado hubiere elevado su informe antes del día 13 de octubre de ese año. También se contempló que los negocios contenciosos de la administración, pendientes, o que en lo sucesivo se incoaren, que conocían antes los Consejos provinciales, serían de competencia de la sala primera de la Audiencia del territorio, a que correspondan las provincias en que debían comenzarse.

Las Audiencias se atuvieron al reglamento de uno de octubre de 1845, según el modo que estableció la ley. Se siguió por tanta una cierta analogía entre el alto tribunal y las Audiencias en cuanto la admisión y la decisión de una demanda.

En el año 1872, el Tribunal Supremo hizo un requerimiento al gobierno sobre las necesidades de personal por el claro aumento de la actividad que se materializó en un

⁵²⁸ art. 292: sólo el Tribunal Supremo y las Audiencias podrán recurrir en queja al gobierno contra las invasiones de la Administración en las atribuciones judiciales.

art.295: en vista del dictamen fiscal y completando el expediente si fuese necesario, resolverá, las Audiencias o el Tribunal Supremo si debe o no elevarse el recurso de queja.

real decreto, que en su preámbulo constataba que la sala cuarta (contencioso-administrativo) vivía una situación angustiosa registrando en el último año judicial la entrada de 349 recursos contra la administración. Se incrementó la sala en otros dos secretarios y dos oficiales más de sala.

Configurado el horizonte estable de la administración de justicia a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que daba la esperanza de tener un modelo firme y sólido, surgió el decreto de 16 de septiembre de 1873 que redujo el número de salas a tres: primera: sala de lo civil, segunda: sala de lo criminal, tercera: sala de recursos contra la administración.

A esta tercera sala le correspondió un presidente y diez magistrados. Ello supuso dos novedades técnicas de interés: la primera que los asuntos criminales se desgajaban definitivamente de la sala contencioso-administrativa y la segunda que existiría un mejor tratamiento de la materia referida a los recursos en contra de la administración, que anteriormente ocupaban un lugar secundario en el trabajo general de la sala.

4. La actuación gubernativa del Tribunal Supremo

El capítulo V, del Reglamento de 26 de septiembre de 1835, en su art. 90 dispuso que al Tribunal Supremo correspondía promover la administración de justicia en todo el reino por lo respectivo al fuero ordinario, y velar muy cuidadosamente sobre ella; para lo cual ejercería sobre todas las Audiencias la misma inspección superior que estas sobre los jueces inferiores de su territorio.

Su acción gubernativa también se trasladó a dirimir las competencias de las Audiencias entre sí en todo el reino; y también las que en la península e islas adyacentes se suscitaban entre Audiencias y jueces ordinarios, o entre unas u otros con tribunales o juzgados especiales que no fueran de los de fuero militar de Guerra o de Marina, o de alguno de los ramos de que conociera en apelación la Real y Suprema Junta patrimonial, y dirigir á S. M. con su dictamen las consultas que recibiera de las Audiencias sobre dudas de ley u otros puntos relativos a la legislación, y consultar también por sí mismo sobre ello y sobre lo demás que considerara necesario por sí mismo o conveniente para la mejor administración de justicia; arreglándose respectivamente a lo dispuesto en el art. 86.

Pero sin embargo de lo que se declaraba en el presente artículo, el Tribunal Supremo, conforme a la autorización que tenía conferida por el Real decreto de 26 de mayo de 1834, terminaría todos los negocios pendientes que éste expresaba, y los que como correspondientes al suprimido Consejo de Indias se remitieran al de Ultramar antes de haberse publicado en aquellos dominios el Real decreto de 24 de marzo del mismo año.

La inspección superior del Supremo Tribunal sobre las Audiencias fue otra actuación gubernativa encomendada al alto tribunal para promover la administración de

justicia. Sus atribuciones se contenían en el art. 59 de dicho reglamento, y si se dieran quejas sobre retrasos o abusos en aquellas, estaría obligado a informarse de la verdad tomando en su caso las providencias oportunas para remediar la situación.

El Supremo Tribunal de España e Indias tuvo obligación de observar en su caso, cuando específicamente no se prescribiera otra cosa en éste capítulo, todo lo prevenido respecto a las Audiencias en los arts. 63 y siguientes⁵²⁹ hasta el 68 inclusive; en el 70, 73 y 75; y en el 77 y los que le siguen hasta el 84 inclusive también; y así mismo cuidaría de que se hiciera la vista anual de sus subalternos con arreglo al art. 87, y de cumplir lo que se establecía en el art. 88 sobre aranceles.

El Proyecto de 1840 que pretendió la reforma de la planta de tribunales, reconoció en su título II que al Tribunal Supremo le correspondían funciones de gobierno e inspección, novedad con respecto a anteriores textos, y en ese sentido se enunciaron tareas tales como: dirimir las competencias de jurisdicción entre órganos judiciales ordinarios carentes de otro superior común y las que se planteen entre jueces y tribunales especiales y ordinarios; la designación de tribunales o jueces especiales para conocer de determinadas causas cuando “puedan sobrevenir entorpecimientos, dudas o competencias que retarden considerablemente su curso”; transmitir consultas al gobierno sobre dudas de ley o reformas en la legislación y proponer estas mismas aclaraciones y reformas.

También le correspondían la vigilancia sobre los tribunales y jueces, con posibilidad de imponer correcciones de hasta multa y de ordenar la formación de causas para los jueces y magistrados que pidieren ser oídos en justicia; así como reclamar, para su examen, procesos fenecidos sin que esto le permitiera avocarse su conocimiento ni entorpecer la actuación en ellos de los jueces o tribunales competentes.

Este proyecto no aportó significativas mejoras con respecto a la normativa que estaba en vigor, atendiendo a la funcionalidad y al ámbito competencial y sólo merece una consideración significativa en lo que se determinó sobre la “solución de conflictos jurisdiccionales y la concesión al alto tribunal de crear jurisprudencia o uniformar la ley”.

En materia competencial, fue el decreto de 5 de enero de 1844, en el inicio del moderantismo político el que reformó el antiguo reglamento del Tribunal Supremo. Existió el deseo de anular las disposiciones del período revolucionario: el que reguló la creación de las juntas gubernativas (formada por los presidentes de sala y los fiscales) a las que se les confirió la resolución de todos los negocios, que hasta ese momento fueron de la atribución de la audiencia plena, con arreglo al reglamento provisional y

⁵²⁹ art. 63 sobre la observancia del trabajo de las Audiencias y de las salas de negocios criminales y obligación de reunirse urgentemente cuando lo requiriera el asunto (en tribunal en pleno), orden debido en la jerarquía de la convocatoria en el art. 64; rigurosidad en la sustanciación de las segundas y terceras instancias por parte de las Audiencias en el art. 65; juicios sumarísimos no han lugar a suplica en el art. 66; pleitos sobre propiedad en art. 67 y sentencias ejecutoriadas en el 68; negocios civiles sin oír al fiscal en el 70; sobre causas criminales de las que puedan entender las Audiencias en el 73: quorum de magistrados para dirimir en segunda o tercera instancia en el art.75; sistemas de mayorías y trámites procesales en los arts. siguientes.

ordenanzas, quedando no obstante en vigor el art. 48 de dicho reglamento del Tribunal Supremo (de 1814), los capítulos 9º y 10º del título I y el art. 16 del capítulo III de las ordenanzas de las audiencias⁵³⁰.

Tres meses más tarde José de la Peña Aguayo, vocal de la Comisión de Codificación, presentó un proyecto de ley orgánica en el que se recogía que entre las facultades del alto Tribunal estaba dirimir las competencias de las Audiencias territoriales entre sí, o con relación a algún tribunal excepcional, de los tribunales de primera instancia de las distintas Audiencias y en general de los jueces que no tuvieran superior común.

El cumplimiento de la regla 2ª del art. 48 del reglamento provisional había sido caballo de batalla en esos años por la interpretación de la misma y así fue a través de la Real orden de 5 de septiembre de 1850 por la que se intentó dar luz a su eficaz cumplimiento.

Esta orden ponía de manifiesto el colapso judicial que se había producido por demoras injustificadas según se desprendía del texto⁵³¹ y por desconocimiento de los jueces a la hora de sentenciar algunos pleitos. En virtud de ello se le confirieron al Tribunal Supremo algunas facultades que pueden considerarse como excepcionales o extraordinarias: así en el artículo 6º de la orden se dispuso que el alto tribunal conocería de estos temas por la suprema inspección que le competía.

También se dispuso la resolución de un asunto aún más grave: la falta de unidad en los criterios de los jueces para emitir sentencias y de ese modo se ordenó que se remitirían al Tribunal Supremo para que este resolviera lo conveniente.

Se pidió al Tribunal Supremo que velara por el puntual y riguroso cumplimiento de lo que se disponía en esta orden y cuando existiera algún inconveniente para ello solicitara la ayuda del gobierno para resolverlo.

Entre las primeras acciones legales de los progresistas en el Bienio, estuvo la supresión de las juntas de gobierno establecidas diez años antes, tachadas en el Real decreto de 9 de septiembre de 1854 como atentatorias a la independencia judicial. Interesante este documento que entró de lleno en la política liberal del ministro Alonso de evitar el control sobre los magistrados creando estructuras o instancias intermedias que ponían de manifiesto el intento de dirigismo por parte del ejecutivo.

Este texto criticó los problemas que se plantearon con la creación de las juntas de gobierno⁵³²: se abusó de la vigilancia de jueces, defendió la independencia de la magistratura, se anuló la figura del relator, sobrecarga de sueldos y se puso de manifiesto la disparidad de doctrinas legales.

⁵³⁰ CD. T. XXXII (1844) pp. 19-23

⁵³¹ CL. T. L (1850) pp. 31-34.

⁵³² CL. T. LXIII (1855) pp. 52-54.

Y por ello se declaró que los negocios de la atribución de las juntas que se suprimían se devolvieran al alto tribunal y Audiencias, que los tratarían y determinarían en pleno con arreglo a lo que estaba previsto antes del establecimiento de aquellas juntas.

Se fueron formulando algunas reformas complementarias en los contenidos de trabajo del Tribunal Supremo y así en la Real Cédula de 30 de enero de 1855 se observó el voto de mayoría como desencadenante de la ejecutoria en los fallos dictados en primera instancia por las Audiencias de Ultramar.

Finalizado el Bienio, se restableció el reglamento adicional de 1844 y confirmó la validez de funcionamiento de las salas de gobierno, puestas en entredicho en septiembre de 1854 por los gobiernos progresistas. Estas volvieron a actuar⁵³³, asumiendo la responsabilidad de ciertas actuaciones, y asegurándose el apoyo del gobierno para proporcionar los medios necesarios en el cumplimiento de sus obligaciones.

En el proyecto presentado en noviembre de 1863 se respetó la actuación jurisdiccional de la sala de gobierno, con la misma composición, para temas encargados específicamente por el tribunal⁵³⁴.

En virtud de la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1869, se facultó al gobierno para presentar una definitiva ley orgánica de tribunales, acorde con la nueva situación política. El gobierno la presentó en junio de 1870 al amparo de la LOPJ, aduciendo en su preámbulo⁵³⁵ de que ésta sirviera de base a las leyes de enjuiciamiento criminal, la separación rotunda de la acción judicial con respecto a la administración pública, la separación de los jueces de la actividad política y una reestructuración interna para solventar problemas estructurales de actuación en su funcionamiento interno. La acción jurisdiccional del alto tribunal se enmarcaba en todo el territorio y se definieron sus facultades con bastante desarrollo.

En el título VII y en el capítulo IV se recogieron cuestiones de competencia: el Tribunal Supremo no podía promover ni un juez tampoco contra el alto Tribunal; contra los autos del tribunal no habría ulterior recurso y cuando existiere conflicto competencial entre dos jurisdicciones sería el Tribunal Supremo quien resolvería.

El problema suscitado entre funciones judiciales y actos administrativos quedó suficientemente aclarado en el decreto de 14 de enero de 1874, aunque el gobierno se atribuyó la decisión última en el supuesto conflicto jurisdiccional y así evitar competencias indebidamente atribuidas⁵³⁶.

⁵³³ CL. T. LXX (1856) pp. 204-205

⁵³⁴ En el proyecto de 1864 quedó inalterable la formación y funciones de la sala de gobierno, según se recogió en su art. 4º. Quedó de igual modo en el Proyecto de ley de 4 de abril de 1867 sobre casación.

⁵³⁵ ACGC. (1870) l. 7 de organización de tribunales, c. 7, d. 1

⁵³⁶ CL. T. CXII (1874) p. 59 “ No se diga tampoco que la imposibilidad de su total aplicación hasta hoy hace indispensable la medida de arrebatarse al Gobierno parte de sus funciones para atribuirles no al Poder judicial, sino a uno de sus órganos si bien el más alto y respetable, porque después de todo, y no habiéndose alterado sustancialmente las prescripciones de la ley orgánica en cuanto a la aptitud y condiciones para optar a ascensos o traslaciones en las diversas jerarquías del Poder judicial, las mismas reglas ha de tener presentes, y en el mismo criterio ha de inspirarse el Tribunal Supremo para hacer sus

El artífice de esta iniciativa, el ministro, Cristino Martos, decía que constitucionalmente al Tribunal Supremo no le correspondían ciertas atribuciones de las que venía gozando. Aún admitiendo la oportunidad de las mismas existía un grave riesgo de acabar con la razonable y justa administración de la justicia. En el artículo 2º de dicho decreto se decía, después de derogar los Decretos de 8 de Mayo y de 3 de Octubre de 1873 que el ministro de Gracia y Justicia reclamaría del Tribunal Supremo los expedientes que dependieran de su propuesta, para resolverlos con sujeción a las prescripciones de la ley sobre organización del poder judicial.

En tiempos de la Restauración se produjo una nueva intromisión competencial en cuanto el gobierno, a través del ministro de Gracia y Justicia, designó la sala de gobierno del Tribunal Supremo, facultada ésta en las principales decisiones jurisdiccionales.

5. Estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal Supremo

5.a. condiciones generales y específicas de acceso: criterios de capacidad, selección, promoción e incompatibilidades

5.a.a. hasta el Bienio progresista

El Reglamento de septiembre de 1835 estableció ⁵³⁷ que los magistrados no podían tener ningún otro empleo, comisión ni cargo público que les pudiera impedir o dificultar el desempeño de sus actuaciones judiciales. Solamente se mencionó esta incapacidad en todo el texto y no se recogió consideración alguna sobre las aptitudes de los candidatos. Señalo la discrecionalidad que se venía utilizando en la designación de los magistrados por parte del ejecutivo mediante las propuestas del Ministerio de Gracia y Justicia.

Según ese Reglamento los quince magistrados del alto Tribunal eran nombrados por el rey: los cinco de la Sala de Indias directamente y los otros diez por orden de antigüedad en el escalafón.

En principio existió una carrera en la judicatura, con un escalafón vigente que convertía habitualmente a los Regentes de la Audiencia de Madrid en nuevos magistrados del Tribunal Supremo con el paso de un número de años en su destino. Pero hay que indicar que accedieron al alto tribunal, políticos y otros prohombres de la vida institucional del estado no vinculados directamente con la carrera judicial.

El 22 de septiembre de 1836 se promulgó un Real decreto firmado por el ministro José Landero, en la que se arbitró la existencia de una junta calificadora de cinco miembros para la selección de jueces y magistrados en las diversas instancias

propuestas, que no por proceder de una colectividad dejarían de ser arbitrarias, si al formularlas no se cumpliesen las disposiciones legales”.

⁵³⁷ En el artículo primero del c. I

jurisdiccionales, aunque es bien cierto que los altos cargos de la magistratura quedaron en manos de las designaciones del ejecutivo.

Interesa señalar dos proyectos de 1837, el de la Junta de jefes del Ministerio de Justicia y el del ministro de Gracia y Justicia Ramón Salvato. El primero analizaba en su título I las cualidades que debían reunir los que hubieran de ser nombrados magistrados⁵³⁸ con informe favorable de una Junta elaboradora que se contemplaba en el proyecto. Los nombramientos en todas las categorías los haría el gobierno a propuesta de los propios tribunales, regulaba. De igual modo, la antigüedad necesaria para los ascensos, que se producirían previo informe de la Junta de Jefes de la Audiencia respectiva. Este proyecto se remitió preceptivamente al Tribunal Supremo y su valoración fue negativa formulando consideraciones de todo orden en contra de la propuesta⁵³⁹.

Siendo Ministro Ramón Salvato, se redactó un nuevo proyecto el 25 de septiembre de 1837 en un contexto de preocupación por la inamovilidad de los funcionarios judiciales y su depuración política. En una larga exposición de motivos se clarificaron estas cuestiones que trataron de ajustarse fielmente a los principios esgrimidos en el art. 66 de la Constitución⁵⁴⁰. El proyecto se elevó a la consideración de las Cortes a través de una comisión al efecto pero el ministro la retiró con la condición de mejorarla.

El 29 de diciembre de 1838 a través de un Real decreto, se dictaron medidas concretas para mejorar la condición de los magistrados. A la vez sirvió de excusa para intencionadamente proceder a legitimar un proceso de intervencionismo en la designación de magistrados a favor del ministro de turno. Se recogieron las siguientes aptitudes⁵⁴¹: para el Tribunal Supremo de Justicia se me propondrá (al Ministro de Gracia y Justicia)) a los que, habiendo cumplido cuarenta años, llevaren cuatro por lo menos de jueces, o tres de fiscales de la Audiencia de Madrid, u ocho de ministros, o seis de fiscales en las demás y las propuestas para Regentes y para la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia se harán con la mayor analogía posible a lo dispuesto en este decreto, reservándome yo el apreciar las razones de política, de justicia y de conveniencia en cada uno de los casos⁵⁴².

En el capítulo IV que trataba sobre el nombramiento de magistrados, en su art. 12, se decía que para ser magistrado del Tribunal se propondrían a los que hubieran cumplido

⁵³⁸ Haber desempeñado el cargo de promotor fiscal durante dos años, de catedrático durante tres o de abogado durante cuatro.

⁵³⁹ Informó: “ debe rechazarse enteramente como inoportuno y perjudicial, por no atemperarse a la Constitución”, seguía diciendo que correspondía a una Ley orgánica judicial, la distribución y planta de los tribunales y las demás previsiones concernientes al nombramiento y ascenso, inamovilidad y responsabilidad de los funcionarios judiciales,...

⁵⁴⁰ El título I se ocupó de la confirmación de los magistrados atendiendo, más que a la competencia funcional, a su afección a los principios constitucionales, inducida de las fechas de nombramiento; anunciaba la formación de unas listas de los confirmados y la posibilidad de reclamación de los preteridos. El título II trataba de la calificación de los magistrados para la provisión de sus destinos en la carrera judicial, señalando las condiciones precisas para otorgar los nombramientos

⁵⁴¹ En su c. IV

⁵⁴² El ministro Arrazola aprovechó las lagunas legales que se desprendían de los principios expuestos en 1834 y 1835 y donde no se especificaban los mecanismos de elección

cuarenta años, llevaran cuatro por lo menos de jueces, o tres de fiscales de la Audiencia de Madrid, u ocho como magistrados, o seis de fiscales en las demás instancias jurisdiccionales. La materialización de este decreto no conllevó, pese a lo que pudiera pensarse, inicialmente modificaciones en el seno del Tribunal.

Es de destacar el análisis político que de este decreto hizo Álvaro Gómez Becerra⁵⁴³, enemigo acérrimo de Arrazola, cuando decía: “considere bien el Ministerio que esa espada que quiere conservar empuñada, aunque no piense hacer uso de ella, tiene dos filos, y más pronto o más tarde ha de caer en otras manos: Quien la maneje entonces será de otro color político, porque esta alternativa es usual y ordinaria. Se hará uso del corte de la derecha, y cuando venga después otro Ministerio, entrará en ejercicio el corte del lado izquierdo:.. Hoy se renovará la tercera parte o la mitad de la magistratura; mañana habrá otra renovación en sentido contrario”. Resulta un buen termómetro este análisis para confirmar un escenario de intromisión en esta etapa moderada en boca de un significado progresista.

Un año más tarde, el 23 de agosto de 1839, una comisión⁵⁴⁴ presentó un nuevo Proyecto de ley que en espera de una ley orgánica determinó que para ser nombrado magistrado del alto Tribunal se debían reunir varias condiciones: ser magistrado de tribunales especiales, regentes de Audiencias, magistrados de Audiencias con cuatro años de antigüedad, magistrados de antiguos Consejos suprimidos, y todas estas circunstancias las evaluaría una Junta de calificación compuesta por nueve magistrados según el proyecto de “conocida adhesión al Trono Constitucional”.

El Proyecto de Ley Orgánica de tribunales y juzgados de José Alonso en 1842,⁵⁴⁵ pretendió hacer realidad los arts. 66 y 67 y acreditar la adhesión del régimen progresista con el texto constitucional. En su capítulo I dedicado a la inamovilidad se decía que “todos los magistrados que se nombren después de publicada la Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados serían inamovibles”, garantía que no excluía la posibilidad de ascensos y promoción de los mismos: También se señalaba que podían hacerse traslados por necesidades de servicio, pero siempre previa consulta del Tribunal Supremo.

En cuanto a los magistrados anteriores a la promulgación de la Ley Orgánica “serían declarados inamovibles, después de examinados y comprobado que reúnen las cualidades y requisitos que para el nombramiento se determinen en la Ley”. Se apreciaba un claro intento de depurar política y judicialmente a magistrados no proclives al sistema dominante en esos momentos.

De regreso a la etapa moderada se presentó otro Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales el 15 de abril de 1844⁵⁴⁶ que, en su capítulo 8º, se refería al nombramiento y sustitución de magistrados y donde se determinaron las condiciones de éstos en el desempeño de su función judicial. Lo más notorio fue la capacidad dada al gobierno

⁵⁴³ RGLJ. T. 46 (1875) pp. 241 y 245

⁵⁴⁴ Compuesta por José Landero, José Pérez Rivas, Pedro Pidal, Saturnino Calderón Collantes José Mariano Olañeta y José María Monreal.

⁵⁴⁵ DSC. (1842) a. 1º al n. 4 y en ACGC (1842) l. 3 de organización de tribunales, c. n. 6

⁵⁴⁶ ACGC. (1844) l. 3 de enjuiciamiento criminal, c. 3

para trasladar a “cualquier funcionario judicial”, previo expediente instruido en la Secretaría de Gracia y Justicia, en el que constaran los motivos, con audiencia del interesado e informe de la Sección de Justicia del Tribunal Supremo, que habría que recordar que estaba presidida por el propio ministro de Gracia y Justicia según se contemplaba en el punto 1 del título I, dando a esta medida un carácter de politización notoria.

La Comisión de Codificación presentó el 12 de junio de 1846, un Proyecto de ley constitutivo de Tribunales, que señalaba los requisitos de ingreso⁵⁴⁷. La magistratura del Tribunal Supremo se seleccionó de entre los ministros de Gracia y Justicia, subsecretarios del mismo ministerio, fiscales con determinado número de años de antigüedad y vicepresidentes de la Audiencia de Madrid. Otros proyectos⁵⁴⁸ posteriores a 1846 no alteraron sustancialmente lo dispuesto con anterioridad.

El ministro Arrazola, cuatro años después, incorporó otro texto⁵⁴⁹ de la misma naturaleza que contenía elementos normativos sobre incompatibilidad en el nombramiento de funciones judiciales, como era el lugar de nacimiento (salvo el fiscal y los magistrados del Tribunal Supremo). Este proyecto tuvo escasa vigencia por precipitación en su redacción y el elevado coste económico de la reforma que se quería llevar a la práctica.

En 1851 se promulgó un Real decreto que dimensionó la organización judicial con un nuevo perfil en que se impusieron criterios de fijeza y sistemáticos para aumentar su prestigio y eficacia.

Algunas de las propuestas planteadas en el Tribunal Supremo fueron: para tres de cada seis vacantes se preferirá en la península e islas adyacentes a cesantes de la respectiva categoría que estén adornados de los requisitos correspondientes, y entre ellos a los que disfruten sueldo del estado. (Este punto da verdadera cuenta del alto número de cesantes no recolocados que se heredan desde el período 1840-1844); los jubilados que deseen volver a la carrera, y tengan la aptitud debida para servir, se considerarán como cesantes para los efectos de la regla precedente, con tal que a solicitud suya reintegren al tesoro por medio de un descuento gradual la diferencia entre el sueldo de cesantía y el que hubieren percibido por jubilación; otras dos vacantes se darán precisamente al ascenso, proponiéndose a individuos de la categoría inferior inmediata que cuenten en ella dos años de servicio al menos, atendiendo en todo caso a la antigüedad en cuanto sea posible y para la otra plaza vacante podrán ser propuestos en concurrencia con los que hayan sido ministros de la Corona, y servido plaza de magistrado, y con los magistrados y jueces efectivos o cesantes de dichas clases, otros sujetos que estén adornados de los respectivos requisitos y cualidades, prefiriendo en

⁵⁴⁷ ACGC (1846) l. 1 de organización de tribunales, c. 2 bis, proyecto n. 15, c. X

⁵⁴⁸ Proyecto de Ley sobre nombramiento, inamovilidad, responsabilidad y jubilación de jueces y magistrados de 9 de marzo de 1848. Proyecto de Ley de Organización, competencia y facultades de los tribunales del Fuero General de 15 de marzo de 1848 en ACGC (1848) l. 12 de actas. Proyecto de Ley constitutiva de los tribunales del Fuero común de 23 de noviembre de 1850.

⁵⁴⁹ En su t. XI

igualdad de circunstancias a los que sirvan o hayan servido en los tribunales o juzgados especiales, y a los cesantes con sueldo de cualquiera ramo de la administración pública.

La sección de Gracia y Justicia del Consejo Real en unión de los ministros y del fiscal del Supremo Tribunal, designados los primeros por este mismo cuerpo, calificarían la aptitud, los méritos y las circunstancias de los regentes y magistrados de las Audiencias territoriales (...) Cuando el fiscal fuera Consejero Real extraordinario, autorizado para asistir al Consejo, y esté agregado a dicha sección, concurriría un ministro más del Tribunal Supremo.

Del mismo modo se calificaron la aptitud, circunstancias y merecimientos de los individuos que solicitaran entrar de nuevo en la carrera judicial del fuero común, aunque en definitiva sirvieran o hubieren servido antes en tribunales o juzgados especiales, sin cuya calificación ninguno podría ser propuesto.

En otro artículo de este texto se dispuso que el ministro de Gracia y Justicia tendría la potestad de dar instrucciones convenientes para que el decreto se pudiera ejecutar con las garantías suficientes⁵⁵⁰. Ello supuso una verdadera revolución interna sobre lo legislado hasta ese momento, con la creación de nuevas figuras, así como de desarrollo de la propia carrera judicial. Una fórmula mixta entre profesionalización con alguna reminiscencia de control en las franjas de discrecionalidad que el texto permitía.

El Proyecto de Ley constitutiva de Tribunales del Fuero común de 19 de mayo de 1854⁵⁵¹, el que en su capítulo XV se refería a los nombramientos de jueces y magistrados, reproduciendo la forma establecida y los requisitos y condiciones, pero obligando al gobierno a “oír previamente el dictamen y calificación de la sala de gobierno de la Sección de Casación del Tribunal Supremo acerca de la capacidad y méritos del agraciado”. Por primera vez se estableció y desarrolló la incompatibilidad para desempeñar cargos judiciales de donde se sea originario. Este texto motivó trabajos complementarios que no desembocaron en su promulgación.

5.a.b. del Bienio a la LOPJ

En 1855 una comisión formada por: Pedro Gómez de la Serna, Luis Rodríguez Calameño, J. Manuel González Acevedo, Manuel Seijas Lozano, José Gálvez Cañero, Ruperto Navarro, Nicolás María Rivero, Pedro Sabau y Francisco Núñez Arenas, elaboró un proyecto de tribunales que presentó a las Cortes el 22 de octubre de 1855⁵⁵².

⁵⁵⁰ CL. T. LII (1851) pp. 327-333

⁵⁵¹ ACGC. (1854) l. 6 de organización de tribunales, c. 3, d. 2 reproducido de la RGLJ. T. 4(1854) p. 161.

⁵⁵² Guía bibliográfica del s. XIX se cita el libro de F. Muñoz, *Observaciones a las bases presentadas el 22 de octubre de 1855*. También es citado en el t. 21 de la Colección de Impresos de las Cortes Constituyentes (1854-1856) y con la signatura 4610 del Catálogo de las Cortes españolas, 1889, compuesto dicho proyecto de 213 artículos y cuatro disposiciones transitorias.

En su capítulo V se abordaron los requisitos para el ingreso en la carrera judicial. Se decía que era necesario tener la capacidad técnica suficiente después de cumplir varios años en el ejercicio de la abogacía para acceder al Tribunal Supremo. Este se nutrió de magistrados de Audiencias con años de experiencia en sus destinos. Los principios del progresismo trataron de fijar normas estables en la carrera judicial, empeño éste sometido a las convulsiones políticas del momento.

Se volvieron a dictar normas en función de lo establecido por el Real decreto de 28 de noviembre de 1856, después de la etapa progresista que afectó al acceso y se recogió que el ministro de Gracia y Justicia propondría a partir de ahora, a los candidatos en plazas del Tribunal Supremo. La situación se radicalizó, hasta tal extremo, que el ministro optó por el control directo de la mayor parte de los nombramientos⁵⁵³ y de los suplentes.

El 19 de mayo de 1860, Ramón Ortiz de Zárate, presentó una proposición de ley separándose de los trabajos anteriores⁵⁵⁴ con un amplio desarrollo en su articulado. El título II se refería al nombramiento, que en ningún caso se haría en comisión o interinamente, ni tampoco como distinción u honor. Se reproducía el esquema de 1844 con la creación de una Junta calificadora designada por el Ministerio de Gracia y Justicia y compuesta por un abogado, un fiscal y tres magistrados que debía ser oída bajo pena de nulidad si no se procedía en ese sentido.

Hasta el Proyecto de Bases de 1863⁵⁵⁵ no se modificaron las reglas de acceso. En éstas, concretamente en su base 17, se analizó el sistema de ascensos y promoción, considerando la oposición como vía ordinaria de ingreso en los cuerpos judiciales. En lo referente al alto tribunal se eximió de las condiciones de antigüedad y de mérito para las escalas inferiores y se determinó que la elección se haría entre letrados de reconocido prestigio.

En la base 19 contenida en la reforma que se hizo en 1865 se expuso “solamente serán aptos para ingresar en el Tribunal Supremo las verdaderas eminencias de las Audiencias, por sus muchos años en el cargo”

Se profundizó más en el Real decreto de 9 de octubre de ese mismo año que cambió las disposiciones relativas a la carrera judicial, tachando de defectuosa la interpretación

⁵⁵³ CL. T. LXX (1856) pp. 297-300.: esta vía “además de estar de acuerdo con la justicia, facilitando al Gobierno los medios de dotar a los Tribunales y Juzgados de un personal escogido, porque verificada la reparación instantánea podía entrarse desde luego en buen sendero para la elección de lo mejor entre lo bueno, alegando la política de allí donde sólo debe rendirse culto a la justicia. Un sólo escollo podía presentar este sistema, el de que a la sombra de la reparación judicial tuviesen cabida las afecciones o el favoritismo, pero el Ministro estaba seguro de sí propio, y más que de sí propio, de la justicia de V. M. y de su constante anhelo de hacer el bien, proponiendo a este principio hasta sus más decididos y naturales deseos”.

⁵⁵⁴ Proyectos de 7 de enero de 1842, de 12 de junio de 1846, de 21 de diciembre de 1847, de 23 de noviembre de 1850, de 6 de diciembre de 1853, de 19 de mayo de 1854 y de 15 de febrero de 1856.

⁵⁵⁵ La ponencia se encargó a Gómez de la Serna y consta en DSS (1865) pp. 342 y ss

que se realizó en lo dispuesto el 7 de marzo de 1851 en ese mismo sentido, sobre categorías y antigüedad en la carrera judicial ⁵⁵⁶.

El decreto de 3 de julio de 1869 redactó algunas disposiciones relativas al ingreso en la carrera judicial. Concretamente se dijo que el rey nombraba a los magistrados y jueces a propuesta del Consejo de Estado y con arreglo a la ley orgánica de tribunales. El ingreso en la carrera judicial sería por oposición. Sin embargo, el Rey podría nombrar hasta la cuarta parte de magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, ni a las reglas generales de la ley orgánica de Tribunales; pero siempre con audiencia del Consejo de Estado y dentro de las categorías que para estos casos estableciera la referida ley.

Seguidamente se decía que los tribunales, bajo su responsabilidad, no darían posesión a los magistrados que no hubieran sido nombrados con arreglo a la Constitución y a las leyes. Los ascensos en la carrera judicial se harían previa consulta al Consejo de Estado.

Todas estas nuevas orientaciones debían quedar totalmente fijadas en la ley orgánica que tendría que considerar los temas relacionados con los nombramientos ajenos a la voluntad del ejecutivo y de ese modo marcar definitivamente un punto de inflexión en temas tan vitales como éste. Se definieron con rigor las garantías que conllevaba el escalafón ⁵⁵⁷.

En cuanto a los agentes participantes en la elección de magistrados, el Consejo de Estado, por precepto constitucional, intervino en el nombramiento de todos los miembros, según se reflejó en el art. 1º de dicho decreto ⁵⁵⁸, del Tribunal Supremo y no de los demás niveles por imposibilidad de medios. También se contempló que se publicaría en la Gaceta la exposición de los títulos que legitimaran las condiciones objetivas de ingreso.

El art. 8º previó una excepcionalidad en relación con los requisitos generales y objetivos, precisamente con la intención de atender perjuicios de carácter político que en otras épocas hubieran impedido el ascenso de un cualificado magistrado por motivaciones no estrictamente técnicas o profesionales ⁵⁵⁹, dando de este modo la posibilidad a algunos magistrados de reingresar en la carrera judicial.

⁵⁵⁶ CL. T. XCIV (1865) pp. 671-676

⁵⁵⁷ 1º. Sistema de oposiciones para el ingreso de origen en la carrera judicial.

2º. La intervención necesaria del Consejo de Estado en el nombramiento, ascenso, traslación y destitución de los Magistrados y Jueces, salvo naturalmente, con respecto a la destitución, el caso de condena por sentencia ejecutoria del Tribunal competente.

3º. La determinación precisa por la ley orgánica de Tribunales de las reglas fijas y condiciones limitativas obligadas para el Gobierno en los mismos nombramientos, ascensos, traslaciones y destituciones de Magistrados y Jueces.

⁵⁵⁸ El nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo se hizo por el Ministerio de Gracia y Justicia, a propuesta en terna del Consejo de Estado en pleno y con sujeción a las reglas especiales de este Decreto. Las propuestas se harían en vista de los méritos que resulten en los expedientes justificativos de la aptitud y servicios de los en ellas comprendidos.

⁵⁵⁹ Los que habiendo ejercido funciones judiciales o fiscales antes del 14 de julio de 1856 no hubiesen obtenido después de la fecha de este Decreto destinos del gobierno, excepto los que se ganan por

Se dictó que para la plaza de magistrado del Tribunal Supremo podrían ser propuestos los que hubieran sido togados del suprimido de Guerra y Marina, o de las Ordenes, presidentes de sala de la Audiencia de Madrid o regentes de las demás por dos años como mínimo, o abogados que hubieran ejercido la profesión en tribunales superiores por más de veinte con reputación nacional, habiendo pagado durante cinco la primera cuota del subsidio.

5.a.c. desde la LOPJ a la Restauración

La Ley Orgánica de 1870 consideró en su preámbulo que el ingreso y regularización de la carrera judicial constituía uno de los puntos más interesantes del proyecto, puesto que la Constitución prevenía que hubiera de adentrarse en ella mediante la oportuna oposición⁵⁶⁰ de cuya regla solamente se exceptuó el nombramiento de la cuarta parte de los magistrados del Tribunal Supremo, que pudieron ser elegidos dentro de las categorías que la Ley Orgánica de tribunales estableció a tal efecto.

La doble combinación de la antigüedad y del mérito en toda la carrera judicial, solamente interrumpida por el marco constitucional en cuanto a la entrada en el Supremo de personas acreditadas en el magisterio jurídico en el paso del tiempo, fue el factor único que condicionó su ingreso en la alta magistratura.

Estos nuevos elementos contribuyeron a mejorar la administración de justicia, dando asiento en el Tribunal Supremo, al lado de los que llegaron a la magistratura recorriendo uno a uno todos los puestos de la jerarquía judicial, a otros que aunque no como jueces fueran prácticos y conocedores del foro, o que consagrados exclusivamente a la ciencia, llevaran el espíritu filosófico y actualizado que tanto contribuía a la buena inteligencia de las leyes y al progreso de las instituciones judiciales en todos los ámbitos.

La intervención del Consejo de Estado, como órgano que trasladó las propuestas y a quien debió oírse respecto a la idoneidad de los elegibles⁵⁶¹. Así se procedió con absoluta independencia y se fijaron los requisitos en la toma de posesión de un cargo.

En la época republicana se dictaron nuevas normas para la provisión de plazas en la magistratura. Se argumentó que muchas de las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica convivían con los antiguos métodos del sistema anterior. Se produjo un importante cambio de orientación en detrimento del Consejo de Estado y a favor del alto

oposición o se previene a propuesta de corporaciones populares, podrán volver a aquella carrera sin sujeción a las reglas contenidas en los anteriores artículos, según una apreciación equitativa de su situación e idoneidad. Después, para los ascensos sucesivos quedan sometidos a dichas reglas.

⁵⁶⁰ El sistema que se adopta para el ingreso en la carrera judicial es el de un llamamiento público y solemne a todos los opositores, a fin de que puedan concurrir cuantos se hallen en circunstancias de entrar a través de esta vía, y de este modo podrá graduarse el mérito absoluto de los concurrentes y el relativo de cada uno, siendo el premio tanto más digno y apetecido cuanto más noblemente sea disputado (...). La Junta calificadora estuvo compuesta por: Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal del Tribunal Supremo, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, tres abogados del propio colegio y dos catedráticos de Derecho de la Universidad Central.

⁵⁶¹ Así se recogió en los a. 136, 139 y 144 de la Ley.

tribunal en materia de nombramientos⁵⁶². La importancia que se dio a este tema quedó demostrado en los arts. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 de la ley provisional.

El art. 21 supervisó que todas las vacantes de magistrados en el Tribunal Supremo que hubieren de proveerse por ingreso o ascenso, se anunciaron en la Gaceta dentro de los quince días de ocurrida la vacante, expresándose en la convocatoria el turno al que corresponde su provisión, y los artículos de la ley provisional y del decreto con arreglo a los cuales debe proveerse.

El expediente general que en cada caso se formase pasará en el término de quince días, a contar desde la terminación de la convocatoria, al Tribunal Supremo, el cual podrá pedir, si así lo estimare conveniente, al ministerio de Gracia y Justicia los expedientes particulares de algunos o de todos los concurrentes.

El Tribunal Supremo, en vista de lo que resultase del expediente, haría dentro del plazo de quince días una propuesta unipersonal y razonada para la provisión de cada vacante, devolviendo al propio tiempo al ministerio de Gracia y Justicia el expediente respectivo, y expresando los aspirantes que debieran considerarse incluidos en el párrafo segundo del artículo 22 de este decreto.

El ministro de Gracia y Justicia expidió los nombramientos, expresando las condiciones especiales en virtud de las que hubiera obtenido el nombrado el ingreso o ascenso en la carrera.

Todo decreto u orden por el cual se nombrara a un funcionario del poder judicial, se publicó en la Gaceta, y con él la propuesta razonada hecha por el Tribunal Supremo cuando lo hubiere.

El decreto de 3 de octubre de 1873, modificó algunos términos que se expresaron en los artículos 25 y 26 del de 8 de mayo último, relativo al nombramiento de funcionarios del poder judicial.

Fueron observadas algunas disfuncionalidades e irregularidades derivadas de algunos planteamientos formulados meses antes⁵⁶³ en aras a conseguir la plasmación definitiva y real de la independencia judicial y donde el Tribunal Supremo se convertía en auténtico protagonista de los expedientes de nombramiento en su instrucción.

De esta manera se modificó el artículo 25 que decía que el Tribunal Supremo, en vista de lo que resultara del expediente, haría dentro de quince días una propuesta

⁵⁶² CL. T CX-2 (18739 p. 948 “ la necesidad de evitar este mismo daño en los nombramientos correspondientes a las categorías superiores al par que la imposibilidad, no existiendo aún escalafones, de someter en cada ocasión la respectiva propuesta al Consejo de Estado, privando así de los mismos antecedentes que pudieran ilustrar y motivar sus juicio, exigen también sustituir la audiencia de este cuerpo con la del Supremo tribunal, cuyas funciones le hacen más apto para comparar méritos y antecedentes propios de su competencia, y de muy delicada apreciación, y cuyo imparcial carácter, elevado sobre las discordancias y las vicisitudes políticas sancionará sus resoluciones con el prestigio necesario a robustecer la autoridad y hasta la dignidad personal de sus subordinados”.

⁵⁶³ Decreto de 8 de mayo de 1873.

razonada en la que incluiría a los tres concurrentes en quienes pudiera proveerse cada vacante, devolviendo al propio tiempo al ministerio de Gracia y Justicia el expediente respectivo, y expresando los aspirantes que debieran considerarse incluidos en el párrafo segundo del art. 22 de este decreto. La variación se centró en que la propuesta dejó de ser unipersonal y se amplió a tres opciones para que el gobierno sancionara cada vacante.

Y el art. 26 del mismo decreto de 8 de mayo, quedó reformado en algunos de sus términos, como por ejemplo que el ministro de Gracia y Justicia expediría los nombramientos, pudiendo elegir a cualquiera de los tres aspirantes propuestos para cada plaza por el Tribunal Supremo, expresando las condiciones especiales en virtud de las que hubieran obtenido el nombrado ingreso o ascenso en la carrera. Todo decreto u orden por el cual se nombrara, trasladara, ascendiera, destituyera o jubilara a un funcionario del poder judicial se publicaría en la Gaceta, y con él la propuesta razonada hecha por el Tribunal Supremo cuando la hubiere.

La novedad radicó en la pluralidad de opciones en favor del Ministerio de Gracia y Justicia para proveer cada vacante, en la descripción de criterios, para argumentar la designación y en la publicidad de la propuesta⁵⁶⁴.

El ministro Cristino Martos dio una nueva orientación –aún dentro del sistema republicano- a algunos apartados de la Ley Orgánica, en 1874, quitándole al Tribunal Supremo a su entender competencias indebidamente atribuidas.

A la llegada de la Restauración se promulgó el Real decreto de 13 de noviembre de 1876 por el que se autorizó al ministro de Gracia y Justicia para que presentara a las Cortes un proyecto de ley reorganizando la carrera judicial y fiscal. Contempló que para acceder a magistrado del alto tribunal se necesitó haber sido dos años en propiedad presidente de la Audiencia de Madrid o ejercido durante tres años cargos de la llamada categoría señalada.

El Real decreto de 17 de abril de 1880 autorizó al ministro de Gracia y Justicia, para que presentara a las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de tribunales.

Considerando que la Ley Orgánica de 1870 había quedado desfasada en alguno de sus apartados y no estimando bastante la fijación de categorías para el nombramiento de los que hubieran de formar el Tribunal Supremo de la nación, y que debieran ser los mejores, previno la formación de listas de candidatos entre los cuales forzosamente se elegirían los nombrados (existe novedad como se verá en las franjas de los elegibles).

En la base cuarta se dispusieron las condiciones y méritos para acceder al Tribunal Supremo⁵⁶⁵. De cada cuatro vacantes, tres se proveerían entre presidente de la Audiencia de Madrid que lleve un año en el ejercicio de su cargo, de presidentes de Audiencia de fuera de Madrid, de presidentes de sala o fiscal de la de Madrid, o teniente

⁵⁶⁴ Publicado en Gaceta de Madrid de 5 de octubre de 1873.

⁵⁶⁵ CL. T. CXXIV (1880) pp. 893-894.

fiscal del Tribunal Supremo, que contaran con dos años en el ejercicio del cargo, o de presidentes de sala o fiscales de Audiencia de fuera de Madrid, o magistrados de la de Madrid, que hubieran desempeñado cuatro años en el cargo.

De cada cuatro vacantes, una se proveería de abogados que hubieran ejercido quince años en Madrid o veinte en capital de Audiencia de fuera de Madrid, pagando al menos en los diez últimos la primera cuota de contribución industrial, y de catedráticos de término de la Facultad de Derecho que durante doce en Madrid y dieciséis en provincias hubiesen enseñado en las universidades del estado, y ejercido la abogacía, durante el mismo tiempo.

Todos los años la sala de gobierno del Tribunal Supremo, durante el primer trimestre del año judicial, en vista del juicio que formara acerca de los méritos de los funcionarios comprendidos en las categorías enumeradas en la regla primera de esta base, elevó al ministro de Gracia y Justicia una lista razonada de los que creía que los reunían m extraordinarios para ser nombrados magistrados de dicho Tribunal.

La sala de gobierno, para formar la lista, tomó en cuenta las sentencias y votos reservados que la sala de justicia hubiera tenido ocasión de estudiar, los discursos y memorias leídas por los presidentes y fiscales en las aperturas de los tribunales, las obras de derecho publicadas, y en general todos los datos que condujeran a precisar las aptitudes de los individuos.

El ministerio de Gracia y Justicia realizó igualmente una lista de cuantos funcionarios de las categorías enumeradas en la regla primera creyó reunir méritos extraordinarios para ser nombrados magistrados del expresado tribunal, teniendo en cuenta, no sólo el examen detenido de los expedientes personales, sino también los méritos que resultaran del mejor desempeño de comisiones especiales, con el reconocido que tengan las obras o estudios de derecho que hubieran publicado, y cuantos datos tuvieran que ser tenidos en cuenta por virtud de la alta inspección que ejerce sobre el personal de la administración de justicia.

El colegio de abogados de Madrid y los de las demás capitales de Audiencia, así como los claustros universitarios, formaron y elevaron, dentro del plazo fijado en la anterior regla tercera al ministerio de Gracia y Justicia una lista razonada de los individuos de su seno que, reuniendo las condiciones legales, creía más merecedores por sus méritos extraordinarios de ser nombrados magistrados de dicho tribunal.

El ministro de Gracia y Justicia, para proveer las plazas de magistrados del Tribunal Supremo que por turno correspondían a los funcionarios comprendidos en las diversas categorías enumeradas en la citada regla primera, tuvieron precisamente que hacerlo en alguno de los que lo estén en las listas a que se refieren las reglas anteriores, acompañando al real decreto del nombramiento el extracto de las hojas de servicios.

En el caso de que el nombrado se hallara comprendido en la lista formada por el ministerio de Gracia y Justicia, debería estarlo con un año al menos de antelación.

5. b. los deberes de los magistrados del Tribunal Supremo: la motivación de las sentencias

El Real decreto de 4 de noviembre de 1838 no estableció una norma para la motivación de las sentencias en general, tampoco estableció la motivación como normalmente se entiende -parte de la sentencia que precede y justifica el fallo- sino que dispuso que el tribunal a quo, una vez admitido el recurso de nulidad, remitiera al Tribunal Supremo, entre otros documentos “un informe en que el tribunal manifieste los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo presentes para dictar el fallo (art. 9)”.

En su art. 17 del Real decreto, dispuso que en la sentencia en que se estimara o no el recurso, se expusieran los fundamentos legales del fallo. Debían publicarse en la Gaceta según el art. 23. La función específica de esta motivación era la de formar una jurisprudencia unificadora de la interpretación de la ley⁵⁶⁶; jurisprudencia que integraría la doctrina legal a la que se alude por primera vez en el artículo 7 del Real decreto.

Existió un Proyecto de Instrucción provisional del Enjuiciamiento de García Gallardo de 1840 y otro posterior de Peña Aguayo⁵⁶⁷ donde se constató el deber de motivar.

El 12 de julio de 1841 se presentó una proposición por la que todos los jueces de los tribunales del reino, sin excepción, debían motivar las sentencias que dieran en las causas civiles y criminales, citando la ley o leyes de que hagan uso, (...) sin otras advertencias que las precisas para dar a conocer el fin y oportunidad de su aplicación. Lo mismo harían cuando en defecto de aquellas se valgan de la práctica, usos y demás razones supletorias a que da cabida el derecho en este caso. La sentencia dada sin este requisito sería nula y sin efecto⁵⁶⁸.

El 19 de marzo de 1848 se publicó el Código Penal como ley provisional y en su regla 1ª contenía la siguiente disposición: “los tribunales y jueces fundarán las sentencias definitivas, expresando clara y concisamente el hecho y citando el artículo o artículos del Código Penal de que se haga aplicación”.

Era claro que la coincidencia del alumbramiento de este Código provocó la obligación motivadora y por ello una innovación legislativa. En un momento de contexto revolucionario liberal se entendía fácilmente esta necesidad: se demostró la formulación de un derecho material acorde con la ideología y necesidades de un momento histórico.

Hasta que no existió el Código se toleró el arbitrio judicial, en ese sentido iba el art. 3 del proyecto sobre recursos de nulidad de 22 de enero de 1838 y del art. 6 del Real decreto de 4 de noviembre de 1838⁵⁶⁹. Había una falta de interés socio-político en la aplicación de la ley, que se materializaba en la prohibición misma de esta facultad.

⁵⁶⁶ M. Ortíz de Zúñiga : “Fundamentación de las sentencias” *RGLJ*. T. 29 (1866) p. 115

⁵⁶⁷ Crónica de la Codificación española. T. 1 (1975) p. 102

⁵⁶⁸ DSS. (1841) sesión de 12 de julio , n. 48, p. 593.

⁵⁶⁹ “No ha lugar al recurso de nulidad en las causas criminales”.

Cuando se discutió en el Congreso la autorización al gobierno para publicar el Código Penal y la ley provisional para su aplicación, en 1848, la conveniencia de la motivación fue defendida, porque de lo que se trató precisamente era de acabar con el arbitrio judicial en las sentencias penales pues ya no se justificaba por existir un Código claro y coherente con las exigencias del momento que debía ser aplicado⁵⁷⁰. Autores tan significados como Roncali⁵⁷¹, y Gómez de la Serna constataron ya esta realidad:

“... cuando un nuevo código penal ha dictado otras reglas más conformes al espíritu de la civilización y a las exigencias de nuestra época, parece inoportuna la acción arbitraria de los jueces”⁵⁷²

5. b.a. la motivación de las sentencias civiles

En contra de la corriente de pensamiento generalizada que opinaba que el deber de motivar las sentencias civiles se produjo con la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, hay que decir que éste, ya tuvo su preámbulo en la Instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real jurisdicción ordinaria de 30 de septiembre de 1853, en su artículo 68, cuando decía que los tribunales y jueces fundarían siempre las sentencias definitivas y las interlocutorias de igual clase, cuando así lo consideraren conveniente, exponiendo con claridad y concisión las cuestiones de hecho y de derecho, y citando las leyes o doctrina legal en que se apoyaran. Las salas nombrarían por turno riguroso ponentes que hicieran este trabajo dentro del término para dictar sentencia, expresando en ella su nombre.

Todo tipo de alabanzas y críticas recogió este pronunciamiento⁵⁷³ en los ámbitos profesionales. Tras un corto período de vigencia de esta Instrucción, el deber de motivar las sentencias civiles quedó definitivamente establecido en el Proyecto de Ley para la reforma de los procedimientos en los juicios civiles de 31 de enero de 1855, y que ordenaba que las sentencias fueran fundadas⁵⁷⁴:

⁵⁷⁰ DSC. (1847-1848) II sesión de 10 de marzo de 1848 p. 303 con la intervención del conde de Farraquer: intervenciones todas en el mismo sentido: Diario..., cit. de Corzo n. 81, p. 330; Novedad n. 81 pp. 330-331; Pidal n. 82 p. 339; Alonso n. 83 p. 345-346; Seijas n. 83 p. 349; Arrazola, por entonces Ministro de Gracia y Justicia, n. 83 p. 353.

⁵⁷¹ DSC. (1847-48) II n. 80 p. 314.

⁵⁷² P. Gómez de la Serna *Tratado académico forense de los procedimientos judiciales III*, Madrid, 1853 p. 208.

⁵⁷³ L. Prieto Castro “La Instrucción del Marqués de Gerona para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto a la Real jurisdicción ordinaria” *Trabajos y orientaciones de Derecho procesal*, Madrid, 1964, pp. 869-886.

⁵⁷⁴ DSC, (1854-1856) a. 2º n. 73: “Nuestras leyes prohíben fundar las sentencias. Sin entrar en el examen de los motivos que pudieron decidir en otras épocas a los legisladores a establecer este principio, es un hecho que en un sistema político de publicidad, persistir en lo antiguo, sería un verdadero anacronismo. La necesidad de fundar las sentencias obliga a los jueces a un estudio más detenido concienzudo de todos los puntos que a su fallo se someten; les hace entrar en investigaciones profundas acerca del espíritu de las leyes y de su recta inteligencia; da al público una garantía de que la justicia se administra con imparcialidad y con arreglo a la ley, a la costumbre y a las doctrinas de derecho reconocidas universalmente; facilita el que se exija la responsabilidad a los jueces y magistrados que falten a sus deberes, fija el sentido e interpretación de las leyes, y concluye por uniformar la jurisprudencia en toda la Monarquía. Ante tan grandes ventajas no puede ser dudosa su aprobación”

En la discusión parlamentaria de esta base no se precisó de mucha defensa pues el ministro Aguirre contó con el pleno apoyo parlamentario⁵⁷⁵. En este mismo sentido Ortiz de Zúñiga expuso con claridad sus puntos de vista:

“donde domina tan fuerte sistema (el régimen absolutista) es también su consecuencia inmediata, que al legislador, al estatuir, y al administrar justicia el poder público, no da razón de sus preceptos, ni de sus actos: las leyes se promulgan sin previa discusión pública, sin exposiciones, ni preámbulos; los ordenamientos del Gobierno supremo y de la autoridad se comunican sin otras razones que las de ordeno y mando; y las decisiones judiciales llevan consigo la pérdida o la conservación de la fortuna de los ciudadanos, su honra o su infamia, su vida o muerte, sin más fórmula que la del fallo, hasta el punto de prohibirse expresamente la fundamentación de las decisiones y sentencias judiciales”

Dos disposiciones que se definieron después de que, en el art. 333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, se hubiera establecido el deber de motivación, pusieron de manifiesto una cierta reticencia del Tribunal Supremo de Justicia a aceptar las disposiciones que lo establecían.

El Tribunal Supremo se basaba en interpretaciones literales de las normas, para eludir el deber de motivación. Las sentencias que dictaba el Tribunal Supremo en asuntos mercantiles no eran motivadas por deducirse del art. 1213 del Código de Comercio que esa misión correspondía a los Tribunales de Comercio.

A través del Real decreto de 12 de enero de 1859 se subsanó esta anomalía y se ordenó al alto tribunal a motivar. Incluso se obligaba al Tribunal Supremo a ejercitar esta práctica aunque lo pretendiera eludir a los asuntos pendientes de la Instrucción de 1853; esta obligación llegaba por Real orden de 17 de enero de 1857⁵⁷⁶.

Surgió una interesante polémica protagonizada por el diputado Hernández de la Rúa cuando en sede parlamentaria dijo:

“(…) El Tribunal Supremo, no debería motivar ni fundar las sentencias: primero porque no conviene a su elevada posición dar la razón de sus providencias; y segundo porque no se conoce objeto para que lo haga. (...) La explicación de sus actos, envuelve una satisfacción incompatible con la suprema autoridad que ejerce: y a más de esto, como ningún superior ha de pedirle cuenta de sus actos, la fundamentación es oficiosa...”⁵⁷⁷

⁵⁷⁵ RGLJ. T. 7 (1855) pp. 310-436. En la sesión de 5 de mayo de 1855 p. 325 de la cit. RGLJ, dijo Aguirre refiriéndose a la base 5ª: “Si yo me detuviera a hablar sobre la importancia de esta base, sería hacer una injuria a las Cortes”.

⁵⁷⁶ Crónica de Codificación II “ recuerda la obligatoriedad de fundar las sentencias aún en los asuntos anteriores a la ley de enjuiciamiento civil”.

⁵⁷⁷ V. Hernández de la Rúa *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil I*, Madrid, 1856 p. 96.

Y en contra de esta tesis, el parlamentario Manresa expuso:

“cabalmente la primera consideración abona en sentido inverso; cabalmente porque está colocado en tan elevada posición, y porque tras él no hay superior, es por lo que debe manifestar los motivos para obrar en la forma que lo hace. Exceptúese el Tribunal Supremo de esta obligación... y quedará convertido en legislador... ¿qué no se conoce el objeto? ¿cómo, sin fundar las sentencias el Tribunal Supremo, podrá uniformarse y establecerse la jurisprudencia?”⁵⁷⁸

En ese mismo sentido se manifestó Vicente y Caravantes⁵⁷⁹.

5. b.b. la motivación de la sentencias en materia civil y el recurso de casación

En la redacción de la base 5ª de la ley para la reforma de los procedimientos en los juicios civiles, se estableció en su art. 333 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855 la forma de la sentencia.

En su párrafo 2º se daban dos reglas de motivación: se consignará después lo que resulte respecto a cada uno de los hechos contenidos en los escritos de réplica y dúplica, y en los de ampliación si los hubiese habido, en párrafos separados, que principiarán con la palabra Resultando y se hará referencia también en párrafos separados que empezarán con la palabra Considerando, de cada uno de los puntos de derecho fijados en los mismos escritos, dando las razones y fundamentos legales que estime procedentes, y citando las leyes o doctrinas que considere aplicables.

El origen de tales modelos radicaba en la anomalía de sentenciar en asuntos de comercio -tal como se vio anteriormente- y se hacía obligado formar una jurisprudencia. Esta necesidad se solventó con el denominado recurso de casación; un recurso cuyo fin principal fue la aclaración y la uniformidad de la doctrina jurídica. El modelo de motivación configurado en el art. 333 no fue comprendido por la mayoría de la doctrina y menos aún, observado en la práctica.

Este problema se resolvió con el anuncio del nuevo recurso y por la instancia judicial a quien correspondía gestionarlo y administrarlo: el Tribunal Supremo. A él le tocaba evitar los defectos, robustecer su fuerza moral, redactar sus sentencias de un modo preciso, exacto, razonado, y con dicción gramatical correcta, clara y propia de la índole de estos importantes documentos⁵⁸⁰. Esta tarea sería tanto más fácil, cuanto más fuera clara y nítida la ley en que se apoyara.

⁵⁷⁸ J. M. Manresa Navarro, *Ley de enjuiciamiento civil comentada y explicada... II*. Madrid, 1856 p. 435.

⁵⁷⁹ Vicente y Caravantes *Tratado histórico, crítico-filosófico...* I p. 113. “si no se expresan los fundamentos del fallo, si no se fijan las doctrinas aceptadas o desechadas, no pueden llegar a conocimiento de las partes, puesto que a estas no les es dado penetrar las opiniones jurídicas del tribunal...”

⁵⁸⁰ M. Ortiz de Zúñiga *Fundamentos de las sentencias* p. 117.

En los ya anunciados “resultandos” debían fijarse los escritos de réplica y dúplica y en los de ampliación, y también deberían exponerse las pruebas practicadas (es decir, desde el principio hasta el fin, fuera o no conducente para el objeto final del juicio). Para algunos como Arrieta⁵⁸¹:

“a exposición desnuda y fiel de la parte importante del proceso, extraña a toda apreciación y a toda intervención, por así decirlo, de la inteligencia del juez; objeto de los considerandos, la aplicación de la reflexión y del juicio de este para apreciar debidamente las pretensiones, y en su caso, las pruebas de las partes, y para decidir aquellas con arreglo a las leyes que le sean aplicables”

La motivación entrañó en ocasiones confusión entre todo tipo de cuestiones de hecho y de derecho (dentro del apartado resultando) y más parecía un cajón de sastre (juicios, pruebas, consideraciones personales, consideraciones legales, interpretaciones sobre lo probado, presunción de hechos, ...) que un apartado lógico y sistemático. Se hizo en definitiva, abuso de exposición y se consiguió un memorial innecesario para fallar la causa o el pleito.

Cuando el objetivo era provocar una agilización del recurso de casación por infracción de ley remitiendo al Tribunal Supremo la certificación de la sentencia impugnada, lo que se logró fue un retraso del alto Tribunal en su actividad y un progresivo aumento de recursos pendientes. Así fue denunciado por el fiscal de dicho órgano al decir que la confusión que de uno y otro (casación y tercera instancia) se ha hecho de la ley de enjuiciamiento civil, considerándolos de igual naturaleza, es precisamente la causa del mal que se lamenta⁵⁸².

Se intentó poner remedio a este mal, y para ello se determinó por parte de la Comisión de Codificación, que para reducir los recursos de casación -por infracción de ley- a sus justos límites, sería bueno no se remitieran los autos al Tribunal Supremo (art. 1033 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855) sino sólo el testimonio de las sentencias⁵⁸³.

Esta modificación polémica tuvo una historia intensa hasta que el 18 de junio de 1870 y través del art. 13 de la ley provisional se contempló que el que intentare interponer recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, solicitaría un testimonio de ésta (sentencia) y de la de primera instancia si en la segunda hubiesen sido aceptados y no reproducidos textualmente todos los resultandos y considerandos.

⁵⁸¹ L. Arrieta “Observaciones acerca de la exposición de motivos en las sentencias judiciales y sobre otras cuestiones con ella relacionadas” *RGLJ*. T. 30 (1867) p. 294.

⁵⁸² M. Seijas *Dictamen fiscal*.

⁵⁸³ F. Cárdenas “ Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación : como su fallo ha de recaer precisamente sobre una cuestión de derecho, lo que debe juzgar en la sentencia es sólo la parte de ella en que se aplica alguna ley, puesto que los hechos consignados en la misma dejaron de ser discutibles desde que tuvieron fuerza ejecutoria... ¿para qué habían, por lo tanto de venir los autos? ¿de qué servirían como no fuese de peligrosa ocasión para que los litigantes y aun sus jueces se extraviarían..., en cuestiones extrañas al punto admitido a controversia...?” *RGLJ*. T. 38 (1871) p. 83

Este era el ánimo y la intención expresado en los debates parlamentarios⁵⁸⁴ consolidando la idea que el Tribunal Supremo careció de jurisdicción para alterar la apreciación de los hechos, debiendo atenerse a su calificación hecha por la Audiencia y pronunciara el fallo declarando la casación o rechazándola; de paso se eliminaba la posibilidad de casar por casar, no por razones de nulidad sino de injusticia. Se trataba también de economizar gastos y descargar de autos al Tribunal Supremo que manejaba una copia trasladada por la Audiencia para que éste con la memoria u observaciones escritas del recurrente, y los informes orales de los defensores tuviera a su disposición todos los elementos que necesitaba para resolver el recurso.

Pronto se observaron los riesgos del procedimiento y el menoscabo a la recta actuación de la justicia por parte de su más alta instancia jurisdiccional y así Ortiz de Zúñiga⁵⁸⁵ y Ortiz de Zarate⁵⁸⁶ se expresaron en el mismo sentido. En definitiva la falta de determinados datos en la motivación de la sentencia podía, en algunos casos, hacer imposible la decisión del recurso de casación.

En el desarrollo tortuoso de la motivación encontramos un notable avance contemplado en el art. 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto que a través de los resultandos conocemos las pretensiones de las partes, lo que resultaba necesario para comprobar la congruencia sin tener a la vista la demanda.

Las discusiones parlamentarias se prolongaron, hasta la ley de casación civil de 22 de abril de 1878, que en su art. 16 no quedó rotundamente claro que al Tribunal Supremo además de la certificación de la sentencia se debía remitir al ayuntamiento de los autos⁵⁸⁷.

La responsabilidad del Tribunal Supremo en sus decisiones fue grande pues el objeto de sus actos no era sólo resolver el caso individual y privado que motivaba el recurso, sino servir de norma en adelante para la inteligencia de la ley oscura, para suplir su silencio, y para explicar las antinomias y contradicciones que solían hallarse en una legislación general y foral y en un ámbito global.

Otro aspecto que sin duda generó numerosas polémicas era la capacidad del alto tribunal de crear doctrina. Para algunos expertos la independencia de cada magistrado era intocable y debía tener una absoluta libertad su juicio al margen de las decisiones del Tribunal Supremo. Es más, esos magistrados de Audiencia no estaban obligados a acatar esos fallos como doctrina admitida. Existía una opinión generalizada que el Tribunal Supremo en sus fallos de casación, no tenía autoridad ni valor alguno

⁵⁸⁴ DSCC. (1869-1871) a. 2º al n. 185.

⁵⁸⁵ M. Ortiz de Zúñiga *Fundamentación de las sentencias* “el pensamiento es utilísimo...; pero más de una vez hemos reflexionado, que sería de imposible realización, si las sentencias hubieran de redactarse del modo que vemos, no todas ciertamente, pero si algunas de las que se llevan al examen y revisión suprema de dicho Tribunal. Sin que se corrija este defecto con que desgraciadamente se observa algunas veces, creemos no sólo muy difícil, sino hasta imposible que pueda fallarse con acierto un recurso de esta clase, sin tener a la vista el proceso”.

⁵⁸⁶ DSCC. (1869-1871) n. 8057: “existe necesidad de que el testimonio o copia de la sentencia acompañen los antecedentes para juzgar con pleno conocimiento si aquella es ajustada a la ley”.

⁵⁸⁷ DSCC. (1878) II sesión de 19 de marzo de 1878 p. 485.

permanente, disipándose y desvaneciéndose en el momento en que se sacaban del círculo especial en que eran enunciados, y los que quisieran equipararlos a las declaraciones auténticas del legislador⁵⁸⁸.

Fue de generalizada opinión que una sentencia sola no creaba doctrina admitida o jurisprudencia. Pero cuando una vez y otra, y en tres y más fallos el Tribunal Supremo se explicaba del mismo modo ante una laguna o ley confusa, y de un modo claro, terminante y en casos repetidos consignaba los principios o doctrinas que creía más aceptables, y se publicaban en la Gaceta oficial para que todos los conozcan y también se consignaban las sentencias en la Colección Legislativa, era claro que se había creado una doctrina y no sólo para que tuviera aplicación al determinado caso que en el recurso se resolvía en favor de uno de los litigantes. Este era el único fin para el que se había establecido el recurso de casación: crear y uniformar jurisprudencia.

Sólo el Tribunal Supremo tenía esta competencia pues si así no fuese se rompería el principio de centralización y unidad que son condiciones esenciales e ineludibles para mantener la pureza del derecho y evitar su arbitraria y anárquica interpretación.

De igual modo, si la violación de la doctrina de derecho era motivo legal para la anulación de los fallos de las Audiencias, y si no había otra potestad superior a la del Tribunal Supremo que declarara cual era el verdadero dogma admitido y autorizado por la jurisprudencia, había que afirmar que las decisiones repetidamente dictadas en igual sentido, no podrían dejar de tener tanta fuerza como la ley misma y su infracción provocaría la nulidad de las sentencias. Por eso no pudo ser admitido el principio de libertad de conciencia y de juicio por parte de los magistrados pues separarse de esa doctrina atentaría el mismo espíritu y la esencia de la ley.

En el terreno procesal y como sistema se debía seguir un orden: empezar la redacción de los considerandos con la exposición abstracta de los principios y doctrinas aplicables a la cuestión litigiosa para exponer el escenario jurídicamente debido. Quizás fuera ésta la tarea más ardua y difícil de los magistrados de casación que necesitaban una formación completa y un permanente ejercicio de análisis y reflexión. La inteligencia, la práctica y el conocimiento de la ciencia jurídica serían requisitos formales para la elección de los magistrados que tenían la difícil responsabilidad de sobreponerse a favores, convulsiones políticas y acechanzas de intervencionismo por parte de otros poderes.

5. b.c. la motivación de las sentencias en materia penal

Los precedentes en esta materia estuvieron en la Comisión de Codificación del año 1856, a instancias e iniciativa del ministro de Gracia y Justicia Seijas Lozano. En estos momentos se consideró el procedimiento criminal como apremiante más incluso que la

⁵⁸⁸ L. Arrieta .”Observaciones acerca de la exposición de motivos en las sentencias judiciales y sobre otras cuestiones con ella relacionadas” *RGLJ*. T. 30 (1867) p. 114

organización de tribunales y se vio además la necesidad de separar la justicia civil de la criminal⁵⁸⁹.

Así se redactó en las Bases de 1863:

“las sentencias recaídas en las causas criminales y correccionales serán susceptibles del recurso de casación, cuya interposición suspenderá sus efectos, y la misma sala del Tribunal Supremo que case la sentencia será la que falle después en el fondo”⁵⁹⁰

En la memoria histórica de los trabajos preparatorios, Cárdenas aclaraba algunos pormenores:

“para preparar y facilitar en su caso el recurso de casación las sentencias definitivas habían de dividirse en dos partes: en la primera se consignaría el resultado de la causa con la declaración de la existencia del hecho penable, sus circunstancias y la participación que en él hubiera tenido cada uno de los acusados: y en la segunda, con exposición de las razones correspondientes, se declararía el delito que, según la ley, constituyese el hecho afirmado en la primera parte, se hacía la clasificación legal que en el mismo hecho hubiera tenido cada uno de los procesados, y se señalaría la pena que a cada uno de estos correspondiera, según el artículo del Código que hubieran infringido. De este modo no se confundiría nunca la parte de la sentencia que podía ser impugnada como punto de derecho en el recurso de casación, con la que era firme e irrevocable como punto de hecho. En cuanto a la primera parte cabría un error, pero nunca interpretación equivocada de la ley, puesto que ninguna tendría aplicación en ella; en la segunda es en la que podría falsearse la ley”⁵⁹¹

Este procedimiento venía dado ante el temor de que se acumulasen cientos de recursos como ya había pasado en materia civil y se agravara la situación.

Los proyectos fueron presentados al gobierno en los meses de marzo, abril y mayo de 1863; en este tercer proyecto se estableció el recurso de casación en lo criminal, organizado con base en los mismos principios que la casación civil⁵⁹² y en otro proyecto

⁵⁸⁹ En contra del procedimiento que siguió la regulación de la casación civil en la ley de Enjuiciamiento donde no se introdujeron modificaciones especiales para decidir el recurso de casación por infracción de ley, sí existieron éstas para regular la materia penal, en concreto la incorporación de los “hechos probados” en la introducción y vía “resultados”. Todo este proceso fue muy posterior, asumió una polémica previa en torno a la imperiosa necesidad de facilitar los recursos de casación en materia criminal y tuvo su plasmación específica en la ley de Enjuiciamiento criminal de 1872. Desde el primer proyecto de 1853 –la Instrucción del marqués de Gerona– la disposición modificadora de hechos probados, figuraría en todos los proyectos para el establecimiento de la casación penal redactados por la comisión.

⁵⁹⁰ ACGC. (1856) l. 6 de organización de tribunales, c. 4, actas de las sesiones de 10 de noviembre y de 25 de diciembre.

⁵⁹¹ F. Cárdenas “Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación” *RGLJ*. T. 38 (1871) p. 19.

⁵⁹² opus cit pp. 88-89.

de la comisión de 11 de abril de 1868, que en su art. 2º, sentaba las bases de una futura ley de enjuiciamiento criminal, que eran juicio oral y público; única instancia; casación en los juicios por delito⁵⁹³.

Después de una intensa discusión parlamentaria se sancionó la ley de 11 de abril de 1868⁵⁹⁴ en la que se disponía comisionar al gobierno para formar y poner en ejecución una ley completa (...) y casi al final también se le comisionaba para formar y ejecutar “en su día una ley de Enjuiciamiento criminal, ajustándose, respecto a los delitos” a las bases que contenía, acogiendo íntegramente las del art. 2º del proyecto del gobierno. Se disponía además que mientras esta ley no pudiera plantearse, el gobierno desarrollaría en el enjuiciamiento vigente, las reformas y modificaciones que considerara de mayor urgencia, y entre ellas la suspensión de la tercera instancia y el establecimiento progresivo de la casación en toda clase de juicios criminales por delitos de que conocieran los tribunales del fuero común. La ponencia asistida y discutida la redactó el Sr. Cárdenas.

Otro proyecto que fue sometido a la consideración del gobierno desde la Comisión de Códigos fue el de “reformas urgentes en el procedimiento criminal”, con ponencias de los señores Bayarri y Acevedo. El art. 12 del proyecto de 11 de abril de 1868 pasó a ser el 13 de la ley de 18 de junio de 1870.

La comisión hizo saber expresamente su desencanto por trabajos que eran provisionales y perecederos, impulsados por urgencias políticas y cambios circunstanciales⁵⁹⁵.

La ley de 18 de Junio de 1870 contemplaba la posibilidad de publicar otras leyes provisionales: la ley provisional sobre el establecimiento del recurso de casación en los juicios criminales y la ley provisional sobre reformas en el procedimiento para plantear el recurso de casación en los juicios criminales⁵⁹⁶.

Esta segunda ley en su art. 13 decía que las sentencias se redactarían consignando en párrafos separados y enumerados, que deberían empezar con la palabra resultando, los hechos que constaran del proceso y sus circunstancias y declarando los que resultaran probados. En párrafos también numerados, que empezarían con la palabra considerando, se consignarían los fundamentos de la apreciación legal de los hechos que se consideraran probados.

Esta intención aquí descrita fue impulsada por las Cortes⁵⁹⁷ que se manifestó en ese sentido cuando decía que la introducción de la casación hacía necesarias algunas alteraciones en el modo de redactar la sentencia, para que pudieran mejor decirse y

⁵⁹³ F. Cárdenas “ Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación” *RGLJ*. T. 40 (1872) pp. 133-13 y 142-143

⁵⁹⁴ *RGLJ*. T. 28 (1868) p. 449 publicada en la Gaceta del 12 de abril de 1868.

⁵⁹⁵ ACGC. (1870) l. 7 de organización de tribunales, c. 6.

⁵⁹⁶ M. Ortiz de Zúñiga *Práctica general forense II*, Madrid, 1870 pp. 165-186.

⁵⁹⁷ DSCC. (1869-1871) a. 7º al n 185 sesión de 17 diciembre de 1869.

repararse los recursos, marcando la parte del fallo sobre qué se interponían, y evitando que se desnaturalizaran, convirtiéndose en una instancia ordinaria.

No cabe duda que el siglo XIX supuso la creación de una conciencia colectiva por mejorar la ciencia jurídica. Con sus avances, cautelas y retrocesos, el siglo XIX supuso la confirmación en el debate de motivar las sentencias. Poderosas razones de naturaleza política influyeron en su tardanza, pero también razones de carácter técnico-procesal⁵⁹⁸.

Estaba claro que un sistema liberal se preocupaba más por la defensa de las garantías procesales y evitaba por ello que el estado ejerciera con autoritarismo sus poderes y sin tratar de razonar sus actuaciones. La motivación no sólo fue una exigencia política sino que representaba la publicidad de la aplicación del derecho vigente, pues era necesario consolidarlo y darlo a conocer no sólo a los particulares sino a los jueces y profesionales del Derecho.

El modo de entender y aplicar las leyes supuso una ruptura con el ordenamiento jurídico anterior. La razón técnica fundamental fue posibilitar la acción particular frente a sentencias injustas -por infracción de ley- por la vía novedosa del recurso casacional, a la vez que consolidar la ciencia jurídica.

Parece también evidente que la necesidad de motivar no sólo obedeció a razones estrictamente de garantía procesal, sino que convenimos también, en que con ella se redujo poderosamente el margen de maniobra de cualquier gobierno para nombrar discrecionalmente a magistrados que no fueran a estar en condiciones de poder fundamentar sus decisiones en consonancia con la jurisprudencia existente. Se reforzó por ello la profesionalidad de la magistratura en el Tribunal Supremo.

5. c. vacaciones, permisos y licencias

En el Real decreto de 24 de marzo de 1834 ya se contempló el período de días feriados y suplencias en ausencias que los magistrados tenían de modo habitual. Aunque oficialmente se vino desarrollando una práctica que paralizaba la actividad del alto tribunal entre el mes de agosto y primeros días de septiembre, fue la presidencia del Consejo de Ministros, a través de una Real orden el 10 de mayo de 1851, la que estableció que las salas ordinarias del Tribunal Supremo tomarían vacaciones desde el primero de julio hasta el 31 de agosto.

Se formalizó la existencia de una sala extraordinaria para abordar los temas urgentes formada por un presidente de sala y algunos magistrados. Entendieron los negocios criminales y otras cuestiones de interés para su resolución.

El uno de mayo de 1852, recogió en su art. 7º, que la sala extraordinaria, además de las atribuciones que la competían, sustanciaría y determinaría algunas pendientes,

⁵⁹⁸M. Ortells Ramos “Origen histórico del deber de motivar las sentencias” *RDPI*. (1977) n. 4 pp. 931-932

cualquiera que fuere su naturaleza en relación a los presos y a las penas que hubiera de imponer. Se le confirieron facultades para dirimir y no prorrogar los pleitos. Ese mismo año se le facultó al presidente del Tribunal para la concesión de licencias.

En los debates que se plantearon sobre el entendimiento del recurso de casación en 1862, se valoró la creación de una nueva sala de admisión para la mayor agilidad de los negocios. En dichos debates Cirilo Álvarez se mostró contrario a la idea en pos de la tan anhelada unidad de jurisprudencia y señaló como remedio la limitación de las vacaciones del Tribunal Supremo. Aprovechó la circunstancia para poner de manifiesto las prácticas abusivas y ridículas que aumentaron sin necesidad y sin motivos los días feriados de los magistrados y sugirió el aumento de las horas destinadas a las vistas de los pleitos, y que las reuniones del tribunal en pleno se celebraran a horas diferentes⁵⁹⁹.

Fue con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, cuando se desarrolló por primera vez y extensamente todo lo concerniente a esta materia⁶⁰⁰. Se dijo que el Presidente del Tribunal Supremo era el único que estaba facultado para conceder licencia a los magistrados del mismo, por un término que no excediera de quince días y dando cuenta al gobierno. Si el tiempo solicitado era superior sería el ministro de Gracia y Justicia y ello era aplicable del mismo modo, a los presidentes de sala, magistrados del Tribunal Supremo y regentes de Audiencia, siempre con un límite máximo de setenta días y previo dictamen del presidente y de la sala de gobierno del alto tribunal, en la forma y con los requisitos expresados de motivación y fundamentos. El presidente del Tribunal obtenía este permiso con la llamada Real licencia.

El cotejo de los expedientes personales de los magistrados, demuestra que la petición de licencias fue un procedimiento habitual, y a veces hasta exagerado, que llevó a algunos de sus miembros a estar ausentes del ejercicio de sus funciones largos períodos de tiempo (finalizado un período reglamentario se solicitaba otro pues no quedaba tal derecho regulado con un límite máximo de tiempo). Las causas de solicitud fueron casi siempre de enfermedad, aunque no fue extraño que a veces se invocó este argumento como medida de alejarse voluntariamente del escenario conflictivo de algunas causas o en razón de presiones políticas del poder de turno.

⁵⁹⁹ A modo de ejemplo señaló que en Francia por decreto se contemplaba esta posibilidad al tener establecido el Tribunal de Casación dos meses de vacaciones

⁶⁰⁰ En el t. XXII, c. II

IV. ÍNDICE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y SU CONDICIÓN POLÍTICA (1836-1881).

1. Claves.

S:	Senador
E:	Electo
V:	Vitalicio
D.P:	Por Derecho Propio
D:	Diputado
U.L:	Unión Liberal
Ca:	Canovista
P:	Progresista
M:	Moderado
A:	Absolutista
C:	Conservador
L:	Liberal
I:	Independiente
R:	Republicano
De:	Demócrata

2. Índice.

Aguirre de la Peña, Joaquín	D, P
Albacete y Albert, Salvador de	S (E), D, Ca
Alcaraz y Ramos, Rafael	
Almagro y Salas, Juan Antonio	S (E)
Almonaci y Mora, José Manuel	
Alonso Ruiz Conejares, José	D, P
Alvarado y Sotomayor, Buenaventura	D
Álvarez Bugallal, Saturnino	S (E), D, C
Álvaro Martínez, Cirilo	S (E, D.P), D, P
Alzugaray Yanguas, Ricardo	D
Angulo y Regúlez, Eugenio de	
Argüelles Valdés, Juan	P
Armesto y López, Francisco	
Arrazola García, Lorenzo	S (E, V), D, M
Arrieta de Barcina, Laureano de	
Arriola y Esquivel, Ramón M ^a .	
Asensio y Bonell, Antonio M.	
Barona, Juan Antonio	S (E), D, M
Barraicoa Campos, Gregorio	
Barrera, Fulgencio de la	D, P
Barrio Ayuso, Manuel	S (E, V), D, M
Bastida y Arnaiz, Luciano de la	D
Basualdo y Guardamino, Manuel M ^a .	D, P
Bataller y Arrollo, Miguel	M
Bayarri y García, Pascual	D, M
Benito y Ávila, Alejandro	M
Biec, Juan M.	D, M
Boada y Valladolid, Luciano	
Borrajo de la Bandera, Pedro	S (E), D, C
Bravo y Romero, Emilio	S (E, V)

Bustamante y Martínez, Juan Francisco M
 Caballero del Pozo, Manuel Antonio S (V), D, M
 Cáceres y Robles, José María P
 Calatrava Peinado, José María S (E), D, P
 Calderón Collantes, Fernando S (E, V), D, M
 Cano Manuel, Juan S (E), D
 Cano Manuel Ramírez de Arellano, Vicente D, P
 Careaga y Ramírez, Victoriano
 Casaus, Joaquín José S (E, V), M
 Castejón Gálvez, Juan Antonio S (E, V), D, P
 Castilla y Calabres, Francisco M. D, P
 Castro y Orozco, José de D, M
 Ceruelo de Velasco, Gabriel S (V)
 Cervino y Ferrero, Joaquín José
 Cobo de la Torre, Lorenzo M
 Colsa y Pando, Ventura de
 Corzo y Granado, Antonio D, M
 Crespo Cantolla, Andrés D, P
 Cuervo, Eugenio Manuel S (E), P
 Díaz de Rueda, Ricardo
 Díaz Vela, Ramón
 Díez de Pedrero, Eugenio S (E), D
 Domenech, José María D, P
 Echarri y Ciga, Antero D, M
 Entrala y Perales, José de
 Entrambasaguas y Montalvo, Francisco
 Escudero y Cool, Teotimo S (E), A
 Fernández Cano, Diego D
 Fernández del Castillo, Antonio
 Fernández de los Ríos Bustamante, Ángel S (E), D, P
 Fernández del Pino, Francisco S (E), P
 Fernández Palma, Juan

Fernández San Miguel, Juan Nepomuceno S (E, V)
 Ferrer y Minguet, Vicente
 Fonseca Freyre, Ramón M. S (E, V)
 Fuente Alcázar, Sebastián de la S (E, V), D, U.L
 Galdeano y Zalduendo, José María S (E, V), M
 Gamarra y Cambronero, José
 García Cembreros, Mariano
 García de la Cotería, Manuel S (V), M
 García Gallo, Mauricio D, P
 García Gómez de la Serna, Crispulo
 García Goyena, Florencio S (E, V), D, M
 Garellly Battifora, Nicolás M^a. S (E, V), D, P
 Garralda, Valentín
 Gil Osorio, Ramón S (V), D, P, M
 Gil Sanz, Álvaro D, P, De, R
 Giraldo de Arquellada, Ramón S (V), D, P
 Gisbert, Jorge D, P
 Gómez Acebo, Felipe D
 Gómez Becerra, Álvaro S (E, V), D, P
 Gómez de la Cortina, Joaquín
 Gómez de la Hermosa, Pedro D
 Gómez de la Serna, Pedro S (E, V), D, P
 Gómez Inganzo y de Porras, Julián S (E), D, C
 González Acevedo, Juan Manuel S (E), D, P
 González Alonso, Diego S (E), D, P
 González Nandín, Sebastián S (E, V), D
 González Rivadeneira, Antonio
 Govantes Fernández, Pablo S (V), D, M
 Govantes Fernández y Angulo, Ángel Casimiro S (V), D, M
 Gudal Portanell, Pedro P
 Gutiérrez de los Ríos, Antonio D, P
 Guzmán y Magadán, Federico S (E), D, C

Haro de las Olivas, J. María	
Herrera de la Riva, Félix	S (V), P
Herreros de Tejada, José M.	
Huerta y Murillo, Casimiro	M
Huet y Allier, José María	S (E, V), D, M
Huet y Allier, Tomás	
Jaumar de la Carrera, Joaquín	D, P
Jiménez Cuenca, Juan	S (E)
Jiménez Mascaros, José	
Jiménez Navarro, Eduardo Elío	M
Jiménez Navarro, Pedro	S (V), D, M
Jiménez de Palacio, Pablo	
Juez Sarmiento, Gregorio	
Laborda y Galindo, Pío	S (V), D, P
Landero Corchado, José	S (E, V), D, P
León Romero, Manuel	S (E), D
Limiciana y Brignoles, Rafael	S (V)
López López, Joaquín María	S (V), D, P
López López, Narciso	D, P
López Montenegro, Leandro	S (E), D, C
López Vázquez, Ramón	S (V), D, M
Luzuriaga de, Claudio Antón	S (V), D, P
Macía Lleopart, Ramón	S (V), D, P
Madoz e Ibáñez, Pascual	D, P
Manescau y Saborío, José María	S (E, V), D, M
Manresa y Navarro, José María	S (E), D, M
Martín Carramolino, Juan	S (V), D, M
Martín de Villodres, Diego	S (V), D, M
Maury y Gallego, Mariano	
Mayáns y Enríquez de Navarra, Luis	D, M
Melchor y Pinazo, Joaquín	
Mena y Zorrilla, Antonio de	S (V), D, U.L

Mier y Salcedo, José	S (V), D, M
Montalvo y Collantes, Calixto	D, M
Morales Puigdevant, Eusebio	S (V), D
Morejón de León, José Francisco	D, M
Moreno Martínez, Domingo	S (V), D, M
Moreno y Maysonabe, Teodoro	
Muñiz y Alaix, José	
Muro y Gómez, José Fermín	D, M
Nájera Mencos, Miguel de	
Olabarrieta y Urquijo, Francisco	S (E, V), D, M
Olañeta, de Campo, José Mariano	S (E, V), P
Ortiz, Demetrio	P
Ortiz de Zúñiga, Manuel	S (V), D, M
Osca y Guerau de Arellano, Miguel	S (E, V), P
Pacheco Gutiérrez, Joaquín Francisco	S (V), D, U.L
Palma y Vinuesa, Joaquín de	S (E, V), P
Pardo Montenegro, José María	D, M
Peñalver y López, Nicolás	
Pérez de Rozas, Fernando	P
Pérez de Rozas, José	
Portilla y Gutiérrez, José	S (V)
Posada Herrera, Benito de	S (V), D, Ca
Posadillo y Bonelli, Manuel J.	D, M
Prida y Sánchez, Antonio María de	
Puget y Gomís, Francisco	
Rodríguez Busto, José	S (E), D, P
Rodríguez Calameño, Luis	S (E, V), D, P
Royo de Norzagaray, Laureano	
Romaguera, Joaquín	
Roncali y Ceruti, Joaquín	S (V), D, M
Rosa, José Cecilio de la	S (E), D, P
Ruiz Cañabate, Joaquín	

Ruiz Zorrilla, Miguel	D
Salas y Bando, Francisco de Paula	D
Sánchez Mora, Pedro	S (E)
Santa Fe y Salanot, Pablo	
Santías de Fortacin, Alberto	
Santisteban, Julián de	S (V)
Seijas Lozano, Manuel	S (V), D, M
Sicilia y Meca, Trinidad	D
Silvela Blanco, Francisco Agustín	S (V), D, P
Sota y Lastra, Pío de la	M
Subiza, Andrés de	
Tejada, Santiago	S (V), D
Tejada y Valera, J. M.	
Trillo Figueroa, José Mariano	
Ulloa y Rey, Benito de	S (E, V), D, P
Urbina y Daoíz, Felipe	M
Urrea y Cerceda, Anselmo	
Valdés y Barrio, Antonio	S (E), P
Valor, Vicente	S (V), P
Vázquez Mondragón, Luis	S (E)
Vera y Martínez, Francisco de	
Verea y Cornejo, Francisco	S (E), P
Vieites Tapia, Ignacio	S (E), D, Ca
Vigil de Quiñones y Mier, Miguel A.	
Villota Martínez, Manuel Genaro	
Viñas y Vitoria, Felipe	S (E), Ca
Ygon y del Royst, Hilario de	S (D. P), C
Zumalacárregui y de Imaz, Miguel Antonio de	S (E), D, P

3. Motivos de ceses.

3. a. Ceses por motivación política.

Teotimo Escudero (1837)
Diego Martín Villodres (1837)
José Mier y Salcedo (1840)
Manuel Antonio Caballero (1840)
José María Manescáu (1842)
José Rodríguez Busto (1843)
José M. Domenech (1843)
Pascual Madoz (1843)
Francisco Vereá y Cornejo (1843)
J. María Calatrava (1843)
Álvaro Gómez Becerra (1843)
José Landero Corchado (1843)
Eugenio Manuel Cuervo (1843)
Ángel Fernández de los Ríos (1843)
Lorenzo Arrazola (1853)
José Francisco Morejón (1854)
Francisco Agustín Silvela (1854)
José de Castro y Orozco (1854)
José M^a. Huet y Allier (1854)
Ramón López Vázquez (1854)
Joaquín Roncali (1854)
Manuel Antonio Caballero (1854)
Juan M. Carramolino (1854)
Joaquín Gómez de la Cortina (1856)
Félix Herrera de la Riva (1856)
José Portilla y Gutiérrez (1856)
Pedro Gómez de la Serna (1856)
Joaquín Roncali (1859)
Juan M. Carramolino (1859)
Joaquín Roncali (1866)
Manuel J. Posadillo y Bonelli (1866)
Manuel Ortiz de Zúñiga (1867)
José Portilla y Gutiérrez (1867)
Sebastián G. Nandín (1867)
Eusebio Morales (1867)
Juan M. Carramolino (1867)
Joaquín de Palma y Vinuesa (1868)
Hilario de Ygón (1868)
Vicente Ferrer Minguet (1868)
Leandro López Montenegro (1868)
José Muñiz y Alaix (1868)
Antonio M^a. Prida y Sánchez (1868)
Teodoro Moreno (1869)

Antonio G. de los Ríos (1870)
Eugenio Díez de Pedrero (1872)
Álvaro Gil Sanz (1875)
Fernando Pérez Rozas (1875)
Saturnino Álvarez Bugallal (1877)
Antonio de Mena y Zorrilla (1881)
José María Manresa y Navarro (1883)

TOTAL: 50

3. b. Ceses por fallecimiento.

Diego González Alonso (1841)
Demetrio Ortiz (1845)
J. M. Manescau (1850)
Juan Nepomuceno San Miguel (1850)
Nicolás M^a. Garellly (1850)
Manuel Barrio Ayuso (1850)
José Cecilio de la Rosa (1851)
Gregorio Barraicoa Campos (1851)
Ángel Casimiro Govantes (1852)
Pedro Jiménez Navarro (1852)
José Mier y Salcedo (1852)
José M. Galdiano (1853)
Juan Antonio Barona (1854)
Florencio García Goyena (1855)
José Alonso (1855)
Francisco Agustín Silvela (1857)
José M. Trillo Figueroa (1859)
Ramón M. Fonseca (1860)
Joaquín Melchor y Pinazo (1865)
José M^a. Biec (1866)
Manuel García de la Cotería (1866)
José M. Pardo Montenegro (1867)
Pedro Gudal (1867)
Nicolás Peñalver y López (1869)
José Portilla y Gutiérrez (1869)
Joaquín Aguirre de la Peña (1869)
Eusebio Morales Puigdevant (1870)
Narciso López (1871)
Francisco Puget (1871)
Pedro Gómez de la Serna (1871)
Mauricio García Gallo (1873)
Manuel Ortiz Zúñiga (1873)
Trinidad Sicilia Meca (1873)
José Jiménez Mascarós (1874)
Gregorio Juez (1875)
Críspulo García de la Serna (1875)
Lorenzo Cobo de la Torre (1875)
Tomás Huet y Allier (1876)
Victoriano Careaga (1876)
Laureano de Arrieta (1877)
José María Herreros de Tejada (1877)
José M. Cáceres Robles (1878)
Miguel R. Zorrilla (1878)
Cirilo Álvarez (1878)
Ricardo Alzugaray Yanguas (1878)

J. Manuel González Acevedo (1880)
Joaquín Ruiz Cañabate (1881)
Ignacio Vieites (1882)

TOTAL: 48

3. c. Ceses por jubilación a petición propia.

Ángel Casimiro Govantes (1840)
Claudio A. de Luzuriaga (1843)
José Pérez de Rozas (1843)
Ramón Macía Lleopart (1843)
Juan Argüelles Valdés (1844)
Juan Antonio Castejón (1851)
Diego Martín Villodres (1852)
Francisco Olabarrieta (1854)
Joaquín Romaguera (1854)
Luis R. Calameño (1856)
José Mariano Olañeta (1856)
José Rodríguez Busto (1856)
Jorge Gisbert (1859)
Miguel Osca (1861)
Vicente Valor (1862)
Ramón M^a. Arriola (1865)
Fulgencio de la Barrera (1865)
Félix Herrera de la Riva (1865)
Miguel Nájera Mencos (1866)
Anselmo Urra (1866)
Felipe Urbina y Daoíz (1867)
Ramón López Vázquez (1868)
Miguel Bataller (1868)
Antonio Corzo (1869)
Pedro Gómez de la Hermosa (1869)
Francisco de Paula Salas y Bando (1870)
Buenaventura Alvarado (1871)
Luciano de la Bastida (1871)
Joaquín Jaumar de la Carrera (1871)
Valentín Garralda (1871)
Calixto Montalvo (1871)
Francisco de Armesto (1873)
Mariano García Cembreros (1874)
Mariano Maury Gallego (1874)
José Manuel Almonacid (1878)
Sebastián González Nandín (1879)
Manuel M. Basualdo (1879)
Antonio Valdés (1879)
Luis Vázquez Mondragón (1881)
Julián Gómez Inguanzo (1881)
Diego Fernández Cano (1881)

TOTAL: 41

3. d. Ceses por renuncia voluntaria.

Santiago Tejada (1836)
Francisco Fernández del Pino (1840)
Felipe G. Acebo (1843)
Antonio Fernández Castillo (1844)
Andrés Crespo Cantolla (1844)
J. M. Tejada (1844)
Francisco Entrambasaguas (1844)
Ángel Casimiro Govantes (1845)
Joaquín Francisco Pacheco (1846)
Joaquín Francisco Pacheco (1848)
Claudio A. Luzuriaga (1854)
José M^a Domenech (1854)
Claudio A. Luzuriaga (1856)
Luis Mayans (1856)
Manuel Seijas Lozano (1861)
Lorenzo Arrazola (1864)
Joaquín Roncali (1866)
Sebastián de la Fuente (1871)
Juan Cano Manuel (1872)
Juan Cano Manuel (1873)
Francisco Vera Martínez (1873)
Juan Cano Manuel (1876)

TOTAL: 22

3. e. Ceses por ascenso.

Álvaro Gómez Becerra (1840)
José Alonso (1841)
Miguel A. Zumalacárregui (1842)
Joaquín M^a. López (1843)
Florencio García Goyena (1847)
Joaquín José Casaus (1852)
Pablo Gobantes (1853)
Joaquín José Casaus (1858)
José de Castro y Orozco (1858)
Antonio M. Asensio y Bonell (1861)
Antero Echarri (1862)
Sebastián González Nandín (1863)
Domingo Moreno (1864)
Pablo Jiménez Palacio (1865)
Fernando Calderón Collantes (1865)
Rafael Limiciana (1866)
José M^a. Haro (1872)
Pascual Bayarri García (1875)
Juan Jiménez Cuenca (1875)
Salvador Albacete Albert (1879)
Pedro Sánchez Mora (1881)

TOTAL: 21

3. f. Ceses por jubilación obligada

Manuel Genaro Villota Martínez (1836)
Vicente Cano Manuel (1838)
Ramón Giraldo (1843)
José María Tejada Valera (1851)
J. Antonio Almagro (1852)
Miguel A. Vigil de Quiñones (1854)
Joaquín Romaguera (1854)
Pío Laborda y Galindo (1857)
José Gamarra (1863)
Julián Santisteban (1870)
Francisco María Castilla y Calabres (1872)
Benito Posada (1873)
Ramón Díaz Vela (1875)
Alberto Santías (1876)
José Fermín Muro (1878)
Pío de la Sota (1881)
Manuel León Romero (1890)
Hilario de Ygón y del Royst (1892)

TOTAL: 18

V. RESULTADOS.

1. Impacto de cambios en el Tribunal Supremo (1836-1881).

Años	Designaciones	%	Ceses	%
1836	2	0.97%	2	1.02%
1837	0	0	2	1.02%
1838	1	0.48%	1	0.50%
1839	1	0.48%	0	0
1840	9	4.35%	5	2.54%
1841	1	0.48%	3	1.52%
1842	3	1.45%	2	1.02%
1843	17	8.21%	15	7.61%
1844	3	1.45%	6	3.05%
1845	1	0.48%	2	1.02%
1846	0	0	1	0.50%
1847	3	1.45%	1	0.50%
1848	0	0	1	0.50%
1849	1	0.48%	0	0
1850	3	1.45%	4	2.03%
1851	5	2.42%	4	2.03%
1852	4	1.93%	4	2.03%
1853	5	2.42%	3	1.52%
1854	17	8.21%	16	8.12%
1855	2	0.97%	2	1.02%
1856	13	6.28%	9	4.57%
1857	5	2.42%	2	1.02%
1858	4	1.93%	2	1.02%
1859	2	0.97%	4	2.03%
1860	4	1.93%	1	0.50%
1861	2	0.97%	3	1.52%
1862	3	1.45%	2	1.02%
1863	2	0.97%	2	1.02%
1864	4	1.93%	2	1.02%
1865	6	2.90%	7	3.55%
1866	7	3.38%	7	3.55%
1867	7	3.38%	8	4.06%
1868	11	5.31%	8	4.06%
1869	6	2.90%	6	3.05%
1870	9	4.35%	4	2.03%
1871	9	4.35%	10	5.08%
1872	6	2.90%	3	1.52%
1873	2	0.97%	7	3.55%
1874	6	2.90%	3	1.52%
1875	5	2.42%	9	4.57%
1876	3	1.45%	4	2.03%

1877	2	0.97%	3	1.52%
1878	6	2.90%	5	2.54%
1879	4	1.93%	4	2.03%
1880	1	0.48%	1	0.50%
1881	0	0	7	3.55%

46 Años 207 Designaciones 197 Ceses

Designaciones media/año: 4.5
Ceses media/año: 4.28

2. Gráficos.

2. a. comparativa de nombramientos y ceses

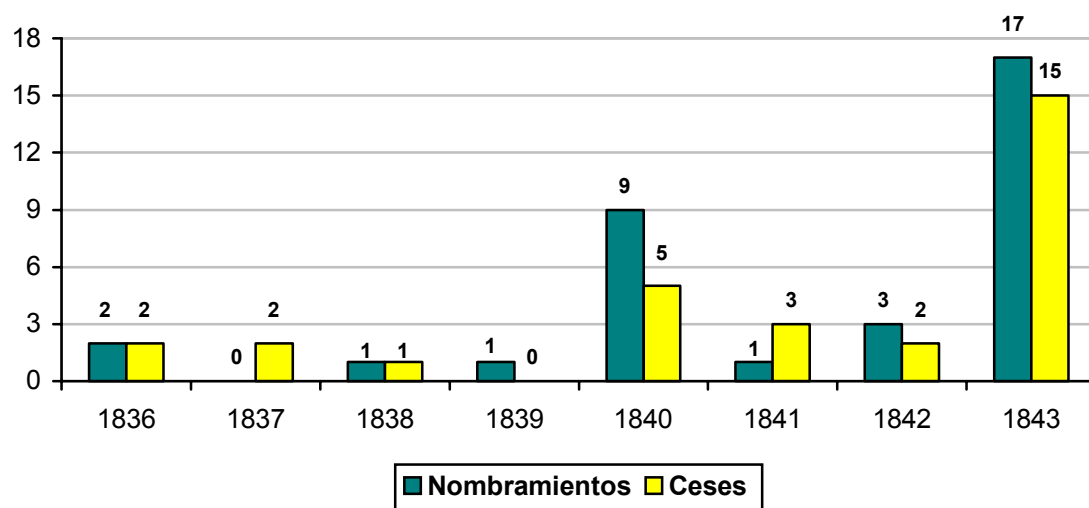


gráfico 1

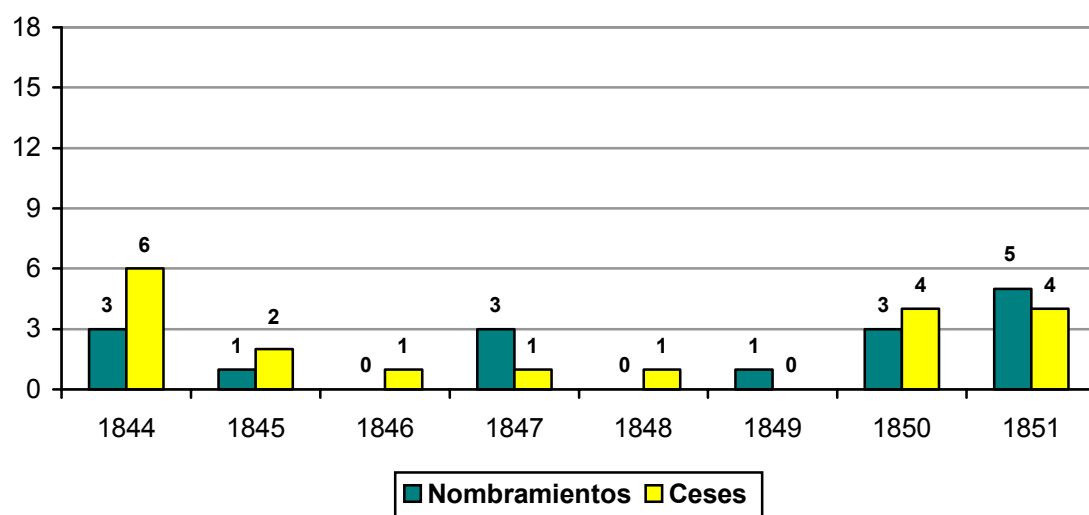


gráfico 2

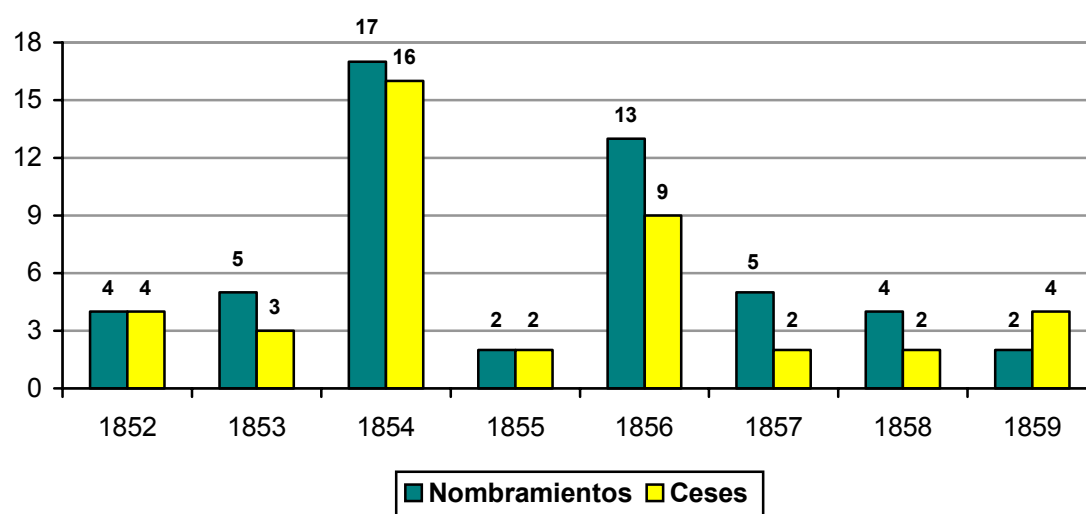


gráfico 3

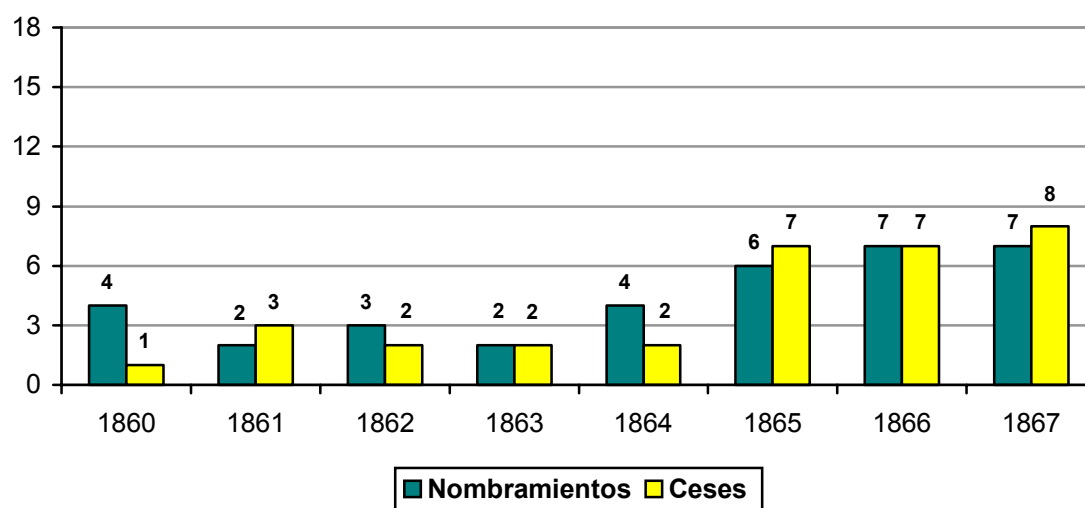


gráfico 4

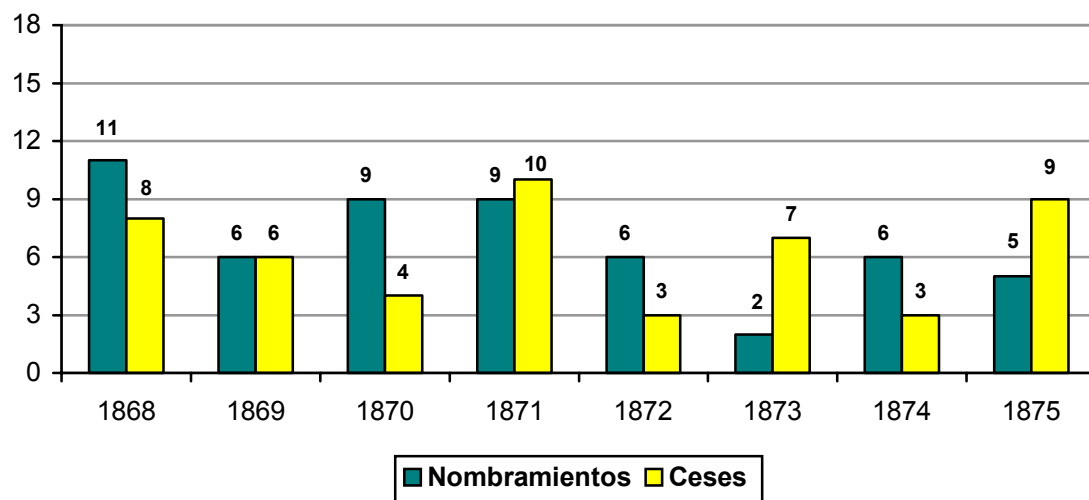


gráfico 5

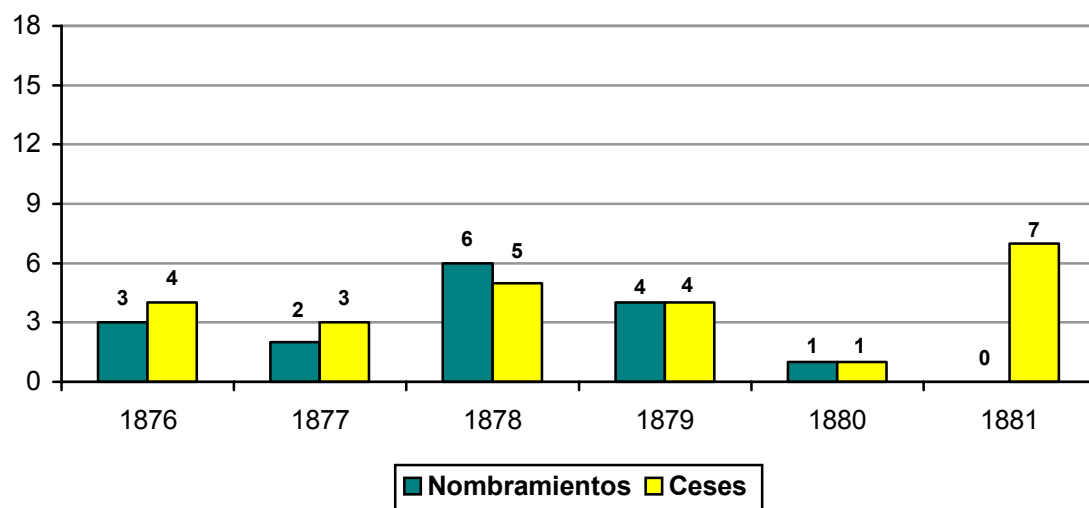
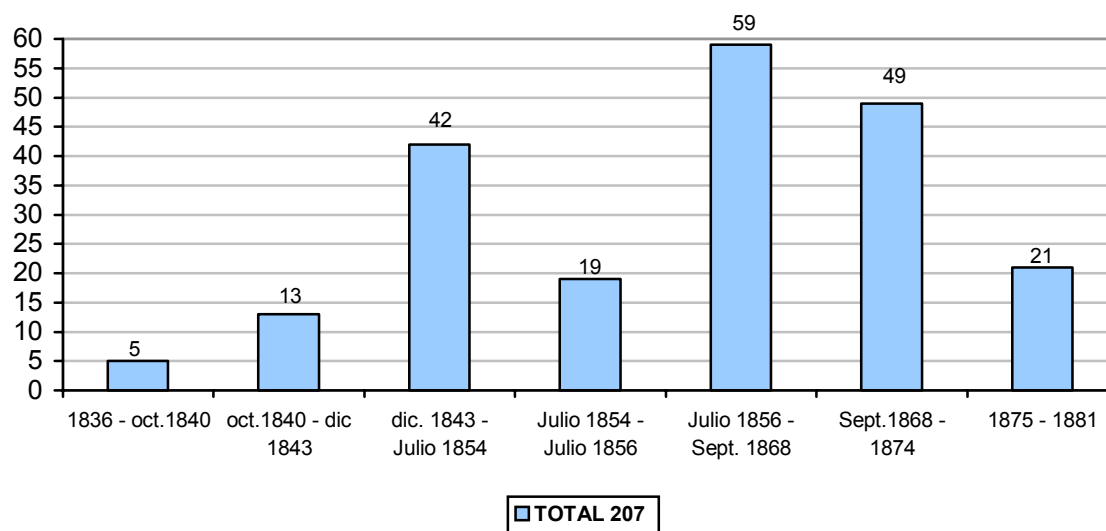


gráfico 6

2. b. designaciones de magistrados

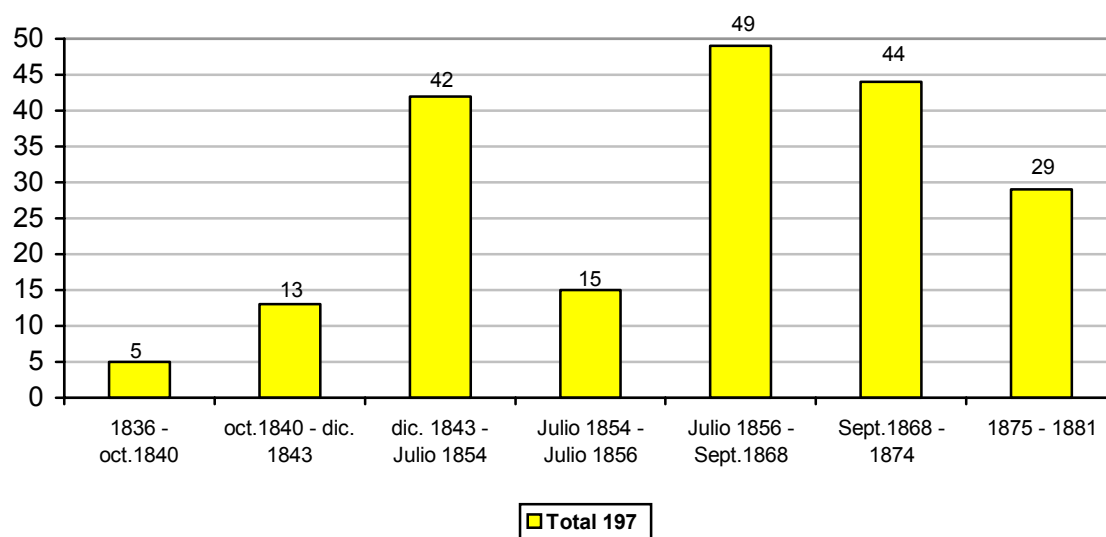


MEDIAS / AÑO

▶ 1836 – oct. 1840	1.2
▶ oct. 1840 – dic. 1843	4.3
▶ dic. 1843 – julio 1854	3.8
▶ julio 1854 – julio 1856	9.5
▶ julio 1856 – septiembre 1868	4.9
▶ septiembre 1868 – 1874	8.1
▶ 1875 – 1881	3.5

gráfico 7

2. c. ceses de magistrados



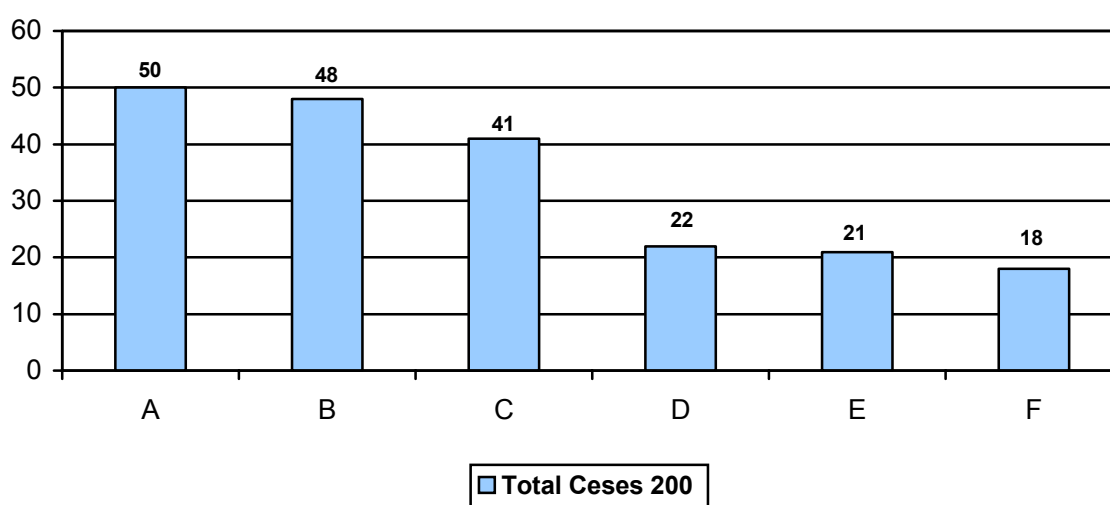
MEDIAS / AÑO

▶ 1836 – oct. 1840	1
▶ oct. 1840 – dic. 1843	4.3
▶ dic. 1843 – julio 1854	3.8
▶ julio 1854 – julio 1856	7.5
▶ julio 1856 – sept. 1868	4.08
▶ sept. de 1868 – 1874	7.3
▶ 1875 – 1881	4.8

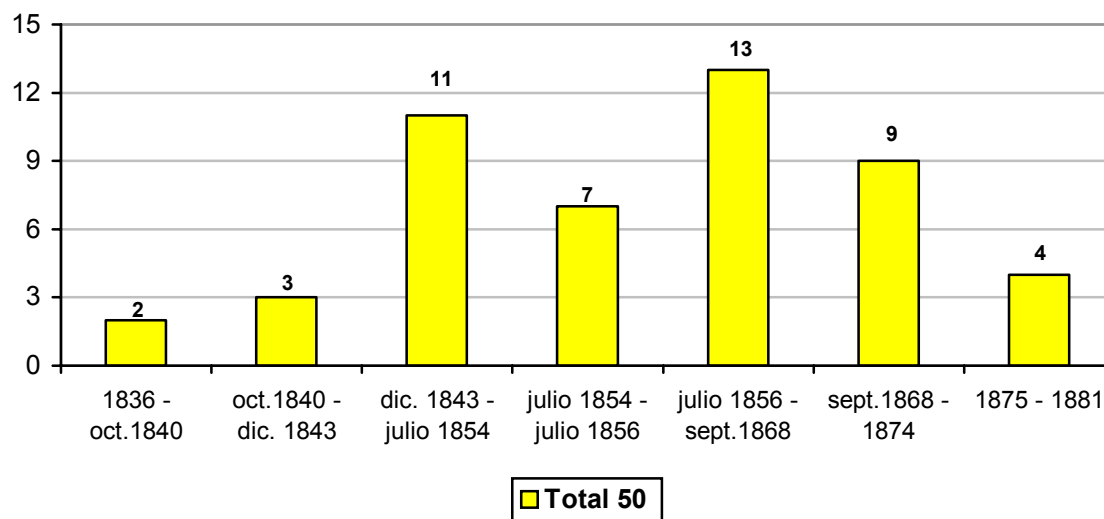
gráfico 8

2. d. motivo de cambio de los magistrados

A. Ceses por motivación política	50 (25%)
B. Ceses por fallecimiento	48 (24%)
C. Ceses por jubilación a petición propia	41 (20.5%)
D. Ceses por renuncia	22 (11%)
E. Ceses por ascenso	21 (10.5%)
F. Ceses por jubilación técnica	18 (9%)



2. e. ceses por motivaciones políticas



- El cese de D. José Manresa y Navarro se produce en 1887, fuera del periodo de estudio.

MEDIAS / AÑO

▶ 1836 – oct. 1840	0.5
▶ oct. 1840 – dic. 1843	1
▶ dic. 1843 – julio 1854	1
▶ julio 1854 – julio 1856	3.5
▶ julio 1856 – sept. 1868	1.08
▶ sept. 1868 – 1874	1.4
▶ 1875 – 1881	1.3

gráfico 10

2. f. condición política de los magistrados

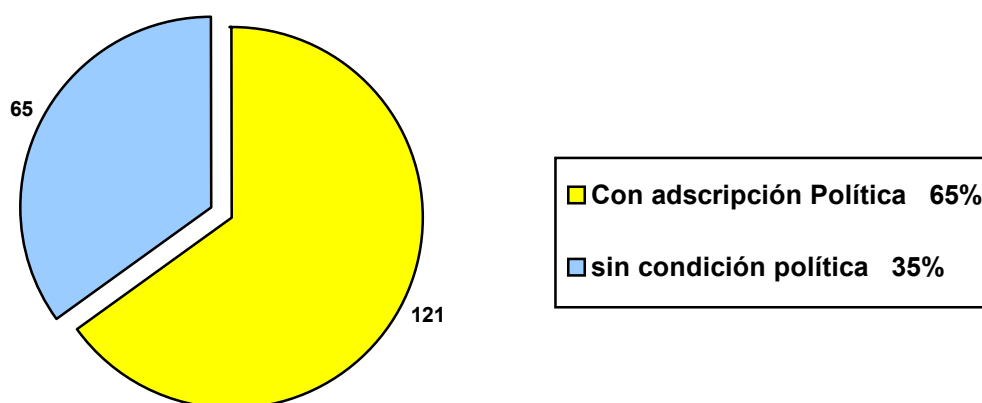
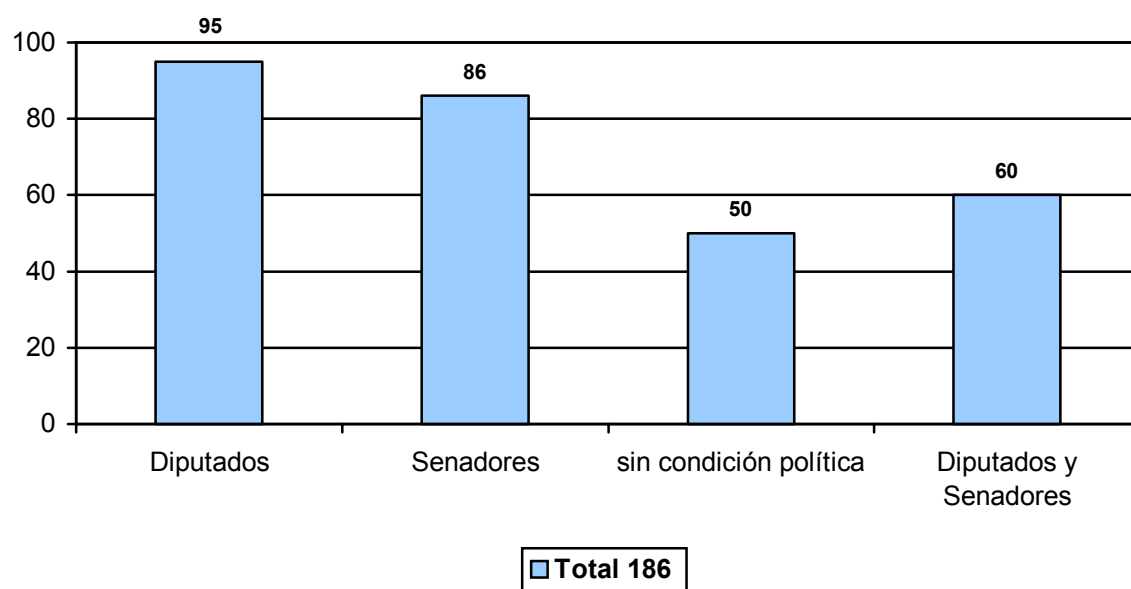


gráfico 11

2. g. adscripción ideológica de los magistrados

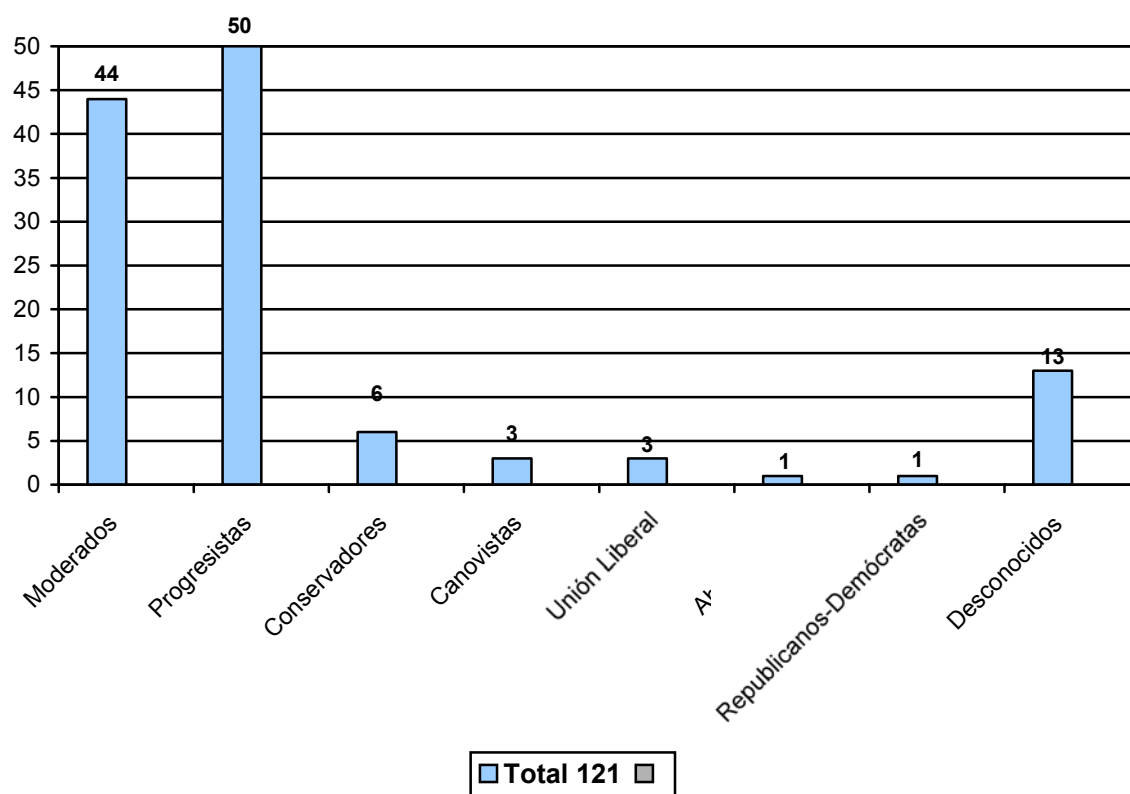
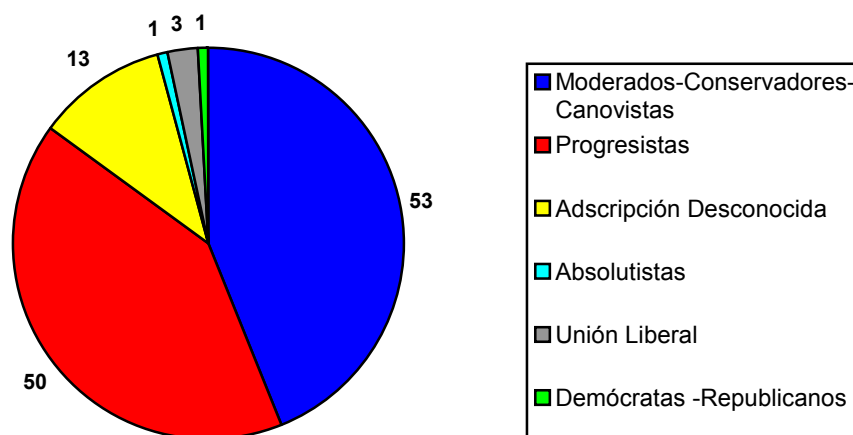


gráfico 12



2. h. tendencias de politización de los magistrados

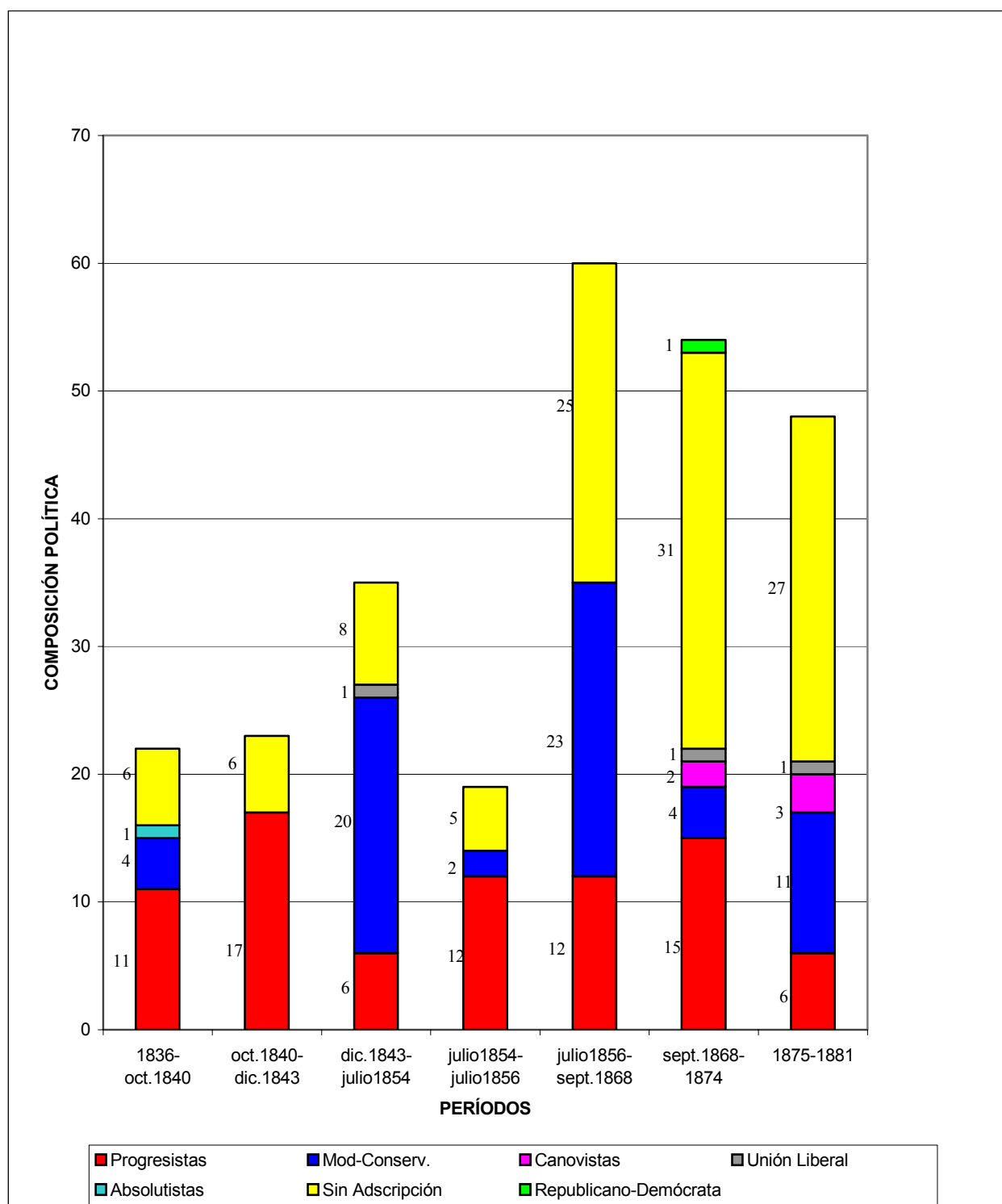


gráfico 13

2. i. índices de politización e independencia de los magistrados

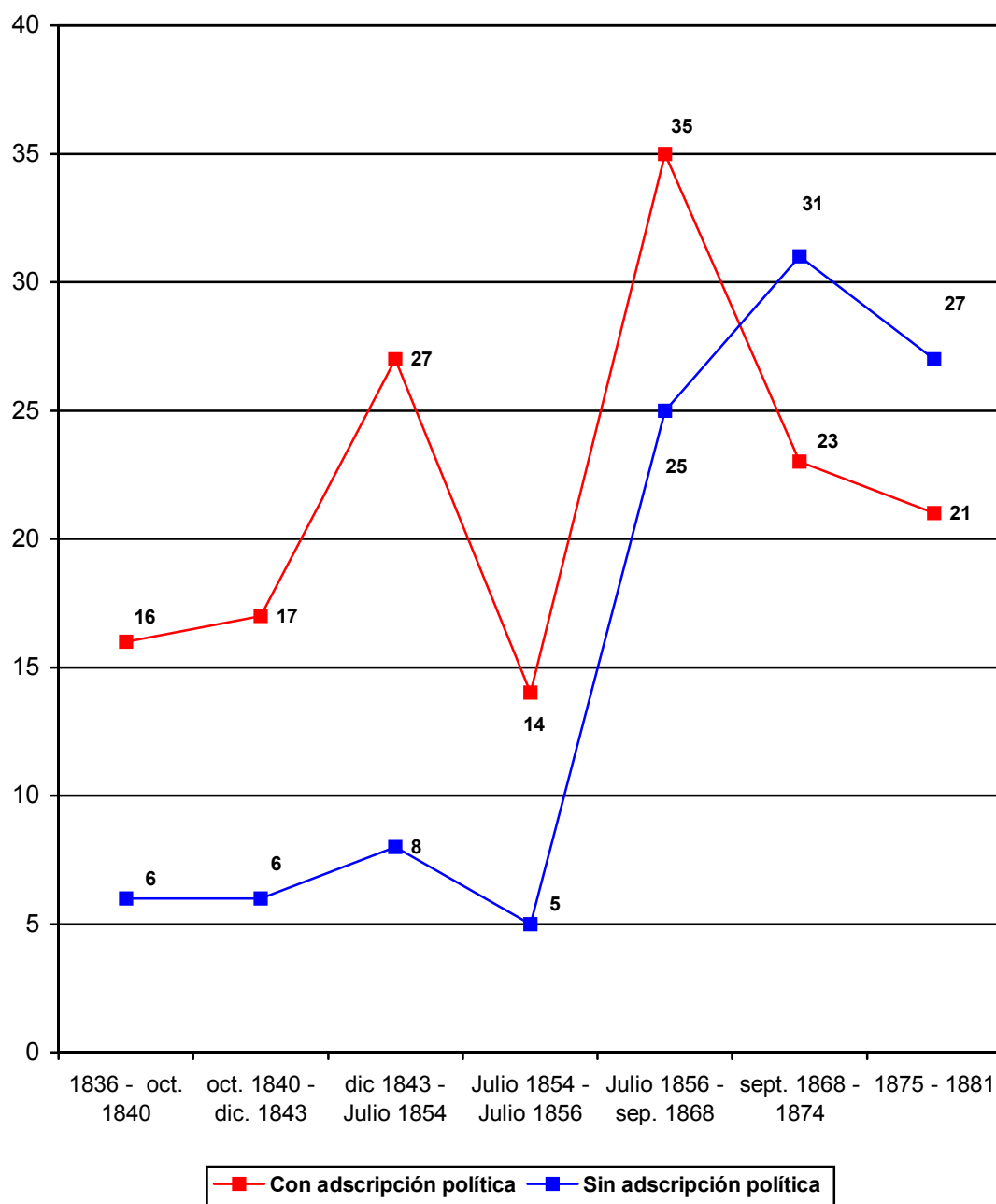
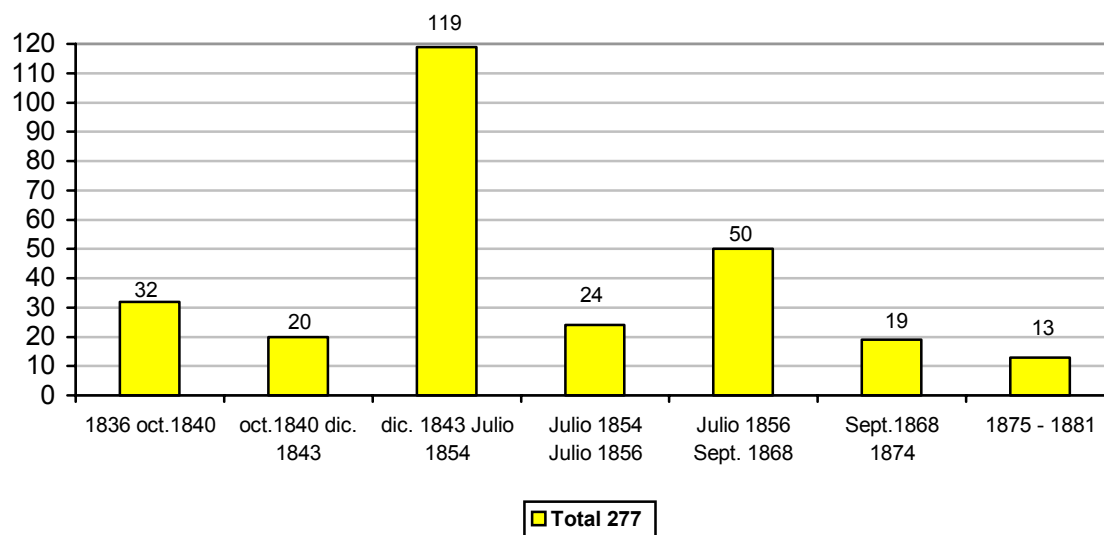


gráfico 14

2. j. incidencias normativas referidas al Tribunal Supremo



MEDIAS / AÑO

► 1836 – oct. 1840	6.4
► oct. 1840 – dic. 1843	6.6
► dic. 1843 – julio 1854	10.8
► julio 1854 – julio 1856	12
► julio 1856 – sept. 1868	4.1
► sept. 1868 – 1874	3.1
► 1875 – 1881	2.1

gráfico 15

VI. CONCLUSIONES

Tratando de responder a los interrogantes planteados en la hipótesis de trabajo inicial de esta Tesis, y en consonancia con los datos obtenidos fruto de la investigación de las fuentes y documentos expresados en la parte primera, expongo las siguientes conclusiones que se corresponden de una parte con las decisiones políticas que directamente afectaron a los magistrados que entraron o salieron del alto tribunal, y de otra parte que se corresponden con la iniciativas legislativas desarrolladas por los distintos gobiernos y que incidieron en el Tribunal como institución jurídica y que no estuvieron exentas a los intentos de injerencia y control de su actividad y funcionamiento.

1. en orden a la politización de los magistrados:

1. De los 186 magistrados y fiscales del Tribunal Supremo estudiados en el período comprendido (1836-1881), 121 ostentaron representación política, 95 tuvieron la condición de diputados y 86 la de senadores (60 compatibilizaron ambas condiciones); esta representatividad política, alcanzó el 65% del total del colectivo de los magistrados del Tribunal Supremo en ese período de tiempo. Por ello debemos decir que el Tribunal Supremo en términos globales fue un órgano politizado en este período (ver gráfico 11).
2. De los 121 magistrados que tuvieron condición política: 53 formaron parte del ámbito moderado-conservador, 50 formaron parte del ámbito liberal-progresista, en el centrismo representado por la Unión Liberal (3), en el sector absolutista (1) y en el sector demócrata-republicano (1). De 13 magistrados desconocemos, después de la investigación realizada, con que ideología o partido político tuvieron vinculación.. Las adscripciones políticas se detallan con más precisión (ver gráfico 12).
3. El intervencionismo y la injerencia política, en materia referida a designaciones y ceses de magistrados en el Tribunal Supremo, fue la tónica general en los períodos de hegemonía progresista y moderada, como se constata en los gráficos (ver gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
4. En los períodos de gobiernos políticos progresistas, hubo mayoría de magistrados progresistas, al igual que en los períodos de gobiernos políticos moderados o conservadores hubo predominio de magistrados afines a dichos postulados (ver gráfico 13). Pero es más notorio y radical el posicionamiento de los gobiernos progresistas a favor de magistrados afines a sus postulados

(ver los gráficos 7 y 8 las medias/año del Bienio progresista y del Sexenio Revolucionario).

5. El período revolucionario (octubre 1840-diciembre 1843), fue el momento de mayor radicalidad en materia de control del Tribunal Supremo, pues la gran mayoría (16) de sus miembros, eran notorios representantes del bando progresista; la facción moderada fue aniquilada y no tuvo ningún miembro a pesar de existir puestos vacantes en determinados intervalos de tiempo (en el transcurso de este período llegaron a producirse hasta tres vacantes que se prolongaron en exceso, evidenciando una escasa voluntad política de dotarlas por razones “presumibles”) (ver gráfico 13).
6. En el período del moderantismo (julio 1856-septiembre de 1868), existió un esfuerzo considerable por consolidar la independencia judicial, que se materializó en un considerable avance a favor de los magistrados sin condición política (25) con respecto a los períodos anteriores, frente a los considerados pertenecientes a la clase política (35). Hasta ese momento la presencia de magistrados significados con ideología política superaron con creces a los estrictamente independientes en una proporción aproximada de tres a uno (ver gráfico 14).
7. Durante el Sexenio Revolucionario (septiembre 1868-1874) debemos distinguir dos momentos diferenciados: antes de la LOPJ y después (1870). Se consiguió por primera vez marcar un punto de inflexión con la promulgación del nuevo texto a favor de la independencia judicial en el alto tribunal. La celeridad con que se llevó a la práctica la LOPJ pone de manifiesto que cuando existe voluntad política de cambio, ésta se produce. La relación en ese período fue de 31 magistrados independientes frente a 23 que procedían de alguna fila ideológica (ver gráfico 14).
8. La Restauración (1875-1881) mantuvo en líneas generales esas constantes, aunque afloraron de nuevo algunos atisbos de intromisión política en el quehacer de la administración judicial. Hubiera entrado en la lógica pensar que las distancias se reducirían con el paso de los años, pero esto no fue exactamente así y esto se contrasta con la designación de magistrados militantes del partido en el gobierno. La relación se mantenía en 27 magistrados independientes frente a 21 políticos (ver gráfico 14).
9. De los 200 ceses de magistrados que se registraron y que son analizados en esta Tesis, 50 obedecieron (así se expresa en los documentos analizados) directamente a razones políticas de desafección hacia el régimen político existente. A esta cifra deberíamos añadir 3 casos más, de entre las renunciaciones voluntarias que deduzco son de razón política y otros 7 casos, de entre las jubilaciones a petición propia (son cuestiones no totalmente esclarecidas a través de las fuentes consultadas y sí deducidas por análisis paralelos). Tendríamos por ello un total de 60 ceses o separaciones que no se arbitraron con fundamentos objetivos ó técnicos a la luz de la legalidad vigente según se

desprende de la información existente, lo que constituye un 30% del porcentaje total. Los ceses más numerosos obedecieron a motivaciones políticas con un 25% (ver gráfico 9).

10. En los años en que se produjeron pronunciamientos o revoluciones políticas que conllevaron cambios de gobierno (1840, 1843, 1854, 1856, 1868) nos encontramos con el mayor número de designaciones y ceses en términos reales, produciéndose una relación directa causa-efecto incuestionable provocada por el acceso de los nuevos gobiernos y los cambios inmediatos (ver gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
11. A este mismo nivel cuantitativo de cambios se encuentra el año 1871, pero por motivos bien distintos: entró en vigor la LOPJ y se produjeron muchos reajustes que se derivaron del desarrollo de la propia Ley (ver gráfico 5).
12. En materia de nombramientos, destaco dos períodos fundamentales de alto intervencionismo del poder político en el Tribunal Supremo:
 - a) Bienio progresista (1854-1856). con un índice de designaciones de 9.5/año⁶⁰¹ y con un índice de 7,5 ceses/año.
 - b) Sexenio Revolucionario (1868-1874): con un índice de 8.1 designaciones/año y un índice de 7,3 ceses/año.

Como se observa existe una justa correspondencia. En el polo contrario destacamos el período (1836-octubre 1840): con un índice de 1.2 designaciones/año y 1 cese/año. De todo ello deducimos que en los períodos de mayoría progresista existió un mayor intervencionismo en el Tribunal Supremo por vía directa en las designaciones y ceses de sus magistrados (ver gráficos 7 y 8).

2. en el orden normativo

1. En el cómputo global del desarrollo normativo referido al Tribunal Supremo, el período moderado-conservador es más prolífico en términos absolutos en actuaciones legales que el período liberal-progresista: 182 acciones frente a 95 (ver gráfico 15).
2. Sin embargo, en términos relativos es el Bienio progresista (1854-1856), una vez más, el período de mayor actividad legislativa: en el transcurso de dos años se promulgaron 24 textos legales referidos al Tribunal Supremo (lo que supone una media de 12 acciones/año. En el polo opuesto estaría la época de la Restauración (1875-1881) con una media de 2,1 acciones/año (ver gráfico 15).

⁶⁰¹ Los índices son la media que resulta de la división que se produce entre los nombramientos totales divididos entre los años del período correspondiente y ceses totales entre años del período.

3. Después de la promulgación de la LOPJ en 1870, la incidencia normativa, con independencia de los períodos políticos, es notablemente inferior, puesto que su desarrollo supuso una evidente estabilización en el estamento judicial (ver gráfico 15).
4. Pese a los pronunciamientos constitucionales en defensa de la independencia judicial y sus instrumentos fundamentales: la inamovilidad y la responsabilidad, fue una constante, hasta 1870, la separación de los magistrados por parte de las instancias gubernativas y políticas.
5. La aparición del recurso de casación (definitivamente a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855), supuso, con independencia de los nuevos usos procesales, y como competencia exclusiva del Tribunal Supremo, un instrumento atractivo para el poder político, en cuanto a la capacidad que le confería de unificar jurisprudencia. Este hecho queda contrastado en el capítulo correspondiente. Existió un interés claro por designar magistrados en connivencia con el poder político en la sala de casación.
6. La jurisdicción contencioso-administrativa fue un ámbito exclusivo de la instancia gubernativa (Consejo Real y después Consejo de Estado), hasta el decreto de 16 de Octubre de 1868 (salvo un intento infructuoso de creación en 1858 de un Tribunal contencioso-administrativo), el cual contemplaba la existencia de una sala específica para dicha materia, quebrándose hasta ese momento el principio de la división de poderes.
7. Con la Restauración y a través del decreto de 27 de enero de 1875, por el que se reorganizaba la planta del Tribunal Supremo, se volvió a intervenir la jurisdicción retenida a favor del Consejo de Estado, es decir se volvía a la intromisión de la instancia político-gubernativa en la jurisdicción ordinaria.
8. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, definió la carrera judicial y permitió una estabilidad evidente en los años siguientes para la administración de justicia como se constata en el gráfico 14.
9. El poder político intervino en el funcionamiento y composición de la Comisión de Códigos creada por Real decreto de 19 de agosto de 1843 (llamada después Comisión de Codificación), verdadero órgano arbitral y técnico de las principales reformas de la administración de justicia en todos los períodos políticos. Esa intervención fue directa a través de la designación de sus miembros o indirecta, otorgándole escasas competencias o menoscabando sus aportaciones y propuestas. En el capítulo de la politización del Tribunal hago un recorrido histórico de los miembros que compusieron la Comisión de Codificación y su funcionamiento.
10. La figura del magistrado cesante reconocida en el transcurso de todo el período, fue utilizada como elemento de politización hasta 1870 (a esta condición accedían algunos magistrados desafectos al poder político, en

situación de interinidad y con los perjuicios económicos y de mérito que ello conllevaba). Después de 1870 siguió existiendo esta figura contemplada en la Ley pero con funciones perfectamente delimitadas y objetivas.

11. Desde 1843 a 1850 existió una intromisión directa del poder político en el Tribunal Supremo al contemplar la ley el hecho de que el Presidente de dicho órgano debía ser el ministro de Gracia y Justicia correspondiente.

VII. RELACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y SU
CARRERA JUDICIAL (1836-1881)

JOAQUÍN AGUIRRE DE LA PEÑA

Destinos y cargos en la carrera judicial:

4 diciembre 1841:	Oficial tercero de la secretaría del Despacho del Ministerio de Gracia y Justicia.
25 noviembre 1843:	Oficial segundo de dicha secretaría.
15 diciembre 1843:	Renuncia a la plaza de oficial primero de la secretaría, por ser Diputado a Cortes por la provincia de Navarra.
8 agosto 1854:	Subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia.
5 octubre 1854:	Vuelve a su anterior destino.
29 noviembre 1854:	Ministro de Gracia y Justicia.
6 junio 1855:	Cesa.
13 octubre 1868:	Presidente del Tribunal Supremo, por jubilación de Ramón López Vázquez.
19 julio 1869:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 meses.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en 1843 por Navarra.

Diputado en 1854 por Soria.

Diputado en 1859-1863 por el distrito de Río de Madrid.

Diputado en 1869 por Madrid.

Adscripción política: progresista

Identificado con los progresistas el 7 de diciembre de 1843 dijo “que en el día podría suceder, que mis convicciones como Diputado estén en oposición con las del gobierno”.

Siendo diputado a fines de 1843, presentó su dimisión en su plaza del ministerio, dando así muestras de consecuencia política.

En julio de 1854 formó parte de la Junta de salvación y defensa.

En 1865 fue nombrado para ocupar una de las cuatro vicepresidencias del partido progresista.

Formó parte del partido progresista y por ello presidió la Junta Revolucionaria de Madrid en septiembre de 1868.

Joaquín Aguirre fue uno de los hombres más importantes del partido progresista en el que venía figurando desde 1837.

Tareas legislativas:

Participó en las Cortes Constituyentes de 1869 como vocal de la Comisión redactora del proyecto de Constitución.

Archivo del Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces, l. 556, n. 12.

SALVADOR ALBACETE Y ALBERT

Destinos y cargos en la carrera judicial:

22 octubre 1878:	Fiscal del Tribunal Supremo, por fallecimiento de Ricardo Alzugaray.
19 marzo 1879:	Cese por ser nombrado ministro de Ultramar.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 meses.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado de Puerto Rico de 1876 a 1880.

Diputado por Cartagena (Murcia) de 1879 a 1884.

Diputado por La Habana (Cuba) de 1886 a 1890.

Senador en 1884-1885 por Murcia.

Adscripción política: canovista.

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos l. 4261, n. 255.

RAFAEL ALCARÁZ Y RAMOS

Destinos y cargos en la carrera judicial:

1880: Ministro del Tribunal Supremo.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4256, n. 219.

JUAN ANTONIO ALMAGRO Y SALAS

Destinos y cargos en la carrera judicial:

19 abril 1826:	Alcalde del Crimen de Extremadura.
1 abril 1831:	Oidor de Mallorca.
30 diciembre 1832:	Oidor de Sevilla (Oidor del Consejo Navarra).
18 marzo 1834:	Ministro de la Audiencia de Granada.
10 octubre 1834:	Regente de la Audiencia de Albacete.
15 octubre 1836:	Cesante a petición propia de la Regencia de Albacete.
13 abril 1844:	Presidente de la sala 1ª de la Audiencia de Madrid y a la vez magistrado entrante.
1 marzo 1850:	Regente de la Audiencia de Madrid.
19 agosto 1850:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Juan Nepomuceno Fernández S. Miguel.
5 noviembre 1852:	Se jubila (a los 80 años).

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas:

Senador en 1844-1845 por Baleares.

No tiene ninguna valoración política, ni en su expediente existe el informe preceptivo de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino.

JOSÉ MANUEL ALMONACI Y MORA

Destinos y cargos en al carrera judicial:

10 mayo 1836:	Juez de 1ª instancia de Priego.
31 enero 1841:	Juez de 1ª instancia de Jaén.
17 marzo 1841:	Fiscal de la Audiencia de Zaragoza.
20 agosto 1843:	Fiscal de la Audiencia de Pamplona.
2 julio 1844:	Es declarado cesante.
3 febrero 1855:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
26 abril 1855:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
2 mayo 1855:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
10 julio 1868:	Se le declara cesante.
14 octubre 1868:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Granada.
17 marzo 1870:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Francisco de Paula Salas.
20 septiembre 1878:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas:

En enero de 1836 el Regente de la Audiencia de Granada y el gobernador de Jaén emiten informes favorables en todos los conceptos.

El 8 de febrero de 1838 un senador de Córdoba juzga conveniente su separación y otro expresa:

“que los clamores contra este juez eran debidos al excesivo rigor de las causas formadas contra los que tuvieron la más pequeña parte en el alzamiento que a favor del Príncipe rebelde había tenido lugar en Priego”.

El 22 de febrero de 1838 fue separado por indolencia, y el 26 de marzo el ayuntamiento constitucional de Priego pidió su reposición por juzgar malintencionados los informes previos de sus enemigos carlistas.

El 20 de marzo de 1870 se le declara inamovible.

El 21 de enero de 1871 se le declara idóneo.

JOSÉ ALONSO RUIZ CONEJARES

Destinos y cargos en la carrera judicial:

14 febrero 1810:	Alcalde del Consejo de Navarra.
16 abril 1813:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
3 julio 1820:	Oidor de la Audiencia de Valencia.
14 febrero 1822:	Regente de la Audiencia de Aragón.
19 mayo 1827:	Abogado en la Corte.
4 diciembre 1829:	Solicita la Asesoría del Procurador General de las Órdenes Militares.
9 febrero 1834:	Oidor Supernumerario de la Audiencia de Madrid.
19 septiembre 1835:	Regente de la Audiencia de Madrid.
13 noviembre 1836:	Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
28 diciembre 1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
21 mayo 1841:	Ministro de Gracia y Justicia.
27 junio 1842:	Cesa.
11 febrero 1843:	Se le repone como Ministro del Tribunal Supremo.
30 julio 1854	Ministro de Gracia y Justicia
28 noviembre 1854	Cesa
8 diciembre 1854:	Presidente del Tribunal Supremo.
13 abril 1855:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en Cortes en 1836 por Navarra.

Diputado en Cortes en 1841 por Ávila.

Diputado en Cortes en 1841 por Navarra.

Diputado en Cortes en 1843 por Ávila.

Diputado en Cortes en 1846 por Madrid.

Diputado en Cortes en 1854 por Ávila.

Diputado en Cortes en 1854 por Burgos.

Diputado en Cortes en 1854 por Navarra.

Adscripción política: liberal-progresista.

Participó en las acciones de los liberales exaltados en el período del Trienio Constitucional. Se le abrió un expediente de justificación.

Tareas legislativas:

Formó parte de la Comisión de Codificación especial nombrada en 1837 para la organización de tribunales.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 567, n. 47.

BUENAVENTURA ALVARADO Y SOTOMAYOR

Destinos y cargos en la carrera judicial:

14 junio 1834:	Alcalde Mayor interino de la Puebla de Trives.
1840:	Separado por la Junta de la provincia.
18 abril 1841:	Juez de Toro (en propiedad).
19 septiembre 1843:	Juez de Primera Instancia en Zamora.
13 agosto 1847:	Juez de 1ª Instancia del distrito del Pilar de Zaragoza.
20 junio 1851:	Fiscal de la Audiencia de Burgos.
4 noviembre 1854:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
20 abril 1858:	Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
10 abril 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
6 febrero 1871:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en 1836 por Orense.

Diputado en 1837 por Orense.

Diputado en 1843 por Orense.

Diputado en 1864 por Puebla de Trives (Orense).

Informes favorables (1840, 1841) sobre el desempeño de sus funciones.

El 16 de diciembre de 1870 la Junta calificadoras de magistrados y jueces en virtud del artículo 28 del reglamento le confirma en su puesto.

No existen quejas judiciales y su observancia a la situación política.

SATURNINO ÁLVAREZ BUGALLAL

Destinos y cargos en la carrera judicial:

27 febrero 1875:	Fiscal del Tribunal Supremo por fallecimiento de Crispulo García y Gómez de la Serna.
11 julio 1877: 6 enero 1879	Se le declara cesante. Ministro de Gracia y Justicia

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado de 1858 a 1863 por Bande (Orense).
Diputado en 1863 por Tuy (Pontevedra).
Diputado en 1865 por Ginzo de Limia (Orense).
Diputado en 1865 por Vigo (Pontevedra).
Diputado en 1869 por Vigo (Pontevedra).
Diputado en 1871 por Bande (Orense).
Diputado en 1872 por Ponteareas (Pontevedra).
Diputado en 1876 por Orense.
Diputado en 1876 por Bande (Orense).
Diputado en 1879 por Ponteareas (Pontevedra).
Diputado en 1879 por Orense.
Diputado en 1879 por Celanova (Orense).
Diputado de 1881 a 1884 por Bande (Orense).
Diputado en 1884 por Ponteareas (Pontevedra).
Senador en 1884-1885 por Orense.

Hizo campaña de oposición al gabinete de Narváez bajo el criterio y en nombre del partido liberal conservador.

Ver apéndice documental

CIRILO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial:

8 enero 1872:	Presidente del Tribunal Supremo por fallecimiento de Pedro Gómez de la Serna.
6 noviembre 1878:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en 1853 por Burgos.

Diputado en 1854 por Burgos.

Senador en 1858-1860, 1871-1872, 1877 por Burgos y vitalicio.

Adscripción política: liberal-progresista.

Procede de la escuela liberal. Expresó su apoyo a la Unión Liberal en 1868. Abogó por un código político en el que pudieran funcionar todos los partidos constitucionales.

La Diputación Provincial de Burgos el 9 de noviembre de 1837:

“D. Cirilo Álvarez como diputado provincial no ha dejado cosa que desear llenando con celo y desempeñando cuantas comisiones se le han confiado muchas de ellas arduas y delicadas; como Abogado merece buen concepto y honra por sus conocimientos de la noble profesión que ejerce. En cuanto su adhesión a la causa la Diputación le reconoce adicto en sumo grado e identificado en todo con ella”.

Tareas legislativas:

Miembro de la Comisión de Codificación.

RICARDO ALZUGARAY YANGUAS

Destinos y cargos en la carrera judicial:

11 julio 1877:	Fiscal del Tribunal Supremo en sustitución de Saturnino Álvarez Bugallal que se declara cesante.
octubre 1878:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado a Cortes en 1864 por Pamplona (Navarra).

Diputado a Cortes en 1869 por Estella (Navarra).

Diputado a Cortes en 1872 por Lalín (Pontevedra).

Diputado a Cortes en 1876 por Alcoy (Alicante).

Diputado a Cortes en 1876 por Lalín (Pontevedra).

(*) Archivo del Congreso de los Diputados, Expediente Desaparecido, Guía de Forasteros en Madrid, 1878

EUGENIO DE ANGULO Y REGÚLEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial:

15 abril 1841:	Juez de 1ª instancia de Santo Domingo de la Calzada.
28 diciembre 1843:	Relator de la Audiencia de Burgos.
4 mayo 1854:	Juez de 1ª instancia de término.
8 febrero 1856:	Juez de 1ª instancia de las afueras del Mediodía de esta Corte.
14 abril 1856:	Juez de 1ª instancia del distrito del Prado.
31 octubre 1856:	Juez del Barquillo.
30 septiembre 1859:	Juez de 1ª instancia del distrito de Lavapies.
13 enero 1860:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
19 julio 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
17 marzo 1870:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
20 mayo 1872:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
16 enero 1873:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Francisco Vera Martínez.
30 septiembre 1884:	Solicita su jubilación.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas:

El jefe político de Burgos el 28 de agosto de 1840 acredita: “su sincera adhesión a la Constitución y al trono legítimo”.

La Audiencia de Burgos dice el 17 de marzo de 1841:

“En el sostenimiento de la Constitución ha sacrificado hasta sus principales intereses”.

Desempeñó interinamente la auditoria de guerra del ejército de la izquierda de 1837 a 1839.

El 26 de abril de 1875 se le declara inamovible.

Ver apéndice documental

JUAN ARGÜELLES VALDÉS

Destinos y cargos en la carrera judicial:

31 agosto 1817:	Juez Mayor de Vizcaya.
24 junio 1820:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
20 mayo 1834:	Regente de la Audiencia de Asturias.
14 septiembre 1839:	Ministro del Tribunal Especial de Órdenes.
28 noviembre 1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
14 junio 1844:	Se jubila a petición propia por avanzada edad y motivos de salud.
14 agosto 1845:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas:

No hay informes políticos.

FRANCISCO ARMESTO Y LÓPEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial:

26 septiembre 1839:	Promotor Fiscal de Lugo.
20 noviembre 1839:	Promotor Fiscal de Gerona.
6 abril 1840:	Promotor Fiscal de Lugo.
10 mayo 1840:	Promotor Fiscal de Ciudad Real.
10 marzo 1841:	Promotor Fiscal de Lugo.
12 enero 1844:	Juez de Vivero.
8 noviembre 1846:	Juez de Toro.
30 abril 1847:	Juez de 1ª instancia de Valladolid.
3 febrero 1854:	Juez de distrito de San Antonio (Cádiz).
10 febrero 1854:	Juez de 1ª instancia de Santander.
21 julio 1855:	Juez de 1ª instancia de Vitoria.
8 febrero 1856:	Juez de 1ª instancia del distrito de Palacio (Madrid).
17 septiembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
2 enero 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
17 marzo 1870:	Regente de la Audiencia de Burgos.
17 junio 1870:	Ministro del Tribunal Supremo.
27 febrero 1873:	Se le jubila a petición propia y por razones de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas:

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino dice que su conducta política es irreprochable en favor del trono y libertades.

El 13 de septiembre de 1840 cooperó con la mayor eficacia al patriótico alzamiento, mereciendo haber sido elegido individuo de la Junta de Provincia.

En 1846 informes favorables del Regente de La Coruña.

El 17 de diciembre de 1870 es declarado idóneo por la Junta de Calificación de jueces y magistrados.

El 29 de enero de 1871 es declarado inamovible.

LORENZO ARRAZOLA GARCÍA

Destinos y cargos en la carrera judicial:

9 diciembre 1838:	Ministro de Gracia y Justicia.
20 julio 1840:	Cesa.
13 febrero 1846:	Ministro de Gracia y Justicia.
16 marzo 1846:	Cesa.
17 abril 1847:	Fiscal del Tribunal Supremo.
4 octubre 1847:	Ministro de Gracia y Justicia.
19 octubre 1849:	Cesa.
20 octubre 1849:	Ministro de Gracia y Justicia.
14 enero 1851:	Cesa.
23 enero 1851:	Presidente del Tribunal Supremo.
15 junio 1853:	Se le declara cesante.
17 octubre 1856:	Repuesto.
1 marzo 1864:	Dimite.
16 septiembre 1864:	Ministro de Gracia y Justicia.
21 junio 1865:	Cesa.
10 julio 1866:	Ministro de Gracia y Justicia.
27 junio 1867:	Cesa.
23 Febrero 1873:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en 1837 por Valladolid.

Diputado en 1839 por Valladolid.

Diputado en 1839 por Zamora.

Diputado en 1840 por Valladolid.

Diputado en 1840 por Zamora.

Diputado en 1844 por Valladolid.

Diputado en 1844 por Zamora.

Diputado en 1846 por Benavente (Zamora).

Senador vitalicio en 1848-1849 por Burgos y electivo en 1872.

Adscripción política: liberal moderado. Perteneció a gobiernos conservadores.

Rechazó formar parte de la Comisión General de Codificación por su condición política.

Perseguido por la Revolución de 1840.

Tareas legislativas:

La ley de 16 de diciembre de 1838 sobre el Reglamento del Tribunal Supremo.

Suyo es el famoso Decreto de 29 de diciembre de 1838 sobre la inamovilidad judicial, que continuó el 14 de marzo de 1839 creando una Comisión para elaborar un proyecto sobre inamovilidad judicial y responsabilidad judicial.

El 21 de diciembre de 1847, Proyecto de organización, competencia y facultades de los tribunales del fuero general.

El 9 de marzo de 1848, Proyecto sobre nombramiento, responsabilidad y jubilación de los magistrados.

Ley de 19 de marzo de 1848, sobre aplicación del Código Penal.

Ley de 11 de mayo de 1848, sobre responsabilidad de ministros.

El 28 de septiembre de 1849 crea la Junta suprema para el arreglo de tribunales, cuyos informes servirán de base para la clasificación e inamovilidad judicial.

El Decreto de 9 de junio de 1850 aprueba el texto refundido del Código Penal y ley provisional para su aplicación.

El 20 de noviembre de 1850, Proyecto de ley constitutiva de los tribunales del fuero común.

El 7 de enero de 1865, presenta en el Senado un Proyecto de Organización de Tribunales.

(*) Ver Apéndice documental

LAUREANO DE ARRIETA DE BARCINA

Destinos y cargos en la carrera judicial:

27 marzo 1846:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
19 noviembre 1847:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
26 marzo 1852:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
24 abril 1852:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
23 junio 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
19 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
12 octubre 1855:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
14 septiembre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
2 agosto 1859:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
13 noviembre 1863:	Director General del Registro de la Propiedad.
20 marzo 1864:	Magistrado supernumerario de la Audiencia de Madrid.
5 mayo 1864:	Ministro del Tribunal Supremo para una plaza de nueva creación según recoge la ley de 30 de Abril de ese mismo año.
27 noviembre 1877:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 13 años.

Informes y valoraciones políticas:

El 31 de agosto de 1837 fue nombrado jefe político de Huesca, el 16 de octubre de 1837 de Lérida.

El 27 de diciembre de 1843: jefe político de Álava (antes de Valladolid).

El 5 de octubre de 1854 se piden informes al gobernador, Diputación y Ayuntamiento de Granada. El gobernador contestó que Arrieta era digno de consideración y respeto por su conducta moral y política. Diputación y Ayuntamiento no dieron informes pues llevaba poco tiempo allí.

Los diputados por Granada en febrero de 1855 emitían informes favorables de Arrieta.

El diputado Domingo Belo dice: “le considero un buen magistrado, pero de ideas moderadas, como afiliado a la situación anterior y por tanto no el mejor elemento para sostener la situación actual”.

La Junta de calificación de magistrados y jueces dice el 14 de diciembre de 1870 que el individuo reúne las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley. El 29 de enero de 1872 se le declara inamovible.

En 1837: La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino confirma “su firmeza de carácter y principios liberales” y por ello solicita salga de su condición de cesante.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4247, n. 123.

RAMÓN MARÍA ARRIOLA Y ESQUIVEL

Destinos y cargos en la carrera judicial:

1820-1823:	Perteneció a la Milicia Nacional de Vitoria.
20 agosto 1834:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
3 noviembre 1834:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza.
14 septiembre 1839:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
16 septiembre 1840.	Separado interinamente y posteriormente declarado cesante (no queda claro desde cuando).
2 enero 1844:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
10 abril 1847:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
14 junio 1853:	Regente de la Audiencia de Madrid.
14 noviembre 1853:	Ministro del Tribunal Supremo.
3 octubre 1860:	Preside interinamente la Sala 2ª por enfermedad de Ramón María Fonseca.
23 octubre 1865:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas:

El 6 de febrero de 1837, merece de la Junta para preparar el arreglo de tribunales y juzgados del reino el calificativo de “buena conducta moral y política, estando por tanto bien conceptuado en el público”.

El 12 de enero de 1841: la junta gubernativa motiva la separación porque “tomó parte activa en las últimas elecciones por el partido jovellanista”.

El 27 de febrero de 1841: La Diputación Provincial dice:

“Pertenece al partido anti-constitución por la parte activa que tomó en las elecciones de diputados a Cortes en el año anterior (...) cree la Diputación que en su conducta moral y comportamiento en la administración de Justicia ha sido justificado”.

Otro informe:

“Sus opiniones liberales han sido bien conocidas en Vitoria y Zaragoza, sosteniéndolas no sólo como digno magistrado, sino con las armas ha sido necesario”.

Otro informe (Ayuntamiento):

“estuvo siempre unido en aquella capital a personas muy marcadas por retrógrados, dando a entender por su conducta que pertenecía a ese partido, que fue de los que se oponían al reconocimiento de la Junta pretextando estar enfermo por no asistir al Tribunal el día en que debía darse cuenta de la instalación de la misma”.

ANTONIO M. ASENSIO Y BONELL

Destinos y cargos en la carrera judicial:

19 junio 1850:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
17 febrero 1854:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
2 noviembre 1855:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
21 noviembre 1856:	Teniente Fiscal 1º del Tribunal Supremo de Justicia.
6 diciembre 1861:	Presidente de Sala en la Audiencia de Zaragoza.
23 marzo 1866:	Presidente de Sala de la Audiencia de Burgos.
14 noviembre 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
24 enero 1869:	Se le declara cesante por no haber tomado posesión en su anterior destino.
17 enero 1876:	Se jubila por razones de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años

Informes y valoraciones políticas:

En 1848 y 1855 favorables según las circunstancias políticas.

En 1866: El Tribunal Supremo ordena su traslado por hacer públicas sus diferencias con sus compañeros magistrados.

JUAN ANTONIO BARONA

Destinos y cargos en la carrera judicial:

12 abril 1851:	Ministro del Tribunal Supremo.
1854:	Deja su cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas:

Diputado en 1857 por Castrojériz (Burgos).

Diputado en 1867 por Burgos.

Senador en 1840 por Burgos.

GREGORIO BARRAICOA CAMPOS

Destinos y cargos en la carrera judicial:

5 noviembre 1808:	Alcalde Mayor de la villa de Miranda de Ebro.
9 febrero 1814:	Juez de 1ª Instancia en Ocaña.
1823:	Magistrado de la Audiencia de Aragón.
1826:	Alcalde de Plasencia.
1 junio 1827:	Corregidor de Alcoy.
13 enero 1835:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
Agosto 1835:	Separado por la Junta de Granada.
1835:	Obtiene plaza como Magistrado de la Audiencia de Madrid.
28 enero 1837:	Se le repone.
11 noviembre 1840:	Regente de la Audiencia de Albacete.
20 diciembre 1840:	Se le nombra Ministro del Tribunal Supremo
1851:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas:

El informe de 6 de junio de 1837 de la Junta para preparar el arreglo de tribunales y juzgados del reino le hace merecedor de continuar en su destino.

“era liberal y decidido ciegamente por el Trono Constitucional de nuestra actual Reyna”.

Los informes del Regente y de la Diputación Provisional de Granada fueron favorables

FULGENCIO DE LA BARRERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

9 febrero 1834:	Ministro del Consejo de Navarra.
18 enero 1837:	Separado.
5 noviembre 1837:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
14 abril 1838:	Trasladado a Zaragoza.
21 diciembre 1840:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
15 diciembre 1843:	Cesante.
1 septiembre 1854:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
9 noviembre 1855:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
7 noviembre 1856:	Cesante.
4 octubre 1860:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
15 agosto 1863:	Regente de la Audiencia de Madrid.
27 enero 1865:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Félix Herrera de la Riva.
31 marzo 1865:	Se le jubila con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 meses.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes por Navarra por el partido liberal entre 1829 y 1831.

Diputado suplente en 1839 por Navarra.

Diputado en 1840 por Navarra.

Adscripción política: fue absolutista en la época de Fernando VII y posteriormente se acercó al liberalismo progresista.

El 29 de enero de 1837 fue separado por queja que se dió contra él suponiéndole realista y que como Diputado de Navarra había prestado servicios a aquel partido y perseguido la expedición del general Mira que actuó en Francia por Vera, pero la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino a quien se pasó esta queja lo declaró improcedente, nada digno de crédito por haberla dado un escribano suspenso y procesado, y estimó de justicia la reposición, y así fue colocado en la Audiencia de Burgos.

A consecuencia de la sublevación de Pamplona en 1843 y no queriendo reconocer sus consecuencias abandonó la plaza y dejó la Regencia, pero fue repuesto en ella inmediatamente. Los expedientes que hay en su expediente le favorecen y la Junta de Jefes de Sección de este ministerio el 2 de febrero de 1855, le declaró apto para continuar en la plaza que servía.

MANUEL BARRIO AYUSO

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 enero 1835:	Ministro del Consejo de Navarra.
18 mayo 1836:	Ministro de Gracia y Justicia.
14 agosto 1836:	Cesa.
9 febrero 1844:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de Andrés Crespo Cantolla.
23 noviembre 1850:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836 por Soria.

Diputado en 1837 por Soria.

Diputado en 1839 por Soria.

Diputado en 1840 por Soria.

Diputado en 1843 por Soria.

Senador en 1844-1845 por Soria y vitalicio en 1845-1846.

Fue Presidente del Congreso.

Adscripción política: partido conservador y luego partido liberal.

Fue vicesecretario de la Junta Superior de Burgos durante la Guerra de la Independencia.

Fue Presidente del Congreso.

Tareas legislativas

Se significó por la defensa del régimen especial sobre la Administración de Justicia en Navarra en 1836.

LUCIANO DE LA BASTIDA Y ARNAIZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

17 julio 1844:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
10 abril 1846:	Fiscal de la Audiencia de Oviedo.
20 agosto 1847:	Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
8 octubre 1856:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
21 noviembre 1856:	Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
25 noviembre 1864:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
20 abril 1867:	Ministro del Tribunal Supremo por cesación de Manuel Ortiz de Zúñiga.
21 noviembre 1871:	Se le jubila a instancias de él y dice el Decreto: “Sin perjuicio de que vuelva al servicio activo si desaparece la causa que motivó su jubilación con arreglo a lo establecido en el artículo 243 de la misma ley”.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1844 por Baleares.

Informes políticos favorables en 1840 del Regente de Audiencia “ha observado buena conducta antes y después...”.

La sección de magistrados y jueces en 1870:

“Este magistrado reúne todas las condiciones necesarias para disfrutar de la inamovilidad y demás ventajas consignadas en la ley orgánica del poder judicial”.

Por Decreto de 20 de marzo de 1871 se le declara inamovible, confirmándole en el cargo.

Otros cargos y distinciones

El 14 de marzo de 1854 fue nombrado Comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos III.

MANUEL M^a BASUALDO Y GUARDAMINO

Destinos y cargos en la carrera judicial

8 abril 1837:	Se le conceden los honores de Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
20 abril 1837:	Juez de 1 ^a instancia de Madrid.
6 abril 1838:	Se le manda cesar en el anterior cargo.
2 diciembre 1840:	Se le repone.
19 enero 1844:	Fue declarado cesante de los juzgados de Madrid.
13 enero 1855:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
5 septiembre 1856:	Magistrado del Tribunal contencioso-administrativo.
21 noviembre 1856:	Se le declara cesante.
23 octubre 1860:	Se le nombra Magistrado supernumerario de la Audiencia de Madrid.
15 marzo 1861:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
10 noviembre 1868:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 febrero 1879:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836 por Madrid.

El 8 de junio de 1837 la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino lo considera acreedor a continuar sus servicios.

El 17 de diciembre de 1870 se le declara inamovible.

El 13 de mayo de 1875 la Junta de calificación de magistrados y jueces le declara idóneo.

MIGUEL BATALLER Y ARROYO

Destinos y cargos en la carrera judicial

30 octubre 1824:	Oidor de la Audiencia de Cataluña.
21 agosto 1834:	Se le concede la jubilación.
3 mayo 1836:	Se le declara cesante por petición propia al no tener la edad de jubilación.
Noviembre 1848:	Miembro de la Comisión de Códigos.
31 mayo 1852:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
26 noviembre 1866:	Ministro del Tribunal Supremo en sustitución de Manuel J. Posadillo.
24 octubre 1868:	Se jubila acogiéndose al Decreto publicado el 24 de dicho mes.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

“Durante la dominación de Bonaparte no obtuvo empleo alguno ni fue adicto a aquel gobierno”.

PASCUAL BAYARRI Y GARCÍA

Destinos y cargos en la carrera judicial

	Juez de 1ª Instancia interino en Alcira. (No consta fecha ni de posesión ni de cese).
5 junio 1837:	Juez de 1ª Instancia de Morella.
16 mayo 1838:	Es declarado cesante.
1 enero 1841:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
22 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
31 agosto 1856:	Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
22 julio 1859:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
31 mayo 1860:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
10 abril 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
17 enero 1872:	Fiscal del Tribunal Supremo.
12 diciembre 1873:	Ministro del Tribunal Supremo en Comisión.
26 enero 1875:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado de lo contencioso.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1854 por Valencia.

Diputado en 1858 por Liria (Valencia).

Diputado en 1863 por Liria (Valencia).

Adscripción Política: Partido Moderado.

No existe el expediente personal de este magistrado y estos datos se encuentran en la certificación que hace D. Francisco Segura y Atienza, secretario del archivo del ministerio de Gracia y Justicia con fecha de 8 de enero de 1910 y a requerimiento de su hija Dª Carolina Bayarri, en relación con los servicios prestados en su empleo.

Es uno de los pocos ministros del Tribunal Supremo que no acaba su carrera en dicho tribunal.

ALEJANDRO BENITO Y ÁVILA

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 abril 1844:	Promotor fiscal del Distrito del Prado (Madrid).
6 diciembre 1845:	Juez de 1ª instancia en Comisión de Valladolid.
9 mayo 1846:	Juez de 1ª instancia de Medina del Campo (Valladolid).
30 abril 1847:	Juez de 1ª instancia de Toro (Zamora).
31 marzo 1848:	Juez de Chinchón (Madrid).
26 mayo 1848:	Juez de La Almunia (Zaragoza).
1 abril 1853:	Juez de Borja (Zaragoza).
11 enero 1854:	Juez de Igualada (Barcelona).
28 enero 1860:	Juez de 1ª instancia del distrito de Santo Domingo (Málaga).
29 mayo 1860:	Juez de 1ª instancia del distrito del Salvador (Sevilla).
27 octubre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Pamplona.
22 diciembre 1873:	Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
27 febrero 1875:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
17 abril 1876:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de José María Cáceres.
8 julio 1889:	Presidente de Sala.
3 abril 1890:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 14 años.

Informes y valoraciones políticas

El 2 de diciembre de 1847 el Jefe político de Zamora dice de él:

“En que las veces, aunque pocas, que se le ha oído hablar de política siempre ha sido en sentido favorable al orden y a las instituciones vigentes”

JUAN MARIA BIEC

Destinos y cargos en la carrera judicial

27 febrero 1836:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
9 octubre 1836:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
28 enero 1837:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
9 octubre 1839:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
21 mayo 1841:	Expone: “que habiendo recurrido en solicitud de su reposición y formándose expediente recayó en él con decreto mandando reservar la propuesta del exponente para más adelante; casi dos meses han pasado (...)”
21 agosto 1843:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
9 enero 1844:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Pamplona.
6 septiembre 1844:	Regente de la Audiencia de Canarias.
4 diciembre 1844:	Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia.
17 enero 1845:	Secretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
20 febrero 1846:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
29 mayo 1852:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
11 noviembre 1853:	Regente de la Audiencia de Madrid.
1 septiembre 1854:	Cesa como Regente de la Audiencia de Madrid.
1 septiembre 1854:	Regente cesante de la Audiencia de Madrid.
3 julio 1855:	Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
12 diciembre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo por creación de nueva plaza y no en sustitución de nadie.
7 mayo 1866:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Borja (Zaragoza).

Adscripción política: partido moderado.

Informe político de 1837: “siempre ha profesado ideas liberales en el más alto grado”.

Informe de 2 noviembre 1840: Juan María Biec, “expone el perjuicio que se le ha causado por la Junta Provisional de gobierno de Valladolid separándole de su destino, sin atender a sus méritos y circunstancias (...)”.

El informe dice: (de la Audiencia, jefe político y del Intendente):

“Que promovido de fiscal a magistrado el 11 de noviembre de 1839 (...) La Junta auxiliar de Valladolid el 11 de noviembre motiva la separación en que es furibundo retrógrado, que fallaba fácilmente a la furtiva en favor de los de su partido. Intimo amigo de Cortázar seguía sus inspiraciones y promovió en cuanto pudo el triunfo de la

candidatura de Arrazola y Cortázar en Zamora. Odia y encarnece a los verdaderos liberales a quienes llamaba bullangueros y anarquistas”. (Fue el motivo de separación).

Disparidad de criterios unos a favor y otros en contra hasta que el 21 de agosto de 1843 el gobierno provisional le volvió a nombrar.

LUCIANO BOADA Y VALLADOLID

Destinos y cargos en la carrera judicial

31 julio 1852:	Promotor Fiscal de Hacienda de Madrid.
19 marzo 1858:	Teniente Fiscal 6º de la Audiencia de Madrid.
26 noviembre 1864:	Abogado Fiscal 4º de la Audiencia de Madrid.
29 noviembre 1867:	Teniente Fiscal de la Audiencia de Madrid.
18 mayo 1868:	Abogado Fiscal 5º del Tribunal Supremo.
10 julio 1868:	Fiscal de la Audiencia de Mallorca.
20 julio 1868:	Fiscal de la Audiencia de Burgos.
12 noviembre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Cáceres.
22 enero 1872:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1873:	Cesante.
8 enero 1873:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
12 octubre 1874:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
31 diciembre 1875:	Ministro del Tribunal Supremo.
20 octubre 1890:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

PEDRO BORRAJO DE LA BANDERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 junio 1844:	Juez de Alcalá.
3 enero 1845:	Juez de Córdoba.
7 febrero 1846:	Juez de Santa Fe (Granada).
19 mayo 1848:	Juez de Olvera (Cádiz).
26 julio 1850:	Cesó.
8 enero 1851:	Juez de 1ª instancia de Campillos (Málaga).
7 marzo 1851:	Juez de Archidona (Málaga).
28 octubre 1853:	Abogado fiscal de la Audiencia de Sevilla.
6 marzo 1857:	Juez de 1ª instancia del distrito de la Alameda (Málaga).
12 febrero 1858:	Se le declara cesante.
17 marzo 1859:	Juez del distrito de Santo Domingo (Málaga).
22 noviembre 1859:	Juez de 1ª instancia del distrito del Norte de Madrid.
16 noviembre 1860:	Igual destino en el distrito de Barquillo (Madrid).
7 enero 1863:	Idem en el distrito de Buenavista (Madrid).
10 julio 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Canarias.
28 noviembre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Zaragoza.
9 mayo 1870:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
23 enero 1871:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
14 octubre 1871:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
13 noviembre 1871:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
3 junio 1872:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
1 marzo 1875:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
31 diciembre 1875:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1877:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
25 marzo 1878:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de José Fermín de Muro.
8 febrero 1883:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1872 por Santa Fe (Granada).

Diputado en 1876 por Loja (Granada).

Senador en 1879-1880 y 1884-1885 por Granada.

Adscripción política: partido conservador.

En 1858 fue declarado cesante sin perjuicio de utilizar sus servicios si le fuere favorable el resultado de la causa que se sigue contra él sobre abusos en el ejercicio de su cargo.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4302, n. 1095.

EMILIO BRAVO Y ROMERO

Destinos y cargos en la carrera judicial

14 agosto 1854:	Auxiliar sexto del Ministerio.
3 marzo 1855:	Auxiliar primero.
7 agosto 1855:	Juez de 1ª instancia de Orihuela.
27 febrero 1861:	Juez del distrito de Santo Domingo de Málaga.
7 enero 1863:	Juez del distrito de Buenavista de Madrid.
20 diciembre 1865:	Presidente de la Sala segunda de la Audiencia de La Habana.
6 agosto 1866:	Se le declara cesante.
6 abril 1869:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
20 marzo 1871:	Se le declara inamovible.
8 enero 1872:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
18 enero 1874:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
27 diciembre 1874:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Mariano García Cembreros.
8 julio 1880:	Presidente de Sala.
20 julio 1892:	Preside interinamente el Alto Tribunal.
29 julio 1892:	Presidente del Tribunal Supremo.
24 enero 1893:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 19 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1876-1877 por Zamora y vitalicio en 1877.

Vicepresidente del Senado.

Adscripción política: independiente.

“Por querer llegar rápido a los puestos más altos de la magistratura acomodó su conducta política a las necesidades de todos los tiempos y a los distintos gustos de todos los partidos”.

Auditor de la Marina.

Fue Presidente del Tribunal de oposiciones a ingresar en la carrera judicial.

El gobernador de Granada en 1861 por conducto del ministerio de la Gobernación elogia la conducta de Bravo durante la insurrección que tuvo lugar en Loja.

Otros cargos y distinciones

Obtuvo la Gran Cruz de Carlos III, de Isabel la Católica y del Mérito Naval y otras distinciones extranjeras.

Tareas legislativas

Publicó algunas obras sobre Administración de Justicia, Legislación Penal Especial, Derecho Internacional Privado en España, Ley del Jurado y la Gracia del Indulto.
Pertenebió a la Comisión Codificadora en 1890.

JUAN FRANCISCO BUSTAMANTE Y MARTÍNEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

20 febrero 1847:	Oficial Auxiliar del Ministerio de Gracia y Justicia.
27 diciembre 1861:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
20 abril 1867:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
14 julio 1867:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
10 noviembre 1868:	Se le declara cesante.
22 febrero 1875:	Presidente de la Audiencia de Valladolid.
25 marzo 1878:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
19 septiembre 1878:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Laureano de Arrieta.
17 septiembre 1892:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
14 septiembre 1893:	Presidente interino del Tribunal Supremo.
30 marzo 1894:	Presidente del Tribunal Supremo.
10 septiembre 1895:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 17 años.

Otros cargos y distinciones

Se le concede en 1881 la Gran Cruz de Isabel la Católica.

MANUEL ANTONIO CABALLERO DEL POZO

Destinos y cargos en la carrera judicial

Septiembre 1815:	Fiscal del Crimen de la Audiencia de Sevilla. Se le separó.
22 octubre 1825:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
30 marzo 1827:	Alcalde del Crimen de Zaragoza.
2 mayo 1828:	Regente de Galicia.
Febrero 1832:	Regente de la Chancillería de Valladolid.
13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
30 septiembre 1837:	Es declarado cesante.
18 noviembre 1837:	Es repuesto a instancias del Tribunal Supremo por la Reina Gobernadora.
Septiembre 1840:	La Junta Provisional le suspende.
17 junio 1843:	Se jubila el Ministro cesante M. Antonio Caballero.
10 febrero 1844:	Se le nombra de nuevo Ministro del Tribunal Supremo.
14 enero 1853:	Se le nombra Presidente de Sala.
21 abril 1854:	Se le jubila

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810 por Salamanca.

Diputado en 1837 por Salamanca.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: partido moderado.

En un informe de 25 de noviembre de 1824 se dice:

“Hay gran variedad en lo que informan (...) dice que es muy liberal y muy corto, (...) que no convienen en su afecto a V. M.; pero que es de mediano talento y de integridad (...) aunque liberal es de bastante ciencia, circunspección y aplicación (...) que merece el concepto de muy liberal, muy corto y muy malo. (...) no le cree capaz de asociarse en juntas contra la legitimidad (...), no es amante de V. M.; pero que en el día, habiéndose retirado de toda comunicación no suena en nada. Fue uno de los que escaparon a la persecución de los revolucionarios, y no resulta haberse purificado”(*).

1826: Extenso documento de fidelidad al Rey y rechazo al sistema revolucionario y liberal (1820-1823).

(*) (...) son valoraciones hechas por distintos sujetos del citado Caballero.

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ MARÍA CÁCERES Y ROBLES

Destinos y cargos en la carrera judicial

31 julio 1839:	Promotor Fiscal interino de la Audiencia de Sevilla.
1 febrero 1841:	Fiscal de la Audiencia de Cáceres.
21 agosto 1843:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
14 junio 1844:	Fiscal en Comisión de la Audiencia de Granada.
15 noviembre 1844:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
24 julio 1845:	Fiscal de la Audiencia de Mallorca.
6 septiembre 1850:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
23 junio 1854:	Fiscal del Tribunal Correccional de Madrid.
21 noviembre 1856:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
30 noviembre 1857:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
6 marzo 1863:	Ministro del Tribunal Supremo en la vacante de Sebastián González Nandín por ascenso de éste.
28 marzo 1869:	Presidente interino de Sala 1ª por fallecimiento de su titular José Portilla.
17 abril 1876:	Presidente de Sala 2ª por fallecimiento de Tomás Huet.
14 enero 1878:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

Informes políticos de 23 de enero de 1836 del Regente, el gobernador civil y Diputación Provincial:

“era instruido, laborioso, de buena conducta moral y notoriamente adicto al gobierno, por lo que ha merecido se le nombre oficial de la Guardia Nacional”.

En 1840 informe favorable y en 1854.

La sección de magistrados en 1870 acordó por unanimidad que el interesado reunía las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley.

Otros cargos y distinciones

El 16 de febrero de 1877 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.

JOSÉ MARÍA CALATRAVA PEINADO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1820:	Ministro del Tribunal Supremo.
12 mayo 1823:	Ministro de Gracia y Justicia (Secretario del Despacho de Gracia y Justicia).
11 junio 1823:	Cesa.
31 octubre 1840:	Presidente del Tribunal Supremo en sustitución de Francisco Fernández del Pino.
29 julio 1843:	Fue separado de su destino.
17 enero 1846:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810.

Diputado con Riego en 1820 en el sector liberal hasta 1822.

Diputado en 1837 por Madrid.

Diputado en 1839 por Castellón.

Diputado en 1839 por Madrid.

Diputado en 1840 por Madrid.

Diputado en 1843 por Badajoz.

Diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz, fue Vicepresidente y Secretario.

Senador en 1837-1838 por Albacete.

Senador por Huesca y Alicante.

Fue Presidente del Congreso en la primera legislatura.

Presidió las Cortes en 1839.

Adscripción política: partido liberal exaltado.

Fue desterrado de 1814 a 1820.

Secretario de Gobernación el 20 de abril de 1823.

De 1823 a 1833 desterrado a Portugal, Inglaterra y Francia.

Presidente del Gobierno en 1836 y ministro de Estado.

Tareas legislativas

Importante participación en los debates políticos y discusión del Código Penal de 1822. Es considerado autor del mismo por sus numerosas aportaciones al mismo.

FERNANDO CALDERÓN COLLANTES

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 diciembre 1835:	Juez de 1ª instancia de Taboada (Lugo).
2 enero 1836:	Renuncia.
30 enero 1836:	Juez de 1ª instancia de Ribadeo (Lugo).
24 febrero 1838:	Juez de 1ª instancia de Vigo.
11 diciembre 1839:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
24 noviembre 1840:	Pide su reposición o una plaza de Magistrado o la cesantía correspondiente.
11 septiembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de Valencia. Lo compatibiliza con Diputado a Cortes por La Coruña.
13 abril 1844:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
31 marzo 1848:	Magistrado de la Audiencia Barcelona (por permuta).
14 abril 1848:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
1 marzo 1850:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
11 noviembre 1853:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
30 agosto 1856:	Regente de la Audiencia de Madrid.
30 octubre 1857:	Ministro del Tribunal Supremo por promoción de Ramón López Vázquez.
21 junio 1865:	Ministro de Gracia y Justicia.
10 julio 1866:	Cesa en el Ministerio.
8 noviembre 1868:	Consejero de Estado.
12 septiembre 1875:	Ministro de Gracia y Justicia.
2 diciembre 1875:	Cesa en el cargo. Sigue de Ministro de Estado.
14 enero 1877:	Ministro de Gracia y Justicia.
6 enero 1879:	Cesa y Presidente del Tribunal Supremo.
23 julio 1882:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1840 por Lugo.
 Diputado en 1843 por La Coruña.
 Diputado en 1844 por La Coruña.
 Diputado en 1846 por Santa María de Órdenes (La Coruña).
 Diputado en 1850 por Santa María de Órdenes (La Coruña).
 Diputado en 1851 por Santa María de Órdenes (La Coruña).
 Diputado en 1857 por Santa María de Órdenes (La Coruña).
 Diputado en 1858 por Santa María de Órdenes (La Coruña).
 Diputado en 1858 por Celanova (Orense).
 Diputado en 1869 por Santiago (La Coruña).
 Diputado en 1872 por Arzúa (La Coruña).

Senador vitalicio de 1845 a 1868 y electivo desde 1871 a 1879.

Adscripción política: perteneció al partido doceañista.

Defendió los principios más liberales dentro de la escuela conservadora a la que pertenecía.

En 1861 pasó al Senado, y allí es donde realmente demostró mayores dotes y se dió a conocer más ventajosamente. Miembro influyente de la facción unionista sostuvo casi siempre los más importantes debates en nombre de ésta.

El 16 de febrero de 1837 el Regente de la Audiencia de La Coruña:

“su conducta política es conforme a sus sentimientos de adhesión a las Reyna y libertades de la Nación”.

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino emitió un informe favorable.

La Junta provisional de Valladolid en 1840 le conserva en su plaza por sus buenas opiniones políticas (pero no se da de hecho esta circunstancia y le separan).

Otros cargos y distinciones

Le fue concedido el marquesado de Reinosa por Real Decreto de 7 de junio de 1878.

Le fue concedida la Cruz de Isabel la Católica en 1840.

(*) Ver apéndice documental

JUAN CANO MANUEL

Destinos y cargos en la carrera judicial

21 noviembre 1840:	Magistrado de la Audiencia de Valencia (se le ratifica).
1871:	Ministro del Tribunal Supremo.
1872:	Cesa.
1872:	Vuelve a ser nombrado Ministro del Tribunal Supremo.
1873:	Cesa.
1874:	Vuelve a su destino de Ministro en el Tribunal Supremo.
1876:	Deja su destino (*).

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1837 a 1839 por Albacete.

Senador en 1872-1873 por Zamora y Albacete.

No hay más informes políticos.

(*) De la información consultada no se deduce el motivo

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4859, n. 10273.

VICENTE CANO MANUEL RAMÍREZ DE ARELLANO

Destinos y cargos en la carrera judicial

23 abril 1790:	Alcalde del Crimen de Granada.
8 agosto 1802:	Regente de la Audiencia de Valencia.
1820:	Regente de la Audiencia de Granada.
4 marzo 1821:	Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
28 febrero 1822:	Se le admitió la renuncia.
21 diciembre 1822:	Se le reconoce su condición de Ministro del Tribunal Supremo.
1825:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
29 julio 1834: 1838	Presidente del Tribunal Supremo de España e Indias. Cesa

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810 por Murcia.

Diputado en 1834 por Albacete.

Diputado en 1836 por Albacete.

Adscripción política: liberal pactista y sospechoso.

El 16 de agosto de 1825 el gobernador del Consejo dice de él:

“En la época de la rebelión ni le vio ni le trató, pero le informaron era adicto al régimen constitucional de lo que no duda porque entonces eran colocados los que tenían la opinión de los revolucionarios, aunque tampoco se le oculta que más bien que su inclinación, le influyeron a extraviarse las sugerencias de su hermano D. Antonio, conocido por exaltado”(…)

“Es magistrado -según los de Madrid- de los más exaltados constitucionales”.

VICTORIANO CAREAGA Y RAMÍREZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

30 marzo 1845:	Oficial Auxiliar del Ministerio de Gracia y Justicia.
13 marzo 1846:	Oficial Auxiliar 4º en el mismo destino.
8 mayo 1846:	Tenencia de Gobierno de Albay.
29 octubre 1852:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
10 febrero 1854:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
11 noviembre 1855:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
17 septiembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
1 octubre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
14 noviembre 1856:	Fiscal de la Audiencia de Pamplona.
31 agosto 1861:	Fiscal de la Audiencia de Valencia por permuta.
29 agosto 1864:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Granada.
1 febrero 1865:	Presidente de Sala de la Audiencia de Canarias.
23 julio 1865:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
20 abril 1866:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
13 marzo 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
21 junio 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
6 diciembre 1867:	Presidente de Sala de Audiencia de Oviedo.
5 junio 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
13 abril 1870:	Regente de la Audiencia de Granada.
20 mayo 1872:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Francisco M ^a Castilla.
17 enero 1876:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

La Diputación Provincial de Zaragoza dice el 3 de octubre de 1854:

“Sin dificultad se le consideraría afecto al actual orden de cosas, pues resplandecen en él las dotes que el partido progresista ha honrado en sus legítimos representantes”.

Los diputados por Zaragoza en marzo de 1855:

“De buenas opiniones en política (...) nada pueden decir respecto a haberse mezclado en elecciones, ...”.

Se le declara inamovible en 1871.

JOAQUÍN JOSÉ CASAUS

Destinos y cargos en la carrera judicial

12 agosto 1834:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
15 diciembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
23 diciembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
5 enero 1844:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
12 abril 1844:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Barcelona.
19 julio 1844:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
21 agosto 1847:	Vicepresidente de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real.
19 diciembre 1848:	Fiscal del Tribunal Supremo.
10 enero 1851:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Manuel Barrio Ayuso.
19 enero 1852:	Cesa y fue nombrado Consejero Real.
25 agosto 1854:	Fue repuesto como Ministro del Tribunal Supremo en la restablecida Sala de Indias.
24 octubre 1856:	Fiscal del Tribunal Supremo.
25 octubre 1857:	Ministro de Gracia y Justicia.
14 enero 1858:	Cesó.
26 marzo 1858:	Ministro del Tribunal Supremo de la Sala de Indias.
19 julio 1858:	Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1844-1845 por Valencia.

Senador vitalicio en 1851-1852.

Adscripción política: liberal-moderado.

Favorable valoración para la Junta para preparara arreglos de tribunales y juzgados del reino el 4 de noviembre de 1835.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió la Gran Cruz de Caballero de Isabel la Católica el 17 de abril de 1852.

Tareas legislativas

Perteneció a la Comisión General de Codificación de 1851 a 1854.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 574, n. 384.

JUAN ANTONIO CASTEJÓN GÁLVEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

7 mayo 1821:	Juez interino de 1ª instancia de Madrid.
13 mayo 1821:	Se le conceden honores de Magistrado de la Audiencia de Madrid.
4 octubre 1835:	Regente de la Audiencia de Aragón.
9 octubre 1836:	Regente de la Audiencia de Burgos.
18 marzo 1837:	Regente de la Audiencia de Madrid.
1 octubre 1837:	Ministro de Gracia y Justicia.
4 octubre 1837:	Cesa.
2 noviembre 1840:	Declarado cesante.
19 julio 1843:	Ministro del Tribunal Supremo.
29 diciembre 1843:	Presidente de Sala 3ª del Tribunal Supremo.
3 marzo 1850:	Presidente de Sala 2ª del Tribunal Supremo.
7 marzo 1850:	Presidente de Sala de Indias.
9 mayo 1851:	Se jubila a petición propia por motivos de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Fue Diputado.

Senador en 1837-1838 por Zaragoza y vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: liberal-progresista.

Fue desterrado 11 años en 1823, por haber votado en el Congreso la destitución de Fernando VII.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden americana de Isabel la Católica.

Fue en 1849 consejero extraordinario del Consejo Real.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 574, n. 395.

FRANCISCO M. CASTILLA Y CALABRES

Destinos y cargos en la carrera judicial

23 septiembre 1834:	Juez de Campillos.
8 mayo 1837:	Juez Interino de Motril.
4 septiembre 1838:	Juez de 1ª Instancia de Almería.
28 octubre 1838:	Honores de Magistrado de la Audiencia de Granada.
4 abril 1840:	Juez de 1ª Instancia de Córdoba.
2 diciembre 1840:	Juez de 1ª Instancia en propiedad de Córdoba.
24 marzo 1841:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
24 abril 1841:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
22 mayo 1846:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
7 junio 1850:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
25 febrero 1852:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
22 abril 1853:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
1 septiembre 1854:	Es declarado cesante.
17 septiembre 1856:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
6 febrero 1857:	Regente de la Audiencia de Albacete.
11 diciembre 1863:	Ministro del Tribunal de Órdenes.
14 enero 1864:	Regente de la Audiencia de Valencia pero permuta a la de Albacete.
13 abril 1866:	Ministro del Tribunal Supremo.
2 mayo 1872:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1857 por Priego (Córdoba).

Adscripción política: partido liberal.

La Junta para preparar el arreglo de tribunales y juzgados del reino el 20 de abril de 1837:

“En 1823 fue suspendido de la Cátedra de Lógica que desempeñaba en la universidad por sus ideas liberales”.

La Junta de Calificación de magistrados y jueces (sección de magistrados) el 14 de diciembre de 1870:

“Acordó por unanimidad que el interesado reunía las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley”.

JOSÉ DE CASTRO Y OROZCO (Marqués de Gerona)

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 diciembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
21 septiembre 1844:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
6 diciembre 1844:	Renuncia y pasa a formar parte de la Comisión de Códigos.
24 octubre 1845:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Sevilla.
28 noviembre 1845:	Presidente de la Sala 1ª de la Audiencia de Granada.
21 marzo 1849:	Regente interino de la Audiencia de Granada.
2 noviembre 1851:	Cesa por actividad en el Congreso de los Diputados como Diputado.
19 febrero 1852:	Se reincorpora de nuevo como Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
25 febrero 1852:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
29 septiembre 1853:	Ministro de Gracia y Justicia.
18 enero 1854:	Cesa.
21 abril 1854:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo por jubilación de Manuel Antonio Caballero.
25 agosto 1854:	Se le declara cesante.
31 octubre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de Luis Mayáns.
6 marzo 1857:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo por jubilación de Pío Laborda.
16 julio 1858:	Consejero de Estado.
17 mayo 1869:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Soria.

Diputado en 1851 por Soria.

Diputado en 1853 por Soria.

Adscripción política: liberal -moderado.

No existen más valoraciones políticas en su expediente.

Tareas legislativas

Por Real Orden de 6 de diciembre de 1844 fue nombrado vocal de la Comisión General de Codificación, cargo que volvió a desempeñar por nuevo nombramiento el 8 de abril de 1853, hasta la suspensión de aquella comisión el 18 de agosto de 1854.

GABRIEL CERUELO DE VELASCO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1829:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Galicia.
5 mayo 1832:	Oidor de la Chancillería de Granada.
29 diciembre 1833:	Oidor de la Chancillería de Valladolid.
8 agosto 1834:	Se le jubila.
16 marzo 1843:	Solicita se le declare cesante desde Agosto de 1834, pues es esa su circunstancia concreta y no la de jubilado que le perjudica y no se atiende a su condición.
30 mayo 1845:	Solicita le sea concedida alguna de las plazas vacantes desde su condición de cesante.
17 agosto 1848:	Vuelve a solicitar que se le otorgue una plaza vacante.
30 abril 1851:	Sigue solicitando plaza. Ocupa desde 1846 la condición de Auxiliar de segunda clase del Consejo Real.
24 enero 1857:	Tomó posición como Regente de la Audiencia de Valladolid.
26 marzo 1858:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 abril 1867:	Presidente de Sala.
1868:	Deja el cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1867-1868.

No existen más valoraciones políticas en su expediente.

JOAQUÍN JOSÉ CERVINO Y FERRERO

Destinos y cargos en la carrera judicial

23 diciembre 1843:	Oficial Auxiliar 2º del Ministerio de Gracia y Justicia.
13 marzo 1846:	Oficial Auxiliar 1º del Ministerio de Gracia y Justicia.
14 agosto 1854:	Cesante.
27 junio 1861:	Oficial Jefe de Sección.
6 marzo 1863:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
4 agosto 1869:	Se le declara cesante.
18 enero 1874:	Se le repone como Magistrado de la Audiencia de Madrid.
27 diciembre 1874:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Mariano Maury y Gallego.
2 julio 1883:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

En 1872 se le declara inamovible.

El 23 de junio de 1873 dice:

“En la administración de justicia no fue jamás de los dóciles servidores de los gobiernos y de los partidos (habiendo procurado siempre pertenecer a la clase de los inteligentes y severos ministros del derecho. Mas como tales condiciones no sirvieron solos en los pasados días para conservar su cargo debido a largos años de servicios públicos (...), como se necesitan méritos políticos o valimientos de partido que no buscó ni quiso como magistrado inequívocamente en agosto de 1869 fue declarado cesante por urgencias que casi todos los gobiernos han solido tener (...).”

Otros cargos y distinciones

En 1846 recibe la Cruz Supnumeraria de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4336, n. 1652.

LORENZO COBO DE LA TORRE

Destinos y cargos en la carrera judicial

3 enero 1834:	Alcalde Mayor de Villarcayo.
2 julio 1834:	Alcalde Mayor interino de Santa María de Órdenes.
5 agosto 1839:	Juez de 1ª instancia de Burgos.
8 noviembre 1843:	Juez de Bilbao.
9 enero 1847:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
19 noviembre 1847:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
27 enero 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
3 marzo 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
6 enero 1855:	Se le declara cesante.
14 noviembre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
21 noviembre 1857:	Igual cargo en la Audiencia de Granada.
26 noviembre 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
5 mayo 1865:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
23 octubre 1865:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
20 abril 1867:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
3 octubre 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
17 marzo 1870:	Se jubila.
25 diciembre 1871:	De le conceden honores de Ministro del Tribunal Supremo.
27 febrero 1875:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Francisco Armesto.
7 marzo 1875:	Fallece sin haber tomado posesión.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 mes.

Informes y valoraciones políticas

Fue separado en 1839, estando en Burgos como Juez de 1ª instancia por la Junta de gobierno sin expresarse los motivos.

En 1840 se dice que fue apartado por “su conducta en los movimientos políticos de varias épocas”.

El 13 de febrero de 1841 la Diputación Provincial de Burgos “le censuraba de moderado” aunque adhirió a las ideas liberales.

Otros cargos y distinciones

En 1849 se le nombra caballero de la Orden de Carlos III.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4333, n. 2188.

VENTURA DE COLSA Y PANDO (*)

Destinos y cargos en la carrera judicial

19 mayo 1861:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Miguel Osca y Guerau de Arellano.
4 mayo 1864:	Sigue en el alto Tribunal perteneciendo a la Sección 1ª de la Sala 1ª.
1868:	Deja el cargo.

Período de permanencia: Al menos 7 años.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4328, n. 1541. Datos extraídos del FN. (*)Expediente no disponible para consulta por deterioro

ANTONIO CORZO Y GRANADO

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 diciembre 1845:	Fiscal primero de la Audiencia de Madrid.
23 noviembre 1849:	Fiscal del Tribunal Supremo.
11 enero 1851:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
21 noviembre 1856:	Fiscal del Tribunal Correccional.
30 octubre 1857:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
6 julio 1858:	Fiscal del Consejo de Estado.
28 marzo 1862:	Fiscal del Tribunal Supremo.
23 julio 1869:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1846 a 1850 por Sueca (Valencia).

“En el Congreso es tolerante con las demasías del poder”.

El 25 de enero de 1850 siendo fiscal del Tribunal Supremo remite una exposición en la que dice no:

“le es posible continuar en el desempeño de su cargo por no permitírsele consideraciones de delicadeza política nacidas de su posición como diputado y por ello pide su dimisión”.

Otros cargos y distinciones

El 28 de noviembre de 1866 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.

ANDRÉS CRESPO CANTOLLA

Destinos y cargos en la carrera judicial

6 julio 1813:	Jefe político por la provincia de León.
1820-1823:	Jefe político por la provincia de León, siendo luego cesante.
23 abril 1834:	Fiscal del Tribunal Supremo de España e Indias.
14 diciembre 1840:	Se le jubila a petición propia.
5 enero 1844:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de José María Tejada.
26 enero 1844:	Se le admite la renuncia por motivos de salud y se le declara de nuevo su condición de jubilado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 meses.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1820 a 1822 por Burgos.

Adscripción política: liberal progresista.

No hay más informes políticos.

EUGENIO MANUEL CUERVO

Destinos y cargos en la carrera judicial

17 diciembre 1815:	Alcalde del Crimen en Galicia.
1816:	Magistrado de la Audiencia de Galicia.
1821:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
1822:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
1824:	Cesante.
10 febrero 1834:	Oidor de la Audiencia de Burgos.
12 noviembre 1836:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
2 diciembre 1840:	Regente de la Audiencia de Manila.
31 diciembre 1840:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
12 julio 1842:	Fiscal del Tribunal Supremo.
29 julio 1843:	Fue separado por la Junta.
15 junio 1844:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1843 por Lugo

Adscripción política: progresista

(*) Ver apéndice documental

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4995, n. 11924.

RICARDO DÍAZ DE RUEDA

Destinos y cargos en la carrera judicial

29 enero 1851:	Abogado Fiscal de la Audiencia de Cáceres.
15 enero 1852:	Juez de 1ª instancia de Navalcarnero.
1855:	Juez de 1ª instancia de Martín de Valdeiglesia.
24 septiembre 1858:	Juez de 1ª instancia de Ávila.
22 junio 1860:	Juez de 1ª instancia de Zamora.
6 julio 1860:	Juez de 1ª instancia de Pontevedra.
21 enero 1862:	Juez del distrito de Santa Cruz en Cádiz.
7 agosto 1867:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
12 noviembre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
15 abril 1869:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
12 agosto 1871:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1872:	Presidente de la Audiencia de Albacete.
20 mayo 1872:	Presidente de la Audiencia de Granada.
23 septiembre 1873:	Se le suspende en sus funciones.
17 abril 1874:	Fiscal del Tribunal Supremo por vacante de Eugenio Díez.
26 junio 1874:	Ministro en Comisión del Tribunal Supremo.
22 septiembre 1889:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

RAMÓN DÍAZ VELA

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 agosto 1850:	Fiscal de la Audiencia de Oviedo.
30 diciembre 1854:	Se le declara cesante.
2 enero 1857:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
20 abril 1858:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
9 julio 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
11 agosto 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
10 septiembre 1862:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
3 octubre 1867:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Valencia.
17 marzo 1870:	Se le declara cesante.
6 noviembre 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Valentín Garralda.
31 diciembre 1875:	Se jubila según dispone la ley.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

EUGENIO DíEZ DE PEDRERO

Destinos y cargos en la carrera judicial

12 diciembre 1840:	Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
28 enero 1841:	Dimite.
3 noviembre 1842:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
19 junio 1843:	Cesa en sus funciones por causas políticas.
30 junio 1852:	Magistrado auxiliar de la Audiencia de Valladolid.
6 enero 1855:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
31 agosto 1855:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
6 octubre 1855:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
22 julio 1856:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
24 octubre 1856:	Se le declara cesante.
23 octubre 1860:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de La Coruña.
5 julio 1861:	Magistrado de número de la Audiencia de La Coruña.
1 octubre 1865:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
13 marzo 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Burgos.
20 agosto 1867:	Se le concede la jubilación a petición propia.
12 agosto 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
17 marzo 1870:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
27 junio 1870:	Fiscal del Tribunal Supremo.
9 diciembre 1871:	Se le declara cesante.
13 agosto 1872:	Se le vuelve a nombrar Fiscal del Tribunal Supremo en virtud del artículo 787 de la LOPJ.
12 noviembre 1875:	Dimite a petición propia.
29 marzo 1875:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836 por Valladolid.

Diputado en 1841 por Burgos.

Senador en 1871-1872 y en 1872-1873 por Burgos.

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ MARÍA DOMENECH

Destinos y cargos en la carrera judicial

26 agosto 1835:	Magistrado de la Audiencia de Aragón.
12 octubre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
18 octubre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
5 diciembre 1841:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
22 enero 1842:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
12 julio 1842:	Regente de la Audiencia de Madrid.
22 abril 1843:	Ministro del Tribunal Supremo
29 julio 1843:	Fue separado.
4 julio 1848:	Es declarado cesante.
9 septiembre 1854:	Se le vuelve a nombrar.
4 octubre 1854:	Solicita la renuncia por avanzada edad y motivos de salud.
15 octubre 1854:	Se le admite.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 meses.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1843 por Badajoz.

Adscripción política: liberal-progresista.

“La Diputación Provincial de Sevilla el 23 de septiembre de 1837, dice que el interesado es digno del ministerio que desempeña por su laboriosidad, instrucción e integridad y por su adhesión a la Reina y libertades patrias; habiendo sufrido en la década del despotismo prisiones y otros padecimientos tan dignos objetos”.

ANTERO ECHARRI Y CIGA

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 junio 1836:	Alcalde de Corte del Consejo de Navarra.
1 abril 1837:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
14 abril 1838:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
30 junio 1843:	Renuncia a la plaza.
21 agosto 1843:	Se le repone en el anterior destino.
23 enero 1846:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
3 octubre 1850:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
14 octubre 1850:	Se le repone.
22 septiembre 1854:	Regente de la Audiencia de Albacete.
11 junio 1855:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
30 agosto 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
6 marzo 1857:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de José Castro y Orozco a Presidente de Sala.
12 septiembre 1862:	Cesa por ser nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1854 por Navarra.

Diputado en 1857 por Aoiz (Navarra).

Diputado en 1863 por Aoiz (Navarra).

Diputado en 1864 por Aoiz (Navarra).

Pasó de las filas del absolutismo al liberalismo, decantándose dentro de él por las corrientes moderadas.

En 1834 fue presidente del Ayuntamiento de Pamplona.

El Regente de Pamplona dice de él: “que fue realista por principios a la anterior época constitucional”.

(*) Ver Apéndice documental

JOSÉ DE ENTRALA Y PERALES

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 septiembre 1842:	Promotor interino de la Audiencia de Granada.
19 enero 1844:	Juez de Archidona.
10 enero 1845:	Alcalde Mayor del Fondo de Islas Filipinas.
18 abril 1846:	Oidor supernumerario de Manila.
5 mayo 1854:	Oidor de la Audiencia, Chancillería de Manila.
23 junio 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
21 mayo 1855:	Se le declara cesante.
21 noviembre 1856:	Se le nombre Presidente de Sala en la Audiencia de Pamplona.
31 octubre 1864:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
5 mayo 1865:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
3 octubre 1867:	Regente de la Audiencia de Madrid.
8 agosto 1868:	Ministro del Tribunal Supremo (plaza de nueva creación).
24 mayo 1880:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Federico Guzmán.
15 junio 1880:	Solicita ser destituido del Tribunal Supremo por razones de salud.
8 julio 1880:	Se le destituye.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

No existen informes políticos en el extracto de secretaria.

FRANCISCO ENTRAMBASAGUAS Y MONTALVO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1824:	Auditor de Guerra en la Audiencia de Perú.
14 enero 1828:	Se separa a Francisco Entrambasaguas como Fiscal del Crimen de la Audiencia de Filipinas.
18 marzo 1831:	Fiscal del Crimen de la Chancillería de Granada.
1 abril 1834:	Fiscal del Tribunal Supremo.
29 noviembre 1840:	Se le jubila como Fiscal del Tribunal Supremo a petición propia.
30 diciembre 1843:	Ministro del Tribunal Supremo.
12 enero 1844:	Se le admite la renuncia de dicho puesto (por una agravada sordera).

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 mes.

Informes y valoraciones políticas

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino con fecha 10 de noviembre de 1836 le hace merecedor de seguir en su puesto.

TEOTIMO ESCUDERO Y COOL

Destinos y cargos en la carrera judicial

1812:	Oidor de la Audiencia de Sevilla y luego Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
28 agosto 1818:	Regente de la Audiencia de Cataluña.
29 agosto 1822:	Trasladado a la Audiencia de Extremadura.
1824:	Solicita la Regencia de Pamplona o Zaragoza.
20 septiembre 1826:	Propone para Regente de la Audiencia de Valencia y se le nombra el 19 de Octubre de 1826.
8 noviembre 1828:	Se le nombra Ministro del Consejo Real.
21 diciembre 1832:	Gobernador de Sala en Corte.
18 marzo 1834:	Vuelve al Consejo Real.
1 abril 1834:	Ministro del Tribunal Supremo de España e Indias.
26 enero 1837:	La Junta para preparar Arreglos de Tribunales y Juzgados del Reino le cesa con fecha 26 Enero de 1837 por haber actuado contra los diputados liberales en el período de gobierno absoluto (1822-1823). Fue repuesto.
1839:	Cesa.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1840 por Huesca.

Adscripción política: absolutista.

Fue perseguido en el constitucionalismo del 12 y en el Trienio Liberal para posteriormente ser cesado en 1837.

Un informe político de 24 de noviembre de 1824 dice de él:

“Todos convienen en que es amante de la legitimidad del gobierno de V. M., sabio, íntegro y un excelente magistrado. Fue uno de los jueces de la causa de Grimarest y suspenso por los constitucionales. No consta su purificación”.

DIEGO FERNÁNDEZ CANO

Destinos y cargos en la carrera judicial

14 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
12 abril 1844:	Se le declaró cesante.
14 febrero 1851:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
23 marzo 1855:	Se le declaró cesante.
4 junio 1855:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
21 julio 1855:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
14 noviembre 1856:	Cesa.
23 octubre 1860:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de Sevilla.
7 noviembre 1865:	Magistrado de número de la Audiencia de Sevilla.
27 marzo 1868:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
20 marzo 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
12 agosto 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
17 marzo 1870:	Regente de la Audiencia de Granada.
13 abril 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
11 diciembre 1870:	Se le declara cesante.
11 diciembre 1870:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Madrid.
6 febrero 1871:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1872:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
22 enero 1872:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante dejada por Pascual Bayarri que va a otro destino.
2 febrero 1881:	Solicita la jubilación.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1837 por Badajoz.

Diputado a Cortes en 1839 por Badajoz.

Diputado a Cortes en 1841 por Badajoz.

Diputado a Cortes en 1843 por Badajoz.

El 4 de agosto de 1843 se le confirmó en el destino de jefe político de Badajoz pero renunció el 15 del mismo mes.

ANTONIO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (*)

Destinos y cargos en la carrera judicial

1841:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 febrero 1844:	Deja vacante en el Tribunal Supremo que es ocupada por Manuel Antonio Caballero.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

(*) No existe ninguna referencia más ni consta su Expediente personal. Dato extraído de referencia indirecta.

ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS BUSTAMANTE

Destinos y cargos en la carrera judicial

17 noviembre 1817:	Teniente Corregidor de Madrid.
22 diciembre 1817:	Oidor de la Cancillería de Valladolid.
15 abril 1820:	Juez de 1ª instancia de Madrid.
26 septiembre 1834:	Se le repone como Teniente Corregidor de Madrid.
26 octubre 1834:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
4 noviembre 1840:	Regente de la Audiencia de Madrid.
31 enero 1841:	Se le conceden honores de Ministro del Tribunal Supremo.
1842:	Ministro del Tribunal Supremo.
29 julio 1843:	Separado del Tribunal Supremo.
28 septiembre 1844:	Cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1año.

Informes y valoraciones políticas

Fue Diputado a Cortes de 1836 a1839 por Santander.

Fue Diputado a Cortes de 1841 a1843 por Santander.

Fue Diputado a Cortes en 1854 por Santander.

Fue Diputado a Cortes en 1869 por Santander.

Senador en 1871-1872, 1872 y 1872-1873 por Santander.

Adscripción política: liberal de profundas convicciones, organizó el órgano más autorizado del partido progresista.

Sus ideas le atrajeron las iras y persecuciones de los gobiernos moderados.

Tomó parte muy activa en la revolución de septiembre de 1868.

El Regente de la Audiencia de Madrid dice de él, el 23 de octubre de 1835:

“Es muy adicto a la justa causa de la Reina y a las libertades nacionales”.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4417, n. 2751.

FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL PINO
(Conde de Pinofiel)

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 febrero 1805:	Traslado de Magistrado de la Audiencia de Galicia a la de Sevilla.
18 septiembre 1809:	Nombrado para la Semanán General de las causas de Vagos y Malhechores de la Provincia de Sevilla.
Febrero 1813:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla.
25 septiembre 1814:	Fue repuesto.
29 diciembre 1814:	Oidor de la Cancillería de Granada.
30 julio 1821:	En Consejo de Estado lo propone en segundo lugar de una terna para Regente de la Audiencia de Granada (era Regente interino de la de Extremadura).
12 agosto 1821:	Se le nombra Regente de la Audiencia de Granada.
20 diciembre 1823:	Miembro del Consejo Real.
3 abril 1825:	Gobernador de la Sala de Alcaldes.
17 febrero 1827:	Honores de Ministro del Consejo de Cámara.
8 diciembre 1829:	Miembro de la Cámara de Castilla.
29 noviembre 1832:	Ministro de Gracia y Justicia.
29 marzo 1833:	Cesa.
4 agosto 1833:	Se jubila y continúa como miembro del Consejo y Cámara de Castilla.
19 abril 1834:	Presidente del Tribunal Supremo de Hacienda.
22 septiembre 1835:	Cesante por supresión de dicho Tribunal.
10 febrero 1838:	Presidente del Tribunal Supremo por fallecimiento de Vicente Cano Manuel.
2 septiembre 1840:	Cesó.
27 enero 1843:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1838-1839 y 1840-1843.

Adscripción política: liberal-progresista.

Constan en su expediente notas favorables a su patriotismo y su adhesión a la causa nacional.

Otros cargos y distinciones

Fue Maestrante de Granada.

Fue Caballero de la Orden de Carlos III.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 578, n. 597.

JUAN FERNÁNDEZ PALMA

Destinos y cargos en la carrera judicial

26 enero 1844:	Promotor Fiscal de Vélez-Málaga (Málaga).
5 mayo 1847:	Juez de Montefrío.
25 julio 1851:	Juez de Baena (Córdoba)
8 abril 1853:	Juez de Algeciras (Cádiz).
12 enero 1855:	Cesó.
3 marzo 1855:	Vuelve al destino.
19 junio 1857:	Juez de Jaén.
12 agosto 1858:	Juez del distrito de Campillo (Granada).
17 febrero 1863:	Juez del distrito de Universidad (Madrid).
8 mayo 1866:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
6 marzo 1868:	Fiscal de la Audiencia de Zaragoza.
14 agosto 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
30 junio 1868:	Regente de la Audiencia de Madrid.
1 marzo 1875:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
20 septiembre 1878:	Ministro del Tribunal Supremo, vacante por jubilación de Manuel Almonací.
13 marzo 1884:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

Otros Cargos y Distinciones

Fue Comendador de Isabel la Católica.

En 1875 fue Encomendador de Carlos III.

JUAN NEPOMUCENO FERNÁNDEZ SAN MIGUEL (*)

Destinos y cargos en la carrera judicial

Abril 1834:	Fiscal del Tribunal Supremo.
13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
1840:	Es suspendido de sus funciones.
11 enero 1844:	Fue repuesto en su anterior destino.
19 agosto 1850:	Deja de pertenecer al Tribunal Supremo por fallecimiento.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1838-1839 por Oviedo y vitalicio en 1845-1846.

(*) No se encuentra el expediente personal ni en el Archivo Histórico Nacional ni en el Ministerio de Justicia. Datos extraídos de referencias indirectas (Faro Nacional, Gaceta,...).

VICENTE FERRER Y MINGUET

Destinos y cargos en la carrera judicial

9 enero 1844:	Juez de Elche.
27 agosto 1847:	Se le declara cesante.
19 noviembre 1849:	Se le repone.
5 abril 1850:	Juez de Castellón.
27 enero 1854:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
22 noviembre 1854:	Se le declara cesante.
14 septiembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
28 agosto 1857:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
3 octubre 1857:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
28 agosto 1866:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
12 noviembre 1868:	Cesante.
27 febrero 1875:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
11 julio 1878:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de Hilario de Ygón.
28 diciembre 1881:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

El 24 de septiembre de 1847 el jefe político dice que la separación de Ferrer del juzgado de Elche ha causado en aquel partido un disgusto profundísimo ya que en los cuatro años que ha desempeñado el juzgado ha dado pruebas de su honradez, providad y rectitud; y que así como él lo asegurarían todos los alcaldes y ayuntamientos del partido; que nunca se han mezclado en casos políticos (...).

No existen datos en su expediente pero es de reseñar que sus separaciones de destino se produzcan en los tres momentos del liberalismo revolucionario: 1848, 1854 y 1868. Desconocemos si fueron situaciones elegidas o forzadas.

RAMÓN MARÍA FONSECA FREYRE

Destinos y cargos en la carrera judicial

28 enero 1822:	Se le propone para Magistrado de la Audiencia de Aragón.
4 febrero 1822:	Se le nombra Magistrado de la Audiencia de Aragón.
27 abril 1823:	Cesante.
4 agosto 1834:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
12 octubre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
28 enero 1837:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
16 junio 1838:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
Septiembre 1840:	Suspense por la Junta.
31 octubre 1840:	Regente de la Audiencia de Burgos.
25 enero 1841:	Ministro del Tribunal de Ordenes Militares.
29 julio 1843:	Ministro del Tribunal Supremo
1 marzo 1850:	Presidente de la Sala 3ª.
25 agosto 1854:	Se repone como Presidente de Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Por la configuración del Tribunal Supremo el 17 de Enero se suprimió la Sala de Indias y ahora se vuelve a instalar.
1857 - 1858:	Internamente presidió el Tribunal Supremo en ausencia del Presidente.
16 octubre 1860:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 17 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1844-1845 por Córdoba.

Senador vitalicio en 1845-1846.

No hay más informes políticos.

SEBASTIÁN DE LA FUENTE ALCÁZAR

Destinos y cargos en la carrera judicial

6 marzo 1863:	Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
20 enero 1864:	Dimite.
6 marzo 1871:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Madrid.
20 marzo 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Joaquín Jaumar de la Carrera.
31 octubre 1873.	El Gobierno de la República solicita un dictamen para aclarar una petición del propio Tribunal Supremo por no haber tomado posesión el interesado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 meses.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1858 a 1863 por Ponteareas (Pontevedra).

Diputado en 1863 por Huete (Cuenca).

Diputado en 1863 por Ponteareas (Pontevedra).

Diputado en 1864 por La Cañiza (Pontevedra).

Diputado en 1869 Cuenca.

Diputado en 1871 Cuenca.

Senador en 1871-1872, 1881-1882, 1884-1885, 1885-1886 por Cuenca.

Senador vitalicio.

Adscripción política: Ha representado a su país en distintas legislaturas y con diferentes partidos en el poder, figurando casi siempre en la oposición moderada o de unión liberal.

Perteneció a la Unión Liberal. Figuró en la mayoría hasta que no hallándose conforme con la política del ministerio O'Donnell, se pasó a los disidentes, fracción del partido unionista que se formó por entonces.

En 1864 siendo diputado hizo la oposición al gobierno de Narváez, como perteneciente a la Unión Liberal (disidentes).

En 1871 fue ministro togado en el Consejo Superior de la Guerra.

Declarado inamovible en 1871.

JOSÉ MARÍA GALDIANO Y ZALDUENDO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1798:	Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla.
1802:	Alcalde del Crimen en la Audiencia de Valencia.
1808:	Oidor del Consejo de Navarra.
1830:	Oidor cesante por separación.
29 abril 1834:	Regente de la Audiencia de Aragón (antes fue Corregidor de Madrid).
17 marzo 1838:	Ministro honorario del Tribunal Supremo de España e Indias.
2 junio 1841:	Solicita su jubilación.
20 abril 1844:	Toma posesión como Ministro del Tribunal de Órdenes.
20 febrero 1846:	Decano del Tribunal especial de Órdenes Militares.
5 noviembre 1852:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Juan Antonio Almagro.
5 abril 1853:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 meses.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1840-1843-1844 por Navarra.

Senador vitalicio en 1844-1845 y 1845-1846.

Adscripción política: liberal moderado, apartado de sus funciones por los progresistas, con un pasado de colaboración con los franceses, lo que le enfrentó a los absolutistas.

1808: “Resulta probada su decidida adhesión al gobierno intruso”.

Fue confinado seis años en la villa de Olite.

JOSE GARRA Y CAMBRONERO

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 agosto 1834:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
21 noviembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
23 diciembre 1837:	Magistrado supernumerario de la Audiencia de Madrid.
28 enero 1838:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
16 septiembre 1839:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
4 enero 1843:	Se le declara cesante como Regente de la Audiencia de Oviedo desde el día que se le proveyó la plaza.
15 diciembre 1843:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
13 abril 1844:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
19 agosto 1850:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
28 mayo 1852:	Regente de la Audiencia de Madrid.
14 enero 1853:	Ministro del Tribunal Supremo.
1 agosto 1854:	Se le promueve a Presidente de Sala del Tribunal Supremo por cesación de J. Martín Carramolino.
6 marzo 1863:	Se jubila como Presidente de Sala de Indias.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Informe favorable de Juan Antonio Castejón en el año 1844, como Regente de la Audiencia de Madrid.

No existen informes de carácter político ni en 1836-1837 ni en 1840.

Si fue declarado cesante en Oviedo (alguna interpretación política del período 1840-1843).

MARIANO GARCÍA CEMBREROS

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 febrero 1833:	Alcalde Mayor de Prina.
8 enero 1836:	Juez de Villarreal.
4 diciembre 1839:	Juez de Sigüenza.
7 mayo 1840:	Declarado cesante por no haberse presentado a tomar posesión.
10 febrero 1841:	Juez en propiedad de Valencia.
30 octubre 1841:	Fiscal de la Audiencia de Zaragoza.
3 junio 1843:	Fiscal de la Audiencia de Valencia por permuta.
5 enero 1849:	Declarado cesante.
3 noviembre 1854:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
14 septiembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
21 noviembre 1856:	Se le declara cesante.
18 marzo 1859:	Se le repone en su antiguo cargo.
6 febrero 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Calixto Montalvo.
27 Diciembre 1874:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

La Junta para preparar el Arreglo de Tribunales y Juzgados del Reino dice en 1837: “irreprensible en su adhesión a la Reina”.

MANUEL GARCÍA DE LA COTERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

2 octubre 1824:	Alcalde Mayor de San Pedro Manrique.
21 octubre 1830:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla. Similar a Oidor.
19 abril 1834:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
28 enero 1837:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
21 noviembre 1840:	Magistrado en propiedad de la Audiencia de Zaragoza.
22 abril 1843:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
15 diciembre 1843:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
30 abril 1847:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
20 mayo 1847:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
2 febrero 1848:	Regente de la Audiencia de Burgos.
9 febrero 1849:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
1 marzo 1850:	Presidente de la Sala 3ª de la Audiencia de Madrid.
14 enero 1853:	Regente de la Audiencia de Madrid.
11 junio 1853:	Ministro del Tribunal Supremo.
9 septiembre 1854:	Se le declara cesante.
31 octubre 1856:	Se le vuelve a nombrar Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de J. Mariano de Olañeta a petición propia.
9 octubre 1862.	Interinamente fue Presidente de Sala.
30 septiembre 1864:	Se le propone a Presidente de Sala.
29 enero 1866:	Fallece siendo Presidente de la Sección 1ª de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (ya se había reorganizado el Tribunal Supremo).

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1864-1865.

El 22 de septiembre de 1843 hace una proclama liberal en carta para ser repuesto como Regente de La Coruña, y al haber sido depuesto con el nombramiento de otro.

Adscripción política: moderado.

MAURICIO GARCÍA GALLO

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 diciembre 1833:	Alcalde Mayor de Catarroja.
1 julio 1838:	Juez de 1ª Instancia de Ribadavia.
12 noviembre 1840:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
19 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
22 agosto 1855:	Regente de la Audiencia de Albacete.
10 noviembre 1855:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
10 septiembre 1856:	Se le declara cesante como Regente de Oviedo.
23 octubre 1860:	Ministro supernumerario de la Audiencia de Madrid.
10 octubre 1865:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
7 mayo 1866:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Juan María Biec.
30 marzo 1869:	Se le promueve a Presidente de Sala del Tribunal Supremo por fallecimiento de José Portilla.
16 diciembre 1870:	Presidente de Sala 1ª.
9 enero 1871:	Se le confirma desde la LOPJ.
2 abril 1873:	Fallece como Presidente de Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1837 por Orense.

Diputado a Cortes en 1839 por Orense.

Diputado a Cortes en 1841 por Orense.

Diputado a Cortes en 1846 por León.

Adscripción política: partido progresista.

El 4 de octubre de 1840 la Junta Provisional de gobierno de Orense le nombró por unanimidad su representante para la Central que se trató de organizar en esta capital del Reyno. Todos le felicitaron. Un conjunto de diputados felicitan al ministro el 29 de noviembre de 1855 por la designación de Regente de Oviedo:

“Vemos en él a un compañero liberal, consecuente y honrado”.

Once diputados la firman, entre los que se encuentra José Rodríguez Busto (también magistrado).

CRÍSPULO GARCÍA GÓMEZ DE LA SERNA

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 noviembre 1856:	Teniente Fiscal de la Audiencia de Burgos.
2 enero 1857:	Igual plaza en la Audiencia de Barcelona.
19 junio 1866:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
23 julio 1868:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
12 noviembre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
30 noviembre 1869:	Teniente Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
17 marzo 1870:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
22 enero 1872:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
20 mayo 1872:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de José María Haro.
31 enero 1875:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

FLORENCIO GARCÍA GOYENA

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 agosto 1834:	Fiscal del Crimen de la Audiencia de Burgos.
27 noviembre 1834:	Comisario Regio de Navarra.
27 diciembre 1834:	Comisario Regio y Corregidor en Comisión de la Provincia en Guipúzcoa.
26 septiembre 1835:	Regente de la Audiencia de Valencia.
4 octubre 1835:	Regente de la Audiencia de Burgos.
9 octubre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
18 Octubre 1838:	Se le conceden honores de Ministro del Tribunal Supremo.
1840:	Cesante.
10 septiembre 1842:	Magistrado cesante de la Audiencia de Madrid.
29 diciembre 1843:	Ministro del Tribunal Supremo en lugar de Francisco Entrambasaguas.
12 septiembre 1847:	Ministro de Gracia y Justicia.
4 octubre 1847:	Cesó en el cargo y vuelve a su anterior destino.
3 junio 1855:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1839 por Navarra.

Diputado en 1840 por Navarra.

Senador en 1844-1845 por Navarra.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: fue liberal pero evolucionó a posiciones moderadas tras la muerte de Fernando VII.

Fue Jefe político en León en 1820. Con la caída del Trienio Constitucional emigró a Francia, hasta la muerte de Fernando VII.

En 1835 gobernador civil de Zaragoza.

Abandonó el 7 de septiembre de 1840 el Tribunal Supremo por el rumbo que tomaban los acontecimientos del momento. Se negó a reconocer el gobierno y no reconoce ciertas facultades del poder ejecutivo.

Presidió Goyena, el breve gobierno conservador (22 días) formado en septiembre de 1847 en el que además desempeñó la cartera de Gracia y Justicia.

NICOLÁS M^a GARELLY BATTIFORA

Destinos y cargos en la carrera judicial

28 febrero 1822:	Ministro de Gracia y Justicia.
8 julio 1822:	Cesa.
27 julio 1822:	Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
13 octubre 1822:	Secretario interino de Estado.
19 octubre 1833:	Supernumerario del Consejo Real.
15 enero 1834:	Ministro de Gracia y Justicia.
24 noviembre 1834:	Consejero de Estado.
17 febrero 1835:	Cesa.
15 diciembre 1843:	Presidente del Tribunal Supremo.
14 noviembre 1845:	Consejero Real extraordinario.
13 febrero 1850:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Fue Diputado en 1820.

Fue Senador vitalicio en 1845.

Adscripción política: liberal-progresista.

Otros cargos y distinciones

El 11 de abril de 1844 se le concedió la Gran Cruz de Carlos III.

Tareas legislativas

Supresión definitiva de los Consejos de Castilla y de Órdenes.

Creación definitiva del Tribunal Supremo.

Demarcación de Audiencias.

Creación de Comisiones especiales para la redacción de los Códigos Civil, Penal y de Procedimientos y reforma del Código de Comercio.

Participó en la elaboración del Código Civil de 1821.

Figuró en la propuesta para Presidente del Tribunal Supremo de 1838, con los mismos votos que el Presidente electo Pinofiel, y propuesto de nuevo para dicho cargo, vacante por dimisión de Calatrava.

Leyó los discursos de apertura de Tribunales de 1844, 1845 y 1847.

VALENTÍN GARRALDA

Destinos y cargos en la carrera judicial

17 abril 1834:	Corregidor de Arévalo.
17 enero 1843:	Juez de Madrid.
30 mayo 1841:	Honores de Magistrado de la Audiencia de Burgos.
5 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
2 julio 1847:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
22 septiembre 1854:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
1 junio 1855:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
10 septiembre 1856:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
13 mayo 1862:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
22 octubre 1865:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Ramón María de Arriola y Esquivel.
16 octubre 1871:	Se jubila a petición propia.
1 julio 1881:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

El 26 de septiembre de 1836 el Regente de Madrid dice de él: “digno de la mayor confianza y aprecio entre las personas sensatas y liberales del partido”.

La Junta para preparar arreglos de los tribunales y juzgados del reino decide que éste continúe en sus servicios.

Fue miliciano contra los facciosos y franceses invasores. En 1825 fue preso en Zaragoza por una supuesta conspiración contra el absolutismo estando en prisión 21 meses.

El gobernador civil, Ayuntamiento y Diputación provincial de Pamplona el 14 de octubre de 1854 manifestaron que es de buena conducta moral y política.

Declarado idóneo e inamovible en 1871.

Otros cargos y distinciones

El 15 de enero de 1839 se le concedió la Cruz de Comendador de Isabel la Católica por acción de armas.

RAMÓN GIL OSORIO

Destinos y cargos en la carrera judicial

28 marzo 1841:	Renuncia como Juez de 1ª Instancia de Fregenal de la Sierra.
13 noviembre 1857:	Ministro del Tribunal Supremo en sustitución de Fernando Álvarez.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 meses.

(*) No existe más información fuera del período 1835-1841.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1846 por Albacete.

Diputado de 1849 a 1851 por Casas-Ibáñez (Alicante).

Diputado en 1857 por Sax (Alicante).

Senador vitalicio en 1867-1868.

Adscripción política: Antes de 1848 fue adicto a los progresistas y después se alineó con los moderados que le dieron varias prebendas.

Informes favorables de 1837 de su conducta pública y política.

ÁLVARO GIL SANZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

8 febrero 1841:	Juez de 1ª instancia de Nájera.
4 agosto 1869:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
17 marzo 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
20 marzo 1871:	Se le declara inamovible.
22 junio 1872:	Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
16 enero 1873:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
18 enero 1874:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Trinidad Sicilia.
27 enero 1875:	Cesante por reforma.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

Fue Diputado a Cortes en 1841 por Salamanca.

Fue Diputado a Cortes en 1854 por Salamanca.

Fue Diputado a Cortes en 1869 por Salamanca.

Fue Diputado a Cortes en 1872 por (Sequeros) Salamanca.

Adscripción política: progresista primero, demócrata después y luego perteneció a la minoría republicana.

En 1833 nombrado secretario de la contaduría.

En 1840 fue miembro de la Junta de Gobierno de Salamanca. En 1843 volvió a pertenecer a la Junta y fue nombrado después Jefe político de la misma.

Fue Subsecretario del ministerio de la Gobernación.

En 1871 fue Director General del Registro Civil y de la Propiedad.

Tareas legislativas

Fue ponente de la comisión constitucional de 1869.

RAMÓN GIRALDO DE ARQUELLADA

Destinos y cargos en la carrera judicial

1820:	Regente de Audiencia de Valladolid Ministro del Tribunal Supremo hasta 1823 (que se retira).
1823-1833:	Desterrado.
8 agosto 1834:	Es nombrado Ministro del Tribunal Supremo.
1 febrero 1838:	Solicita la Presidencia del Tribunal Supremo (por ser el más antiguo, y se le concede).
2 enero 1843:	Ministro jubilado del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810 por La Mancha.

Diputado en Cortes Generales y Extraordinarias celebradas en Cádiz en 1811.

Diputado en 1820 por La Mancha.

Diputado en 1834 por Ciudad Real.

Diputado en 1843 por Albacete.

Tres veces Presidente de las Cortes.

Senador vitalicio en 1845-1846 (renunció).

Adscripción política: partido progresista.

Informe favorable de 1836 de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino para seguir.

JORGE GISBERT

Destinos y cargos en la carrera judicial

20 agosto 1821:	Juez de 1ª instancia de Alcira.
22 julio 1822:	Renuncia.
29 octubre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
25 agosto 1838:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid. (No tuvo efecto)
10 agosto 1839:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
24 marzo 1843:	Se declaró cesante desde el día en que se proveyó la plaza.
20 noviembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
12 abril 1844:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
4 abril 1845:	Presidente de la Sala 3ª en la Audiencia de Valencia.
25 febrero 1852:	Presidente de Sala de la Audiencia de Mallorca.
26 marzo 1852:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
4 noviembre 1853:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
27 enero 1854:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
15 septiembre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Miguel Vigil de Quiñones.
23 septiembre 1859:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1837 a 1839 por Alicante.

Adscripción política: partido progresista.

Alcalde constitucional de los seis primeros meses de 1823.

Fue separado de su destino por las Juntas de Murcia y Albacete en 1840. El 8 de mayo de 1841 por los informes favorables emitidos se le propone de nuevo.

Informes en 1837 y 1841 favorables políticos de la Diputación provincial de Albacete y del gobernador político:

“amante de las instituciones liberales y perseguido en la época del despotismo”.

El jefe político de Albacete dice (...) que la comprobación de sus ideas templadas se halla en las votaciones como diputado.

(*) Ver Apéndice documental

FELIPE GÓMEZ ACEBO

Destinos y cargos en la carrera judicial

31 julio 1843:	Fiscal del Tribunal Supremo.
9 agosto 1843:	Se le admite la renuncia por motivos personales que expone en la intención de ocuparse de sus asuntos personales.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 mes.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1836 a 1839 por Santander.

Diputado de 1841 a 1843 por Santander.

No hay más información en su expediente.

ÁLVARO GÓMEZ BECERRA

Destinos y cargos en la carrera judicial

1809 - 1810:	Corregidor de la Villa de Cáceres.
1833:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
13 septiembre 1834:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
28 septiembre 1835:	Ministro de Gracia y Justicia.
18 mayo 1836:	Cesa.
2 octubre 1836:	Ministro del Tribunal Supremo por promoción de José M. Calatrava a la Secretaría del Despacho de Estado.
3 octubre 1840:	Ministro de Gracia y Justicia.
21 mayo 1841:	Cesa y se reincorpora al Tribunal Supremo.
19 mayo 1843:	Cesa.
23 enero 1855:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1822 por Extremadura.

Diputado en 1836 por Cáceres.

Diputado en 1839 por Cáceres.

Presidió el Congreso en 1823 y las Cortes Constituyentes en 1836.

Senador en 1839 por Badajoz.

Senador en 1841 por Toledo.

Senador vitalicio en 1847-1848.

Presidió el Senado en 1842-1843.

Adscripción política: liberal-progresista.

En 1808 formó parte de la junta de defensa organizada durante la Guerra de la Independencia.

En 1808 fue Corregidor, cargo que casi le costó la muerte*.

En 1813 fue nombrado Jefe Político de Extremadura.

En 1820 fue nombrado Jefe Político de Badajoz.

En 1821 fue nombrado Jefe Político de Toledo.

Presidió el Consejo de Ministros en 1843.

En 1848 fue desterrado a Cuenca.

(*) Lasso Gaité, Juan Francisco. El ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981). Madrid, 1984, p. 68.

Tareas legislativas

Participó internamente en los debates sobre organización judicial con diversas disposiciones.

Propuso la inamovilidad por la Orden de 24 de marzo de 1836, pues todos los nombramientos judiciales tenían el carácter de interinos. Por su labor como ministro desarrolló los decretos de 16 y 31 de octubre de 1840 que refuerzan la inamovilidad dispuesta en los artículos 63 y 66 de la Constitución y crea una Junta de clasificación que informaría para los ascensos.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 583, n. 789.

JOAQUÍN GÓMEZ DE LA CORTINA

Destinos y cargos en la carrera judicial

3 diciembre 1847:	Magistrado supernumerario de la Audiencia territorial de Madrid.
23 abril 1849:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
24 mayo 1851:	Rector en Comisión de la Universidad Central de Madrid.
9 diciembre 1853:	Se le declara cesante a petición propia.
10 junio 1855:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante, dejada por Pío Laborda.
19 septiembre 1856:	Se le declara cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos ni quejas.

PEDRO GÓMEZ DE LA HERMOSA

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 noviembre 1834:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Cáceres.
16 enero 1836:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
11 septiembre 1843:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
13 abril 1844:	Se le declara cesante.
27 marzo 1847:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
27 mayo 1850:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
6 febrero 1851:	Fiscal de la Junta directiva de la Deuda del Estado.
10 octubre 1851:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
31 mayo 1860:	Ministro del Tribunal Supremo.
31 mayo 1869:	Se jubila con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1851 a 1854 por Laredo (Santander).

Adscripción política: partido moderado.

El 20 de febrero de 1837 la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino le consideró acreedor a continuar en la magistratura.

En abril de 1844 fue declarado cesante sin causa justa.

Otros cargos y distinciones

El 22 de mayo de 1868 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.

PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA

Destinos y cargos en la carrera judicial

23 febrero 1833:	Alcalde Mayor de Alcalá de Henares.
6 julio 1836:	Juez de 1ª instancia de Ciudad Real.
30 agosto 1836:	Juez de 1ª instancia de Alcalá de Henares.
5 septiembre 1836:	Jefe Político interino de la Provincia de Guadalajara.
11 noviembre 1840:	Corregidor Político de Vizcaya.
13 noviembre 1840:	Se le conceden honores de Magistrado de Audiencia.
19 mayo 1843:	Ministro de Gobernación.
18 julio 1854:	Ministro de Gracia y Justicia.
30 julio 1854:	Cesa.
25 agosto 1854:	Fiscal del Tribunal Supremo.
17 octubre 1856:	Se le declara cesante a petición propia y por razones de salud.
20 julio 1869:	Presidente del Tribunal Supremo por fallecimiento de Joaquín Aguirre.
12 diciembre 1871:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1839 por Soria.

Diputado de 1841 a 1842 por Soria.

Diputado en 1843 por Segovia.

Diputado de 1846 a 1850 por Orense.

Diputado de 1854 a 1856 por Ávila, Guadalajara y Soria.

Senador vitalicio en 1858-1859.

Senador en 1871-1872 por Soria.

Adscripción política: liberal-progresista.

Militó en las filas liberales y estuvo exiliado con Espartero en Londres.

Otros cargos y distinciones

Ostentó la Gran Cruz de Carlos III.

Tareas legislativas

Fue nombrado vocal de la Comisión General de Codificación establecida en 1856, bajo la presidencia de Cortina y suprimida en 1869. Desde este puesto colaboró en importantes trabajos sobre organización de tribunales, procedimiento criminal y reforma del Código Penal. Fue ponente de los proyectos de reforma de casación civil y de refundición de tribunales especiales en los ordinarios, elaborados en 1868.

JULIÁN GÓMEZ INGUANZO Y DE PORRAS

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 diciembre 1847:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
12 mayo 1848:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
17 noviembre 1848:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
2 julio 1849:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
11 noviembre 1854:	Se le declara cesante.
7 noviembre 1856:	Se le repone en su anterior destino.
31 octubre 1864:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
4 noviembre 1864:	Presidente de Sala de la Audiencia de Burgos.
13 marzo 1867:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
3 octubre 1867:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
10 noviembre 1868:	Se le declara cesante.
8 marzo 1875:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Lorenzo Cobo de la Torre.
21 marzo 1881:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1839 por Palencia.

Diputado a Cortes en 1844 por Palencia.

Diputado a Cortes de 1846 a 1854 por Cervera de Pisuerga (Palencia).

Diputado a Cortes en 1857 por Cervera de Pisuerga (Palencia).

Diputado Provincial en dos ocasiones.

Senador en 1876-1877 por Palencia.

Senador en 1877 por Palencia.

Senador en 1879-1880 por Palencia.

Adscripción política: partido conservador.

El Regente de la Audiencia de Burgos advierte el 29 de octubre de 1849:

“Que la marcha de Gómez Inganzo con el fin de tomar parte en las deliberaciones del Congreso (...) deja en mal estado a aquel tribunal, y solicita le solucione el problema”.

Otros cargos y distinciones

Comendador de la Real y Distinguida Orden de Carlos III el 16 de mayo de 1865.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ ACEVEDO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1856 - 1860:	Juez de Paz en Madrid.
24 noviembre 1868:	Ministro del Tribunal Supremo
17 septiembre 1869:	Fiscal del Tribunal Supremo.
27 junio 1870:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
6 junio 1880:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1843 por Madrid.

Senador en 1872-1873 por Alicante.

Otros cargos y distinciones

Gran Cruz de Isabel la Católica el 9 de Febrero de 1861.

Tareas legislativas

Fue miembro de la Comisión de Codificación en 1856.

DIEGO GÓNZALEZ ALONSO

Destinos y cargos en la carrera judicial

9 enero 1816:	Honores de Magistrado en la Audiencia de Extremadura.
12 abril 1834:	Fiscal del Crimen de la Audiencia de Valladolid.
1 mayo 1834:	Fiscal de la Civil de la Audiencia de Valladolid.
4 agosto 1834:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
20 julio 1837:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
4 noviembre 1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
11 mayo 1841:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 meses.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1822 por Cáceres.

Diputado a Cortes en 1834 por Cáceres.

Diputado a Cortes en 1836 por Salamanca.

Diputado a Cortes en 1839 por Cáceres.

Diputado a Cortes en 1839 por Salamanca.

Senador en 1841 por Cáceres.

Adscripción política: liberal-progresista.

Fue Corregidor de Toro el 4 de agosto de 1821.

“Siendo Diputado tuvo que emigrar, cuando se quitó la Constitución...”. La Junta para preparar el arreglo de 1836 también dice: “sin que se admitan dudas de sus buenas opiniones y adhesión a la Reina...”.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ NANDÍN

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 julio 1835:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
12 noviembre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
28 abril 1838:	Traslado en la misma plaza a la Audiencia de Sevilla.
2 febrero 1844:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
8 febrero 1845:	Regente de la Audiencia de Canarias.
5 abril 1845:	Renuncia.
25 mayo 1847:	Ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
14 enero 1853:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de Manuel Antonio Caballero.
18 enero 1854:	Cesante.
14 noviembre 1856:	Se le repone en el Tribunal Supremo.
6 marzo 1863:	Presidente de Sala de Indias del Tribunal Supremo.
10 abril 1867:	Se le declara cesante.
24 octubre 1868:	Se le repone como Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
13 enero 1879:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 23 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado suplente en 1843 por Cádiz.

Senador vitalicio en 1853.

Senador en 1872-1873 por Navarra.

La Diputación Provincial de Barcelona el 26 de julio de 1837 dice de él: “reúne buena conducta moral y la debida adhesión a la Reina y libertades nacionales”.

En 1870 la sección de magistrados dice de él que reúne las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley.

En 1871 se le declara inamovible.

En las observaciones de su hoja de servicios leemos:

“Las cuatro cesantías que aparecen en esta Hoja y que paralizaron por más de 10 años la carrera de éste, fueron políticas, motivándolas sus opiniones y votaciones independientes, ya como magistrado, ya como senador”.

Tareas legislativas

Fue vocal de la Comisión de Códigos.

Fue vocal de la Junta para examinar el texto de la Ley de Instrucción pública.

ANTONIO GONZÁLEZ RIVADENEIRA

Destinos y cargos en la carrera judicial

1837:	Ministro del Tribunal Supremo.
31 octubre 1840:	Se le confirma en su puesto.
1841:	Deja el cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

(*) No se encuentra el Expediente personal ni en el AHN ni en el Ministerio de Justicia. Datos extraídos de referencias indirectas (Faro Nacional, Gaceta,...).

PABLO GOVANTES FERNÁNDEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

12 agosto 1834:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Barcelona.
27 diciembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
8 febrero 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
7 febrero 1843:	Cesante.
11 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
28 octubre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
10 enero 1844:	Presidente de la Sala 3ª de la Audiencia de Madrid.
9 junio 1848:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Madrid.
19 agosto 1850:	Regente de la Audiencia de Madrid.
28 mayo 1852:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Ángel Casimiro Gobantes.
14 abril 1853:	Ministro de Gracia y Justicia.
19 septiembre 1853:	Cesa.
18 abril 1856:	Se jubiló a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 0.5 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1837 a 1839 por Burgos.

Diputado en 1840 por Burgos.

Diputado en 1840 por Logroño.

Senador vitalicio en 1851-1852.

Formó parte de la Comisión de procedimientos de las Cortes de 1820.

Adscripción política: liberal-moderado.

Informes favorables en 1837 llegados de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Tareas legislativas

Fue vocal de la Comisión General de Codificación e intervino en la revisión del Código Penal de 1851.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 583, n. 785.

ANGEL CASIMIRO GOVANTES FERNÁNDEZ Y ANGULO

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
13 octubre 1840:	La Junta de Calificación le suspendió y le declara cesante por los sucesos de septiembre de ese mismo año.
4 noviembre 1840:	Solicita la jubilación voluntaria.
24 noviembre 1840:	Se le concede la jubilación.
Diciembre 1843:	Se le repone en la plaza de Ramón Macía Lleopart que se jubila.
29 enero 1844:	Toma posesión.
27 abril 1852:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1820 a 1823 por Burgos.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: partido moderado.

PEDRO GUDAL PORTANELL

Destinos y cargos en la carrera judicial

21 marzo 1836:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
23 enero 1841:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
22 junio 1843:	Separado por la Junta.
15 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
5 septiembre 1856:	Regente de la Audiencia de Albacete.
6 febrero 1857:	Regente de la Audiencia de Canarias.
1 agosto 1858:	Trasladado a la Regencia de Cáceres.
8 agosto 1861:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 marzo 1863:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
27 noviembre 1865:	Ministro del Tribunal Superior de Guerra y Marina.
13 abril 1866:	Ministro del Tribunal Supremo por dimisión de Joaquín Roncali.
26 marzo 1867:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

Adscripción política: partido progresista.

Perteneció a la Milicia Nacional entre 1820 - 1823 y tomó parte en varias acciones armadas, teniendo que emigrar en aquella época.

El Regente y la Diputación provincial de Cáceres informaron favorablemente en 1837.

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino lo consideró acreedor a que continuase en su plaza.

El 5 de febrero de 1840, el jefe político de Cáceres informó, que:

“era partidario acérrimo del bando progresista y que superando con su carácter y osadía a la índole pacífica de los demás magistrados resultó que los Jueces y dependientes del tribunal de opiniones monárquicas tuvieron que manifestarse neutrales por lo que le achacaba la pérdida de las elecciones”.

En 1843 siendo magistrado de Sevilla se negó a reconocer la Junta creada por el alzamiento de aquella ciudad por no creerlo compatible con su carácter de magistrado por lo que quedó cesante.

ANTONIO GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS

Destinos y cargos en la carrera judicial

26 junio 1847:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
2 julio 1847:	Oficial Jefe de Negociado de esta Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.
20 agosto 1847:	Secretario con ejercicio de Decretos en el Ministerio.
17 octubre 1856:	Jefe de Sección del Ministerio.
7 septiembre 1861:	Ministro del Tribunal de las Órdenes.
14 diciembre 1868:	Ministro del Tribunal Supremo para el ejercicio de cuestiones eclesiásticas.
17 marzo 1870:	Se le declara cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1840 por Ciudad Real.

Diputado a Cortes en 1844 por Córdoba.

Diputado a Cortes de 1846 a 1851 por Hinojosa del Duque (Córdoba).

Diputado a Cortes en 1857 por Pozoblanco (Córdoba).

Diputado a Cortes en 1863 por Pozoblanco (Córdoba).

Diputado a Cortes en 1864 por Pozoblanco (Córdoba).

Diputado a Cortes en 1867 por Córdoba.

Adscripción política: progresista.

FEDERICO GUZMAN Y MAGADÁN

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 mayo 1841:	Promotor Fiscal en propiedad de los Juzgados de Granada.
19 junio 1844:	Juez de 1ª instancia de Fonsagrada (Lugo).
8 noviembre 1846:	Juez de 1ª instancia de Vivero.
19 abril 1850:	Juez de 1ª instancia de Oviedo.
10 febrero 1854:	Es declarado cesante.
14 noviembre 1856:	Fiscal de la Audiencia de Oviedo.
16 octubre 1863:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
11 marzo 1864:	Fiscal de la Audiencia de Oviedo.
20 abril 1867:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
21 junio 1867:	Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
17 marzo 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
17 diciembre 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
11 febrero 1871:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
24 enero 1876:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1877:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Juan Cano Manuel.
5 mayo 1880:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Vega de Rivadeo (Oviedo).

Diputado en 1851 por Vega de Rivadeo (Oviedo).

Senador en 1879-1880 por Oviedo.

Adscripción política: partido conservador.

“El Sr. Guzmán suplicando votos por medio de cartas a los electores de la Vega y ofreciendo servicios de importancia que no podría prestar en posición distinta a la que ocupa, hace dudar a sus paisanos de su imparcialidad en el ejercicio de su ministerio, que temen o desconfían que los respetos debidos a la justicia (...) estén pendientes de la recomendación favorable o adversa del magistrado que con pasión suele aplicarse a dominar en las contiendas electorales de época tan agitada”.

JOSÉ MARÍA HARO DE LAS OLIVAS

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 febrero 1835:	Nombrado Alcalde Mayor de Orce.
6 agosto 1834:	Renuncia.
1835:	Alcalde de Santa Fe.
11 marzo 1836:	Renuncia al Juzgado de Santa Fe.
7 junio 1836:	Juez de 1ª Instancia de Murcia.
10 marzo 1840:	Juez de 1ª Instancia de Oviedo.
5 abril 1840:	Juez de 1ª Instancia de León.
23 marzo 1841:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
5 noviembre 1852:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
15 diciembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
15 mayo 1857:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
15 enero 1864:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
3 noviembre 1866:	Ministro del Tribunal Supremo.
20 mayo 1872:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado.
12 octubre 1874:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Se separó voluntariamente con sus compañeros de Audiencia en Granada en 1848 por no reconocer a la Junta.

La Junta de calificación de magistrados y jueces (sección de magistrados) acordó por unanimidad que el interesado reúne las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley, el 15 de diciembre de 1870.

El 20 de marzo de 1871 fue declarado inamovible.

FELIX HERRERA DE LA RIVA

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 septiembre 1835:	Fiscal de la Audiencia de Burgos.
13 diciembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
16 enero 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
30 noviembre 1842:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
2 julio 1843:	Renuncia a la Regencia.
15 diciembre 1843:	Se le declara cesante. Fiscal cesante de la Audiencia de Sevilla.
15 septiembre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Joaquín Romaguera.
14 noviembre 1856:	Cesante como Ministro del Tribunal Supremo.
4 marzo 1859:	Se le nombre Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de J. M. Trillo.
27 enero 1865:	Jubilación a petición propia con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1863-1864.

Adscripción política: partido moderado.

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino en 1837 le consideró acreedor a seguir en la plaza que servía.

En 1842 renunció a la Regencia de Sevilla para formar parte de la Junta Provisional de Gobierno de Sevilla (órgano político).

Tareas legislativas

El 18 de noviembre de 1856 se le nombra vocal de la Junta superior consultiva de archivos.

JOSÉ MARÍA HERREROS DE TEJADA

Destinos y cargos en la carrera judicial

27 noviembre 1837:	Promotor Fiscal de Granada.
8 agosto 1838:	Juez de 1ª Instancia interino de Granada.
5 septiembre 1838:	Honores de Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
15 diciembre 1840.	Juez de 1ª Instancia de Sevilla.
23 diciembre 1842:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
23 abril 1847:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
31 diciembre 1851:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
13 junio 1853:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
21 enero 1854:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
1 septiembre 1854:	Es declarado cesante.
20 junio 1856:	Vocal de la Junta Superior consultiva de archivos.
10 septiembre 1856:	Se le vuelve a nombrar Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 abril 1865:	Ministro del Tribunal Supremo.
Abril 1877:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

Jefe político y Diputación Provincial de Granada valoran como correcta su conducta política en 1837.

Informes favorables en 1846 y 1849 del Regente de la Audiencia de Albacete.

El 2 de diciembre de 1870 se le concede la garantía de inamovilidad.

La Junta de calificación de magistrados y jueces (sección de magistrados) acordó por “unanimidad que el interesado reunía las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley” el 14 de diciembre de 1870.

El 9 de enero de 1871 se le declara inamovible en su cargo.

La Junta de calificación de magistrados y jueces le declara inamovible en 1874.

Otros cargos y distinciones

El 16 de febrero de 1867 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.

(*) Ver apéndice documental.

CASIMIRO HUERTA Y MURILLO

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 diciembre 1859:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
23 diciembre 1859:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
12 julio 1861:	Presidente de Sala de Granada.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Pamplona.
21 marzo 1871:	Declarado inamovible.
11 diciembre 1872:	Presidente de la Audiencia de Cáceres.
3 junio 1873:	Presidente de la Audiencia de Albacete.
21 septiembre 1874:	Presidente de la Audiencia de Barcelona.
27 diciembre 1874:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
24 enero 1876:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Victoriano Careaga.
16 enero 1883:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Otros cargos y distinciones

Gobernador Civil de Badajoz en 1858.

Gobernador Civil de Toledo en 1859.

El 17 de abril de 1860: Comendador de número de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica.

JOSÉ MARÍA HUET Y ALLIER

Destinos y cargos en la carrera judicial

19 abril 1834:	Fiscal por lo Criminal de la Audiencia de Sevilla.
26 septiembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
8 enero 1837:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
21 marzo 1837:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
14 abril 1838:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
16 junio 1838:	Fiscal de la Audiencia de Sevilla.
21 septiembre 1839:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
1 septiembre 1840:	Fiscal cesante.
11 diciembre 1843:	Fiscal togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
10 enero 1850:	Fiscal del Tribunal Supremo.
25 agosto 1854:	Se le declara cesante.
14 octubre 1855:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Cádiz.

Diputado en 1839 por Huelva.

Diputado en 1840 por Huelva.

Senador en 1844-1845 por Canarias.

Senador vitalicio en 1846-1847.

Adscripción política: partido moderado.

El ministro de la Guerra dice el 16 de enero de 1839:

“que el Capitán General de Andalucía le ha recomendado el comportamiento que en las ocurrencias de Sevilla de noviembre anterior observaron los ministros de aquella Audiencia, D. José M. Huet y Sebastián González Nandín y el valor cívico y decisión con que desechando abrazar el partido de los sublevados contribuyeron al restablecimiento del orden. En su consecuencia se ha dignado mandar V. M. se les den gracias y se tenga presente su mérito para adelantarles en su carrera”.

El 1 de julio de 1840, el interesado aduce que:

“por su mal estado de salud y el mucho trabajo que le ocasiona el cargo de diputado a Cortes no podía seguir con el despacho de la Fiscalía mientras ocurren las sesiones de la actual legislatura (...)”.

TOMÁS HUET Y ALLIER

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 septiembre 1836:	Juez de Lama (Pontevedra).
8 mayo 1837:	Juez de Layarón (Granada).
6 noviembre 1838:	Juez de Sigüenza.
17 marzo 1839:	Fiscal de la Audiencia de Canarias.
15 diciembre 1851:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
27 noviembre 1858:	Ministro del Tribunal especial de Órdenes.
10 septiembre 1862:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de Antero de Echarri.
4 octubre 1873:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo por fallecimiento de G. Gallo.
11 abril 1876:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 14 años.

Informes y valoraciones políticas

En 1837 el Regente de la Audiencia de Granada dice de él: “que es adicto a las libertades patrias”. Y la Diputación provincial: “decidido por la libertad de la patria habiendo salido varias veces al frente de la milicia en persecución de las facciones”.

En 1854 la Diputación provincial de Mallorca: “se adhirió al alzamiento del 18 de julio y afecto al actual orden de cosas”.

Un informe de 13 de febrero de 1855 de varios diputados a Cortes en Mallorca dice:

“respecto a la conducta política de quienes se alude, no es nada favorable a la situación creada por el glorioso alzamiento nacional de julio, y que ese es también su juicio con la convicción profunda de que es necesario y conveniente que en la Audiencia y Juzgados de Mallorca y sus Islas se efectúe pronto una reforma radical en el personal, reemplazándolo con hombres que por su consecuencia de principios progresistas fueron separados de sus destinos en 1843 y siguen en la miseria”.

En 1871 es declarado idóneo e inamovible.

Otros cargos y distinciones

Recibió la Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4502, n. 3950.

JOAQUÍN JAUMAR DE LA CARRERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

25 enero 1841:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
4 junio 1847:	Traslado a Barcelona que queda sin efecto el 17 del mismo mes.
20 agosto 1847:	Se declara vacante su plaza por no presentarse en el término del plazo para su posesión.
17 febrero 1854.	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
3 marzo 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
21 mayo 1855:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
20 marzo 1857:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
25 abril 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
10 agosto 1859:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
15 agosto 1863:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
13 abril 1866:	Regente de la Audiencia de Albacete.
17 mayo 1866.	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
7 agosto 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
20 marzo 1871:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Fue Diputado a Cortes por el partido progresista en 1837-1840.

Diputado de 1841 a 1842 por Barcelona.

Adscripción política: partido progresista.

La Junta de calificación de magistrados y jueces con fecha de 17 de diciembre de 1870:

“Declara que el dicho ministro reúne las condiciones necesarias para gozar de la inamovilidad que la ley establece”.

JUAN JIMÉNEZ CUENCA

Destinos y cargos en la carrera judicial

8 septiembre 1860:	Jefe de Sección del Ministerio de Gracia y Justicia.
13 junio 1862:	Regente de la Audiencia de Canarias.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Albacete.
29 enero 1869:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Nicolás Peñalver.
26 enero 1875:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1881-1882 por Tarragona.

Senador en 1886 por Córdoba.

El 3 de diciembre de 1870: la sección de magistrados dice que reunía las condiciones que la ley establecía.

En 1871 fue declarado inamovible.

Otros cargos y distinciones

En febrero de 1853 fue nombrado gobernador de la provincia de Jaén.

En 1854 nombrado gobernador de Orense hasta 1856.

En 1856 fue nombrado gobernador de Guadalajara.

En 1857 gobernador de Palencia.

En 1858 gobernador de Sevilla.

Distinguido con altas condecoraciones.

JOSÉ JIMÉNEZ MASCAROS

Destinos y cargos en la carrera judicial

1871:	Ministro del Tribunal Supremo
Octubre 1874:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

(*) El expediente personal no ha sido encontrado.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4497, n. 3915(*)

EDUARDO ELIO Y JIMÉNEZ NAVARRO

Destinos y cargos en la carrera judicial

12 diciembre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 abril 1867:	Presidente de Sección 2ª de la Sala 1ª.
1868:	Deja el cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

PEDRO JIMÉNEZ NAVARRO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1820:	Fiscal del Tribunal del excusado.
1822:	Juez de 1ª Instancia. Teniente Corregidor de Madrid.
10 septiembre 1834:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
1838:	Solicita la jubilación en virtud del Decreto de 29 de Diciembre de 1831.
4 enero 1840:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 septiembre 1840:	Cesó por el informe que de él se hizo, a petición propia.
10 abril 1842:	Se le declaró cesante de la Audiencia de Madrid.
9 diciembre 1843:	Se le nombra Fiscal del Tribunal Supremo.
11 septiembre 1844:	Fiscal único desde que cesó Joaquín Francisco Pacheco por irse a la Comisión de Códigos.
14 enero 1845:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Demetrio Ortiz.
31 diciembre 1852:	Muere.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1844 por Logroño.

Senador vitalicio en 1846-1847.

Adscripción política: partido moderado.

El 5 de diciembre de 1836 la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino concluye:

“merece continuar sirviendo la plaza que ocupa y aún es acreedor a ser ascendido a igual plaza en el Supremo Tribunal de Justicia, cuando haya promoción y el Gobierno lo tenga a bien”.

PABLO JIMÉNEZ DE PALACIO

Destinos y cargos en la carrera judicial

31 marzo 1835:	Juez de 1ª instancia de Híjar.
26 octubre 1835:	Juez interino de Burgo de Osma.
20 noviembre 1835:	Juez interino de Valencia.
1840:	Separado por la Junta.
10 octubre 1843:	Juez de Barcelona.
7 noviembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Aragón.
5 enero 1844:	Juez de Valencia.
24 julio 1845:	Fiscal de la Audiencia de Pamplona.
30 octubre 1847:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
29 marzo 1850:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Valladolid.
5 noviembre 1852:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
23 junio 1854:	Presidente del Tribunal Correccional.
31 mayo 1860:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 marzo 1865:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

Diciembre 1836, informe a la Junta:

“la honradez, opinión liberal y laboriosidad del interesado son notorias”.

1840. También informe positivo para reponerlo después de separarlo.

1841: “la conducta moral y política del interesado es irreprochable en todos los conceptos”.

GREGORIO JUEZ SARMIENTO

Destinos y cargos en la carrera judicial

19 septiembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Extremadura.
28 abril 1838:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
30 septiembre 1838:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
13 abril 1844:	Presidente de Sala 2ª de la Audiencia de Valladolid.
30 junio 1849:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
10 septiembre 1856:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
19 diciembre 1856:	Regente de la Audiencia de Zaragoza.
28 marzo 1865:	Cesante por motivos personales (reciente fallecimiento de su mujer).
5 mayo 1862:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de Madrid.
10 marzo 1865:	Ministro del Tribunal Supremo por nombramiento como Consejero de Estado a Pablo Jiménez de Palacio.
5 febrero 1875:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

En 1837: “Se le consideró acreedor a continuar en la plaza que servía”.

Informe político de julio de 1840:

“Sus opiniones políticas son notorias, constando que fue miliciano voluntario desde 1820, hasta la conclusión del sistema en 1823”.

El 12 de febrero de 1855: Los diputados por Zaragoza hacen grandes elogios de tan digno magistrado y de tan buen liberal.

Contradicción de ideas progresistas y de ideas moderadas.

10 diciembre 1870: La Junta de calificación de magistrados y jueces:

“el individuo del que se trata reúne las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley”.

PÍO LABORDA Y GALINDO

Destinos y cargos en la carrera judicial

	Auditor de Guerra.
19 diciembre 1834:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
6 junio 1836.	Es separado de su plaza.
6 marzo 1839.	Fiscal togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
16 noviembre 1840:	Fiscal del Tribunal Supremo.
1843:	Cesante.
24 abril 1851:	Se testimonia en documento que es Fiscal cesante del Tribunal Supremo.
27 agosto 1854:	Solicita su jubilación.
9 septiembre 1854.	Ministro del Tribunal Supremo.
6 marzo 1857:	Se jubila siendo Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1834 por Zaragoza.

Diputado en 1836 por Zaragoza.

Diputado en 1837 por Zaragoza.

Diputado en 1839 por Zaragoza.

Diputado en 1840 por Zaragoza.

Diputado en 1841 por Zaragoza.

Diputado en 1846 por Zaragoza.

Senador vitalicio en 1863-1864 (Sólo nombramiento).

Adscripción política: partido progresista.

No existen más informes políticos.

JOSÉ LANDERO CORCHADO

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 mayo 1814:	Juez interino de Talavera de la Reina.
3 septiembre 1820:	Juez de Alcántara.
18 febrero 1834:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
6 febrero 1836:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
28 mayo 1836:	Se le separa.
19 agosto 1836:	Se le repone.
18 agosto 1837:	Cesante por no tomar posesión del destino.
7 noviembre 1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
1843:	Cesante y continuó como Ministro suplente hasta 1847.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836 por Badajoz.

Diputado de 1837 a 1839 por Madrid.

Diputado en 1839 por Badajoz.

Senador en 1839 y 1841 por Cáceres.

Senador vitalicio en 1847-1848.

Jefe político de Cáceres en 1822.

Adscripción política: liberal-progresista.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de él en 1834: “observó un comportamiento, irreprochable habiéndose hecho acreedor por su opinión liberal, ...”.

Tareas legislativas

El 20 de junio de 1839 se le nombró vocal presidente de la comisión encargada de preparar el Proyecto de Ley de responsabilidad e inamovilidad en los jueces.

MANUEL LEÓN ROMERO

Destinos y cargos en la carrera judicial

14 agosto 1841:	Promotor Fiscal del Juzgado de Colmenar.
20 febrero 1842:	Juez de Torrox (Málaga).
14 octubre 1843:	Juez de Jerez de la Frontera.
2 julio 1847:	Juzgado del Distrito del Pilar (Zaragoza).
13 agosto 1847:	Juzgado de Alicante.
1 octubre 1847:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
21 enero 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Canarias.
17 julio 1855:	Se le declara cesante.
21 noviembre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Mallorca.
20 marzo 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
9 abril 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
8 enero 1864:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
10 julio 1868:	Se le declara cesante.
14 octubre 1868:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
6 abril 1869:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de Mariano García Gallo.
13 marzo 1882:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo en la vacante de Ignacio Vieitez.
20 octubre 1890:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 21 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Villacarrillo (Jaén).

Senador en 1881-1882 por Málaga.

En 1871 se le declaró inamovible.

Informes favorables de su comportamiento profesional y político.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica.

RAFAEL LIMICIANA Y BRIGNOLES

Destinos y cargos en la carrera judicial

	Fue Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
26 noviembre 1865:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Joaquín Melchor y Pinazo.
1 octubre 1866:	Cesa por haber sido nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1863-1864.

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ LÓPEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 noviembre 1840:	Fiscal del Tribunal Supremo.
9 mayo 1843:	Ministro de Gracia y Justicia.
17 mayo 1843:	Cesa.
23 julio 1843:	Ministro de Gracia y Justicia.
20 noviembre 1843:	Cesa.
17 noviembre 1854:	Magistrado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
14 noviembre 1855:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1834 por Alicante.
Diputado en 1836 por Albacete.
Diputado en 1836 por Alicante.
Diputado en 1836 por Albacete.
Diputado en 1836 por Alicante.
Diputado en 1836 por Alicante.
Diputado en 1837 por Madrid.
Diputado en 1839 por Albacete.
Diputado en 1839 por Alicante.
Diputado en 1839 por Madrid.
Diputado en 1839 por Valencia.
Diputado en 1840 por Alicante.
Diputado en 1840 por Madrid.
Diputado en 1841 por Alicante.
Diputado en 1841 por Barcelona.
Diputado en 1841 por Valencia.
Diputado en 1843 por Barcelona.
Diputado en 1843 por La Coruña.
Diputado en 1843 por Málaga.
Diputado en 1843 por Alicante.
Diputado en 1843 por Cáceres.
Diputado en 1843 por Cádiz.
Diputado en 1843 por Toledo.
Senador vitalicio en 1848-1849.
Presidente de las Cortes Constituyentes.
Adscripción política: liberal-progresista.

Jefe del partido radical (exaltado liberalismo).
Tomó parte como teniente de la milicia nacional y huyó a Francia en 1823.
Subsecretario de Gobernación.
Ministro de Gobernación.
Alcalde de Madrid en 1840.
Presidente de gobierno del 9 al 17 de mayo de 1843 y del 23 de julio al 20 de noviembre de 1843

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 588, n. 1067.

NARCISO LÓPEZ LÓPEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 septiembre 1836:	Juez de 1ª instancia de Hellín (Alicante).
10 junio 1837:	Juez de 1ª instancia de Gergal (Almería).
7 julio 1838:	Renuncia.
18 noviembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
9 enero 1844:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
17 marzo 1848:	Vuelve a Valencia desde su condición de Magistrado de Granda.
23 junio 1854:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
8 octubre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Mallorca.
14 noviembre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
19 febrero 1858:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
7 agosto 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
13 abril 1870:	Regente de la Audiencia de Madrid.
27 junio 1870:	Ministro del Tribunal Supremo.
1 marzo 1871:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 meses.

Informes y valoraciones políticas

Adscripción política: partido progresista.

El Regente de la Audiencia de Granada:

“Intachable por su conducta moral y política, por su adhesión a la Reina y libertades patrias”.

En 1836 fue electo diputado, cuyo cargo no admitió.

Buenos informes sobre su conducta política de las Diputaciones provinciales de Albacete y Almería en 1837.

El 8 de Agosto de 1843 fue nombrado para el gobierno político de Málaga que no admitió y continuó siendo secretario del Gobierno Civil de Málaga.

En 1855 los diputados por Valencia dicen de este funcionario:

“Le tienen por magistrado íntegro, activo e inteligente que no se ha mezclado en elecciones y que sus opiniones son progresistas”.

El 14 de diciembre de 1870 es declarado idóneo por la Junta de calificación de magistrados y jueces.

LEANDRO LÓPEZ MONTENEGRO

Destinos y cargos en la carrera judicial

14 marzo 1845:	Promotor Fiscal de Alfaro (Logroño).
7 marzo 1851:	Juez de 1ª instancia de Herrera del Duque (Badajoz).
21 marzo 1851:	Juez de Caspe (Zaragoza).
3 octubre 1851:	Juez de Laguardia (Álava).
18 octubre 1854:	Juez de Estella (Navarra).
20 febrero 1857:	Juez de Tarazona (Zaragoza).
13 marzo 1857:	Vuelve a Estella.
3 julio 1857:	Juez de Calahorra (Logroño).
24 septiembre 1858:	Vuelve a Estella.
18 octubre 1861:	Secretario de Gobierno de la Audiencia de Pamplona.
21 mayo 1865:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
20 diciembre 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
18 mayo 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
14 noviembre 1868:	Se le declara cesante.
1 marzo 1875:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
19 septiembre 1878:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
13 enero 1879:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
27 febrero 1879:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Antonio Valdés.
12 abril 1883:	Se jubila a petición propia y según marca la ley.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1880 por Arnedo (Logroño).

Senador en 1884-1885 por Logroño.

En 1844 dice el Regente de él: “se le nombró teniendo en consideración su probidad, conocimientos y adhesión al gobierno de V. M.”.

Otros cargos y distinciones

En 1854 se le nombró Caballero de la Orden Militar de S. Juan de Jerusalén.

En 1856 Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica.

RAMÓN LÓPEZ VÁZQUEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

6 septiembre 1831:	Solicita plaza de Oidor de la Audiencia de Granada.
13 noviembre 1832:	Solicita plaza togada.
4 junio 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
4 agosto 1838:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
30 diciembre 1839:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres (no tomó posesión).
7 enero 1852:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de José Cecilio de la Rosa. Era Ministro del Tribunal de Cuentas.
9 septiembre 1854:	Se le declara cesante.
31 octubre 1856:	Se le repone en el Tribunal Supremo como Ministro.
30 octubre 1857:	Se le nombra Presidente de Sala.
30 septiembre 1864:	Presidente del Tribunal Supremo.
13 octubre 1868:	Se le jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Pontevedra.

Diputado en 1839 por Pontevedra.

Diputado en 1840 por Pontevedra.

Diputado en 1843 por Pontevedra.

Diputado en 1844 por Pontevedra.

Diputado en 1846 por Pontevedra.

Diputado en 1846 por Pontevedra.

Diputado en 1850 por Pontevedra.

Diputado en 1851 por Pontevedra.

Senador vitalicio en 1861-1862.

No existen más informes políticos en su expediente.

CLAUDIO ANTÓN DE LUZURIAGA

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 agosto 1821:	Juez de 1ª instancia de San Sebastián.
1 julio 1823:	Juez de 1ª instancia interino de La Coruña.
1834:	Fiscal de la Civil de la R. Audiencia de Cataluña.
31 octubre 1839:	Regente de la Audiencia de Cataluña.
25 noviembre 1840:	Fiscal del Tribunal de Órdenes.
5 agosto 1843:	Ministro del Tribunal Supremo y ese mismo año solicita la jubilación.
20 noviembre 1843:	Ministro de Gracia y Justicia.
5 diciembre 1843:	Cesa.
9 septiembre 1854:	Es repuesto como Ministro del Tribunal Supremo.
29 septiembre 1854:	Se le admite la renuncia.
14 noviembre 1855:	Presidente del Tribunal Supremo.
14 julio 1856:	Ministro de Gracia y Justicia.
7 agosto 1856:	Cesa.
17 octubre 1856:	Renuncia por su mal estado de salud.
1874:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años

Informes y valoraciones políticas

Diputado suplente en 1836 por Logroño.

Diputado suplente en 1836 por Barcelona.

Diputado en 1839 por Guipúzcoa.

Diputado suplente en 1841 por Logroño.

Diputado suplente en 1843 por Logroño.

Diputado suplente en 1854 por Logroño.

Fue diputado por Logroño en las Cortes Constituyentes y tuvo que pedir autorización a las Cortes en 1855 para aceptar el cargo de presidente del Tribunal Supremo.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: formó parte de la Unión Liberal. Considerado del ala derecha del progresismo.

Tareas legislativas

Miembro de la Comisión General de Codificación en 1843 y 1846.

Participó en la elaboración del Código Civil.

Participó en debates y discusiones sobre el Código Penal.

(*) Ver apéndice documental

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 568, n. 107.

RAMÓN MACÍA LLEOPART

Destinos y cargos en la carrera judicial

1812:	Magistrado de Audiencia de Madrid.
1815:	Oidor de la Audiencia de Valencia.
1818:	Regente de Canarias.
13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
27 octubre 1836:	Se le confirma en el puesto por la Junta para preparar Arreglos de Tribunales y Juzgador del Reino, por su intachable trayectoria.
30 diciembre 1843:	Jubilado → Se solicita.
1844:	Documento en que se habla de <u>magistrado jubilado</u> del Tribunal Supremo (condición desde el 2 de Julio de 1844).
1849:	Ministro jubilado y Suplente del Tribunal Supremo.
18 noviembre 1849:	Quiere que se le reponga en su destino y el 17 de Marzo de 1851 lo sigue pidiendo; acogándose al Decreto de 16 Octubre de 1849.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810.

Diputado en 1841 por Lérida.

Senador vitalicio en 1848-1849.

Senador propuesto por la Corona en 1838.

Adscripción política: partido progresista.

(*) Ver apéndice documental

PASCUAL MADOZ E IBAÑEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

11 Agosto 1835:	Alcalde mayor de la Audiencia de Barcelona.
Noviembre 1835:	Juez de 1ª instancia de Viella.
10 Mayo 1836:	Juez de 1ª instancia de Barcelona.
24 Diciembre 1838:	Solicita la renuncia.
21 Agosto 1843:	Cesa como Ministro del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 0.1 año.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836 por Lérida.

Diputado en 1837 por Lérida.

Diputado en 1839 por Lérida.

Diputado en 1840 por Lérida.

Diputado en 1841 por Lérida.

Diputado en 1843 por Lérida.

Diputado en 1846 por Tremp (Lérida).

Diputado en 1850 por Tremp (Lérida).

Diputado en 1851 por Tremp (Lérida).

Diputado en 1853 por Tremp (Lérida).

Diputado en 1854 por Lérida.

Diputado en 1858 por San Pablo (Barcelona).

Diputado en 1863 por San Pablo (Barcelona).

Diputado en 1867 por Barcelona.

Diputado en 1869 por Alcoy (Alicante).

Presidente de las Cortes en el Bienio Progresista.

Adscripción: Liberal-progresista. Perteneció al partido progresista.

Entre sus méritos él mismo destaca haber sido nacional en 1822 y 1823 hasta caer prisionero.

Perteneció a la Junta Central Revolucionaria de Madrid de 1868.

Otros cargos y distinciones

Se le concede la Cruz de Isabel la Católica.

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ MARÍA MANESCAU Y SABORÍO

Destinos y cargos en la carrera judicial

23 noviembre 1832:	Regente de Barcelona. Regente de Granada.
18 marzo 1834:	Regente de la Audiencia de Madrid.
11 abril 1834:	Se le conceden honores de Tribunal Supremo.
14 agosto 1834:	Ministro del Tribunal Supremo.
2 octubre 1842:	Solicita su jubilación desde el día en que la Junta Provisional le suspendió de sus servicios.
15 diciembre 1843:	Se solicita proponer a J. M. Manescau Magistrado cesante del Tribunal Supremo para la plaza que deja vacante Claudio Antón de Luzuriaga.
16 diciembre 1843:	Se le restituye.
29 diciembre 1843:	Presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
22 febrero 1850:	Presidente del Tribunal Supremo.
22 diciembre 1850:	Fallece

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 15 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1836-1840 por Málaga.

Senador en 1844-1845 por Málaga.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: partido moderado.

(*) Ver apéndice documental

JOSE MARÍA MANRESA Y NAVARRO

Destinos y cargos en la carrera judicial

8 febrero 1845:	Juez de Monovar (en propiedad).
19 marzo 1847:	Juez de Mahón.
15 enero 1850:	Cesante.
14 mayo 1850:	Juez de Novelda (en comisión).
31 agosto 1850:	Cesante.
4 julio 1851:	Juez de Caravaca (en comisión).
30 febrero 1852:	Cesante.
15 febrero 1853:	Juez de Pontevedra (en comisión).
27 enero 1854:	Juez de Novelda.
20 octubre 1854:	Cesante.
26 marzo 1858:	Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
20 junio 1858:	Se le concedió la categoría de Magistrado al servicio del Tribunal Supremo de Justicia.
27 septiembre 1864:	Subsecretario de Gracia y Justicia.
21 julio 1865:	Cesante por dimisión.
11 julio 1866:	Subsecretario de Gracia y Justicia.
31 agosto 1867:	Cesante por dimisión.
9 octubre 1867:	Fiscal de la Audiencia de Madrid en comisión.
18 octubre 1868:	Cesante.
8 julio 1880:	Ministro del Tribunal Supremo.
9 julio 1883:	Considerado como renunciante y declarado cesante.
19 abril 1884:	Ministro del Tribunal Supremo.
12 junio 1887:	Cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1863 por Elche (Alicante).

Diputado de 1864 a 1865 por Elche (Alicante).

Diputado de 1867 a 1868 por Alicante.

Senador en 1891-1893 por Alicante.

Senador en 1896-1898 por Alicante.

Adscripción política: partido moderado.

No fue ministro del Tribunal Supremo (1838-1874) pero formó parte del Tribunal Supremo como secretario de gobierno del Tribunal Supremo.

JUAN MARTÍN CARRAMOLINO RIOJA

Destinos y cargos en la carrera judicial

6 junio 1836:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
12 abril 1844:	Fiscal del Tribunal Especial de Órdenes.
8 octubre 1847:	Vuelve a desempeñar este cargo tras ser cesante.
9 enero 1852:	Ministro del Tribunal Supremo en la plaza de Diego Martín de Villodres.
9 septiembre 1854:	Cesante.
31 octubre 1856:	Se le repone.
20 noviembre 1857:	Se le declara categoría de Presidente de Sala.
16 julio 1858:	Presidente de Sala.
17 julio 1859:	Cesante.
23 octubre 1860:	Se le repone como Presidente de Sala.
10 abril 1867:	Cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1839 por Ávila.

Diputado en 1844 por Ávila.

Adscripción política: partido moderado.

Informe del Regente de Valencia de 7 de marzo de 1837:

“Es de distinguido concepto entre todas las personas sensatas y de buena opinión”.
ministro de la Gobernación en 1839.

Tareas legislativas

Formó parte de la Comisión Constitucional por Cánovas del Castillo.

DIEGO MARTÍN DE VILLODRES

Destinos y cargos en la carrera judicial

	Regente de Aragón.
13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
1837:	Se le destituye del cargo.
5 septiembre 1840:	Es cesante por disposición de la Junta Provisional.
7 febrero 1843:	La Junta de Calificación le reconoce Ministro cesante.
9 febrero 1844:	Se le repone en sustitución de Francisco Entrambasaguas.
1851:	Solicita la jubilación y se le concede el 9 de Enero de 1852. Le sustituye Carramolino porque fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1822 y 1823.

Senador vitalicio.

Adscripción política: partido moderado.

MARIANO MAURY Y GALLEGO

Destinos y cargos en la carrera judicial

11 diciembre 1835:	Juez interino de 1ª instancia de San Martín de Valdeiglesias.
20 junio 1836:	Juez de 1ª instancia de Vives.
27 agosto 1836:	Juez de Getafe.
15 diciembre 1840:	Juez de Martos.
15 octubre 1842:	Juez de 1ª instancia interino de Ciudad Real.
19 junio 1843:	Cesa.
27 julio 1843:	Volvió a encargarse de su destino.
24 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
24 julio 1845:	Cesante.
1 septiembre 1853:	Magistrado suplente de la Audiencia de Madrid.
15 septiembre 1854:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
8 septiembre 1855:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
6 octubre 1855:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
1 agosto 1859:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
20 enero 1860:	Igual cargo en la Audiencia de Burgos.
17 marzo 1870:	Igual cargo en la Audiencia de Barcelona.
27 junio 1870:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
7 diciembre 1871:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
8 enero 1872:	Presidente de Sala de la Audiencia de Albacete.
12 octubre 1874:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de José Jiménez Mascaros.
27 diciembre 1874:	Solicita la jubilación por razones de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 meses.

Informes y valoraciones políticas

En 1837 el Regente de la Audiencia de Madrid certifica su adhesión a las libertades Nacionales.

LUIS MAYÁNS ENRÍQUEZ DE Y NAVARRA

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 marzo 1834:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
17 febrero 1835:	Alcalde mayor interino de El Ferrol.
8 diciembre 1835:	Honores de Ministro de la Audiencia de Zaragoza.
27 mayo 1837:	Ministro de la Audiencia de Zaragoza.
5 diciembre 1843:	Ministro de Gracia y Justicia.
13 febrero 1846:	Cesa.
10 abril 1846:	Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
Julio 1854:	Ministro de Estado.
24 septiembre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de Joaquín Gómez de la Cortina.
2 octubre 1856:	Solicita la renuncia por motivos de salud.
8 octubre 1856:	Se le admite la renuncia.
1 marzo 1864:	Ministro de Gracia y Justicia.
16 septiembre 1864:	Cesó.
14 septiembre 1880:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 mes.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Valencia.

Diputado en 1843 por Valencia.

Diputado en 1844 por Albacete.

Diputado en 1844 por Castellón.

Diputado en 1844 por Valencia.

Diputado en 1846 por Valencia.

Diputado en 1846 por Valencia.

Diputado en 1850 por Valencia.

Diputado en 1850 por Valencia.

Diputado en 1851 por Valencia.

Diputado en 1853 por Valencia.

Diputado en 1857 por Valencia.

Diputado en 1858 por Valencia.

Diputado en 1863 por Valencia.

Diputado en 1864 por Valencia.

Diputado en 1876 por Valencia.

Diputado en 1879 por Valencia.

Presidente del Congreso de 1848 a 1851.

Adscripción política: partido moderado.

La Regencia y la Diputación provincial en 1837 dicen de él: “decidido por la libertad”y “adicto a la Junta como de la Reina y libertades”.

“Estuve alistado bajo la bandera nacional en el año 20, a los 15 de edad, he defendido con las armas en la mano, y por cuantos medios he podido, la causa de la libertad (...) y por estos principios políticos he sufrido 22 meses prisión”.

Tareas legislativas

Intervino en la comisión redactora de la Constitución de 1876.

Por la ley de 30 de abril de 1865 dispuso dividir en dos secciones la sala primera del Tribunal Supremo, con el fin de resolver el atasco que padecía ésta por la acumulación de recursos de casación, solución muy criticada por ir contra la pureza de la jurisprudencia, y fue derogada en 1870*.

Siendo ministro y a iniciativa de su secretario, Ortiz de Zúñiga, se creó el Gran Collar de la Justicia, que correspondía usar al Presidente del Tribunal Supremo en las grandes solemnidades.

(*) intenso debate analizado en el capítulo de Estructura orgánica del Tribunal Supremo.

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 591, n. 1195.

JOAQUÍN MELCHOR Y PINAZO

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 febrero 1835:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
25 noviembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
9 enero 1836:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
5 octubre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
23 agosto 1844:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Barcelona.
26 mayo 1848:	Presidente de Sala 1ª.
23 abril 1851:	Regente de la Audiencia de Albacete.
28 octubre 1853:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
1856:	Trasladado a Regente de la Audiencia de Granada.
12 junio 1857:	Trasladado a Regente de la Audiencia de Valladolid.
1 agosto 1859:	Ministro del Tribunal Supremo.
24 octubre 1865:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Fue Miliciano Nacional de 1820-1823 y contribuyó a la defensa de la plaza por lo que fue declarado benemérito de la patria y le está concedida la condecoración acordada por las Cortes.

La Junta para arreglos de tribunales y juzgados del reino lo declaró el 20 de abril de 1837 acreedor a continuar en la plaza que desempeñaba.

Informes favorables en 1840.

Informes favorables en 1854 remitidos por el Regente de la Audiencia de Sevilla, el gobernador de la Diputación provincial y el Ayuntamiento.

ANTONIO DE MENA Y ZORRILLA

Destinos y cargos en la carrera judicial

2 noviembre 1856:	Fiscal de Imprenta de Madrid.
17 diciembre 1856:	Fiscal especial de Novelas dependiente del Ministerio de la Gobernación.
24 enero 1863:	Dimite.
20 marzo 1879:	Fiscal del Tribunal Supremo al haber sido nombrado Ministro de Ultramar Salvador de Albacete.
3 febrero 1881:	Dimite y se le declara cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1857 por Talavera (Toledo).

Diputado de 1858 a 1864 por Alcoy (Alicante).

Diputado en 1865 por Carmona (Sevilla).

Diputado en 1876 por Montilla (Córdoba).

Senador en 1878, 1879-1880, 1881-1882, 1884-1885, 1886 y 1891-1893 por la Universidad de Sevilla.

Senador vitalicio.

Adscripción política: partido Unión Liberal.

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ MIER Y SALCEDO

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 marzo 1800:	Catedrático.
3 mayo 1807:	Alcalde de la Cuadra (es como Oidor) de la Audiencia de Sevilla.
18 enero 1815:	Oidor de la Audiencia de Sevilla.
17 julio 1820:	Magistrado de la Audiencia Territorial de Sevilla.
19 agosto 1822:	Se le traslada a la Audiencia de Granada.
1825:	Solicita que se le reponga en el cargo del que ha sido separado (Oidor de la Audiencia de Sevilla).
28 junio 1830:	Fiscal del Consejo Supremo de Hacienda.
23 febrero 1833:	Ministro del Consejo y Cámara de Castilla.
1 abril 1834:	Ministro del Tribunal Supremo
19 septiembre 1840:	Suspenso por la Junta Provisional de Gobierno.
8 agosto 1843:	Solicita que se le reponga.
16 diciembre 1843:	Se le repone Ministro del Tribunal Supremo.
1 agosto 1844:	Interino Presidente de Sala 1ª por salud de José María Manescau.
4 julio 1852:	Cuando muere era Presidente de la Sala de Indias del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 14 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1820 por Sevilla.

Senador vitalicio en 1846-1847.

Adscripción política: partido moderado.

Informe reservado: se dan datos políticos (se le tacha de antirealista).

Un informe de 24 de noviembre de 1824 dice de él:

“Convienen en que es de talento e íntegro; pero los más le tienen por sospechoso de liberal, (...) merece la opinión de buena conducta, y que es realista. Fue también juez en la causa del general Grimarest, y aunque obtuvo por los constitucionales, honores de consejero de Guerra y Auditor, al fin fue trasladado a Granada y suspenso. Es uno de los delatados y no resulta purificado”.

La Junta para preparar el arreglo de juzgados y tribunales del reino: curiosamente dicen los informes:

13 noviembre 1837. La Diputación provisional de Madrid:

“El magistrado no goza de buen concepto público por sus opiniones políticas (...) no haber dado nueva prueba positiva de adhesión a las instituciones vigentes (...)”.

y pese a todo 19 noviembre “la Junta lo considera acreedor a continuar sus servicios en el destino que se desempeña ”

(*) Ver apéndice documental

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4579, nº 4972.

CALIXTO MONTALVO Y COLLANTES

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 agosto 1843:	Fiscal de la Audiencia Territorial de Burgos.
3 octubre 1848:	Fiscal de la Audiencia de Oviedo.
2 julio 1844:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
31 octubre 1846:	Fiscal de la Audiencia de Cáceres.
6 septiembre 1850:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
18 octubre 1850:	Se le dio consideración de Presidente de Sala.
25 febrero 1852:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
9 diciembre 1853:	Presidente de Sala en la Audiencia de Zaragoza.
17 noviembre 1854:	Cesó en el cargo anterior.
28 noviembre 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
2 enero 1857:	Es declarado cesante.
23 octubre 1860:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de Valencia.
9 noviembre 1860:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
5 julio 1861:	Regente de la Audiencia de Canarias.
26 junio 1862:	Fiscal de Hacienda de la Audiencia de Madrid.
5 noviembre 1864:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de Madrid.
23 febrero 1866:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
10 abril 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
6 febrero 1871:	Se le jubila por motivos de salud y “sin perjuicio de volver al servicio cuando cese la causa que motivó su jubilación”.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Ribadavia (Orense).

Adscripción política: partido moderado.

El 22 de mayo de 1846 el jefe político de La Coruña dice de él:

“es uno de los funcionarios que más se ha esmerado en combatir por su parte la rebelión (...) y por ello merece ser ascendido”.

La Junta de calificación de magistrados y jueces el 29 de enero de 1871 le declaró inamovible y le confirmó en el cargo.

No existen explicaciones de su condición de cesante ni los motivos que le condujeron a ello.

EUSEBIO MORALES PUIGDEVANT

Destinos y cargos en la carrera judicial

25 enero 1839:	Auditor de Guerra de la Comandancia de Ceuta.
28 diciembre 1847:	Trasladado a la Comandancia General de la Capitanía General en las posesiones de África.
4 febrero 1849:	Trasladado a la Capitanía General de Galicia.
5 julio 1859:	Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
21 octubre 1859:	Conservando su plaza es nombrado Auditor General del ejército de África.
18 octubre 1861:	Senador del Reino.
5 mayo 1864:	Ministro del Tribunal Supremo en una plaza creada y no vacante.
10 abril 1867:	Se le declara cesante.
27 diciembre 1867:	Se le vuelve a nombrar.
29 agosto 1870:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1840 por Soria.

Senador vitalicio en 1861-1862.

No existen más informes políticos sobre el interesado, quizás por su condición de militar.

JOSÉ FRANCISCO MOREJÓN DE LEÓN

Destinos y cargos en la carrera judicial

1810:	Diputado a Cortes.
1813.	Alcalde del Crimen de Granada.
1823:	Ministro de la Audiencia de Granada.
1823 - 1833:	Perseguido por el régimen político.
1833:	Oidor de la Audiencia de Mallorca hasta 1835.
4 octubre 1836:	Regencia de la Audiencia de Granada.
9 septiembre 1837:	Regencia de la Audiencia de Sevilla hasta Septiembre de 1840 en que fue separado por la Junta Suprema de Gobierno: “adhesión a las instituciones liberales”(Regente cesante).
14 diciembre 1843:	Regente de Cáceres.
22 octubre 1845:	Regente de Madrid.
1 marzo 1850:	Ministro del Tribunal Supremo.
9 septiembre 1854:	Fue declarado cesante.
2 marzo 1855:	Fue jubilado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1810 a 1813 por Guatemala.

Adscripción política: partido moderado.

“La junta auxiliar de Sevilla el 13 de noviembre de 1840 dice que ha sido separado por su opinión contraria al pronunciamiento de primero de septiembre de 1840”.

“El jefe político informa que Morejón es acérrimo defensor del partido vencido en septiembre y como tal parcial según el color político de los litigantes o encausados, según los datos y noticias adquiridas”(Sevilla, 27 enero 1841).

“La Diputación Provincial en informe de 27 de febrero de 1841: elogia su conducta y comportamiento y dice que siempre ha sido liberal”.

Informe favorable de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino emitido el 6 de junio de 1836.

DOMINGO MORENO MARTÍNEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

1839:	Abogado en Andujar.
14 octubre 1840:	Fiscal de la Subdelegación de Rentas Nacionales.
1863:	Ministro del Tribunal Supremo.
1864:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1844 por Teruel.

Diputado de 1846 a 1850 por Teruel.

Diputado en 1851 por Teruel.

Diputado en 1853-1854 por Teruel.

Diputado en 1857-1858 por Teruel.

Diputado en 1867-1868 por Mula (Murcia).

Senador vitalicio en 1867.

Adscripción política: partido moderado.

Informe político de 1842: el Regente de la Audiencia de Granada:

“Es miliciano nacional de buena conducta moral y política y merece buen concepto en el desempeño de su profesión”.

El gobierno político provisional de Jaén:

“La conducta moral y política de este abogado es digna de elogio y recomendable por su constante adhesión y sacrificios por la causa de la libertad con la que está identificado”.

TEODORO MORENO Y MAYSONABE

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 mayo 1854:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
23 junio 1854:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
19 febrero 1858:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
9 noviembre 1860:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
30 septiembre 1864:	Ministro del Tribunal Supremo de Órdenes Militares.
17 mayo 1866:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Miguel Nájera Mencos.
13 mayo 1869:	Dimite por razones políticas y se le declara cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

No existen valoraciones en su expediente.

(*) Ver apéndice documental

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4571, .n. 4897.

JOSE MUÑOZ Y ALAIX

Destinos y cargos en la carrera judicial

30 mayo 1846:	Promotor Fiscal de Durango (Vizcaya).
29 octubre 1847:	Promotor Fiscal de Benavente (Zamora).
9 junio 1848:	Promotor Fiscal de Segovia.
17 octubre 1848:	Promotor de Distrito de Barquillo (Madrid).
14 noviembre 1856:	Promotor Fiscal del Distrito de la Audiencia de Madrid.
15 agosto 1863:	Juez de 1ª instancia del Distrito de Hospicio (Madrid).
7 abril 1865:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
13 marzo 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
6 diciembre 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
14 noviembre 1868:	Se le declara cesante.
18 diciembre 1871:	Vuelve a ser declarado acto.
1 marzo 1875:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
7 febrero 1876:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
24 febrero 1879:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Manuel María Basualdo.
8 octubre 1883:	Se le jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3.5 años.

Informes y valoraciones políticas

El 12 de marzo de 1848 el Regente de Valladolid informa que:

“el interesado ha observado buena conducta moral y política sin que haya sido multado ni apercibido”.

JOSÉ FERMÍN MURO Y GÓMEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

20 julio 1840:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de La Coruña (dada la necesidad de nombrar algunos sujetos para suplir la falta de Ministros que hay en ese Tribunal con motivo de la ausencia de varios que están desempeñando el cargo de Diputados a Cortes ...).
2 julio 1847:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
10 agosto 1849:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
9 mayo 1859:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
18 septiembre 1863:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
15 enero 1864:	Trasladado a Granada.
13 septiembre 1864:	Renuncia a su plaza de Granada.
10 octubre 1865:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
1 diciembre 1865:	Presidente de Sala de Audiencia de Madrid por permuta.
20 noviembre 1868:	Ministro del Tribunal Supremo.
29 marzo 1878:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1837 a 1840 por La Coruña.

Fue diputado provincial nombrado por el gobierno no provisional en 1843 y ha prestado sus consejos y servicios al gobierno político de La Coruña (...) y en el pronunciamiento de 1843, prestó servicios para contribuir a su afianzamiento.

Fue promovido a presidente de sala de la Audiencia de La Coruña en 1859 por impulso de los diputados y gobernador de la provincia.

Adscripción política: partido moderado.

La junta de calificación de magistrados y jueces acordó en 1871 por unanimidad que este individuo reunía las condiciones legales para gozar de las garantías de la ley.

MIGUEL DE NÁJERA MENCOS

Destinos y cargos en la carrera judicial

28 enero 1837:	Fiscal de Sevilla.
16 junio 1838:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
11 diciembre 1841:	Regente de la Audiencia de Puerto Rico.
2 octubre 1845:	Cesa.
22 octubre 1845:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
27 marzo 1847:	Vuelve a ser Regente de la Audiencia de Puerto Rico.
15 septiembre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Ramón María Barona.
28 abril 1866:	Solicita la jubilación y se le concede con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 12 años.

Informes y valoraciones Políticas

29 de noviembre de 1823: “ha manifestado una conducta política digna de ser recomendada”

1837: Informes favorables de Regentes y jefes políticos.

FRANCISCO OLABARRIETA Y URQUIJO

Destinos y cargos en la carrera judicial

21 febrero 1808:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla.
12 enero 1815:	Oidor de la Audiencia de Sevilla
1821:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla. Gobernador de la Sala del Crimen.
24 agosto 1825:	Repuesto de la plaza de Oidor de Sevilla.
1832:	Regencia de Cáceres.
3 enero 1833:	Regente de la Audiencia de Extremadura.
3 junio 1833:	Presidente del Tribunal Supremo.
13 abril 1834:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
1834:	Regencia de Barcelona.
19 febrero de 1836:	Cesante de la Regente de Barcelona.
16 diciembre 1837:	Renuncia a los honores que se le conceden de Ministro del Tribunal Supremo al invocar que quiere seguir siendo Diputado a Cortes.
23 julio 1843:	Ministro del Tribunal Supremo.
29 diciembre 1843:	Se le propone Presidente de Sala 2ª.
1 marzo 1850:	Presidente de Sala 1ª.
13 septiembre 1854:	Solicita su jubilación.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1843 por Vizcaya.

Senador en 1840 por Huelva.

Senador en 1844-1845 por Huelva.

Senador vitalicio en 1845-1846.

Adscripción política: partido moderado.

Informe de 24 de noviembre de 1824, donde se dice de él:

“Es de talento, integridad y merece la mejor opinión, pero unos le tienen por liberal y otros dudan de su afecto a V. M. (otro) asegura que es un excelente realista y buen magistrado, habiendo sido acusado de servil en el periódico revolucionario llamado el mensajero, y aunque publicó un impreso el 29 de octubre de 1821, no usó de él de ninguna expresión contraria a los soberanos derechos de V. M., ni fue otra cosa más que una defensa contra los charlatanes que intentaban conmover el pueblo contra el Tribunal Supremo. Fue uno de los que contribuyeron a salvar la vida del general Grimarest y sus compañeros, y quedó suspenso por los constitucionales. No consta su purificación”.

JOSÉ MARIANO OLAÑETA DE CAMPO

Destinos y cargos en la carrera judicial

25 noviembre 1827:	Alcalde Mayor de Jerez de la Frontera.
16 junio 1834:	Magistrado de la Audiencia de Aragón.
23 junio 1834:	Trasladado a la Audiencia de Albacete.
17 enero 1835:	Traslación a la Audiencia de Valencia.
4 noviembre 1840:	Trasladado a la Audiencia de Madrid.
11 septiembre 1841:	Regente de la Audiencia de P. Rico.
17 mayo 1844:	Cesó en la Audiencia de Madrid.
15 septiembre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por cesación de Sebastián G. Nandín.
13 junio 1855:	Trasladado a la Sala de Indias.
31 octubre 1856:	Se jubila a petición propia por motivos de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1841-1842 por Sevilla.

Senador vitalicio en 1858-1860.

Adscripción política: partido moderado.

El 10 de abril de 1837 la Diputación provincial de Valencia dice de él:

“desde la muerte de Fernando VII se decidió por los derechos legítimos de nuestra inocente Reyna D^a Isabel II, y desde que hubo representación nacional mostró su adhesión a ella y contribuyó a la formación de la milicia nacional, inscribiéndose el primero en ella”.

También otro informe de esa fecha dice:

“Se encarga al Regente observe su conducta política por la sospecha que causa su versatilidad y otras noticias que tiene la Junta; no siendo a propósito para la Audiencia de Madrid”.

Otros cargos y distinciones

Obtuvo la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1841.

DEMETRIO ORTIZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 febrero 1810:	Alcalde del Crimen de Extremadura.
14 enero 1816:	Oidor de la Audiencia de Extremadura.
13 noviembre 1816:	Gobernador de la Sala del Crimen de Extremadura.
23 julio 1821:	Magistrado de la Audiencia territorial de Granada.
1824:	Impurificado por el Consejo Real (colaboracionista del Gobierno revolucionario).
30 noviembre 1832:	Alcalde de Corte de Granada. Alcalde del Crimen del Consejo de Navarra.
30 diciembre 1832:	Magistrado de Audiencia de Sevilla.
Enero 1833:	Fiscal más antiguo de la Audiencia de Sevilla.
30 noviembre 1835:	Oidor de Madrid.
13 junio 1836:	Honores de Ministro del Tribunal Supremo.
12 noviembre 1836:	Ministro del Tribunal Supremo.
12 enero 1845:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

MANUEL ORTIZ DE ZÚÑIGA

Destinos y cargos en la carrera judicial

7 marzo 1833:	Alcalde Mayor de la Palma.
29 marzo 1836:	Juez de 1ª instancia de Morón.
19 julio 1836:	Juez de 1ª instancia de Orihuela.
6 octubre 1836:	Juez de Sevilla.
18 febrero 1837:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
5 septiembre 1840:	Cesa.
8 agosto 1843:	Se le repone en su anterior destino.
7 diciembre 1843:	Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
2 febrero 1847:	Renuncia al cargo.
22 octubre 1856:	Fiscal togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
12 diciembre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo.
1 octubre 1861:	Solicita el traslado de la Sala 1ª a la de India.
10 marzo 1865:	Vuelve a la Sala 1ª.
10 abril 1867:	Se le declaró cesante.
24 octubre 1868:	Se le repone en el Tribunal Supremo.
16 noviembre 1868:	Presidente de Sala vacante por jubilación de Joaquín de Palma y Vinuesa.
23 junio 1873:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 16 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1846 a 1850 por Huelva.

Diputado de 1850 a 1854 por Huéscar (Granada).

Senador vitalicio en 1863-1864.

Adscripción política: partido moderado.

El 12 de enero de 1841 la Diputación provincial:

“desde que llegó a Granada ha observado la más criminal conducta política ya que se puso a la cabeza del partido moderado influyendo en las elecciones de un modo violento y de acuerdo con el general Palarca tiranizó a los liberales progresistas, en unión también del jefe político Cambronero cuyos antecedentes fueron la justísima causa de su separación”.

En contestación a este informe Ortiz de Zúñiga contesta:

“He sabido que la Diputación provincial de Granada ha informado acerca de su conducta de una manera ofensiva a su carácter de magistrado y a su reputación: que mas de uno de los individuos de dicha corporación han sido acusados por el mismo, y de consiguiente no es extraño hayan aprovechado la ocasión de lanzarlo de su puesto que obtuvo sin solicitarlo y como recompensa a sus servicios, y para que pueda anisolarse

más su conducta y comportamiento, suplica: se soliciten informes de las siguientes personas (...)

La Audiencia de Granada el 23 de enero de 1841:

“de extremada tolerancia, exponiendo su destino por sostener algunos liberales que se han visto perseguidos por su color político (...) y que la causa de su separación había sido por creerle contrario a las ideas del pronunciamiento, o más bien efecto de algún resentimiento por la rigidez de su carácter en el desempeño de su destino”.

Condición de idóneo en 1871.

Otros cargos y distinciones

Consejero Real desde el 14 de noviembre de 1845.

Gran Cruz de Isabel la Católica en 1852.

Tareas legislativas

Por Decreto de 19 de agosto de 1843 fue nombrado miembro de la comisión creada para la formación de Códigos.

Ha publicado 25 tomos en diferentes obras de jurisprudencia y legislación.

(*) Ver apéndice documental

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 595, n. 1399.

MIGUEL OSCA Y GUERAU DE ARELLANO

Destinos y cargos en la carrera judicial

	Juez de 1ª instancia de Elche.
6 febrero 1836:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
31 diciembre 1840:	Regente de Albacete.
17 enero 1843:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
9 agosto 1843:	Renuncia a su plaza por su estado de salud y por motivos de conciencia.
27 octubre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de José María Doménech.
19 mayo 1861:	Se jubila a petición propia con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 7 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1841 por Valencia.

Senador en 1843 por Valencia.

Senador vitalicio en 1861-1862.

Adscripción política: partido progresista.

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino en 1837 le consolida en su puesto con informe favorable.

Otros cargos y distinciones

Distinguido como caballero Gran Cruz de la Real y de la Orden Carlos III.

JOAQUÍN FRANCISCO PACHECO GUTIÉRREZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

30 julio 1843:	Fiscal del Tribunal Supremo.
4 diciembre 1846:	Se le admite la dimisión.
5 febrero 1847:	Se le vuelve a nombrar Fiscal del Tribunal Supremo.
1848:	Cesa.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Sevilla.

Diputado en 1840 por Córdoba.

Diputado en 1841 por Álava.

Diputado en 1844 por Córdoba.

Diputado en 1846 por Villa del Río (Córdoba).

Diputado en 1850 por Alcañiz (Teruel).

Diputado en 1851 por Écija (Sevilla).

Diputado en 1853 por Vigo (Pontevedra).

Diputado en 1854 por Baleares.

Diputado en 1854 por Córdoba.

Senador vitalicio en 1858-1860.

Adscripción política: era del sector puritano del partido moderado, luego se integró en la Unión Liberal.

Tareas legislativas

El 9 de julio de 1844 se le nombró vocal de la Comisión de Códigos.

JOAQUÍN DE PALMA Y VINUESA

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 junio 1834:	Alcalde Mayor de Lalín.
12 noviembre 1834:	Alcalde Mayor interino de Alcázar de San Juan.
16 diciembre 1837:	Juez de Novelda.
27 enero 1838:	Juez de Almería.
4 agosto 1838:	Honores de Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
1 septiembre 1838:	Juez de Granada.
27 octubre 1838:	Juez de Sevilla.
2 diciembre 1840:	Regente en el Juzgado de Sevilla con la propiedad de que había sido destituido por su Junta de Gobierno.
8 agosto 1841:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
9 enero 1844:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Cáceres.
3 marzo 1854:	Presidente de Sala en la Audiencia de Burgos.
23 junio 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
22 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valencia.
5 septiembre 1856:	Regente de la Audiencia de Valencia.
23 septiembre 1859:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Felipe Daoíz y Urbina.
16 noviembre 1868:	Se jubila por orden del Gobierno provisional.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1861-1862.

Senador en 1872 por Granada.

Adscripción política: partido progresista.

La Junta para preparar Aarreglos de tribunales y juzgados del reino en 1837:

“Hizo distinguido servicio, que por sus relevantes circunstancias ha sido elegido dos veces Capitán de la Milicia Nacional y nombrado electos de partido, por último todos convienen en su inteligencia, laboriosidad y recomendables prendas morales y políticas (...)”.

Fue separado por el pronunciamiento de 1840, pero el 13 de noviembre de ese año se informó bien de él:

“progresista a cuyo partido votó en las elecciones”.

El 9 de febrero de 1855 la Junta de jefes de sección examinado el expediente pide informes y dos diputados por Sevilla lo emiten favorablemente.

El 16 de julio de 1855 se recaban datos de él a los diputados por Sevilla sobre su conducta política:

“De buena opinión como liberal y magistrado”.

JOSÉ MARÍA PARDO MONTENEGRO

Destinos y cargos en la carrera judicial

5 noviembre 1834:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Cáceres.
28 noviembre 1834:	Oidor de la Audiencia de Oviedo.
18 octubre 1835:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
12 abril 1844:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
2 julio 1844:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
17 abril 1846:	Presidente de Sala 1ª de la Audiencia de Oviedo. No llegó a tomar posesión, pues en su condición de Diputado por Lugo a Cortes esperó a que se disolviera la legislatura.
13 noviembre 1846:	Se le conceden honores de Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
9 enero 1852:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
1 septiembre 1854:	Es declarado cesante.
21 noviembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
1 agosto 1859:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
10 octubre 1865:	Ministro del Tribunal Supremo.
30 septiembre 1867:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Lugo.

Diputado en 1840 por Lugo.

Diputado en 1844 por Lugo.

Diputado en 1846 por Lugo.

Diputado en 1851 por Lugo.

Diputado en 1853 por Lugo.

Diputado en 1857 por Lugo.

Diputado en 1858 por Lugo.

Diputado en 1863 por Lugo.

Adscripción política: partido moderado.

Separado en 1840 por la Junta de La Coruña y se le repuso por los informes favorables:

“se le separa por notoriamente desafecto al pronunciamiento”.

Así se expresan el jefe político y la Diputación provincial de La Coruña.

NICOLÁS PEÑALVER Y LÓPEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 agosto 1835:	Promotor Fiscal de Juzgados inferiores de Granada.
15 julio 1837:	Juez de Montoro.
5 enero 1844:	Juez de Baeza.
19 enero 1844:	Juez de Jaén.
26 abril 1844:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
31 octubre 1846:	Fiscal de la Audiencia de Barcelona.
7 junio 1850:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
8 abril 1853:	Regente de la Audiencia de Barcelona. Solicita muchas licencias y permisos por razones de salud.
27 enero 1865:	Regente de la Audiencia de Madrid.
3 octubre 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
27 enero 1869:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

La Junta Provisional de Córdoba lo separó en 1840 porque “trabajó en las últimas elecciones para el partido retrógrado (...)”. Diferentes ayuntamientos acudieron a la Junta pidiendo su reposición.

La Junta certifica el 21 de octubre de 1840:

“Su separación no debe entenderse ofensiva a su bien adquirida y elevada reputación como Juez íntegro e inteligente, y que hace honor a la magistratura, sino que habiéndose afanado en las últimas elecciones por el partido reaccionario hasta abusar de su autoridad creyeron que su influencia sería perjudicial al alzamiento”.

Los informes parece que fueron falsos y así lo testimonian otras instancias y autoridades.

FERNANDO PÉREZ DE ROZAS

Destinos y cargos en la carrera judicial

13 noviembre 1834:	Oficial auxiliar de la Secretaría de Gracia y Justicia.
28 noviembre 1840:	Oficial de la clase de primeros de la Secretaría de Gracia y Justicia.
18 noviembre 1843:	Fiscal de la Audiencia de Madrid.
2 febrero 1844:	Declarado cesante.
18 agosto 1854:	Vuelve a la Fiscalía.
21 noviembre 1856:	Es declarado cesante.
23 julio 1869:	Fiscal del Tribunal Supremo en la plaza de Antonio Corzo.
17 septiembre 1869:	Ministro en Comisión del Tribunal Supremo en la plaza de J. Manuel González Acevedo.
27 enero 1875:	Se le declara cesante.
26 abril 1875:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino, le consideró acreedor a continuar en su puesto el 21 de julio de 1838.

El 29 de enero de 1871 se le declara inamovible.

Otros cargos y distinciones

Condecorado con la Cruz sencilla y de número de Carlos III en 1838.

JOSÉ PÉREZ DE ROZAS

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 octubre 1819:	Fiscal de la Audiencia Territorial de Navarra.
1824:	Cesó.
26 septiembre 1835:	Regente del Consejo de Navarra.
1 noviembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
21 agosto 1843:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de Pascual Madoz.
18 noviembre 1843:	Solicita su jubilación por razones de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 meses.

Informes y valoraciones políticas

El 26 de septiembre de 1826 se relata un informe sobre su conducta política en el que se dice “que la intriga y la maledicencia le han llevado a su impurificación en 1824” y se aportan datos para conocer mejor su actividad en la época del gobierno revolucionario.

JOSÉ PORTILLA Y GUTIÉRREZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

9 diciembre 1841:	Magistrado de la Audiencia territorial de Valencia. Era cesante de la Audiencia de Valencia.
1 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
24 septiembre 1856:	Ministro del Tribunal Supremo.
17 octubre 1856:	Se le declara cesante admitiéndole la renuncia por motivos de salud.
16 julio 1858:	Se le vuelve a nombrar Ministro del Tribunal Supremo.
22 noviembre 1864:	Presidente interino de Sala 1ª de la Sección 1ª.
13 enero 1866:	Presidente interino de Sala 1ª de la Sección 1ª por enfermedad de García de la Cotera.
13 abril 1866:	Presidente de la Sala 1ª, Sección 1ª del Tribunal Supremo por fallecimiento de Manuel García de la Cotera.
10 abril 1867:	Se le declaró cesante de su puesto.
24 octubre 1868:	Se le vuelve a reponer como Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
26 marzo 1869:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1863-1864.

No existen más informes políticos.

BENITO DE POSADA HERRERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

24 marzo 1834:	Como Alcalde Mayor de Tarremocha solicita ser colocado en Audiencia.
9 julio 1858:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
1 septiembre 1861:	Regente de la Audiencia de Cáceres.
10 septiembre 1862:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Madrid.
27 noviembre 1865:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
3 octubre 1867:	Regente en Comisión de la Audiencia de Cáceres.
8 noviembre 1867:	Se declara voluntariamente cesante.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Madrid.
13 abril 1870:	Se declara voluntariamente cesante.
27 junio 1870:	Ministro del Tribunal Supremo por traslación.
26 julio 1873:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1843 por Oviedo.

Diputado de 1858 a 1863 por Vega de Rivadeo (Oviedo).

Senador vitalicio en 1877.

Adscripción política: canovista.

El 14 de diciembre de 1870 la Junta de calificación de magistrados y jueces le declara idóneo según la ley.

El 9 de enero de 1871 se le declara inamovible.

MANUEL J. POSADILLO Y BONELLI

Destinos y cargos en la carrera judicial

11 abril 1866:	Regente y Presidente de Sala de la Audiencia de La Habana.
25 noviembre 1864:	Ministro del Tribunal Supremo.
27 noviembre 1866:	El Ministerio de Ultramar solicita del de Gracia y Justicia el expediente personal y cesa en el alto Tribunal.
27 octubre 1868:	Cesante según él “sin causa a mi juicio, que le hubiese hecho desmerecer en el concepto público por el Gobierno provisional salido de la Revolución”. Dos años fue Ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
	Hasta 1874 separado de su puesto.
4 febrero 1875:	Solicita en escrito se le reincorpore en la Magistratura en la que está desde el año 1845.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1864 por Cádiz.

Adscripción política: partido moderado.

No existen más informes políticos sobre el interesado.

ANTONIO MARÍA DE PRIDA Y SÁNCHEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

6 enero 1853:	Fiscal de Imprenta.
20 septiembre 1854:	Cesante.
17 diciembre 1856:	Se reincorpora a su destino.
26 noviembre 1858:	Juez de Distrito del Norte en las afueras de Madrid.
22 noviembre 1859:	Juez del Distrito del Mediodía en las afueras de Madrid.
13 enero 1860:	Juez del Distrito de Lavapies en Madrid.
10 julio 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
14 noviembre 1868:	Cesante.
1 marzo 1875:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
17 abril 1876:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
19 septiembre 1878:	Presidente de la Audiencia de Madrid.
13 enero 1879:	Ministro del Tribunal Supremo por ascenso de Ignacio Vieites.
20 octubre 1890:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
29 agosto 1893:	Se jubila por edad.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 14.5 años.

Informes y valoraciones políticas

El 8 de enero de 1851 fue nombrado oficial supernumerario del gobierno político en Madrid.

El 8 de mayo de 1860 fue recomendado con eficacia de Real Orden expedida por el ministerio de Gobernación para que por el de Gracia y Justicia se premiasen los servicios prestados a la causa seguida en la Corte con motivo de la última conspiración carlista.

Otros cargos y distinciones

Comendador de la Orden de Carlos III.

FRANCISCO PUGET Y GOMÍS

Destinos y cargos en la carrera judicial

29 junio 1844:	Tercer abogado fiscal en la Audiencia de Barcelona.
23 junio 1854:	Teniente fiscal segundo del Tribunal Correccional de la Audiencia de Barcelona.
11 noviembre 1854:	Teniente fiscal del Tribunal Correccional de Madrid.
2 enero 1857:	Teniente fiscal cuarto en el Tribunal Supremo.
16 diciembre 1857:	Fiscal de la Audiencia de Albacete.
20 abril 1867:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 abril 1869:	Teniente fiscal del Tribunal Supremo.
23 mayo 1869:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Madrid.
13 junio 1869:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
17 marzo 1870:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Julián de Santisteban.
20 mayo 1871:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones Políticas

“De marcado perfil liberal”.

En 1840 el jefe político informa favorablemente de sus aptitudes y de su conducta política.

El 29 de abril el jefe político de Barcelona dice de él: acreditada adhesión a la Constitución del Estado”.

El 14 de diciembre de 1870 es declarado idóneo por la Junta de calificación de magistrados y jueces.

El 9 de enero de 1871 se le declara inamovible.

JOSÉ RODRÍGUEZ BUSTO

Destinos y cargos en la carrera judicial

7 septiembre 1820:	Promotor Fiscal de Avilés.
28 abril 1821:	Magistrado interino de la Audiencia de Oviedo.
3 agosto 1822:	Fiscal de la Audiencia de Asturias.
29 agosto 1822:	En ese destino es trasladado a la Audiencia de Valladolid.
1 octubre 1823:	Cesante.
31 octubre 1834:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
13 noviembre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
5 septiembre 1841:	Regente de la Audiencia de Madrid.
12 julio 1842:	Ministro del Tribunal Supremo.
29 julio 1843:	Separado.
14 noviembre 1849:	Solicita su jubilación por motivos de salud.
9 septiembre 1854:	Repuesto en el Tribunal Supremo en la plaza de José Francisco Morejón.
17 febrero 1856:	Se jubila con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1841 a 1843 por Oviedo.

Senador en 1843 por Oviedo.

Adscripción política: partido progresista.

El 13 de febrero de 1844:

“Por haber manifestado que no reconocía como legítimo el gobierno provisional creado por el alzamiento nacional fue separado de la plaza de magistrado del Tribunal Supremo (...)”.

Y el 19 de septiembre de 1854 dice:

“Por efecto de su notoria benevolencia se ha dignado S. M. honrarme y distinguirme con dicho nombramiento, que no puedo menos de considerar como una reparación y reposición de la misma plaza que en 1843 ocupaba y desempeñaba (...)”.

(*) Ver apéndice documental

LUIS RODRÍGUEZ CALAMEÑO

Destinos y cargos en la carrera judicial

17 abril 1834:	Corregidor de Valladolid.
1 mayo 1834:	Fiscal de la Audiencia de Valencia.
20 noviembre 1834:	Solicita renunciar al cargo.
17 noviembre 1840:	Magistrado en propiedad de la Audiencia de La Coruña.
22 noviembre 1840:	Solicita la dimisión y dice: “por haberme comprometido al servicio de la causa nacional desde el momento en que se anunciaron los primeros síntomas de guerra civil, no me permite aceptar tan honroso cargo”.
Diciembre 1843:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
12 abril 1844:	Se le admite la renuncia como Regente de la Audiencia de Oviedo (fotocopia la carta en que expone los motivos para su renuncia).
9 septiembre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo.
14 noviembre 1856:	Se jubila con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1837 por Valladolid.

Diputado en 1840 por Santander.

Diputado en 1840 por Valladolid.

Senador en 1843-1844 por Burgos.

Senador vitalicio en 1858-1860.

Adscripción política: partido progresista.

Fue jefe político de Lugo.

(*) Ver apéndice documental

LAUREANO ROJO DE NORZAGARAY

Destinos y cargos en la carrera judicial

25 octubre 1834:	Corregidor de Andujar.
2 noviembre 1835:	Fiscal de la Audiencia de Mallorca.
21 noviembre 1835:	Fiscal de Valladolid.
28 enero 1837:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
4 febrero 1848:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
31 marzo 1848:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid por permuta.
23 Abril 1851:	Presidente de Sala 3ª de la Audiencia de Albacete.
7 noviembre 1851:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
23 junio 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
1 septiembre 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
1 agosto 1859:	Regente de la Audiencia de Madrid.
3 septiembre 1860:	Ministro del Tribunal Supremo por la salida de Calderón Collantes.
1860-1864:	Hasta el año 1864 le tengo detectado en el Tribunal Supremo.
1866:	Deja el cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

No hay informes políticos.

JOAQUÍN ROMAGUERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 septiembre 1834:	Alcalde del Crimen en Barcelona.
15 diciembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
5 enero 1844:	Regente de la Audiencia de Barcelona.
30 abril 1847:	Regente de la Real Pretorial de La Habana.
20 mayo 1847:	Queda sin efecto el anterior nombramiento.
7 julio 1852:	Se le nombra Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
8 abril 1853:	Ministro del Tribunal Supremo.
10 febrero 1854:	Se jubila por motivos de salud.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

El 15 de octubre de 1840 fue separado por la Junta Provisional de gobierno y el 5 de noviembre se le repuso.

JOAQUÍN RONCALI Y CERUTI

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 junio 1834:	Alcalde Mayor interino del Corral de Almaguer.
11 julio 1834:	Alcalde Mayor de Villalón.
13 junio 1835:	No tomó posesión de la Alcaldía de Priego.
9 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
2 noviembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
12 enero 1844:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
16 enero 1846:	Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
6 marzo 1846:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
25 octubre 1847:	Oficial Jefe de Negociado del Ministerio de Gracia y Justicia.
8 enero 1849:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
9 marzo 1849:	Regente de la Audiencia de Granada.
19 enero 1853:	Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
21 abril 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de Miguel Vigil de Quiñones.
9 septiembre 1854:	Se le declara cesante.
14 noviembre 1856:	Se le vuelve a nombrar Ministro del Tribunal Supremo.
17 julio 1859:	Se le declara cesante.
30 septiembre 1864:	Se le vuelve a nombrar Ministro del Tribunal Supremo.
23 febrero 1866:	Se le admite la renuncia.
27 junio 1867:	Ministro de Gracia y Justicia.
15 junio 1868:	Cesa.
6 febrero 1875:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 6 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Soria.

Diputado de 1851 a 1854 por El Burgo de Osma (Soria).

Diputado en 1857 por Ledesma (Salamanca).

Senador vitalicio en 1863-1864.

Fue ministro interino de Estado el 23 de abril de 1868.

Adscripción política: partido moderado.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió la Gran Cruz de Caballero de Isabel la Católica en 1851 y en 1867 se le concede el marquesado de Roncali.

Tareas legislativas

Siendo ministro de Gracia y Justicia inició la reforma judicial y el proyecto del procedimiento penal, presentando unas bases escuetas.

Autorizó al gobierno para la elaboración por la Comisión de Códigos del texto articulado. El proyecto fue aprobado el 11 de abril de 1868 y la comisión redactó cinco decretos con tal fin sobre la organización provisional de tribunales, unificación de fueros, reforma de la casación civil, establecimiento de la casación penal y la reforma del enjuiciamiento criminal.

En su haber está el Decreto de 13 de diciembre de 1867 sobre la carrera judicial.

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ CECILIO DE LA ROSA

Destinos y cargos en la carrera judicial

29 mayo 1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
15 noviembre 1840:	Miembro de la Junta de Calificación de los derechos de los empleados civiles.
13 diciembre 1851:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1841 por Badajoz.

Adscripción política: partido progresista.

No hay ningún informe en su expediente, aunque se puede deducir que es afecto al pronunciamiento de 1840 y con ello premiado y llevado a la alta responsabilidad de calificar y censurar a los jueces.

JOAQUÍN RUIZ CAÑABATE

Destinos y cargos en la carrera judicial

1852:	Oficial Tercero del Gobierno de Huesca.
1853:	Escribiente de la Secretaría General del Ministerio.
1854:	Se le declaró cesante por reforma de planta.
25 agosto 1854:	Promotor Fiscal del distrito del Pardo.
17 octubre 1856:	Se le declara cesante.
1 marzo 1862:	Oficial de Sección de este Ministerio.
21 febrero 1868:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
4 marzo 1868:	Se le declara cesante.
20 enero 1869:	Abogado Fiscal primero del Tribunal Supremo de Justicia.
17 marzo 1870:	Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
11 diciembre 1871:	Se hace cargo de la Fiscalía del Alto Tribunal por cese de Eugenio Díez.
30 septiembre 1873:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Benito de Posada Herrera.
23 marzo 1881:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

El 7 de diciembre de 1874 se le declara inamovible.

Otros cargos y distinciones

El 17 de junio de 1869 se le concedió la Real Orden de Carlos III por los servicios prestados a la administración de justicia.

MIGUEL RUIZ ZORRILLA

Destinos y cargos en la carrera judicial

27 noviembre 1865:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
20 noviembre 1868:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
31 mayo 1869:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Pedro Gómez Hermosa.
19 septiembre 1870:	Se le traslada de la Sala 1ª a la Sala 3ª.
14 diciembre 1878:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1858 por Soria.

Diputado en 1869 por Madrid.

Diputado en 1869 por Soria.

Diputado en 1871 por Madrid.

Diputado en 1871 por Palencia.

Diputado en 1871 por Soria.

Diputado en 1872 por Madrid.

Diputado en 1872 por Soria.

Diputado en 1872 por Madrid.

Diputado en 1872 por Soria.

El 17 de diciembre de 1870 se le conceden los beneficios de inamovilidad.

La Junta de calificación de magistrados y jueces acordó por unanimidad que el individuo reunía las condiciones necesarias para gozar de las garantías de la ley, con fecha 8 de mayo de 1875.

FRANCISCO DE PAULA SALAS Y BANDO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1 agosto 1834:	Alcalde Mayor de Lueca.
10 junio 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
4 diciembre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
27 mayo 1837:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
21 noviembre 1840:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
13 abril 1844:	Presidente de Sala 3ª de la Audiencia de Valladolid.
2 noviembre 1846:	Se le concedieron los honores de Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
29 junio 1849:	Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia de Valladolid.
27 marzo 1850:	Regente de la Audiencia de Albacete.
12 abril 1851:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
26 abril 1855:	Se le declara cesante por motivos de salud.
7 noviembre 1856:	Se le vuelve a nombrar Regente de la Audiencia de La Coruña.
11 marzo 1859:	Regente de la Audiencia de Oviedo.
11 septiembre 1863:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
10 octubre 1865:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
1 Ddciembre 1865:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
10 abril 1867:	Ministro del Tribunal Supremo.
17 marzo 1870:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1849 por Salas (Oviedo).

Diputado a Cortes en 1850 por Pravia (Oviedo).

Diputado a Cortes en 1851 por Pravia (Oviedo).

Sólo hay un informe político de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino de 1823 y es favorable.

PEDRO SÁNCHEZ MORA

Destinos y cargos en la carrera judicial

2 febrero 1844:	Juez de Montánchez (Cáceres).
13 agosto 1847:	Juez de Trujillo (Cáceres).
17 abril 1855:	Cesante.
29 mayo 1857:	Juez de Alcántara (Cáceres).
19 junio 1857:	Juez de Trujillo (Cáceres).
23 noviembre 1860:	Juez de San Clemente (Cuenca).
19 junio 1862:	Juez de Antequera (Málaga).
13 septiembre 1864:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
16 mayo 1865:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
13 diciembre 1867:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
13 febrero 1869:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
30 abril 1869:	En Comisión, Magistrado de la Audiencia de Granada.
23 enero 1871:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
17 abril 1874:	Presidente de la Audiencia de Granada.
22 febrero 1875:	Presidente de la Audiencia de Palma.
20 septiembre 1875:	Presidente de la Audiencia de Albacete.
30 diciembre 1878:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Miguel Ruiz Zorrilla.
13 junio 1881:	Cesa al ser nombrado Consejero de Estado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2.6 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1881-1882 por Córdoba.

Adscripción política: independiente.

No hay más informes.

Otros cargos y distinciones

En 1847 se le nombró Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.

Consejero de Estado en 1881.

PABLO SANTA FE Y SALANOT

Destinos y cargos en la carrera judicial

1840:	Ministro del Tribunal Supremo.
1841:	Deja el Alto Tribunal probablemente para ocupar algún destino en el Ministerio de Ultramar.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4618, n. 5423. Se encuentra registrado aunque no ha sido encontrado.

ALBERTO SANTIAS DE FORTACIN

Destinos y cargos en la carrera judicial

7 octubre 1835:	Juez interino de Segura.
13 noviembre 1835:	Juez interino de Caldas de Reis.
27 agosto 1836:	Juez interino de Berja.
8 mayo 1839:	Juez interino de Zafra.
24 mayo 1839:	Juez de Vera.
30 noviembre 1839:	Juez de Vélez (Málaga).
17 febrero 1840:	Cesante.
9 diciembre 1840:	Juez de Daroca.
14 diciembre 1840:	Juez de Morón.
29 octubre 1842:	Juez de Málaga.
19 agosto 1854:	Juez de Distrito Norte de Madrid.
15 septiembre 1854:	Juez de Distrito de Palacio de Madrid.
9 febrero 1856:	Fiscal de la Audiencia de Cáceres.
17 septiembre 1856:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
5 marzo 1858:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
8 enero 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
3 marzo 1866:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
29 mayo 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de Francisco Puget y Gomis.
14 febrero 1876:	Se jubila según lo establecido en los artículos 239 y 204 de la Ley provisional de Organización del Poder Judicial.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 5 años.

Informes y valoraciones políticas

La Diputación Provincial de Almería certifica el 28 de octubre de 1837:

“Que goza de la mejor opinión política y que es un juez imparcial amante de la justicia”.

“Adicto a las actuales instituciones hallándose inscrito en la milicia nacional...”.

“El 14 de agosto de 1843 habiéndose verificado el pronunciamiento de Málaga tuvo que esconderse los tres días que duró la primera Junta (...) y teniendo entendido peligrosaba su vida en aquella ciudad se vió en la precisión de salir de ella, dirigiéndose a Morón en donde habiéndose secundado el alzamiento a los ocho días de su llegada se unió a él como acreditan, constándole a la Junta de Málaga la conducta del exponente”.

La Audiencia de Granada dice del interesado el 10 de Diciembre de 1843 que:

“se ausentó del juzgado por no reconocer la autoridad de la Junta y que gozaba de mediano concepto”.

El 20 de marzo de 1871 se le declara inamovible.

JULIÁN DE SANTISTEBAN

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 julio 1836:	Jefe de Sección de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.
10 enero 1844:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
29 junio 1844:	Ministro del Tribunal especial de Órdenes.
5 noviembre 1852:	Decano del Tribunal especial de Órdenes.
14 diciembre 1868:	Ministro del Tribunal Supremo para el ejercicio de las cuestiones eclesiásticas.
17 marzo 1870:	Se jubila.
15 abril 1874:	Se le nombra Decano del Tribunal especial de Órdenes.
2 agosto 1876:	Solicita la jubilación.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

El 10 de noviembre de 1863 se le nombró senador del reino.

El 10 de julio de 1841 solicita se le declare cesante a consecuencia de los acontecimientos políticos de septiembre de 1840.

El 13 de agosto de 1844 tomó el hábito de la Orden de Alcántara.

MANUEL DE SEIJAS LOZANO

Destinos y cargos en la carrera judicial

1827:	Fiscal interino del Juzgado de Alhambra.
10 octubre 1834:	Fiscal civil de la Audiencia de Valencia.
25 octubre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
Agosto 1836:	Separado.
28 enero 1837:	Repuesto en la plaza que ocupaba.
19 febrero 1838:	Permuta a la Audiencia de Sevilla.
14 abril 1838:	Honores de Magistrado de Madrid.
18 agosto 1838:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
18 noviembre 1842:	Se le declara cesante.
9 agosto 1843:	Se le repone en su anterior plaza.
18 agosto 1843:	Se le admite la renuncia a petición propia por motivos de salud.
30 diciembre 1843:	Se le nombra Magistrado de la Audiencia de Madrid.
9 enero 1844:	Se le admite la renuncia por motivos de salud.
12 octubre 1846:	Ministro de Gracia y Justicia.
25 octubre 1857:	Cesa.
30 octubre 1857:	Fiscal del Tribunal Supremo.
10 noviembre 1861:	Renuncia.
10 diciembre 1868:	Falleció.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1844 a 1846 por Granada.

Diputado de 1846 a 1850 por Carballino (Orense).

Diputado en 1850 por Granada.

Diputado en 1850 por Orense.

Diputado en 1850 por Salamanca.

Diputado de 1851 a 1853 por Granada.

Diputado en 1857 por Granada.

Diputado en 1857 por Orense.

Senador vitalicio en 1863-1864.

Fue Presidente del Congreso y del Consejo Real.

Fue Presidente del Senado.

Fue procurador en Cortes cuando el levantamiento de las juntas revolucionarias que culminaron en el motín de la Granja, fue declarado cesante por su ideología política conservadora.

Fue ministro de:

1847: Gobernación

1849: Comercio, Instrucción y Obras Públicas

1850: Hacienda

1864: Ultramar

Adscripción política: partido moderado.

Otros cargos y distinciones

Se le concedió el Collar de Carlos III y el Toisón de Oro.

Tareas legislativas

Formó parte de la primera Comisión General de Codificación en 1843.

Participó en la elaboración del Código Penal de 1848 y del Código Civil en 1851.

En 1864 se publicaron los dictámenes como fiscal del Tribunal Supremo.

Durante su etapa de ministro: Decreto de 12 de diciembre de 1856 que reorganiza el ministerio, restableciendo el cargo de subsecretario.

(*) Ver apéndice documental

AMJ, Magistrados y Jueces, l. 606, n. 1961.

TRINIDAD SICILIA Y MECA

Destinos y cargos en la carrera judicial

11 marzo 1837:	Promotor Fiscal de Huerca Overa (Granada).
1 septiembre 1839:	Juez de 1ª instancia de Huerca Overa (Granada).
24 noviembre 1865:	Jefe de Sección del Ministerio de Gracia y Justicia.
10 julio 1866:	Solicita la dimisión.
12 octubre 1868:	Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
31 mayo 1869:	Magistrado de la Audiencia de Madrid, continuando en el desempeño del cargo de Subsecretario del Ministerio.
27 noviembre 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Luciano de la Bastida.
1873:	Cesa.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 2 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1872 por Totana (Murcia).

El jefe político de Murcia el 23 febrero de 1842:

“Sus principios políticos eminentemente constitucionales, probada adhesión a las autoridades institucionales, ...”.

FRANCISCO AGUSTÍN SILVELA BLANCO

Destinos y cargos en la carrera judicial

10 junio 1836:	Gobernador Civil de Castellón.
13 septiembre 1836:	Jefe político de la provincia de Lérida.
1 septiembre 1837:	Jefe político de la provincia de Valencia.
6 diciembre 1838:	Ministro de la Gobernación de la Península. No aceptó.
4 mayo 1839:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
12 agosto 1840:	Ministro de Gracia y Justicia. No aceptó.
20 marzo 1841:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
30 julio 1843:	Ministro del Tribunal Supremo de Justicia (provisional).
20 octubre 1843:	Intendente General de la Real Casa y Patrimonio.
6 enero 1844:	Ministro del Tribunal Supremo.
11 junio 1853:	Se le nombra Presidente de Sala.
16 febrero 1854:	Solicita la jubilación en su condición de Presidente de Sala de Indias.
28 abril 1854:	Se le declara Presidente de Sala cesante.
26 agosto 1854:	Fue repuesto en la plaza de Presidente de Sala del Tribunal Supremo. (Fue suprimida la Sala de Indias con anterioridad).
20 septiembre 1857:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 13 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado de 1837 a 1839 por Ávila.
Diputado de 1841 a 1844 por Ávila.
Senador vitalicio en 1846-1847.
Adscripción política: liberal-moderado.

Otros cargos y distinciones

El 30 de diciembre de 1856 se le propone para la Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III.

PÍO DE LA SOTA Y LASTRA

Destinos y cargos en la carrera judicial

2 febrero 1844:	Promotor Fiscal de Santander.
21 noviembre 1846:	Promotor Fiscal del Distrito de las Vistillas de Madrid.
27 marzo 1852:	Fiscal de Imprenta.
24 diciembre 1853:	Abogado Fiscal del Real Consejo de la Cámara Eclesiástica.
12 marzo 1857:	Jefe de la Comisión de Estadística General del Clero.
20 febrero 1863:	Fiscal de la Audiencia de Granada.
16 octubre 1863:	Fiscal de la Audiencia de Valladolid.
9 enero 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Pamplona.
15 noviembre 1867:	Jefe de Sección del Ministerio de Gracia y Justicia.
11 octubre 1868:	Presenta la dimisión.
26 febrero 1872:	Solicita la jubilación.
1 marzo 1875:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
30 abril 1877:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de José María Herreros de Tejada.
4 abril 1881:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

El 19 de octubre 1843 el ministro de la Gobernación dice que Pío de la Sota y Lastra fue nombrado oficial segundo del gobierno político de Soria en 1839 y 1840. Separado de su destino por la junta de gobierno por haberse negado a reconocer su autoridad y que el jefe político en su informe ha dispensado cumplidos elogios acerca de la capacidad de este interesado.

Otros cargos y distinciones

Recibió la Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro y de Isabel la Católica.

Tareas legislativas

Siendo jefe de sección en el ministerio de Gracia y Justicia redactó en 1868 los Proyectos de Ley siguientes:

- de Organización de Tribunales.
- de reforma de la Casación en lo Civil.
- de establecimiento de la Casación en lo Criminal.
- de Enjuiciamiento Criminal.

Fue vocal de la Junta clasificadora de magistrados y jueces.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4598, n. 5206.

ANDRÉS DE SUBIZA

Destinos y cargos en la carrera judicial

1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
1836:	Cesa.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1

(*) No existe el expediente personal de este magistrado. Datos extraídos de la “Guía de Forasteros en Madrid”, año 1838. Congreso de los Diputados 3297.

SANTIAGO TEJADA

Destinos y cargos en la carrera judicial

11 octubre 1831:	Oficial 3º de la Secretaría de Gracia y Justicia.
16 septiembre 1835:	Fiscal del Tribunal Supremo.
15 octubre 1836:	Se le admite la dimisión declarándole cesante.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1840 por Logroño.

Diputado en 1844 por Logroño.

Diputado de 1846 a 1852 por Alcañices (Zamora).

Senador vitalicio en 1853.

No hay informes políticos.

JOSE MARÍA TEJADA Y VALERA

Destinos y cargos en la carrera judicial

27 diciembre 1835:	Magistrado de la Audiencia de Barcelona.
26 noviembre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
22 enero 1837:	Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
26 noviembre 1840:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
29 julio 1843:	Ministro del Tribunal Supremo
30 julio 1843:	Solicita la renuncia con una interesante carta que (fotocopia) no se le admite en esa fecha.
6 enero 1844:	Se le admite la renuncia y le sustituye Andrés Crespo Cantolla, Ministro cesante.
3 mayo 1844:	Se le repone como subteniente de infantería.
25 febrero 1851:	Se jubila.
6 junio 1854:	Se le releva como Magistrado suplente.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 mes.

Informes y valoraciones políticas

Estuvo muy enfermo (con certificaciones y acreditaciones).

(*) Ver apéndice documental

JOSÉ MARIANO TRILLO FIGUEROA

Destinos y cargos en la carrera judicial

4 octubre 1836:	Juez Cesante de 1ª instancia del Partido de Alberique (Almería).
1837:	Juez de 1ª Instancia, Cañete (Cuenca).
Noviembre 1840.	Separado como Juez (por rencillas internas).
16 julio 1858:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de Juan Martín de Carramolino.
1859:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

1837: calificado en ese período como: “intrigante, arbitrario y despótico” en informe para la junta para preparar arreglos de los tribunales y juzgados del reino.

22 enero 1841: informe del jefe político y Diputación Provincial:

“fue separado por su inmoralidad y activa parte que tomó en las elecciones abusando de su destino en favor del partido moderado (...) y por su tendencia a perseguir a los liberales en todas las causas”.

El ayuntamiento también emite un informe desfavorable.

(Se recoge en su expediente la época de 1835-1841) con toda la polémica suscitada con su ejercicio)

BENITO DE ULLOA Y REY

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 mayo 1847:	Promotor Fiscal de Ribadavia.
20 junio 1851:	Renuncia.
21 noviembre 1856:	Teniente Fiscal de la Audiencia de La Coruña.
20 enero 1866:	Fiscal de la Audiencia de Canarias.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Sevilla.
7 diciembre 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por vacante de Sebastián de la Fuente Alcázar.
23 diciembre 1889:	Se jubila a petición propia según dispone la ley.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 18 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado a Cortes en 1851 por Ribadavia (Orense).

Senador en 1872 por Orense.

Senador en 1879-1880 por Lugo.

Senador vitalicio en 1882.

Jefe de la administración civil.

Adscripción política: partido constitucional (en la oposición).

Otros cargos y distinciones

El 18 de marzo de 1869 se le nombró comendador ordinario de la Orden de Isabel la Católica.

El 30 de diciembre de 1869 se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica.

FELIPE URBINA Y DAOIZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

3 febrero 1827:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Valencia.
19 noviembre 1834:	Oidor de la Audiencia de Sevilla.
28 enero 1837:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
30 septiembre 1840.	Separado de la plaza por la Junta de Gobierno de la provincia.
9 febrero 1844:	Magistrado de la Audiencia de Sevilla.
30 marzo 1844:	Presidente de la Sala 1ª de la Audiencia de Granada.
4 abril 1845:	Regente de la Audiencia de Canarias.
8 noviembre 1846:	Se le concede la Cruz Supernumeraria de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III.
19 mayo 1848:	Regente de la Audiencia de Valencia.
3 mayo 1855:	Cesa en ese cargo.
24 octubre 1856:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
12 diciembre 1856.	Ministro del Tribunal Supremo.
10 abril 1867:	Presidente de la Sala 2ª y de Indias por cesación de Juan Martín de Carramolino.
27 diciembre 1867:	Se le jubila con los honores de Presidente del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 11 años.

Informes y valoraciones políticas

“Observó buena conducta moral y política que demostró la suficiencia necesaria en el desempeño de su destino y aunque no se le observaron actos ostensibles de su adhesión a la Reina y actuales instituciones, tampoco halla méritos para calificarle de desafecto”.

1841. Informe del jefe político:

“Fue separado por la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino por creerle en ideas no conformes con el pronunciamiento”.

Informe del Ayuntamiento de Granada:

“Su vida retirada hacía difícil conocer sus opiniones políticas habiéndose notado su ausencia en las circunstancias críticas que precedieron al pronunciamiento marchando a Madrid, y de allí a Valencia donde estaba la Corte, asegurándose que fue propuesto para ministro de este ramo bajo la influencia del partido del retroceso”.

Informe del 3, 4 y 5 de marzo de 1855:

“Los Diputados por Valencia, D. Joaquín Alonso, D. Paulino Giménez y D. Alonso Navarro, evacuaron el informe que se les pide del Regente de la Audiencia de Valencia, dicen: que merece el concepto de magistrado asiduo, pobre e inteligente en el cumplimiento de sus deberes sin saber si se le ha mezclado en asuntos electorales. El segundo añade que sus ideas son moderadas. Y el tercero que fue magistrado desde 1823 en adelante, tenido entonces por absolutista y ahora como moderado”.

Otros cargos y distinciones

Se le propone para la Gran Cruz de Isabel la Católica.

ANSELMO URRA Y CERCEDA

Destinos y cargos en la carrera judicial

25 enero 1833:	Alcalde Mayor en Alhama en Castilla La Vieja.
20 febrero 1833:	Alcalde Mayor de Antel.
24 noviembre 1833:	Corregidor de Borja.
28 marzo 1835.	Alcalde de Corte de Navarra.
9 noviembre 1840:	Fue separado en los acontecimientos políticos por la Junta de Pamplona de la plaza de Magistrado de la Audiencia de Pamplona.
23 diciembre 1843:	Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia.
16 marzo 1846:	Ministro del Tribunal especial de Órdenes.
21 mayo 1862:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Vicente Valor.
1 octubre 1866:	Se jubila con los honores de Presidente de Sala del Tribunal Supremo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 4 años.

Informes y valoraciones políticas

Informe de noviembre de 1840:

“que instalada la Junta de gobierno en aquella provincia el día 2 de octubre, e invitando a los magistrados a que reconociesen su autoridad, el exponente contestó negativamente, con fecha del 4, y en el mismo día le suspendió aquella de su destino, intimándolo al siguiente 5 que saliese de la ciudad en el término de las 24 horas y de la provincia en el de cuatro días.

Hace relación de sus servicios y padecimientos añadiendo que no ha habido causa justificada para su separación ni ha renunciado en plaza antes bien está pronto a continuar sus servicios y espera que la Regencia determine lo conveniente”.

El 20 de febrero de 1841:

“El jefe político en 26 de febrero dispuesto de haber oído a la Diputación, indica las mismas causas de separación, según consta del oficio que en copia remite del mismo Urre sobre cuya conducta moral nada se puede decir en contrario”.

Nota. Se acompaña esta copia de la contestación de este magistrado, que envió la junta con sus comunicaciones:

“Ni los juramentos que he prestado (dice) ni mis principios políticos bien conocidos desde el año 1820 hasta el día que no me permiten reconocer ninguna autoridad que no emane de las reales prerrogativas y de la constitución política de la monarquía española: por lo tanto no reconozco...”.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4705, n. 6593.

ANTONIO VALDÉS Y BARRIO

Destinos y cargos en la carrera judicial

3 febrero 1841:	Juez de Astorga.
14 febrero 1842:	Juez electo de Albacete.
12 abril 1842:	Juez de Lugo.
12 junio 1844:	Juez cesante de 1ª instancia de Lugo.
14 octubre 1854:	Juez de La Coruña.
9 abril 1855:	Magistrado de la Audiencia de Canarias.
21 mayo 1855:	Magistrado de la Audiencia de Cáceres.
21 julio 1855:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
23 mayo 1856:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
7 noviembre 1856:	Cesante.
23 octubre 1860:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de La Coruña.
19 noviembre 1865:	Magistrado Supernumerario de la Audiencia de Valencia.
28 agosto 1866:	Permuta y va de Magistrado a la Audiencia de La Coruña.
21 junio 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
10 noviembre 1868:	Regente de la Audiencia de Mallorca.
29 enero 1869:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
17 marzo 1870:	Ministro del Tribunal Supremo por cese de Antonio Gutiérrez de los Ríos.
27 febrero 1879:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1871-1872 por León.

Senador en 1872-1873 por León.

Adscripción política: partido progresista.

En 1840 la junta de gobierno de la provincia de León le nombró juez de Astorga, manifestando que era un letrado de crédito y de probado patriotismo.

El 20 de junio de 1843 participó no haberse adherido al pronunciamiento, resolviéndose se pusiera por nota.

La junta de Lugo en agosto de 1843 pidió su separación por desafecto.

El 27 de junio de 1844, 74 vecinos de Cargo elogian su comportamiento en quien reconocían las mejores prendas y pidieron su reposición que deseaba todo el partido.

Siendo juez de Lugo en 1844 fue separado por supuesta complicidad en una conjuración y que fiel siempre a los principios liberales no ha servido otro cargo que el de diputado provincial de 1850 a 1853.

El 14 de diciembre de 1871 fue declarado idóneo por la Junta de calificación de magistrados y jueces.

El 9 de enero de 1874 fue declarado inamovible.

VICENTE VALOR

Destinos y cargos en la carrera judicial

18 febrero 1835:	Magistrado de la Audiencia de Mallorca.
4 octubre 1836:	Magistrado de la Audiencia de Valencia.
14 septiembre 1837:	Trasladado a la Audiencia de Albacete por atenerse a los dispuesto en la legislación de no ocupar plaza de donde se es natural.
6 noviembre 1840:	Magistrado en propiedad de la Audiencia de Albacete.
26 septiembre 1842:	Regente de la Audiencia de La Coruña.
22 abril 1843:	Regente de la Audiencia de Madrid.
8 octubre 1845:	Se le declara cesante como Regente de Madrid por separación.
18 julio 1849:	Se jubila a petición propia.
18 septiembre 1854:	Se le nombra Regente de la Audiencia de Madrid.
28 octubre 1854:	Ministro del Tribunal Supremo por renuncia de Claudio Antón de Luzuriaga.
21 mayo 1862:	Se le jubila con honores de Presidente de Sala.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador vitalicio en 1863-1864.

Informes políticos favorables en 1822 y 1825.

10 de febrero de 1837 la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino dice:

“es acreedor a continuar sirviendo su plaza”.

En 1841: informe favorable.

(*) Ver apéndice documental

LUIS VÁZQUEZ MONDRAGÓN

Destinos y cargos en la carrera judicial

28 diciembre 1835:	Juez de 1ª instancia de Inca.
20 diciembre 1836:	Juez de 1ª instancia de Manzanares.
23 febrero 1837:	Juez de Baza.
16 junio 1838:	Juez de Castuera.
4 abril 1840:	Juez de Villafranca del Penedés.
25 enero 1841:	Juez de Andujar.
10 marzo 1848:	Juez de Algeciras.
8 abril 1853:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
24 febrero 1854:	Magistrado de la Audiencia de Burgos.
12 abril 1854:	Magistrado de la Audiencia de Valladolid.
21 julio 1855:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
7 enero 1863:	Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres.
13 noviembre 1863:	Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona.
8 enero 1864:	Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla.
9 octubre 1866:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 marzo 1871:	Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Narciso López.
31 enero 1881:	Solicita la jubilación.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1876-1877 por Cuenca.

No estuvo desde su primer destino, cesante ni un solo día (casi 36 años).

Otros cargos y distinciones

Obtuvo la Cruz de Carlos III y fue Comendador de la misma Orden.

FRANCISCO DE VERA Y MARTÍNEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 diciembre 1832:	Solicita la judicatura de Colmenar de Oreja.
20 febrero 1834:	Solicita la Vara de Medina del Campo.
30 julio 1835:	Solicita una Promotoria en Madrid.
19 noviembre 1835:	Juez de 1ª instancia de Requena.
10 mayo 1836:	Solicitó una judicatura de término.
2 diciembre 1836:	Magistrado de honorario de la Audiencia de Albacete.
29 mayo 1837:	Juez de Pontevedra.
23 febrero 1841:	El Regente de Valencia pide para él una plaza de Magistrado.
Agosto 1841:	Magistrado de la Audiencia de Oviedo.
11 septiembre 1843:	Magistrado de la Audiencia de La Coruña.
14 mayo 1852:	Magistrado de la Audiencia de Burgos. Fue Presidente de Sala.
1863:	Solicitó la cesantía por razones de salud.
5 septiembre 1867:	Solicitó volver al servicio activo.
21 diciembre 1868:	Regente de la Audiencia de Valladolid.
1870:	Ministro del Tribunal Supremo.
1873:	Deja el cargo.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

El 21 de enero de 1871 fue declarado idóneo y el 22 de enero de 1871 fue declarado inamovible.

No existen más informes.

FRANCISCO VEREA Y CORNEJO

Destinos y cargos en la carrera judicial

2 agosto 1799:	Alcalde Mayor de la villa de Bodonal.
5 marzo 1804:	Alcalde Mayor de la villa de Yeda.
7 septiembre 1812:	Ministro suplente de la Real Chancillería de Granada.
27 agosto 1813:	Magistrado en propiedad de la Real Chancillería de Granada. Teniente de Alcalde de la casa palacio del Generalife de la ciudad de Granada.
21 noviembre 1815:	Asesor de la superintendencia de caminos de los reinos de Jaén, Granada y Córdoba.
1821:	Regente de la Audiencia de Asturias y en La Coruña después (1822).
1824:	Oidor general de la Chancillería de Granada; se le separa del cargo; lo recurre hasta 1829 y no se le da la razón.
1831:	Sigue recurriendo. Se le acusó de adherirse al Gobierno revolucionario.
1832:	Sigue recurriendo.
1833:	Solicita su reposición como Oidor de Granada.
2 marzo 1834:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
30 abril 1834:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
5 septiembre 1834:	Regente de la Audiencia de Madrid.
13 septiembre 1835:	Ministro del Tribunal Supremo. (Lo sabemos por contencioso sobre antigüedad sobre Juan Nepomuceno S. Miguel).
29 julio 1843:	Fue separado por el Gobierno Provisional, según él “simplemente y sin consideración alguna”.
26 enero 1844:	Jubilado.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 8 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1837-1838 por León.

Senador en 1841 por León.

Adscripción política: partido progresista.

La Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino dice el 20 de octubre de 1836: “merece seguir en el puesto”.

Estuvo 10 años y medio cesante.

IGNACIO VIEITES TAPIA

Destinos y cargos en la carrera judicial

9 abril 1847:	Juez de 1ª instancia de Rivadavia.
12 junio 1847:	Oidor de Puerto Rico.
2 julio 1847:	Oficial Jefe de negociación de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.
13 octubre 1851:	Magistrado de la Audiencia de Albacete.
14 noviembre 1851:	Magistrado de la Audiencia de Zaragoza.
14 agosto 1852:	Presidente de Sala de la Audiencia de Canarias.
21 enero 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
27 enero 1854:	Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid.
8 junio 1855:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
17 febrero 1856:	Presidente de Sala de la Audiencia de Oviedo.
18 septiembre 1856:	Es declarado cesante.
2 enero 1857:	Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza.
10 julio 1857:	Presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña.
27 noviembre 1863:	Presidente de Sala de la Audiencia de Burgos.
4 noviembre 1864:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
20 abril 1867:	Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.
13 junio 1869:	Ministro del Tribunal Supremo por dimisión de Teodoro Moreno.
13 enero 1879:	Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
25 febrero 1882:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 13 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1850 por Puenteareas (Pontevedra).

Senador en 1876-1877 por Orense.

Senador en 1877 por Orense.

Senador en 1879-1880 por Pontevedra.

Adscripción política: partido canovista.

En 1846 fue diputado provincial por La Coruña demostrando su adhesión al trono constitucional.

Favorables posicionamientos de ayuntamiento, diputación y jefe político de La Coruña.

El 14 de diciembre de 1870 la Junta de calificación de magistrados y jueces declara que el individuo reúne las condiciones necesarias que la ley contempla.

El 9 de enero de 1874 fue declarado inamovible.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4664, n. 5777.

MIGUEL A. VIGIL DE QUIÑONES Y MIER

Destinos y cargos en la carrera judicial

1812:	Alcalde Mayor de Xeréz de la Frontera.
15 octubre 1815:	Alcalde del Crimen de la Audiencia de Galicia y luego Oidor.
26 diciembre 1833:	Fiscal del Tribunal de Cruzada.
3 noviembre 1834:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
6 noviembre 1834:	Renuncia en escrito por entender que siendo miembro de un Tribunal Supremo como es del de Cruzada, queda rebajado a la condición de Tribunal de provincias. Se le acepta.
15 diciembre 1837:	Se le conceden honores de Ministro del Tribunal Supremo.
8 junio 1844:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
9 junio 1848:	Presidente de la Sala 3ª de la Audiencia de Madrid.
1 marzo 1850:	Presidente de Sala 2ª de Audiencia.
9 mayo 1851:	Ministro del Tribunal Supremo.
21 abril 1854:	Jubilación.
21 julio 1855:	Muere.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 3 años.

Informes y valoraciones políticas

Le avalan como liberal y cumplidor de sus obligaciones como juez íntegro.

Debió estar a favor de las dos épocas en las que sirvió.

No posee más informes; ni de la Junta para preparar arreglos de tribunales y juzgados del reino de 1836-1837 ni por la junta de calificación de septiembre de 1840.

MANUEL GENARO VILLOTA MARTÍNEZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

1799:	Oidor de la Audiencia de Buenos Aires.
1810:	Oidor de la Audiencia de Lima.
17 agosto 1822:	Ministro togado suplente en el Tribunal de Guerra y Marina.
1825:	Fiscal honorario del Supremo Consejo de Indias y Oidor de la Real Audiencia de Lima.
24 mayo 1825:	Alcalde de Cas y Corte.
1 diciembre 1829:	Ministro del Consejo de Indias.
29 diciembre 1832:	Miembro del Consejo y Cámara de Indias.
1835:	Ministro del Tribunal Supremo.
12 agosto 1836:	Se jubiló.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 1 año.

Informes y valoraciones políticas

De su documentación se extrae su condición de contrarrevolucionario en los años 1820, 1821.

FELIPE VIÑAS Y VITORIA

Destinos y cargos en la carrera judicial

22 mayo 1847:	Juez de Bande.
26 julio 1847:	Juez de Ribadavia.
18 noviembre 1853:	Juez de Lalín.
13 marzo 1854:	Juez de Padrón.
26 septiembre 1854:	Cesante.
12 octubre 1856:	Repuesto.
27 abril 1862:	Juez de Monforte.
27 abril 1864:	Juez de Tuy.
22 julio 1866:	Juez de 1ª instancia de Santiago.
21 noviembre 1866:	Juez de 1ª instancia de Vigo.
20 marzo 1869:	Magistrado de la Audiencia de Granada.
27 abril 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de Granada.
27 junio 1870:	Presidente de Sala de la Audiencia de Canarias.
17 diciembre 1870:	Cesante.
17 diciembre 1870:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Pamplona.
17 diciembre 1870:	Magistrado en Comisión de la Audiencia de Cáceres.
11 febrero 1871:	Mismo cargo en la Audiencia de Albacete.
5 abril 1871:	Presidente de Sala en la Audiencia de Albacete.
14 diciembre 1872:	Presidente de la Audiencia de Albacete.
2 febrero 1875:	Presidente de la Audiencia de Oviedo.
14 febrero 1876:	Ministro del Tribunal Supremo por jubilación de Alberto Santías de Fortacín.
31 marzo 1885:	Fallece.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 9 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador en 1879-1880 por Lugo.

Senador en 1881-1882 por Lugo.

Senador en 1884-1885 por Teruel.

Adscripción Política: Partido Canovista.

Otros cargos y distinciones

En 1848 es nombrado Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III.

En 1864 es nombrado jefe honorario de la administración civil.

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4599, n. 5208.

HILARIO DE YGON Y DEL ROYST

Destinos y cargos en la carrera judicial

1839 - 1861:	Desempeñó multitud de servicios de orden civil o militar y también en el orden jurídico-militar.
1863:	Auditor de Guerra de Granada.
30 agosto 1864:	Auditor de Guerra de Castilla.
1 septiembre 1866:	Ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
5 octubre 1866:	Ministro del Tribunal Supremo por cesación de Rafael Limiciana y Brignoles que va como Consejero de Estado.
10 noviembre 1868:	Se le jubila (acontecimientos políticos).
27 febrero 1875:	Se le vuelve a nombrar Ministro del Tribunal Supremo por fallecimiento de Gregorio Juez Sarmiento.
11 julio 1878:	Presidente de Sala por fallecimiento de José María Cáceres.
2 abril 1888:	Se encarga de la Presidencia del Tribunal Supremo por fallecimiento de su titular Eduardo Alonso y Colmenares.
8 julio 1889.	Presidente del Tribunal Supremo.
16 julio 1892:	Se jubila.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 19 años.

Informes y valoraciones políticas

Senador por Derecho propio en 1891-1893.

Adscripción política: partido conservador.

Valoración política de 1868:

“La junta de clases pasivas, no quiso jubilarle por tener 52 años, hecha consulta al ministerio, y estando ésta pendiente, solicita que el decreto de jubilación se entienda de cesantía y como tal está dispuesto a continuar sus servicios”.

MIGUEL ANTONIO DE ZUMALACÁRREGUI Y DE IMAZ

Destinos y cargos en la carrera judicial

16 agosto 1803:	Magistrado de la Audiencia de Asturias.
19 abril 1814:	Magistrado de la Audiencia de Madrid.
Marzo 1820:	Oidor de la Audiencia de Madrid.
Mayo 1820:	Ministro del Tribunal Supremo.
Septiembre 1823:	Fue cesado.
12 noviembre 1833:	Repuesto en la plaza de Oidor de la Audiencia de Galicia.
1834:	Regente de la Audiencia de Burgos.
5 septiembre 1835:	Se le repone de Ministro del Tribunal Supremo.
27 junio 1842:	Ministro de Gracia y Justicia.
8 mayo 1843:	Cesa.
7 febrero 1845:	Se jubila a petición propia.

Período de permanencia en el Tribunal Supremo: 10 años.

Informes y valoraciones políticas

Diputado en 1810 por Guipúzcoa.
Diputado en 1836 por Guipúzcoa.
Diputado en 1837 por Guipúzcoa.
Diputado en 1839 por Guipúzcoa.
Diputado en 1841 por Burgos.
Senador en 1841 por Segovia.
Presidente de las Cortes.
Adscripción política: liberal-progresista.
Constitucionalista de pro.
Liberal y Constitucionalista.

Tareas legislativas

Presidió una comisión a raíz de la Real Orden de 1 de septiembre de 1836 encargada de revisar el Código Penal de 1822 y formar el de procedimiento criminal.

(*) Ver apéndice documental

VIII. APÉNDICE DOCUMENTAL

SATURNINO ÁLVAREZ BUGALLAL

Señor:

D. Saturnino Álvarez Bugallal, Fiscal de V. M. en el Tribunal Supremo, a V. M. con el más profundo respeto expone:

Que habiendo sido proclamado Diputado a Cortes por los distritos de Bande y Orense no quiere ni por un momento poner en duda su decidida voluntad de responder al llamamiento de sus electores, aceptando la representación en Cortes, con que una vez más le han honrado; y como quiera que el cargo que desempeña al frente del Ministerio Fiscal pueda ser considerado como incompatible con ello por más que el decreto de 11 de Enero del correspondiente año parece que no deja lugar a duda en sentido contrario, pues declara compatibles con la diputación a cortes todos los cargos cuyo sueldo llegue o exceda de cincuenta mil reales anuales, en cuyo número se encuentra el de Fiscal del Tribunal Supremo dotado, muchos años há, con el de sesenta mil.

A. V.M. rendidamente suplica se sirva haber por hecha y aceptar cuando lo tenga por conveniente desde luego, la dimisión del cargo oficial que sirve, dimisión que de hoy, respetuosamente formula impulsado por el escrúpulo que deja indicado y no por otra razón alguna.

Madrid 2 de Febrero de 1876

Señor

A.S.R.P. de V.M.
Saturnino Álvarez Bugallal

EUGENIO ANGULO Y REGULEZ

Excmo. Sr.

Habiendo separado el Gobierno del Duque de la Victoria a D. Antonio de Collantes del cargo de Relator en propiedad de esta Audiencia Territorial que desempeñaba desde la creación de la misma, se procedió a la provisión de esta plaza previos los anuncios, ejercicios literarios de oposición y demás formalidades que las ordenanzas prescriben. En virtud de la propuesta preferente que este Tribunal Superior hizo en favor de uno de los opositores D. Eugenio Angulo, Auditor General de Guerra interino del Ejército de la Izquierda durante la Guerra Civil y Promotor fiscal en propiedad del Juzgado de 1ª Instancia de Santo Domingo de la Calzada, la Junta de Gobierno de esta capital instalada con motivo del Pronunciamiento Nacional que en Junio último tuvo lugar para desviar la Regencia del Duque, confirió al referido Angulo la plaza de Relator ya indicada que se hallaba vacante. A mayor abundamiento, habiéndose remitido con posterioridad al expediente original al Gobierno Provisional de la Nación se sirvió este por resolución de 26 de Septiembre del corriente año nombrar para la mencionada plaza de Relator al mismo D. Eugenio Angulo expidiéndole el correspondiente Real Título con fecha 8 de Octubre del presente año.

Pero sin embargo de estar sirviendo su plaza el citado Angulo desde el 1º de Agosto en virtud de la propuesta del Tribunal Pleno y del nombramiento de la Junta de Gobierno y sin embargo de haber presentado en tiempo el Real Título que obtuvo del Gobierno Provisional no había jurado la propiedad de su destino, lo cual ha hecho hoy en el Tribunal Pleno, continuando en el desempeño de su Relatoría. Y al ponerlo en conocimiento de V. E. creo de mi deber y como un rasgo de justicia manifestarle que entre ambas Salas están muy satisfechas de la manera con que el expresado Angulo desempeña su destino, pues sabe ser pundonoroso de carácter circunspecto y reservado. Completamente adepto a la actual situación política y de inteligencia acreditada, es tal su laboriosidad que desde el 1º de Agosto en que se hizo cargo de la Relatoría hasta la fecha ha despachado en vista pública para definitiva 252 causas criminales y 62 pleitos civiles.

Dios guarde a V. E. muchos años. Burgos 28 de Diciembre de 1843.

Excmo. Sr.
Mariano de Collantes

Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

LORENZO ARRAZOLA GARCÍA

El Tribunal Supremo de Justicia a 16 de Abril de 1853.

Expone a V. M. lo que cree conveniente con motivo de haber sido separado de la Presidencia del mismo D. Lorenzo Arrazola.

Señora:

El Tribunal Supremo de Justicia, en vista de vuestro Real Decreto de destitución de su Presidente de 9 de este mes, acordó que formado expediente y uniéndose el que se instruyó en 1837 sobre reposición de D. Manuel Antonio Caballero, Ministro que era entonces, hoy Presidente de Sala de este Tribunal, destituido también por un Real decreto, pasasen ambos a vuestro Fiscal. Hecho así dio éste con la urgencia que indicaba el asunto el siguiente dictamen.

“El Fiscal dice: que en virtud de lo acordado en Tribunal Pleno en el día de ayer, se ha formado expediente con un ejemplar de la Gaceta en que se reinserta el Real Decreto declarando cesante al Sr. Presidente que era de este Supremo Tribunal, y unido con el expediente que se instruyó en 1837 sobre reposición de uno de los Señores Ministros, ha pasado todo al que suscribe con el fin, sin duda, de que el Fiscal exponga su parecer sobre si el Tribunal ha de representar a S. M. y consultar lo que estime conveniente a consecuencia del Real Decreto referido.

No es dudoso por cierto que aquella Real disposición ha de ser guardada, obedecida y cumplida desde luego que llega a conocimiento del Tribunal, por que no fuera posible ya obedecerla sin cumplirla y que el Tribunal representara sobre su cumplimiento. Después de las importantes y trascendentales alteraciones que ha tenido el régimen de la Monarquía ha desaparecido, en concepto del Fiscal, la facultad, el encargo y aún la obligación, que en determinados casos las antiguas leyes del Reino atribuyeron a las autoridades corporaciones y entre ellos a los mismos Tribunales de justicia para suspender el cumplimiento de una soberana revolución y representar una y otra vez a la persona del Monarca.

Los mismos Señores Reyes en bien de los pueblos se impusieron este correctivo a los errores, a las demasías y aun a las arbitrariedades de su poder ejercido por su Gobierno. Hoy los límites de aquel poder tienen una forma muy diversa, y los medios que contribuyen a su templanza han pasado a los altos cuerpos políticos del Estado, que comparten con el Monarca el poder de la formación de las leyes, que examinan los actos de los Ministros responsables, y conocen y aun juzgan de esta responsabilidad.

Mas, obedecida y cumplida la disposición que aquel Real Decreto contiene, pudiera todavía dudarse si el Tribunal debe acudir a S. M. exponiendo respetuosamente sus observaciones en bien de la independencia de la magistratura y de la recta administración de justicia hermanadas con la observancia de la construcción de la Monarquía. El Fiscal para decir su parecer en este punto debe tener presente la severa obligación de someter sus sentimientos personales y hasta los raciocinios que pudiera formar juzgando de los asuntos públicos, a los severos

deberes de su Ministerio. Por eso, ni puede expresar las amargas y dolorosas reflexiones que excito en su ánimo la separación del digno Sr. Presidente del Tribunal, ni las que pudieran deducirse de haber visto por este medio menoscabarse, no sólo la independencia de la Magistratura Española en la suerte que ha cabido al primero y más alto de los Magistrados del Reino, y cabeza en cierto modo de todo el orden judicial, sino también la independencia del alto cuerpo colegislador a que el mismo Sr. Presidente pertenece.

Pero es uno de los primeros deberes del Fiscal no ya sólo acatar y obedecer la voluntad de la Reina N^a. S^a., sino procurar en su nombre y en representación del interés del Estado que el Tribunal Supremo conserve intacta su alta y absoluta independencia para administrar rectamente la justicia, a cuyo fin permanezca siempre tan ajeno de toda intervención en los negocios políticos como la Constitución y las leyes acertadamente lo han constituido.

Y no fuera posible que V. A. acudiera a S. M. en representación respetuosa por la separación del Señor Presidente sin que hubiera de examinarse forzosamente una cuestión verdaderamente política. De la notoria rectitud reconocida en la persona de quien se trata, del ilustrado celo con que ha llegado tan cumplidamente todas las obligaciones de su alto y delicado cargo y por último, de lo que por notoriedad consta se deduce hasta con evidencia, que los motivos en que hubieron de fundarse los Ministros responsables que aconsejaron a S. M. la separación del Sr. Presidente fueron por hechos acaecidos en el alto cuerpo colegislador: o que de cualquier modo no deben tener otra calificación que la de hechos relativos a la política. ¿Y ha de ser el Tribunal Supremo de Justicia el que ha de calificar esos hechos en el concepto que verdaderamente les corresponda, el que ha de pesar las consecuencias que en uno y otro sentido pudieran tener para el régimen y gobierno de la Monarquía y para la independencia de los Senadores del Reino? ¿Y ha de ser el Tribunal Supremo de Justicia el que examine de uno u otro modo, ni aun como fundamento de sus observaciones siquiera, el uso que se haya hecho de la Real prerrogativa?

Pues así procederá forzosamente el Tribunal si hubiera de exponer a S. M. sus observaciones sobre el Real Decreto a que el Fiscal se refiere, aunque se propusiera limitarlas exclusivamente a la infracción de la inamovilidad judicial, sancionada por la ley fundamental del Estado como el medio más seguro de afianzar la recta administración de justicia; aunque quisiera reducirse a recordar la observancia de las disposiciones que hoy rigen para proponer la cesación de los Magistrados y Jueces y se hallan contenidas en el Real Decreto de 7 de Marzo de 1851; y aunque pretendiera sólo demostrar la posibilidad de haber aplicado esas mismas disposiciones en la declaración decretada por S. M.

Siempre habría de ofrecerse desde luego el motivo y la razón política, y no era posible tampoco reflexionar generalmente en este caso sobre la observancia del principio constitucional, sobre la observancia de las otras disposiciones de las leyes, sobre la posibilidad de su aplicación, sin juzgar o calificar de algún modo los actos de los Ministros que aconsejaron a S. M. la resolución y aun sin calificar de algún modo también el uso hecho de la Real prerrogativa.

Un raciocinio, entre otros muchos que aun pudieran exponerse, basta en el concepto del Fiscal para demostrar todo el fundamento de la doctrina referida.

La infracción del principio constitucional antes sentado, la inobservancia de las leyes y disposiciones que hoy rigen para la inamovilidad judicial puede ser (considerándola absolutamente y sin hacer calificación alguna en ningún sentido en este momento) motivo para una acusación en el Congreso de los Diputados contra los Consejeros responsables de la Corona. Cabe pues en la posibilidad absoluta también que llegara el día de abrirse ese juicio y que se promoviera la acusación para ante al alto cuerpo colegislador, donde hubiera de juzgarse exclusiva y definitivamente. Fuera de aquel Cuerpo, antes de ese momento no han de examinarse esos mismos hechos, ni prejuzgarlos directa ni indirectamente ni de ninguna forma por otra Corporación del Estado y menos por el Tribunal Supremo de Justicia.

Las actuaciones unidas como antecedentes que pudieran servir para la resolución que el Tribunal debe acordar en la actualidad, no ofrecer una identidad absoluta con la cuestión que hoy se examina. Cuando aquellas actuaciones se formaren, cuando en 1837, representó el Tribunal sobre la separación de uno de los Señores Ministros, la mayoría del Tribunal mismo y los Señores Fiscales suponían que no estaba en observancia el principio de la inamovilidad judicial, ni existían reglas ninguna para su cumplimiento, y pedían y reclamaban unas y otras como necesidad urgente para la recta administración de justicia.

Aun en otro caso, respetando siempre el que suscribe las determinaciones anteriores del Tribunal, y aun procurando ilustrarse con sus precedentes, no podrían sin embargo variar las convicciones manifestadas.

El Fiscal por tanto es de dictamen que se obedezca, guarde y cumpla el Real Decreto al principio referido, limitándose el Tribunal a acordarlo así oportunamente y a quedar enterado según corresponde.

El Tribunal sin embargo acordará como siempre lo mejor”.

El Tribunal, Señora, no participa de la opinión consignada en este dictamen, relativa a que después de las importantes y transcendentales alteraciones que ha tenido el régimen de la Monarquía ha cesado la facultad que las antiguas leyes concedían a los Tribunales de suspender el cumplimiento de las resoluciones soberanas y representar. Lo que no se permite hoy a los Tribunales, Señora, es la insistencia en la suspensión, después que haya sido desaprobada por V. M. Esta insistencia en efecto, y no la suspensión es lo que prohíbe y pena el artículo 287 del Código penal, continuando por lo mismo la facultad de suspender en su caso y representar: facultad de que al presente no ha habido ocasión siquiera de usar, puesto que, publicado en la Gaceta el mencionado Real decreto de destitución, lo han acatado a un tiempo, como era de su deber, este Supremo Tribunal y su destituido Presidente. No existe, pues el impedimento que por esta parte cree ver vuestro Fiscal para esta consulta que contra su dictamen ha acordado el Tribunal y tiene la honra de elevar a V. M; en la que, como verá V. M., puede fácilmente prescindir y prescindirá contra los temores que vuestro Fiscal manifiesta, de toda consideración que se roce con la política y de toda calificación y acriminación ajenas de su competencia. Encomendada a éste Supremo

Tribunal la vigilancia sobre los altos intereses de la justicia, cree de su deber manifestar respetuosamente a V. M. el funesto efecto que en grave daño de estos intereses ha de producir necesariamente el referido decreto de destitución; y a esto, sólo y a la indicación del remedio se ceñirá en esta consulta.

El expediente, a que en la última parte de su dictamen se refiere vuestro Fiscal, se instruyó con motivo de un decreto igual expedido en 30 de Septiembre de 1837. Es el siguiente: “como Reina Gobernadora y en nombre de mi excelsa Hija D^a. Isabel Segunda vengo en declarar cesante a D. Manuel Antonio Caballero de la plaza de Magistrado que obtiene en el Tribunal Supremo de Justicia”. Vuestros fiscales, a quienes se pasó con urgencia este decreto y de nombramiento de sucesor de Caballero que recayó en la misma fecha, fueron de parecer que pues solo existía de derecho, pero no de hecho, la inamovilidad judicial sancionada en el artículo 66 de la Constitución vigente entonces, nada más podía hacer el Tribunal que representar manifestando a la Augusta Reyna Gobernadora la urgente necesidad de que se declarase definitivamente por una ley de inamovilidad judicial, tan indispensable para la buena administración de justicia. Adhirióse a este dictamen haciendo voto particular; D. Álvaro Gómez Becerra, uno de los Ministros que constituían a la sazón el Tribunal; mas éste, partiendo del supuesto contrario al que servía de fundamento al voto particular y al dictamen de vuestros fiscales, esto es, el de que semejante ley era innecesaria, y si sólo precisó que se observasen las que estaban vigentes sobre el particular, elevó al Trono la consulta de que acompaña copia certificada a la presente, demostrando con razones perentorias que existía de derecho y de hecho la inamovilidad judicial y suplicando en consecuencia a S. M. la Reina Gobernadora se sirviese dejar sin efecto el decreto de destitución de D. Manuel Antonio Caballero y de nombramiento de sucesor en su plaza, mandando se repusiese a aquel en ella. La augusta Madre de V. M. en su alta justificación las razones expuestas por el Tribunal y revocando el decreto de destitución de Caballero, mandó que volviese, como volvió en efecto desde luego, a servir la misma plaza que antes obtenía.

El Tribunal, Señora, limitándose ahora a reproducir las sólidas y concluyentes razones de la consulta que dio este resultado, y que produce en su ánimo la convicción de que existe hoy como existía en 1837, no sólo de derecho, sino también de hecho, la inamovilidad de los Magistrados y los Jueces, no puede menos de rogar con encarecimiento de V. M. que se digne fijar en ellas su soberana atención, porque esto sólo bastará para que V. M. disponga, como puede hacerlo, que cese desde luego ese estado precario en que se halla el orden judicial por efecto de la opinión poco fundada que exige se aplaze hasta la promulgación de la ley orgánica de los Tribunales la aplicación del artículo 69 de la Constitución. En su citada consulta del año 37 combatió victoriosamente este Tribunal semejante opinión; y el mismo Magistrado D. Álvaro Gómez Becerra que se separó entonces del parecer del Tribunal en esta parte, no pudo menos de reconocer pocos años después lo fundado de él, puesto que siendo Ministro de Gracia y Justicia, durante la Regencia provisional del Reino, propuso a la misma y fue sancionado por ella en nombre de V. M. el proyecto de decreto de 16 de Octubre de 1840, por el que se dispuso que los Magistrados y Jueces con nombramiento Real en propiedad que se hallaban en actual y efectivo ejercicio de sus respectivos empleos el día 12 de aquel mes y las mismas calidades, no fuesen depuestos de sus destinos temporales o perpetuos sino por auto judicial, o en virtud de Orden del Rey, cuando éste con motivos fundados lo mandase juzgar por el Tribunal competente, conforme al artículo 66 de la Constitución.

Esta disposición tan justa como deseada no pudo sin embargo prevalecer por razones a todos notorias y que no es oportuno especificar; pero en medio de esto, forma precedente, en la materia para determinar que el poder ejecutivo, que reside de lleno en V. M. puede sin la concurrencia de las Cortes decretar la aplicación inmediata, a los Magistrados y Jueces, que hoy sirven con Real nombramiento y en propiedad sus respectivas plazas de la inamovilidad completa sancionada en el artículo 69 de la Constitución. La sociedad, Señora, no puede subsistir sin justicia: la necesidad de la justicia es para ella de todos los días; de todos los momentos y por eso no puede demorarse la ejecución de los medios necesarios para que la obtenga. Entre estos medios ocupa preferente lugar el de la inamovilidad, como garantía necesaria que es de la imparcialidad de los Magistrados y Jueces sin la cual la justicia sería un nombre vano o mas bien, la más funesta de las decepciones. Por eso la Constitución estableció esta inamovilidad de un modo absoluto y sin reservarlo para una ley particular; ni aplazado para un tiempo futuro y por eso también el Tribunal está íntimamente persuadido a que hasta un Real Decreto para declarar que la inamovilidad judicial existe de derecho y de hecho en virtud del artículo 69 de la Constitución del Estado.

Aun suponiendo más fundada la opinión contraria, no se debe perder de vista que V. M. reconociendo en su alta sabiduría la necesidad de dar la estabilidad indispensable a los destinos judiciales para hacer efectiva la independencia de los funcionarios que los desempeñan y estimando prudente contemporizar con la dicha opinión, se dignó sustituir provisionalmente a la inamovilidad sancionada en el expresado artículo 69 la que ofrecen los artículos 15 y 16 de nuestro Real Decreto de 7 de Marzo de 1851, sujetando a las formalidades que en ellos se prescriben la separación y la jubilación de los Magistrados y Jueces. Sin oír previamente al Jefe del Tribunal de quien dependa el interesado y a la Sala de Gobierno de este Supremo Tribunal, no puede hoy, Señora, decretarse la destitución de ningún Magistrado, de ningún Juez; y estas formalidades, son aplicables al Presidente de este Tribunal y a los Regentes de las Audiencias por mas que sean los Jefes de sus Tribunales respectivos.

Para los efectos de vuestro Real Decreto debe oírse, cuando se trate de la destitución o jubilación de alguno de estos Magistrados, al Jefe accidental del Tribunal a que pertenezcan, esto es, al Presidente de Sala más antiguo del mismo y a la de Gobierno del Supremo presidida al efecto por este Jefe accidental. Sostener lo contrario sería lo mismo que decir que la garantía de vuestro Real Decreto comprende a todos los Magistrados y a todos los Jueces, aun al último, al más oscuro de los de primera instancia exceptuando al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a los Regentes de las Audiencias; mas esto es notoriamente absurdo y lo absurdo no cabe, ni cabrá nunca en los decretos de V. M.

Es, pues, inamovible el Presidente de este Supremo Tribunal conforme al artículo 69 de la Constitución del Estado, o cuando menos lo es según vuestro citado Real Decreto; y sin embargo ha sido depuesto sin que precediese una sentencia ejecutoriada, o al menos la formalidad prescrita en aquel por V. M. El Tribunal, Señora, creería ofender la alta penetración de V. M. si se detuviese a exponer los funestos efectos de semejante destitución. Dirá sólo que después de ella no podrá menos de aparecer ilusoria para todos los Magistrados y Jueces una garantía que no ha podido escudar al primer Magistrado de la Nación.

El Tribunal, Señora, no ve otro medio de ocurrir a tan grave daño que el que aplicó al mismo propósito en 1837 la Augusta Reina Gobernadora: decretar la reposición del Presidente depuesto ahora por un simple Real decreto, como se decretó entonces la del Ministro de este Supremo Tribunal D. Manuel Antonio Caballero, depuesto también en igual forma. Si a esto se dignase V. M. añadir en su celo ardiente por la justicia, una resolución parecida a la mencionada del año 1840, recibirían el orden judicial y la Nación entera un inmenso beneficio sobre los muchos de que la son deudora los españoles desde que gozan la dicha de tener a V. M. por su adorada Reina.

El Tribunal, Señora, excusa asegurar que en todo lo que ha expuesto ha prescindido enteramente a D. Lorenzo Arrazola. Por mas que, bajo el concepto de su Presidente, nada pueda decir de él que no le sea más o menos favorable, ha hecho entera abstracción de su persona; y fijándose exclusivamente en su cualidad de primer Magistrado de la Nación, ha querido sólo cumplir con el deber de decir a V. M. con lealtad y con el más profundo acatamiento la verdad importantísima y notoria de que no hay justicia sin Magistrados y Jueces inamovibles, ni sociedad posible sin justicia.

V. M. como siempre resolverá sobre todo lo que más convenga.

Los Ministros D. Francisco Olavarrieta, D. Ramón López Vázquez, D. Juan Martín Carramolino y D. José Gamarra y Cambronero, de conformidad con el anterior dictamen Fiscal, han sido de parecer, que en la actualidad el Tribunal debe abstenerse de toda representación en este asunto.

El Ministro D. José Francisco Morejón es de parecer que la reverente exposición que se dirija a S. M. está concebida en los términos siguientes:

“Señora: El Supremo Tribunal de Justicia supo con sentimiento que D. Lorenzo Arrazola había cesado de prestar a V. M. los servicios de su encargo y no ocultará que le sería más grato verle otra vez dirigir como solía, sus trabajos en provecho de la justicia y en honra de V. M. Es esta Señora la expresión de su deseo inspirado por las eminentes prendas del Presidente depuesto; es sólo una súplica, porque después de tantos testimonios en actos solemnes consignados no cabe dudar que la inamovilidad de la magistratura es todavía una promesa diferida, no un dogma. Si lo fuera, el Tribunal que expone no habría callado en los muchos casos de destitución de Jueces y Magistrados, sin guardar su celo para el más favorecido ni para momentos en que la Gobernación Suprema del Estado carece de sus propios funcionarios, sin conservar los que hicieron notorio el cumplimiento de un deber de conciencia. V. M. usó de una prerrogativa de su dignidad; no nos toca inquirir la oportunidad de su uso. A otros hombres se confió la misión de aconsejar a V. M. la de reducir el consejo a precepto: a nosotros la de obedecer. No existe la inamovilidad; pero entre tanto que ese día, que nos la ha de traer se acerca y haya disipado los obstáculos que tal vez ahora la hicieran inconveniente, dignese V. M. en uso de aquella misma prerrogativa, restituir a D. Lorenzo Arrazola al seno de este Tribunal, accediendo a la humilde súplica que V. M. benignamente escucha”.

Madrid, 16 de Abril de 1853

MANUEL ANTONIO CABALLERO DEL POZO

Inicio y Preámbulo.

Exposición del Tribunal Supremo, de 10 de Octubre de 1837, defendiendo el principio de inamovilidad con ocasión del cese de un magistrado.

El problema es quién y cuando ha de determinar los asuntos referidos a ceses de magistrados.

Señora

El día 3 del corriente se ha hecho presente en el Supremo Tribunal de Justicia, para su conocimiento y efectos consiguientes, una Real Orden comunicada a su Presidente, con fecha 30 de Septiembre próximo pasado por el vuestro Secretario de Estado y del Despacho del ramo D. Ramón Salvato, comprensiva del Real Decreto del mismo día por el cual tuvo a bien V. M. declarar cesante a D. Manuel Antonio Caballero de la plaza de Magistrado que obtiene en este Supremo Tribunal.

Visto en él este Real Decreto con la Real Orden de su comunicación, y obedecido con el respecto que se merecen las resoluciones de V. M., entendió sin embargo que sería de su deber presentar algunas observaciones a V. M. sobre el asunto, y con éste objeto lo mandó pasar con urgencia a los Fiscales; y como en el siguiente día 4 se diese cuenta del otro Real Decreto de la propia fecha del 30, aunque comunicado con Real Orden de 1º del corriente, en que V. M. se ha servido nombrar a D. José Cecilio de la Rosa, Subsecretario del Despacho de Gracia y Justicia, para la plaza de Magistrado de este mismo Tribunal, vacante por cesación de D. Manuel Antonio Caballero, ha sido consiguiente que también se pasase a los Fiscales esta otra resolución de V. M. (...)

La censura que Vuestros Fiscales han puesto sobre todo es del tenor siguiente:

“Los Fiscales se han enterado de la Real orden de 30 de septiembre último, en que el Señor Ministro de Gracia y Justicia traslada a este Supremo Tribunal, para su conocimiento y efectos convenientes, el Real Decreto de la misma fecha, por el que S. M. ha venido en declarar cesante de la plaza de Magistrado de este mismo Supremo Tribunal, al Señor D. Manuel Antonio Caballero; cuya Real orden se ha mandado pasar con urgencia a los que suscriben; y dicen: Que consiguiente en los principios que manifestaron en la respuesta de 5 de mayo último, dada en el expediente instruido para informar acerca del proyecto de ley presentado por el Gobierno, para organizar el poder judicial, no pueden menos de reconocer, como reconocieron entonces, conformándose con la opinión manifestada de las Cortes y del mismo Gobierno, y con todos los actos que de este han dimanado, que los Tribunales de Justicia en la parte personal no se hayan aún constituidos definitivamente, y por lo tanto no está todavía realizada de hecho, aunque se encuentra establecida de derecho, la necesaria inamovilidad. Por eso advierten que en las Cortes hay una Comisión para presentar la ley orgánica de los Tribunales, y tienen entendido que el Gobierno ha remitido también a ellas un proyecto de ley, en el que se trata de fijar el tiempo y los términos en que se ha de empezar la inamovilidad, Y sin duda la

Comisión al desempeñar su encargo y las Cortes al examinar uno y otro, tratarán de expresar, desde cuando ha de empezar la observancia del artículo 66 de la Constitución.

Los Fiscales saben muy bien que el poder judicial, defensor y protector de las leyes, de la conservación de la Sociedad, de la vida, del honor, y de la fortuna de todos los individuos que la forman, no puede llenar cual corresponde para bien y seguridad del país, las altas y sagradas funciones que le están encomendadas ni desempeñar su interesante misión, sin que los Magistrados y Jueces sean independientes; y que jamás gozarán de la indispensable independencia, si no son inamovibles, al mismo tiempo que sean responsables. Por tanto, observan con dolor el estado precario, y contrario al objeto y a los fines de su institución, en que está todavía, por lo menos de hecho el poder judicial por la inamovilidad de los Magistrados y Jueces, interinamente pronunciada, mientras por ser amovibles, no dejan de ser responsables: ven con sentimiento la ansiedad y la inquietud, en que las separaciones, las cesantías, y las traslaciones envuelven a toda la Magistratura; y que en tal situación no es fácil que pueda administrarse la justicia con la debida independencia y rectitud. Y este mal de funesta trascendencia reclama urgentemente el único remedio que puede atajarse, y prevenir los peligros que le son inseparables.

En vista de todo entienden los Fiscales que acerca del Real Decreto que motiva esta discusión, nada tienen que exponer, y son del parecer de que si V. A., lo creyese conveniente, pudiera tener a bien elevar a la augusta Reina Gobernadora una exposición, manifestando los males y los peligros de la prolongación de este estado de interinidad, y solicitando que S. M. se digne tenerlo en consideración, y por los medios que su sabiduría estime oportunos, tenga a bien acelerar el suspirado momento de que se promulguen las leyes orgánicas, y la designación del tiempo desde el cual debe entenderse la inamovilidad consignada en la Constitución, para que el poder judicial quede restablecido con la independencia que reclama el bien de la Nación.

V. A. con su superior ilustración se servirá acordar como siempre lo más acertado.

Otro si: Después de extendido y firmado el anterior dictamen, se ha pasado también a los Fiscales otra Real orden fecha 1º del actual trasladando un Real Decreto expedido en 30 de septiembre último, por el que S. M. se ha dignado nombrar al Señor F. José Cecilio de la Rosa para la plaza de Magistrado de este Supremo Tribunal, vacante por cesación del Señor D. Manuel Antonio Caballero: y en su vista, entienden los que suscriben que no tienen que alterar ni variar nada sobre cuanto dejan expuesto, y lo reproducen”.

Mucho tiempo hace, Señora, que el Tribunal, abundando en las ideas que manifiestan los Fiscales que en él asisten, observa con dolor el estado precario en que se encuentra la Magistratura, contrario enteramente a los fines y objetos de su instrucción; estado no solo precario, sino aun de abatimiento viéndose los Magistrados y Jueces expuestos a los tiros de la ambición, de la emulación, de los resentimientos y venganzas, de donde proceden por la mayor parte las denuncias

secretas e informes reservados que se dirigen contra ellos, aunque revestidos con las apariencias de buen celo, y que si no siempre, habían motivado muchas veces las frecuentes remociones y cesantías, traslaciones y jubilaciones que unos y otros han experimentado de mucho tiempo a esta parte. Los Fiscales reconocen, y el Tribunal está íntimamente persuadido de ello, que el poder judicial, conservador de la sociedad, protector y defensor de la vida, del honor y de la fortuna de todos los individuos que la forman, no puede llenar, cual corresponde, las altas y sagradas funciones que le están encomendadas, ni los Magistrados y Jueces desempeñar su interesante misión, sin que sean indispensables; y que jamás gozarán de la independencia necesaria, si no son inamovibles al mismo tiempo que sean responsables. Verdad generalmente reconocida por todos los Publicistas, y que de teoría ha pasado a ser disposición legislativa casi en todas las naciones, de más de un siglo a esta parte.

Así es que la inamovilidad que está decretada para los Jueces en todas las legislaciones modernas no es un privilegio de la clase, es una verdadera necesidad de la sociedad misma, como lo son las prerrogativas del trono en los Estados monárquicos. Vana e ilusoria sería la sociedad, si los individuos no tuviesen en ella asegurados los derechos para cuyo goce pacífico se han reunido, creando una fuerza pública que los garantice. Esta fuerza pública, en cuanto a los derechos individuales, consisten en el poder judicial ejercido por los Magistrados y Jueces que los definen y declaran cuando son controvertidos; en suma, está ligado a la administración de justicia que no puede verificarse imparcial, recta y cumplidamente si los Jueces no son libres e independientes, sujetos y responsables únicamente a la ley, que debe ser la sola pauta y regla de sus operaciones; independencia que desaparece en el punto que su permanencia en el empleo, y con ella su honor y su fortuna estén colgadas de la arbitrariedad, o sea, voluntad libre de otro Poder del Estado.

V. M. está bien penetrada de esta verdad que no podía ocultarse a su alta sabiduría, y el Tribunal tiene el placer de reconocerlo en varios Reales Decretos que V. M. se ha servido expedir desde que felizmente tiene en sus manos las riendas del Gobierno a nombre de su augusta hija, y aún muy señaladamente en el mismo de 22 de septiembre del año próximo pasado, que tal vez y contra las rectas intenciones de V. M. ha dado margen a los males y perjuicios que deploran los Fiscales de este Supremo Tribunal, y con ellos todos sus Ministros. Los Fiscales convienen en que no están constituidos definitivamente todavía los Tribunales de justicia en la parte personal y que no se ha realizado de hecho la necesaria inamovilidad, aunque se encuentra establecida de derecho: y este supuesto incuestionable, que el Tribunal tiene fijo en su mente muy antes de ahora, le conduce a dirigir a V. M. esta reverente consulta, procediendo un poco más allá del término en que los Fiscales se han detenido.

Al recordarla, Señora, ha separado la vista de todo objeto personal, y por más que el Real Decreto de cesantía que dá margen a ella recae en un Magistrado antiguo, que por sus méritos y servicios de Fiscal y Regente por muchos años en dos Tribunales Superiores, no menos que por su acendrada probidad y rectitud, sus luces y talentos para ejercer acertadamente la judicatura, le hacen muy digno de ocupar el puesto de que se ve decaído, no es la persona de D. Manuel Antonio Caballero el móvil que dirigen la mano del Tribunal; esto, si, únicamente el amor a la Justicia que arde en todos sus individuos, el celo que le devora por la cumplida observancia de las leyes,

y muy principalmente de la Constitución que hemos jurado, única bandera de paz y reconciliación en esta Nación trabajada tanto tiempo ha con discordias civiles, y única senda por donde puede llegar el punto de prosperidad y ventura que V. M. anhela con la más tierna y material solicitud; esto finalmente, su honor y el grito de su conciencia que no le permiten permanecer pasivo cuando se atraviesan tan caros intereses, y la obligación estrecha que le impone su instituto de representar al Trono cuando crea conducente para todos los Tribunales y Juzgados, superiores e inferiores, llenen cumplidamente sus deberes, administrando pronta, imparcial y rectamente la justicia.

La inamovilidad, Señora, de los Magistrados y Jueces que en el día ejercen estos empleos, y fueron nombrados para ellos legítimamente por S. M. sin la calidad de interinos, está acordada clara y expresamente por las leyes que actualmente rigen de hecho y de derecho, leyes que no pueden infringirse sin trastornar el orden público. Ya las Cortes de Cádiz, congregadas necesariamente para salvar la Patria del poder colosal extranjero, que usurpando el Trono intentó también subyugar la Nación, y precisadas al constituir un Gobierno firme que administrase el Estado con el poder necesario para ello, determinaron que el Consejo de Regencia que ejercía el poder ejecutivo no pudiese deponer a los Ministros de los Tribunales Supremos ni inferiores, ni demás Jueces subalternos sin causa justificada, aunque podría suspenderlos con justa causa, dando parte de ello a las Cortes antes de publicarlo; ni pudiese trasladarlos a otros destinos contra su voluntad aunque fuese con ascenso, al no mediar justa causa que haría presente a las Cortes (Reglamento del Consejo de Regencia por Decreto de 16 de enero de 1811). En otro que sancionaron para la nueva Regencia del Reino en 26 de enero de 1812, se determinó igualmente, que no pudiese deponer a los Magistrados y Jueces de sus destinos, temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspenderlos sino por acusación legalmente intentada. De modo que, antes de la Constitución que las mismas Cortes decretaron y sancionaron, ya la inamovilidad de los Jueces y Magistrados era un punto definitivamente establecido como ley inviolable y sagrada; ley que aunque no formulada literalmente en nuestros Códigos, es enteramente conforme con el espíritu de todas las que en ellos se encuentran acerca de los Tribunales; y de hecho fue siempre observada por nuestros Monarcas. Tan arraiga estuvo en todos los tiempos en el ánimo de los Españoles esta idea de la inamovilidad de los que administran justicia, que apenas se dará ejemplar de haber sido separado de su puesto ningún Magistrado, aunque tal vez no debiese ocuparle, hasta que el mal hado de nuestra Patria infeliz sujetó a la arbitrariedad y despotismo de un valido, que aun vive, todos los destinos de la Nación. Aun en los casos de vejez y achacosa salud se excusaban las jubilaciones, y en su lugar se concedía lo que se llamaba Cédula de preeminencias, que autorizaba a los Magistrados para eximirse a su voluntad de la asistencia al Tribunal y del despacho de los negocios.

Vino luego la Constitución de Cádiz, y en su artículo 252 se dispuso literalmente que los Magistrados y Jueces no pudiesen ser separados o depuestos de sus destinos, temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada; y en el artículo siguiente se establece que si al Rey llegaren quejas contra algún Magistrado, y formado expediente pareciesen fundadas, podría, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para que lo juzgase con arreglo a las leyes. Estas disposiciones están concebidas en

términos absolutos, no hablan solamente de los Magistrados y Jueces que serían nombrados en adelante, habla con todos los que tuviesen este carácter; y como ni en dichos artículos, ni en otro de aquella Constitución, ni en otra ley especial, se difirió la observancia de los mismos artículos para un tiempo futuro, no pudieron dejar de tenerla, y así fue, desde que publicada la nueva Constitución, se mandó que se guardase, cumpliese y ejecutase en todas sus partes como ley fundamental de la Monarquía.

S. M. ha tenido por conveniente restablecer esa Constitución por su Real Decreto de 13 de agosto del año próximo pasado, absolutamente y sin ninguna restricción, hasta que las Cortes la reformasen o diesen otra nueva; y con esto quedó restablecido desde entonces lo dispuesto en los mencionados artículos 252 y 253. Reformóse esta Constitución, o se formó otra nueva, por las actuales Cortes; y S. M. se sirvió aceptarla, y la hizo promulgar con mandamiento expreso para que todas las autoridades y clases del estado la sirviesen y guardasen, y la hiciesen guardar, cumplir y ejecutar EN TODAS SUS PARTES, como ley fundamental de la Monarquía. Pues en el artículo 66 de la nueva Constitución se dice literalmente que ningún Magistrado o Juez podrá ser depuesto de su destino temporal o perpetuo, sino por sentencia ejecutoria, ni suspendido sino por el auto judicial, o en virtud de orden del rey cuando esto con motivos fundados lo mande juzgar por el tribunal competente. Y por último, se ha decretado por las Cortes y sancionado por V. M. otra ley posterior, por la cual se declaran subsistentes en todo su vigor, por ahora, como leyes, y hasta que las que se dieren determinen otra cosa, todas las disposiciones contenidas en el título 5º de la Constitución de 1812 que no hayan sido derogadas o modificadas por la Constitución de 1837. En ese título 5º están contenidos, y son parte de él, los mencionados artículos 252 y 253; y lejos de hallarse en la Constitución alguna derogación o modificación de lo dispuesto en ellos, se advierte una absoluta conformidad entre su contexto, y el contenido del artículo 66 de la Constitución que rige al presente.

Vea, pues, S. M. cuan fundadamente deja sentado el Tribunal que los Magistrados y Jueces que en el día sirven sus destinos con nombramiento legítimo, sin la calidad de interinos, son inamovibles por las leyes vigentes, leyes que no pueden infringirse sin trastorno del orden público del Estado, por lo mismo que son parte de su Constitución política. Pero el Tribunal tampoco ignora que a pesar de todo no faltan personas que por unos u otros fines pretenden todavía que esta inamovilidad no alcanza a los actuales Magistrados y Jueces, aunque hayan sido legítimamente nombrados, y que solo puede tener lugar para con los que lo fueren en adelante, y pues se presenta ocasión oportuna, no puede dejar de combatir este error, tal vez interesado, porque conviene que V. M. quede ilustrada acerca de un punto de bastante importancia, y más en la lucha que actualmente se sostiene entre pasiones encontradas.

Fundase para ello en el Real Decreto expedido por V. M. en 22 de septiembre del año próximo pasado, por el cual, suponiéndose amovibles los Magistrados y Jueces, no obstante el estar al estar ya restablecida y vigente la Constitución de 1812, por no haber sido nombrados conforme a ella, esto es, a propuesta del Consejo de Estado, que no existía ni existió después, se creó una Junta para que procediese a calificar a los Magistrados, Jueces, Fiscales y Promotores Fiscales de todos los Tribunales y Juzgados, formando catálogos razonados de los que merecieren continuar en sus

destinos o separados, jubilados o trasladados a otros con lo demás que contiene. El Tribunal, Señora, se abstendrá de censurar este Real Decreto que respete sumisamente solo por ser resolución de V. M.; empero, hablando con la lisura y cristiana libertad que las leyes encargan a los Tribunales, no puede menos de manifestar que en su juicio no ha sido muy acertado el consejo de los que propusieron el proyecto a V. M. para que lo sancionase. Las mismas razones comprendidas en la exposición que precede al Real Decreto dicen poca conformidad con las disposiciones de sus artículos; la Magistratura toda, o casi toda, se había reformado en los tres años precedentes en que V. M. tenía las riendas del Gobierno, procediendo en ello vuestros Ministros con exquisita diligencia como es notorio: puede creerse por lo mismo, que estarían ya removidos de sus puestos los antiguos Magistrados, que nombrados en otra época muy diversa fuesen poco dignos de continuar en ellos; y algún otro que por acaso pudiese haber escapado de la vista perspicaz de los Ministros que merecieron Vuestra Real confianza hasta el septiembre del año próximo pasado no eran bastante para que se abriese un nuevo juicio inquisitorial en un tiempo en que las pasiones políticas estaban más irritadas, y servían de pretexto para dar suelta a otras más ruines o menos nobles.

Por otra parte, si los Magistrados eran todavía amovibles porque no estaban nombrados a propuesta del Consejo de Estado, claro es que, no existiendo este, ni pensándose en establecerle como que en la Constitución nueva no ha tenido lugar esta institución, no llegaría el caso de que se les tuviese por inamovibles, y continuarían por largo tiempo en el estado precario en que les consideró el predicho decreto, y faltos de aquél saludable prestigio que la Magistratura ha menester, si ha de ser útil en la Sociedad. La indispensable inamovilidad de los Magistrados y Jueces no está ligada a la forma de su nombramiento; está afecta, por decirlo así, a la esencia misma del empleo, porque lo exige la índole de sus funciones delicadas y sagradas del destino: y así es, que antes de la Constitución de 1812, en que se estableció que el rey nombraría a los Magistrados y Jueces a propuesta del Consejo de Estado, estaba ya decretada su inamovilidad por los Reglamentos dados por las Cortes Generales y extraordinarias al Consejo de Regencia y a la Regencia del Reino, de que viene hecho mención, y eso, cuando la mayor parte de estos funcionarios fueran nombrados por el Rey en un tiempo en que, hablando verdad, no se usaba de mucha escrupulosidad para elegirlos. Así es también, que en la nueva Constitución no se prescribe ninguna forma precisa para los nombramientos de Magistrados y Jueces, comprendidos conjuntamente con los demás empleados públicos en la novena facultad que concede al Rey el artículo 47. Y de cualquiera modo, Señora, ve V. M. que vigente ya la nueva Constitución, sin ninguna restricción, en todas sus partes, como dice el mandamiento Real de su ejecución y cumplimiento, debieron cesar los efectos del Real Decreto de 22 de septiembre del año próximo pasado. Lo contrario sería una mengua en la consideración pública, que ofendería los altos respetos que se merecen el poder legislativo, y la suprema dignidad del Trono.

Quiérese también por algunos que la inamovilidad que establece para los Magistrados y Jueces el artículo 66 de la nueva Constitución, no debe tener efecto hasta que las leyes determinen los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada una de sus facultades, el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos, conforme se previene en el artículo 64 de la misma. El Tribunal juzga igualmente que este es otro error contra la letra y espíritu de ambas

disposiciones. Claro es, que habiéndose descartado de la Constitución, muy acertadamente toda la parte reglamentaria, y lo que corresponde a leyes secundarias, aun concernientes al derecho público interior del Reino que propiamente se llamaría orgánicas, ellas son las que deben arreglar todo lo relativo a la forma y organización de los Tribunales; leyes que, sin reforma de la Constitución podrán variarse y alternarse según los tiempos y las circunstancias. Pero, de verdad, las disposiciones de los artículos 64 y 66 son entre sí independientes; en el uno nada se establece propiamente, sino en cuanto dice que aquella materia no es propia de la Constitución, y debe arreglarse por otras leyes: el otro contiene una determinación positiva, ejecutable y cumplidera desde luego, toda vez que en ningún tiempo puede dejar de haber Magistrados y Jueces, y que la conveniencia pública exige que sean estables y permanentes, cualquiera que sea el número y forma de los Tribunales, y la medida respectiva de sus atribuciones y facultades. Y por ventura ¿no tenemos en el día Tribunales establecidos en diversa escala y graduación, organizados y dispuestos en forma específica y determinada, con atribuciones y facultades marcadas para cada uno, y con todo lo demás necesario para su existencia institucional? ¿O se quiere que no lo haya hasta que se publiquen nuevas leyes de que habla el artículo 64? Además de lo que sobre este ramo principal de la administración del Estado se halla establecido, no solo cumplida sino también superabundantemente en nuestros Códigos antiguos y modernos, tenemos en el día la nueva ley que, con el título de Reglamento provisional para la administración de Justicia, se ha servido dictar V. M. en 26 de septiembre de 1835, que es un conjunto metódico de todas las disposiciones que acerca de la materia se contenían en la Constitución de 1812, en la Ley de 9 de octubre del mismo año, que era propiamente orgánica, de otras más, arregladas también en la primera época Constitucional, y de algunas conexas que se hallan esparcidas en la Novísima Recopilación.

Este Supremo Tribunal, el especial de Órdenes, y las Audiencias tienen aparte de eso su Reglamento y ordenanzas, en que se determinan el número de los Ministros y Subalternos de cada uno de estos Tribunales, sus funciones respectivas, la distribución de Salas, la forma del Despacho, y en suma, cuanto concierne al Gobierno interior de los mismos. ¿Y no hay asimismo leyes que determinan las calidades que han de adornar a los Magistrados y Jueces, calidades así morales como legales? Nuestros Códigos están llenos de ellas, así como de preceptos, encargos, y exhortaciones sobre el cumplimiento de sus deberes, y no faltan tampoco otros decretos y resoluciones sobre lo mismo. Todo esto hace ver que el artículo 66 de la Constitución de 1837 ninguna dependencia tiene del 64; y que conteniendo aquél una disposición positiva, absoluta, no diferida para un tiempo venidero, los Magistrados y Jueces que en el día sirven sus destinos sin la calidad sin interinos pueden ser removidos de ellos sino en el modo y forma que en el mismo se prescribe; y todavía con tanta más razón, cuanto la responsabilidad contra ellos por su conducta moral y política, o por el mal desempeño de sus funciones, está vigente, igualmente de hecho que de derecho, como lo estuvo en todos tiempos y se está realizando en el día contra algunos.

Penetrado, Señora, el Tribunal mucho ha de cuanto viene manifestando, repite que al enterarse del predicho Real Decreto por el cual V. M. se ha servido declarar cesante a D. Manuel Antonio Caballero en la plaza que en el mismo obtenía, sin expresión de causa, (que es propiamente una remoción o deposición, de cuya palabra usa la ley) ha creído muy de su deber hacer presente a V. M. respetuosamente que en

su juicio queda ofendida con este paso la justicia pública y se infringe una ley Constitucional, cosas que el Tribunal está cierto de que no pueden caben en el ánimo recto de V. M. Ignora por descontado que motivos pudieron dar lugar a la destitución de este Ministerio; pero verdaderamente, constándole por experiencia propia las distinguidas cualidades que le adornan como ciudadano, y como Magistrados, se presenta a sus ojos muy extraño que habiendo sido promovido Caballero en 1834 de Regente de la Audiencia, y antes Chancillería, de Valladolid (después de veinte años de servicios en la toga) a plaza de Ministro del Supremo Tribunal de Hacienda, creado por V. M. en dicho año, y trasladado en 1835 al Supremo de España e Indias, denominado hoy de Justicia, se hayan hallado ahora causas poderosas para justificar su remoción, pasado ya más de un año de haberse instalado la Junta de calificación de Magistrados y Jueces a que quedaron sujetos también los de este Supremo Tribunal. Se persuade por lo mismo el que consulta, que el Real del Ministro que propuso la destitución de este benemérito Magistrado, precisamente en la víspera de haberse separado aquél del Ministerio que despachaba.

Y por tanto, sin desconocer este Supremo Tribunal los buenos antecedentes y apreciables prendas de D. Cecilio de la Rosa, nombrado para suceder a Caballero, que sin duda le hacen digno de este puesto, no puede menos de proponer muy reverentemente a V. M. y de rogarle con encarecimiento, se digne mandar que quede sin efecto el Real Decreto de 30 de septiembre en que se declaró cesante a D. Manuel Antonio Caballero, y consiguientemente, por ahora, el de nombramiento de D. José Cecilio de la Rosa para ocupar la plaza de aquél, y en todo caso, si apareciese alguna causa o motivo para la destitución del 1º, se sirva asimismo mandar que se pasen al Tribunal Supremo todos los antecedentes para que proceda con arreglo a las leyes; y así está pronto a ejecutarlo como acostumbra en todos los negocios, administrando justicia sin distinción de personas.

(El Tribunal Supremo se hace fuerte para tener el las llaves de las decisiones futuras).

El Ministro D. Álvaro Gómez Becerra ha puesto voto separado y es el siguiente:

El Ministro D. Álvaro Gómez Becerra no ha podido uniformar su opinión con la del Tribunal atendiendo a varias resoluciones de V. M. y de las Cortes, según las cuales no se considera inamovibles a los Magistrados y Jueces que sirven en la actualidad, hasta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución, se establezca por una ley que el Gobierno de V. M. se ha apresurado ya a proponer. Es ciertamente necesaria, y necesaria con urgencia, la declaración de inamovilidad. Por ello es el voto y parecer de dicho Ministro que se eleve a V. M. la reverente exposición que expresan los Fiscales, pero que sin perjuicio de esto, se obedezca, guarde y cumpla lo mandado por V. M. en las dos Reales Órdenes.

V. M. en su alta sabiduría se servirá resolver como hallare más justo y conveniente. Madrid, 10 de octubre de 1837.

Ministerio de Justicia
Archivo de la Comisión General de Codificación

El Presidente, D. Ramón Giraldo, D. Teotimo Escudero, el Conde de Vallehermoso, D. Ramón Macía Lleopart, D. Juan Nepomuceno Hernández San Miguel, D. José María Manescau, D. Ángel Casimiro Gobantes, D. Diego Martín de Villodres, D. Francisco Vereá y Cornejo, D. Álvaro Gómez Becerra y D. Demetrio Ortiz.

FERNANDO CALDERÓN COLLANTES

La Coruña 6 de Agosto de 1843

El mismo D. Fernando Calderón Collantes, Fiscal cesante de Valladolid solicita se le reponga en su plaza de la que se le desposeyó arbitrariamente.

(El 11 de Abril de 1844 se le propuso como magistrado de la Audiencia de Valladolid).

FERNANDO CALDERÓN COLLANTES

Valladolid 24 de Noviembre de 1840

(Por conducto del Regente)

D. Fernando Calderón Collantes, Fiscal de aquella Audiencia con Real nombramiento a quien la Junta provisional de la provincia ha conservado en su plaza atendiendo el esmero con que la ha desempeñado y a sus buenas opiniones políticas, manifiesta la sorpresa con que ha visto provistas las dos fiscalías del Tribunal sin que se haya declarado vacante la que él desempeña, sin jubilarle ni mandarle cesar como siempre se ha practicado. El exponente respeta esta determinación aunque no conoce sus motivos y pide en atención a sus buenos servicios ser nombrado Ministro del mismo Tribunal y otro, o que se declare cesante con el haber que por clasificación le corresponda.

Al remitir su instancia el Regente de la Audiencia elogia el celo, inteligencia y pureza con que ha desempeñado la Fiscalía, y la justa celebridad que se ha granjeado principalmente en las repetidas veces que ha hablado en estrados.

El Intendente remite varios informes pedidos al efecto, todos elogiando al interesado.

EUGENIO MANUEL CUERVO

A la Regencia:

Hallándose esta Junta en el pleno ejercicio de las funciones con que el Pueblo la había revestido, entre otras disposiciones de bien público adoptó la separación de los empleados que por sus malos antecedentes políticos se consideraban perjudiciales a la causa de la libertad continuando en el ejercicio de sus destinos; y si bien esta medida la consideró necesaria en todos los ramos de la Administración pública, la creyó indispensable en los Magistrados y Jueces de 1ª Instancia que faltando a sus deberes habían influido en las últimas elecciones en favor del partido anticonstitucional o jovellanista y contra los cuales estaba marcada la opinión pública por la grande influencia que podían ejercer abusando de su posición, y por ello después de un detenido examen y previos los informes de patriotas imparciales acordó en Sesión de 20 de los corrientes debían separarse el Regente de esta Audiencia D. Eugenio Manuel Cuervo, y los (...). Mas la Junta si bien conoció que por el Decreto de 16 del corriente en que se establece la inamovilidad de los Magistrados y Jueces con nombramiento Real en propiedad no podía ser obstáculo para la deposición de los que no se hallaban en aquel caso de ejercer sus empleos en propiedad con nombramiento Real, sin embargo convencida de la justicia de sus actos que sólo se han dirigido al bien público, y que a la Regencia provisional debía auxiliar con todo el prestigio que el bien de la Patria exige, estima en mas ceder una parte de la autoridad que todavía ejercía, suspendiendo llevar a cumplido efecto las separaciones indicadas, limitándose a hacer presente lo perjudicial que sería a la causa pública el que continuasen al frente de sus destinos estos funcionarios que tan mal han correspondido al desempeño de sus deberes y contra las que tan marcada está la opinión pública.

Si las razones expuestas han decidido a la Junta a proponer la separación del Magistrado y Jueces referidos, confía en que haciéndole justicia que se merece y conociendo que sólo el interés por el bien público le obliga a ello, se dignará la Regencia separar de sus respectivos destinos a los mencionados Regente de esta Audiencia y Jueces de 1ª Instancia. Zaragoza a 31 de octubre de 1840.

(Se recibió en Gracia y Justicia hoy 22 de Noviembre de 1840)

EUGENIO DíEZ DE PEDRERO

Señor:

El Ministerio fiscal en la representación del Gobierno de V. M. en sus relaciones con el Poder judicial y en el desarrollo de esta representación el Fiscal del Tribunal Supremo, Jefe del mismo Ministerio en todas las Monarquías, tiene el deber imprescindible de obrar bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia.

Lógica y natural deducción de aquel carácter y de esta dependencia, es sin duda, que el Ministerio público, en todo cuanto se refiera a su ejercicio, se arregle a las instrucciones que el Gobierno de V. M. por medio del Ministro respectivo le comunique y que jamás en casos arduos y difíciles, y principalmente cuando sus actos hayan de guardar íntima conexión con otros del Poder ejecutivo, se permita obrar independientemente excusando la previa consulta de documentos transcendentales que la legislación declara ser conveniente y aun necesaria. Sólo así podría el Ministerio fiscal hacerse fiel intérprete de los sentimientos, de las ideas y de la política del Gobierno de V. M.

Desgraciadamente y sin que éste haya dado ocasión para ello, han venido a quebrantarse de una manera dolorosa los estrechos lazos con que el Ministerio fiscal debe estarle subordinado. Un documento oficial desconocido por el Gobierno de V. M. hasta después de su publicación, ha sido causa de este resultado desagradable.

La circular que en veintitres de Noviembre último dirigió el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia a los Fiscales de las Audiencias del Reino prescribiendo reglas de conducta en materia de asociaciones, debe rechazarla el Gobierno de V. M. así por la forma de su expedición como por la esencial gravedad de su contexto.

No se propone el Ministro que suscribe entrar en una refutación detenida y amplia de ese impremeditado documento: esto sería extraño a su circunspección y a la medida que deben revestir todos los actos gubernamentales. Bástale dejar consignado que lejos de aceptar la doctrina desenvuelta por el Fiscal del Tribunal Supremo, la considera contraria a la que el Gobierno de V. M. ha proclamado, a la que sancionó con solemnes acuerdos el Parlamento y a la que consagran la ley fundamental del Estado y el Código Penal en la determinación y prudente limitación de un derecho respetabilísimo.

Por estas consideraciones y otras que omite y alcanza la ilustrada penetración de V. M. el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el siguiente Decreto:

Madrid a 9 de Diciembre de 1871

El Ministro de Gracia y Justicia Eduardo Alonso y Colmenares

Decreto:

En vista de las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, teniendo en consideración lo prevenido en los artículos setecientos sesenta y tres, ochocientos veinte y ochocientos cuarenta y uno de la ley Provisional sobre organización del Poder judicial⁶⁰², y de acuerdo con el Consejo de Ministros: vengo de declarar cesante con el haber que por clasificación le corresponda a D. Eugenio Díez, Fiscal del Tribunal Supremo. Dado en Palacio a 9 Diciembre de mil ochocientos setenta y uno.

El Ministro de Gracia y Justicia
Eduardo Alonso y Colmenares

AHN, Fondos Contemporáneos, L. 4388, N. 2253

602

- Art. 763. El Ministerio Fiscal velará por la Observancia de esta ley y de las demás que se refieran a la organización de los Juzgados y Tribunales; promoverá la acción de la justicia en cuanto concierne al interés público, y tendrá la representación del Gobierno en sus relaciones con el poder judicial.
- Art. 820. El Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de las Audiencias podrán ser separados libremente por el Gobierno.
Cuando la separación fuese sin causa fundada en actos u ocasiones en el ejercicio de su cargo, serán atendidos para darles colocación en la Magistratura.
- Art. 841. El Fiscal del Tribunal Supremo será el Jefe del Ministerio fiscal de toda la Monarquía, bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia.
(...)

EUGENIO DÍEZ DE PEDRERO

El Fiscal del Supremo remite a este Ministerio copia de una circular que el mismo transcribió acerca del Derecho de asociación y de las huelgas, en la cual manifiesta que los funcionarios del Ministerio fiscal tienen la obligación de promover la formación de causas criminales, por delitos o faltas, cuando tengan conocimiento de su perpetración:

Que todo español tiene derecho de asociarse para los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; conviene mucho tener presentes estos dos preceptos.

Las constituciones y leyes establecen o declaran los Derechos: los Tribunales de Justicia por sus sentencias mantienen a los ciudadanos en el uso de estos derechos o dicen que no puedan ejercitarlos.

Si se constituye una asociación contraria a la moral pública, los asociados no podrán continuar siéndolo; pero lo han de decidir antes los Tribunales en definitiva sobre causa formada de oficio o a instancia de un funcionario del Ministerio fiscal.

Establecen las escuelas políticas con variedad notable diferencia entre la sociedad y el Estado, negando o dando a éste las facultades que conceden o niegan a aquella.

El Ministerio fiscal que es cauce de autoridad en estas cuestiones, tiene competencia para formar un criterio y lo formará en pocas palabras.

El hombre no puede vivir sin estar asociado (...).

El Estado es la Junta Directiva de la Sociedad. Tal es para este Ministerio la diferencia entre la sociedad y el Estado que el hombre tiene derechos (...) que no da a la sociedad (...).

Si hay una asociación establecida, o en propósito de fines contrarios a la moral, los funcionarios del Ministerio fiscal tienen la obligación de promover la formación de causa (...).

Si los funcionarios del Ministerio fiscal podemos mezclarnos en esta cuestión y decirnos que conocemos el fenómeno de la existencia de la moral pública (...).

Los representantes de la acción pública cerca de los Tribunales deben pedir, desapasionadamente, la formación de causa por hechos u omisiones (...) y pedir las penas de la ley contra sus autores (...).

Nota. La circular que el Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia se ha permitido publicar, encierra en concepto del Negocio excesos de disciplina y sobre todo este inconveniente en su forma y en su fondo; pudiera decirse mejor que era un escrito esencialmente político, que la opinión fría, medida y conveniente del primer representante de la Nación de la vida pública. El Negociado no puede ni debe entrar a rebatir las doctrinas resbaladizas que se dejan sentadas en la mencionada circular; se limita únicamente a hacer palpable que el Ministerio fiscal compone una entidad, con diversas jerarquías según su clase y categoría, y unos y otros bajo las inmediatas

órdenes de su superior jerárquico y el Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, Jefe nato de todo el Ministerio fiscal, está bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia como así se consigna en el artículo 84 de la ley provisional sobre organización del poder judicial.

Ahora bien, sentado este principio, el Fiscal del Supremo, no siempre debe permitirse la publicación de comunicaciones que lleven envueltas cuestiones sociales y políticas impropias de su alta misión, tanto mas cuanto que han de imprimir carácter en todos los representantes de la ley, sin que antes aconsejado por la prudencia, consulte dilucide y aclare con su Jefe inmediato Superior, el proyecto o idea que quiera circular.

Si el alto funcionario que ocupa el Negociado quiso manifestar, cómo en qué forma y hasta donde había de entender el Ministerio público, el Derecho de reunión y asociación, justo es que lo realizara, pero dentro de la esfera en que debió estar concebido, no dando a entender a los jornaleros cuales deben ser sus derechos, torcidamente interpretados y nunca sin la previa consulta de su inmediato Jefe como ya se deja repetido.

Por último el mencionado fiscal del Tribunal Supremo ha faltado de un modo gravísimo, ha causado males de difícil remedio por las ideas contenidas en la repetida circular, y por alta y digna de respecto que sea su persona, por elevado que sea su cargo, V. E. no puede menos de tomar una resolución adecuada al exceso que el oficial que suscribe no se atreve a proponer, dejándolo al recto criterio y claro talento de V. E. pero desde luego se permite creer que será la más acertada en justicia.

Madrid a 8 de Diciembre de 1871

Nota: Terminado este expediente, procede una al del interesado D. Eugenio Díez de Pedrero.

Madrid a 10 Diciembre 1871

El fiscal interino del Supremo en comunicación de 11 del actual, traslada la circular que en la misma fecha dirige al Ministerio fiscal, suspendiendo los efectos de D. Eugenio Díez (...).

El Consejo de Ministros con fecha 9 diciembre en su despacho y de conformidad con las notas y acordando que hay caso fundado se proponga a S. M. la cesantía de D. Eugenio Díez, Fiscal del Tribunal Supremo.

Con esta fecha digo a los Fiscales de las Audiencias lo siguiente.

Por Real decreto de 9 del actual ha sido declarado cesante el Excmo. Sr. D. Eugenio Díez, Fiscal del Tribunal Supremo. La exposición de motivos que precede a dicha superior resolución y que V. S. habrá ya leído en la Gaceta de Madrid correspondiente al 10 del que rige desautoriza pública y solemnemente la circular expedida por esta Fiscalía con fecha 23 de Noviembre.

Encargado yo en virtud de la ley del despacho de la misma, he creído oportuno suspender los efectos del mencionado documento hasta tanto que el llamado por S. M. a desempeñar su propiedad la Jefatura Suprema del Ministerio fiscal resuelva lo que sobre el particular estime más conveniente y acertado. Al adoptar esta medida de la que con esta fecha doy cuenta al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, considero que el servicio no sufrirá detrimento alguno y que Vd. continuará como hasta aquí velando cuidadosamente por la exacta y recta aplicación de las leyes en el distrito de esa Audiencia.

Lo que tengo el honor de transcribir a V. E. para su conocimiento y efectos que considere oportunos.

ANTERO DE ECHARRI Y CIGA

Excmo. e Ilmo. Sr.:

Hace más de cuatro años que tengo el honor de pertenecer al Tribunal Supremo de Justicia, y en todo ese tiempo he servido en la Sala primera, a pesar de que fui nombrado para ocupar una vacante ocurrida en otra. Los negocios asignados por la ley a aquella Sala son todos graves e importantes en su resultado, y su número muy superior sin comparación posible a los de las otras. Aquella circunstancia reclama los conocimientos y la cooperación de los Ministros más competentes e ilustrados del Tribunal y todos lo son más que el que suscribe. La segunda, esto es, la multitud de los negocios reunidos en la Sala primera exige tal asiduidad en el despacho y lleva consigo tan gran responsabilidad que también es de justicia se comparta entre todos los Ministros. Fundado en estas consideraciones que no se ocultan al ilustrado juicio de V. E. le ruego se sirva proceder a S. M. mi traslación a una de las otras dos Salas, pasando a la primera el Ministro de ella que sea del Real agrado.

Dios guarde a V. E. Madrid 4 de Septiembre de 1861.

Antero de Echarri.

Excmo. e Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Certifica. José María Manresa y Navarro. Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo

JORGE GISBERT

Albacete 20 de Noviembre de 1840

D. Jorge Gisbert Fiscal de aquella Audiencia separado de su destino por las Juntas de Murcia y Albacete acompaña una exposición impresa y con documento justificativos en la cual después de enumerar sus servicios y de que sólo ha sido empleado por el partido progresista, hace ver que los mismos individuos de la Junta de Murcia que decretaron su separación hicieron en otra época los mayores elogios de su patriotismo y circunstancias; y que la causa de aquella no ha sido otra que la traslación del Tribunal a Albacete, el cual se negó a permanecer en Cartagena, siendo el suplicante el que más cooperó a ello ya como Gobernador civil a la escisión de la Audiencia ya como individuo de ella al presente por lo cual

Solicita su reposición o colocación en otra Audiencia inmediata pues el estado de su fortuna no le permitirá trasladar a su familia a un punto distante.

JOSÉ MARÍA HERREROS DE TEJADA

Señora

D. José María Herreros de Tejada, Magistrado cesante de la Audiencia Territorial de Madrid, con el respeto debido tiene el honor de exponer a la muy alta consideración de V. M.:

Que en 4 de Septiembre último se le comunicó, al propio tiempo que a la mayor parte de los individuos que formaban aquel Tribunal, la Real resolución de su cesantía, decretada en 1º de dicho mes. Los méritos contraídos por el que expone en su dilatada y honrosa carrera, que deben resultar documentalmente justificados en su expediente, el no haberla improvisado a impulsos de un injusto y escandaloso favoritismo; el no haber obtenido gracia, ni ascenso alguno para el cual no tuviese con mucho exceso o sea con doble tiempo de servicio o más ... las condiciones requeridas por ... las leyes y decretos vigentes y aun por las de otras épocas en este punto más estrictas; el no ser ni haber sido jamás hombre político, sino puramente Magistrado poseído del más ardiente celo y deseos de llenar cumplidamente sus rígidos deberes; sus opiniones, sus actos, sus antecedentes todos, demasiado notorios, así como los perjuicios que recibió su casa por el muy pronunciado liberalismo de su desgraciado Padre en la anterior época Constitucional; el no tener el que expone tacha ni mancha alguna; y sobre todo la seguridad y tranquilidad de su conciencia dejándole satisfecho de no haber dado ni el más leve motivo para su inesperada separación, justamente con los precitados atendibles y muy honoríficos merecimientos le persuaden que no debe ser errado su juicio al creer que para declararle cesante no ha podido mediar otro fundamento que la necesidad de hacer lugar para que fuesen repuestos los Magistrados que perdieron sus plazas en 1843.
(...)

Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia

CLAUDIO ANTON DE LUZURIAGA

Excmo. Señor

El Gobierno de S. M. ha pedido autorización a las Cortes Constituyentes para nombrarme Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Respeto la resolución del Gobierno. Sonrojado con la exposición de que la ha hecho preceder, no me es permitido siquiera oponerle el testimonio hartamente menos favorable de mi conciencia, porque en cuestiones tan íntimamente personales la confesión más sincera se confunde con los alardes de una fingida modestia: Dios sabe la verdad, y nada más digno sobre eso. Pero V. E. mas que indulgente conmigo, debe apreciar, así se lo ruego, mi situación oficial por decirlo así y decidir sin prevención; culpa mía es no haberla hecho conocer bastante bien antes de que hubiera llegado a efecto aquella resolución; pero siempre es tiempo de hacer justicia. El 16 de Diciembre de 1843 fui jubilado a instancia mía en la clase de Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, cuya situación ha sido confirmada por la Junta de Clases pasivas en 16 de Junio de este año. Desde aquella fecha ha desempeñado la Comisión de Códigos y el cargo de vocal del Consejo de Sanidad; he sido invitado por el Gobierno hasta en tres ocasiones antes de 1853 con plaza en el mismo Tribunal; y desde la resolución de Julio he sido sucesivamente nombrado Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, Ministro de Estado, y vocal de la Junta de Ultramar. Por decirlo de paso, esta serie de favores dispensados indistintamente por unos y otros Gobiernos sin contar un nombramiento de Senador, hará conocer a V. E. que si la virtud es la fuerza del ánimo, habría bastante que rebajar de la que V. E. me atribuye, puesto que a nadie falta esfuerzo para dejarse mimar. Pero volvamos a la cuestión. Constantemente he rehusado todos los empleos de carácter activo y debo declarar que ninguna consideración política me obligó a rechazar los que me ofrecieron desde 1843 a 1853, porque el Juez no debe servir al Gobierno sino a la justicia, nada tiene que ver por lo tocante a su Ministerio en la política. Por el contrario he aceptado sin excepción las comisiones que se me han conferido antes como después de la revolución, incluyendo entre ellas el Ministerio de Estado por su índole transitoria.

El principio que me ha guiado en esta conducta lo hallará V. E. indicado en las tres comunicaciones de que acompaño copia, pudiendo asegurar que idénticos fueron los motivos que expuse para rehusar los ofrecimientos de empleos anteriores a 1853, pero no recibieron una forma oficial por haber sido estos confidenciales.

Particularmente ruego a V. E. se sirva hacerse cargo de mi comunicación nº 2, y se convencerá que existen tres impedimentos para mi regreso al servicio activo, impedimentos más caracterizados cuando se trata de la primera dignidad de la Magistratura.

V. E. observará que no invoco un Derecho, creo que tengo el de renunciar; pero el Gobierno con su excesiva benevolencia me ha quitado la libertad para invocar derecho alguno, o estoy o no impedido, esa es la única cuestión; sino lo estoy yo mismo me acusaría de egoísmo ante el país, de ingratitud ante el Gobierno si intentara guarecerme con mi derecho. Pero antes de resolver la cuestión de impedimento, sírvase V. E. considerar que si después de la lepra, de las cesantías inmotivadas se abre la puerta a la superchería de jubilaciones revocables según el interés del jubilado y el favor del Gobierno, el descrédito de los servidores públicos será todavía mayor que el daño del

Tesoro. Y aún así quedará a la justificación de V. E. otra cuestión que decidir a saber, la de incapacidad de hecho que es la segunda que tengo expuesta en dicha comunicación; si me es permitido hacer el sacrificio de mi salud como lo hago de mi Derecho, a V. E. dejo decidir si es aceptable.

Concluyo sin pedir nada. El Gobierno puede retirar o suspender el curso de la autorización, si su juicio es conforme al de mi conciencia. Si me equivoco, y las Cortes piensan como el Gobierno, quisiera merecer a V. E. una audiencia antes de que se tome una resolución definitiva. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1855.

Excmo. Sr.
Claudio Antón Luzuriaga

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

RAMÓN MACÍA LLEOPART

Con el acatamiento debido a las Reales resoluciones, y con la muy especial veneración y respeto con que yo las miro recibí ayer el Real Decreto de S. M. la Reina de 29 de Diciembre último que V. E. me ha comunicado en su oficio del día siguiente 30 por el cual ha venido S. M. en jubilarme con los honores y sueldo que por clasificación me corresponda como Ministro del Tribunal Supremo de Justicia. Mas al propio tiempo no me es posible prescindir de cumplir con los sentimientos puros y honrados de mi delicadeza a los cuales faltaría si mostrándome indiferente a mi separación diese ocasión a que ni remotamente pudiera creerse con fundamento o bien que he faltado en alguna cosa a mis deberes; o que me retraía de continuar mis servicios en los primeros días del deseado Reinado de vuestra excelsa Reina Constitucional Doña Isabel Segunda a cuya declaración de mayoría contribuí gustosísimo con mi voto como Senador en las Cortes y por la cual ha dado después constantes pruebas de mi satisfacción, o por fin sino tratase de desvanecer cualquiera mala impresión que en el candoroso y Real ánimo de S. M. pudiese haberse producido por equivocación o siniestramente; y acaso también por sorpresa en el justificado ánimo de V. E. Debo pues rendir un nuevo testimonio de mi obediencia y respeto a S. M. la Reina haciéndole presente por conducto de V. E. que por el dilatado tiempo de cerca de 39 años desde Mayo de 1805 he estado sirviendo en la Magistratura gradualmente por la escala de todos sus ascensos hasta el que actualmente obtenía desde Septiembre de 1835 en el Supremo Tribunal de Justicia y de su Ministro Decano desde últimos del mes de Julio del año próximo pasado, y que en la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia del digno cargo de V. E. deben constar mi rectitud, buen comportamiento y lealtad con que siempre me he conducido, y en la misma y en las de otros Ministerios mis patrióticos servicios y desempeño de comisiones muy importantes habiendo merecido por ellos la honrosa consideración de ser elegido Diputado y propuesto y nombrado por la Corona, Senador desde Abril de 1838 primero por la provincia de Barcelona y en la actualidad por la de Lérida.

Ruego a V. E. que sirviéndose elevarlo a la Real Consideración de S. M. le haga al mismo tiempo presentes mis deseos de continuar prestando mis servicios en beneficio de S. M. y de la Patria con el mismo celo, lealtad y adhesión a su Augusta Persona con que he procurado hacerlo toda mi vida.

Dios guarde a V. E. Md. S. Madrid a 2 de Enero de 1844.

Excmo. Señor
Ramón Macía Lleopart

PASCUAL MADOZ E IBÁÑEZ

Señora:

El Cónsul de España en Bayona con fecha de 17 del actual dice al Sr. Ministro de Estado lo que sigue:

Excmo. Sr.: Tengo el honor de informar a V. E. que en el día de ayer llegó a esta ciudad D. Pascual Madoz diputado que ha sido en varias legislaturas habiendo verificado su viaje según me han asegurado con pasaporte de la Embajada francesa en esa Corte y en clase de correo. Este extremo queda confirmado con haber continuado hoy a Perpiñán sin haberse presentado en este Consulado para obtener la autorización competente. Le acompaña un francés llamado Delbourg, que también ha venido de esa capital donde parece suele residir.

De la ida de estos individuos a la otra extrema frontera doy conocimiento a mi colega en Perpiñán. Sumas considerables de dinero han sido remesadas a esta ciudad y a disposición de los que apoyan los pronunciamientos.

Y de orden de S. A. el Regente del Reino comunica a por el Sr. Ministro de Estado lo traslado a V. E. para los efectos convenientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Palacio, 22 de Junio de 1843

El Subsecretario
H. de Hoyo

Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

JOSÉ MARÍA MANESCAU

Serenísimo Señor

D. José María Manescau, Magistrado que ha sido del Supremo Tribunal de Justicia, a V. A. respetuosamente expone: que por decreto de la Junta Provisional de Gobierno, que me fue comunicado en 10 de Septiembre de 1840, quedé suspenso provisionalmente del destino de Ministro de dicho Tribunal que servía con Real nombramiento. Resignado con aquella disposición que debía suponerse transitoria, así por el modo y forma en que se hizo, como por su carácter provisional, esperaba confiado en el irrecusable testimonio de mi conducta pública y de mis antecedentes, bien conocidos, que se me restituyese al destino de que se me lanzó, o se me declarara la jubilación a que por tantos títulos me considero merecedor con arreglo a las leyes vigentes sobre la materia y las que auparan mi opción y derecho a ella, fijándose de este modo la clase y categoría a que debe quedar reducido un antiguo Magistrado que ha servido a la Nación en el dilatado tiempo de cuarenta años, después de su primer destino Real, consignando siempre notorios recuerdos de su probidad, de su asiduidad, y de su celo, en los diferentes Tribunales en que ha servido, y en las muchas, arriesgadas y difíciles comisiones que ha desempeñado a satisfacción del Gobierno y de las Autoridades Superiores que se las han confiado. Esta deducción era tanto más legítima, cuanto que no podrá persuadirse, sin ofender el criterio de el entonces Ministro de Gracia y Justicia y el de la Regencia del Reyno, que dándose por ejecutoriada su provisional suspensión, no volviese a tratarse de ella o para confirmarla o para revocarla, y en fin para declarar la posición que en lo sucesivo se me designaba; pero cuando vi que mi plaza fue provista por la Regencia, convirtiéndose en una separación de hecho la medida adoptada por la Junta, y que aun después nada se resolvía ni declaraba acerca de mi futura suerte, creo sea de mi deber romper el silencio, que continuando, se interpretaría como una renuncia de los derechos, que las leyes me otorgan por recompensa a mi dilatada y sin mancha carrera. Principada ésta después de concluidos mis estudios en el Real Colegio de San Bartolomé y Santiago de la ciudad de Granada, y recibidos los correspondientes grados, fui nombrado en 28 de Agosto de 1802, Alcalde del Crimen (...) luego que V. A. se digne concederme la jubilación que solicito.

El cansancio y postración de fuerzas que son consiguientes a tantos años de mi ímprobo trabajo, harán conocer a V. A. que lejos de aspirar a la continuación de la vida activa que he tenido hasta aquí, y a la que renunciaría si fuese de nuevo llamado a ella, únicamente deseo concluir mi carrera con la honrosa jubilación que previene la Real Orden de 3 de Abril de 1828, mandada observar por la Ley de Cortes de 26 de Mayo de 1835, cuyas prevenciones entiendo que me corresponden en su totalidad: por lo tanto suplico: a V. A. que tomando en consideración lo expuesto, se sirva referir en justicia a mi solicitud, concediéndome la jubilación a la que me considero acreedor, entendiéndose esta desde el día en que fui suspenso por la Junta Provisional de esta Corte, pasándose Orden al Director del Tesoro para que se me abonen los sueldos devengados, según los permite el estado de la Nación, hasta igualarme con los que se hallan en el mismo caso, en consideración a que por el estado de mi salud y ausencias que he tenido que hacer de esta capital para restablecerla, no me ha sido posible hasta el día reunir los documentos necesarios para esta solicitud; así lo expresa de la notoria justificación de V. A. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid a 2 de Octubre de 1842

Serenísimo Señor
José María Manescau

ANTONIO DE MENA Y ZORRILLA

Excmo. Sr.

El cargo que tengo la honra de desempeñar requiere tanta intimidad de relaciones con el Gobierno que no puede continuar ocupándolo quien, como yo, ha tenido frecuentes ocasiones de combatir, en el Parlamento la política que el nuevo Ministerio representa y quien en la lealtad de su convicciones, probablemente habrá de combatir cualquiera que sea la modesta posición que ocupa.

Pero si consideraciones tan poderosas, me deciden a rogar a V. E., que cuanto antes, se sirva autorizarme para volver a la vida privada, no he de hacerlo sin consignar al propio tiempo, nuevo y sincero testimonio de la consideración y elevado aprecio que personalmente profesó a V. E. de cuyos talentos tanto expresa la Administración de Justicia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 9 de Febrero de 1881

E. S.
Antonio de Mena y Zorrilla

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

JOSÉ MARÍA MIER Y SALCEDO

Reservado

Excmo. Sr.

Ha causado el mayor escándalo la reposición del Oidor Mier en un destino de que había sido separado con tanta justicia como otros Jueces de este Tribunal; el público sabe que indudablemente fue uno de los que sentenciaron a el Realista benemérito y desgraciado Procurador de Xerez, cuya pena impuso también a otros varios acusados en aquella época de adictos al Rey N. S. y cuyas causas se han ocultado con el mayor cuidado; Mier fue nombrado para intervenir y recoger los papeles del Santo Tribunal, comisión que también desempeñó en tiempo de los franceses de cuyo Gobierno fue un decidido partidario; apenas se estableció en el año de 20 el bárbaro sistema constitucional se apresuró a solicitar honores y consignó los del Supremo Consejo de la Guerra cuyo uniforme cesó con escándalo de los buenos; en fin Sr. Excmo. Mier es un verdadero hipócrita que en todos los tiempos y circunstancias ha intrigado para tener ascensos; y de cuya clase de personas no debe confiar S. M. V. E. en conciencia y justicia debe instruir al Rey N. S. para que su Real ánimo no sea sorprendido y para que no reciba premios ni distinciones un hombre de tan detestables cualidades.

Dios guarde la importante vida de V. E. muchos años: Sevilla 4 de Junio de 1823.

Excmo. Sr.

P. G. C.⁶⁰³

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

AHN, Fondos Contemporáneos, l. 4579, n. 4972

⁶⁰³ Este informe es clasificado como reservado y forma parte del expediente personal del citado Magistrado.

TEODORO MORENO Y MAYSONABE

Excmo. Sr.

Enterado del decreto del Poder Ejecutivo de nueve del corriente por el cual se dispone que en el día de mañana presten juramento a la nueva Constitución política de la Monarquía los Ministros del Tribunal Supremo de Justicia, me veo en el sensible caso de hacer presente a V. E. que mi conciencia no me permite prestar el juramento referido; y como esta formalidad sea indispensable para el ejercicio del cargo de Ministro de dicho Supremo Tribunal que desempeño, ruego a V. E. se sirva admitirme la dimisión del mismo, y declararme cesante con los derechos que en tal concepto me correspondan.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid a 12 de Junio de 1869.

Excmo. Sr.
Teodoro Moreno

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

MANUEL ORTÍZ DE ZÚÑIGA

Excmo. Sr.:

El Ministro de Sala 1ª de este Supremo Tribunal D. Manuel Ortiz de Zúñiga, me dirigió con fecha 5 del corriente la solicitud que copio:

“Excmo. Sr.: Cerca de cinco años hace que fui nombrado Ministro de este Supremo Tribunal y de su Sala 1ª, precisamente en la época en que comenzaron a ingresar en ella los recursos de casación, que tanto se han multiplicado después y que ocasionan el ímprobo y asiduo trabajo que a V. M. consta, como al Gobierno de S. M. Si he podido hasta ahora desempeñar este grave y difícil cargo, por espacio de tanto tiempo, supliendo con mi celo la escasez de mis fuerzas, me será imposible continuar tan penosa tarea en una Sala donde es preciso trabajar con una actividad y perseverancia, y a veces hasta con una precipitación, superiores a mi posibilidad física e intelectual. Por esta consideración ruego encarecidamente a V. E. se sirva proponer al Gobierno de S. M. mi traslación a la Sala de Indias, donde la vista y resolución de los asuntos permite menos premura y afán en el trabajo, pudiendo cualquiera de sus dignos individuos pasar a ocupar mi plaza en la 1ª, con notoria ventaja del servicio de la misma”.

En vista de ello, no habiéndose prestado el mismo (...) esta solicitud, y antes bien insistido oralmente con repetición; no pudiendo por otra parte desconocer el motivo que alega, fundado en él, tengáis el honor de proponer a V. E., para que aconseje a S. M. lo que estime más conveniente, la traslación a Sala de Indias del expresado Ministro D. Manuel Ortiz de Zúñiga, y a la vacante que resultará en Sala 1ª, al Ministro de la de Indias D. Gabriel Ceruelo de Velasco.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28 de Septiembre de 1861.

El Presidente
Lorenzo Arrazola

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

MANUEL ORTÍZ DE ZÚÑIGA

D. Manuel Ortiz de Zúñiga, Presidente de Sala del Tribunal Supremo pide al Ministro que le autorice para contestar por medio de la prensa, unos artículos que ha publicado El Imparcial, y que cree son injuriosos para la Sala que preside.

Excmo. Sr. D. Álvaro Gil Sanz

Real Sitio del Escorial, 21 de Agosto de 1872

Muy Sr. mío de toda mi consideración: me atrevo a llamar la atención de V. sobre la adjunta comunicación oficial que me veo obligado a hacerle, con motivo de unos artículos calumniosos para la Sala 2ª de mi presidencia del Tribunal Supremo que he visto en El Imparcial del 17 y 20 del corriente. Y como los Tribunales, tienen la desventaja de no poder vindicarse ante el público, de las ofensas que se les dirigen por la prensa, no encuentro otro medio de protestar contra el agravio inferido en dichos escritos, que el de pasar a V. la indicada comunicación.

Con este motivo tengo el honor de reiterar a V. el testimonio de mi respeto y consideración como su affmo. servidor (...).

Manuel Ortiz de Zúñiga

Excmo. Sr.

Hallándome en este R. sitio pasando las vacaciones de verano, he tenido el sentimiento de ver en el periódico El Imparcial correspondiente al 17 del actual, y después en otro del 20, dos artículos suscritos por un D. Manuel Fernández Martín, en que éste se permite dirigir severísimos cargos contra la Sala 2ª del Tribunal Supremo, dando a entender que por influencias bastardas se altera en ella el orden establecido en los artículos 18 y 25 de la ley de casación criminal de 18 de junio de 1870, para la vista y decisión de los recursos de esta clase.

Y como yo tengo el distinguido honor de presidir aquella Sala que tan alto respeto merece, no puedo dejar pasar en silencio por el único medio y que es permitido, porque la ley no prohíbe acudir para ello a la imprenta, la contestación digna a una censura tan irreverente como infundada.

El Presidente de la Sala 2ª puede asegurar a V. E. en nombre de ella, como esta misma lo haría si se hallase reunida en el Tribunal, que no ha habido ni un solo caso de postergación ni de antelación indebida en la vista y fallo de dichos recursos en la mencionada Sala; y que si bien puede ser exacto el estado que como justificativo se inserta en el primero de dichos artículos del Imparcial, ya sea con una malicia que no debe suponer, o bien por una ignorancia culpable, el Sr. Fernández Martín ha calumniado a aquel responsable Tribunal con las consecuencias infundadas que deduce de sus inexactas afirmaciones.

El artículo 25 de la citada ley previene en efecto que los recursos de casación se vean por el orden de numeración que establece el 18 de la misma; pero este precepto es de

imposible ejecución, si no se ha de cometer la más vituperable injusticia; porque los mil accidentes que ocurren en la sustanciación, un recurso puede estar terminado tal vez a los dos meses de su ingreso en el Tribunal, y otros, por causas inevitables, por dificultad de la defensa, o por incidente que las partes promueven, no se pueden concluir en tres, cuatro o seis meses. Así no es de extrañar, que expedientes señalados con los números 492, 386 y 105, que aritméticamente son inferiores, como dice el articulista al 574, al 576, al 669 y al 681 no puede no verse ni terminarse con la preferencia que su numeración requiere.

Por eso, y conociendo el Gobierno la imposibilidad de ejecución que envolvía el artículo citado de la ley de casación criminal, hizo insertar el artículo 652 en la Organización del poder judicial, muy posterior a aquella, pues de 15 de septiembre de 1870, que dispone, que todos los negocios judiciales han de verse, no por el orden de su numeración, sino por el de su conclusión; precepto acertadísimo, que ha evitado graves conflictos, y al cual se ha atendido estrictamente la Sala 2ª, sin que pueda citarse, yo lo aseguro a V. E., ni un solo caso de infracción.

Estas sencillas observaciones creo que bastan para que V. E. conozca la injusticia del cargo que se ha hecho a una Sala del primer tribunal del reino, con una ligereza indisciplinable, por no decir con un vituperable desacato y por tanto debo rogar a V. E. se sirva o bien autorizarme para que por medio de la prensa vindique el honor de los respetables magistrados a quienes se calumnia o adopte las providencias que juzgue convenientes, para que ante el público que ha visto el agravio, se vindique tan grave ofensa.

Dios guarde a V. E. un Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. 21 de Agosto de 1872.

Manuel Ortiz de Zúñiga

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

JOSÉ RODRÍGUEZ BUSTO

Señora

D. José Rodríguez Busto, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia a S. R. P. de V. M. con el más profundo respeto expone y representa: que lleva cincuenta y cuatro años en la carrera judicial, política y administrativa, principiando en el mil ochocientos dos con el ejercicio y estudio abierto de la noble profesión de la Abogacía, y desempeñando seguidamente varios destinos públicos del Estado con los competentes nombramientos que prevenían las leyes, Ordenanzas y Reales Decretos según los varios a que correspondían dichos nombramientos. Así es Señora que el exponente cuenta, entre otros, treinta y seis años que tiene el honor de vestir la Toga española en las Audiencias de Oviedo, Valladolid y Madrid ya como Magistrado, ya como Fiscal, y ya como Regente de ésta última, y ya finalmente como Ministro del Tribunal Supremo de Justicia desde mil ochocientos cuarenta y dos, además de haber ejercido el empleo de primer Subdelegado de Fomento y Gobernador civil de la Provincia de Orense desde su casación hasta fines de mil ochocientos treinta y cuatro en que a su instancia se le restituyó a la plaza de Magistrado en la Audiencia de Oviedo, que había desempeñado desde el año de mil ochocientos veintiuno, procurando desempeñar estos altos empleos, lo mismo que los anteriores aunque de menos gravedad e importancia, con la lealtad, celo, probidad y eficacia propia de sus principios, y conocido carácter, como consta al Gobierno de V. M. en los diversos ramos de la Administración que se han tenido a bien confiarle.

Esta larga carrera de tantos años, los méritos y servicios contraídos en ella en las más difíciles y delicadas circunstancias con inminente peligro de su vida en varias ocasiones, y pérdida de sus intereses desde la memorable y gloriosa Guerra de la Independencia en mil ochocientos ocho hasta el de catorce por libertar a vuestro augusto Padre y a toda la Real familia del ignominioso cautiverio en que con tanta infamia le había colocado el Emperador Napoleón, y por salvar, con la libertad e independencia de la Nación, el Trono y los legítimos derechos a V. M. tan injustamente combatidos por los que pretendían, y aun pretenden usurparla, y por último procediendo de otros muchos hechos que omite por no molestar tanto a V. M., han llamado la atención de las Cortes para que sirviese declarar como en efecto (...) por tres veces al exponente haber merecido bien de la patria; y que se le considere la condecoración de Valor Cívico en primera clase por sus enormes padecimientos, según así se expresa en el Diploma que se le ha librado, y en algunos de los títulos de sus nombramientos.

Hallándose constituido en la avanzada edad de setenta y ocho años, y de consiguiente como es natural debilitadas sus fuerzas, y bastante quebrantada su salud, se ve el suplicante en la absoluta y rigurosa necesidad de acudir al benéfico y bondadoso corazón de V. M., a fin de que se digne otorgarle la Real Gracia de jubilarle de la plaza de Ministro del Tribunal Supremo de Justicia con las declaraciones que sean de su Real agrado.

Así lo espera confiadamente de la notoria bondad, y benevolencia de V. M.

Dios guarde la católica Real Persona de V. M. muchos años. Madrid, 3 Febrero de 1856.

Señora

A. S. R. P. de V. M.

B.

José Rodríguez Busto

JOAQUÍN RONCALI Y CERUTY

Excmo. Sr.

Dispuesto a votar como Senador del Reino, según me dictan mi conciencia y mis principios, en pro de la enmienda presentada al párrafo 3º del proyecto de contestación al discurso de la Corona, que ocupa en estos momentos la atención de la Cámara alta, no puedo menos, guiado por un sentimiento de delicadeza, de manifestarlo así a V. E. haciendo dimisión, con tal motivo, del cargo de Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, que debo a la inagotable bondad de S. M.; no obstante que la índole y naturaleza de las funciones de la Magistratura sean de todo punto conciliables con la completa libertad de acción en los Cuerpos Colegisladores.

Ruego, pues a V. E. se sirva inclinar el ánimo de la Reina N. S. a fin de que tenga a bien admitir la expresada dimisión que ofrezco, reverente, a sus Reales Pies, por conducto de V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid 5 de Febrero de 1866

Joaquín de Roncali

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

LUIS RODRÍGUEZ CALAMEÑO

Excmo. Sr.

Hallándome en esta Corte en el año pasado de 1840 en concepto de cesante como primer Jefe de Sección, que había sido de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación, fui agraciado en el mes de Diciembre con la plaza de Regente de la Audiencia de Oviedo.

Acepté, porque creí que comprometido el Gobierno de un modo expícito, y solemne al exacto cumplimiento de la Constitución del Estado en cuanto se refiere a las garantías otorgadas para el libre, legal, e independiente ejercicio de las funciones judiciales sería en adelante una verdad práctica la inamovilidad de los jueces, preciosa garantía más útil a los justiciables, que a los mismos juzgados; mas por desgracia ha visto que la inamovilidad es ya una letra muerta; y estando dormida mi conciencia por la irresistible convicción de que es sino imposible al menos muy difícil administrar justicia en un país, en donde tantas, y tan variables influencias ponen en desagradable compromiso la suerte de los jueces siempre expuestos a los odios de aquellos, contra quienes tienen que administrar justicia, sin consultar otro oráculo que el de la ley, me veo en la precisión de hacer presente a V. E. para que si lo tiene a bien se sirva elevarlo a la alta consideración de S. M. que me es muy sensible separarme del cargo, que he desempeñado por espacio de tres años en una Provincia, a la que me ligan los sentimientos de la más viva gratitud, no me es posible continuar en el mientras no sea la inamovilidad una verdad positiva; y así suplico a V. E. se sirva inclinar el Real ánimo de S. M. a fin de que se sirva declararme en la clase de cesante, a la que me veo en la necesidad de reducirme por una de aquellas inspiraciones de la conciencia, a que no me es dado resistir.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 15 de Marzo de 1844

Excmo. Señor
Luis Rodríguez Calameño

Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia

LUIS RODRÍGUEZ CALAMEÑO

Excmo. Sr.

Desde mi ingreso en el Tribunal Supremo he visto figurar constantemente en los alardes mensuales todas las causas iniciales contra Gobernadores de Provincia por hechos clasificados como delitos en el Colegio penal, sin que haya sido posible a las salas de justicia darles curso, por no haberse dignado el Gobierno contestar a las diferentes reclamaciones elevadas del mismo.

Este cuadro notabilísimo que envuelve una positiva denegación de justicia, me ha parecido tanto mas imponente desde que habiendo examinado las listas semestrales de las audiencias, he advertido en ellas en igual situación centenares de causas iniciadas contra agentes subalternos; y así dominado por el doble impulso de mi razón y mi conciencia propuse de palabra y por escrito las medidas, que creía debían adoptarse para el oportuno remedio de un mal de tan grave trascendencia. Mi voz no ha sido escuchada y habiendo perdido la esperanza de que lo sea, mientras dominan las pasiones, que agitan la sociedad, considerando así deprimido el poder judicial a quien no es dado satisfacer del modo que corresponde la mas santa de las aspiraciones, que consiste en la protección de la seguridad individual, primer elemento de orden, cediendo a una convicción irresistible, resultado del reflexivo aprecio de las necesidades del hombre en sociedad, me veo en la sensible precisión de rogar a V. E. se sirva inclinar el Real ánimo de S. M. a fin de que tenga a bien aceptar la renuncia del cargo de Ministro del Tribunal Supremo, otorgándome jubilación con los honores, de que disfruto y el sueldo, que por clasificación me corresponde.

Dios guarde a V. E. M. Madrid, 30 de Octubre de 1856.

Excmo. Sr.

Luis Rodríguez Calameño

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

MANUEL SEIJAS LOZANO

Excmo. Sr. D Santiago Fernández Negrete

Mi respetado Jefe y Sr. mío: acabo de leer en el extracto de la Sesión del Senado los nombramientos de los nuevos Senadores: remito a Vd. en su consecuencia mi renuncia de la plaza de Fiscal del Tribunal Supremo. Deseaba habérsela entregado a Vd. personalmente para darle todas las explicaciones que pudieran evitar una equivocada interpretación a este acto; pero encontrándome en cama desde mi última recaída hace 19 días, no me es posible satisfacer aquel deseo que para mí envolvía también el cumplimiento de mi deber.

Nadie mejor que Vd. sabe que ni directa ni indirectamente he solicitado la honra de ser nombrado Senador: la esperaba sin embargo y debo decírselo con esta franqueza, porque reuniendo los requisitos de la ley, y no permitiendo esta la entrada en los Cuerpos Colegisladores, a otro representante del Ministerio Fiscal que a su Jefe, y según mis principios únicamente en el Senado, no podía (...) sin un propósito del Gobierno de hacerme entender que no poseo su confianza. Vd. conoce que el Fiscal del Tribunal Supremo como representante del mismo Gobierno y su primer Agente en el Orden judicial desempeña un cargo de confianza; como tal amovible. Faltándome aquello ni mi delicadeza, ni mi decoro, ni el interés mismo del buen servicio público me permitían continuar en este puesto. De hoy en adelante carecería indudablemente de la autoridad moral indispensable en los Tribunales y del prestigio que ha menester todo Jefe respecto a sus subordinados.

No dudo que la persona que me reemplace será más digno que yo y como no podrá dejar de poseer la confianza del Gobierno tendrá más medios que yo para elevar la institución a la altura conveniente de lo cual me felicitaré más que alguno.

La cesación de nuestras relaciones oficiales no disminuirá en lo más mínimo las consideraciones que le profesa su affmo. S. S. J. B. S. M.

Manuel de Seijas Lozano

a 10 de Noviembre de 1861

JOSÉ MARÍA TEJADA

Motivos de gratitud hacia alguno de los sujetos separados por decreto del Gobierno de la Nación de fecha de ayer de las plazas, que obtenían en el Supremo Tribunal de Justicia, me impiden aceptar en su reemplazo la que por otro decreto de igual fecha se me confiere de Ministro del mismo Tribunal Supremo, y me obligan a suplicar a V. E. que tenga a bien inclinar el ánimo del Gobierno a que se sirva admitirse la renuncia que hago del referido destino.

Por lo demás lejos de mirar V. E. en este paso una prueba de menos decidida adhesión a la situación creada o de calculada contemplación hacia la vencida, me complazco en reconocer y quiero que así quede consignado, que no habiendo reconocido aquellos Sres. Magistrados lisa y llanamente al Gobierno que la Nación se ha dado en esta gloriosa crisis, este ha estado en su derecho y ha cumplido con su imperioso deber, decretando una separación, que creo indispensable y fundada, por mas que consideraciones puramente personales me retraigan de aceptar de esa medida la parte que puedo mirar como en provecho propio.

Dios guarde a V. E. M. A. Madrid, 30 de Julio de 1843.

Excmo. Señor
José María Tejada

Excmo. Sr. D Joaquín María López, Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Presidente del Consejo de Ministros.

VICENTE VALOR

Madrid, 24 de Octubre de 1845

Hace presente con esta fecha D. Vicente Valor en una larga exposición: que respeta con la más profunda veneración la voluntad de V. M. acerca de su separación; pero no acierta los motivos que hayan podido razonarla; y que si bien el Público y la prensa de esta Corte arrojan mucha luz en este asunto y según ellos, no es difícil (dice) ver las causas probables de esta medida; cree sin embargo que esta sola razón no ha podido aconsejarla. Contradice cuanto han dicho los periódicos que se han ocupado de la causa formada a D. Pascual Madoz, D. Manuel Cortina y otros, acerca de la vocería y aplausos que tuvieron lugar en la vista de la misma; manifiesta que esto es una invención inexacta y concluye:

Suplicando a V. M. se digne mandar que si algunos antecedentes obraren en este Ministerio, como (dice) parece regular que obren, respecto de su destitución, se pasen desde luego al Tribunal Supremo de Justicia para que en su vista proceda a lo que hubiere lugar. Segundo, que si no existiesen antecedentes ningunos en este Ministerio, se digne V. M. expedir la oportuna R. orden por la que ante el mismo Tribunal Supremo se obra el sumario o investigación correspondiente donde se consigne con toda la exactitud, que las leyes y el caso reclaman la certeza de los hechos que se le han imputado y que por lo que resultare de esta investigación se proceda igualmente a lo que corresponda en justicia.

MIGUEL ANTONIO DE ZUMALACÁRREGUI

Excmo. Sr.:

A fin de que informase de lo que se me ofreciese y pareciese, se sirvió V. E. remitirme de Real Orden en 4 de Enero de este año, una instancia de D. Miguel Antonio Zumalacárregui, residente en Cádiz, en solicitud de que se le concediese Real permiso por el tiempo que fuere del Soberano agrado de S. M. para venir a esta Corte con objeto de arreglar varios asuntos que dice tiene, pendientes con motivo del fallecimiento de su esposa.

Sobre esta instancia, me dijo el Subdirector General de Policía de Jerez de la Frontera que aunque Zumalacárregui había sido Diputado en las llamadas Cortes, su conducta en Cádiz posterior al restablecimiento del Rey V. S. en la plenitud de su Soberanía; no se le hizo reprehensible, ni sospechosa de modo alguno hasta el 19 de Junio del año pasado, época de su traslación a Jerez.

Con copia de esta contestación, y con remisión del memorial pedí informe al Subdirector General de esta Corte quien con fecha 28 de Marzo último me dice lo siguiente:

“Ilmo. Sr. Enterado de la instancia de D. Miguel Antonio Zumalacárregui que Vd. se sirvió remitirme el 2 del corriente para que sobre su contenido informe lo que se me ofrezca y parezca, a cuyo intento me acompaña también copia rubricada de lo informado por el Subdirector General de Policía de Jerez de la Frontera digo: que desde el año 13 he conocido personalmente a D. Miguel de Zumalacárregui y sabido por lo mismo que en Cádiz fue uno de los partidarios más célebres del sistema constitucional desde que se publicó por primera vez en aquella ciudad. Lo vi por mí mismo, y desde entonces, no se separó jamás de los principios que había adoptado y le inspiró el difunto Arce de Ávila Cuesta y los demás autores del sistema revolucionario que se estableció en Francia en el año de 1790, y se inspiró después en España por el mismo Napoleón y sus Agentes para dividir el pueblo español y destruir su fuerza. Concluidas con la venida del Rey N. S. de Francia aquellas convulsiones políticas en el año 1814, Zumalacárregui por la parte que había tomado en ellas quedó privado de la plaza de Oidor a que había sido promovido antes en la Audiencia de Asturias, sin duda por haberse casado con una dependienta o criada de la casa de Godoy. Con este motivo volví a verle algunos años en Valladolid antes de los acontecimientos revolucionarios del 20, donde por lo que después diré, no se estuvo sin duda, holgando para el restablecimiento de la Constitución. Digo esto porque se le vio tomar parte en aquellos primeros pasos del mes de Marzo, para que se publicase la Constitución en Valladolid, aun antes de decidirse a jurarla S. M. y después que se verificó la creación de la Junta revolucionaria constitucional a Zumalacárregui se le prodigaban por todos los partidarios, y aun fueron a darle música una noche con grande aparato de hachas de cera, y de viento, y todas las demás apariencias bulliciosas conque los revolucionarios de todos los tiempos han procurado colocar el vicio en el trono de la virtud, y la injusticia y el terrorismo en el de la justicia. Así es que se le vio acompañado y acompañar a los individuos de la Junta revolucionaria, y a aquellos patriotas que más se habían distinguido en la creación

de la Junta. Por lo mismo, y después de planteado ya este primer gobierno en Valladolid, a muy poco tiempo fue nombrado Zumalacárregui, Ministro del que llamaron Tribunal Supremo de Justicia en el que continuó, como hijo fiel de la revolución hasta que incorporado en la caravana que llevó prisionera la Familia Real a Cádiz quedó en esta ciudad después de la libertad del Rey N. S. ha el pequeñuelo, según dice el Subdirector de la Policía de Jerez en su certificado, cuyo documento de nada sirve por hablar de un tiempo en que Zumalacárregui no podía gestionar públicamente en favor de sus inclinaciones sin comprometer la seguridad de su persona. Ahí tiene V. M. un breve compendio de la Historia constitucional de Zumalacárregui, y en cuya vista podría conocer si su venida a Madrid, puede ser útil o perjudicial a los intereses generales del Gobierno. Por descontado está comprendido en la prohibición del Real Decreto de 4 de Octubre de 1823, sin contar ahora el mérito particular que Vd. quiera dar a la intención secreta de Zumalacárregui en introducirse en la Corte. Aunque no expresa en su exposición cuales son los asuntos particulares que tiene pendientes en Madrid de resultar de haber fallecido su mujer, yo los tengo por una ficción, pues aquella ni era de Madrid ni tenía padres, ni bienes cuya testamentaría haya de agitarse en esta Capital, y en mi juicio lo que quiere Zumalacárregui, es venir a reunirse con los muchos amigos y colaboradores que residen en la Corte, o vienen de continuo a ella de otras Provincias para ver si con el auxilio mutuo se puede influir algo en favor del establecimiento de las Cámaras, que es el pretexto con que por ahora pretenden los revolucionarios subyugar a S. M., despojándole poco a poco de su Soberanía, e introducir el desorden en la Nación: si esta no fuere su intención, que lo dudo mucho, será al menos la de venir a pretender porque ya estará purificado como todos los principales anarquistas, y se creará con esto autorizado para pedir la reposición en su destino, sin embargo de haberle perdido en el año de 1808 o 1809 y propalar, como hacen todos los de su clase, inventivas contra el Rey N. S. y su Gobierno, suponiendo que con las purificaciones se hallan en la clase de fieles servidores de S. M. y que su buena suerte no es debida a la Real clemencia, sino a la ley, como ellos dicen, por su inocencia”.

En su vista debo decir a V. E, que por mi parte no juzgo conveniente la venia de Zumalacárregui a Madrid. Dios guarde a V. E. M. A.

Madrid 27 Abril de 1830

Excmo. Sr.

Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia

IX. APÉNDICE LEGISLATIVO

1836

- Real Orden de 30 de agosto por el que se restablecen varios decretos de las Cortes para la más pronta administración de justicia.
- Real Orden de 22 de septiembre por la que se forma una junta que calificará a los magistrados y jueces de todos los tribunales.
- Real Orden de 24 de septiembre por la que todos los magistrados y jueces y demás empleados de este ministerio se presenten a servir sus cargos en el término y bajo el apercibimiento que se expresa.
- Real Orden de 3 de diciembre declarando no ser necesarias la licencia y notificación a S. M. para los recursos de segunda suplicación.
- Real Orden de 21 de diciembre autorizando a las Cortes para el nombramiento en propiedad de los destinos de la judicatura.

1837

- Real Decreto de 22 de marzo incluyendo la ley de las Cortes que restablece la orden y decreto que se citan, sobre formación de causa a los magistrados y diputados a Cortes.
- Real Decreto de 29 de abril de las Cortes declarando en toda su fuerza las sentencias ejecutoriadas durante la anterior época constitucional.
- Real Orden de 12 de mayo comunicando la resolución de las Cortes en que se declara que el conocimiento de las causas criminales que se formen contra los prelados diocesanos corresponde al Tribunal Supremo de Justicia.
- Real Decreto de 13 de mayo mandando observar y cumplir el de las Cortes en que se declara que por ahora corresponde al Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de los negocios en que antes entendía el suprimido Consejo de Indias.
- Se promulga con fecha de 15 de junio la Constitución de 1837.
- Real Orden de 18 de junio previniendo la forma en que han de prestar juramento a la nueva Constitución los tribunales y juzgados, los prelados y demás eclesiásticos del reino.
- Real Decreto de 13 de diciembre mandando cesar la Junta creada para preparar el arreglo de los tribunales y juzgados del reino.
- Real Orden de 25 de diciembre nombrando una comisión para que proponga un proyecto de ley relativo a las circunstancias que deben adornar a los magistrados y Jueces, y otro acerca de la responsabilidad judicial.

1838

- Real Orden de 15 de enero mandando remitir un estado expresivo de la fecha hasta la cual están pagados los sueldos de los magistrados, jueces y promotores fiscales.
- Real Decreto de 10 de febrero nombrando presidente del Tribunal Supremo de Justicia a D. Francisco Fernández del Pino, conde de Pinofiel.
- Real Orden de 28 de febrero sobre concesión de licencias y de prórroga del término señalado para tomar posesión de los destinos de judicatura: y acerca del curso que debe darse a las solicitudes de indulto.
- Real Orden de 20 de julio acerca del arreglo de las salas en los tribunales colegiados.
- Real Decreto de 4 de noviembre estableciendo ciertas reglas para la administración de justicia.
- Real Decreto de 4 de noviembre sobre recursos de suplicación e injusticia notoria.
- Real Orden de 20 de diciembre haciendo ciertas prevenciones relativas a la pronta administración de justicia.
- Real Decreto de 29 de diciembre precedido de la correspondiente exposición a S. M. estableciendo reglas para mejorar la condición de los magistrados y jueces.

1839

- Disposición de 14 de marzo por la que se nombra una comisión para el Proyecto de Ley sobre inamovilidad y responsabilidad judicial.
- Real Orden de 8 de mayo acerca de los límites de las atribuciones administrativas y judiciales.
- Real Orden de 8 de junio mandando que para el primero de julio se presenten en sus destinos los magistrados, jueces y promotores recientemente nombrados.
- Real Orden de 17 de julio haciendo varias aclaraciones relativas al Real Decreto de 29 de diciembre de 1838.
- Proyecto de Ley de 23 de agosto sobre inamovilidad y responsabilidad judicial.
- Real Orden de 19 de noviembre mandando que se presenten a servir sus destinos los magistrados, jueces y promotores fiscales que se hallen disfrutando licencia.

1840

- Real Orden de 11 de enero sobre la imposibilidad de administrar justicia por falta de seguridad y protección de Instrucción Provisional.
- Real Orden de 11 de enero dirigida a que con actividad y energía se proceda en la administración de justicia.
- Instrucción Provisional de 15 de enero sobre Enjuiciamiento del Sr. García Gallardo.
- Proyecto de 15 de enero de una nueva planta de tribunales y arreglo del ramo de administración de justicia en España.
- Proyecto de 23 de febrero particular de organización de tribunales (Lucas Pardo).
- Real Orden de 28 de mayo acerca de las licencias que se concedan a los magistrados de los tribunales superiores.
- Decreto de 16 de octubre de la Regencia declarando la inamovilidad de los magistrados y jueces.
- Orden 19 de octubre asegurando a los magistrados y jueces la consideración del gobierno.
- Orden de 30 de octubre sobre dimisiones y renunciaciones de jueces y magistrados.
- Decreto de 31 de octubre de la Regencia nombrando ministros del Tribunal Supremo de Justicia a los individuos que expresa.
- Orden de 11 de noviembre sobre división territorial y división judicial.

1841

- Orden de 20 de enero de la Regencia Provisional acerca de los datos que las audiencias deben dirigir al Tribunal Supremo de Justicia.
- Orden de 28 de enero de la Regencia Provisional relativa a los documentos con que deben ser acompañadas las solicitudes de los que pretenden ser colocados o ascendidos en la carrera judicial.
- Orden de 29 de enero de la Regencia Provisional fijando el plazo dentro del cual deben tomar posesión y obtener título los nombrados para magistraturas y judicaturas.
- Circular de 27 de mayo recomendando brevedad en la solución de las causas.

- Orden de 25 de septiembre del Regente del Reino fijando los días en que deben solamente vacar los tribunales de justicia.
- Decreto de 26 de septiembre sobre establecimiento de vacaciones.
- Orden de 12 de octubre sobre suspensión de licencias a jueces y magistrados.

1842

- Proyecto de ley de 7 de enero sobre organización de tribunales leído en el Senado por el ministro Sr. Alonso.
- Proyecto de ley de 14 de marzo del ministro Sr. Alonso sobre inamovilidad y responsabilidad judicial.
- Real Resolución de 4 de junio excitando el celo de los tribunales y jueces con motivo de planes concebidos para trastornar las instituciones vigentes.
- Real Resolución de 26 de junio trazando a los tribunales y jueces la línea de conducta que deben seguir.
- Proyecto de ley de 28 de junio para dejar sin efecto de lo establecido en el Decreto de 16 de octubre de 1840.
- Real Resolución de 17 de agosto aprobando el convenio celebrado entre los colegios de procuradores del número y de los tribunales supremos de esta Corte para que cesen las diferencias que entre ellos había.
- Real Resolución de 1 de octubre pidiendo noticia del número de expedientes sobre incorporaciones y reversiones que se hallen pendientes de fallo de los tribunales.
- Proyecto sin fecha del ministro Sr. Alonso sobre inamovilidad y responsabilidad.

1843

- Real Decreto de 9 de enero derogando el decreto de 25 de septiembre de 1841 sobre días feriados para las vacaciones de los tribunales y marcando las que deberán ser.
- Real Orden de 29 de enero aclarando el artículo 73 del reglamento sobre jueces procesados.
- Real Decreto de 19 de agosto por el que se crea la comisión de codificación.
- Real Resolución de 29 de agosto acerca del traje de los magistrados, jueces, abogados y escribanos y de las prácticas y usos de los tribunales.

- Bases generales de 21 de septiembre de la Comisión General de Codificación.
- Real Decreto de 9 de noviembre fijando las reglas de antigüedad de los ministros de las Audiencias y demás tribunales superiores.
- Real Decreto de 9 de diciembre sobre la presidencia de sala del Tribunal Supremo de Justicia y de las audiencias del reino.
- Real Orden de 18 de diciembre sobre toma de posesión de magistrados y jueces.

1844

- Real Orden de 5 de enero con aclaraciones sobre el decreto de 9 de noviembre, relativo a la antigüedad de los ministros y fiscales del Tribunal Supremo y de las audiencias.
- Real Decreto de 5 de enero adicional al reglamento del Tribunal Supremo de Justicia y a las ordenanzas de las audiencias.
- Real Orden de 9 de enero sobre reunión de las Juntas Gubernativas de los tribunales del decreto relativo a la organización del ministerio fiscal.
- Real Orden de 21 de enero sobre infracciones judiciales de las leyes penales.
- Real Decreto de 26 de enero haciendo varias mejoras en la organización del ministerio fiscal.
- Real Orden de 30 de enero sobre el cumplimiento del decreto relativo a la organización del ministerio fiscal.
- Proyecto de ley de 15 de abril de organización de tribunales.
- Real Orden de 24 de abril declarando que los magistrados de los tribunales del reino y los jueces y promotores no están sujetos al pago de la media anata ni a ningún otro descuento.
- Real Decreto de 26 de abril, reduciendo el ministerio fiscal para darle mayor unidad y robustez de acción.
- Real Orden de 27 de abril dictando las reglas que se han de observar por los jueces para entregar la jurisdicción cuando reciban la orden de us traslación o ascenso.
- Proyecto sin fecha de García Gallardo sobre organización de tribunales.
- Real Orden de 26 de mayo sobre licencias de funcionarios de la administración de justicia.

- Real Decreto de 5 de junio sobre regulación de vacaciones.
- Real Decreto de 6 de junio sobre conflictos de jurisdicción y atribuciones.
- Real Orden de 21 de octubre sobre presentación del real titulado por los aspirantes a jueces.

1845

- Ley de 2 de abril de organización y atribuciones de los consejos provinciales.
- Constitución de 23 de mayo.
- Real Orden de 27 de mayo mandando que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia se inserten en la parte oficial de la Gaceta de Madrid.
- Real Orden de 30 de mayo mandando que los individuos de los tribunales den cuenta al gobierno cuando se ausenten en uso de Real Licencia y cuando vuelvan al servicio de su magistratura.
- Real Orden de 30 de mayo regulando los derechos honoríficos de la administración de justicia.
- Ley de 6 de julio de organización y atribuciones del Consejo Real.
- Real Orden de 12 de julio mandando que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia disponga que se distribuyan entre los magistrados del mismo tribunal para su examen las causas que hubieren remitido las audiencias de la península, correspondientes al semestre vencido en fin de Junio próximo pasado.
- Real Decreto de 19 de septiembre sobre prohibición de concesión de honores de toga.
- Circular de 11 de octubre del fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, dirigida a los fiscales de S. M. en todas las audiencias, acompañando la del ministro de Gracia y Justicia sobre la necesaria asistencia de los fiscales a las vistas de causas.

1846

- Real Orden de 6 de marzo estableciendo varias reglas para la formación y publicación de la Colección legislativa de España y mandando cesar la de decretos desde el primero de enero de 1846.
- Real Orden de 15 de marzo disponiendo que D. Pablo Cabrero, artífice, haga una descripción artística del gran collar que usa el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que se determinan.

- Real Orden de 28 de abril sobre derechos honoríficos de titulares, cesantes y jubilados.
- Proyecto de ley de 12 de junio sobre ley constitutiva de los tribunales.
- Real Decreto de 31 de julio por la que se suprime la Comisión de Codificación del año 1843.
- Real Decreto de 11 de septiembre por el que se crea una Comisión General de Codificación (duró hasta 1853).
- Proyecto sin fecha de Bases para la abolición del fuero civil de militares y extranjería.
- Real Decreto de 30 de diciembre aprobando interinamente el reglamento sobre el modo de proceder en los negocios contenciosos de la administración que se ventilan en el Consejo Real.

1847

- Real Decreto de 4 de junio estableciendo reglas generales y permanentes para sentenciar y dirimir las competencias de jurisdicción entre las autoridades judiciales y administrativas.
- Real Orden de 9 junio resolviendo que no se admitan por ningún tribunal demandas judiciales contra el estado en que se contraviertan intereses, sin que previamente se haga constar que se ha obtenido resolución en el asunto por la vía gubernativa.
- Real Orden de 7 de julio, preceptuando que en todas las alcaldías, juzgados y tribunales del reino se lleve un registro de los juicios entablados y fenecidos con expresión de todos los derechos que los funcionarios que hayan intervenido hubieren devengado.
- Circular de 26 de agosto, adoptando reglas para la mejor organización del ministerio fiscal (del Tribunal Supremo de Justicia).
- Real Decreto de 8 de octubre, mandando que el ministro de Gracia y Justicia someta a Real aprobación y presente a las de las Cortes un proyecto de ley sobre el nombramiento, responsabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados.
- Real Orden de 8 de octubre, encargando a la comisión de códigos que formule y remita al ministerio un proyecto de ley sobre el nombramiento, promoción, responsabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados.
- Proyecto de ley de 21 de diciembre de organización, competencia y facultades de los tribunales del fuero general.

1848

- Real Orden de 16 de enero: disposiciones en favor de funcionarios judiciales separados por razones políticas.
- Proyecto de ley de 9 de marzo sobre nombramiento, responsabilidad y jubilación de magistrados.
- Real Decreto de 19 de marzo por el que se promulga el Código Penal.
- Real Decreto de 19 de marzo por el que se prescriben reglas para la aplicación de disposiciones del Código Penal de 1848.
- Real Orden de 19 de marzo mandando que los magistrados, fiscales, jueces y promotores que se hallen fuera de sus destinos pasen a desempeñarlos, y dictando otras disposiciones relativas a licencias y término para tomar posesión de dichos cargos.
- Real Orden de 26 de abril disponiendo que los pleitos de cuyo conocimiento de inhiban los tribunales ordinarios, se remitan a los jefes políticos si se hallaren en primera instancia, y al gobierno por conducto del ministerio de la Gobernación cuando perdieren en ulteriores recursos.
- Real Orden de 1 de julio sobre la regla 3ª de la ley provisional de 19 de marzo.
- Real Orden de 31 de agosto resolviendo que el fiscal del Tribunal Supremo de Justicia y el del especial de las Órdenes sean vocales natos de la junta superior directiva de archivos.
- Real Decreto de 22 de septiembre sobre la ampliación de la ley provisional para la aplicación del Código Penal.
- Real Orden de 20 de noviembre declarando que no están sujetos al pago de media anata los magistrados, fiscales, jueces y promotores dependientes del ministerio de Gracia y Justicia que hubieren sido nombrados con posterioridad a la época en que empezó a regir el presupuesto de 1835.
- Real Orden de 17 de diciembre designando las clases de funcionarios que deben concurrir a la apertura de los tribunales de justicia, y el lugar que en dicha solemnidad corresponda a cada una.

1849

- Real Orden de 4 de abril previniendo que cuando haya condenación así en los recursos de nulidad, como en los de segunda suplicación e injusticia notoria, se entregue a la Hacienda en papel de multa el importe de aquella parte que le corresponda.

- Real Orden de 4 de julio sobre medidas para la rápida sustanciación de las causas.
- Real Orden de 6 de julio mandando que los presidentes de la sala hagan el servicio de ponentes, en la suya respectiva, en uno de cada tres turnos con los magistrados de la misma.
- Real Orden de 18 de julio sobre exigencia del Real Título para los funcionarios de nombramiento real.
- Real Orden de 28 de septiembre sobre cuerpos de jueces y promotores fiscales.
- Real Decreto de 28 de septiembre, creando una Junta suprema en Madrid y subalternas en las Audiencias para el arreglo de tribunales, y señalándoles sus atribuciones.
- Real Orden de 6 de diciembre, aprobando la formación de una sección con el nombre de personal en la Junta Suprema de disciplina y arreglo de tribunales.

1850

- Real Orden de 24 de enero disponiendo que por el Consejo Real, Tribunal Supremo de Justicia y Junta Directiva de la Deuda se dé conocimiento respectivamente a la Dirección General de lo contencioso de todos los negocios en que se halle interesada la Hacienda Pública, proponiendo lo que crean conveniente al mejor servicio e interés del estado.
- Real Orden de 23 de febrero recordando a las Audiencias y juzgados de las Reales Órdenes de 30 de noviembre de 1847 y 30 de septiembre de 1848, relativos al modo de entenderse los tribunales de justicia con los jefes políticos, sobre existencia de confinados, exhortar y otras noticias histórico-penales.
- Real Decreto de 4 de marzo, preceptuando que los presidentes de sala del Tribunal Supremo de Justicia y de las Audiencias que ejerzan indistintamente las funciones de su cargo en la sala donde lo reclame el mejor servicio: y que los nombramientos de presidentes se hagan en términos absolutos sin designación de sala.
- Real Orden de 8 de marzo, resolviendo que los funcionarios del orden judicial que fuesen ascendidos, trasladados o nombrados para alguna comisión incompatible con el ejercicio de su cargo, cesen en el desempeño de éste, tan pronto como les sea comunicada la orden del nuevo nombramiento.
- Real Orden de 18 de marzo aclaratoria de la regla 8ª del decreto de 22 de septiembre de 1848.
- Real Decreto de 8 de junio sobre reformas a la ley provisional para la ejecución del Código Penal.

- Real Decreto de 9 de junio dictando reglas sobre las observaciones y consultas que respecto al Código Penal sugiere la práctica a los tribunales.
- Real Decreto de 29 de junio para un Código Penal refundido.
- Real Orden de 5 de septiembre, encargando el cumplimiento de la regla 2ª del artículo 48 del reglamento provisional para la administración de justicia y dictando otras disposiciones sobre procedimientos civiles y criminales.
- Proyecto de Ley de 20 de noviembre constitutiva de los tribunales de fuero común.

1851

- Real Decreto de 24 de enero sobre supresión de la Junta Suprema Consultiva.
- Real Orden de 31 de enero sobre la regulación de la antigüedad.
- Real Decreto de 7 de marzo dictando reglas para la provisión de las plazas de la magistratura, judicatura y ministerio fiscal del fuero común y sobre suspensión, traslación y jubilación de los funcionarios de dichas clases.
- Real Decreto de 12 de marzo disponiendo que los cesantes y jubilados de las distintas categorías del orden judicial que deseen volver al servicio activo, dirijan sus solicitudes al ministerio en el término preciso de dos meses.
- Real Orden de 6 de abril aprobando una instrucción para el cumplimiento del Real Decreto de 7 de marzo último sobre clasificación de los empleados activos y pasivos del orden judicial.
- Real Orden de 16 de abril acordando disposiciones para que los tribunales expongan lo que se le ofrezca sobre el Código Penal, a tenor del catálogo de preguntas que se acompañan.
- Real Orden de 26 de abril negando al Supremo Tribunal de Justicia la autorización para procesar al jefe político y de policía de Madrid por haber tenido varios meses en arresto a los individuos que se expresan.
- Real Decreto de 9 de mayo señalando el tiempo y forma en que han de vacar en lo sucesivo los tribunales y juzgados de todas clases y fueros.
- Real Orden de 10 de mayo dictando reglas, para la ejecución del Real Decreto de 9 del corriente, expedido por la presidencia del Consejo de Ministros, sobre vacaciones en los tribunales.
- Real Orden de 10 de junio sobre traslado de jueces.

- Real Decreto de 28 de junio declarando al abogado fiscal primero del Tribunal Supremo de Justicia la categoría de fiscal de Audiencia de fuera de Madrid.
- Real Decreto de 26 de septiembre ensanchando la autoridad del fiscal del Tribunal Supremo sobre los demás individuos del ministerio fiscal.
- Real Orden de 1 de octubre, dictando disposiciones sobre concesión de licencias temporales a los empleados en el ministerio fiscal, mandando que por conducto del fiscal del Tribunal Supremo de Justicia remitan dichos funcionarios las instancias que eleven al gobierno, y autorizando al mismo fiscal para suspender a los promotores.
- Real Orden de 20 de octubre recomendando al Regente de la Audiencia de Madrid la conveniencia de que dicho tribunal como todos los de su clase se limite en el ejercicio de sus funciones a las facultades que terminantemente les señalan las leyes.
- Real Decreto de 14 de noviembre autorizando al fiscal del Tribunal Supremo para pedir por sí directamente a los fiscales de las Audiencias las causas fenecidas, y a estar para hacer igual petición a las salas de justicia.
- Real Decreto de 18 de noviembre sobre revisión de las causas fenecidas: para que el fiscal del Tribunal Supremo pueda dar salida con prontitud y conocimiento de causa los informes que se le piden por el gobierno en los asuntos judiciales.
- Real Decreto de 28 de noviembre sobre expedición de títulos, honores, etc...
- Real Decreto de 17 de diciembre sobre la regulación de la antigüedad.

1852

- Real Decreto de 30 de enero autorizando al Presidente del Tribunal Supremo para pedir por sí a los Regentes de las Audiencias las causas y pleitos fenecidos y otras noticias de interés, y a ésta para hacer dicha reclamación a las salas de justicia.
- Real Decreto de 24 de febrero dictando disposiciones para el cumplimiento del artículo 9º del Real Decreto de 7 de marzo de 1851, respecto a los magistrados en quienes concurra alguna de las circunstancias declaradas incompatibles con el desempeño de sus respectivas plazas.
- Real Orden de 1 de mayo, reformando la de 10 de mayo de 1851, relativa al cumplimiento del Real Decreto sobre vacaciones de los tribunales, expedido por la presidencia del Consejo de Ministros el 9 de dicho mes y año.
- Real Orden de 3 de mayo determinando el modo de instruir los procesos que debe conocer el Tribunal Supremo de Justicia con arreglo al Real Decreto de imprenta expedido el 2 de Abril último.

- Real Orden de 4 de mayo sobre vacaciones de tribunales.
- Real Orden de 7 de mayo haciendo extensiva a los magistrados que dejaron de servir sin destinos por consecuencia de los acontecimientos políticos de 1843, la Real Orden de 10 de marzo de 1847 que dispuso se considerasen cesantes desde que por el gobierno se proveyeron sus plazas, a los que fueron separados o suspensos por las juntas del pronunciamiento de 1840.
- Real Decreto de 20 de junio mandando llevar a efecto el proyecto de ley sobre jurisdicción de Hacienda y represión de delitos de contrabando y fraude (recurso de casación).
- Real Orden de 20 de julio disponiendo que en las sentencias que dicten el Tribunal Supremo y las Audiencias, se exprese el nombre del magistrado ponente.
- Real Orden de 22 de julio disponiendo que se recuerde a los tribunales y juzgados la observancia del artículo 9º del Real Decreto de 4 de junio de 1847, por el que se manda fundar en hecho y en derecho los fallos en que se declaren competentes o incompetentes.
- Real Orden de 23 de octubre mandando que los promotores fiscales de Hacienda y los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo en su caso intervengan en los negocios judiciales sobre bienes eclesiásticos.

1853

- Real Orden de 13 de enero, dictando nuevas disposiciones acerca del registro de informes mandado formar en las audiencias y en el Tribunal Supremo por Real Decreto de 5 de enero de 1844.
- Real Decreto de 14 de enero restableciendo, respecto al Tribunal Supremo de Justicia, el Real Decreto de 10 de diciembre de 1847, que trata de las categorías y asiento de los magistrados.
- Real Orden de 10 de julio sobre formación de las salas de vacaciones.
- Real Decreto de 20 de agosto por el que las causas contra la Hacienda Nacional, que la sala primera del Tribunal Supremo decidiera, fundándolo, haber o no lugar a casación y que en caso afirmativo, pasase la causa a la sala segunda del mismo tribunal, para proveer lo que correspondiese en justicia, fundándolo también en lugar de remitir los autos a otra Audiencia, como se hacía con arreglo a las disposiciones del Real Decreto de 4 de noviembre de 1838; y se suponía que había de haber repugnancia en la sala segunda de resolver en el fondo después de una casación que ella tal vez no hubiera decretado (...) pero eso no ha ocurrido.
- Real Orden de 7 de septiembre declarando que a las familias de los ministros suplentes del Tribunal Supremo, corresponde la misma pensión de Montepío que si hubiesen sido efectivos.

- Proyecto de 9 de septiembre del marqués de Gerona de organización de tribunales, que se informó a las Cortes.
- Real Orden de 30 de septiembre aprobando la Instrucción para arreglar el procedimiento en los negocios civiles con respecto a la Real jurisdicción ordinaria.
- Real Orden de 6 de octubre sobre prohibición de recomendar a los jueces negocios de justicia.
- Real Decreto de 22 de octubre por el que se crean las secretarías de gobierno de los tribunales en sustitución de los relatores de la sala de gobierno.
- Real Orden de 14 de noviembre sobre distintivos de magistrados y jueces.
- Real Orden de 22 de diciembre declarando la categoría correspondiente a los relatores del Tribunal Supremo y de las Audiencias que lleven 10 ó más años de servicio efectivo.
- Real Orden de 29 de diciembre mandando que el Tribunal Supremo proponga lo que estime conveniente acerca de la extensión y límites de la autoridad judicial, para la indignación y represión de los delitos cometidos en actos electorales.

1854

- Real Decreto de 11 de enero mandando que siempre que se remitan autos civiles o criminales al Tribunal Supremo por las audiencias del Reino, se acompañe certificación de los votos reservados de los magistrados que hayan intervenido en los fallos, o negativo en su caso.
- Real Decreto de 14 de enero, nombrando una comisión para que proponga las reformas que convenga hacer a la Instrucción sobre procedimientos civiles, publicada el 30 de septiembre de 1853.
- Real Decreto de 17 de enero suprimiendo la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia.
- Real Decreto de 19 de enero disponiendo que el Tribunal Supremo sea presidido por un capitán general del ejército e introduciendo otras reformas en la organización de dicho tribunal.
- Real Orden de 15 de abril sobre la regulación de la toma de posesión.
- Real Orden de 19 de abril sobre prohibición de solicitar empleo al ministro de Gracia y Justicia por medios reprobados.
- Real Orden de 10 de mayo mandando que la Comisión de Códigos proceda a redactar y discutir un código completo de instrucción civil.

- Proyecto de Ley Constitutiva de los tribunales del fuero común de 19 de mayo por G. Gallardo, Fco. Cárdenas, Ortiz de Zúñiga, Antonio M. Escudero, Andrés Sarmiento, Felipe Dull, J. M. Sánchez y Puig.
- Real Decreto de 26 de mayo de regulación de la suplencia de magistrados y jueces.
- Real Decreto de 30 de mayo sobre sustituciones de magistrados y jueces en casos de ausencia o enfermedad.
- Real Decreto de 11 de agosto mandando que se reúnan las Cortes del Reino, con el carácter de constituyentes, el 8 de noviembre del corriente año, y que se verifique la elección por la ley de 20 de julio de 1837, con las variaciones que se expresan.
- Real Decreto de 18 de agosto, suspendiendo la observancia de la Real Instrucción de 30 de septiembre de 1853, sobre el procedimiento civil.
- Real Decreto de 18 de agosto, suprimiendo la Comisión de Códigos.
- Real Decreto de 25 de agosto, restableciendo la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia.
- Real Decreto de 9 de septiembre suprimiendo las Juntas de gobierno establecidas en el Tribunal Supremo de Justicia y en las audiencias, las secretarías de las mismas Juntas y las vacaciones de dichos tribunales en los jueves de cada semana.
- Proyecto de Ley sobre organización de tribunales y reformas.
- Circular de 18 de octubre sobre retribuciones de suplentes.

1855

- Real Decreto de 5 de enero declarando cesantes a los magistrados y jueces que carezcan de los requisitos que se expresan, y disponiendo que de cada cuatro vacantes se provean tres en cesantes y una al ascenso.
- Real Cédula de 30 de enero reformando la administración de justicia en las provincias de ultramar.
- Real Orden de 10 de febrero regularizando la situación de las personas encargadas de la administración de justicia, a consecuencia de las disposiciones adoptadas por las Juntas de gobierno establecidas en julio del año anterior.
- Real Orden de 14 de marzo sobre retribución de jueces suplentes.
- Ley de 13 de mayo estableciendo las bases con arreglo a las cuales ha de proceder el gobierno a la ordenación y compilación de las leyes de enjuiciamiento civil.

- Ley de 9 de julio sobre prohibición de simultanear destinos y sueldos.
- Ley de 5 de octubre de Enjuiciamiento Civil.
- Proyecto de Ley de 22 de octubre de Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados.
- Ley de 14 de noviembre autorizando al ministro de Gracia y Justicia para nombrar a D. Claudio Antón de Luzuriaga Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Real Orden de 18 de noviembre, encargando al Tribunal Supremo de Justicia redoble su vigilancia sobre los demás tribunales y juzgados, encargándoles que no consientan la menor contravención a las leyes, cualquiera que sea el infractor y el pretexto en que quiera fundarse.
- Real Orden de 23 de noviembre, dictando algunas medidas con el fin de evitar que los tribunales suspendan sus funciones cuando la tranquilidad pública se vea alterada.
- Real Decreto de 7 de diciembre sobre licencias y toma de posesión.
- Real Decreto de 19 de diciembre prescribiendo las ceremonias con que debe verificarse en la corte la apertura de los tribunales de justicia.

1856

- Real Orden de 25 de enero sobre la necesaria imparcialidad de la magistratura.
- Real Orden de 4 de febrero mandando que el Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión de Códigos, las Audiencias y las Juntas de los colegios de abogados propongan a la mayor brevedad cuando se les ofrezca y parezca respecto a la inamovilidad y responsabilidad judicial, a fin de que se tenga presente en la discusión de la ley orgánica de tribunales.
- Real Orden de 18 de febrero fijando los plazos en que los relatores del Tribunal Supremo de Justicia y de las Audiencias deben dar por terminados los ayuntamientos de los procesos criminales que se les confíen.
- Real Orden de 5 de marzo mandando que el Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión de Códigos, las Audiencias y los colegios de abogados informen lo que se les ofrezca respecto a separar la administración de la justicia criminal de la civil desde la primera instancia hasta la casación; sobre la organización que deba darse a los Tribunales a quienes se confíe el ejercicio de la administración criminal y acerca de si convendría que ésta fuese gratuita; proponiendo, en caso afirmativo, los medios con que había de ser retribuida la curia inferior e indemnizando el estado.

- Real Decreto de 15 de septiembre propugnando la publicación de una ley de orden público, de Consejo de Estado y orgánicas, para el traslado, jubilación y suspensión de jueces y magistrados.
- Real Decreto de 15 de septiembre: Acta Adicional a la Constitución de 1845 que se le añade a su restablecimiento.
- Real Decreto de 1 de octubre, suprimiendo la actual Comisión de Códigos, creando otra nueva que se ocupara de la codificación, según el orden que se establece.
- Real Decreto de 14 de octubre derogando el Acta Adicional.
- Real Decreto de 10 de noviembre sobre Bases de Organización de Tribunales.
- Real Decreto de 28 de noviembre restableciendo el de 5 de enero de 1844, adicional al reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, y a las ordenanzas de las audiencias.
- Real Decreto de 28 de noviembre sobre reglas para ingresar en la carrera judicial.
- Real Disposición de 29 de noviembre sobre magistrados suplentes.
- Real Decreto de 5 de diciembre estableciendo la forma en que se ha de verificar la apertura del Tribunal Supremo y de las Audiencias del Reino.
- Proyecto de 1856-1858 de reglamento provisional del ministerio fiscal.

1857

- Real Orden de 17 de enero mandando que toda resolución o fallo que dicte el Tribunal Supremo sobre competencias en materia civil o criminal, se funde por la sala que lo dicte y se publique en la Gaceta y en la colección legislativa.
- Real Decreto de 6 de marzo estableciendo la manera de llevar los registros de sentencia de que habla el artículo 58 de la Ley de enjuiciamiento civil en el Tribunal Supremo de Justicia y en las Audiencias Territoriales.
- Real Decreto de 13 de noviembre disponiendo que las competencias entre la cuarta sala correccional y las demás de la Audiencia de Madrid correspondan al Tribunal Supremo de Justicia.

1858

- Real Decreto de 26 de marzo creando dos nuevas plazas de ministros en el Tribunal Supremo de Justicia con destino a la Sala de Indias.
- Real Decreto de 26 de marzo creando en el Tribunal Supremo de Justicia un secretario letrado que se titulará de gobierno y restableciendo en todas las Audiencias del Reino las secretarías de gobierno creadas por Real Decreto de 28 de octubre de 1853.
- Real Decreto de 9 de abril: adecuando, reuniendo y concertando las disposiciones relativas al ministerio fiscal del fuero común.
- Real Decreto de 2 de mayo sobre inspección y estadística judiciales.
- Real Decreto de 20 de junio, resolviendo que el secretario de gobierno del Tribunal Supremo de Justicia disfrute la categoría de magistrado de Audiencia de fuera de Madrid.
- Real Orden de 23 de junio, dictando reglas para uniformar la práctica de todos los tribunales en la apelación del Real Decreto de 9 de mayo de 1851 y disposiciones relativas a vacaciones de las mismas.
- Real Orden de 23 de agosto, admitiendo las dimisiones del presidente y vocales de la Comisión de Códigos y dictando además algunas disposiciones.

1859

- Proposición de 4 de marzo presentada por Ortiz de Zárate al Congreso de los Diputados sobre modificación de varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil.
- Circular de 20 de marzo haciendo varias recomendaciones a los empleados del ministerio fiscal para el exacto cumplimiento de sus deberes.
- Real Orden de 23 de noviembre sobre la regulación de la antigüedad.

1860

- Proposición de Ley de 19 de mayo sobre organización, competencia, gobierno y disciplina de los juzgados y tribunales del fuero común.
- Real Decreto de 7 de julio sobre colocación de magistrados cesantes: los magistrados supernumerarios.
- Real Orden de 23 de noviembre sobre la regulación de la antigüedad.

1861

- Real Decreto de 11 de enero determinando la manera de llevar el registro de las sentencias que pronuncian los tribunales colegiados.

1862

- Proyecto de Ley de 4 de enero para crear una sala de audiencia en el Tribunal Supremo.
- Real Orden de 14 de enero disponiendo que se tengan por caducadas las licencias concedidas por el fiscal del Tribunal Supremo y los regentes y fiscales de las Audiencias, siempre que los interesados no hubiesen empezado a hacer uso de ellas al obtener y usar de las concedidas por S. M.

1863

- Proyecto de Ley de 4 de enero.
- Real Orden de 14 de marzo: recomendaciones a los tribunales para una justa y pronta administración de justicia.
- Proyecto de Ley de 4 de abril remitido al Senado por el ministro de Gracia y Justicia, relativo a las bases para la organización de tribunales y enjuiciamiento criminal y exposición de motivos y fundamentos presentada por la Comisión de Codificación.
- Real Orden de 20 de abril señalando las circunstancias que han de reunir los aspirantes a las prócuras del Tribunal Supremo, de las Audiencias y de los juzgados de primera instancia.
- Real Orden de 17 de mayo por la que se pretende lograr la unificación de fueros.
- Proyecto de 26 de mayo de Bases de Organización de Tribunales y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Proyectos sobre reorganización del Tribunal Supremo e introduciendo la casación en lo criminal por el ministro Monares, marzo, abril y mayo.
- Real Orden de 3 de junio mandando que para ser relator en el Supremo Tribunal de Justicia y en las Audiencias se necesita ser mayor de edad.
- Real Orden de 25 de junio sobre licencias por ausencia.
- Real Orden de 6 de julio: cómputo de años para la determinación de la antigüedad.

- Real Decreto de 19 de agosto sobre incompatibilidad de los funcionarios del orden judicial.
- Real Orden de 8 de septiembre sobre prohibición a los jueces de participar en política.
- Proyecto de 6 de noviembre sobre organización de tribunales.
- Circular de 23 de diciembre comunicando las reglas que han de observarse en los juzgados y Audiencias para la formación de las listas semestrales de causas que deben remitirse al Tribunal Supremo.

1864

- Ley de 30 de abril dando una nueva organización al Tribunal Supremo de Justicia.
- Proyecto de Ley provisional de 27 de mayo de organización y atribuciones del Tribunal Supremo.
- Real decreto de 21 de octubre disponiendo que el teniente fiscal del Tribunal Supremo de Justicia tenga la categoría de ministro del propio tribunal a los cuatro años de desempeñar el cargo.

1865

- Proyecto de 7 de enero de organización de tribunales presentado al Senado por el ministro Arrazola.
- Real Orden de 18 de abril disponiendo que los tenientes fiscales que reemplacen por algún tiempo al fiscal de S. M. nombren teniente fiscal sustituto.
- Reformas que sobre las Bases de organización de tribunales se dan a lo largo de 1865.
- Real Decreto de 9 de octubre derogando todas las disposiciones relativas a categorías en el orden judicial y ministerio fiscal.

1866

1867

- Proyecto de Ley de 4 de abril de 1867 sobre casación.

1868

- Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales de 13 de enero de 1868.
- Proyecto de Real Decreto para la organización provisional de los tribunales derivada la ley de 11 abril de 1868.
- Real Decreto aumentando el número de los individuos que componen la Comisión Codificadora de 8 de agosto de 1868.
- Decreto de 13 de octubre suprimiendo la jurisdicción contencioso-administrativa, los consejos provinciales, y la sección de lo contencioso del Consejo de Estado.
- Decreto de 16 de octubre de 1868, creando en el Tribunal Supremo de Justicia y (...) una sala que decidirá sobre las cuestiones contencioso-administrativas.
- Decreto de 26 de noviembre de 1868 reformando la organización del Tribunal Supremo de Justicia.
- Decreto de 6 de diciembre estableciendo la unidad de fueros.
- Real Decreto, derogando el de 8 de agosto último, por el que se reorganizó la Comisión de Códigos de 25 de diciembre de 1868.

1869

- Constitución de 6 de junio de 1869.
- Decreto de 3 de julio de 1869 dictando varias disposiciones para la aplicación en la parte que sea posible de los artículos 94, 95, 96 y 97 de la ley fundamental del estado, relativos a la entrada, ascenso e inamovilidad en la carrera judicial.

1870

- Ley Provisional de 18 de junio sobre la reforma de la casación civil.
- Ley Provisional de 18 de junio sobre el establecimiento del recurso de casación en los juicios criminales.
- Ley Provisional de 18 de junio sobre reformas en el procedimiento para plantear el recurso de casación en los juicios criminales.
- Orden de 18 de junio autorizando al ministro de Gracia y Justicia para plantear como provisional, el adjunto proyecto de reforma del Código Penal.
- Ley Provisional sobre organización del poder judicial de 15 de septiembre de 1870.

1871

1872

- Ley de 22 de diciembre de Enjuiciamiento Criminal.

1873

- Decreto de 8 de mayo de 1873, dictando reglas para la provisión de juzgados y plazas de magistrado y del ministerio fiscal.
- Decreto de 25 de mayo de 1873 declarando revertido a la nación el oficio enajenado de canciller del sello Real de Castilla y registrador del Tribunal Supremo.
- Circular de 13 de septiembre de 1873 excitando el celo de los Presidentes del Tribunal Supremo y Audiencias para el más estricto cumplimiento de sus deberes en los tribunales de justicia.
- Decreto de 16 de septiembre de 1873, reduciendo a tres las cuatro salas de justicia de que actualmente se compone el Tribunal Supremo.
- Decreto de 3 de octubre de 1873, modificando en los términos que se expresan los artículos 25 y 26 del de 8 de mayo último, relativo al nombramiento de funcionarios del poder judicial.

1874

- Decreto de 14 de enero de 1874, derogando los de 8 de mayo y 3 de octubre de 1873 sobre ingreso, traslación y ascenso de los funcionarios del poder judicial y ministerio fiscal, quedando restablecidas en toda su fuerza y vigor las disposiciones de la ley orgánica.
- Proyecto de organización de tribunales del ministro Alonso Colmenares de septiembre de 1874.

1875

- Decreto de 23 de enero dictando reglas para la provisión de los cargos del orden judicial y ministerio fiscal.
- Decreto de 27 de enero, reorganizando la planta del Tribunal Supremo de Justicia.

1876

- Constitución de 30 de junio de 1876.
- Real Decreto de 13 de noviembre autorizando al ministro de Gracia y Justicia para que presente a las Cortes el adjunto proyecto de ley organizando las carreras judicial y fiscal.

1877

- Real Decreto de 30 de abril autorizando al ministro de Gracia y Justicia para presentar a la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley sobre casación en materia civil.
- Real Decreto de 22 de octubre reduciendo el número de magistrados y abogados fiscales del Tribunal Supremo.

1878

- Ley de 22 de abril de casación civil.

1879

- Real Orden de 22 de febrero disponiendo que los fiscales de las audiencias de fuera de Madrid, los abogados fiscales del Tribunal Supremo y el teniente fiscal de la Audiencia de esta Corte, constituyen la tercera categoría del ministerio fiscal, disfrutando de los derechos y consideraciones que a la misma corresponden.

1880

- Real Decreto de 2 de febrero autorizando al ministro de Gracia y Justicia para que presente a las Cortes un proyecto de ley de bases para la redacción y publicación de las leyes de Enjuiciamiento criminal y organización de tribunales colegiados, a fin de establecer el juicio oral y público, y la instancia única en los juicios criminales.
- Real Decreto de 17 de abril autorizando al ministro de Gracia y Justicia, para que presente a las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de tribunales.

1881

- Real Decreto de 3 de febrero aprobando el proyecto de reforma de enjuiciamiento civil.
- Ley de 3 de febrero de enjuiciamiento civil.
- Real Decreto de 11 mayo aumentando una plaza de abogado fiscal en el Tribunal Supremo.
- Real Decreto de 21 de octubre, autorizando al ministro de Gracia y Justicia para presentar a las Cortes, el proyecto de ley reformando el artículo 2º de la de 17 de abril de 1880, referente a las bases para la publicación de las leyes de enjuiciamiento criminal y organización de los tribunales.

X. RELACION DE FUENTES CONSULTADAS

AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 556
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 567
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 568
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 569
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 570
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 573, n. 320
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 573, n. 321
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 574, n. 384
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 574, n. 395
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 575
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 578
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 581
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 582
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 583, n. 785
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 583, n. 789
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 583, n. 814
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 588
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 591
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 600
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 606
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 607
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 1940
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 5681
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 5872
AMJ, Magistrados y Jueces, leg. 6521
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 568
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 595
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 751
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 752
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 754
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4243
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4246, n. 88
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4246, n. 92
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4246, n. 111
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4247
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4249
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4250
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4252
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4253
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4254
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4256
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4261
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4290
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4292, n. 1017
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4292, n. 1020
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4292, n. 1021
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4294

AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4296
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4297
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4298
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4300
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4301
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4302
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4303
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4328, n. 1541
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4328, n. 1546
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4328, n. 1553
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4328, n. 1554
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4332
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4333, n. 1620
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4333, n. 2188
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4334
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4335
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4336
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4379
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4385
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4387
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4388
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4390
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4395
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4396
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4397
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4411, n. 2692
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4411, n. 2699
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4413
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4414
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4417
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4434
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4435
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4436
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4438, n. 3007
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4438, n. 3012
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4439
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4450, n. 3127
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4450, n. 3128
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4450, n. 3129
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4451, n. 3134
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4451, n. 3135
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4451, n. 3139
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4452
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4454
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4455, n. 3162
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4455, n. 3169
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4456
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4457, n. 3182
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4457, n. 3191
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4459

AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4475
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4492
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4493
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4494
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4495
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4496
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4497, n. 3915
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4497, n. 3916
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4499
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4500
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4502, n. 395
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4503, n. 3963
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4503, n. 3964
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4523
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4528
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4532
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4547
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4559
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4565
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4567
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4569
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4571, n. 4897
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4571, n. 4899
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4572
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4574
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4575
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4576, n. 4937
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4576, n. 4938
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4579
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4593
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4596
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4598, n. 5206
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4598, n. 5207
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4599
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4600
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4601
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4605
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4609
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4617
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4618
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4619, n. 5431
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4619, n. 5437
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4660
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4664
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4665
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4668, n. 5841
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4668, n. 5843
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4672
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4684
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4698

AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4701
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4702, n. 6571
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4703
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4704
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4705
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4712
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4713
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4714
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4715
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4716
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4717
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4723
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4728
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4734
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4738
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4745
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4747, n. 7254
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4747, n. 7255
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4751
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4830
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4838
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4859, n. 10259
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4859, n. 10273
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4859, n. 10274
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4982
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4983
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4987
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4994
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 4995
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 5004
AHN, Fondos Contemporáneos, leg. 5872

XI. BIBLIOGRAFÍA

- ADAME Y MUÑOZ, S. *Curso histórico-filosófico de legislación española*. Madrid, 1854.
- “De la inamovilidad judicial” *FN*, 19 y 24 de febrero de 1857, p. 233 y 262.
- AGUILAR GARCÍA, A. “De la responsabilidad judicial” *RGLJ*, 1894, p. 84-85, 479 y 491.
- “Organización de Tribunales”, *RGLJ*. t. 83, p. 356.
- AGUILERA DE PAZ, E. y RIVAS y MARTI, F. *El Derecho judicial español*, t. I, Reus, Madrid, 1920, p. 73 y ss.
- AGUIRRE MIRAMON, J. M. “Organización judicial de Ultramar. Tribunales de Casación criminal”, *RGLJ*. año 22, t. 44. Madrid, 1874.
- “Reformas judiciales en Ultramar: Proyecto para el establecimiento de la casación criminal”, *RGLJ*. año 21, t.42. Madrid, 1873, p. 364-372.
- AGUNDEZ, A. *Historia del poder judicial en España*. Nacional. Madrid, 1974.
- *Antecedentes, principios básicos y proyección histórica de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870*. *Información Jurídica*, Madrid, abril-junio de 1970, p. 21 y 22.
- AGUSTÍN SILVELA. “Reforma del recurso de casación en materia civil”, *RGLJ*, 1867 (30).
- ALBORNOZ, A. *El partido republicano. Las doctrinas republicanas en España. La revolución del 68*, Madrid, 1932
- ALCAIDE ALONSO, R. “Algunos aspectos que tienden a consolidar la independencia judicial”, *RDJ*, año III, n. 9. enero-marzo 1962. Madrid (p. 139-172).
- ALCALA ZAMORA Y CASTILLO. “Derecho consuetudinario y función judicial”, *EDP*, Madrid, 1834, p. 477-496.
- ALEJANDRE, J. A. *La justicia popular en España, Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de jurados*, Facultad de Derecho UCM, Madrid, 1981.
- ALMAGRO NOSETE, J. “Problemática del recurso de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados”, *RIDP*, año 1971, p. 291-360.
- ALONSO COLMENARES, E. *Manual del Promotor Fiscal*. Madrid, 1847.
- “La responsabilidad de jueces y magistrados”, *RL*, 1885, 67, 489.
- “La responsabilidad de jueces y magistrados”, *RGLJ*. año 33, t. 67. Madrid, 1885, p. 489-502.

- ALONSO Y EGUILAR, J. “El poder judicial en España según la ley orgánica del mismo” *RE.*, 1872, t. 29, p. 29.
- “La recepción en España del recurso de casación francés” (1812-1812), Madrid, 1969.nº 26, 6/3/1865
- “Aportación a la historia del Tribunal Supremo en España”. *RGLJ*, 1969, 23.
- “Comentario al decreto de 4 de noviembre de 1838 sobre recursos de nulidad”, Madrid, 1850.
- “Independencia que conviene a la justicia aún en la esfera gubernativa”, *FN*, 15 de septiembre de 1863, p. 9.
- “La administración de justicia desde 1833 a 1868” (2). *RDJ*, 1965, 24: 121.
- “La administración de justicia desde 1833 a 1868”, *RDJ*, 1965, 22: 117.
- “Responsabilidad judicial”, *FN*, 3 de enero de 1863, p. 9.
- “Restablecimiento de las Juntas de Gobierno en el Tribunal Supremo y en las Audiencias”, *FN*, 2 de diciembre de 1856, p. 549.
- “Situación de la administración de justicia”, *FN*, 2 de diciembre de 1856, p. 549. Depósito general.
- “Unidad de jurisprudencia”, *FN*, 2 de julio de 1859, p. 5
- ÁLVAREZ ALVAREZ ALONSO, C. “El derecho de seguridad procesal y su protección en las dos primeras etapas liberales”, *AHDE*, 59 (1989), p. 283-350.
- ALVAREZ CORA, E. *La arquitectura de la justicia burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX*, en Centro de Estudios políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p.206.
- ÁLVAREZ GUENDIN. *La independencia del poder judicial*. Madrid, 1965.
- “Reforma urgente sobre el recurso de casación”. *RGLJ*, 1862, 20, p. 288 y 542.
- ANÓNIMO. “Necesidad de que se reproduzcan los escalafones de los funcionarios del orden judicial y fiscal”, *FN*, 22 de octubre de 1859, p. 513.
- ANTEQUERA, J. M. *Historia de la legislación española*, 3ª ed. Madrid, 1890, p. 465-499.
- “La codificación moderna en España”. *Opúsculo*. Madrid, 1886 p. 230
- . “La administración de justicia en España en 1858. Datos estadísticos”, *FN*, 3, 16 y 13 de diciembre de 1859, p. 661, 679 y 709.

- “Reformas de la Administración de Justicia”, *FN*, 6 de abril de 1858, p. 454.
- *Antología de las Cortes Constituyentes de 1869 y 1870*, completada -en la parte de documentación oficial- por D. F. de Cuéllar, con introducción, juicios y notas de D. Julio Correll, t. I, 823 p. t. II, 894 p. y t. III, 830 p, Madrid, 1913.
- ANTÓN ONECA, J. “El Código Penal de 1848 y don Joaquín Francisco Pacheco” en *ADP* (1965), p. 490. Como es sabido, los Códigos españoles de 1848 y 1870 desarrollaron en orden a la determinación de la pena uno de los sistemas más legalistas entre los distintos Códigos del siglo XIX, consagrando lo que Antón denomina” doctrina mecanizadora de la función judicial”.
- “Apéndices a la memoria histórica de la Comisión de Codificación”. Exposición dirigida al Ministerio de Gracia y Justicia dándole cuenta del estado de los trabajos de la comisión. *RGLJ*, año 19, t. 39. Madrid, 1871, p. 119-142.
- “Apéndices de la Comisión General de Codificación”, pp. 244-279 (sobre recurso de casación y de nulidad), *RGLJ*, año 19, t. 39. Madrid, 1871.
- ARRAZOLA, L. *Catálogo de tareas que deberán discutirse en las sesiones teóricas de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, en el año de 1845, formado por su presidente...* Madrid, 1845.
- *Enciclopedia Española de Derecho y Administración, o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*. t. II, Madrid, 1849.
- ARRIETA, L. “Observaciones acerca de la exposición de motivos en las sentencias judiciales y sobre otras cuestiones con ella relacionadas”, *RGLJ*, t. 30, año 15. Madrid, 1867, p. 97-115.
- “De la separación de justicia civil de la criminal”, *RGLJ*, 1858, t. 13, p. 145..
- ARTOLA, M. “La España de Fernando VII”, *Historia de España*, dirigida por J. M. Jover, t. XXXII. Madrid, 1983.
- *Los orígenes de España contemporánea*. 2 vols. IEP, 1959.
- *Partidos y programas políticos 1808-1936. Los Partidos Políticos*. Alianza Editorial. Salamanca, 1991.
- *Antiguo Régimen y revolución liberal*. Ariel Historia, Madrid, 1978.
- *La burguesía revolucionaria 1808-1869*, Alianza Editorial, Alfaguara, Madrid, 1973.
- *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Alianza editorial, Madrid, 1988.

- ARVIZU Y GALARRAGA, F. “El Consejo Real de España e Indias, 1834-1836”, *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*, 1974.
- BANCES, J. “Reformas de Gracia y Justicia (Bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil)”. *RDS*, n. 2, año 1895, p. 211.
- BARREDA, L. “Consideraciones sobre la LOPJ” *RGLJ*, año 20, t. 41. Madrid, 1872, p. 73-83.
- BARO PAZOS, J, “Notas acerca de la formación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la codificación del Derecho civil “, *AHDE* 67 (1997), II, p. 1513-1526.
- “Bases de la Ley Orgánica de Tribunales (1855)” L. 97, expte. 101. Archivo de Cortes. *Índice General de expedientes 1809-1869*.
- BECERRIL, J. “La Ley Orgánica y su época”. p. 1-7. *En conmemoración del Centenario de la Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Madrid, 1970.
- BELLET PIERRE Y TUNC ANDRE. *La Cour Judiciaire Supreme. Enquete Comparative* (Service de Coordination de la recherche de la Justice et de la société de législation comparée)”. París, 1978, p. 9-11 y 192-215.
- BELTRAN, M. *Liberalismo y burguesía: una nota sobre la hegemonía del moderantismo*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977.
- BERMEJO, I. A. *Historia de la Interinidad y Guerra Civil de España, desde 1868*, Madrid, 1876, t. I, 1006 p.; t. II, 974 p. t. III, 1548 p, Madrid 1877.
- Biblioteca Judicial. *Organización Judicial*. Madrid, 1891, p. 217-226.
- BORREGO, A. *Historia de las Cortes Españolas durante el siglo XIX*, 2 vol. y del mismo autor, Madrid, 1874.
 - *El libro de elecciones, historia de las verificadas en España durante el período constitucional de 1834 a 1873*, Madrid, 1874.
- BRAVO MOLTO, E. *Organización judicial vigente con una introducción histórica*. t. I. Madrid, 1890, p. 12-27.
- BRAVO MURILLO, J. “Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia”. *BJL*, 1836, t. II.
 - *Política y administración en la España isabelina*, Narcea, Madrid, 1972.
- BURGOS, J. de. *Anales del reinado de Doña Isabel II*. Madrid, 1850.

- CALAMANDREI. *La casación civil*. Edicer, Barcelona, 1979, p. 2-49.
- CALDERÓN COLLANTES, F. “Juicio crítico de la ley de Enjuiciamiento Civil”, *RGLJ*, año V, t. IX, 1857, p. 29-39.
- CALVO CARMINA, P. “La instancia única en lo civil”, *RGLJ*, año 42, t. 84, p. 295-303.
- CALVO MARCOS, M. *Régimen parlamentario. Apuntes y documentos para su historia*. Madrid, 1833.
- CAMBRONERO, C. *Las Cortes de la Revolución*. Madrid, La España Moderna, s. a.
- CANDIL JIMENEZ, F. “Observaciones sobre la intervención de Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 1848 “, *ADP*, 28 (1975), p. 405-411.
- CÁNOVAS SÁNCHEZ, F. *El moderantismo y la Constitución española de 1845*. Madrid, 1985.
- CAÑAMAQUE, F. *Los oradores de 1869*. 2ª ed. Madrid, 1887, 434 p.
- CARBALLAL PERNAS Y MOVILLA ÁLVAREZ. “Examen del recurso de casación en España”, *RGLJ*, 1858 (13).
- CARDENAS, F. de “Memoria histórica de los trabajos de la comisión de codificación”. *RGLJ*, 1871, t. 38 p. 83.
- CARMÍN LÓPEZ, Á Mª. “Apuntes sobre las reformas más convenientes de la Administración Pública” *R.JC*, t. IV. Barcelona, 1898, p. 83.
- CARR, R. *Spain 1808-1939* (Versión castellana de J. Romero Maura, trad. de Juan Ramón Capella, Jorge Gaizolini y Gabriela Ostberg. Barcelona, Edit. Ariel, 1969.
- CARRETERO PÉREZ, A. “Introducción a la orgánica judicial”. *RDJ*, 1965, 19: 121.
- “La administración de justicia desde 1833 a 1868 (2)”. *RDJ*, 1965, 23: 121.
- “La administración de justicia desde 1833 a 1868”. *RDJ*, 1965, 22: 117-128
- “La administración de justicia desde 1868 a 1898 (2)”. *RDJ*, 1966, 26: 129.
- “La administración de justicia desde 1868 a 1898 (3)”. *RDJ*, 1966, 27: 152.
- “La administración de justicia desde 1868 a 1898 (4)”. *RDJ*, 28: 47.
- “La administración de justicia desde 1868 a 1898”. *RDJ*, 1966, 25: 83.

- CASAS MORAL, A. *Ensayo sobre la organización de tribunales del fuero común*. Granada, 1853.
- “Indicaciones sobre el personal de la Administración de justicia”, *RGLJ*, 1865, 8: 475.
- CASTAN TOBEÑAS, J. “Poder judicial e independencia judicial”, *RGLJ*, año 1951, n. 190, p. 201-263.
- CASTRO Y OROZCO, J. y ORTIZ DE ZÚÑIGA, M. *Código Penal de 1848 explicado para la común inteligencia y fácil aplicación de sus disposiciones*. Granada, 1848.
- “Los recursos de casación”, *RGLJ*, año VI, t. 13, Madrid 1858, p. 343-390.
- CATALINAS, J. L. Y ECHENAGUSIA, J. *La Primera República. Reformismo y revolución social*, Madrid, 1973.
- CAVERO LATAILLADE, I. y ZAMORA RODRIGUEZ, T. *Constitucionalismo histórico de España*, Universitas, Madrid, 1995.
- *Colección de algunos dictámenes emitidos por Manuel Seijas Lozano, Pedro G. de la Serna y Antonio Corzo. (Fiscales del Tribunal Supremo) Madrid, 1863, t. I.*
- COMELLAS, J. L. *Historia General de España...*, t. XIV.
- *Los moderados en el poder 1844-1845*. Madrid, 1970.
- Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia). *Crónica de la Codificación española*. T. I, 1970.
- CONDE DE TORENO. *Historia contemporánea de la Revolución de España*. Madrid, 1843.
- CONDE PUMPIDO, C. “Justicia - Poder”, *RDJ*, año 1, n. 4. Madrid, 1962.
- CONDE, R. *Estado de la Administración de justicia y reformas*. Madrid, 1842.
- CONDOMINES VALLS. “Sobre el recurso de casación en materia civil”, *RDPI* año 1956, segunda época, nº1.
- CORONAS GONZALEZ, S. “El Senado como tribunal de justicia”, *Actas del IV Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1983, pp. 159-197.
- “Jurisdicciones especiales de carácter político en el tránsito del Antiguo Régimen al nuevo constitucional”, en *Una oferta histórica científica internacional al doctor J. M. Font Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria*, Barcelona, 1985.

- CORZO, A. “Dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo en expediente formado acerca de la índole y extensión de las atribuciones de dicho Tribunal en Pleno, respecto a los recursos de responsabilidad contra magistrados de Audiencia”, *RGLJ*, año XI, t. XXII. Madrid, 1863.
- COSTA, J. “La casación, el Tribunal Supremo y la jurisprudencia”. *Ponencia en el Congreso Jurídico de Barcelona inserta en Reorganización del Notariado del Registro de la Propiedad y de la administración de justicia*. Madrid 1890-93, p. 289.
- COVIAN, V. “Organización judicial” *Crónica de la Codificación española I*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1970.
- *Crónica de la Codificación española II*. Madrid, 1972.
- . “El Tribunal Supremo de Justicia según la Constitución de 1812”. *RGLJ*, t. 97, p. 5 y ss. Madrid, 1923.
- “Crónica de la codificación española”. *Motivación de sentencia II*. Madrid, 1972, p. 30-32.
- CUENCA, J. M. y MIRANDA, S. *El Poder y sus hombres (1705-1998)*. Actas-Editorial, Madrid, 1998.
- DE DIEGO, C. “La función jurisdiccional de los jueces”, *RDP*, diciembre, 1913, p. 79.
- DE IGON, H. “La responsabilidad judicial”, *RL*. 1891, 79: 257.
- *Diario de Sesiones de Cortes* - 17/10/1836 al 4/11/1837. t. V. Madrid, 1872 (Constitución 1837).
- *Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*. Departamento Derecho Constitucional (1837-54, 1857-59, 61-62). Depósito Biblioteca General, 1860.
- *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Sentencias civiles, 1854-1856, a. 2º al n. 73.
- *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, Motivación de Sentencia. II, nº 183, sección 31, marzo de 1811, p. 802-803.
- *Diario de Sesiones de las Cortes* 19/5/1860. Ortiz de Zárate. “Proposición de Ley Organización de Tribunales”. (a. n. 6, 2/6/1860).
- *Diario de Sesiones del Congreso*, 1837-1838, I, a. 1º al n. 56, p. 541-543.
- *Diario de Sesiones del Congreso*, 14/3/1842. Proyecto Alonso. “Responsabilidad e inamovilidad”

- *Diario de Sesiones del Congreso*, 11/5/1855 ÁLVAREZ, C. “Evolución histórica del recurso de casación”.
- *Diario de Sesiones del Congreso*, 1842, a. 1º al nº4.
- *Diario de Sesiones del Congreso*, enero y febrero de 1846. “Discusión proyecto de organización de Tribunales”.
- *Diario de Sesiones del Senado*, 23/11/1850. “Proyecto de ley de Tribunales”
- *Diario de Sesiones del Senado*, a. nº3 del 6/11/1863.”Organización de Tribunales”: 7(1) 1865 – n. 26 6/3/1865 - 1869, n. 27 a 32, 34, 35, 36 y 43. Discusiones Proyecto de ley.
- *Diario de Sesiones*. Recurso de nulidad. t III, 1/6/51 al 7-1-52. Madrid, 1879
- “Dictamen de la Comisión del Senado sobre Proyecto de ley de Organización y atribución del Tribunal Supremo”, *RGLJ*, año 12. t. 25, Madrid, 1864, p. 67-80.
- “Dictamen de la Comisión de Códigos sobre Bases de Ley Orgánica de los Tribunales, fecha 14 de febrero de 1856”, *RGLJ*, año 12. t. 8. Madrid, 1856, p. 78-82.
- *Discursos de apertura de Tribunales*: Calatrava, J. M. 2/1/1841 - B, 12, t. 75, folio 291.
- *Discursos de apertura de Tribunales*: Fernández. del Pino, F. 2/1/1839 - B, 12, t. 63, folio 22.
- *Discursos de apertura de Tribunales*: Garellly, N. 2/1/1844 - B, 12, t. 39, folio 395 - 2/1/1847 B. 12, t. 59, folio 172.
- “Discusión de las Cortes, sobre las Bases de la Ley Orgánica de los Tribunales, marzo y abril de 1856”, *RGLJ*, t. 8, p. 165-225.
- “Discusión en el Congreso sobre el Proyecto de Ley para formar la orgánica de Tribunales”, *RGLJ*, año 16, t. 33. Madrid, 1868, p. 185-239.
- “Discusión en el Senado sobre el Proyecto de ley para formar la Orgánica de Tribunales y la del procedimiento en materia criminal”, *RGLJ*, año 16, t.32. Madrid, 1868, p. 371 y ss.
- “Discusión sobre las bases de Ley Orgánica de Tribunales”, *RGLJ*, año IV, t. 8. Madrid, 1856, p. 16.
- DONEZAR, J. *La Constitución de 1869 y la revolución burguesa*. Madrid, 1985.
- DUARTE, *La España de la Restauración (1875-1923)*. Barcelona, 1997.

- DURÁN DE LA RÚA, N. *La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada. 1854-1868*. Madrid, 1979.
- EIRAS ROEL, A. *El partido demócrata español*. Madrid, 1961.
- ELORZA, A. *La ideología liberal en la Ilustración española*. Madrid, 1970.
- *Enciclopedia española de Derecho y Administración* “Nuevo Teatro Universal de la legislación española e Indias”, t. VII. Madrid, 1853, p. 796 y ss.
- ESCRICHE, J. “Independencia, inamovilidad. Responsabilidad de jueces y magistrados”, en *DLJ*. t. 3º. Madrid, 1875, p. 432-452.
- “Exposición de la Junta del Colegio de Abogados de esa corte, asociada a los ex decanos del mismo han elaborado al Excmo. Sr. Ministro, solicitando se lleven a pronto y feliz término las reformas iniciadas sobre organización de tribunales y ordenación del enjuiciamiento criminal el 15 de enero de 1863”, *RGLJ*, t. 22, año 1863, p. 64-76.
- EYRE. “El arbitro ministerial y la independencia judicial”, *RDP*, 1932, p. 153 y ss.
- FABIE, A. M. “Disertaciones jurídicas sobre el desarrollo histórico del Derecho, sobre las bases del Código Civil y sobre la organización de los Tribunales”. *BJAE*. V. 17. Madrid, 1885, p. 341-357
- FABREGA, P. “Organización de Tribunales”, en *Aspirantes del Tribunal Supremo y Audiencias Territoriales*. Reus. Madrid, 1944, p. 1-21.
- FAIREN Y GUILLEN, V. “Sobre la recepción en España del recurso de casación francés”. *ADC*, t. X, 1957. También en *Temas de Ordenamiento procesal*, t. I. Madrid, 1969.
- “Estudio histórico externo de la ley de enjuiciamiento civil en 1855” *Temas I cit.*, p. 88.
- “Estudio histórico de la ley procesal de 1855”. *Actas del I Congreso Iberoamericano y filipino de Derecho Procesal*. Madrid, 1955, p. 331 y pp.447-448 Instituto Español de Derecho Procesal.
- *Las relaciones entre el poder legislativo y el judicial y las infracciones a la Constitución de 1812*. Madrid, 1969.
- “La recepción en España de recurso de casación francés (1812-1813)”. *Temas del Ordenamiento Procesal*, t. I. Madrid, 1969, p. 214, acta 49.
- FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. *Historia Política de la España Contemporánea*. v II. Madrid, Pesago, s/fecha.

- FERNÁNDEZ BOIXANDER, N. “El incendio de las Salesas”, *BICAM*, 1958, p. 815.
- FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A. *Guía de Madrid*. Madrid, 1876.
- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, A. *Leyes electorales española de Diputados a Cortes en el siglo XIX. Estudio histórico y jurídico*. Cívitas, 1992, p. 220.
- FERNÁNDEZ MORATÍN. *Derecho Parlamentario Español. Colección de Constituciones*, 3 v. y LALUMIERE, P. etc., DEMICHEL, A. *Les Régimes Parlamentaires Européens*. París, Press Universitaires, 1966.
- FERNANDEZ TORRES, J. R. *La formación histórica de la Jurisdicción contencioso-administrativa 1845-1868*. Cívitas, Madrid, 1998.
- FERRANDO BADIA, J. *La Primera República Española*. Madrid, 1973.
- FIESTAS LOZA, A. “Codificación procesal y estado de la Administración de Justicia: 1875-1915” , *La España de la Restauración. Política, legislación, economía y cultura*, Madrid, 1985.
- FONTANA, J. “La burguesía española, entre la reforma y la revolución (1808-1868),” *Jornadas de Estudios Históricos de la Universidad de Salamanca*, 1º de, 1994, p. 125-133.
- *Gaceta de Madrid* 24/11/1856. Alonso Martínez. “Proyecto de ley de Bases”.
- GALLEGO ANABITARTE, A. *Administración y jueces: gubernativo y contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado constitucional, y los fundamentos del derecho administrativo español*, Madrid, 1971.
- GALLEGO MARTÍNEZ, J. *Organización de los Tribunales*. Madrid, 1942.
- GARCÍA DE EUTEMIO, E. *Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial*. Madrid, 1970, p. 30.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. y ESPIN TEMPLADO, E. “Esquemas de Constitucionalismo español 1808-1976”. *Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, 1976.
- GARCÍA G. DE LA SERNA. “Informe de la Audiencia de Madrid, sobre ley provisional del Poder Judicial”, *RGLJ*, año 20, t.40. Madrid, 1872, p. 290-320.
- GARCÍA GALLARDO, M. “Observaciones sobre el proyecto de arreglo de tribunales”, *RGLJ*, 1854, 4: 5
- GARCÍA GOYENA, F. *Tribunal Supremo de España. Noticias sobre su historia, organización y funcionamiento*. Madrid, 1929.

- “Inamovilidad judicial”, *Administración de Justicia*, t. V, Madrid, 1842, p. 194-203.
- “Impugnación a un proyecto de ley sobre inamovilidad judicial”, *RGLJ*, 1975, 46: 241.
- GARCÍA HERRAIZ, J. “Sobre la importancia, organización y atribuciones del poder judicial”, *FN*, 8 de julio de 1856, p. 31.
- GARCÍA MADARIA, J. M. *Estructura de la Administración Central (1808-1931)*. CEHA.
- GARELLY, N. *Discurso pronunciado el día 2 de enero de 1847 en la apertura del Supremo Tribunal de Justicia por su presidente...* Madrid, Imprenta Nacional, p. 17 y ss.
- GIL HERNÁNDEZ, A. “Crónica judicial. Apertura de Tribunales”, *RGLJ*, año LXXXVI, 2ª época, t. 11 (170 col.) Madrid, 1941.
- GÓMEZ ACEBO. “Diario de sesiones”, cit. sesión de 3 de febrero de 1838, p. 767.
- GÓMEZ BECERRA, A. “Memoria relativa a los principales actos del Excmo. Sr. D. Álvaro Gómez Becerra como Ministro de Gracia y Justicia en 1835 y 1836, escrita por él mismo y encontrada después de su fallecimiento en 1855”. Fue publicada por A. G. Ocampo *RGLJ*, t. 48, 1876.
- *Sobre la Administración de Justicia*. Madrid, 1839.
- “Sobre la inamovilidad judicial” (escrito encontrado tras su fallecimiento, fechado en 22 de mayo de 1838). *RGLJ*, año 23, t. XLVI, 1875.
- *Observaciones sobre el Estado del Poder Judicial en España*. Madrid, 1839, p. 47-54.
- GÓMEZ DE LA SERNA y MONTALBÁN, J. M. *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*, t. I. Madrid, 1861, p. 205 y ss.
- *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, t. II. Madrid, 1848, p. 220-231 y p. 425 y ss.
- “Artículo 2º sobre el estado de la codificación al terminar el reinado de Dña. Isabel II”, *RGLJ*, t. 39. Madrid, 1871, p. 289.
- “De la inamovilidad y responsabilidad de los magistrados y jueces”. *RGLJ*, t. 9, 1857.
- “Del ingreso y ascensos en la carrera judicial”, *RGLJ*, 1861, 18: 342 y 388.

- “De los recursos de casación”. *Tratado de Ac. forense*. 3ª edición, t. II. Madrid, 1961, p. 421 y 448.
- “Del poder judicial, de sus relaciones con los demás poderes y de las condiciones y deberes de los que lo ejercen”. (Discurso leído en la solemne apertura de los tribunales el día 15 de septiembre de 1869, *RGLJ*, t. XXXV, 1869.
- “Estado de la Administración de Justicia en lo criminal”, *RGLJ*, año 19, t. 39. Madrid, 1871, p. 314 - 337.
- “Estado de la Codificación al terminar el reinado de Dña. Isabel II”. *RGLJ*, t. 39, 1871.
- “Estado lamentable de la Administración de justicia en lo criminal y reformas que imperiosamente reclama”. *RGLJ*, t. 39, 1871p. 314.
- “Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *RGLJ*, t. 8, 1856.
- “Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento Civil, *RGLJ*, t. 8, 1856.
- “Recursos de nulidad y de casación”. *RGLJ*, 1857, t. 10.
- “Resumen de la discusión sobre los recursos de nulidad y casación”. *RGLJ*, t. 10, 1857.
- “Sobre la inamovilidad judicial y oportunidad de declararla”. *RGLJ*, t. 18, 1861.
- “Sobre la manera de proveer los cargos judiciales”. *RGLJ*, 1864, t. 24, p. 97 y 257.
- “Único modo de hacer inamovible el poder judicial”. *RGLJ*, año 5, t. 9. Madrid, 1857, p. 369-377.
- “Jurisdicción contencioso-administrativa”, *RGLJ*, t. 16, 1864.
- GÓMEZ ORBANEJA, E. “Sobre la comparación de los sistemas judiciales”. *En conmemoración del Centenario de la Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870, en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación*. Madrid, 1970.
- GÓMEZ REINO Y PEDREIRA, A. “Poder judicial y Estado de Derecho”, *RDJ*. año XII, n. 46. abril-junio 1971. Madrid, p. 34-47.
- GONZÁLEZ DE ALBA. “Crónica de apertura de los Tribunales”, *RGLJ*, año 46, t. 113. Madrid, 1908, p. 253-265.
- GONZÁLEZ DÍAZ, J. M. “¿Justicia función? ¿Justicia poder?”. *RDJ*. año III, n. 1. abril - junio 1962. Madrid.

- GONZÁLEZ ESCRIBANO, J. I. “El Poder Judicial a través de las constituciones españolas”, *RDJ*, 1970, p. 59-112
- GONZÁLEZ LLANOS, R. “Aplicación del artículo 38 del reglamento provisional”, *FN*, 17 de octubre de 1865, p. 371.
- “Más sobre el artículo 38 del reglamento provisional”, *FN*, 28 de diciembre de 1865, p. 649.
- *Guía de Forasteros de Madrid (1836-1881)*.
- GUASP, J. *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*. t. I. Madrid, 1943, p. 1017, nota 2, p. 1022, n. 2.
- HARO. “De los grandes inconvenientes que ofrece hoy la casación en España”. *FN*, 1858, 2, p. 715.
- HERNÁNDEZ DE LA RUA, V. “Del Poder Judicial I y II”, *RGLJ*, t. 6, año 3. Madrid, 1855, p. 22-31 y p. 143-153.
- *Organización, atribuciones y deberes del Ministerio Fiscal*. Madrid, 1853.
- HERZOG, J. B. *Le droit Jurisprudential et le Tribunal Supreme en Espagne. Essai sur les conditions de création du Droit por la Jurisdiction de Cassation*. Toulouse, 1942.
- HIJAS PALACIOS, J. “Pasado, presente y futuro de la ley orgánica del poder judicial”, *RDJ*, 1970, n. 43-44, 273.
- HUET Y ALLIER, J. M. *Historia del Ministerio Fiscal desde su origen* (Discurso de recepción en la Real Academia de Historia). Madrid, 1867.
- JAUMAR DE LA CARRERA, J. “Discurso en la apertura de tribunales del 2 de enero de 1865”, *FN*, 28 de enero de 1865, p. 835.
- JIMÉNEZ ASENJO, E. “La independencia de la justicia”, *RDPI*, 1950, t. 3, p. 435.
- *Organización judicial española*. Madrid, 1952.
- JOSÉ SERRANO, L. “Nueva organización del Ministerio Fiscal y de los Tribunales”, *RGLJ*, año 23, t. 97. Madrid, 1875, p. 305 y ss.
- JOVER ZAMORA, J. M. Prólogo a “La era isabelina y el Sexenio democrático”, *Historia de España, de Menéndez Pidal*, XXXIV. Madrid, 1981.
- JUEZ SARMIENTO, A. *Justicia para todos*. Madrid, 1856, p. 14 y 30.
- KIERNAU, V. G. *La revolución de 1854 en España*. Madrid, 1970.

- LABAJOS, R.88 “Los diputados pintados por sus hechos”. *Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el Sufragio Universal en las Constituyentes*. t. I, Biblioteca del Senado, 1869.
- *La Justicia*. Revista semanal de Jurisprudencia, Administración, Casos Prácticos, Tribunales y Bibliografía. Informe sobre la circular del Ministerio de Gracia y Justicia, 4 de febrero de 1856, Madrid, 1856, Imprenta y Estereotipia de la Asociación.
- LASSO GAITE, J. F. “Aportación a la historia del Tribunal Supremo”, *RGLJ* t. LIX (segunda época), 1969.
 - “Evolución histórica de la casación civil en España”, *RGLJ*, 1969, p. 223.
 - “Evolución histórica de la casación civil en España”, *RDP*. 1971, p. 127.
 - “Aportación a la historia del Tribunal Supremo”. *RDP*, 1969, p. 136-160.
 - *El Ministerio de Justicia: su imagen histórica (1714-1981)*, Madrid, 1984
- LASTRES, F. *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, t. II, 10ª ed. Madrid, 1896, p. 7-11.
- LATORRE, A. “Prólogo al estudio Aspectos esenciales de la Organización judicial española”. *RJC*, 1975.
- LAVERON, F. “Apuntes para la ley orgánica de tribunales”, *RGLJ*, t. VIII. Madrid, 1856, p. 226-240.
 - “Marcha progresiva de la administración de justicia” (discurso), *RGLJ*, 1856, t. 8, p. 19.
- LE BRUN, C. *Retratos políticos de la Revolución de España*. 1826. BS. Madrid, 1826.
- Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881. Concordada y anotada por la redacción de la *RGLJ*, bajo la dirección de Emilio Reus. t. IV. Madrid, 1882, p. 5-11.
- LIZCANO CENJOR. “Independencia judicial”, *RDP*, año II, n. 7. Madrid, 1961, p. 125-174.
- LÓPEZ CLAROS. “Necesidad de una justa reparación a los empleados a quienes se privó de cesantía por la ley de presupuestos de 1845”, *FN*, 4 de agosto de 1859, p. 147.
- LÓPEZ CORDÓN, M. V. *La revolución de 1868 y la I República*. Madrid, 1976.
- LÓPEZ, J. M. *Lecciones de elocuencia general, de elocuencia forense, de elocuencia parlamentaria y de improvisación*. t. I, 1849.

- *Exposición razonada de los principales sucesos políticos que tuvieron lugar en España durante el Ministerio de 9 de mayo de 1843 y después en el Gobierno provisional*. Madrid, Imprenta de don José María Canalejas, p. 75 y 88.
- LORCA SIERO, A. *Sobre el origen constitucional del poder judicial en España*, León, 1991.
- LOSANTOS, P. M. “Necesidad de alguna reforma en la administración de justicia”, *FN*, 1, 5 y 8 de mayo de 1860, p. 568, 573 y 601.
- MANE, J. *La revolución del 68, contada por sus autores*. 2 v. Barcelona, 1876 y 1887.
- MANRESA NAVARRO, J. M. “Del recurso de responsabilidad contra jueces y magistrados”. *RL*, 1885, t. 67, p. 577.
- *La ley de Enjuiciamiento civil comentada y explicada*. Madrid, 1856.
- “Observaciones sobre el recurso de casación en España”, *RGLJ*, t. XVI, año 8º. Madrid, 1860, p. 257-292.
- “Observaciones sobre la reforma de la casación”. *RGLJ*, 1863, t. 22 p. 305 y *FN*, 1863, t. 1, p. 527.
- “Observaciones sobre la reforma de la casación”, *FN*, 1860, t. 2, p. 238, 254, 263, 270, 279.
- MARICHAL, C. *La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España. 1834-1844*. Madrid, 1980.
- MARLIANI, M. *La Regencia de D. Baldomero Espartero, Conde Luchana, Duque de la Victoria y Morella, y sucesos que la prepararon*, Madrid, 1870.
- MARQUES DE LEMA. *De la Revolución a la Restauración*. Madrid, 1927, 2 vols.
- MARQUÉS DE MIRAFLORES. *De la reforma de la Constitución de 1845 verificada en 1857 y el proyecto de ley*. Madrid, 1864.
- MARQUÉS DE VILLARRUTIA. *La reina gobernadora doña María Cristina de Borbón*. Madrid, 1925.
- MARRÓN VILLODAS, F. “Nueva teoría sobre la división y funcionamiento de los tres poderes: legislativo, gubernativo y judicial en los gobiernos liberales”. Madrid, 1857, p. 25-47 y 122-141.
- MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. *Diccionario de la Administración española*. t. II, Madrid, 1877.

- MARTÍNEZ CUADRADO, M. *Lecciones y partido políticos en España 1868-1931*. t. I, p. 68.
- MARTINEZ PEREZ, F. *Entre confianza y responsabilidad, la justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)* CEPC, Madrid, 1999.
- “Memoria histórica de los trabajadores de la Comisión de Codificación suprimida por Decreto del Regente, de 1º de octubre de 1869, escrita y publicada por la misma, siendo ponente don Francisco de Cárdenas”, *RGLJ*, año XIX, t. 38, principalmente, y Apéndices en éste y los siguientes. Madrid, imprenta de la Revista, 1871.
- MENÉNDEZ PIDAL y de MONTES, J. “Sobre la motivación de las resoluciones judiciales” *RDP*, 1953, p. 12-13.
- MIGUEL Y RUBERT, I. “De la Magistratura y del Ministerio Fiscal”, *RGLJ*. t. 3, año 2º, Madrid, 1854, p. 306-317.
- “Observaciones sobre el modo de celebrar la solemne apertura de tribunales”, *RGLJ*. 1857, t. 9, p. 17.
- “Sobre el modo de celebrar la solemne apertura de los Tribunales”, *RGLJ*, año V, t. 9, Madrid, 1857, p. 18-29.
- *Ministerio de Justicia. Comisión General de Codificación*. “Exposición del Tribunal Supremo de 10/10/1837 defendiendo el principio de inamovilidad con ocasión del cese de un magistrado”.
- MIRALLES. A. y BECERRIL, J. *La Ley Orgánica y su época en conmemoración del centenario de la ley provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870*. Madrid, 1970, p. 19-20.
- MONTERO DÍAZ, E. “Breves indicaciones acerca de las nuevas leyes relativas al derecho penal y organización del poder judicial. Idea sobre la alta misión del Magistrado”. Discurso leído por el Excmo. Sr. Eugenio Montero Díaz, Ministro de Gracia y Justicia en la solemne apertura de los tribunales el 15 de septiembre de 1870, *RGLJ*, año 18, t. 38, Madrid, 1870, p. 241-250.
- “Algunas ideas acerca de la inamovilidad judicial y la institución del Jurado, con otros puntos capitales de reforma que el gobierno se propone en nuestro procedimiento”. (Discurso leído por el Ministro de Gracia y Justicia en la solemne apertura de Tribunales celebrada el 16 de septiembre de 1872). *RGLJ*, t. 91, 1872.
- MORENO PASTOR, L. “Los orígenes del T. Supremo: 1812-1838”. *Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho UCM*, 1988.
- MOSQUERA Y MONTES, R. “De la inamovilidad judicial”, *RGLJ*, 1864, t. 24, p. 30.
- MUÑIZ, R. *Apuntes históricos de la revolución de 1868*. t I Madrid, 1884.

- MUÑOZ ÁLVAREZ, R. *Ayer y hoy de los archivos del Tribunal Supremo. Audiencia Territorial y Causa General*. Madrid, 1967.
- NAS. “Reseña histórica del recurso de casación en España”. *FN*, 1858, t. 1, p. 558, 570, 582, 598, 606, 614, 627.
- NIETO, A. *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de M^a. Cristina de Borbón*, Ariel, Barcelona, 1^a de. 1996
- NOGUES SECALL, M. “¿Conviene que los magistrados sean diputados?”, *FN*, 25 de julio de 1865, p. 81.
- *Novísima Recopilación. l. XI. Recurso de injusticia notoria*.
- *Novísima Recopilación. l. IV. Consejo de Castilla*.
- “Observaciones sobre la Instrucción de Procedimiento Civil de 30/9/1853”, *RGLJ*, t. 3, año 2º, Madrid, 1854, p. 13 y ss.
- OLIET, B. y SERENA, C. “Organización de los tribunales”, 1965.
- ONECA, A. “El Código de 1848 y Don Francisco Pacheco”, *ADPCP*, 1965.
- ORIOL Y URQUIJO, A. M^a. “El centenario de la Ley orgánica del Poder Judicial de 1870 y la Reforma de la Justicia”. *RGLJ*, año CXIX, t.61, 229
- ORTELLS RAMOS, M. “Origen histórico del deber de motivar las sentencias”. *RDPI*, n. IV. octubre-diciembre 1977, p. 899-932.
- ORTIZ ARCE, D. y MENÉNDEZ PIDAL Y DE MONTES, F. *Organización de Tribunales*. Reus. Madrid, 1927.
- *Procedimientos judiciales, 2ª edición corregida y aumentada por Menéndez Pidal*. Reus. Madrid, 1931.
- ORTIZ DE ZARATE, R. *Análisis histórico-crítico de la legislación española*, t. II. Victoria, 1848, p. 261-262.
- *Indicaciones sobre la organización y atribuciones que deben darse a los Tribunales españoles, y sobre la elección, inamovilidad y responsabilidad de los encargados de la Administración de Justicia*. Victoria, España, 1848.
- ORTIZ DE ZÚÑIGA, M. *Tratado original y metódico de los Juzgados de Primera Instancia de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia*. Biblioteca judicial, 3 t, Madrid, 1840 y 1841.
- “Derecho del Recurso de nulidad”. *Jurisprudencia Civil en España conforme a la doctrina consignada en los fallos del Tribunal Supremo*. t I. Madrid, 1869, p. 535-579.

- “Doctrinas generales sobre el recurso de casación”, *Jurisprudencia Civil de España, conforme a las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo*, t. I. Madrid, 1869, p. 400-406.
- “De la responsabilidad judicial I y II”, *RGLJ*, año 12, t. 25. Madrid, 1864, p. 99-163.
- “Fragmento de la introducción a la obra. Jurisprudencia civil en España”, *RGLJ*, 1867, t. 31
- “Fundamentación de las sentencias”, *RGLJ*, 1866, t. 29, año 14. Madrid, 1866, p. 113-126.
- “La responsabilidad judicial”, *FN*, 5, 10, 12, 17 y 19 de marzo de 1863; p. 268, 285, 300, 318, 350 y 356, respectivamente.
- “Observaciones al proyecto de ley presentado al Congreso creando una sala de previo examen para el recurso de casación”, *RGLJ*, t. 22, 1863, p. 135.
- *Práctica General Forense*, 4ª ed., t. I, Madrid, 1861, p. 60 y ss.
- “Reforma urgente sobre los recursos de casación”, *RGLJ*, t. 21, 1862, p. 167.
- “Sobre el proyecto de ley presentado al Congreso creando una sala de previo examen para el recurso de casación”, *RGLJ*, año XI, t. XXII, Madrid, 1863, p. 124-139.
- *El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos*, c. I, t. VIII, p. II
- OSSORIO, Á. “La Justicia Poder”. *Conferencias pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación en 24, 25, 26 y 28 de enero y 1º febrero de 1927*. Imprenta Juan Pueyo, 1927.
- PACHECO, J. F. *Comentario al Decreto de 4 de noviembre de 1838 sobre recursos de nulidad*. Madrid, 1850.
- *El Código Penal (1850) concordado y comentado*. Madrid, 1881.
- *Estudios de Derecho Penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1839 y 1840*. 2ª e, Madrid, 1854, 367 p.
- *Estudios de legislación y jurisprudencia*, Madrid, 1847.
- *Lecciones de Derecho Político Constitucional*. Madrid, 1845.
- *Lecciones de Derecho Político dictadas en el curso del Ateneo de Madrid el año de 1844-45*. (Edición preparada por el Centro de Estudios Constitucionales). Madrid, 1850.

- “Organización judicial”, *ELJ*, c. XI, Madrid, 1843, p. 220-223.
- PADILLA SIERRA, A. *Constituciones y leyes fundamentales de España (1808-1947)*. Granada, 1954.
- PALACIO ATARD, V. *La España del siglo XIX, 1808-1869*. Madrid, 1978.
- PALMA Y VINUESA, J. de “De los Tribunales Colegiados españoles”. *Discurso de Apertura de Audiencia de Valencia, 3/1/1859, RGLJ*, año 7, t. XV. Madrid, 1859, p. 60-63.
- PANIAGUA, J. “La reorganización de nuestra administración de Justicia”. *RGLJ*, año 8, t. 159. Madrid, 1931.
- PANTOJA, J. M. “Del Recurso de Casación. Su origen, su importancia y consecuencias”, *RGLJ*, año 15, t. XXXI, Madrid, 1867.
- PAREDES, J. “La dependencia del poder judicial durante el reinado de Isabel II”. *En I Congreso General de Historia de Navarra*, 1988, p. 441-448.
- *La organización de la justicia en la España liberal (Los orígenes de la carrera judicial, 1843-1870)*. Civitas, Madrid, 1990.
- PAREJA ALARCÓN, F. “Administración de Justicia”. *FN*, 25/3/1851.
- “Entorpecimiento en la administración de justicia”. *FN*, 20 y 22 de diciembre de 1859, p. 749 y 761, respectivamente.
- “Inamovilidad judicial”. *FN*, 6 y 16 de diciembre de 1855, y 16 de enero de 1856.
- “Independencia que conviene a la justicia aún en la esfera gubernativa”. *FN*, 15 de septiembre de 1863, p. 9.
- “Nuevos desengaños en los asuntos de Administración de Justicia”. *FN*, 9 de enero de 1858, p. 37.
- “Recuerdos de 1857”. *FN*, 2 de enero de 1858, p. 5.
- “Responsabilidad judicial”. *FN*, 3 de enero de 1863, p. 9.
- “Restablecimiento de las Juntas de Gobierno en el Tribunal Supremo y en las Audiencias”. *FN*, 2 de diciembre de 1856, p. 549.
- “Situación de la administración de Justicia”. *FN*, 2 de diciembre de 1856, p. 549.
- “Unidad de jurisprudencia”. *FN*, 2 de julio de 1859, p. 5.
- *Partida 3ª* t. 23 (recurso de alzada) y 26 (nulidad de sentencias).

- *Partida 3ª* t. I, (Consejo Real).
- PASTOR LÓPEZ, J. “Reformas de la administración de Justicia”. *RJC*, t. 18. Barcelona, 1912.
- PAZ, J. M. de “Reformas en la administración de Justicia”, *RGLJ*, año 4º, t. VIII. Madrid, 1856, p. 73-76.
- PEÑALVER, N. “Discurso de apertura de tribunales”, *FN*, 20 y 23 de enero de 1856, p. 165 y 170, respectivamente.
- PESET, M. y SOBERANES J. L. “El poder judicial en las Cortes de Cádiz” *Homenaje al profesor Diego Sevilla Andrés , Historia, Política, y Derecho*, v. II, Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valencia, 1984, p. 780 y ss.
- PIRALA, A. *Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista 1853-1856*, t. II, Madrid, p. 285.
- PLAZA, M. “Derecho Procesal civil español”, *RDP*. v. I, p. 575 y v. II, p. 789.
- “El recurso de casación según la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, *RDP*, 1941.
- “La casación civil”, *RDP*. Madrid, 1944.
- PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, L. “Derecho procesal civil” *Manual* t. 2. Madrid, 1956, p. 360-374.
- *Tratado de Derecho Procesal, parte I, Derecho Procesal Civil*, t. I. Madrid, 1952, p. 442 y ss.
- “La instrucción del Marqués de Gerona ‘para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto a la real jurisdicción ordinaria’”, *RGLJ*, 1953, t. 193, p. 114.
- “La Instrucción del Marqués de Gerona para arreglar el Procedimiento de los Negocios civiles con respecto a la Real Jurisdicción Ordinaria, en Trabajos y Orientaciones de Derecho Procesal.”. *RDP*, Madrid, 1964, p. 869-886.
- “El autogobierno de la Magistratura” *Conmemoración del Centenario de la Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870, en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación*. Madrid, 1970.
- RAMOS GONZÁLEZ, J. M. “La Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870”, *RGLJ*, año CXIX, t. 60, 2ª época (228 de la colección). Reus, 1970, p. 746-780.
- REMOND, R. *Introducción a la Historia de nuestro tiempo*. t II, Barcelona, 1980.
- REUS, E. “Del recurso de casación”, *RGLJ*, t. 61, 1882.

- *Revista de Derecho Moderno*. “Proyecto de organización de tribunales”. t IX, 1950, p. 226 y ss.
- RICO AMAT, R. *El libro de los Diputados y Senadores*. 4 t. Biblioteca del Senado. Madrid, 1862.
- *Diccionario de los políticos, o verdadero sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos, escrito para divertimento de los que ya lo han sido y enseñanza que aún quieren serlo*, Madrid, 1855.
- *Historia política y parlamentaria de España*. t. III, Madrid, 1961, p. 228
- RICO PEREZ, F. *Don Manuel Ortiz de Zúñiga y la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Separata de la obra Homenaje a D. Antonio Hernández Gil v. I, Madrid, 2001, 40 p.
- RODRÍGUEZ AGUILERA, C. *La sentencia*. Barcelona, 1974, p. 42.
- “Problemas generales de la organización judicial” (texto reformado de la conferencia pronunciada en Sitges el 25 de mayo de 1963). *RJC*, n. 3, 1963, p. 790-792.
- RODRÍGUEZ DRAUGUET, A. “Responsabilidad e independencia del Poder Judicial”, *Justicia*. Madrid, 1930, p. 228-232 y .263.
- ROMANI CALDERÓN, J. “¿Función judicial o poder judicial?”. *RCDI*, año III, n. 35. Madrid, 1927, p. 816 y ss.
- ROMERO ORTIZ, A. *Memoria presentada a las Cortes Constituyentes por el Ministro de Gracia y Justicia el 2 de junio de 1869*. Madrid, 1869.
- RUIZ GARCÍA DE HITTA. “Reorganización y competencia del Tribunal Supremo” (Conferencia pronunciada en la Real Academia de legislación y jurisprudencia). *RAJ* y L. Reus, 1921.
- RUIZ JARABO. “Homenaje a una ley centenaria: La Ley Orgánica del Poder Judicial del 15 de septiembre de 1870”. *RDJ*, año XII, nº 45, enero-marzo 1971, Madrid, p. 11-68.
- RULL VILLAR, B. “El Tribunal Supremo. Puntualizando sobre organización judicial”. *RDJ*, año II, n. 8. octubre-diciembre 1961, Madrid.
- “Independencia judicial”. *Conmemoración del Centenario de la Ley sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870, en Real Academia de Jurisprudencia y legislación*. Madrid, 1970.
- “Necesidad y urgencia de una reforma judicial”. *RDJ*, año I, n. 1. enero-marzo, Madrid, 1960.

- “Organización ideal de la Administración de Justicia”. *RGLJ*, año 112, t 48, Madrid, 1964, p. 748-757.
- SAINZ GUERRA, J. *La Administración de Justicia en España (1810-1870)*. Eudema, Madrid, 1992, 415 p.
- SALGADO MEMBIELA, M. “Reformas legislativas y judiciales”, *FN*, 9 de julio de 1857, p. 35.
- SÁNCHEZ AGESTA, L. *Historia del Constitucionalismo español. 1808-1936*. Madrid, 1984.
- “Sentido sociológico y político del siglo XIX”. *REP*, LI, 1954.
- SANCHEZ ARCILLA, J. *Historia del Derecho I, Instituciones Políticas y Administrativas*, Dykinson, Madrid, 1995.
- *Historia de las Instituciones político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975)*, Dykinson, Madrid, 1994, p.571
- “Procurador Fiscal y Promotor de la Justicia”, *RDPI*, n. 4, 1982
- “El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-1810)” *Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz*, Madrid, 1986.
- SÁNCHEZ FUENTES, J. “Administración de justicia en el personal de sus funcionarios”. *FN*, 12 y 19 de abril de 1859, p. 430 y 470, respectivamente.
- SÁNCHEZ OCAÑA, R. “El Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales”. *RGLJ*, año 36, t. 72. Madrid, 1888, p. 401-413.
- “Inamovilidad judicial”. *RGLJ*, t. LXV, 1884.
- “Organización de Tribunales y Leyes de procedimiento”. *Oposiciones a la Judicatura*. Hijos de Reus. Editores. Madrid, 1909.
- SEGOVIA, Á. M^a. *Figuras y Figurones*. Biografías. 11 v. Biblioteca del Senado. Madrid, 1881.
- SEIJAS LOZANO, M.; GÓMEZ DE LA SERNA, P. y CORZO, A. Colección de algunos dictámenes emitidos por (...), *RGLJ*, Madrid, 1863.
- . “Dictamen fiscal emitido en el expediente reformado en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del progresivo recargo en asuntos de casación”. *RGLJ*, t. 15, 1839, p. 332-380.
- SENTIAS BALLESTER, C. *Tratado práctico del recurso de casación*. Nereo, Barcelona, 1963, p. 175 y ss.

- SERRANO LEÓN, J. “Reformas en la Administración de Justicia”. *RE*. t. 32, 1876.
- SERRANO, A. “Categorías en la magistratura: honores y escalafones en el s. XIX español” en *La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional) estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez*, Madrid, 1993, pp.2077-2092.
- SEVILLA ANDRÉS, D. *Historia Política de España de 1800-1973*, 2 v. Madrid, 1974.
 - *La revolución de 1854*. Valencia, 1960, 211 p.
 - “Los Partidos Políticos españoles hasta 1868”. *RGD*, t. XIV, Valencia, 1958.
- SEVILLA MERINO, A. *Joaquín María López*. Alicante, 1959, p. 55.
- SCHOLZ, J. M. *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen justiz*, Frankfurt, 1994, p. 761
- SILVELA, A. “Reforma del recurso de casación en materia civil”. *RGLJ*, t.30, 1958.
- SILVELA, F. *Artículos, Discursos, Conferencias y Cartas, con notas de Félix de Llanos y Torriglia*, Madrid, 1922; t. I, 461 p.; t. II, 519 p. y t. III, Madrid, 1923, 463 p.
 - “Recurso de casación en materia civil”. *RGLJ*, año 15, t.30, Madrid, 1867, p. 390-410 (artículo de 15 de diciembre de 1855).
- SUÁREZ VERDAGUER, F. *La crisis política del Antiguo Régimen (1800-1840)*. Madrid, 1958.
 - *Planteamiento ideológico del siglo XIX español* (1953), y J. MAILLET, *Institutions et Faits Sociaux* (París, Sirey, 1957).
- TAJUELO GALLARDO, E. *El libro de los Diputados. Fisonomía del Congreso de 1851*. Biblioteca del Senado. Madrid, 1851.
- TAXONERA, L. *La revolución de 1854 (Sartorius y su Gobierno)*. Madrid, 1931, p. 168.
- TÉBAR Y OLMEDO. *Congreso y Semblanzas parlamentarias Senado*. BS. Madrid, 1879.
- TIerno GALVÁN, E. *Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1936)*. Tecnos. Madrid, 1975.
- TOMÁS Y VALIENTE, F. “De la Administración de Justicia al Poder Judicial” *Códigos y Constituciones. 1808-1978*. Madrid, 1989, p. 5-31.

- TOMAS Y VILLARROYA, *Breve historia del constitucionalismo español*, Centro de estudios Constitucionales, 1988 p.161.
- TORRES CAMPOS, M. *Bibliografía española contemporánea del Derecho y de la política (1808-1880)*. Madrid, 1883, 205 p.
- VARELA SUANZES-CARPEGNA, J. *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo español*, CEC, Madrid, 1983.
- VÁZQUEZ SOTELO, J. L. *La casación civil (revisión crítica)*. Barcelona, 1979.
- “Rasgos definidores de la casación civil española”. *RDPI*, n. IV, 1974, p. 864-866 y 901-909.
- VESCOVI, E. *Derecho y jurisdicción crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva ley de Enjuiciamiento civil*. Madrid, 1856.
- VICENS VIVES. *Historia social y económica de España y América*. t. IV, v. II. Teide, Barcelona, 1856.
- VILLA URRUTIA. *Legislatura de 1838 (8 de noviembre de 1838 a 1 de junio de 1839)*, 2 v.